

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

REVISTA No. 12

Quinta Época

Año I Diciembre 2001

Derechos Reservados ©
TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA.
SEVILLA 40, COL. JUÁREZ, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC.

Certificado No. 04-2001-012517410700-102

FIDEICOMISO PARA PROMOVER LA INVESTIGACIÓN DEL DERECHO FISCAL Y ADMINISTRATIVO

- **2001**
  Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta publicación, por medios electrónicos o mecánicos, incluyendo fotocopia, grabación magnetofónica y cualquier sistema de almacenamiento de información, sin la autorización expresa.

- El contenido de los artículos publicados son de la exclusiva responsabilidad de los autores.

- ISSN 1665-0085 50012

- Página Internet del T.F.J.F.A: www.tfjfa.gob.mx
  Correo Electrónico de la Revista: publicaciones@mail.tff.gob.mx

REVISTA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA
DICIEMBRE DEL 2001. No. 12

CONTENIDO:

- **Primera Parte:**
  Precedentes de Sala Superior 5

- **Segunda Parte:**
  Criterios Aislados de Sala Superior y Salas Regionales 199

- **Tercera Parte:**
  Acuerdos Generales 381

- **Cuarta Parte:**
  Jurisprudencia y Tesis del Poder Judicial Federal 385

- **Quinta Parte:**
  Ceremonia Inaugural del Segundo Congreso Internacional de Justicia Fiscal y Administrativa 413

  Conferencia Interactiva México-Francia entre el Consejo de Estado francés y el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 439

- **Sexta Parte:**
  Índices Generales 495

PRIMERA PARTE

PRECEDENTES DE PLENO

PLENO

LEY ADUANERA

V-P-SS-117

VISTAS ADUANALES.- SON AUXILIARES DE LAS AUTORIDADES ADUANERAS, CON FACULTADES PARA REALIZAR EL RECONOCIMIENTO DE MERCANCÍAS EN ADUANAS.- De una armónica interpretación de los artículos 3 y 29 de la Ley Aduanera vigente hasta el 31 de marzo de 1996, así como 96 del Reglamento de la Ley Aduanera vigente hasta el 13 de junio de 1996, y 114, apartado C, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se desprende que a los vistas aduanales no se les concede el carácter de autoridades, sino sólo de auxiliares de las autoridades aduaneras, y tienen facultades expresas para practicar el reconocimiento aduanero, examinando las mercancías de comercio exterior al momento en que se lleva a cabo su reconocimiento, lo que implica el examen de la documentación respectiva y la rectificación de errores en los pedimentos de mercancías, actividades que forman parte del procedimiento de revisión de tales mercancías. (1)

Contradicción de Sentencias No. 100(05)3/97/(A)-II-49/96, 100(A)-II-142/96/783/95 Y ACUMS. 100(A)-II-49/96/544/95, 100(A)-I-62/96/904/96, 100(A)-I-63/96/877/95, 100(A)-I-142/96/871/95.-Resuelta por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Fiscal de la Federación, en sesión de 13 de enero de 1999, por mayoría de 7 votos a favor y 3 en contra.- Magistrado Ponente: Luis Carballo Balvanera.- Secretario: Lic. Gustavo Villegas Parra.
(Tesis aprobada en sesión privada de 13 de enero de 1999)

C O N S I D E R A N D O :

(...)

CUARTO.- (...)

En esa virtud, el Pleno de la Sala Superior considera que al vista aduanal no se le debe considerar como una autoridad, sino como un auxiliar de la autoridad aduanera, por las siguientes razones:

En primer lugar, para obtener una mayor claridad en la exposición, conviene establecer lo que debe entenderse por autoridad para el derecho administrativo, y con tal objeto, a continuación se procede a transcribir la definición que en este sentido se contiene en el Diccionario Jurídico Mexicano, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Tomo A-CH, Editorial Porrúa, páginas 287 y 288:

> "Autoridad, para el derecho administrativo, es la persona física, trabajador del Estado, dotada por la Ley de poder público. De ordinario es quien representa al órgano administrativo, pero puede no serlo y estar investido de ese poder. Gabino Fraga afirma que: 'cuando la competencia otorgada a un órgano implica la facultad de realizar actos de naturaleza jurídica que afecten la esfera de los particulares y la de imponer a éstos sus determinaciones, es decir, cuando el referido órgano está investido de facultades de decisión y de ejecución, se está frente a un órgano de autoridad' (p.490), Manuel María Diez considera que, autoridades son los funcionarios públicos 'que tienen la potestad de mandar, decidir y hacer cumplir órdenes'" (p.345).
>
> "En rigor los funcionarios públicos siempre están dotados de autoridad, es decir, están provistos de poder público, de poder de decisión y ejecución. Pueden, si la ley los autoriza, trasladar parte de esa autoridad a otros funcionarios y empleados públicos a través de un acto de delegación de facultades, en forma temporal o indefinida."

De las definiciones anteriores, se tiene que el término autoridad administrativa implica lo siguiente: 1.- Que a una persona física, la ley la dote de poder público; y, 2.- Que esa persona tenga la facultad de realizar actos de naturaleza jurídica que afecten la esfera de los particulares y que pueda imponer a éstos sus determinaciones.

Ahora bien, el vista aduanal no puede ser considerado como autoridad auxiliar de la autoridad aduanera o como autoridad aduanera, por la básica consideración de que no tiene la facultad de realizar actos de naturaleza jurídica que afecten la esfera de los particulares y la de imponer a éstos sus determinaciones, tal y como se señala en la definición que da el Maestro Gabino Fraga, puesto que su actividad sólo implica la realización de un acto de decisión, pero carece de la facultad de imponer a los particulares sus determinaciones, toda vez que sólo se ocupa de practicar el reconocimiento aduanero, examinando las mercancías conforme a lo dispuesto por el artículo 29 de la Ley Aduanera vigente hasta el 31 de marzo de 1996, cuya actividad siempre debe ser avalada por el superior jerárquico que ostente la representación de la aduana, y de donde se sigue que el vista aduanal no puede tener el carácter de autoridad, dado que no tiene la facultad de expresar la voluntad de la aduana y de imponerle a los particulares sus determinaciones, porque el acto que afecta en definitiva la esfera jurídica del particular, es el que emite el Administrador de la Aduana con base en las facultades de decisión y ejecución de que lo inviste la Ley de la materia, lo que da lugar a que al vista aduanal no se le pueda considerar como una autoridad, sino como un funcionario.

En consecuencia, el vista aduanal no es una autoridad auxiliar o una autoridad aduanera, sino que solamente es un auxiliar de la autoridad aduanera con facultades para realizar el reconocimiento aduanero, tal y como se desprende de una interpretación armónica que se haga de los artículos 3 y 29 de la Ley Aduanera vigente hasta el 31 de marzo de 1996, así como 96 del Reglamento de la Ley Aduanera vigente hasta el 13 de junio de 1996, y 114, apartado A, fracción XVIII, y apartado C, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

En efecto, con el objeto de establecer que el vista aduanal es un auxiliar de la autoridad aduanera con facultades para realizar el reconocimiento aduanero, a continuación se procede a transcribir el artículo 96 del Reglamento de la Ley Aduanera vigente hasta el 13 de junio de 1996.

> "**ARTÍCULO 96.-** Una vez presentado el pedimento, **el vista designado procederá a practicar el reconocimiento aduanero**, examinando las mercancías conforme a lo dispuesto por el artículo 29 de la Ley."

Asimismo, los artículos 3º y 29 de la Ley Aduanera vigente hasta el 31 de marzo de 1996.

> **"ARTÍCULO 3o.-** Las funciones administrativas relativas a la entrada de mercancías al territorio nacional o a la salida del mismo se realizarán por las autoridades aduaneras.
>
> **"Los funcionarios y empleados públicos federales y locales, en la esfera de sus respectivas competencias y cuando las citadas autoridades aduaneras lo soliciten, deberán auxiliarlas en el desempeño de sus funciones**. Asimismo, están obligados a denunciarle los hechos de que tengan conocimiento sobre presuntas infracciones a esta Ley y a poner a su disposición las mercancías objeto de las mismas, si obran en su poder. Las autoridades migratorias, sanitarias, de comunicaciones, de marina, aduaneras y otras, ejercerán sus atribuciones en forma coordinada y colaborarán recíprocamente en el desempeño de las mismas.
>
> "Las autoridades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público colaborarán con las extranjeras en los casos y términos que señalen las leyes y los tratados internacionales en materia aduanera.
>
> "Las empresas de participación estatal y las de carácter privado que operen puertos de altura o aeropuertos internacionales, así como quienes participen

en la administración de los mismos, deberán poner a disposición de las autoridades aduaneras las instalaciones adecuadas para las funciones propias del despacho aduanero y las demás que deriven de esta Ley, y serán responsables del pago de los gastos y costos que implique el mantenimiento de dichas instalaciones. Cuando se trate de puertos sujetos a administración portuaria integral, las instalaciones para la función del despacho aduanero deberán estar señaladas en el respectivo programa maestro de desarrollo portuario, mismo que deberá ser aprobado por la autoridad aduanera.

"Para los efectos de esta Ley, se entiende por autoridades aduaneras las que de acuerdo con el Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tengan competencia para ejercer las facultades que esta Ley establece."

"ARTÍCULO 29.- Una vez presentado el pedimento y efectuado el pago de las contribuciones determinadas por el interesado, incluyendo el de las cuotas compensatorias, se presentarán las mercancías y se activará el mecanismo de selección aleatoria que determine si se debe practicar el reconocimiento aduanero de las mismas. En caso afirmativo, la autoridad aduanera lo efectuará ante quien presente las mercancías en recinto fiscal. Si no debe practicarse, se le entregarán dichas mercancías de inmediato.

"Las autoridades aduaneras, únicamente practicarán la revisión documental y verificarán la exactitud de los datos asentados en los documentos, antes de que el vehículo haya salido del recinto fiscal, en los casos en los que el mecanismo de selección aleatoria determine que debe practicarse el reconocimiento aduanero de las mercancías.

"Cuando se lleve a cabo el reconocimiento a que se refiere el primer párrafo de este artículo, quien haya presentado las mercancías deberá activar nuevamente un mecanismo de selección aleatoria que determinará si dichas mercancías estarán sujetas a un segundo reconocimiento, cuando no se detecten irregula-

ridades en cualquiera de dichos reconocimientos que den lugar al embargo precautorio de las mercancías o no se presente la garantía a que se refiere el artículo 25, fracción I, inciso e), se entregarán éstas de inmediato.

"El reconocimiento aduanero y segundo reconocimiento, consisten en el examen de las mercancías de importación o de exportación, así como de sus muestras, para allegarse elementos que ayuden a precisar la veracidad de lo declarado, respecto de los siguientes conceptos:

"I.- Las unidades de medida señaladas en las tarifas de las leyes de los impuestos generales de importación o exportación, así como el número de piezas, volumen y otros que permitan cuantificar la mercancía.

"II.- La descripción, naturaleza, estado, origen y demás características de las mercancías, y

"III.- Los datos que permitan la identificación de las mercancías, en su caso.

"Cuando las autoridades aduaneras, con motivo de la revisión de los documentos presentados para el despacho de las mercancías, del reconocimiento aduanero o del segundo reconocimiento, tengan conocimiento de cualquier irregularidad, la misma se hará constar en acta circunstanciada que para el efecto se levante. El acta mencionada deberá contener los hechos u omisiones observados, además de asentar las irregularidades que se observen del dictamen aduanero que será obligatorio en todos los casos en los que se efectúe el segundo reconocimiento y que se elaborará por el dictaminador aduanero que para tal efecto autorice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

"En los casos en que con motivo del reconocimiento aduanero de las mercancías se detecten irregularidades, los agentes o apoderados aduanales podrán solicitar sea practicado el segundo reconocimiento de las mercancías en los términos de este artículo.

"El dictamen aduanero tendrá el valor probatorio y alcance que establece el artículo 52 del Código Fiscal de la Federación. Los dictaminadores aduaneros deberán ser autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, debiendo reunir los requisitos de capacidad, experiencia y probidad que establezca la mencionada dependencia. Dichos dictaminadores serán responsables de las irregularidades que cometan en el dictamen que elaboren con motivo del segundo reconocimiento, respecto de los conceptos a que se refieren las fracciones I, II y III del presente artículo, y serán acreedores a una sanción equivalente a cuatro tantos del monto de las contribuciones que se dejaron de cubrir por las irregularidades detectadas por la autoridad, o a la cancelación de la autorización para dictaminar, cuando las irregularidades detectadas así lo ameriten. En el caso de que se aplique una sanción como consecuencia de una irregularidad cuya responsabilidad sea exclusiva del dictaminador aduanero, no se fincará ninguna responsabilidad adicional ni se impondrá sanción alguna a la empresa para la cual preste sus servicios dicho dictaminador.

"El acta que levante la autoridad aduanera en la que se hagan constar los hechos observados en el reconocimiento aduanero o en el segundo reconocimiento, tendrá el valor que establece la fracción I del artículo 46 del Código Fiscal de la Federación, para los hechos u omisiones consignados por los visitadores en las actas.

"El reconocimiento aduanero y el segundo reconocimiento no limitan las facultades de comprobación de las autoridades aduaneras, respecto de las mercancías importadas o exportadas, no siendo aplicable en estos casos el artículo 36 del Código Fiscal de la Federación. Si la autoridad omite, al momento de la importación, objetar el valor de las mercancías o los documentos o informaciones que sirvan de base para determinarlo, no se entenderá que el valor declarado ha sido aceptado o que existe resolución favorable al particular."

Por su parte, el artículo 114, apartado A, fracción XVIII, y apartado C, del Reglamento de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, establecía lo siguiente:

> **"ARTÍCULO 114.-** Compete a las Aduanas, dentro de la circunscripción territorial que a cada una corresponda, en los términos, número, nombre y estructura que enseguida se menciona:
>
> "A. Ejercer las facultades siguientes:
>
> "XVIII. Revisar los pedimentos y demás documentos presentados por los contribuyentes para importar o exportar mercancías, y determinar las contribuciones, multas y, en su caso, aplicar las cuotas compensatorias y determinar en cantidad líquida el monto correspondiente de que tengan conocimiento con motivo de la revisión practicada en los términos de esta fracción.
>
> "(...)
>
> "C.- Cada Aduana estará a cargo de un Administrador del que dependerán los Subadministradores de la Aduana '1' y '2', el Jefe de la Policía Fiscal Federal de la Aduana, los Inspectores, Verificadores, Notificadores, Agentes de la Policía Fiscal y el personal que las necesidades del servicio requiera."

De las disposiciones legales antes transcritas, se tiene que el vista aduanal no tiene el carácter de autoridad aduanera o de autoridad auxiliar de las autoridades aduaneras, sino que es sólo un auxiliar de la autoridad aduanera con facultades para practicar el reconocimiento aduanero, toda vez que, si bien es cierto que de acuerdo con el artículo 96 del Reglamento de la Ley Aduanera, dicho funcionario tiene conferida en forma expresa la facultad de practicar el reconocimiento aduanero, examinando las mercancías en los términos señalados por el artículo 29 de la Ley Aduanera, y que el referido vista aduanal queda comprendido dentro del supuesto del artículo 114, apartado C, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en la parte relativa que dice "(...) y el personal que las necesidades

del servicio requiera", dado que su existencia como empleado de la Aduana se encuentra contemplada en forma expresa por el artículo 96 del Reglamento de la Ley Aduanera; sin embargo, debe señalarse que de ahí no se sigue que el vista aduanal tenga el carácter de autoridad aduanera o autoridad auxiliar de la autoridad aduanera, porque el segundo párrafo del artículo 3º de la Ley Aduanera sólo le confiere el carácter de funcionario o empleado público auxiliar de las autoridades aduaneras, ya que siendo el Administrador de la Aduana el superior jerárquico del vista aduanal, es precisamente a él al que le corresponde el carácter de autoridad aduanera, en términos de lo dispuesto por el primer párrafo del citado artículo 3º, sobre todo si se considera que de acuerdo con la definición de "autoridad que para el derecho administrativo" da el Diccionario Jurídico Mexicano del Instituto de Investigaciones Jurídicas, el término autoridad presupone que una determinada persona física esté dotada de poder público con facultades de realizar actos de naturaleza jurídica que afecten la esfera jurídica de los particulares y que pueda imponer a éstos sus determinaciones, requisitos los anteriores de los que carece el vista aduanal, porque sus actos siempre deberán de ser avalados por su superior jerárquico, es decir, por el Administrador de la Aduana, de ahí que ante lo expuesto, debe concluirse que el vista aduanal no tiene el carácter de autoridad y, por ende, deberá de considerársele como un auxiliar de la autoridad aduanera con facultades para practicar el reconocimiento aduanero, siendo por ello que deberá rechazarse el criterio que se sostuvo por las Secciones de la Sala Superior en las sentencias que resolvieron los recursos de apelación 100(A)-I-62/96/904/96, 100(A)-I-63/96/877/95, 100(A)-II-49/96/544/95, 100(A)-II-142/96/783/95 y acumulados, y 100(A)-I-142/96/871/95, en cuanto a que se consideró que el vista aduanal es una autoridad auxiliar o una autoridad aduanera, y tendrá que adoptarse un criterio diverso al que se sostiene en las sentencias antes referidas, porque como ya quedó aclarado con anterioridad, el vista aduanal no tiene el carácter de autoridad, por lo que sólo debe considerársele como un auxiliar de la autoridad aduanera.

Ahora bien, por lo que hace al segundo aspecto de la contradicción de sentencias, es decir, el relativo a que en las sentencias que resolvieron los recursos de apelación 100(A)-I-62/96/904/96, 100(A)-I-63/96/877/95 y 100(A)-I-142/96/871/

95, se sostuvo que el vista aduanal tiene facultades específicas para hacer la rectificación de errores en los pedimentos relativos a actos de comercio exterior, y que puede elaborar dictámenes de reconocimiento aduanero; y que, por otra parte, en las sentencias que resolvieron los recursos de apelación 100(A)-II-49/96/544/95 y 100(A)-II-142/96/783/95, se afirmó que el vista aduanal carece de facultades de revisión, es de señalarse que al respecto deberá de prevalecer el criterio sustentado en las sentencias que resolvieron los recursos de apelación 100(A)-I-62/96/904/96, 100(A)-I-63/96/877/95 y 100(A)-I-142/96/871/95, toda vez que la simple circunstancia de que el vista aduanal no tenga el carácter de autoridad, no es motivo para establecer que no podía practicar el reconocimiento aduanero (actividad la anterior dentro de la cual se comprende el reporte de error), ya que como quedó aclarado con anterioridad, el segundo párrafo del artículo 3º de la Ley Aduanera, les confiere a determinados servidores públicos, el carácter de funcionarios y empleados públicos federales que dentro de la esfera de sus respectivas competencias y cuando las autoridades aduanales lo soliciten, deberán auxiliarlas en el desempeño de sus funciones, de modo que si la existencia del vista aduanal como funcionario público se encuentra prevista en forma expresa por el artículo 96 del Reglamento de la Ley Aduanera y, además, dicho precepto legal le confiere la facultad de practicar el reconocimiento aduanero, es incuestionable que los actos que realizó el vista aduanal y que fueron materia de estudio en todos los juicios que dieron lugar a la contradicción de sentencias, se encuentran ajustados a derecho, motivo por el cual fue incorrecto que en las sentencias que resolvieron los recursos de apelación 100(A)-II-49/96/544/95 y 100(A)-II-142/96/783/95, se haya afirmado que el vista aduanal carece de facultades de revisión, porque como ya quedó aclarado con anterioridad, el vista aduanal sí tiene facultades para practicar el reconocimiento aduanero.

En mérito de lo antes expuesto, debe tenerse al vista aduanal como un auxiliar de la autoridad aduanera con facultades para practicar el reconocimiento aduanero, examinando las mercancías de comercio exterior al momento en que se lleva a cabo su reconocimiento, lo que implica el examen de la documentación respectiva y la rectificación de errores en los pedimentos de mercancías, cuyas facultades específicamente se encuentran contempladas en el artículo 96 del Reglamento de la

Ley Aduanera, en relación con el 29 de la Ley Aduanera. En consecuencia, se concluye que las sentencias materia de la presente contradicción, sólo presentan coincidencias con respecto a la conclusión a que ha llegado el Pleno de la Sala Superior de este Tribunal, por lo que lo correcto es establecer un tercer criterio, el cual será en el sentido de que el vista aduanal es un auxiliar de la autoridad aduanera con facultades para practicar el reconocimiento aduanero.

(...)

Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 259 y 261 del Código Fiscal de la Federación, y 16, fracción XIV, de la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación vigente a partir del 1o. de enero de 1996, se resuelve:

I.- Ha resultado procedente la denuncia de contradicción de sentencias promovida por la Magistrada SILVIA EUGENIA DÍAZ VEGA.

II.- Se fija la tesis incluida en el último considerando de esta sentencia, misma que se deberá publicar en la Revista de este Tribunal, oportunamente.

III.- NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Fiscal de la Federación, en sesión del 13 de enero de 1999, por mayoría de 7 votos a favor de los CC. Magistrados Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez, Luis Malpica de Lamadrid, María del Consuelo Villalobos Ortíz, Rubén Aguirre Pangburn, Silvia Eugenia Díaz Vega, Francisco Valdés Lizárraga, María Guadalupe Aguirre Soria; y 3 en contra de los CC. Magistrados Alma Peralta Di Gregorio, Jorge Alberto García Cáceres y Luis Carballo Balvanera, quienes se reservaron el derecho para formular voto particular.

Fue ponente en el presente asunto el Magistrado Licenciado Luis Carballo Balvanera, cuya ponencia fue aprobada con modificaciones.

Se formuló el presente engrose el día 5 de enero de 2000, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 26, fracción VI y 37, fracción III, de la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación, firman la Magistrada Ma. Guadalupe Aguirre Soria, Presidenta del Tribunal Fiscal de la Federación, ante la Licenciada Graciela Buenrostro Peña, Secretaria General de Acuerdos, quien da fe

VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL C. MAGISTRADO LUIS CARBALLO BALVANERA, EN LA CONTRADICCIÓN DE SENTENCIAS No. 100(05)3/97/(A)-II-49/96, 100(A)-II-142/96/783/95 Y ACUMS. 100(A)-II-49/96/544/95, 100(A)-III-62/96/904/96, 100(A)-I-63/96/877/95, 100(A)-I-142/96/871/95.

Difiero del criterio mayoritario de los Magistrados integrantes del Pleno de la Sala Superior de este Tribunal, en el que básicamente se sostiene:

a) Que el vista aduanal no tiene facultad de realizar actos que afecten la esfera jurídica de los particulares.

b) Que el vista aduanal carece de facultad de imponer a los particulares sus determinaciones.

c) Que la actividad del vista aduanal siempre debe ser avalada por el superior jerárquico.

d) Que el vista aduanal no tiene la facultad de expresar la voluntad de la aduana.

e) Que el acto que afecta en definitiva al particular lo emite el Administrador de la Aduana.

f) Que por todo lo anterior, el vista aduanal no puede ser considerado como autoridad auxiliar de la autoridad aduanera o como autoridad aduanera, sino que es un auxiliar de la autoridad aduanera con facultades para realizar el reconocimiento de mercancías en aduanas.

Conclusiones con las que no estoy de acuerdo, por las siguientes razones:

En primer término, como quedó asentado en el fallo, el artículo 96 del Reglamento de la Ley Aduanera vigente hasta el 13 de junio de 1996, facultaba al vista aduanal a practicar el reconocimiento aduanero, examinando las mercancías conforme a lo dispuesto por el artículo 29 de la Ley Aduanera vigente hasta 31 de marzo de 1996, precepto este último que mencionaba los actos que integraban el reconocimiento aduanero, a saber: practicar la revisión documental y verificar la exactitud de los datos asentados, examinar las mercancías para precisar la veracidad de lo declarado en cuanto a las unidades de medida de las mercancías, número de piezas, volumen y otros que permitan cuantificar la mercancía, la naturaleza de éstas, su estado, su origen y demás características. Así pues, basta con entender cada uno de estos actos, para concluir que el reconocimiento aduanero es un acto de afectación a la esfera jurídica de los particulares que se encuentran en la hipótesis legal para que se realice el mencionado reconocimiento; en esa medida, al estar facultado el vista aduanal por la legislación para llevar a cabo ese acto de afectación, se le debe reconocer el carácter de autoridad y no sólo de un auxiliar, como se indica en el fallo.

En efecto, es claro que el reconocimiento aduanero, en sí mismo, es un acto de afectación a la esfera jurídica de los particulares, con independencia de que se emita una resolución que determine un crédito fiscal, pues incluso esa resolución puede no existir, bien porque no se encuentren irregularidades o por otra causa diversa, y ese hecho no hace que desaparezca el reconocimiento aduanero, que como tal, debe forzosamente realizarse por una autoridad competente, como lo era el vista aduanal por disposición expresa del Reglamento de la Ley Aduanera, vigente hasta el 13 de junio de 1996.

Asimismo, debe resaltarse que en nuestro sistema jurídico, todo acto de afectación a la esfera jurídica de los particulares, sea de molestia o privativo, debe ser realizado por autoridad competente, por lo que no se le puede negar el carácter de autoridad al vista aduanal cuando ejerce la atribución que le ha sido encomendada por la legislación, y que consiste en realizar el reconocimiento aduanero que, por sí mismo, es un acto de afectación a la esfera de los particulares.

También debe de recordarse, que el vista aduanal no lleva a cabo determinaciones en contra de los particulares, por lo que no es necesario que tenga facultades para imponer las mismas; pues sus facultades son de practicar el reconocimiento aduanero y sólo en caso de tener conocimiento de alguna irregularidad, tendrá que levantar acta circunstanciada en la que asiente los resultados y en la que se harán constar, además, los hechos observados en el reconocimiento aduanero, sin que le corresponda determinar las consecuencias jurídicas de esos hechos.

Por otro lado, tampoco es cierto que "la actividad del vista aduanal siempre debe ser avalada por el superior jerárquico"; lo anterior, por dos razones fundamentales: la primera, porque ni en el artículo 96 del Reglamento de la Ley Aduanera en vigor hasta el 13 de junio de 1996, ni en el 29 de la Ley Aduanera vigente hasta el 31 de marzo de 1996, se establecía que la actuación del vista aduanal debía ser confirmada por el superior jerárquico sino, por el contrario, la propia ley indicaba el valor probatorio de los hechos asentados en el acta circunstanciada, es decir, que los hechos e irregularidades consignadas en las actas hacen prueba de la existencia de tales hechos e irregularidades, para los efectos de cualquiera de las contribuciones a cargo del contribuyente; por lo que la facultad del Administrador de la Aduana es calificar los hechos y las irregularidades asentadas por el vista aduanal, para determinar las consecuencias jurídicas, pero no avalar la actuación del vista aduanal; y la segunda razón es que puede ser que se lleve a cabo el reconocimiento aduanero y que al no detectar ninguna irregularidad, baste con la actuación del vista aduanal, misma que no tiene que ser confirmada por el Administrador de la Aduana.

Por último, el carácter de autoridad no se obtiene con la expresión de la voluntad de un órgano de la Administración Pública, sino ese carácter lo tiene quien es capaz de afectar la esfera jurídica de los particulares en la medida en que la legislación le señala una atribución específica al respecto.

En esa virtud, estimo que el vista aduanal, al practicar el reconocimiento aduanero, tenía el carácter de autoridad, de acuerdo a los artículos 29 de la Ley Aduanera en vigor hasta el 31 de marzo de 1996, y 96 del Reglamento de la mencionada Ley en vigor hasta el 13 de junio del mismo año.

MAG. LUIS CARBALLO BALVANERA

LEY ADUANERA

V-P-SS-118

TÉCNICOS ADUANALES.- CARECEN DE FACULTADES PARA EMITIR DICTÁMENES DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Y VALORACIÓN DE MERCANCÍAS DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN.- LEY ADUANERA Y REGLAMENTOS VIGENTES EN 1995.- De la interpretación de los artículos 111 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y 116 de la Ley Aduanera, vigentes en 1995, se desprende la facultad que tenía la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para establecer la naturaleza, características, clasificación arancelaria, origen y valoración de mercancías de importación y exportación, ya sea en forma directa, o bien, solicitando un dictamen respecto a estos puntos, por conducto de sus Administraciones Locales de Auditoría Fiscal; sin que de dichos artículos se desprenda la participación que pudieran tener los llamados "Técnicos Aduanales" para llevar a cabo la citada valoración o clasificación arancelaria. Por ende, pese a que éstos pueden auxiliar a las autoridades hacendarias en el desarrollo de sus facultades, no pueden emitir actos que por sí mismos afecten la esfera jurídica de los gobernados, particularmente, la valoración o clasificación arancelaria de las mercancías en operaciones de importación o exportación, pues en virtud del principio de legalidad, tales actos de molestia deben estar respaldados por una disposición legal que prevea en forma expresa las atribuciones que tiene el emisor de ese acto de afectación, lo que no sucedía respecto de los Técnicos Aduanales. (2)

Contradicción de Sentencias No. 100(05)4/98(A)-I-690/96/12187/95(A)-II-478/96/722/95.- Resuelta por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Fiscal de la Federación, en sesión de 3 de febrero de 1999, por mayoría de 6 votos y 4 en contra.- Magistrado Ponente: Luis Carballo Balvanera.- Secretario: Lic. Juan Francisco Villarreal Rodríguez.
(Tesis aprobada en sesión de 3 de febrero de 1999)

C O N S I D E R A N D O :

(...)

CUARTO.- ESTUDIO DE FONDO DE LA CONTRADICCIÓN DE SENTENCIAS.- A juicio del Pleno de esta Sala Superior, es fundada la contradicción de sentencias objeto de estudio, debiendo prevalecer la postura de la Segunda Sección de la Sala Superior de este Tribunal que se contiene en el expediente 100(A)-II-478/96/722/95.

En ese orden de ideas, como se desprende de las resoluciones originalmente impugnadas, (fojas 18 del expediente 12187/95 y fojas 20 del expediente 722/95) los Técnicos Aduanales, rindieron una clasificación arancelaria, cotización y avalúo, que posteriormente fueron notificados al actor y sirvieron de base para emitir aquellas resoluciones.

Desde luego, como se desprende del expediente 100(A)-I-690/96/12187/95 que se resolvió por la Primera Sección de la Sala Superior, el Técnico Aduanal rindió el informe de clasificación arancelaria, en los siguientes términos (foja 17 expediente 12183/95):

"ADMINISTRACIÓN LOCAL DE AUDITORÍA
FISCAL DEL SUR DEL D.F.
SUBADMINISTRACIÓN No. "5"
México, D.F., a, 02 de Febrero de 1995.

"Informe de clasificación arancelaria, cotización y avalúo del vehículo de procedencia extranjera que se tuvo a la vista, afecto a la orden de verificación vehicular No. CVV 130059/95

"CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA MERCANCÍA CUOTAS Y REQUISITOS.	IMPUESTO AD-VALOREM
"PIEZA	AUTOMOVIL: PONTIAC TIPO: COUPE MODELO: 1982 SERIE No.: 1G2AG27XXCG507616 FRACCIÓN ARANCELARIA: 8703.24.01 AD-VALOREM: 20% PZA. SI REQUIERE PERMISO DE SECOFI. SI VALOR DE TRANSACCIÓN: N$ 15,782.50	N$ 3,156.50

"AJUSTE DE IMPUESTOS:
"IMPUESTO AD-VALOREM N$ 3,156.50
"I.S.A.N. : NO CAUSA

"En caso de que el vehículo sea redimible causará el 10% del impuesto al valor agregado que asciende a la cantidad de N$1,893.90 (UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES NUEVOS PESOS, 90/100 M.N.)

"La presente clasificación arancelaria, cotización y avalúo del vehículo se elaboró de acuerdo a lo establecido en las reglas 1 y 6 de las generales; 1a., 2a. y 3a. de las complementarias; todas ellas contenidas en el artículo 2o. de la Ley del Impuesto General de Importación; así como en los artículos 38, fracción IV, inciso b), 54, fracción I y 116, fracción XIV, de la Ley Aduanera en vigor, y se rinde a mi leal saber y entender con cuotas y requisitos vigentes al 02 de febrero de 1995.

"A T E N T A M E N T E.
"EL TÉCNICO ADUANAL.
"C. HILARIÓN ROMERO REYNOSO."

El anterior dictamen, a su vez, se tomó en consideración por la autoridad demandada para fundar y motivar el oficio originalmente impugnado, como se advierte del texto de este último que en su parte conducente expresa:

"R E S U L T A N D O (...)

"2.- El 02 de febrero de 1995, se notificó al C. José Pérez González, el inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera, la clasificación arancelaria, cotización y avalúo del artículo en cuestión, realizada por el Técnico Aduanal C. Hilarión Romero Reynoso, así como el plazo legal para que manifestara por escrito lo que a su derecho conviene.

"3.- El C. José Pérez González, no presentó ni ofreció pruebas para acreditar la legal estancia del vehículo en el país dentro del plazo legal, ni se inconformó en contra de la clasificación arancelaria, cotización y avalúo realizada por el Técnico Aduanal C. Hilarión Romero Reynoso, perdiendo su derecho de hacerlo con posterioridad de acuerdo a lo previsto en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, por disposición del artículo 5o. del Código Fiscal de la Federación vigente. (...)"

"(...) concluyendo que el C. José Pérez González al no haber desvirtuado los motivos que dieron origen al embargo precautorio, cometió la infracción establecida en el artículo 134, fracción II, en relación con el 130 de la Ley Aduanera vigente, haciéndose acreedor al pago de los impuestos que fueron omitidos conforme al artículo 35, fracción I, 36, 48 y 57 de la Ley Aduanera vigente.(...)"

Por otro lado, en el expediente 100(A)-II-478/96/722/95 que se resolvió por la Segunda Sección de la Sala Superior de este Tribunal, se encuentra la clasificación arancelaria, cotización y avalúo de mercancía del 28 de diciembre de 1994, que a la letra dice (foja 122 del expediente 722/95):

"ADMINISTRACIÓN LOCAL DE AUDITORÍA
FISCAL DE GUADALUPE
"Expediente CVV - 310064/94
"Infractor Zenona Garza de González
"Guadalupe, Nuevo León a 28 de Diciembre de 1994.

"El C. TÉCNICO ADUANAL LIC. MARTÍN PAZ GALVÁN designado como tal por el C. C.P. FILIBERTO CAMPOS ARIZMENDI Administrador Local de Auditoría Fiscal de Guadalupe, en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 111 apartado B fracciones XII y XX del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de Febrero de 1992, modificado mediante Decretos que Reforman, Adicionan y Derogan diversas disposiciones del mismo, publicados en el mismo Órgano Oficial el 4 de Junio de 1992, 25 de Enero y 20 de Agosto de 1993, formula la presente Clasificación Arancelaria, Cotización y Avalúo de la mercancía que enseguida se describe:

"CANT.	DESCRIP. DE MERCANCÍA	FRACCIÓN ARANCELARIA	P. OFICIAL	VALOR EN ADUANA	AD-VALOREM	PERMISO	IMPUESTOS
Una Pieza	Vehículo	8703.23.01	- - - - -	N$23,125.00	20%	SECOFI	N$4,625.00
					I.V.A. 10%		N$2,775.00
	Marca: Dodge				Total de Impuestos		N$7,400.00
	Modelo: 1986						
	Tipo: Ram Charger						
	Serie 3B4GD12TOG4615524						

BASE DE I.V.A.
VALOR N$ 23,125.00
AD-VALOREM N$ 4,625.00
BASE DE I.V.A. N$ 27,750.00

EL PERITO TÉCNICO ADUANAL"

La cual se tomó por el oficio impugnado en primera instancia a fojas 22 y 23 al decir:

> "Que determinada la competencia de esta Administración Local de Auditoría Fiscal de Guadalupe, se procede a evaluar la documentación que obra en el expediente en que se actúa, señalada en los Puntos del Primero al Quinto del Apartado de RESULTANDO de la presente resolución, de conformidad con los artículos 129, 133, 202, 203, 207 y demás relativos del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la materia, según lo establecido por el artículo 1o. de la Ley Aduanera vigente en 1994, y 130 del Código Fiscal de la Federación en vigor en 1994, desprendiéndose que el vehículo Marca Dodge, Tipo Ram Charger, Modelo 1986, y No. de Serie 3B4GD12T0GM615524 es de manufactura extranjera, lo que se comprobó de sus propias características y de su presentación comercial, así como de la copia fotostática del título de propiedad No. 28879763 extendido por el Estado de Texas, E.U.A., en fecha octubre 18 de 1990 y de la clasificación arancelaria, cotización y avalúo de fecha 28 de diciembre de 1994, elaborada por el C. Técnico Aduanal LIC. MARTÍN PAZ GALVÁN, unidad automotriz que conforme a dicha clasificación arancelaria, está afecta al pago de los impuestos aduaneros y sus adicionales y requiere de permiso previo de autoridad competente para su importación al País, clasificación arancelaria la cual fue debidamente notificada a la C. ZENONA GARZA DE GONZÁLEZ en el acta de embargo precautorio de fecha 28 de diciembre de 1994 y contra la cual no obra en el armario de inconformidad alguna."

De lo anterior se colige que las resoluciones impugnadas en los expedientes 100(A)-I-690/96/12187/95 y 100(A)-II-478/96/722/95, se apoyaron en los dictámenes rendidos por un Técnico Aduanal que de esta suerte afectaron la esfera jurídica del hoy actor.

El Técnico Aduanal entonces, debe tener facultades expresas contenidas en la Ley de la materia en el momento en que emite actos que trasciendan a la esfera

jurídica del particular, debiendo ser competente para realizar tal afectación, lo que no sucede en el caso concreto, pues de los artículos 111 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y 116, fracción XIV, de la Ley Aduanera vigente en 1995, se desprende que sólo la autoridad hacendaria por medio de su Titular o por conducto de sus Administraciones Locales de Auditoría Fiscal, pueden valorar en aduana las mercancías de importación o el valor comercial de las mercancías de exportación o, en su caso, solicitar el dictamen que requiera para poder llevar a cabo la clasificación arancelaria o valor de las mercancías de importación y exportación, sin que el Técnico Aduanal aparezca como parte de dicha Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con facultades para dictaminar tal cuestión, dado que los preceptos legales ya citados, a la letra establecen:

> **"ARTÍCULO 111.-** Las Administraciones Generales de Recaudación, de Auditoría Fiscal Federal y la Jurídica de Ingresos, contarán con Administraciones Locales que tendrán la circunscripción territorial, la sede y el nombre que al efecto se señale mediante acuerdo del Secretario. La Administración General de Aduanas tendrá Aduanas ubicadas conforme a este Reglamento y en la circunscripción que al efecto se señale mediante acuerdo del Secretario.
>
> "(...)
>
> **"B.-** Compete a las Administraciones Locales de Auditoría Fiscal, ejercer las facultades siguientes:
>
> "(...)
>
> **"XII.-** Determinar conforme a la Ley Aduanera, el valor en aduana de las mercancías de importación o el valor comercial de las mercancías de exportación.
>
> "(...)"

"ARTÍCULO 116.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tendrá además de las conferidas por el Código Fiscal de la Federación y por otras leyes, las siguientes facultades:

"(...)

"XIV.- Establecer la naturaleza, características, clasificación arancelaria, origen y valor de las mercancías de importación y exportación.

"Para ejercer las facultades a que se refiere el párrafo anterior, la Secretaría podrá solicitar el dictamen que requiera, al agente aduanal, al dictaminador aduanero o a cualquier perito.

"(...)"

En ese orden de ideas, tenemos que en el expediente 12187/95 que se tramitó ante la Tercera Sala Regional Metropolitana, y que posteriormente se conoció en apelación por la Primera Sección de la Sala Superior, obra el acta de verificación, embargo e inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera de vehículos de procedencia extranjera, de la que se constata que personal adscrito a la Administración Local de Auditoría Fiscal del Sur del Distrito Federal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, notificó al conductor del vehículo extranjero marca Pontiac 6000 LE Modelo 1982, color negro, No. de Serie 1G2AG27XXCG507616, el dictamen de clasificación arancelaria, cotización y avalúo de dicho vehículo, elaborado por el Técnico Aduanal HILARIÓN ROMERO REYNOSO. Así mismo, en el expediente de nulidad 722/95, que se resolvió en segunda instancia por la Segunda Sección de la Sala Superior, obra también un acta del 28 de diciembre de 1994, por la que personal adscrito a la Administración Local de Auditoría Fiscal de Guadalupe, en cumplimiento a la orden de verificación No. CVV-310064, contenida en el oficio 324-A-III-2-03-16083 del 23 de diciembre de 1994, dio a conocer al conductor del vehículo Dodge, Tipo Ram Charger, Modelo 86, Placas de circulación VYV-74L, color negro con gris, No. de Serie 3V4G012TOGMG15524, el

inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera, clasificación arancelaria, cotización y avalúo del vehículo de procedencia extranjera ya mencionado, documentales que a juicio de este Tribunal ponen en evidencia la afectación que ambos dictámenes de clasificación arancelaria y valoración de los vehículos extranjeros embargados tuvieron en la esfera jurídica de ZENONA GARZA DE GONZÁLEZ, parte actora en ambos juicios, puesto que aquéllos se tomaron como base para dictar los oficios inicialmente recurridos.

Por ende, debe prevalecer la posición adoptada por la Segunda Sección de esta Sala Superior, quien confirmó la sentencia de primera instancia de fecha 2 de enero de 1996, razonando que el Técnico Aduanal carece de facultades para emitir un acto que sirvió de antecedente a las resoluciones impugnadas en juicio de nulidad, como lo es la clasificación arancelaria, cotización y avalúo de mercancías, conforme a los artículos 3o. de la Ley Aduanera y 114, Apartado C, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Por lo anterior, y con fundamento en el artículo 259 del Código Fiscal de la Federación, se fija la siguiente tesis:

> **“TÉCNICOS ADUANALES.- CARECEN DE FACULTADES PARA EMITIR DICTÁMENES DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Y VALORACIÓN DE MERCANCÍAS DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN.- LEY ADUANERA Y REGLAMENTOS VIGENTES EN 1995.-** De la interpretación de los artículos 111 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y 116 de la Ley Aduanera, vigentes en 1995, se desprende la facultad que tenía la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para establecer la naturaleza, características, clasificación arancelaria, origen y valoración de mercancías de importación y exportación, ya sea en forma directa, o bien, solicitando un dictamen respecto a estos puntos, por conducto de sus Administraciones Locales de Auditoría Fiscal; sin que de dichos artículos se desprenda la participación que pudieran tener los llamados ‘Técnicos Aduanales’ para llevar a cabo la citada valoración o

clasificación arancelaria. Por ende, pese a que éstos pueden auxiliar a las autoridades hacendarias en el desarrollo de sus facultades, no pueden emitir actos que, por sí mismos, afecten la esfera jurídica de los gobernados, particularmente, la valoración o clasificación arancelaria de mercancías en operaciones de importación o exportación, pues en virtud del principio de legalidad, tales actos de molestia deben estar respaldados por una disposición legal, que prevea en forma expresa las atribuciones que tiene el emisor de ese acto de afectación, lo que no sucedía respecto de los Técnicos Aduanales."

Por lo anterior, y con fundamento en los artículos 259 y 261 del Código Fiscal de la Federación y 16, fracción XIV, de la Ley Orgánica de este Tribunal, se resuelve:

I.- Ha resultado procedente la denuncia de contradicción de sentencias promovida por la Magistrada SILVIA EUGENIA DÍAZ VEGA.

II.- Debe prevalecer el criterio sustentado por la Segunda Sección de la Sala Superior de este Tribunal, en el expediente 100(A)-II-478/96/722/95, en sentencia del 4 de febrero de 1997.

III.- Se fija la tesis incluida en el último considerando de esta sentencia, que se deberá publicar en la Revista de este Tribunal, oportunamente.

IV.- NOTIFÍQUESE. Con copia autorizada del presente fallo devuélvanse los autos correspondientes al archivo de Sala Superior y a las Salas respectivas, a fin de que en su oportunidad se archive este expediente.

Así lo resolvió el Pleno de la H. Sala Superior de este Tribunal, en sesión de Pleno del 3 de febrero de 1999, por mayoría de 6 votos de los CC. Magistrados, Luis Malpica de la Madrid, Rubén Aguirre Pangburn, Silvia Eugenia Díaz Vega, Francisco Valdés Lizárraga, María Guadalupe Aguirre Soria y Magistrado Presidente Luis Carballo Balvanera; y 4 en contra de los Magistrados Luis Humberto

Delgadillo Gutiérrez, Alma Peralta Di Gregorio, Jorge Alberto García Cáceres, quien se reservó su derecho para formular voto particular, y María del Consuelo Villalobos Ortíz, que manifestó su adhesión al voto que formule el Magistrado Jorge Alberto García Cáceres.

Fue Ponente en el presente asunto el C. Magistrado Luis Carballo Balvanera, cuya ponencia se aprobó.

Se elaboró el presente engrose el día 17 de febrero de 1999, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 26, fracción VI y 37, fracción III, de la Ley Orgánica de este Tribunal firma la Magistrada Ma. Guadalupe Aguirre Soria, Presidenta del Tribunal Fiscal de la Federación, ante la C. Secretaria General de Acuerdos, Licenciada Graciela Buenrostro Peña, quien da fe.

I. M. S. S.

V-P-SS-119

DOMICILIO FISCAL SEÑALADO EN LA DEMANDA.- NO SE DESVIRTÚA ESTE SEÑALAMIENTO CON EL AVISO DE INSCRIPCIÓN DEL PATRÓN ANTE EL IMSS.- El señalamiento contenido en la demanda, relativo al lugar donde se ubica el domicilio fiscal del demandante, realizado bajo protesta de decir verdad, no queda desvirtuado cuando la demandada exhibe, junto con su incidente de incompetencia, copia del formato que corresponde al aviso de inscripción de la actora, en su carácter de patrón, ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, ya que este formato lo que señala es la ubicación del centro de trabajo, que de acuerdo con el artículo 1° del Reglamento de la Ley del Seguro Social en lo relativo a la afiliación de patrones y trabajadores, vigente hasta el 30 de junio de 1997, corresponde al lugar donde los trabajadores presten sus servicios, el que no necesariamente coincide con el domicilio fiscal, ya que de acuerdo con el artículo 10, fracción II, inciso a), del Código Fiscal de la Federación, este último se determina de acuerdo con el lugar donde se encuentre la administración principal del negocio; por tanto, el incidente resulta infundado, y debe determinarse cuál es la Sala competente conforme a la manifestación de la actora en la demanda, de ser su domicilio fiscal. (3)

Juicio No. 2049/00-09-3/820/00-PL-04-02.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Fiscal de la Federación, en sesión de 15 de noviembre de 2000, por unanimidad de 9 votos.- Magistrado Ponente: Jorge Alberto García Cáceres.- Secretario: Lic. César Edgar Sánchez Vázquez.
(Tesis aprobada el 15 de noviembre de 2000).

PRECEDENTE:

IV-P-SS-17
Incidente de Incompetencia No. 100(07)/106/98/17886/97.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Fiscal de la Federación, en sesión de 13 de enero de 1999, por unanimidad de 10 votos.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretario: Lic. Miguel Ángel Luna Martínez.

LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

V-P-SS-120

COMPETENCIA POR RAZÓN DE TERRITORIO.- LA SEDE DE LA AUTORIDAD SE DETERMINA POR EL LUGAR DE EXPEDICIÓN DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA.- De conformidad con el artículo 31 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, es competente para conocer de una demanda, la Sala Regional en cuya jurisdicción se encuentra la sede de la autoridad demandada; en consecuencia, a falta de disposición que señale cuál es la sede de la autoridad demandada, la misma se determinará por el lugar de expedición de la resolución impugnada, ya que por regla general, la autoridad emite sus actos en su sede. (4)

Juicio No. 191/01-10-01-5/833/01-11-03-4/296/01-PL-04-02.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 16 de mayo de 2001, por mayoría de 7 votos, 1 más con los puntos resolutivos y 1 en contra.- Magistrado Ponente: Jorge Alberto García Cáceres.- Secretario: Lic. César Edgar Sánchez Vázquez.
(Tesis aprobada en sesión de 18 de junio de 2001)

EN EL MISMO SENTIDO:

V-P-SS-121
Juicio No. 74/01-08-01-1/1134/01-11-03-6/328/01-PL-01-02.-Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 6 de junio de 2001, por unanimidad de 11 votos a favor.- Magistrado Ponente: Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez.- Secretario: Lic. Octavio César Irigoyen Urdapilleta.
(Tesis aprobada en sesión de 18 de junio de 2001)

V-P-SS-122
Juicio No. 190/01-10-01-9/834/01-11-03-5/329/01-PL-02-02.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 6 de junio de 2001, por unanimidad de 11 votos a favor.- Magistrado Ponente: Luis Malpica de Lamadrid.- Secretario: Lic. Antonio Miranda Morales.
(Tesis aprobada en sesión de 18 de junio de 2001)

V-P-SS-123
Juicio No. 353/01-05-02-5/697/01-11-03-7/304/01-PL-06-02.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 6 de junio de 2001, por unanimidad de 11 votos a favor.- Magistrado Ponente: Alejandro Sánchez Hernández.- Secretaria: Lic. Ma. Esther Méndez Serrato.
(Tesis aprobada en sesión de 18 de junio de 2001)

C O N S I D E R A N D O :

(...)

SEGUNDO.- (...)

(...) el artículo 31 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, vigente en la fecha de interposición de la demanda, establece lo siguiente:

> "Artículo 31.- **Las Salas Regionales conocerán de los juicios por razón del territorio respecto del lugar donde se encuentra la sede de la autoridad demandada;** si fueran varias las autoridades demandas, donde se encuentre la que dictó la resolución impugnada. Cuando el demandado sea un particular, se atenderá a su domicilio".

De la transcripción anterior, se sigue que se establece como norma el que se surte la competencia de las Salas Regionales, por razón de territorio, respecto del lugar donde se encuentre la sede de la autoridad demandada.

En el caso concreto, si la sede de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente se ubica en el Estado de México, conforme a lo dispuesto por los artículos 28 y 31 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y artículo primero, fracción XI, del Acuerdo G/10/2001 por el que se determinan los límites y denominación de las regiones del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, número y sede de sus Salas Regionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 2001, corresponde el conocimiento del juicio a la Tercera Sala Regional Hidalgo-México.

Resultan aplicables al caso, mutatis mutandi y por analogía, las siguientes tesis:

Tercera Época.
Instancia: Pleno
R.T.F.F.: Año III. No. 35. Noviembre 1990.
Tesis: III-TASS-1968
Página: 32

“COMPETENCIA POR RAZÓN DE TERRITORIO.- SE DETERMINA POR LA RESIDENCIA DE LA AUTORIDAD ORDENADORA, Y LA RESIDENCIA DE ÉSTA POR EL LUGAR DE EXPEDICIÓN DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA.- De conformidad con el artículo 24 de la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación, es competente para conocer de una demanda la Sala Regional en cuya jurisdicción radique la autoridad que emitió la resolución impugnada; en consecuencia, la residencia de la autoridad se determina por el lugar de expedición de la resolución impugnada, ya que por regla general la autoridad emite sus actos en su sede.(22)

"Incidente de Incompetencia No. 9/90.- Resuelto en sesión de 14 de noviembre de 1990, por unanimidad de 8 votos.- Magistrado Ponente: Gilberto García Camberos.- Secretario: Lic. Rolando G. Magaña H."

Tercera Época.
Instancia: Pleno
R.T.F.F.: Año VII. No. 80. Agosto 1994.
Tesis: III-TASS-2272
Página: 21

"COMPETENCIA POR RAZÓN DE TERRITORIO.- TRATÁNDOSE DE EMPRESAS QUE FORMAN PARTE DEL SISTEMA FINANCIERO, SE DETERMINA POR EL LUGAR DONDE DICTÓ LA RESOLUCIÓN LA AUTORIDAD ORDENADORA.- De conformidad con el artículo 7-B, fracción III, último párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, son integrantes del sistema financiero, las instituciones de crédito, las de seguros, las de fianzas, los almacenes generales de depósito, las arrendadoras financieras, las empresas de factoraje financiero, las casas de bolsa y las casas de cambio; por tanto, si el artículo 24 de la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación, previene que cuando se trate de empresas que formen parte del sistema financiero o tengan el carácter de controladora o controlada en los términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, **será competente la Sala Regional respecto de las resoluciones que dicten las autoridades ordenadoras con sede en su jurisdicción; en consecuencia, la competencia, por razón de territorio,** respecto de las empresas que forman parte del sistema financiero, **se determinará por el lugar donde la autoridad ordenadora dicte la resolución impugnada en el juicio contencioso administrativo.**

"Incidente de Incompetencia No. 71/94/(1)-546/94/II-2511/94.- Resuelto en sesión de 19 de agosto de 1994, por mayoría de 7 votos y 1 en contra.-

Magistrado Ponente: Jorge A. García Cáceres.- Secretario: Lic. Julián Casarrubias Pérez.

"PRECEDENTES:

"Incidente de Incompetencia No. 86/93/1586/93/6/93.- Resuelto en sesión de 21 de mayo de 1993, por unanimidad de 7 votos.- Magistrado Ponente: Alfonso Nava Negrete.- Secretaria: Lic. Rosa H. Círigo Barrón.

"Incidente de Incompetencia No. 150/93/300/93/3546/93.- Resuelto en sesión de 18 de agosto de 1993, por mayoría de 6 votos a favor y 1 en contra.- Magistrado Ponente: Alfonso Nava Negrete.- Secretario: Lic. Mario Meléndez Aguilera."

Tercera Época.
Instancia: Pleno
R.T.F.F.: Año VII. No. 75. Marzo 1994.
Tesis: III-TASS-2268
Página: 37

"COMPETENCIA POR RAZÓN DE TERRITORIO.- TRATÁNDOSE DE EMPRESAS QUE FORMAN PARTE DEL SISTEMA FINANCIERO, SE DETERMINA POR EL LUGAR DONDE DICTÓ LA RESOLUCIÓN LA AUTORIDAD ORDENADORA.- De conformidad con el artículo 7-B, fracción III, último párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, son integrantes del sistema financiero, las instituciones de crédito, las de seguros, las de fianzas, los almacenes generales de depósito, las arrendadoras financieras, las empresas de factoraje financiero, las casas de bolsa y las casas de cambio; por tanto, si el artículo 24 de la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación, previene que cuando se trate de empresas que formen parte del sistema financiero o tengan el carácter de controladora o controlada

en los términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, **será competente la Sala Regional respecto de las resoluciones que dicten las autoridades ordenadoras con sede en su jurisdicción; en consecuencia, la competencia, por razón de territorio,** respecto de las empresas que forman parte del sistema financiero, **se determinará por el lugar donde la autoridad ordenadora dicte la resolución impugnada en el juicio contencioso administrativo.**(2)

"Incidente de Incompetencia No. 7/94/267/93/3926/93.- Resuelto en sesión de 24 de marzo de 1994, por unanimidad de 7 votos.- Magistrado Ponente: Jorge A. García Cáceres.- Secretario: Lic. Julián Casarrubias Pérez.

"PRECEDENTES:

"Incidente de Incompetencia No. 86/93/1586/93/6/93.- Resuelto en sesión de 21 de mayo de 1993, por unanimidad de 7 votos.- Magistrado Ponente: Alfonso Nava Negrete.- Secretaria: Lic. Rosa H. Círigo Barrón.

"Incidente de Incompetencia No. 150/93/300/93/3546/93.- Resuelto en sesión de 18 de agosto de 1993, por mayoría de 6 votos a favor y 1 en contra.- Magistrado Ponente: Alfonso Nava Negrete.- Secretario: Lic. Mario Meléndez Aguilera."

Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 218 del Código Fiscal de la Federación, y 16, fracción III, y 28 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y artículo primero, fracción XI, del Acuerdo G/10/2001, es de resolverse y se resuelve:

I.- Es procedente, pero infundado el incidente de incompetencia por razón del territorio, hecho valer por la Tercera Sala Regional Hidalgo-México, en consecuencia;

II.- Devuélvanse los autos del presente asunto a Tercera Sala Regional Hidalgo-México, para los efectos legales conducentes.

III.- Envíese a la Sala Regional Peninsular, copia del presente fallo, para su conocimiento, así como a las partes.

IV.- NOTIFÍQUESE.- Y en su oportunidad, archívese este expediente como asunto concluido.

Así lo resolvió el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 16 de mayo de 2001, por mayoría de 7 votos con la ponencia de los Magistrados Alma Peralta Di Gregorio, Jorge A. García Cáceres, Alejandro Sánchez Hernández, Silvia Eugenia Díaz Vega, Luis Carballo Balvanera, Guillermo Domínguez Belloc y Ma. Guadalupe Aguirre Soria; 1 más con los puntos resolutivos del Magistrado Francisco Valdés Lizárraga; y 1 en contra del Magistrado Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez. Estuvieron ausentes los Magistrados Luis Malpica de Lamadrid y María del Consuelo Villalobos Ortíz.

Fue ponente en el presente asunto el Magistrado Jorge Alberto García Cáceres, cuya ponencia se aprobó.

Se elaboró el presente engrose el 6 de junio de 2001, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 26, fracción VI y 37, fracción III, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, firman la Magistrada María Guadalupe Aguirre Soria, Presidenta del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ante la Licenciada Graciela Buenrostro Peña, Secretaria General de Acuerdos, quien da fe.

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

V-P-SS-124

JUICIO CON CARACTERÍSTICAS ESPECIALES.- VIOLACIONES EN SU TRAMITACIÓN.- El artículo 239-Bis del Código Fiscal de la Federación otorga la facultad a la Sala Superior del Tribunal Fiscal de la Federación, de resolver en definitiva juicios con características especiales y, para el caso, establece que la Sala Regional respectiva deberá notificar personalmente a las partes que la Sala Superior será quien resuelva el juicio de nulidad, formulándoles requerimiento para que designen domicilio para recibir notificaciones, en la sede de la Sala Superior y a las personas autorizadas para recibirlas. En consecuencia, si la Sala Regional correspondiente omite notificarles personalmente el acuerdo sobre radicación de la competencia atrayente con el requerimiento señalado, contraviniendo lo preceptuado en el citado artículo 239-Bis, se configura una violación al procedimiento que deja en estado de indefensión a las partes, al desconocer el órgano que resolverá en definitiva, así como la oportunidad de fijar domicilio y nombrar representante ante el mismo. (5)

Juicio No. 6114/00-11-11-5/260/01-PL-07-04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 30 de mayo de 2001, por unanimidad de 11 votos a favor.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretaria: Lic. María Luisa de Alba Alcántara.
(Tesis aprobada en sesión de 8 de junio de 2001)

PRECEDENTE:

SS-87
Juicio de Competencia Atrayente No. 7/90.- Resuelto en sesión de 30 de abril de 1991, por unanimidad de 8 votos.- Magistrada Ponente: Ma. Guadalupe Aguirre Soria.- Secretario: Dr. Gustavo A. Esquivel Vázquez.

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

V-P-SS-125

VIOLACIÓN SUSTANCIAL DEL PROCEDIMIENTO.- CUANDO NO SE EMPLAZA A JUICIO AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE LA QUE DEPENDE EL ÓRGANO DESCONCENTRADO QUE EMITIÓ LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 198, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, será parte demandada en el juicio contencioso administrativo, el titular de la dependencia de la Administración Pública Federal, de la que dependa la autoridad que dictó la resolución impugnada; en tal virtud, si ésta se dicta por un órgano desconcentrado de alguna Secretaría que conforma la Administración Pública Federal, entonces, el titular de la Secretaría es quien tiene el carácter de parte demandada, y no el titular del órgano desconcentrado, ya que éste forma parte de aquélla. Por tanto, de acuerdo con lo previsto en el artículo 212 del citado Ordenamiento, el Secretario de Estado debe ser emplazado a juicio, corriéndole traslado con una copia de la demanda y de sus anexos para que la conteste dentro del término de ley, ya que de no hacerse así, se comete una violación sustancial al procedimiento, debiendo, por consiguiente, ordenarse la reposición del mismo, a fin de que el magistrado instructor del juicio dé cumplimiento a los artículos invocados. (6)

Juicio No. 6114/00-11-11-5/260/01-PL-07-04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 30 de mayo de 2001, por unanimidad de 11 votos a favor.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretaria: Lic. María Luisa de Alba Alcántara.
(Tesis aprobada en sesión de 8 de junio de 2001)

EN EL MISMO SENTIDO:

V-P-SS-126
Juicio No. 15530/99-11-02-3/113/01-PL-04-04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 27 de abril de 2001, por mayoría de 8 votos a favor.- Magistrado Ponente: Jorge Alberto García Cáceres.- Secretario: Lic. César Edgar Sánchez Vázquez.
(Tesis aprobada en sesión privada de 25 de junio de 2001)

V-P-SS-127
Juicio No. 262/00-04-01-7/2/00-PL-07-04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 27 de abril de 2001, por mayoría de 8 votos a favor.- Magistrado Ponente: Rubén Aguirre Pangburn.- Secretaria: Lic. Susana Ruiz González.- Tesis elaborada por el Lic. Rafael García Morales.
(Tesis aprobada en sesión privada de 25 de junio de 2001)

V-P-SS-128
Juicio No. 8069/00-11-02-3/126/01-PL-08-04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 27 de abril de 2001, por mayoría de 8 votos a favor.- Magistrado Ponente: Francisco Valdés Lizárraga.- Secretario: Lic. Luis Edwin Molinar Rohana.
(Tesis aprobada en sesión privada de 25 de junio de 2001)

C O N S I D E R A N D O :

(...)

TERCERO.- Esta Juzgadora advierte que el magistrado instructor del juicio incurrió en una violación substancial al procedimiento, toda vez que no emplazó al

titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, conforme a lo dispuesto en los artículos 198, fracción III, y 212 del Código Fiscal de la Federación, aun cuando dicha autoridad no fue señalada por el actor como parte demandada.

En efecto, no obstante que en la especie se impugna una resolución que fue emitida por el titular del órgano administrativo desconcentrado denominado "Procuraduría Federal de Protección al Ambiente", sin embargo, no se emplazó a juicio al Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, quien en la especie asume el carácter de parte demandada, en los términos de la fracción III del artículo 198 del Código Fiscal de la Federación, puesto que resulta ser el titular de la dependencia de la Administración Pública Federal, de la que depende la autoridad que dictó la resolución impugnada.

Desde luego, en la especie, quien dictó la resolución impugnada fue el titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, como se desprende de la documental que se localiza a fojas 8 a 15 del expediente, en tanto que dicha Procuraduría resulta ser un órgano desconcentrado de la entonces Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, actualmente denominada Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; razón por la cual, el titular de dicha Secretaría debió haber sido emplazado a juicio, aun cuando no fue señalado con el carácter de demandada, por parte de la actora, puesto que el instructor debió, de oficio, correrle traslado de la demanda para que la contestara, conforme a lo dispuesto en el artículo 212 del referido Código.

Lo anterior es así, ya que el emisor de la resolución impugnada constituye un órgano desconcentrado de la Administración Pública Federal Centralizada, esto es, dicho órgano desconcentrado forma parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, puesto que está sujeto al poder jerárquico de la autoridad central, ya que no tiene personalidad jurídica ni patrimonio propios; como así se desprende de los dispositivos que a continuación se transcriben.

Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca.

(Diario Oficial de la Federación de 8 de julio de 1996)

"Artículo 2.- Para el estudio, planeación y despacho de los asuntos que le competen, la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca tendrá las siguientes unidades administrativas:

"(...) Órganos Administrativos Desconcentrados:

"(...) Procuraduría Federal de Protección al Ambiente".

Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca

(Diario Oficial de la Federación de 5 de junio de 2000)

"Artículo 2.- Al frente de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca estará el Secretario, quien para el desahogo de los asuntos de su competencia se auxiliará de:

"(...) C. Órganos desconcentrados:

"(...) IV. Procuraduría Federal de Protección al Ambiente".

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley Federal de Radio y Televisión, de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de la Ley de la Policía Federal Preventiva y de la Ley de Pesca

(Diario Oficial de la Federación de 30 de noviembre de 2000)

"Artículo 26.- Para el despacho de los asuntos del orden administrativo, el Poder ejecutivo de la Unión contará con las siguientes dependencias:

"(...) Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales".

"Artículo Primero Transitorios.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación".

"Artículo Quinto Transitorios.- Las menciones contenidas en otras leyes, reglamentos y en general en cualquier disposición, respecto de las Secretarías cuyas funciones se reforman por virtud de este Decreto, se entenderán referidas a las dependencias que, respectivamente, asuman tales funciones".

(El subrayado es de esta Juzgadora)

De la transcripción que antecede, se desprende que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente es un órgano desconcentrado, como así se establecía en el Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, publicado en el Diario Oficial de la Federación de 8 de julio de 1996, vigente hasta el 5 de junio de 2000, día anterior al en que entró en vigor el nuevo Reglamento Interior de la mencionada Secretaría, en el cual también se le atribuye tal carácter, siendo de resaltar que con fecha 31 de noviembre de 2000, mediante el "Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley Federal de Radio y Televisión, de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de la Ley de la Policía Federal Preventiva y de la Ley de Pesca", publicado en el Diario Oficial de la Federación de 30 de noviembre de 2000, se cambió la denominación de la hasta entonces Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, por la de "Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales".

En este orden de ideas, se incurre en la violación de procedimiento a que se ha hecho referencia, la cual hace nugatorio el derecho de defensa del Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de quien depende el Procurador Federal de Protección al Ambiente, autoridad que dictó la resolución impugnada en el presente juicio, transgrediéndose la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que trae como consecuencia que deba reponerse el procedimiento.

Al respecto, es aplicable la tesis III-PSS-123, sustentada por la Sala Superior de este Tribunal, que se transcribe a continuación:

> **"JUICIO DE NULIDAD CON CARACTERÍSTICAS ESPECIALES.- COMPETENCIA DE LA SALA SUPERIOR PARA REVISAR DE OFICIO LAS VIOLACIONES SUSTANCIALES AL PROCEDIMIENTO**.- De acuerdo con lo previsto por el artículo 15, fracción II, de la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación, y 239 Bis, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, esta Sala Superior es competente para pronunciar el fallo en los juicios cuyo valor excede de cien veces el salario mínimo vigente en el área geográfica del Distrito Federal, elevado al año. De ahí que la Sala Regional es competente para efectuar sólo la instrucción del expediente, a fin de poder dictar el fallo. La Sala Superior debe revisar todas las actuaciones de la instrucción y, en caso de detectar una violación al procedimiento en esa etapa, debe estudiarla de oficio, pudiéndose aplicar por analogía el principio previsto en la jurisprudencia número 113, sustentada por la propia Sala Superior, ya que el procedimiento es de orden público, como es de explorado derecho, y la Sala Superior, como órgano superior jerárquico con plenitud de jurisdicción, debe revisar la legalidad del procedimiento.
>
> "Juicio de competencia atrayente número 142/89.- Resuelto en sesión de 28 de enero de 1992, por unanimidad de 7 votos.- Magistrada Ponente: Ma. Guadalupe Aguirre Soria.- Secretario: Lic. Avelino C. Toscano Toscano.

"PRECEDENTE SS-44:

"Juicio de competencia atrayente número 22/89.- Resuelto en sesión de 13 de septiembre de 1990, por mayoría de 6 votos y 1 en contra.- Magistrado Ponente: Alfonso Nava Negrete.- Secretario: Lic. Mario Meléndez Aguilera".

Tesis publicada en la Revista del Tribunal Fiscal de la Federación, Tercera Época, Año V, número 49, enero de 1992, página 15.

De tal suerte, al no haber sido emplazada la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, como autoridad demandada en el presente juicio, procede que la Sala de origen subsane dicha omisión, conforme a lo dispuesto en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, numeral en el que a la letra se señala:

"Artículo 58.- Los jueces, magistrados y ministros podrán ordenar que se subsane toda omisión que notaren en la substanciación, para el solo efecto de regularizar el procedimiento."

(...)

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 235, 236, 237 y 239-A, fracción I, inciso a), del Código Fiscal de la Federación, se resuelve:

I.- Devuélvanse los autos a la Décimo Primera Sala Regional Metropolitana de este Tribunal, para el efecto de que se regularice el procedimiento, en los términos precisados en el presente fallo.

II.- En su oportunidad, se remitan los autos a esta Sala Superior, para que emita la resolución correspondiente, toda vez que ha ejercido su facultad de atracción.

III.- NOTIFÍQUESE.

Así lo resolvió el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 30 de mayo de 2001, por unanimidad de 11 votos a favor, de los Magistrados: Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez, Luis Malpica de Lamadrid, Alma Peralta Di Gregorio, Jorge Alberto García Cáceres, María del Consuelo Villalobos Ortíz, Alejandro Sánchez Hernández, Silvia Eugenia Díaz Vega, Francisco Valdés Lizárraga, Luis Carballo Balvanera, Guillermo Domínguez Belloc y María Guadalupe Aguirre Soria.- Fue Ponente en el presente asunto la Magistrada Silvia Eugenia Díaz Vega, cuya ponencia se aprobó en sus términos.

Se elaboró el presente engrose el 12 de junio de 2001, y con fundamento en lo previsto en los artículos 26, fracción VI, y 37, fracción III, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en vigor, firman la Magistrada María Guadalupe Aguirre Soria, Presidenta del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ante la Licenciada Graciela Buenrostro Peña, Secretaria General de Acuerdos, quien da fe.

LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

V-P-SS-129

PRESCRIPCIÓN PREVISTA EN LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.- ORDENAMIENTO APLICABLE PARA COMPUTAR EL PLAZO CORRESPONDIENTE.- La prescripción prevista en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, se computa a partir del día siguiente a aquél en que se hubiera incurrido en la responsabilidad administrativa, o a partir del momento en que hubiese cesado, si fuera de carácter continuo, conforme a lo dispuesto en el artículo 78 de la citada Ley, por lo que el ordenamiento aplicable resulta ser el vigente en el momento en que se dé cualesquiera de estos supuestos. (7)

Juicio No. 8566/99-11-03-8/286/00-PL-09-04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 30 de mayo de 2001, por unanimidad de 9 votos.- Magistrado Ponente: Luis Carballo Balvanera.- Secretario: Lic. Juan Francisco Villarreal Rodríguez.
(Tesis aprobada en sesión de 30 de mayo de 2001)

PRECEDENTE:

V-P-SS-18
Juicio No. 1723/98-02-01-3/99-PL-07-04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Fiscal de la Federación, en sesión de 14 de junio de 2000, por mayoría de 9 votos a favor y 1 voto más con los puntos resolutivos.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretaria: Lic. María Luisa de Alba Alcántara.

LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

V-P-SS-130

PRESCRIPCIÓN PREVISTA EN LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.- PLAZO PARA QUE SE CONFIGURE.- En el artículo 78, fracción II, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, vigente en 1993, se señalan dos plazos diversos para que opere la figura de la prescripción; el primero de ellos, de un año, si el beneficio obtenido o el daño causado por el infractor no excede de diez veces el salario mínimo mensual vigente en el Distrito Federal, y el segundo de los plazos mencionados, es de tres años, y opera, según lo establece el propio artículo en cita, "en los demás casos", debiendo quedar comprendido entre ellos, los casos en que existiendo un beneficio o un daño, el mismo excede de dicho salario mínimo, o bien, cuando la conducta infractora no tiene un contenido económico. Por lo demás, en todos los casos la prescripción a que alude este precepto se interrumpirá al iniciarse el procedimiento administrativo previsto por el artículo 64 del Ordenamiento en cita. (8)

Juicio No. 8566/99-11-03-8/286/00-PL-09-04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 30 de mayo de 2001, por mayoría de 9 votos a favor.- Magistrado Ponente: Luis Carballo Balvanera.- Secretario: Lic. Juan Francisco Villarreal Rodríguez.
(Tesis aprobada en sesión de 30 de mayo de 2001)

PRECEDENTE:

V-P-SS-71
Juicio No. 1723/98-02-01-3/99-PL-07-04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Fiscal de la Federación, en sesión del 14 de junio de 2000, por mayoría de 9 votos a favor y 1 voto más con los puntos resolutivos.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretaria: Lic. María Luisa de Alba Alcántara.

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

V-P-SS-131

INCOMPETENCIA TERRITORIAL.- TRÁMITE DEL INCIDENTE PROMOVIDO POR LA AUTORIDAD DEMANDADA.- De conformidad al último párrafo del artículo 218 del Código Fiscal de la Federación, cuando alguna de las partes presenta la cuestión incidental de incompetencia territorial a través de la Sala denunciada como incompetente, ésta debe limitarse a tener por presentada la denuncia y enviar los autos a la Sala Superior para que ésta resuelva lo que en derecho corresponda y, en el supuesto de que las constancias enviadas resultasen insuficientes, la Sala Superior podrá pedir un informe a la Sala Regional cuya competencia fue denunciada; por tanto, resulta incorrecto que dicha Sala emita cualquier pronunciamiento sobre su competencia en el asunto, pues ello rebasa las atribuciones que le corresponden en esta clase de incidentes. (9)

Incidente de Incompetencia No. 11985/00-11-04-8/186/01-PL-07-02.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 15 de junio de 2001, por unanimidad de 9 votos a favor.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretaria: Lic. María Luisa de Alba Alcántara. (Tesis aprobada en sesión de 15 de junio de 2001)

PRECEDENTE:

V-P-SS-100
Incidente de Incompetencia No. 1133/00-11-04-8/194/01-PL-04-02.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 9 de mayo de 2001, por unanimidad de 11 votos.- Magistrado Ponente: Jorge Alberto García Cáceres.- Secretario: Lic. César Edgar Sánchez Vázquez

PRIMERA SECCIÓN

LEY DE COMERCIO EXTERIOR

V-P-1aS-48

CERTIFICADO DE ORIGEN.- VALORACIÓN DEL MISMO.- Si del examen de los documentos que exhibe el actor en el juicio de nulidad, para comprobar el origen de la mercancía importada, consistentes en el pedimento de importación, la factura y el certificado de origen, se advierte que los datos de esta mercancía anotados en el certificado de origen no coinciden con los citados, tanto en el pedimento de importación como en la factura, se estima que tal certificado carece de valor probatorio y que, por tanto, no es válido, al considerarse que el demandante no comprobó fehacientemente el origen de la mercancía importada, pues los datos de tales documentos deben coincidir en todos sus puntos. (10)

Juicio No. 100(20)67/98/777/98.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Fiscal de la Federación, en sesión de 9 de mayo de 2000, por unanimidad de cinco votos a favor.- Magistrado Ponente: Luis Malpica de Lamadrid.- Secretaria: Lic. Juana Griselda Dávila Ojeda.
(Tesis aprobada en sesión privada de 21 de junio de 2001)

C O N S I D E R A N D O :

(...)

QUINTO.- (...)

A mayor abundamiento, no pasa desapercibido para los Magistrados integrantes de la Primera Sección de la Sala Superior, el hecho de que el certificado de origen presentado por la actora ante las autoridades revisoras y ante esta Juzgadora, no coincide con el pedimento de importación ni con la factura de la mercancía importada que exhibió la demandante en este juicio, mismos que obran a fojas 48 y 50, y que se transcriben a continuación:

PEDIMENTO DE IMPORTACIÓN NUEVOS PESOS

REF.: 779/94 **HOJA 1 DE**

FECHA DE PAGO: _____ NO. PEDIMENTO: 3327-4000009
TIPO DE OPERACIÓN: 1 CLAVE DE PEDIMENTO: A1 T.C.: 3.38150
ADUANA/SEC: 38-0 FACTOR MONEDA EXTRANJERA: 0.00
FECHA DE ENTRADA 010994 TRANSPORTE: 1 PESO: 2150.00
R.F.C.: PMP92080841A PAÍS VENDEDOR: G7 DE ORIGEN: G
EXPEDICIÓN POR TERCERO: NO. PED. ESP. DE TRÁNSITO:
IMPORTADOR: PROVEEDORA DE MATERIALES PENA, S.A. DE C.V.
DOMICILIO: CARRETERA A NOGALES 9999
CIUDAD/EDO: ZAPOPAN, JAL.
FACTURAS / FECHAS / FORMA DE FACTURACIÓN / PROVEEDOR /
DOMICILIO / (1) 2021/42 28/JUL/94

CERÁMICA ZIRCONIO, S.A C&F
CARRET. DE ONDA KM. 3
12540 VILLAREAL, CASTELLÓN, ESPAÑA TAX No.:

DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS DIC
BANCO
BANJÉRCITO, S.N.A.
ADUANA 38-O CAJA
12 OPERAC 22990
PEDIMENTO 3327: 4000009
CLAVE AL TIPO 1
Registro Federal de Contribuyentes
FECHA 7/9/1994 16:39:34
IMPORTE N$ 8,764.00
SELLOS

MARCAS, NÚMEROS, TOTAL DE BULTOS - CONOCIMIENTOS GUÍA O VEHÍCULOS NOS.
CUFU, - 135302-4 1 CONTENEDOR 5 DE VALENCIA, ESPAÑA
B/M CHIPRIOTA "ALBONICA" REG- 528
V.ME 1037260.00 PTS.V.DL. 7883.18 FLETES O SEGUROS
VALOR COMERCIAL + INCREMENTABLES= VALOR EN ADUANA FACTOR
26657 O 26657 1'000000

DESCRIPCIÓN DE MERCANCÍAS			PRECIO UNITARIO	COMERCIAL	TASA	FP	IMPUESTO
FRACCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	CAT.TFA/MT	EN ADUANA	VINC		
PERMISO (S) CLAVES / NÚMERO (S) / FIRMA				DLS	M.VAL		
AZULEJO DE CERÁMICA				26657	20.00	0	5331
			23.98	26657	0	0	0
69083001	1111.800-04		21070.000-01	783.18	1		

FECHA 08/09/94 HORA: 10:55 OP.032
08473
PEDIMENTO: 3327-4000009
FIRMA: TXGNJRTXGN VEHÍCULOS: 00
/0001
DESADUANAMIENTO LIBRE
CUMPLIDO

ACUSE DE RECIBO	CÓDIGO DE BARRAS	CONTRIBUCIONES	
UK29BKE7			
OBSERVACIONES: F.A. 1.0000 F.R. 0.00		AD VALOREM	53
PATIO SEC. CONTENEDORES P.I.A.			
		D.T.A.	3
		I.V.A.	32
		TOTALES	
		EFECTIVO	87
		OTROS	
		TOTAL	87

(OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO NUEVOS PESOS)

PATENTE, NOMBRE YFIRMA DEL AGENTE ADUANAL
3327, ADOLFO MARTÍNEZ VARA Y L.P. MALX-451227QQ9
REP. LUIS DUEÑAS GÓMEZ DUGL-500825MKA"

(El énfasis es nuestro)

FACTURA

"BILL OF LADING

Shipper ZIRCONIO, S.A. CTRA. DE ONDA KM. 3 12540 VILA-REAL (CASTELLÓN, ESPAÑA) Consignee (If to order so indicate) TO THE ORDER OF BANPAIS, S.A. Notify party (no clain shall attach for failure to notify) TO MEGATRANS INTERNACIONAL, S.C. RÍO TIZAPÁN 1783, COL. ATLAS TELS.: 657-91-49 Y 657-93-35 FAX: 657-94-63 GUADALAJARA, JAL. AT'N ING. ARTURO PORTILLO	**AGENTES EN DESTINO** **DELFÍN & COMPAÑÍA, S.A. DE C.V.** **HOMERO 1425 DESP. 505** **POLANCO 11510, MÉXICO, D.F.** **TFO. 3954955/3954042** **FAX: 3956601/TLX: 1173780** **FCL CONTAINER** **SHIPPER'S LOAD & COUNT**

Place of receipt	**Port of loading VALENCIA**	**Freight payable at DESTINATION**	**Reference No.**
Vessel ALBONICA	**Port of Discharge TAMPICO**	**Place of Delivery**	**No. of original Bills of Lading 3/THREE**

Marks & Numbers	**No. of Pkgs or shipping units**	**Description of Goods & Pkgs.**	**Gross Weight**	**Measurement**
CUFU1353024 **SEAL 131** **FREIGHT** **COLLEC** **CLEAN ON BORD** **17.08.94** **(ilegible)**		**1X20' SAID TO CONTAIN** **17 BULTOS AZULEJOS Y PAVIMENTOS CERÁMICOS** **C AND F. TAMPICO** **1.117 BOXES WITH 9.727 PIECES** **1.11, 80 M2** **IRREVOCABLE CREDIT No. CCI404071** **SHIPMENT FROM: VALENCIA TO: TAMPICO** **PARTIAL SHIPMENTS: ALLOWED** **TRANSHIPMENTS:ALLOWED**	**21500 KG.**	

REF. CCI404071
CONTRAPAGO DE FLETES Y GASTOS ENTRÉGUESE A LA ORDEN DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A DE C.V.
Guadalajara, Jal. a 31 AGO'94
BANPAÍS,S.A.
BANCA INTERNACIONAL
(Firma ilegible)

Place and (ilegible): VALENCIA 17.08.94"

(El énfasis es nuestro)

De la comparación entre el certificado de origen de 17 de septiembre de 1994, el pedimento de importación 3327-4000009 y la factura de 17 de agosto de 1994, se aprecia que en la factura se menciona que la mercancía importada consiste en 17 bultos de azulejos cerámicos, que se remitieron en el contenedor número **CUFU 135302-4;** en el pedimento de importación se señala que la mercancía que amparaba consistió en azulejos de cerámica, remitidos en el contenedor **CUFU-135302-4;** y en el certificado de origen, menciona la exportadora que "(...) toda la mercancía embarcada en el contenedor No. **NR-CUFU-135302-0** para la firma: Proveedora de Materiales Pena, S.A. de C.V. es de origen español." Esto es, la mercancía que se señala en el certificado de origen no corresponde a la relacionada en la factura ni en el pedimento de importación, porque cita un contenedor diferente al de la factura y el del pedimento de importación, de ahí que el certificado de origen no sólo carece de valor probatorio porque fue presentado con fecha posterior a la de la presentación de la mercancía importada ante la aduana, sino que además no coincide con la mercancía amparada con el pedimento de importación 3327-4000009. Es decir, la actora no probó, en los términos del artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, que la mercancía importada con el pedimento de importación 3327-4000009 fuera de España.

(...)

Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 104 Constitucional, 236, 237, 238, fracción IV, 239, fracciones I y II, y 239-B, fracción I, inciso a), del Código Fiscal de la Federación; 20, fracción I, inciso a), y 26, fracción VII, de la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación, se resuelve:

R E S O L U T I V O S:

I. Esta Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Fiscal de la Federación es competente por razón de materia para dictar resolución definitiva en el juicio de nulidad 100(20)67/98/777/98.

II. El actor probó parcialmente su acción; en consecuencia,

III. Se reconoce la validez de la resolución impugnada contenida en el oficio 18/96 de 5 de noviembre de 1997, emitido por la Aduana de Tampico, Tamaulipas, en la parte relativa a la aplicación de la cuota compensatoria en cantidad de $16,530.00, impuesto al valor agregado por $1,653.00 y multa por omisión de impuesto al valor agregado por la cantidad de $1,157.00.

IV. Se declara la nulidad de la resolución impugnada contenida en el oficio 18/96 de 5 de noviembre de 1997, emitido por la Aduana de Tampico, Tamaulipas, en la parte relativa a la multa por $24,795.00, impuesta con fundamento en el artículo 129, fracción I, de la Ley Aduanera.

V. Mediante atento oficio que se gire al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, remítasele copia certificada del presente fallo en cumplimiento a la ejecutoria DA-3303/99.

VI. NOTIFÍQUESE. Con copia autorizada de esta resolución devuélvanse los autos del juicio de nulidad a la Sala Regional que corresponda, una vez que haya quedado firme o, en su caso, se resuelva en definitiva el presente asunto; y, en su oportunidad, archívese este expediente.

Así lo resolvió la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Fiscal de la Federación, en sesión del día 9 de mayo de 2000, por unanimidad de cinco votos a favor de los CC. Magistrados Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez, Alma Peralta Di Gregorio, María del Consuelo Villalobos Ortíz, Jorge Alberto García Cáceres y Luis Malpica de Lamadrid.

Fue Ponente en este asunto el C. Magistrado Luis Malpica de Lamadrid, cuya ponencia fue modificada.

Se formuló el presente engrose el día 18 de mayo de 2000, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 22, fracción III, y 37, fracción III, de la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación, firma el Magistrado Luis Malpica de Lamadrid, Presidente de la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Fiscal de la Federación, ante la Licenciada María del Carmen Cano Palomera, Secretaria Adjunta de Acuerdos, quien da fe.

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

V-P-1aS-49

COMPETENCIA TERRITORIAL EN LA ORDEN DE EMBARGO.- LA FALTA DE CITA DE LA FRACCIÓN DEL PRECEPTO LEGAL QUE LA OTORGA, DA LUGAR A UNA NULIDAD PARA EFECTOS. Si este Órgano Jurisdiccional estima que la autoridad emisora de la orden de embargo es omisa en señalar la fracción del precepto legal que le otorga competencia territorial, y que tal omisión constituye un vicio formal que afecta las defensas del particular, la declaratoria de nulidad no debe ser lisa y llana, ya que no se está en los supuestos del artículo 238, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, sino que se está ante una violación formal, prevista en la fracción II del precepto en cita, razón por la cual, la declaratoria de nulidad debe ser para el efecto de que la autoridad demandada deje insubsistente la resolución reclamada y se emita una nueva orden de embargo, en la que cite el artículo, fracción e inciso del precepto legal que otorga competencia territorial a la autoridad que la expida. (11)

Juicio No. 597/98-09-01-1/99-S1-02-04.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Fiscal de la Federación, en sesión de 14 de julio de 2000, por unanimidad de 4 de votos.- Magistrado Ponente: Luis Malpica de Lamadrid.- Secretaria: Lic. Juana Griselda Dávila Ojeda.
(Tesis aprobada en sesión privada de 21 de junio de 2001)

C O N S I D E R A N D O :

(...)

SEXTO.- (...)

En el concepto de impugnación I, inciso 4, de la demanda, la actora argumentó que en la orden de embargo del crédito fiscal 124250, la Administración Local de Recaudación de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, no fundamentó su ámbito territorial de validez.

Esta Juzgadora considera **FUNDADO** el concepto de impugnación l, inciso 4, invocado por la actora en su escrito inicial de demanda, pero insuficiente para declarar la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada, por las siguientes consideraciones:

El artículo 16 constitucional dispone que todo acto de autoridad debe estar debidamente fundado y motivado; esta garantía de legalidad, está igualmente prevista en el artículo 38, fracción III, del Código Fiscal de la Federación.

En la especie, la actora se duele que la Administración Local de Recaudación de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, no cumplió con lo dispuesto en los artículos referidos, ya que no citó los dispositivos legales aplicables para fundar su ámbito territorial de validez en la orden de embargo del crédito fiscal 124250.

La orden de embargo referida, de 26 de enero de 1998, dice textualmente:

> "SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
> ADMINISTRACIÓN LOCAL DE RECAUDACIÓN:
> TUXTLA GUTIÉRREZ: 76
> "DOMICILIO: PALACIO FEDERAL SN 1ER. PISO
> CENTRO
> C.R.H. 156
>
> **"DILIGENCIA DE EMBARGO**
>
> **"DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE O DEUDOR**
>
> **"REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: DCS-741014 DU4**
> **"NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: DERIVS CONCRETO SURESTE, S.A.**
> **"DOMICILIO: 1/A PTE. NTE. N° 130-CE AV. CENTRAL Y 1/A NTE., TERÁN, TUXTLA GUTZ. CHIAPAS, C.P. 29050**

"DATOS DEL CRÉDITO

"CRÉDITO NÚMERO: 124250 "N° DE DOCUMENTO DETERMINANTE: 36769700306860	IMPORTE: $9'467,367.83 FECHA DE CORTE: 26/01/98
"CONCEPTO: POR FALTA DE PAGO"	
"En virtud de que no se realizó el pago del crédito arriba señalado, con fundamento en el artículo 151, del Código Fiscal de la Federación, así como el artículo 41, Apartado A, fracción XI, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria y el Acuerdo en el cual se señala el nombre, sede y circunscripción territorial, en sus Unidades Administrativas, se procede a embargar bienes de su propiedad suficientes para hacer efectivo el crédito fiscal y sus accesorios legales. "Haciéndole saber el derecho que le concede la Ley para que designe 2 (dos) testigos y señale bienes para su embargo o en su defecto el ejecutor procederá a señalarlos de conformidad con lo establecido en los artículos 155 y 156 del citado Código. "Para el cumplimiento de lo manifestado y con fundamento en el artículo 152 del Código Fiscal de la Federación se designa al ejecutor C. Orlando Molina Penagos el cual se identifica con credencial número 077 , habilitándose con fundamento en el artículo 13 del Código Fiscal de la Federación hasta___horas del día_____para practicar la diligencia.	
"ADMINISTRADOR LOCAL DE RECAUDACIÓN "(firma ilegible) "LIC. MÁXIMO CARMONA LÓPEZ	
"Acta de embargo "Con fundamento en el artículo 152 del Código Fiscal de la Federación, se procede a realizar el embargo de negociación, mismo que ampara la relación anexa, exhortando al deudor a acudir a esta autoridad dentro de los 6 (seis) días hábiles siguientes para la determinación conjunta del valor de los bienes conforme al artículo 173 del Código citado.	
"El Ejecutor "(firma ilegible) "Orlando Molina Penagos	El contribuyente o representante legal Nombre y firma
"Testigo (firma ilegible) "Nombre y firma	Testigo Ervin Rafael Rodas A.

Hay que hacer notar que la Administración Local de Recaudación de Tuxtla Gutiérrez es competente territorialmente para expedir la orden de embargo del crédito fiscal 124250 a cargo de la actora, toda vez que el artículo 41, Apartado A, fracción XI, y Apartado F, punto 46 del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria y el Artículo Primero, fracción VII, inciso 2), del Acuerdo por el que se señala el nombre y circunscripción territorial de las Unidades Administrativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicado en el Diario Oficial de la Federación de 29 de enero de 1990 y modificado según Decretos publicados en el mismo Órgano de difusión oficial de 15 de marzo de 1993, 13 de octubre de 1993, 29 de junio de 1994, 7 de diciembre de 1994 y 18 de diciembre de 1998, establecen:

Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria

"Artículo 41. Las Administraciones Generales de Recaudación, de Auditoría Fiscal Federal y Jurídica de Ingresos contarán con Administraciones Locales, y la Coordinación General de Recursos contará con Coordinaciones Locales de Recursos. Todas ellas tendrán la circunscripción territorial, la sede y el nombre que al efecto se señale mediante acuerdo del Presidente del Servicio de Administración Tributaria. La Administración General de Aduanas tendrá Aduanas ubicadas conforme a este Reglamento y en la circunscripción que al efecto se señale mediante acuerdo del Secretario de Hacienda y Crédito Público.

"Las Administraciones Locales de Recaudación, de Auditoría Fiscal y Jurídicas de Ingresos estarán a cargo de un Administrador, quien será asistido en el ejercicio de sus facultades por los subadministradores, coordinadores operativos, supervisores, inspectores, auditores, abogados tributarios, ayudantes de auditor, verificadores, ejecutores y notificadores y por los demás servidores públicos que señale este Reglamento, así como por el personal que se requiera para satisfacer las necesidades del servicio.

"Las Coordinaciones Locales de Recursos estarán a cargo de un Coordinador, quien será asistido en el ejercicio de sus facultades, por los

Subcoordinadores, coordinadores operativos, supervisores, técnicos, analistas, así como por el personal que se requiera para satisfacer las necesidades del servicio.

"A. **Compete a las Administraciones Locales de Recaudación a que se refiere el apartado F de este artículo, ejercer las facultades siguientes**:

"(...)

"XI. **Llevar a cabo el procedimiento administrativo de ejecución para hacer efectivos los créditos fiscales a cargo de los contribuyentes**, responsables solidarios y demás obligados, cuando dicho procedimiento no sea de la competencia de otra unidad administrativa del Servicio de Administración Tributaria, así como las garantías constituidas para asegurar el interés fiscal, inclusive las fianzas a favor de la Federación, otorgadas para garantizar los créditos fiscales respecto de los cuales ejerza el procedimiento administrativo de ejecución; enajenar fuera de remate bienes embargados; y, en su caso, expedir el documento que ampare la enajenación de los bienes rematados;

"(...)

"F. **El número y nombre de las Administraciones Locales de Recaudación**, de Auditoría Fiscal, Jurídicas de Ingresos y de las Coordinaciones Locales de Recursos, es el que en seguida se señala, y la sede es la ciudad que corresponda al nombre de cada una, incluso en el caso de las del Distrito Federal que tendrán por sede el propio Distrito Federal.

"(...)

"46. **De Tuxtla Gutiérrez.**"

(El énfasis es nuestro)

Acuerdo por el que se señala el nombre y circunscripción territorial de las Undidades Administrativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

"ARTÍCULO PRIMERO. Las Administraciones Generales de Recaudación, Auditoría Fiscal Federal y Jurídica de Ingresos, así como las Administraciones Especiales de Recaudación, Auditoría Fiscal y Jurídica de Ingresos, tendrán su sede en la ciudad de México, Distrito Federal y ejercerán sus facultades en todo el territorio nacional.

"El número, el nombre, la sede y la circunscripción territorial en donde se ejercerán las facultades de las Administraciones Regionales y Locales de Recaudación, Auditoría Fiscal y Jurídica de Ingresos, serán las siguientes:

"(...)

"VII. **ADMINISTRACIÓN REGIONAL DEL SUR.** Con sede en Oaxaca de Juárez, Oax., **y circunscripción territorial en los estados de** CAMPECHE, **CHIAPAS,** OAXACA, QUINTANA ROO, TABASCO y YUCATÁN, **la cual cuenta con las siguientes Administraciones Locales:**

"(...)

"2. **ADMINISTRACIÓN LOCAL DE TUXTLA.- Con sede en Tuxtla Gutiérrez, cuya circunscripción territorial comprende los municipios de: (...) Tuxtla Gutiérrez, Chiapas (...)"**

(El énfasis es nuestro)

De manera que si el domicilio fiscal de la actora se encuentra ubicado en 1ª Poniente y Norte No. 130-CE, y Avenida Central y 1ª Norte, Terán, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, según consta en la propia orden de embargo del crédito fiscal 124250 que

se impugna, es claro que el domicilio fiscal de la demandante se encuentra en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, circunscripción territorial asignada como jurisdicción de la Administración Local de Recaudación de Tuxtla Gutiérrez, razón por la cual se considera que es competente para emitir la orden de embargo.

No obstante lo anterior, de la orden de embargo del crédito fiscal 124250, antes transcrita, se advierte de manera fehaciente que la Administración Local de Recaudación de Tuxtla Gutiérrez no fundamentó debidamente su ámbito territorial de competencia, pues omitió citar el artículo, fracción e inciso del Acuerdo en el cual se señala el nombre, sede y circunscripción territorial, en sus Unidades Administrativas, del Servicio de Administración Tributaria, y la fecha de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, requisitos necesarios para cumplir con la fundamentación de la competencia territorial de la demandada, ya que sólo de esa manera la demandante tendrá oportunidad de conocer de manera fehaciente si la autoridad demandada es realmente competente dentro de su jurisdicción; por lo que se estima que la autoridad demandada no cumplió con lo dispuesto por los artículos 16 constitucional y 38, fracción III, del Código Fiscal de la Federación.

Es aplicable al caso concreto la jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Séptima Época, Tomo 187-192, Sexta Parte, página 76, que a la letra dice:

(...)

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 236, 237, 238, fracción II, 239, fracción III, del Código Fiscal de la Federación; 20, fracción I, inciso c), y 26, fracción VII, de la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación, se resuelve:

R E S O L U T I V O S :

I. Se deja intocada la sentencia de 24 de junio de 1999 en sus considerandos primero a séptimo, en estricto acatamiento a la ejecutoria R.F. 3365/99, de 2 de junio de 2000, dictada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito;

II. La actora, en el presente juicio, probó su acción; en consecuencia,

III. Se declara la nulidad de la orden de embargo de 26 de enero de 1998 y acta de embargo de 3 de febrero de 1998, relativas al crédito fiscal 124250, precisadas en el resultando 1º de esta sentencia, para los efectos mencionados en la última parte del considerando séptimo de este fallo.

IV. Mediante atento oficio que se gire al Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, remítase copia certificada del presente fallo, en cumplimiento a la ejecutoria dictada en la revisión fiscal R.F. 3365/99.

V. NOTIFÍQUESE. Con copia autorizada de esta resolución devuélvanse los autos del juicio de nulidad a la Sala Regional que corresponda, una vez que haya quedado firme o, en su caso, se resuelva en definitiva el presente asunto; y en su oportunidad archívese este expediente.

Así lo resolvió la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Fiscal de la Federación, en sesión del día 14 de julio de 2000, por unanimidad de cuatro votos a favor de los CC. Magistrados Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez, Alma Peralta Di Gregorio, Jorge Alberto García Cáceres y Luis Malpica de Lamadrid, estando ausente la Magistrada María del Consuelo Villalobos Ortíz.

Fue Ponente en este asunto el C. Magistrado Luis Malpica de Lamadrid, cuya ponencia fue corregida.

Se formuló el presente engrose el día 4 de agosto de 2000 y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 22, fracción III, y 37, fracción III, de la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación, firma el Magistrado Luis Malpica de Lamadrid, Presidente de la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Fiscal de la Federación, ante la Licenciada María del Carmen Cano Palomera, Secretaria Adjunta de Acuerdos, quien da fe.

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

V-P-1aS-50

IMPUGNACIÓN DEL ACTO RECURRIDO EN JUICIO DE NULIDAD A TRAVÉS DE LA RESOLUCIÓN RECAÍDA AL RECURSO.- NO ES DABLE LEGALMENTE INVOCAR SU EXTEMPORANEIDAD COMO CAUSAL DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO RESPECTIVO.- Si bien es cierto que el artículo 207 del Código Fiscal de la Federación establece que la demanda de nulidad debe interponerse ante este Tribunal dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a aquél en que haya surtido efectos la notificación de la resolución impugnada, no menos cierto es que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 197 del propio Ordenamiento, en los casos en que se combata una resolución recaída a un recurso administrativo que no satisfaga el interés jurídico del demandante, se entenderá que simultáneamente impugna la resolución recurrida en la parte que continúe afectándolo, pudiendo hacer valer conceptos de impugnación no planteados en el recurso, aunado a que, de conformidad con el numeral 237 del mismo Código Federal, si se cuenta con suficientes elementos, este Órgano jurisdiccional puede pronunciarse sobre la legalidad de la resolución recurrida en la parte que no satisfizo el interés jurídico del demandante. Por tanto, si se combate diversa resolución recaída a un recurso administrativo interpuesto por la accionante y aquella resolución lo declara infundado, de acuerdo a los preceptos legales citados, se entiende que también está impugnando simultáneamente la resolución recurrida en su oportunidad, motivo por el que no se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 202, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, ya que la resolución combatida en juicio es la recaída al recurso primario, cuya impugnación debe hacerse dentro del término legal de 45 días, aclarándose que por su conducto se controvierte la resolución recurrida en su oportunidad, razón por la que este Tribunal puede válidamente pronunciarse sobre ésta, por lo que no es dable legalmente decretar el sobreseimiento del juicio, invocándose extemporaneidad en la interposición de la demanda, cuando se tiene por resolución combatida un acto que, por disposición legal, puede ser controvertido por conducto de otro cuya impugnación se promovió en tiempo, tal y como acontece en el supuesto que se describe. (12)

Juicio No.12001/98-11-01-1/99-S1-01-03.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Fiscal de la Federación, en sesión de 23 de noviembre de 2000, por unanimidad de cuatro votos.- Magistrado Ponente: Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez.- Secretario: Lic. César Octavio Irigoyen Urdapilleta.
(Tesis aprobada en sesión privada de 12 de junio de 2001)

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

V-P-1aS-51

REVOCACIÓN DE LA RESOLUCIÓN ANTICIPADA.- NO ES NECESARIO INTERPONER JUICIO DE NULIDAD EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 36 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.- Si la parte actora esgrime que se viola en su perjuicio el artículo 36 del Código Fiscal de la Federación, al revocarse en forma unilateral la resolución anticipada que había determinado que las mercancías que había importado cumplían con las reglas de origen del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y que era aplicable diverso criterio preferencial, tal concepto de anulación resulta infundado, porque de conformidad con el texto de los artículos 509 (10) y (12) del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, se faculta expresamente a la autoridad aduanera para revocar la resolución anticipada que se hubiera emitido, sin necesidad de interponer juicio alguno ante este Tribunal en los términos del artículo 36 del Código Fiscal de la Federación, mismo que si bien es aplicable supletoriamente a procedimientos de índole fiscal cuando el ordenamiento especial es omiso al respecto, es claro que en el supuesto que nos ocupa sí existe regulación específica sobre la revocación de las resoluciones anticipadas, de acuerdo a lo previsto en el propio Tratado de Libre Comercio de América del Norte y sus Reglas de carácter general relativas a la aplicación de las disposiciones en materia aduanera del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre de 1995. Lo anterior provoca la inaplicabilidad del Código Fiscal de la Federación en el supuesto en comento, ya que dicho instrumento legal, en su artículo 1º, expresamente señala que sus disposiciones son aplicables en defecto de las leyes

fiscales respectivas y sin perjuicio de lo dispuesto por los tratados internacionales de que México sea parte, motivo por el que, si un tratado internacional, como lo es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, establece la regulación expresa sobre las causales de modificación o revocación de las resoluciones anticipadas, resulta evidente que no existe obligación de acatar en sus términos al artículo 36 del Código Fiscal de la Federación, ya que de la revisión de los numerales mencionados, puede concluirse que se faculta a la autoridad aduanera, en los casos que al efecto se señalan, para que ella misma modifique o revoque la resolución anticipada, sin necesidad de que un órgano jurisdiccional tenga que anular el acto en cuestión, como lo sería en un juicio de lesividad, al tenor del artículo 36 del Código Fiscal de la Federación. (13)

Juicio No.12001/98-11-01-1/99-S1-01-03.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Fiscal de la Federación, en sesión de 23 de noviembre de 2000, por unanimidad de cuatro votos.- Magistrado Ponente: Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez.- Secretario: Lic. César Octavio Irigoyen Urdapilleta.
(Tesis aprobada en sesión privada de 12 de junio de 2001)

TRATADOS DE LIBRE COMERCIO

V-P-1aS-52

TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE.- ALCANCE DE LA DEFINICIÓN DE "MATERIAL".- Si bien es cierto que el artículo 415 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, define el término "material" como "(...) un bien utilizado en la producción de otro bien, e incluye partes e ingredientes; (...)", no menos cierto es que dicha definición debe entenderse en el sentido de que los materiales son los insumos utilizados para fabricar un bien incluyéndose sus partes, por un lado, y sus ingredientes, por otro lado, ya que no puede entenderse que la definición en cuestión designe como sinónimos los términos "parte" e "ingrediente", en virtud de que los materiales de un bien no pueden presentarse siempre como partes e ingredientes del bien a fabricar, antes al contrario, pueden presentarse, ya sea como parte o como ingrediente del mismo. (14)

Juicio No.12001/98-11-01-1/99-S1-01-03.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Fiscal de la Federación, en sesión de 23 de noviembre de 2000, por unanimidad de cuatro votos.- Magistrado Ponente: Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez.- Secretario: Lic. César Octavio Irigoyen Urdapilleta.
(Tesis aprobada en sesión privada de 12 de junio de 2001)

TRATADOS DE LIBRE COMERCIO

V-P-1aS-53

TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE.- ALCANCE DE SU ARTÍCULO 506 (11).- De la lectura del artículo 506 (11) del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, se llega a la conclusión de que la hipótesis a que se refiere, consiste en que la resolución que determina que un bien no califica como originario, no surtirá sus efectos sino hasta que la autoridad que la emitió notifique por escrito, tanto al importador del bien como a quien haya llenado y firmado el certificado de origen que ampara su importación, siempre y cuando, dicha resolución, que niega la calidad de originario a un bien, se encuentre motivada por las diferencias en la clasificación arancelaria o de valor aplicadas por la propia autoridad, a uno o más materiales utilizados en la producción del bien correspondiente, respecto de la clasificación arancelaria o con el valor aplicado a los materiales por la autoridad del Estado Parte, de cuyo territorio se ha exportado el bien; esto es, el numeral de cuenta establece la posibilidad de que surjan diferencias entre las clasificaciones arancelarias o determinaciones de valor aplicadas por las autoridades de los Estados Parte del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, supuesto en donde, la autoridad que calificó como no originario un bien, en virtud de las discrepancias apuntadas, deberá notificar la resolución correspondiente al importador a su territorio, del bien y a quien haya llenado o firmado el certificado de origen relativo. Así las cosas, si la razón por la que se niega la calidad de originario a un bien por motivos diversos a las apuntadas en el precepto en comento, éste no será aplicable al caso concreto, ya que el numeral 506 (11) del Tratado de Libre Comercio de América del

Norte condiciona para su invocación, la existencia de un conflicto de clasificación arancelaria o de valor. (15)

Juicio No.12001/98-11-01-1/99-S1-01-03.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Fiscal de la Federación, en sesión de 23 de noviembre de 2000, por unanimidad de cuatro votos.- Magistrado Ponente: Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez.- Secretario: Lic. César Octavio Irigoyen Urdapilleta.
(Tesis aprobada en sesión privada de 12 de junio de 2001)

C O N S I D E R A N D O :

(...)

TERCERO.- (...)

A juicio de esta sentenciadora, la causal de improcedencia y sobreseimiento que invoca la autoridad contestante es infundada y, por ende, insuficiente para decretar el sobreseimiento de la especie, en virtud de que si bien el artículo 207 del Código Fiscal de la Federación establece que la demanda de nulidad debe interponerse ante este Tribunal dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a aquél en que haya surtido efectos la notificación de la resolución impugnada, no menos cierto es que de acuerdo a lo establecido en el artículo 197 del propio Código Fiscal de la Federación, en los casos en que se combata una resolución recaída a un recurso administrativo que no satisfaga el interés jurídico del demandante, se entenderá que simultáneamente impugna la resolución recurrida en la parte que continúe afectándolo, pudiendo hacer valer conceptos de impugnación no planteados en el recurso, aunado a que, de conformidad con el numeral 237 del mismo Ordenamiento legal, si se cuenta con suficientes elementos, el Tribunal puede pronunciarse sobre la legalidad de la resolución recurrida en la parte que no satisfizo el interés jurídico del demandante.

Por tanto, si en la especie la actora combate la resolución contenida en el oficio 325-SAT-2148 de 6 de julio de 1998, emitida por la Administración General

Jurídica de Ingresos adscrita al Servicio de Administración Tributaria, en el que se resolvió el recurso de revocación primario interpuesto por la accionante declarándolo infundado, de acuerdo a los preceptos legales citados, se entiende que también está impugnando simultáneamente las resoluciones recurridas en su oportunidad, a saber, las contenidas en los oficios 337-SAT-1-784 de 26 de enero de 1998 emitida por la Dirección General Adjunta de Auditoría Internacional de la Dirección General de Asuntos Fiscales Internacionales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y 337-SAT-381 de 16 de febrero de 1998 emitida por la Dirección General de Asuntos Fiscales Internacionales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, motivo por el que resulta evidente que no se surte la causal de improcedencia invocada, ya que la resolución combatida en principio en el presente juicio, es la recaída al recurso primario, cuya impugnación debe hacerse dentro del término legal de 45 días antes mencionado, aclarándose que por su conducto se controvierten las resoluciones recurridas en su oportunidad, razón por la que esta juzgadora puede legalmente pronunciarse sobre las resoluciones citadas, aclarando que únicamente puede exigirse la interposición de la demanda dentro del término legal respecto de la resolución recaída al recurso, por cuyo conducto se combaten las recurridas, sin que en la especie exista mayor controversia sobre la oportunidad de su presentación.

Cabe mencionar en este punto, que la propia actora, en su libelo inicial de nulidad invoca como aplicable, en la especie, el artículo 197 del Código Fiscal de la Federación, último párrafo, para justificar la invocación como resoluciones impugnadas, en la especie, a los tres actos de autoridad que nos ocupan. En los términos expuestos se pronuncia la demandante, en la parte conducente en su escrito de nulidad:

> “A efecto de dar cumplimiento a los requisitos de procedibilidad que establecen los artículos 208 y 209 del Código Fiscal de la Federación, manifiesto:
>
> “I.- Nombre de la demandante: TDK Electronics Corporation.
>
> “II.- Domicilio fiscal: (...)

"III.- Domicilio para recibir notificaciones: (...)

"IV.- Resoluciones recurridas:

"a.- La contenida en el oficio N° 325-SAT-2148 de fecha 6 de julio de 1998 emitida por la Administración General Jurídica de Ingresos, dependiente del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

"En los términos del artículo 197 último párrafo del Código Fiscal de la Federación:

"b.- La resolución contenida en el oficio N° 337-SAT-1-784 del 26 de enero de 1998, emitido por la Dirección General Adjunta de Auditoría Internacional de la Dirección General de Asuntos Fiscales Internacionales, a través de la cual se emite una resolución definitiva en materia de verificación de reglas de origen.

"c.- La resolución contenida en el oficio N° 337-SAT-381 de 16 de febrero de 1998 emitido por la Dirección General de Asuntos Fiscales Internacionales, mediante la cual se revoca la resolución anticipada a favor de TDK Electronics Corporation contenida en el oficio 341-II-11198 del 28 de agosto de 1995."

(el énfasis es nuestro)

Así las cosas, para esta sentenciadora no es dable legalmente decretar el sobreseimiento de la especie invocándose extemporaneidad en la interposición de la demanda, cuando en realidad se tiene por resolución combatida un acto que por disposición legal puede ser controvertida por conducto de otro, cuya impugnación se promovió en tiempo.

(...)

SEXTO.- (...)

De las transcripciones anteriores se desprende que la actora hace valer como agravio que en su opinión le causan las resoluciones impugnadas, que la autoridad demandada viola en su perjuicio el artículo 506 (11) del TLCAN, ya que la autoridad demandada omitió notificar las resoluciones contenidas en los oficios 337-SAT-1-784 de 26 de enero de 1998 y 337-SAT-381 de 16 de febrero de 1998, a los importadores de los audiocasetes producidos y exportados a México por la actora, transmitiendo la obligación de notificarlas al actor, lo que resulta ilegal, ya que es a la autoridad a quien le corresponde la carga de notificar las resoluciones de autoridad, ya que resulta contrario a Derecho que la demandada pretenda fundar su negativa de notificar la resolución en comento a los importadores, señalando que se actualiza el supuesto precisado por los artículos 506 (9) y 504 (1) (b) del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y 34 de las Reglas de Carácter General Relativas a la Aplicación de las Disposiciones en Materia Aduanera del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, publicadas en el Diario Oficial de la Federación de 15 de septiembre de 1995.

Para la autoridad contestante el argumento en estudio resulta infundado atento a que el numeral que invoca, artículo 506 (11) del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, no le resulta aplicable, y por ende, no puede invocarse violación alguna al mismo.

A juicio de esta Sección, el concepto de impugnación en estudio resulta infundado, en atención a que la actora, parte de una indebida interpretación del artículo 506 (11) del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, cuyo texto es el siguiente:

"Artículo 506. Procedimientos para verificar el origen.

(...)

"11. Cada una de las Partes dispondrá que cuando la misma determine que cierto bien importado a su territorio no califica como originario **de acuerdo**

> **con la clasificación arancelaria o con el valor aplicado por la Parte a uno o más materiales utilizados en la producción del bien,** ***y ello difiera de la clasificación arancelaria o del valor aplicados a los materiales por la Parte de cuyo territorio se ha exportado el bien,*** la resolución de esa Parte no surtirá efectos hasta que la notifique por escrito tanto al importador del bien como a la persona que haya llenado y firmado el certificado de origen que lo ampara."
>
> (el énfasis es nuestro)

De la anterior transcripción se desprende que el numeral que nos ocupa, contrariamente a lo expuesto por la actora, sí condiciona la existencia de un conflicto de clasificación arancelaria o de valor para que sea aplicable al caso concreto.

Lo anterior, se desprende de la lectura del numeral supratranscrito, en donde puede verse que la hipótesis a que se refiere, consiste en que la resolución que determina que un bien no califica como originario, no surtirá sus efectos sino hasta que la autoridad que la emitió, notifique por escrito, tanto al importador del bien, como a quien haya llenado y firmado el certificado de origen que ampara su importación, **siempre y cuando, dicha resolución, que niega la calidad de originario a un bien, se encuentre motivada por las diferencias en la clasificación arancelaria o de valor aplicadas por la propia autoridad a uno o más materiales utilizados en la producción del bien correspondiente, respecto de la clasificación arancelaria o con el valor aplicado a los materiales por la autoridad del Estado Parte de cuyo territorio se ha exportado el bien**, esto es, el numeral de cuenta establece la posibilidad de que surjan diferencias entre las clasificaciones arancelarias o determinaciones de valor aplicados por las autoridades de los Estados Parte del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, supuesto en donde, la autoridad que calificó como no originario de un bien, en virtud de las discrepancias apuntadas, deberá notificar la resolución correspondiente al importador a su territorio del bien y a quien haya llenado o firmado el certificado de origen relativo, pero en el caso de que la negativa de calificar como originario se deba, como en la especie, a no cumplir con una regla de origen específica, como lo es la contenida en el artículo

401 (d) (ii) del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, **es claro que el supuesto que invoca la enjuiciante no es aplicable en la especie, y, por ende, no puede argumentarse la violación al precepto relativo, artículo 509 (11) del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, por lo que el concepto de impugnación en estudio es infundado, ya que la actora parte de la interpretación errónea del numeral que invoca.**

(...)

OCTAVO.- (...)

De la revisión de autos, esta Sección llega a la conclusión de que el concepto de impugnación en estudio es infundado, y, por ende, insuficiente para declarar la nulidad de las resoluciones impugnadas en virtud de lo siguiente:

En primer lugar, la actora señala que en su opinión las resoluciones contenidas en los oficios 337-SAT-381 de 16 de febrero de 1998, así como la 325-SAT-2148 de 6 de julio de 1998, son ilegales porque con su emisión la autoridad viola el artículo 36 del Código Fiscal de la Federación, al revocar en forma arbitraria y unilateral que la resolución anticipada que había determinado que las mercancías del actor cumplían con las reglas de origen del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y que era aplicable diverso criterio preferencial. En este sentido, resulta necesario transcribir el contenido del precepto invocado por la actora, que es del tenor siguiente:

> "Art. 36.- Las resoluciones administrativas de carácter individual favorables a un particular sólo podrán ser modificadas por el Tribunal Fiscal de la Federación mediante juicio iniciado por las autoridades fiscales.
>
> "Cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público modifique las resoluciones administrativas de carácter general, estas modificaciones no comprenderán los efectos producidos con anterioridad a la nueva resolución.
>
> "(...)"

Para la enjuiciante, el precepto anterior no fue acatado por la demandada, pues en su opinión debió interponerse juicio de lesividad ante este Tribunal Fiscal de la Federación para revocar la resolución anticipada de que gozaba. En cambio, la autoridad argumenta que el artículo 509 (10) y (12) del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y la regla 87 de las Reglas de Carácter General Relativas a la Aplicación de las Disposiciones en Materia Aduanera del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre de 1995, le facultan para revocar una resolución anticipada sin agotar el procedimiento relativo al artículo 36 del Código Fiscal de la Federación.

El texto de los artículos 509(10) y (12) artículo 509 (12) del Tratado de Libre Comercio de América del Norte es el siguiente:

"509. Resoluciones Anticipadas.

"(...)

"10. Cada una de las Partes dispondrá que cuando su autoridad aduanera determine que no se ha cumplido con cualquiera de los requisitos establecidos en el párrafo 9, **la autoridad pueda modificar o revocar la resolución anticipada, según lo ameriten las circunstancias.**

"(...)

"12. Cada una de las Partes dispondrá que, cuando expida una resolución anticipada a una persona que haya manifestado falsamente u omitido hechos o circunstancias sustanciales en que se funde la resolución, o no haya actuado de conformidad con los términos y condiciones de la misma, la Parte pueda aplicar las medidas que ameriten las circunstancias."

(el énfasis es nuestro)

Cabe señalar que el párrafo 9 del artículo 509 en comento, establece que las autoridades aduaneras cuando se haya expedido una resolución anticipada deben evaluar si:

- *El exportador o productor cumple con los términos y condiciones de la resolución anticipada;*

- *Las operaciones del exportador o del productor concuerdan con las circunstancias y los hechos que fundamentan esa resolución; y*

- *Los cálculos comprobatorios utilizados en la aplicación del criterio o el método para calcular el valor o asignar el costo son correctos en todos los aspectos sustanciales.*

A su vez, la regla 87 de las Reglas de Carácter General Relativas a la Aplicación de las Disposiciones en Materia Aduanera del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre de 1995, a la letra establece:

"87.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 509(10) del Tratado, cuando la autoridad aduanera determine que no se ha cumplido con cualquiera de los requisitos establecidos en la regla 86 de la presente Resolución, podrá modificar o revocar la resolución anticipada."

La regla 86 a que alude el numeral anterior a la letra establece:

"86.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 509 (9) del Tratado, cuando la autoridad aduanera examine el valor de contenido regional de un bien respecto del cual se haya emitido una resolución anticipada, en los términos del artículo 509 (1) (c), (d) o (f) del Tratado, deberá evaluar lo siguiente:

"I.- Si el exportador o productor cumple con los términos y condiciones de la resolución anticipada;

"II.- Si las operaciones del exportador o del productor concuerdan con las circunstancias y los hechos que fundamentan esa resolución;

> "III.- Si los datos y cálculos comprobatorios utilizados en la aplicación del criterio o el método para calcular el valor o asignar el costo son correctos en todos los aspectos sustanciales."

De lo expuesto, es claro que los numerales supratranscritos facultan expresamente a la autoridad demandada para revocar la resolución anticipada que se hubiera emitido, sin necesidad de interponer juicio alguno ante este Tribunal Fiscal de la Federación en los términos del artículo 36 del Código Fiscal de la Federación, lo que de suyo implica que el concepto de impugnación en estudio es infundado, ya que no existe obligación legal de seguir, en la especie, las disposiciones del citado Código Fiscal de la Federación, mismo que si bien es aplicable supletoriamente a procedimientos de índole fiscal cuando el ordenamiento especial es omiso al respecto, es claro que en el presente asunto sí existe regulación específica sobre la revocación de las resoluciones anticipadas de acuerdo a lo previsto en el propio Tratado de Libre Comercio de América del Norte y sus Reglas de Carácter General Relativas a la Aplicación de las Disposiciones en Materia Aduanera del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre de 1995, lo que provoca la inaplicabilidad del Código Fiscal de la Federación en el supuesto en comento, ya que dicho instrumento legal, en su artículo 1º, expresamente señala que sus disposiciones son aplicables en defecto de las leyes fiscales respectivas y sin perjuicio de lo dispuesto por los tratados internacionales de que México sea parte, motivo por el que si un tratado internacional, como lo es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, establece la regulación expresa sobre las causales de modificación o revocación de las resoluciones anticipadas, resulta evidente que no existe obligación de acatar en sus términos al artículo 36 del Código Fiscal de la Federación, ya que tal numeral establece la obligación de acudir ante este Tribunal Fiscal de la Federación para que mediante una sentencia anule la resolución favorable al particular, pero de los numerales supratranscritos claramente puede leerse que se faculta a la autoridad aduanera, en los casos que al efecto se señalan, para que ella misma modifique o revoque la resolución anticipada, esto es, sin necesidad de que otro órgano de autoridad tenga que anular el acto en cuestión, como lo sería en un juicio de lesividad.

De esta forma se ha expuesto como no existe obligación legal en la especie, de acatar el artículo 36 del Código Fiscal de la Federación, ya que existe regulación expresa sobre la revocación de las resoluciones anticipadas por la propia autoridad aduanera de acuerdo al Tratado de Libre Comercio de América del Norte y sus Reglas de Carácter General Relativas a la Aplicación de las Disposiciones en Materia Aduanera del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre de 1995, sin que sea óbice para concluir lo anterior la afirmación de la actora respecto a que si bien el artículo 509 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en sus párrafos 7, 8 y 10 establecen que puede modificarse o revocarse una resolución anticipada, se omite regular el procedimiento para ello, lo hace aplicable supletoriamente el Código Fiscal de la Federación, pero tal pronunciamiento resulta infundado ya que los propios preceptos que invoca, claramente confieren facultades para que la autoridad aduanera sea quien revoque, en el caso, la resolución anticipada relativa, motivo por el que resulta innecesario agotar un procedimiento como el referido por el artículo 36 del Código Fiscal de la Federación, que implica someter la legalidad de la resolución de autoridad no a la propia autoridad que la emitió, y que podría revocarla, sino ante un Tribunal que mediante sentencia podría, en su caso, declarar su nulidad, pero no revocarla porque no es un acto propio, aclarándose en tal sentido que sólo la revocación de la resolución anticipada corresponde, en los términos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, a la propia autoridad aduanera que la emitió, proceder que se acató, en la especie, de conformidad con lo expuesto en autos, por lo que el argumento de la actora en contrario, resulta infundado.

(...)

NOVENO.- (...)

Por otra parte, la actora se duele en el inciso b) de su concepto de impugnación de que la propia autoridad aduanera reconoce en la resolución impugnada que el Jumbo Roll es un material no originario utilizado para la elaboración de los audiocassettes, lo que ha sido también señalado por la actora con fundamento en el artículo 415 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que define “material” de la siguiente manera:

"Artículo 415. Definiciones.

"Para los efectos de este Capítulo:

"(...)

"**material** significa un bien utilizado en la producción de otro bien, e incluye partes e ingredientes; (...)"

Por tanto, de acuerdo a la definición anterior, para la actora si el Jumbo Roll es un material, es claro que se trata de una parte de los videocassettes exportados, pero a juicio de esta juzgadora, tal argumento es inoperante, porque resulta intrascendente determinar si el "Jumbo Roll" es un material no originario, ya que no existe controversia al respecto entre las contendientes, quienes aceptan que efectivamente no es un material originario al ser adquirido de la planta de la actora con sede en Japón, **sino que un fragmento de la motivación de la demandada para imputar el incumplimiento a la regla de origen en comento, consiste en que el material en cita, "Jumbo Roll", como material no originario, no puede ser considerado como parte de los audiocassetes exportados a nuestro país,** esto es, no es motivo de controversia si el "Jumbo Roll" es originario o no, ya que se admite por las contendientes que no lo es, sino lo que afirma la autoridad es que el citado "Jumbo Roll" no puede ser estimado como parte de los audiocassattes, sino como un material utilizado para ello.

Para explicar lo anterior, es necesario revisar la parte relativa de la resolución impugnada, a saber, la contenida en el oficio 325-SAT-2148, que en su foja 3 es del tenor siguiente:

"En primer término cabe destacar que **según se desprende de la resolución contenida en el oficio 337-SAT-I-784 del 26 de enero de 1998,** que hace prueba plena de conformidad con el artículo 130, tercer párrafo, del Código Fiscal de la Federación, derivado de la visita de verificación que se realizó a **TDK Electronics Corporation, se conoció que importó a los Estados**

Unidos de América, entre otros materiales, cinta magnética no originaria, de anchura superior a 6.5 milímetros, en carretes o embobinados denominados "Jumbo Roll", los cuales adquiere de la compañía TDK Corporation ubicada en Japón, material que es importado bajo la subpartida arancelaria 8523.13.

"De lo anterior, resulta evidente que la Dirección General Adjunta de Auditoría Internacional, en todo momento consideró al **Jumbo Roll como un material utilizado en la producción de los audiocassettes.**

"Más aún, el propio recurrente se contradice al pretender, por un lado, que de conformidad con el artículo 415 del TLCAN, el Jumbo Roll debió ser considerado como material, y, por el otro, tal y como consta en el primer párrafo, de la foja 8, del escrito de interposición del recurso de revocación, que "(...) la autoridad aduanera en la resolución cuya validez se impugna por medio del presente recurso, reconoce expresamente que la cinta magnética exportada a los Estados Unidos Mexicanos fue elaborada precisamente con el material o insumo denominado 'Jumbo Roll.'

"En tales condiciones, es manifiesta la improcedencia de lo argumentado por el promovente, dado de que **la autoridad aduanera reconoció en todo momento que el Jumbo Roll constituía uno de los materiales utilizados en la producción de los audiocassettes materia de verificación.**

"En tal virtud, **no existe controversia alguna respecto de que el Jumbo Roll, sea considerado como un material no originario utilizado para la elaboración de los audiocassettes, ya que no debe perderse de vista que el criterio de origen que contempla el artículo 401 d) (ii) del TLCAN, señala que los materiales no originarios utilizados en la producción del bien deberán ser considerados como partes de dicho bien, en este sentido, el hecho de que el Jumbo Roll, sea considerado como uno de los materiales utilizados en la producción de los audiocassettes, de ninguna**

manera implica que el mismo deba ser considerado como parte de los audiocassettes.”

(el énfasis es nuestro)

De la transcripción anterior, claramente puede verse que la autoridad, en la resolución impugnada, hace la distinción que se apuntó en párrafos anteriores, es decir, que no existe duda en que el “Jumbo Roll” sea un material no originario para fabricar los audiocassettes, sino que dicho material no puede ser considerado como parte de éstos. Cabe mencionar que en la resolución recurrida, en su oportunidad, contenida en el oficio 337-SAT-I-784, en su foja 7 y 8, puede leerse lo siguiente:

“Mas aún, atendiendo a la naturaleza del ‘Jumbo Roll’ se observa que este insumo consiste en un rollo de material plástico recubierto de una capa magnética que la hace apta para grabar sonido, el cual tiene un peso de hasta 80 kilogramos y es sometido a procesos sucesivos de cortado, embobinado o seccionado, es decir, dichos rollos no pueden incorporarse directamente a los casetes como una ‘parte’ de los mismos, debido a que necesariamente deben sufrir un proceso de transformación. Por ello, el hecho de que los ‘Jumbo Roll’ se preparen en casetes u otros acondicionamientos similares para su funcionamiento de las máquinas a las que sean destinadas, no implica que dichos rollos sean una parte de estos acondicionamientos. Inclusive, no debe perderse de vista que, por sus dimensiones de peso y longitud, cada ‘Jumbo Roll’ puede ser el insumo de hasta aproximadamente 6,000 audiocassettes, lo cual hace físicamente imposible que un ‘Jumbo Roll’ sea directamente incorporado a un audiocassette como una de sus partes.

“Por lo tanto, se reitera, **el insumo denominado ‘Jumbo Roll’ clasificado en la subpartida 8523.13 que comprende ‘Cintas magnéticas de anchura superior a 6.5 milímetros’,** no está específicamente contemplado para efectos arancelarios como ‘parte’ de los audiocassettes objeto de verificación, además de que por su naturaleza no corresponde a una ‘parte’ que pue-

da incorporarse directamente a los multicitados audiocassettes, incumpliendo así el requisito de procedibilidad establecido en el criterio 'D'."

(el énfasis es nuestro)

De lo expuesto, se puede concluir que resulta claro que la autoridad demandada se apoya en que el Jumbo Roll es un material no originario que no puede ser estimado como parte del audiocassette exportado a nuestro país, **argumento de la autoridad que no es desvirtuado por la actora,** quien se limita a invocar el artículo 415 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte que define al "**material**" como *un bien utilizado en la producción de otro bien, e incluye partes e ingredientes*, lo que a juicio de esta Sección no es suficiente para desvirtuar la presunción de legalidad de que goza la resolución impugnada, atento a que dicha definición debe entenderse en el sentido de que los materiales son los insumos utilizados para fabricar un bien **incluyéndose sus partes, por un lado, y sus ingredientes, por otro lado,** ya que no puede entenderse que la definición en cuestión designe como sinónimos los términos "parte" e "ingrediente", como lo pretende la actora, en virtud de que los materiales de un bien no pueden presentarse siempre como partes e ingredientes del bien a fabricar, antes al contrario, sino que pueden presentarse, ya sea como parte o como ingrediente del mismo, motivo por el que si la enjuiciante no desvirtúa la afirmación de la enjuiciante relativa a que el "Jumbo Roll" no es una parte de los audiocassettes, tal argumento se tiene por válido en la especie, resultando, por ende, intrascendente determinar si es un material no originario, ya que al respecto no existe controversia.

(...)

En mérito de lo anterior, y con fundamento en los artículos 236, 237 y 239, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, y 20, fracción I, inciso b, de la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación, es de resolverse y se resuelve:

I.- Han resultado infundadas las causales de improcedencia y sobreseimiento de la especie, hechas valer por la autoridad demandada.

II.- La parte actora no acreditó los extremos de su acción; en consecuencia.

III.- Se reconoce la validez de las resoluciones impugnadas, precisadas en el considerando primero de este fallo, en virtud de las consideraciones expuestas en la presente sentencia.

IV.- NOTIFÍQUESE.- Con copia autorizada de esta resolución devuélvanse los presentes autos a la Sala Regional que corresponda, una vez que haya quedado firme o, en su caso, se resuelva en definitiva el presente asunto, y en su oportunidad archívese este expediente.

Así lo resolvió la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Fiscal de la Federación en sesión de 23 de noviembre de 2000, por unanimidad de cuatro votos a favor de los Magistrados ALMA PERALTA DI GREGORIO, MARÍA DEL CONSUELO VILLALOBOS ORTÍZ, JORGE ALBERTO GARCÍA CÁCERES y LUIS HUMBERTO DELGADILLO GUTIÉRREZ. Estuvo ausente el Magistrado LUIS MALPICA DE LAMADRID.

Fue Ponente en el presente asunto el Magistrado LUIS HUMBERTO DELGADILLO GUTIÉRREZ cuya ponencia se aprobó en sus términos.

Se formuló el presente engrose el día 14 de diciembre de 2000, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 22, fracción III, y 37, fracción III, de la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación, firma el Magistrado LUIS MALPICA DE LAMADRID, Presidente de la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Fiscal de la Federación, ante la C. Lic. María del Carmen Cano Palomera, Secretaria Adjunta de Acuerdos, que da fe.

LEY ADUANERA

V-P-1aS-54

CERTIFICADO DE ORIGEN.- NO ACOMPAÑARLO AL PEDIMENTO NO IMPLICA LA PRECLUSIÓN DEL DERECHO DE RENDIR LA PRUEBA.- Si bien es cierto que de conformidad con el artículo 36 de la Ley Aduanera, vigente hasta marzo de 1996, y con el 66 de la Ley de Comercio Exterior, el importador está obligado a acompañar al pedimento de importación el certificado de origen, cuando las mercancías sean idénticas o similares a aquéllas por las que deba pagarse una cuota compensatoria, también lo es, que la falta de presentación no puede tener como consecuencia la preclusión del derecho de rendir la prueba. Por lo tanto, si se exhibe el certificado de origen como prueba en el recurso administrativo o en el juicio, se le debe admitir y valorar, aún cuando no se haya presentado ante la aduana, pues su presentación extemporánea no puede tener como consecuencia privar al particular de su prueba. (16)

Juicio No. 510/98-02-02-9/8/00-S1-03-03.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 13 de febrero de 2001, por mayoría de 3 votos a favor, uno con los puntos resolutivos y uno en contra.- Magistrada Ponente: Alma Peralta Di Gregorio.- Secretaria: Lic. Esmeralda Reyes Durán.
(Tesis aprobada en sesión privada de 7 de agosto de 2001)

C O N S I D E R A N D O :

(...)

CUARTO.- (...)

A este respecto, es importante resaltar que las autoridades demandadas a lo que atendieron fue a si la productora Caterpillar, Inc., había expedido un certificado de origen a nombre de la empresa Pavimentos de la Laguna, S.A. de C.V. ahora actora, habiendo dicho la productora que no había expedido certificado de origen a nombre de esta última empresa y que los únicos certificados válidos eran aquéllos que se expedían firmados por Ana María Nabor; sin embargo, no es requisito de ninguna forma, que el certificado de origen fuera individualizado, ya que la regla apenas transcrita permite, cuando son varios los importadores, que en el campo relativo, se asiente que son diversos los importadores, de modo que basta que respecto de un mismo tipo de mercancía se expida un solo certificado de origen para que toda la producción del mismo tipo de mercancía, sea amparada por ese certificado y, consecuentemente, a toda esa mercancía se le considere originaria. También es importante, indicar que la persona que expide el certificado de origen de que se trata, es precisamente Ana María Nabor.

Además, del propio certificado de origen que se analiza se conoce que "consiste de 7 hojas, incluyendo todos sus anexos"; mismos que también acompañó la actora en este juicio con su correspondiente traducción, de cuyo contenido se advierte la descripción completa de cada uno de los cuatro bienes importados por la hoy actora, coincidiendo con la descripción que de cada bien se indica en los pedimentos de importación referidos. Se explica, en los anexos del certificado de origen se contiene una descripción completa de cada bien, ya que dichos anexos consisten en las facturas que amparan sus compras, en donde se indicó que se trataba de Camiones fuera de carretera (volquete), marca "Caterpillar", Modelo 769-C; y también se precisó el número de serie de cada bien.

A mayor abundamiento, si bien la productora, en este caso Caterpillar, Inc., está manifestando que no expidió un certificado a nombre de la adquirente PAVIMENTOS DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., también es que existe un certificado de origen en donde se señala como importador a "diversos o varios", situación que estaba prevista en la Resolución que Establece Reglas de Carácter General Relativas a la Aplicación de las Disposiciones en Materia Aduanera del Tratado de Libre Co-

mercio de América del Norte, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 1993 y en el Instructivo de llenado del certificado de origen establecido en su Anexo 1, en el cual también se expresó por la propia productora que fueron varios los que realizaron la importación de las mercancías, consistentes éstas, en tractores de rueda, camiones y challenger, y que al ser diversos los que estaban importando tal mercancía, así se estableció en el cuadro número 4, que corresponde al importador. Del mismo contenido del certificado de origen que se analiza se conoce que incluye siete anexos y en los anexos vienen precisamente las facturas y los pedimentos de importación de referencia, en donde aparecen relacionados, en una forma detallada, los que corresponden a los importados por PAVIMENTOS DE LA LAGUNA, S.A. DE C. V.; aclarándose que en el certificado de origen, exclusivamente se señala la clasificación arancelaria, el criterio preferencial, el productor, el costo neto y el país de origen, sin que se describan en forma detallada los "camiones fuera de carretera" que fueron importados, en tal virtud, para poder identificar si efectivamente lo que importó la actora estaba comprendido dentro de este certificado de origen, fue necesario acudir a los anexos del mismo, pues está señalado expresamente en el propio certificado que lo que se anexe lo conforman, y es el caso de que tal certificado tiene siete anexos, y en éstos es en donde aparece detallada ya la maquinaria importada por PAVIMENTOS DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.

En conclusión, en el presente juicio la actora exhibió como prueba de su parte, copia certificada del certificado de origen de 20 de enero de 1994, documento cuya traducción antecede y del cual se desprende que la mercancía importada por la actora proviene de los Estados Unidos de América del Norte y que le corresponde la fracción arancelaria 8704.10.02, entonces logra acreditar que, efectivamente, la mercancía importada al amparo de los pedimentos de importación de referencia, goza de un trato arancelario preferencial derivado del TLC.

No es óbice para tomarse en cuenta en el presente caso, el certificado de origen de 20 de enero de 1994, el que no haya sido aportado a la autoridad cuando fue requerido, por lo siguiente:

Del estudio de las constancias que integran el expediente del juicio que se resuelve, se conoce que cuando a la ahora actora se le requirió que exhibiera el certificado de origen, pretendiendo probar el origen de las mercancías exhibió la documentación que tenía en su poder, principalmente aquella que directamente el productor Caterpillar, Inc., extendió al Eximbank para certificar el contenido no americano en productos Caterpillar, ya que la actora adquirió esta mercancía a través de un crédito, el cual únicamente se le podía otorgar si acreditaba ante la citada institución bancaria que esos bienes eran de origen norteamericano, considerando la autoridad que esa documentación no era suficiente para demostrar el origen de las mercancías al no ser el reglamentario certificado de origen, y por eso es que acudió directamente al productor Caterpillar, Inc., para indagar si había extendido un certificado de origen directamente a nombre de la empresa ahora actora, a lo que contestó que no lo había expedido, como efectivamente fue, puesto que éste fue expedido a varios importadores como lo autorizan las reglas antes invocadas; sin embargo, cuando la hoy actora acude a juicio, tiene ya en su poder el certificado de origen de 20 de enero de 1994 (que no obraba en su poder sino en poder de quien había realizado la importación en nombre de los diversos adquirentes de la mercancía que se lista en el certificado de que se trata, aclarándose que la actora sólo acredita que adquirió cuatro camiones), entonces lo exhibe, demostrando que, efectivamente, la mercancía que importó y que está indicada en los pedimentos de importación, se encuentra comprendida dentro de este certificado de origen. Por tanto, se considera valedero que ante esta Juzgadora la ahora actora demuestre a través del certificado de 20 de enero de 1994 el origen de la mercancía que ya había sido demostrado ante la autoridad a través de otra documentación.

A más de que, si bien es cierto, que de conformidad con los artículos 501 y 502 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y 21 fracciones II y IV de la Resolución que Establece las Reglas de Carácter General Relativas a la Aplicación de las Disposiciones en Materia Aduanera del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 1993, el importador, al momento del despacho aduanero está obligado a tener en su poder el certificado de origen, y a ponerlo a disposición de la autoridad en caso de

ser requerido; también lo es, que de tales disposiciones legales no se puede desprender que su falta de presentación tenga como consecuencia la preclusión del derecho del importador de presentarlo con el carácter de prueba cuando interponga algún medio de defensa, como sería el recurso administrativo de revocación, o el juicio de nulidad.

En tales consideraciones, esta Primera Sección, no sólo tiene la posibilidad sino la obligación de valorar el certificado de origen de 20 de enero de 1994, aun y cuando no hubiese sido presentado ante la autoridad que lo requirió, toda vez que esta Juzgadora se encuentra obligada a establecer el alcance y valor probatorio del certificado de origen exhibido por la actora, a efecto de determinar si las mercancías en cuestión gozan o no de trato arancelario preferencial, independientemente de que dicho documento hubiese sido o no presentado ante la autoridad.

(...)

En mérito de lo expuesto y con fundamento en los artículos 20, fracción I, inciso a), de la Ley Orgánica de este Tribunal, 202 y 203 a contrario sensu, 236, 237, 238, fracción IV y 239, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, es de resolverse y se resuelve:

I.- Es infundada la causal de improcedencia y sobreseimiento del juicio propuesta por las autoridades demandadas; en consecuencia,

II.- No se sobresee el presente juicio.

III.- La parte actora en el presente juicio probó su acción; en consecuencia,

IV.- Se declara la nulidad de la resolución impugnada, misma que ha quedado detallada en el resultando 1º del presente fallo.

V.- NOTIFÍQUESE. Con copia autorizada de esta resolución devuélvanse los autos del juicio de nulidad a la Sala que corresponda, una vez que haya quedado firme o, en su caso, se resuelva en definitiva el presente asunto, y, en su oportunidad, archívese este expediente.

Así lo resolvió la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 13 de febrero de 2001, por mayoría tres votos a favor de los Magistrados Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez, Luis Malpica de Lamadrid, Alma Peralta Di Gregorio; 1 voto con los puntos resolutivos de la Magistrada Ma. del Consuelo Villalobos Ortíz y un voto en contra del Magistrado Jorge Alberto García Cáceres, quien se reserva su derecho para formular voto particular.

Fue ponente en el presente asunto la C. Magistrada Alma Peralta Di Gregorio, cuya ponencia fue aprobada con adiciones.

Se formuló el presente engrose el día 2 de marzo de 2001, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 22, fracción III y 37, fracción III, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Firma la Magistrada Alma Peralta Di Gregorio, Presidenta de la Primera Sección, de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ante la C. Licenciada Ma. del Carmen Cano Palomera, Secretaria Adjunta de Acuerdos quien da fe.

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

V-P-1aS-55

ARTÍCULO 46-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.- SUPUESTO EN EL QUE NO SE VIOLA EN PERJUICIO DEL CONTRIBUYENTE VISITADO.- Si bien, el artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación, vigente en 1997, establece como plazo máximo para la conclusión de la visita domiciliaria un término de 9 meses a partir de la notificación del inicio de la misma, no menos cierto es que el propio precepto claramente señala que tal limitante no será aplicable, entre otros, a los contribuyentes que opten o estén obligados a dictaminar sus estados financieros y, por ende, si de autos consta que la enjuiciante dictamina sus estados financieros, es claro que el referido numeral no le resulta aplicable, razón por la que cualquier violación al artículo en comento, como lo es que la visita domiciliaria excedió el término que dicho precepto establece para su práctica, no le causa perjuicio a la demandante y, por ende, el concepto de anulación en estudio debe ser desestimado por infundado. (17)

Juicio No. 9241/00-11-10-2/75/00-S1-01-04.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 20 de febrero de 2001, por unanimidad de 5 votos.- Magistrado Ponente: Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez.- Secretario: Lic. César Octavio Irigoyen Urdapilleta.
(Tesis aprobada en sesión privada de 26 de junio de 2001)

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

V-P-1aS-56

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, EL ARTÍCULO 64 VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 1994, NO SUPONE LA EXISTENCIA DE DERECHOS ADQUIRIDOS.- El derogado artículo 64 del Código Fiscal de la Federación precisaba la forma para determinar las contribuciones omitidas con motivo de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales, esto es, se

daban los lineamientos y el orden a seguir en las liquidaciones de créditos fiscales. En consecuencia, no puede haber derechos adquiridos respecto al citado precepto legal, ya que éstos sólo operan sobre normas sustantivas y conforme al artículo 6° del Código Fiscal de la Federación, se determinarán las contribuciones conforme a las disposiciones vigentes en el momento de su causación, pero serán aplicables las normas sobre procedimiento que se expidan con posterioridad. Por lo que no es válido lo pretendido por la actora, de que se le aplique el artículo 64 del Código Fiscal de la Federación vigente hasta 1994, ya que, si bien, en la especie, se está liquidando el ejercicio fiscal de 1993, las facultades de comprobación se ejercieron en el año de 1997 y se determinaron los créditos fiscales en 1999 cuando ya se había derogado el multicitado artículo 64 desde el 1° de enero de 1995, que al ser una norma de procedimiento, no puede aplicarse retroactivamente ni generar ningún derecho adquirido. (18)

Juicio 9241/00-11-10-2/75/00-S1-01-04.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 20 de febrero de 2001, por unanimidad de 5 votos.- Magistrado Ponente: Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez.- Secretario: Lic. César Octavio Irigoyen Urdapilleta.
(Tesis aprobada en sesión de 20 de febrero de 2001)

PRECEDENTES:

V-P-1aS-20
Juicio No. 540/99-04-01-8/264/00-S1-03-04.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Fiscal de la Federación, en sesión de 7 de marzo de 2000, por unanimidad de 5 votos.- Magistrada Ponente: Alma Peralta Di Gregorio.- Secretaria: Lic. Rosalva B. Romero Núñez.

V-P-1aS-35
Juicio No. 7326/99-11-08-4/352/00-S1-04-04.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Fiscal de la Federación, en sesión de 23 de noviembre de 2000, por mayoría de 3 votos y 1 parcialmente en contra.- Magistrado Ponente: Jorge Alberto García Cáceres.- Secretario: Lic. César Edgar Sánchez Vázquez.

C O N S I D E R A N D O :

(...)

CUARTO.- (...)

En este orden de ideas, a juicio de esta Sección, el concepto de impugnación en estudio resulta infundado e insuficiente para declarar la nulidad de la resolución impugnada, atento a que, si bien, el artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación, establece como término máximo para la conclusión de la visita domiciliaria un término de 9 meses a partir de la notificación del inicio de la misma, no menos cierto es que el propio precepto claramente señala que tal limitante no será aplicable, entre otros, a los contribuyentes que opten o estén obligados a dictaminar sus estados financieros, y la enjuiciante reconoce en el capítulo de hechos de su demanda, punto 2, tercer párrafo, que *"(...) PROPULSORA IXTAPA SUR, S.A. DE C.V., se encuentra dictaminada para fines fiscales. En los términos de las propias disposiciones fiscales aplicables a la empresa hoy demandante, en tiempo y forma presentó dictamen de estados financieros por el ejercicio comprendido del 1º de enero al 31 de diciembre de 1989."*, confesión que es valorada por esta sentenciadora, en términos del artículo 234 del Código Fiscal de la Federación, motivo por el que si la actora dictamina sus estados financieros, es claro que el artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación, vigente en 1997, no le resulta aplicable, razón por la que cualquier violación al numeral en comento, no le causa perjuicio a la demandante y, por ende, el concepto de anulación en estudio deviene infundado. El texto del artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación, vigente en 1997, en su parte conducente, a la letra dice:

> "Artículo 46-A.- Las autoridades fiscales deberán concluir la visita que se desarrolle en el domicilio fiscal de los contribuyentes o la revisión de la contabilidad de los mismos que se efectúe en las oficinas de las propias autoridades, dentro de un plazo máximo de nueve meses contados a partir de que se le notifique a los contribuyentes el inicio de las facultades de comprobación. Lo antes dispuesto no es aplicable a aquellos contribuyentes que en o los ejerci-

cios sujetos a revisión, estén obligados a presentar pagos provisionales mensuales en el impuesto sobre la renta; los que en esos mismos ejercicios obtengan ingresos del extranjero o efectúen pagos a residentes en el extranjero; así como los integrantes del sistema financiero o los que en los ejercicios mencionados estén obligados a, u opten por hacer, dictaminar sus estados financieros en los términos del artículo 32-A de este Código, por lo que en el caso de visita o revisión a los mismos, las autoridades fiscales podrán continuar con el ejercicio de sus facultades de comprobación sin sujetarse a la limitación antes señalada".

(...)

En mérito de lo anterior, y con fundamento en los artículos 236, 237, 238, fracción III, 239, fracción III, y 239-A del Código Fiscal de la Federación; y 20, fracción I, inciso c), de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, es de resolverse y se resuelve:

I.- La parte actora acreditó los extremos de su acción; en consecuencia

II.- Se declara la nulidad de la resolución impugnada, precisada en el resultando primero de este fallo, para el efecto señalado en el último considerando de la presente sentencia.

III.- NOTIFÍQUESE.- Con copia autorizada de esta resolución devuélvanse los presentes autos a la Sala Regional que corresponda, una vez que haya quedado firme o, en su caso, se resuelva en definitiva el presente asunto, y en su oportunidad archívese este expediente.

Así lo resolvió la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en sesión de 20 de febrero de 2001, por unanimidad de cinco votos a favor de los Magistrados Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez, Luis Malpica de Lamadrid, Maria del Consuelo Villalobos Ortíz, Jorge Alberto García Cáceres y Alma Peralta Di Gregorio.

Fue Ponente en el presente asunto el Magistrado Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez, cuya ponencia se aprobó en sus términos.

Se formuló el presente engrose el día 5 de marzo de 2001, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 22, fracción III, y 37, fracción III, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, firma la Magistrada Alma Peralta Di Gregorio, Presidenta de la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ante la C. Lic. María del Carmen Cano Palomera, Secretaria Adjunta de Acuerdos, que da fe.

SEGUNDA SECCIÓN

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

V-P-2aS-87

ACTUALIZACIÓN DE LAS CONTRIBUCIONES.- SU NATURALEZA JURÍDICA.- El crédito fiscal que deriva de una contribución es una cantidad que se determina en un momento específico, misma que el legislador ha permitido que, por efectos de la inflación, sea adicionada con una cantidad para ajustar en el tiempo la suma determinada originalmente; por tanto, la determinación original, así como su actualización por el transcurso del tiempo, constituyen el crédito fiscal en cuanto a lo principal, y la diferencia existente entre ambas cantidades –la original y la actualizada- sólo se refiere a momentos distintos en el tiempo. Lo anterior es así, ya que en los términos del artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación, las contribuciones se actualizan por el transcurso del tiempo y con motivo de los cambios de precios en el país, de donde es dable concluir que la actualización a que se refiere el artículo mencionado, es la misma contribución ajustada por motivos inflacionarios al tiempo de su pago; consecuentemente, no tiene el carácter de accesorio al crédito principal. (19)

Juicio No. 1643/99-02-01-7/201/00-S2-07-04.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Fiscal de la Federación, en sesión de 30 de octubre de 2000, por unanimidad de 5 votos.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretaria: Lic. María Luisa de Alba Alcántara.
(Tesis aprobada en sesión de 27 de febrero de 2001)

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

V-P-2aS-88

ADMINISTRADOR LOCAL DE AUDITORÍA FISCAL DE TORREÓN, COAHUILA, DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.- ES COMPETENTE PARA ACTUALIZAR LAS CONTRIBUCIONES QUE DETERMINA.- Como dicha autoridad tiene facultades para determinar contribuciones, entonces es competente para realizar su actualización, de conformidad con lo previsto en el artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación, toda vez que la actualización constituye el mismo crédito fiscal en su parte principal. (20)

Juicio No. 1643/99-02-01-7/201/00-S2-07-04.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Fiscal de la Federación, en sesión de 30 de octubre de 2000, por unanimidad de 5 votos.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretaria: Lic. María Luisa de Alba Alcántara.
(Tesis aprobada en sesión de 27 de febrero de 2001)

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

V-P-2aS-89

ADMINISTRADOR LOCAL DE AUDITORÍA FISCAL DE TORREÓN, COAHUILA, DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.- ES COMPETENTE PARA EFECTUAR "REVISIONES DE GABINETE", ASÍ COMO PARA DETERMINAR IMPUESTOS Y ACCESORIOS DE CARÁCTER FEDERAL.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 41, apartado B, fracciones VI, XII y XVI, y apartado F, inciso 15; cuarto y quinto transitorios, del Reglamento del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial

de la Federación de 30 de junio de 1997, cuya reforma fue publicada el 10 de junio de 1998; y en el artículo primero, fracción II, inciso 3, del "Acuerdo por el que se Señala el Nombre, Sede y Circunscripción Territorial de las Unidades Administrativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que se mencionan", publicado en el Diario Oficial de la Federación de 18 de diciembre de 1996, el Administrador Local de Auditoría Fiscal número 15 de Torreón, Coahuila, del Servicio de Administración Tributaria, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es competente dentro de su circunscripción territorial, para requerir a los contribuyentes que exhiban y, en su caso, proporcionen la contabilidad, declaraciones y avisos, datos, otros documentos e informes para proceder a su revisión, en los términos del artículo 42, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, a fin de comprobar el cumplimiento de las disposiciones legales; asimismo, es competente para determinar los impuestos y sus accesorios de carácter federal que resulten a cargo de los contribuyentes. (21)

Juicio No. 1643/99-02-01-7/201/00-S2-07-04.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Fiscal de la Federación, en sesión de 30 de octubre de 2000, por unanimidad de 5 votos.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretaria: Lic. María Luisa de Alba Alcántara.
(Tesis aprobada en sesión de 27 de febrero de 2001)

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

V-P-2aS-90

DOCUMENTOS PRIVADOS ELABORADOS POR UN TERCERO.- SU VALOR PROBATORIO.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia fiscal, si no se objeta un documento privado, el mismo sólo tiene pleno valor probatorio cuando procede de la contraparte, es decir, un documento privado únicamente hace prueba de los hechos mencionados en él, en cuanto sean contrarios a los intereses de su

autor. Por otra parte, los documentos privados procedentes de quienes no son parte en el litigio, deben corroborarse en su autenticidad y contenido mediante otros medios probatorios, pues de lo contrario, el contenido de la documental privada no puede ser admitido como válido, cierto o reconocido, esto es, no reviste fuerza probatoria suficiente. (22)

Juicio No. 1643/99-02-01-7/201/00-S2-07-04.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Fiscal de la Federación, en sesión de 30 de octubre de 2000, por unanimidad de 5 votos.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretaria: Lic. María Luisa de Alba Alcántara.
(Tesis aprobada en sesión de 26 de junio de 2001)

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

V-P-2aS-91

FACTURAS EXPEDIDAS POR UN TERCERO AJENO AL JUICIO.-IMPROCEDENCIA DE SU VALORACIÓN CONTABLE.- Si en el juicio contencioso administrativo la actora ofrece como prueba de su parte una documental privada procedente de quien no es parte en el litigio, sin aportar ningún otro medio probatorio para acreditar su contenido, entonces, no procede que esta Juzgadora realice un análisis contable de la misma, pues este Tribunal no cuenta con los elementos técnicos para llevar a cabo dicho análisis, ya que no es perito en materia contable, siendo que no es dable que este Cuerpo Colegiado de oficio ordene el desahogo de una prueba pericial en materia contable, dado que en todo caso, le correspondía a la demandante ofrecer las pruebas que acreditaran los fundamentos de su pretensión, conforme a lo dispuesto en los artículos 81 y 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en relación con el artículo 68 del Código Fiscal de la Federación. (23)

Juicio No. 1643/99-02-01-7/201/00-S2-07-04.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Fiscal de la Federación, en sesión de 30 de octubre de 2000, por unanimidad de 5 votos.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretaria: Lic. María Luisa de Alba Alcántara.
(Tesis aprobada en sesión de 26 de junio de 2001)

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

V-P-2aS-92

INGRESOS POR CONCEPTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES.- SE DEBEN ACUMULAR DESDE EL MOMENTO EN QUE SE RECIBE EL RESPECTIVO ANTICIPO.- En los términos del artículo 16, fracción I, inciso c), de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente en 1996, los ingresos se obtienen, tratándose de la prestación de servicios, cuando se cobra o es exigible total o parcialmente el precio o la contraprestación pactada, aun cuando provenga de anticipos; por tanto, se deben acumular los ingresos por concepto de prestación de servicios profesionales desde el momento en que se recibe el respectivo anticipo, dado que en ese momento se tiene como obtenido el ingreso. (24)

Juicio No. 1643/99-02-01-7/201/00-S2-07-04.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Fiscal de la Federación, en sesión de 30 de octubre de 2000, por unanimidad de 5 votos.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretaria: Lic. María Luisa de Alba Alcántara.
(Tesis aprobada en sesión de 27 de febrero de 2001)

C O N S I D E R A N D O :

(...)

TERCERO.- (...)

En primer término, es de resaltar que la resolución impugnada es el resultado de la revisión que la autoridad llevó a cabo en los términos del artículo 42, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, comúnmente denominada "revisión de gabinete", como se desprende de la hoja 1 de la resolución impugnada (a fojas 140 de los autos), así como del oficio número 324-SAT-R2-L15-E-3132, de 4 de marzo de 1998, a través del cual se inicia la referida "revisión de gabinete", solicitándole a la hoy actora diversa información y documentación, a fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones fiscales en materia del impuesto sobre la renta y del impuesto al valor agregado, por el ejercicio fiscal comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 1996, mismo que se localiza a fojas 177 y 179 del expediente.

De tal suerte, el agravio de la actora consistente en la incompetencia de la autoridad que "llevó a cabo la revisión", se dilucida por esta Juzgadora analizando el oficio 324-SAT-R2-L15-E-3132, a través del cual la autoridad inició sus facultades de comprobación.

Ahora bien, en el caso concreto, el titular de la Administración Local de Auditoría Fiscal número 15 de Torreón, Coahuila, es la autoridad que emitió tanto el referido oficio número 324-SAT-R2-L15-E-3132, así como la resolución impugnada en el presente juicio, quien fundó su competencia conforme a lo siguiente:

SECRET.ARÍA
DE
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

"DEPENDENCIA***: SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRITUBARIA.***
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE AUDITORÍA
Núm. FISCAL NÚMERO 15 DE TORREÓN
Exp. 324-SAT-R2-L15-E-**3132**
R.F.C. SGA-910628-6M8

"ASUNTO: Se solicita la documentación que se indica.

Torreón, Coah., 04 MAR. 1999
"Torreón, Coah., 04 MAR. 1998

"SERVICIOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN, S.A. DE C.V.
HIDALGO No. 1312 PTE. ALTOS
TORREÓN, COAH.

"Esta Administración Local de Auditoría Fiscal Número 15 de Torreón, del Servicio de Administración Tributaria, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 7°, fracción VII, y Tercero Transitorio, de la Ley del Servicio de Administración Tributaria; 2°, último párrafo; 41, primer y segundo párrafos; Apartado 'B', fracción VI, y último párrafo; Apartado 'F', Número 15 y Cuarto Transitorio, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 30 de junio de 1997; y Artículo Primero, fracción II, inciso 3, del Acuerdo por el que se Señala el Nombre, Sede y Circunscripción Territorial de las Unidades Administrativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 18 de diciembre de 1996; así como en el artículo 33, último párrafo del Código Fiscal de la Federación; y a efecto de ejercer las facultades previstas en los artículos 42 fracción II; y último párrafo; y 48 fracciones I, II y III, del propio Código Fiscal de la Federación, se dirige a esa contribuyente para solicitarle la información que a continuación se señala.

"Esta información y documentación se considera necesaria para el ejercicio de las facultades de comprobación fiscal, que las disposiciones legales anteriormente invocadas le otorgan a esta Autoridad, a fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones fiscales en materia de las siguientes contribuciones federales: IMPUESTO SOBRE LA RENTA E IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

"A t e n t a m e n t e
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

"El Administrador Local de Auditoría
Fiscal de Torreón
"(una firma ilegible)
"C.P. GUSTAVO JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ ESCALES"

(El subrayado es de esta Juzgadora)

SAT

Servicio de
Administración Tributaria
SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO

"DEPENDENCIA***: SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRITUBARIA.***
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE AUDITORÍA
FISCAL NÚMERO 15 DE TORREÓN.
"NUM: 324-SAT-R2-L15-C-2-**5813**
"R.F.C. SGA-910628-6M8
"EXP.: GSM-51000-98

Asunto: SE DETERMINA EL CRÉDITO FISCAL
QUE SE INDICA

TORREÓN, COAH., A 29 ENE. 1999

"SERVICIOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN, S.A. DE C.V.
"HIDALGO No. 1312 PTE. ALTOS
"TORREÓN, COAH. C.P. 27000

"ESTA ADMINISTRACIÓN LOCAL DE AUDITORÍA FISCAL NÚMERO 15 DE TORREÓN CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 7°, FRACCIÓN VII Y XIII, TERCERO TRANSITORIO DE LA LEY DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, 2°, ÚLTIMO PÁRRAFO, 41, PRIMER Y SEGUNDO PÁRRAFOS; APARTADO 'B', FRACCIONES XII Y XVI; Y ÚLTIMO PÁRRAFO; Y APARTADO 'F', NÚMERO 15, DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DEL 30 DE JUNIO DE 1997; REFORMADO POR DECRETO PUBLICADO EN EL PROPIO DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DEL 10 DE JUNIO DE 1998, Y ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO DEL CITADO REGLAMENTO; ARTÍCULO PRIMERO, FRACCIÓN II, INCISO 3, DEL ACUERDO POR EL QUE SE SEÑALA EL NOMBRE, SEDE Y CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DEL 18 DE DICIEMBRE DE 1996; ASÍ COMO EN LOS ARTÍCULOS 33, ÚLTIMO PÁRRAFO; 42, PRIMER PÁRRAFO; FRACCIONES I Y II; 48 FRACCIÓN IX, 51, 63 Y 70 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE; PROCEDE A DETERMINAR EL CRÉDITO FISCAL EN MATERIA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA E IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR EL EJERCICIO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO DE 1996 AL 31 DE DICIEMBRE DE 1996.

"CON OFICIO NÚMERO 324-SAT-R2-L15-E-3132 DE FECHA 04 DE MARZO DE 1998, SE LE REQUIRIÓ PARA QUE DENTRO DEL TÉRMINO DE 15 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL DE SU NOTIFICACIÓN, EXHIBIERA LA DECLARACIÓN DEL EJERCICIO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO DE 1996 AL 31 DE DICIEMBRE DE 1996, ASÍ COMO DIVERSA DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LA MISMA PARA PROCEDER A SU REVISIÓN, DE CUYO ESTUDIO SE CONCLUYE:

"(…)

"A T E N T A M E N T E

"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.
"EL ADMINISTRADOR LOCAL DE AUDITORÍA
FISCAL DE TORREÓN.
"(UNA FIRMA ILEGIBLE)
"C.P. GUSTAVO JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ ESCALES"

(El subrayado es de esta Juzgadora)

En los artículos conducentes que cita la autoridad para fundar su competencia al emitir tanto el oficio 324-SAT-R2-L15-E-3132, así como la resolución impugnada, se establece lo siguiente:

Ley del Servicio de Administración Tributaria
(D.O.F. 15 diciembre 1995)

"Artículo 7.- El Servicio de Administración Tributaria tendrá las atribuciones siguientes:

"(...)

"VII.- Vigilar y asegurar el debido cumplimiento de las disposiciones fiscales y aduaneras y, en su caso, ejercer las facultades de comprobación previstas en dichas disposiciones;

"(...)

"XIII.- Las demás que sean necesarias para llevar a cabo las previstas en esta Ley, su reglamento interior y demás disposiciones jurídicas aplicables."

Artículo Tercero Transitorio (1997).- "Las referencias que se hacen y atribuciones que se otorgan en otras leyes, reglamentos y demás disposiciones a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o a cualquiera de sus unidades administrativas, se entenderán hechas al Servicio de Administración Tributaria cuando se trate de atribuciones vinculadas con la materia objeto de la presente Ley, su Reglamento Interior o cualquier otra disposición jurídica que emane de ellos."

Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria.
(D.O.F. de 30 de junio de 1997, reforma D.O.F. de 10 de junio de 1998)

"Artículo 2°. Para el despacho de los asuntos de su competencia, el Servicio de Administración Tributaria, contará con los siguientes servidores públicos y unidades administrativas:

"(...)

"Las Administraciones Generales estarán integradas por los Administradores Generales, Administradores Centrales, Administradores Especiales, Administradores Regionales, Administradores, Subadministradores, Jefes de Departamento, Coordinadores Operativos, Supervisores, Auditores y Ayudantes de Auditor, Inspectores, Abogados Tributarios, Ejecutores, Notificadores, Verificadores, Comandantes, Agentes de la Policía Fiscal y por los demás servidores públicos que señala este Reglamento, así como por el personal que se requiera para satisfacer las necesidades del servicio.

"(…)"

"Artículo 41.- Las Administraciones Generales de Recaudación, de Auditoría Fiscal Federal y Jurídica de Ingresos contarán con Administraciones Locales, y la Coordinación General de Recursos contará con Coordinaciones Locales de Recursos. Todas ellas tendrán la circunscripción territorial, la sede y el nombre que al efecto se señale mediante acuerdo del Presidente del Servicio de Administración Tributaria. La Administración General de Aduanas tendrá Aduanas ubicadas conforme a este Reglamento y en la circunscripción que al efecto se señale mediante acuerdo del Secretario de Hacienda y Crédito Público.

"Las Administraciones Locales de Recaudación, de Auditoría Fiscal y Jurídicas de Ingresos estarán a cargo de un Administrador, quien será asistido en el

ejercicio de sus facultades por los Subadministradores, Coordinadores Operativos, Supervisores, Inspectores, Auditores, Abogados Tributarios, Ayudantes de Auditor, Verificadores, Ejecutores y Notificadores y por los demás servidores públicos que señale este Reglamento, así como por el personal que se requiera para satisfacer las necesidades del servicio.

"(...)

"B.- Compete a las Administraciones Locales de Auditoría Fiscal a que se refiere el Apartado F de este artículo, ejercer las facultades siguientes:

"(...)

"VI.- Requerir a los contribuyentes, responsables solidarios y de terceros con ellos relacionados, así como solicitar a los contadores públicos autorizados que hayan formulado dictámenes para efectos fiscales, para que exhiban y, en su caso, proporcionen la contabilidad, declaraciones y avisos, los datos, otros documentos e informes, y en el caso de dichos contadores también para que exhiban sus papeles de trabajo; recabar de los servidores públicos y de los fedatarios los informes y datos que tengan con motivo de sus funciones, todo ello para proceder a su revisión a fin de comprobar el cumplimiento de las disposiciones legales en las materias señaladas en las dos fracciones anteriores, pudiendo efectuar los requerimientos a que esta fracción se refiere, a los contribuyentes, responsables solidarios, terceros con ellos relacionados y a los mencionados contadores con domicilio fuera de su circunscripción territorial, cuando tengan relación con los contribuyentes domiciliados en su propia circunscripción territorial, así como autorizar o negar prórrogas para su presentación, tratándose de las revisiones previstas en esta fracción, emitir los oficios de observaciones, el de conclusión de la revisión, y en su caso, el de prórroga del plazo de la revisión;

"(...)

"XII.- Determinar los impuestos y sus accesorios de carácter federal, así como aplicar las cuotas compensatorias y determinar en cantidad líquida el monto correspondiente, que resulten a cargo de los contribuyentes, responsables solidarios y demás obligados, así como determinar los derechos, contribuciones de mejoras, aprovechamientos y sus accesorios que no estén señalados como de la competencia de otra unidad administrativa del Servicio de Administración Tributaria.

"(...)

"XVI.- Imponer las sanciones por infracción a las disposiciones fiscales, en las materias de su competencia, así como las que procedan por la omisión total o parcial en el pago de las aportaciones de seguridad social y en el entero de los descuentos correspondientes;

"(...)

"Las Administraciones Locales de Auditoría Fiscal estarán a cargo de un Administrador, quien será auxiliado en el ejercicio de las facultades conferidas en este Apartado por los Subadministradores '1', '2', '3', '4' y '5', así como por el personal que se requiera para satisfacer las necesidades del servicio.

"(...)

"F.- El número y nombre de las Administraciones Locales de Recaudación, de Auditoría Fiscal, Jurídicas de Ingresos y de las Coordinaciones Locales de Recursos, es el que en seguida se señala, y la sede es la ciudad que corresponda al nombre de cada una, incluso en el caso de las del Distrito Federal que tendrán por sede el propio Distrito Federal.

"(...)

"15. De Torreón."

"Artículo Cuarto Transitorio (1997) y Artículo Quinto Transitorio (1998).- 'De conformidad con el artículo tercero transitorio de la Ley del Servicio de Administración Tributaria continuarán siendo aplicables, en lo conducente, los acuerdos por los que se señala el nombre, sede y circunscripción territorial de las unidades administrativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de diciembre de 1996 y por el que se delegan facultades a los servidores públicos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de marzo de 1989 y modificado mediante los acuerdos publicados en el propio Diario Oficial de la Federación el 15 de marzo de 1993, el 14 de febrero de 1994 y el 24 de octubre de 1994, en tanto no se expida un nuevo acuerdo en los términos de las disposiciones de este Reglamento."

ACUERDO por el que se Señala el Nombre, Sede y Circunscripción Territorial de las Unidades Administrativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que se Mencionan. (D.O.F. de 18 de diciembre de 1996)

"Artículo Primero.- Las Administraciones Generales de Recaudación, Auditoría Fiscal Federal y Jurídica de Ingresos, así como las Administraciones Especiales de Recaudación, Auditoría Fiscal y Jurídica de Ingresos, tendrán su sede en la ciudad de México, Distrito Federal y ejercerán sus facultades en todo el territorio nacional.

"El nombre, la sede y la circunscripción territorial en donde se ejercerán las facultades de las Administraciones Regionales y Locales de Recaudación, Auditoría Fiscal y Jurídica de Ingresos, serán las siguientes:

"(...)

"II.- ADMINISTRACIÓN REGIONAL DEL NORTE-CENTRO. Con sede en Torreón, Coah., y circunscripción territorial en los estados de COAHUILA, CHIHUAHUA, DURANGO y ZACATECAS, la cual cuenta con las siguientes Administraciones Locales:

"(...)

"3. ADMINISTRACIÓN LOCAL DE TORREÓN. Con sede en Torreón, Coah., cuya circunscripción territorial comprende los municipios de Torreón, Matamoros, Viesca, Francisco I. Madero y San Pedro del Estado de Coahuila, y Cuencamé, El Oro, General Simón Bolívar, Gómez Palacio, Hidalgo, Indé, Lerdo, Mapimí, Nazas, Ocampo, San Bernardo, San Juan de Guadalupe, San Luis del Cordero, San Pedro del Gallo, Santa Clara y Tlahualilo del Estado de Durango."

(El subrayado es de esta Juzgadora)

De la transcripción que antecede, se desprende que en el Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria expresamente se establece que la Administración General de Auditoría Fiscal Federal, entre otras, contará con Administraciones Locales, respecto de las cuales se señalan las atribuciones específicas que pueden ejercer conforme al citado Ordenamiento. Asimismo, se contempla el número y nombre de las Administraciones Locales, mencionando en el punto 15, del apartado F, del artículo 41 del Reglamento en cita, a la Administración Local de Auditoría Fiscal de Torreón, Coahuila, cuyo titular fue quien emitió el oficio 324-SAT-R2-L15-E-3132, a través del cual se inició la "revisión de gabinete", y quien también emitió la resolución impugnada, poniéndose de relieve la competencia de dicha autoridad.

Desde luego, el artículo 41 del referido Reglamento atribuye las facultades materiales a las administraciones locales de auditoría fiscal, siendo que por tratarse de dependencias que tienen la misma competencia material, el Ordenamiento aludido les atribuye en género dicho ámbito competencial, dada la naturaleza misma de la

desconcentración, correspondiendo al acuerdo que distribuye en el territorio nacional a las citadas unidades regionales, atribuirles la competencia territorial. La suma de ambos, confiere la certeza sobre la competencia material y territorial que requiere el gobernado y que en el caso que nos ocupa se satisface, según se demuestra de los dispositivos jurídicos invocados en los documentos en cuestión.

Es de resaltar, que de acuerdo a lo establecido en el artículo tercero transitorio de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, las referencias que se hacen y atribuciones que se otorgan en otras leyes, reglamentos y demás disposiciones a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o a cualesquiera de sus unidades administrativas, se entenderán hechas al Servicio de Administración Tributaria cuando se trate de atribuciones vinculadas con la materia objeto de la ley de dicho órgano desconcentrado, su reglamento interior o cualquier otra disposición jurídica que emane de ellos; en esta virtud, en los términos del artículo quinto transitorio del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, es aplicable, en lo conducente, el acuerdo por el que se señala el nombre, sede y circunscripción territorial de las unidades administrativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicado en el Diario Oficial de la Federación de 18 de diciembre de 1996.

En consecuencia, en la especie, se cumple con el principio de legalidad en materia de competencia, al ser el Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, el que atribuye a las administraciones locales de auditoría fiscal, facultades para requerir a los contribuyentes para que exhiban y, en su caso, proporcionen la contabilidad, declaraciones y avisos, datos, otros documentos e informes para proceder a su revisión, a fin de comprobar el cumplimiento de las disposiciones legales; asimismo, les otorga facultades para determinar los impuestos y sus accesorios de carácter federal que resulten a cargo de los contribuyentes, señalando como una de las citadas administraciones a la de Torreón, Coahuila, cuya circunscripción territorial está contemplada en el acuerdo a que se ha hecho referencia en líneas precedentes.

Desde luego, de los artículos transcritos, particularmente de las partes que se han resaltado, se desprende que el Administrador Local de Auditoría Fiscal número 15 de Torreón, Coahuila, del Servicio de Administración Tributaria, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es competente, dentro de su circunscripción territorial, para requerir a los contribuyentes que exhiban y, en su caso, proporcionen la contabilidad, declaraciones y avisos, datos, otros documentos e informes para proceder a su revisión, a fin de comprobar el cumplimiento de las disposiciones legales; asimismo, es competente para determinar los impuestos y sus accesorios de carácter federal que resulten a cargo de los contribuyentes.

En la especie, fue precisamente dicha autoridad quien emitió el oficio número 324-SAT-R2-L15-E-3132, de 4 de marzo de 1998, a fin de comprobar el cumplimiento de las disposiciones fiscales a que está afecta la hoy actora como contribuyente en materia de los impuestos sobre la renta y al valor agregado, además de que en el propio oficio se citan los preceptos que le otorgan competencia al emisor del mismo, para llevar a cabo la "revisión de gabinete" correspondiente; por tanto, resulta que el oficio de referencia fue emitido por autoridad competente, quien al efecto citó los artículos correspondientes que le otorgan tales atribuciones.

Asimismo, también fue el Administrador Local de Auditoría Fiscal número 15 de Torreón, Coahuila, del Servicio de Administración Tributaria, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien emitió la resolución impugnada, en la cual se determinan a cargo del hoy demandante, los impuestos sobre la renta y al valor agregado, así como sus respectivos accesorios que resultaron a su cargo, además de que en la propia resolución se citan los preceptos que le otorgan competencia al emisor de la misma, para determinar los impuestos y accesorios de carácter federal que resultaron a cargo del contribuyente, hoy actor; razón por la cual, la resolución materia del presente juicio fue emitida por autoridad competente, quien al efecto citó los artículos correspondientes que le otorgan tales atribuciones.

Por otra parte, en lo que se refiere a la actualización de las contribuciones en materia del impuesto sobre la renta y del impuesto al valor agregado, si bien es cierto, como afirma la actora, que dicha actualización no tiene el carácter de ser un accesorio respecto de los créditos fiscales a los que se ha hecho referencia; también lo es, que la actualización constituye el crédito mismo, en su parte principal.

Desde luego, el crédito fiscal, en la especie, deriva de dos contribuciones (impuesto sobre la renta e impuesto al valor agregado), y es una cantidad que se determinó en un momento específico, misma que el legislador ha permitido que, por efectos de la inflación, sea adicionada con una cantidad para ajustar en el tiempo la suma determinada originalmente; por tanto, la determinación original, así como su actualización por el transcurso del tiempo, constituyen el crédito fiscal en cuanto a lo principal, y la diferencia existente entre ambas cantidades -la original y la actualizada- sólo se refiere a momentos distintos en el tiempo.

Lo anterior es así, ya que en los términos del artículo 17-A del Código en cita, las contribuciones se actualizan por el transcurso del tiempo y con motivo de los cambios de precios en el país, de donde es dable concluir que la actualización a que se refiere el artículo mencionado, no es más que un ajuste del monto de las contribuciones, y en esta virtud, dado que la competencia del Administrador Local de Auditoría Fiscal número 15 de Torreón, Coahuila, del Servicio de Administración Tributaria, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para determinar el impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado, ha quedado demostrado, entonces, que dicha autoridad es competente, de conformidad con lo previsto en el mencionado artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación, para realizar la actualización que en dicho precepto se contempla, respecto de las contribuciones determinadas, siendo irrelevante que la referida actualización no sea un accesorio de las mismas.

(...)

CUARTO.- (...)

Es de resaltar que el representante de la actora aduce en síntesis, que se transgrede en perjuicio de su representada lo dispuesto en los artículos 1°, primer párrafo, y fracción I, 15, 16, fracción I, incisos a), b) y c), y 17, primer párrafo, fracción I, de la Ley del Impuesto sobre la Renta; 1°, fracción II, y segundo párrafo, 14, 16, 17 y 18 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, ordenamientos vigentes en 1996, así como lo dispuesto en los "Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados", publicados en el "Boletín A-11", emitido por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, toda vez que, a su juicio, la autoridad confunde los conceptos de "ingreso acumulable" y de "ingreso gravable", con el momento en que se considera percibido dicho ingreso, por lo que al sumar ambos conceptos, duplica el ingreso realmente obtenido por la contribuyente, siendo falso que la empresa haya omitido acumular a sus ingresos la cantidad de $7'715,177.77.

Que lo anterior es así, ya que la autoridad consideró indebida y doblemente como ingresos gravables, cantidades recibidas a cuenta o como anticipos de servicios por prestarse, dejando de considerar que esos anticipos se facturaron conforme se fueron efectivamente prestando los servicios y/o se devolvieron, estando debidamente acreditados esos movimientos en su contabilidad.

Que la conclusión a la que llegó la autoridad es errónea, puesto que cada "anticipo" o "cobro anticipado" se facturó al definirse el importe del servicio prestado durante el mes, el cual se incluyó en cada factura o, en su defecto, ese pasivo se devolvió cuando la empresa tuvo excedentes, pero, en ambos casos, esos "cobros anticipados" nunca constituyeron una "contraprestación" ni, por tanto, un ingreso adicional al realmente facturado, por lo que en la contabilidad quedó asentado y; por ende, probado, que las cantidades facturadas, registradas y declaradas constituyen los únicos ingresos gravables del ejercicio.

Ahora bien, en la parte conducente de la resolución impugnada, a fojas 140 a 165 del expediente, se determinó lo que a continuación se transcribe:



SAT

Servicio de
Administración Tributaria
SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO

"DEPENDENCIA***: SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRITUBARIA.***
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE AUDITORÍA
FISCAL NÚMERO 15 DE TORREÓN.
"NUM: 324-SAT-R2-L15-C-2-5813
"R.F.C. SGA-910628-6M8
"EXP.: GSM-51000-98

ASUNTO: SE DETERMINA EL CRÉDITO FISCAL
QUE SE INDICA

TORREÓN, COAH., A 29 ENE. 1999

"**SERVICIOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN, S.A. DE C.V.**
"HIDALGO No. 1312 PTE. ALTOS
TORREÓN, COAH. C.P. 27000

"(…)

"CONSIDERANDO ÚNICO

"EN VIRTUD DE QUE EL CONTRIBUYENTE PRESENTÓ ANTE ESTA ADMINISTRACIÓN EL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DE 1998, CON ESCRITO DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE DE 1998, LOS DOCUMENTOS DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 48, FRACCIÓN VI DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, PERO NO DESVIRTÚAN LAS IRREGULARIDADES CONSIGNADAS EN EL OFICIO DE OBSERVACIONES NÚMERO 324-SAT-R2-L-15-C-2-17162 DE FECHA 26 DE AGOSTO DE 1998 RECIBIDO POR USTEDES EL MISMO DÍA, EN CONSECUENCIA, SE TIENEN POR CONSENTIDOS LOS SIGUIENTES HECHOS:

"I.- IMPUESTO SOBRE LA RENTA

"TÍTULO II.- DE LAS PERSONAS MORALES. CAPÍTULO I.- DE LOS INGRESOS.

"EJERCICIO REVISADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1996.

"I N G R E S O S:

"DE LA REVISIÓN PRACTICADA A LA DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR EL CONTRIBUYENTE REVISADO, CONSISTENTE EN DECLARACIÓN ANUAL NORMAL Y COMPLEMENTARIA, LIBROS CONTABLES DIARIO Y MAYOR, CONSECUTIVO DE FACTURAS POR SERVICIOS Y CONSECUTIVO DE RECIBOS POR COBROS ANTICIPADOS, SE DETERMINARON INGRESOS DEL EJERCICIO EN CANTIDAD DE $13'934,945.80, DE LOS CUALES EL CONTRIBUYENTE DECLARA EL IMPORTE DE $6'219,828.63 EN SU DECLARACIÓN ANUAL COMPLEMENTARIA EXISTIENDO UNA DIFERENCIA DE INGRESOS OMITIDOS EN CANTIDAD DE $7'715,117.17 COMO SIGUE:

INGRESOS DEL EJERCICIO	IMPORTE		
	DETERMINADO	DECLARADO	DIFERENCIA
SEGÚN FACTURAS POR SERVICIOS	$6'016,296.63	$6'016,296.66	$ 0.00
SEGÚN RECIBOS POR COBROS ANTICIPADOS	7'715,117.17	0.00	7'715,117.17
GANANCIA INFLACIONARIA DECLARADA	146,596.00	146,596.00	0.00
OTROS INGRESOS DECLARADOS	56,936.00	56,936.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS PARA EL I.S.R.	$13'934,945.80	$6'219,828.63	$7'715,117.17

"EL IMPORTE DE INGRESOS DETERMINADOS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR UN IMPORTE DE $13'934,945.80, SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA:

"EL ANÁLISIS Y DETERMINACIÓN DEBIDAMENTE CIRCUNSTANCIADO DE LOS INGRESOS SEGÚN CONSECUTIVO DE FACTURAS POR SERVICIO EXPEDIDAS, REGISTRADAS Y DECLARADAS EN EL EJERCICIO, POR LA CANTIDAD DE $6'016,296.63 SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN SU LIBRO MAYOR EN LA CUENTA NÚMERO 4011, EN LOS FOLIOS NÚMERO 3 PARA ENERO, 7 PARA FEBRERO 11, PARA MARZO, 15 PARA ABRIL, 19 PARA MAYO, 23 PARA JUNIO, 27 PARA JULIO, 31 PARA AGOSTO, 35 PARA SEPTIEMBRE, 39 PARA OCTUBRE, 43 PARA NOVIEMBRE Y 47 PARA DICIEMBRE Y CUYO ANÁLISIS SE HACE CONSTAR A CONTINUACIÓN.

"(...)

	IMPORTE $	I.V.A. $	TOTAL $
TOTAL INGRESOS SEGÚN FACTURAS $	6'016,296.63	902,444.48	6'918,741.11

"EL ANÁLISIS Y DETEMINACIÓN DEBIDAMENTE CIRCUNSTANCIADO DE LOS INGRESOS SEGÚN CONSECUTIVO DE RECIBOS POR COBROS ANTICIPADOS EXPEDIDOS EN EL "EJERCICIO, POR LA CANTIDAD DE $7'715,117.17 SE ANALIZA A CONTINUACIÓN:

"(...)

	IMPORTE $	I.V.A. $	TOTAL $
TOTAL INGRESOS SEGÚN CONSECUTIVO RECIBOS DE ANTICIPOS $	7'715,117.17	1'157,268.03	8'872,385.20

"LOS IMPORTES DE $146,596.00 Y $56,936.00 CORRESPONDEN A INGRESOS POR GANANCIA INFLACIONARIA Y OTROS INGRESOS, RESPECTIVAMENTE, AMBOS IMPORTES MANIFESTADOS EN SU DECLARACIÓN ANUAL COMPLEMENTARIA DE FECHA 02 DE MARZO DE 1998.

"MEDIANTE ESCRITO DE ACLARACIONES DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE DE 1998 Y RECIBIDO EN ESTA ADMINISTRACIÓN EL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DE 1998, CON NÚMERO DE REGISTRO 18897 EL C. ENRIQUE GONZÁLEZ VILLAPANDO, EN SU CARÁCTER DE GERENTE FACULTADO CON PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS Y ACTOS DE ADMINISTRACIÓN DEL CONTRIBUYENTE SERVICIOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN, S.A. DE C.V., MANIFIESTA LO SIGUIENTE PARA TRATAR DE DESVIRTUAR LAS IRREGULARIDADES CONSIGNADAS EN EL OFICIO DE OBSERVACIONES NÚMERO 324-SAT-R2-L15-C-2-17162 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 1998." (Se transcribe)

"(...)

"REFERENTE A LO MANIFESTADO EN EL 4°, 5° Y 6º PÁRRAFOS DE LA HOJA No. 2, PRIMER PÁRRAFO DE SU ESCRITO DE ACLARACIONES, SE SEÑALA LO SIGUIENTE: EL IMPORTE DE $7'715,117.17 CORRESPONDIENTE A LA OMISIÓN DE INGRESOS SEGÚN SU CONSECUTIVO DE RECIBOS POR COBROS ANTICIPADOS, LOS CUALES FUERON EXPEDIDOS PERO NO CONSIDERADOS PARA LA ACUMULACIÓN DE LOS INGRESOS, YA QUE EL MENCIONADO RECIBO SE EXPIDE POR SERVICIOS PRESTADOS, SEGÚN CONSTA EN SUS CONTRATOS DE SERVICIOS CON SUS CLIENTES, Y NO A CUENTA DE SERVICIOS COMO PRETENDE MANEJARLO EL CONTRIBUYENTE, YA QUE EN NINGÚN RECIBO POR COBROS ANTICIPADOS SE HACE REFERENCIA DE QUE EL IMPORTE CORRESPONDA A CUENTA DE ALGUNA FACTURA.

"ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE EN LOS CONTRATOS POR SERVICIOS ENTRE EL CONTRIBUYENTE SERVICIOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN, S.A. DE C.V. Y SUS CLIENTES (NEGOCIACIONES MARTIN'S, S. A. DE C. V., AUTOEXPRESS CARA BLANCA, S. A. DE C. V. Y CORPORACIÓN DE ESPECIALIDADES, S. A. DE C. V.), SE SEÑALA QUE "(...) LAS PARTES DE COMÚN ACUERDO ESTABLECEN QUE DE REQUERIRLO 'SEGASA' SOLICITARÁ A EL 'CLIENTE' ANTICIPOS A CUENTA DE SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES EN QUE ÉSTOS SE PRESTEN (...)", POR LO ANTERIOR SE CONSIDERA QUE LOS INGRESOS FUERON PERCIBIDOS, YA QUE AL EXPEDIR EL RECIBO POR COBRO ANTICIPADO, DE ACUERDO A SU CONTRATO, EL SERVICIO YA HABÍA SIDO PRESTADO, NO PROCEDIENDO LA CANCELACIÓN DEL ANTICIPO SI YA EL SERVICIO SE PRESTÓ.

"ASIMISMO, SE DENOTA LA UTILIZACIÓN INDEBIDA QUE REALIZA CON SU CONSECUTIVO DE RECIBOS POR COBROS ANTICIPADOS YA QUE COMO SU NOMBRE LO DICE ES UN 'RECIBO POR COBRO ANTICIPADO' Y EL CONTRIBUYENTE LOS UTILIZA PARA RESPALDAR LOS COBROS O BIEN, PARA APARENTAR REEMBOLSOS DE ALGUNOS IMPORTES RELACIONADOS CON LOS COBROS ANOTANDO SOLAMENTE EN ALGUNO DE LOS RECIBOS POR COBROS ANTICIPADOS LA LEYENDA 'DEVOLUCIÓN', MÁXIME QUE NO SE SEÑALA FECHA DE DEVOLUCIÓN.

"RESPECTO A LO QUE EL CONTRIBUYENTE ARGUMENTA DE QUE LOS RECIBOS POR COBROS ANTICIPADOS Nos. 340, 343, 375, 380, 391, 414, 424, 443, 513, 529, 567, 568, 577, 625, 626, 687, 688 Y 746 SE UTILIZARON COMO NOTAS DE CRÉDITO, ANOTANDO EN EL RECIBO DE ANTICIPOS LA LEYENDA 'DEVOLUCIÓN', RESULTA INCONGRUENTE, YA QUE ESTE CONTRIBUYENTE SÍ CUENTA CON SU CONSECUTIVO DE NOTAS DE CRÉDITO QUE UTILIZA PARA DEVOLUCIONES, REBAJAS, DESCUENTOS O

BONIFICACIONES POR SERVICIOS PRESTADOS, YA QUE DE LA DOCUMENTACIÓN APORTADA POR EL PROPIO CONTRIBUYENTE SE DETECTÓ QUE ÉSTE, EN EL MES DE DICIEMBRE DE 1996 EXPIDE NOTAS DE CRÉDITO CON FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 1996 A PARTIR DE LA No. 15, CONSECUTIVAMENTE Y A EFECTO DE REALIZAR UNA DEVOLUCIÓN, SE EXPEDIRÁN LAS NOTAS DE CRÉDITO QUE COMO SE PUEDE APRECIAR YA VENÍA EXPIDIENDO Y CUYO ANÁLISIS DE ESTAS MENCIONADAS NOTAS DE CRÉDITO SE REALIZÓ EN EL CAPÍTULO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

"REFERENTE A LO ARGUMENTADO EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA HOJA No. 3 Y EN EL PRIMER PÁRRAFO DE LA HOJA No. 4, SE LE ACLARA QUE NO SE ESTÁ GRAVANDO DOS VECES UN MISMO INGRESO, YA QUE UNO SE REFIERE A LOS INGRESOS SEGÚN SU CONSECUTIVO DE FACTURAS POR SERVICIOS Y EL OTRO SE REFIERE A LOS INGRESOS SEGÚN SU CONSECUTIVO DE COBROS ANTICIPADOS Y LOS CUALES SON DIFERENTES, Y NO IGUALES COMO LO PRETENDE HACER CREER EL CONTRIBUYENTE AL SEÑALAR QUE EL RECIBO POR COBRO ANTICIPADO FORMA PARTE DE LA FACTURA POR SERVICIO PRESTADO, YA QUE EN NINGUNO DE LOS RECIBOS POR COBROS ANTICIPADOS SE HACE ALGUNA REFERENCIA DE QUE EL IMPORTE ES A CUENTA DE ALGUNA FACTURA Y VICEVERSA, EN NINGUNA DE LAS FACTURAS POR SERVICIOS SE HACE REFERENCIA A QUÉ NÚMERO DE COBRO ANTICIPADO CORRESPONDE LA FACTURA, ADEMÁS, EN ESTE CASO, EL IMPORTE POR LOS ANTICIPOS COBRADOS DE ALGUNOS MESES, ES MAYOR AL IMPORTE DE LA FACTURA POR SERVICIOS QUE SE EXPIDE.

"(…)

"POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO SE CONCLUYE PROCEDENTE LA OMISIÓN DE INGRESOS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, EN CANTIDAD DE $7'715,117.17, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 1°, c) PRIMER PÁRRAFO Y FRACCIÓN I, 15 Y 16 FRACCIÓN I, INCISOS a), b), c) 17 PRIMER PÁRRAFO FRACCIÓN I DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA VIGENTE EN EL EJERCICIO QUE SE LIQUIDA.

"II.- IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

"RESULTADO DE LA REVISIÓN

"EJERCICIO REVISADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1996.

"VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES.

"DE LA REVISIÓN PRACTICADA A LA DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR EL CONTRIBUYENTE REVISADO, CONSISTENTE EN DECLARACIÓN ANUAL NORMAL Y COMPLEMENTARIA, LIBROS CONTABLES DIARIO Y MAYOR, CONSECUTIVO DE FACTURAS POR SERVICIOS, CONSECUTIVO DE RECIBOS POR COBROS ANTICIPADOS Y NOTAS DE CRÉDITO, SE DETERMINARON ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 15% Y 0% DEL EJERCICIO EN CANTIDAD DE $13'688,399.61, DE LOS CUALES EL CONTRIBUYENTE DECLARA EL IMPORTE DE $6'083,147.00, EXISTIENDO UNA DIFERENCIA DE ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS OMITIDOS EN CANTIDAD DE $7'605,252.61 LOS CUALES SE PROCEDEN A ACUMULAR PARA EFECTOS DE ESTE IMPUESTO, Y SE DETERMINAN COMO SIGUE:

	IMPORTE		
CONCEPTO	DETERMINADO	DECLARADO	DIFERENCIA
FACTURAS POR SERVICIOS AL 15%	$6'016,296.63	$6'016,296.63	$ 0.00
RECIBOS POR COBROS ANTICIPADOS AL 15%	7'715,117.17	109,864.56	7'605,252.61
OTROS INGRESOS DECLARADOS AL 0%	56,936.00	56,936.00	0.00
SUB TOTAL DE VALOR DE ACTOS PARA IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	13'788,349.80	6'183,097.19	7'605,252.61
Menos. BONIFICACIONES POR SERVICIOS DEL EJERCICIO DECLARADAS AL 15%	99,950.19	99,950.19	0.00
TOTAL DE VALOR DE ACTOS PARA IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	$13'688,399.61	$6'083,147.00	7'605,252.61

"EL ANÁLISIS DEBIDAMENTE CIRCUNSTANCIADO DEL VALOR NETO DE ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS PROPIOS DE SU ACTIVIDAD EN CANTIDAD DE $13'88,349.80, POR LOS CONCEPTOS DE FACTURAS POR SERVICIOS AL 15%, RECIBOS POR COBROS ANTICIPADOS AL 15% Y OTROS INGRESOS DECLARADOS AL 0%, SE ENCUENTRAN CONTENIDOS EN EL APARTADO I DEL IMPUESTO SOBRE AL RENTA. INGRESOS, MISMOS QUE EN OBVIEDAD DE REPETICIÓN SE DAN POR REPRODUCIDOS EN TODO SU CONTENIDO Y ALCANCE PARA LOS EFECTOS DE ESTE IMPUESTO.

"LAS BONIFICACIONES POR SERVICIOS GRAVADOS AL 15% SEGÚN SU CONSECUTIVO DE NOTAS DE CRÉDITO DEL EJERCICIO, SE ANALIZAN A CONTINUACIÓN.

Núm. NOTA	FECHA	A FAVOR DE QUIÉN SE EXPIDE	CONCEPTO	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
15	31-Dic-96	AUTO EXPRESS CARA BLANCA, S.A.DE C.V.	BONIFICACIONES DE SERV. ADTVS. DE DICIEMBRE	2,257.30	338.60	2,595.90
16	31-Dic-96	NEGOCIACIONES MARTIN'S, S.A. DE C.V.	BONIFICACIONES DE SERV. ADTVS. DE DICIEMBRE	2,837.75	425.66	3,263.41
17	31-Dic-96	COORPORACIÓN DE ESPECIALIDADES, S.A. DE C.V.	BONIFICACIONES DE SERV. ADTVS. DE DICIEMBRE	1,354.38	203.16	1,557.54
18	31-Dic-96	AUTO EXPRESS CARA BLANCA, S.A.DE C.V.	BONIFICACIONES DE SERV. ADTVS. DE DICIEMBRE	21,228.47	3,184,27	24,412.74
19	31-Dic-96	NEGOCIACIONES MARTIN'S, S.A. DE C.V.	BONIFICACIONES DE SERV. ADTVS. DE DICIEMBRE	24,861.28	3,729.19	28,590.47
20	31-Dic-96	COORPORACIÓN DE ESPECIALIDADES, S.A. DE C.V	BONIFICACIONES DE SERV. ADTVS. DE DICIEMBRE	47,411.01	7,111.65	54,522.66
SUMAS NOTAS DE CRÉDITO DEL EJERCICIO				99,950.19	14,992.53	114,942.72

"EN VIRTUD DE QUE PARA EFECTOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EL CONTRIBUYENTE NO SEÑALA NADA AL RESPECTO EN SU ESCRITO DE ACLARACIONES, POR LO QUE ESTA AUTORIDAD CONCLUYE PROCEDENTE LA DETERMINACIÓN DE LA OMISIÓN DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PROPIOS DE SU GIRO POR UN IMPORTE DE $7'605,252.61, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 1° FRACCIÓN II Y SEGUNDO PÁRRAFO, 14, 16, 17 Y 18 DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO VIGENTE EN EL EJERCICIO QUE SE LIQUIDA.

"EN CONSECUENCIA ESTA DEPENDENCIA PROCEDE A DETERMINAR EL CRÉDITO FISCAL COMO SIGUE:

"I.- IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

"DE LAS PERSONAS MORALES.

"EJERCICIO REVISADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1996.

"DETERMINACIÓN DE LA BASE GRAVABLE.-

CONCEPTO	IMPORTE
"PÉRDIDA FISCAL DECLARADA	$7,016.00
"Menos:	
INGRESOS OMITIDOS SEGÚN APARTADO 1 DEL CONSIDERANDO ÚNICO	$7'715,117.17
"RESULTADO FISCAL DETERMINADO	7'708,101.17
"DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO	
IMPUESTO CORRESPONDIENTE SEGÚN ARTÍCULO 10 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA VIGENTE EN EL EJERCICIO QUE SE LIQUIDA	$2'620,754.40
Menos:	
LO CAUSADO Y PAGADO SEGÚN DECLARACIONES PROVISIONALES	994.00
"DIFERENCIA DE IMPUESTO A CARGO	$2'619,760.40
POR:	
FACTOR DE ACTUALIZACIÓN AL 31 DE ENERO DE 1999. SEGÚN ARTÍCULO 17-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN	1.3160
"DIFERENCIA DE IMPUESTO A CARGO ACTUALIZADA AL 31 DE ENERO DE 1999	$3'447,604.69

"SI EN LOS EJERCICIOS POSTERIORES AL QUE SE LIQUIDA AMORTIZÓ LA PÉRDIDA FISCAL DECLARADA DEBERÁ PRESENTAR LAS DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS A QUE HAYA LUGAR, ENTERANDO EL IMPUESTO QUE EN SU CASO SE HUBIERA OMITIDO, MÁS LOS RECARGOS CORRESPONDIENTES.

"**II.- IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.**

"EJERCICIO REVISADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1996.

MES DEL AÑO DE 1996	VALOR DE ACTOS O ACTIVIDADES OMITIDOS POR LOS QUE SE CAUSA IMPUESTO SEGÚN EL APARTADO // DEL CONSIDERANDO ÚNICO	IMPUESTO OMITIDO CORRESPONDIENTE SEGÚN ART. 1°, 2do. PÁRRAFO DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO VIGENTE EN EL EJERCIDIO QUE SE LIQUIDA.	FACTOR DE ACTUALIZACIÓN AL 31 DE MARZO DEL 1997 SEGÚN EL ART. 17-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN	CONTRIBUCIÓN OMITIDA ACTUALIZADA	DIFERENCIA DE IMPUESTO ACTUALIZADO
Enero	666,086.95	99,913.05	1.2564	125,530.76	25,617.71
Febrero	426,086.95	63,913.04	1.2293	78,568.30	14,655.26
Marzo	507,391.32	76,108.70	1.1953	90,972.73	14,864.03
Abril	947,826.11	142,173.92	1.1739	166,897.96	24,724.04
Mayo	913,043.47	136,956.52	1.1551	158,198.48	21,241.96
Junio	305,217.43	45,782.61	1.1389	52,141.81	6,359.20
Julio	781,791.96	117,268.79	1.1240	131,810.12	14,541.33
Agosto	577,394.48	86,609.17	1.1063	95,815.72	9,206.55
Septiembre	582,208.93	87,331.79	1.0927	95,427.45	8,095.66
Octubre	717,584.93	107,637.74	1.0763	115,850.50	8,212.76
Noviembre	785,472.08	117,820.81	1.0430	122,887.10	5,066.29
Diciembre	395,148.00	59,272.20	1.0168	60,267.97	995.77
SUMAS	**$ 7,605,252.61**	**$ 1,140,788.34**		**$ 1,294,368.90**	**$ 153,580.56**

"CÁLCULO ANUAL:

TOTAL IMPUESTO OMITIDO HISTÓRICO	FACTOR DE ACTUALIZACIÓN AL 31 DE ENERO DE 1999 SEGÚN ART. 17-A DEL C.F.F.	CONTRIBUCIÓN OMITIDA ACTUALIZADA
$ 1,140,788.34	1.3160	$ 1,501,277.46"

(El subrayado es de esta Juzgadora)

De la transcripción que antecede de la resolución impugnada, se desprende lo siguiente:

1. La <u>única</u> documentación que el contribuyente le proporcionó a la autoridad y que fue materia de la revisión, es la siguiente:

a) Declaración anual normal.

b) Declaración anual complementaria.

c) Libros Contables Diario y Mayor.

d) Consecutivo de facturas por servicios.

e) Consecutivo de recibos por cobros anticipados.

f) Notas de crédito.

2. En la resolución impugnada se determinó que los ingresos del ejercicio de 1996, para efectos del impuesto sobre la renta, ascienden a la cantidad de $13'934,945.80, de los cuales afirma la autoridad, que el contribuyente sólo declaró el importe de $6'219,828.63 en su declaración anual complementaria, concluyendo que existe una diferencia de ingresos omitidos en cantidad de $7'715,117.17.

Asimismo, en la resolución impugnada se determina para efectos del impuesto al valor agregado y por el mismo ejercicio de 1996, que los actos o actividades gravados a la tasa del 15% y 0% ascienden a la cantidad de $13'688,399.61, de los cuales el contribuyente sólo declaró el importe de $6'083,147.00, concluyendo que existe una diferencia de actos o actividades gravados omitidos en cantidad de $7'605,252.61.

3. En relación con el escrito de aclaraciones de 23 de septiembre de 1998, presentado por el representante de la hoy actora para desvirtuar las irregularidades consignadas en el oficio de observaciones número 324-SAT-R2-L15-C-2-17162, de 28 de agosto de 1998, la autoridad señala en la resolución impugnada, que respecto del importe de $7'715,117.17, correspondiente a la omisión de ingresos según el consecutivo de recibos por cobros anticipados, los cuales fueron expedidos pero no considerados para la acumulación de los ingresos, que los mencionados recibos se expiden por servicios prestados, según consta en sus contratos de servicios con sus clientes, y no a cuenta de servicios como pretende el contribuyente, ya que en ningún recibo por cobros anticipados se hace referencia a que el importe corresponda a cuenta de alguna factura.

4. Asimismo se señala en la resolución impugnada, que en los contratos por servicios celebrados entre el contribuyente Servicios Generales de Administración, S.A. de C.V. ("SEGASA") y sus clientes: Negociaciones Martin's, S. A. de C. V., Auto Express Cara Blanca, S. A. de C. V. y Corporación de Especialidades, S. A. de C. V., las partes de común acuerdo establecieron que de requerirlo "SEGASA" (hoy actora), podría solicitar al cliente anticipos a cuenta de servicios prestados durante el mes, por lo cual concluye la autoridad, que se considera que los ingresos fueron percibidos, ya que al expedir el recibo por cobro anticipado, de acuerdo a su contrato, el servicio ya había sido prestado, por lo que no procede la cancelación del anticipo si el servicio ya se prestó.

5. La autoridad también expresa en la resolución impugnada, que la hoy actora ha utilizado indebidamente los consecutivos de recibos por cobros anticipados, ya que como su nombre lo dice, es un "recibo por cobro anticipado" y el contribuyente los utiliza para respaldar los cobros o bien para, según su dicho, aparentar reembolsos de algunos importes relacionados con los cobros, anotando solamente en alguno de los recibos la leyenda "devolución", además de que no se señala fecha de devolución.

La autoridad refuerza su dicho, expresando que el contribuyente sí cuenta con su consecutivo de notas de crédito que utiliza para devoluciones, rebajas, descuentos o bonificaciones por servicios prestados, como se desprende de la documentación que aportó.

6. Concluye la autoridad, que no se está gravando dos veces un mismo ingreso, ya que uno se refiere a los ingresos según el consecutivo de facturas por servicios y el otro se refiere a los ingresos según el consecutivo de cobros anticipados, los cuales son diferentes, ya que en ninguno de los recibos por cobros anticipados se hace referencia a que el importe es a cuenta de alguna factura y viceversa, como tampoco en ninguna de las facturas por servicios se hace referencia a qué número de cobro anticipado corresponde la factura, además de que el importe por los anticipos cobrados de algunos meses, es mayor al importe de la factura por servicios que se expide.

7. La autoridad determina con fundamento en los artículos 1°, primer párrafo, y fracción I, 15, 16, fracción I, incisos a), b) y c), y 17, primer párrafo, fracción I, de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 1996, que la hoy actora omitió ingresos para efectos del impuesto sobre la renta, en cantidad de $7’715,117.17.

8. Asimismo con fundamento en los artículos 1°, fracción II, y segundo párrafo, 14, 16, 17 y 18 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado vigente en 1996, determina que para efectos del impuesto al valor agregado, existe una diferencia de actos o actividades gravados omitidos en cantidad de $7’605,252.61.

Ahora bien, en los artículos en que la autoridad funda la determinación de los impuestos que nos ocupan, se establece lo siguiente:

Ley del Impuesto sobre la Renta
vigente en 1996

"Artículo 1°.- Las personas físicas y las morales están obligadas al pago del impuesto sobre la renta en los siguientes casos:

"I. Las residentes en México respecto de todos sus ingresos cualquiera que sea la ubicación de la fuente de riqueza de donde procedan.

"(...)"

"Artículo 15.- Las personas morales residentes en el país acumularán la totalidad de los ingresos en efectivo, en bienes, en servicio, en crédito o de cualquier otro tipo, que obtengan en el ejercicio, inclusive los provenientes de sus establecimientos en el extranjero. La ganancia inflacionaria es el ingreso que obtienen los contribuyentes por la disminución real de sus deudas.

"Para los efectos de este Título, no se consideran ingresos los que obtenga el contribuyente por aumento de capital, por pago de la pérdida por sus accionistas, por primas obtenidas por la colocación de acciones que emita la propia sociedad o por utilizar para valuar sus acciones el método de participación; así como los que obtengan con motivo de la revaluación de activos y de su capital.

"Las personas morales residentes en el extranjero que tengan uno o varios establecimientos permanentes o bases fijas en el país, acumularán la totalidad de los ingresos atribuibles a los mismos. No se considerará ingreso atribuible a un establecimiento permanente o persona moral o de otro establecimiento de ésta.

"No serán acumulables para los contribuyentes de este Título, los ingresos por dividendos o utilidades que perciban de otras personas morales residentes

en México. Sin embargo estos ingresos incrementarán la renta gravable a que se refiere el artículo 14 de esta Ley."

"Artículo 16.- Para los efectos del artículo 15 de esta Ley se considera que los ingresos se obtienen, en aquellos casos no previstos en otros artículos de la misma Ley, en las fechas que se señalan conforme a lo siguiente:

"I. Tratándose de enajenación de bienes o prestación de servicios, cuando se dé cualquiera de los siguientes supuestos, el que ocurra primero:

"a) Se expida el comprobante que ampare el precio o la contraprestación pactada.

"b) Se envíe o entregue materialmente el bien o cuando se preste el servicio.

"c) Se cobre o sea exigible total o parcialmente el precio o la contraprestación pactada, aun cuando provenga de anticipos.

"(...)"

"Artículo 17.- Para los efectos de este Título se consideran ingresos acumulables, además de los señalados en otros artículos de esta Ley, los siguientes:

"I. Los ingresos determinados, inclusive presuntivamente por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en los casos en que proceda conforme a las leyes".

(...)

Ley del Impuesto al Valor Agregado vigente en 1996

"Artículo 1°.- Están obligadas al pago del impuesto al valor agregado establecido en esta Ley, las personas físicas y las morales que, en territorio nacional, realicen los actos o actividades siguientes:

"(...)

"II. Presten servicios independientes.

(...)

"El impuesto se calculará aplicando a los valores que señala esta Ley, la tasa del 15%. El impuesto al valor agregado en ningún caso se considerará que forma parte de dichos valores.

"(...)"

"Artículo 14.- Para los efectos de esta Ley se considera prestación de servicios independientes:

"I. La prestación de obligaciones de hacer que realice una persona a favor de otra, cualquiera que sea el acto que le dé origen y el nombre o clasificación que a dicho acto le den otras leyes.

"II. El transporte de personas o bienes.

"III. El seguro, el afianzamiento y el reafianzamiento.

"IV. El mandato, la comisión, la mediación, la agencia, la representación, la correduría, la consignación y la distribución.

"V. La asistencia técnica y la transferencia de tecnología.

"VI. Toda otra obligación de dar, de no hacer o de permitir, asumida por una persona en beneficio de otra, siempre que no esté considerada por esta Ley como enajenación o uso o goce temporal de bienes.

"No se considera prestación de servicios independientes la que se realiza de manera subordinada mediante el pago de una remuneración, ni los servicios por los que se perciban ingresos que la Ley del Impuesto sobre la Renta asimile a dicha remuneración.

"Se entenderá que la prestación de servicios independientes tiene la característica de personal, cuando se trate de las actividades señaladas en este artículo que no tengan la naturaleza de actividad empresarial."

"Artículo 16.- Para los efectos de esta Ley, se entiende que se presta el servicio en territorio nacional cuando en el mismo se lleva a cabo, total o parcialmente, por un residente en el país.

"En el caso de transporte internacional, se considera que el servicio se presta en territorio nacional independientemente de la residencia del porteador, cuando en el mismo se inicie el viaje, incluso si éste es de ida y vuelta.

"Tratándose de transportación aérea internacional, se considera que únicamente se presta el 25% del servicio en territorio nacional. La transportación aérea a las poblaciones mexicanas en las fronteras del país gozará del mismo tratamiento.

"En el caso de intereses y demás contraprestaciones que paguen residentes en México a los residentes en el extranjero que otorguen crédito a través de tarjetas, se entiende que se presta el servicio en territorio nacional cuando en el mismo se utilice la tarjeta."

"Artículo 17.- En la prestación de servicios se tendrá obligación de pagar el impuesto en el momento en que sean exigibles las contraprestaciones a favor de quien los preste y sobre el monto de cada una de ellas. Entre dichas contraprestaciones quedan incluidos los anticipos que reciba el prestador de servicios. Tratándose de seguros y fianzas, las primas correspondientes darán lugar al pago del impuesto al valor agregado en el mes en que se paguen.

"Tratándose de obras de construcción de inmuebles provenientes de contratos celebrados con la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, se tendrá obligación de pagar el impuesto en el momento en que se paguen las contraprestaciones correspondientes al avance de la obra y cuando se hagan los anticipos.

"Las cantidades entregadas a quien proporcione el servicio incluyendo los depósitos, se entenderán pagos anticipados.

"En el caso de servicios personales independientes, así como en el caso de los servicios de suministro de agua y de recolección de basura proporcionados por el Distrito Federal, Estados, municipios, organismos descentralizados, así como por concesionarios, permisionarios y autorizados para proporcionar dichos servicios, se tendrá obligación de pagar el impuesto en el momento que se paguen las contraprestaciones a favor de quien los preste y sobre el monto de cada una de ellas.

"Tratándose de los intereses moratorios derivados del incumplimiento de obligaciones, excepto cuando provengan de operaciones contratadas con personas físicas que no realicen actividades empresariales, con residentes en el extranjero o con personas morales comprendidas en el Título III de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se tendrá obligación de pagar el impuesto en el momento en que se expida el comprobante por los mismos en el que se traslade el impuesto en forma expresa y por separado o cuando se perciban en efectivo, en bienes o en servicios, lo que ocurra primero."

"Artículo 18.- Para calcular el impuesto tratándose de prestación de servicios se considerará como valor el total de la contraprestación pactada, así como las cantidades que además se carguen o cobren a quien reciba el servicio por otros impuestos, derechos, viáticos, gastos de toda clase, reembolsos, intereses normales o moratorios, penas convencionales y cualquier otro concepto.

"Tratándose de personas morales que presten servicios preponderantemente a sus miembros, socios o asociados, los pagos que éstos efectúen, incluyendo aportaciones al capital para absorber pérdidas, se considerarán como valor para efectos del cálculo del impuesto.

"En el caso de mutuo y otras operaciones de financiamiento, se considerará como valor los intereses y toda contraprestación distinta del principal que reciba el acreedor."

(El subrayado es de esta Juzgadora)

De la transcripción que antecede, particularmente del artículo 16, fracción I, inciso c), de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se desprende que los ingresos se obtienen, tratándose de la prestación de servicios, cuando se cobre o sea exigible total o parcialmente el precio o la contraprestación pactada aun cuando provenga de anticipos, como es el caso a estudio. Por otro lado, del artículo 17, tercer párrafo, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, se advierte que las cantidades entregadas a quien proporcione el servicio incluyendo los depósitos, se entenderán pagos anticipados.

Por otra parte, en los contratos de prestación de servicios profesionales, celebrados entre el contribuyente SERVICIOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN, S.A. DE C.V. ("SEGASA"), y sus clientes: Corporación de Especialidades, S. A. de C. V., Auto Express Cara Blanca, S. A. de C. V., y Negociaciones Martin's, S. A. de C. V., mismos que respectivamente se localizan a fojas 246 a 252, 253 a 259 y 260 a 266, se estipuló lo que a continuación se transcribe:

"(...) CLAÚSULAS

"PRIMERA.- 'SEGASA' se obliga a prestar a 'EL CLIENTE' y este (SIC) se obliga a recibir los servicios profesionales que en forma enunciativa se indican en el inciso C), de la declaración primera de este Contrato, que 'EL CLIENTE' solicite o vaya solicitando a 'SEGASA' de acuerdo con sus necesidades.

"SEGUNDA.- 'EL CLIENTE' cubrira (SIC) a 'SEGASA' el pago de los servicios profesionales que esta (SIC) le preste a 'EL CLIENTE' como contraprestación, la cuota mensual que de comun (SIC) acuerdo convengan ambas partes tomando en consideracion (SIC) el numero (SIC), frecuencia e importancia de los servicios que 'SEGASA' proporcione a 'EL CLIENTE' . El pago de la contraprestacion (SIC) que cubrira (SIC) 'EL CLIENTE' a 'SEGASA' podra (SIC) ser aumentado o disminuido de comun (SIC) acuerdo entre las partes dentro de los diez primeros dias (SIC) de cada mes, para que inicie el pago mensual de la contraprestacion (SIC) a partir del siguiente mes.

"Las partes de comun (SIC) acuerdo establecen que de requerirlo 'SEGASA' solicitara (SIC) a 'EL CLIENTE' anticipos a cuenta de servicios prestados durante el mes en que estos se presten, haciendose (SIC) el ajuste correspondiente a fin de mes (...)".

(El subrayado es de esta Juzgadora)

De las cláusulas que quedaron transcritas, se desprende que las partes pactaron anticipos a cuenta de servicios prestados durante el mes, de donde se advierte que los respectivos recibos amparan las cantidades recibidas por concepto de anticipos, siendo que la autoridad en la resolución impugnada afirma que en ninguno de dichos recibos se hace referencia a que el importe corresponda a cuenta de alguna factura.

Desde luego, la autoridad en la resolución impugnada observa dos diversas partidas, una de ellas referida a los ingresos según el consecutivo de facturas por servicios, y la otra, a los ingresos según el consecutivo de cobros anticipados, señalando que ambas partidas son diferentes, lo cual, afirma, lo advierte del hecho de que en ninguno de los recibos por cobros anticipados se hace referencia a que el importe es a cuenta de alguna factura o viceversa, como tampoco en ninguna de las facturas por servicios se hace referencia a qué número de cobro anticipado corresponde la factura, además de que el importe por los anticipos cobrados de algunos meses, es mayor al importe de la factura por servicios que se expide.

En este orden de ideas, contrariamente a lo afirmado por la actora, en la resolución impugnada no se confunde el concepto de "ingreso acumulable" y el de "ingreso gravable", con el del momento en que se considera percibido dicho ingreso; ello es así, toda vez que en los términos del artículo 16, fracción I, inciso c), de la Ley del Impuesto sobre la Renta, los ingresos se obtienen, tratándose de la prestación de servicios, cuando se cobra o es exigible total o parcialmente el precio o la contraprestación pactada aun cuando provenga de anticipos, como es el caso a estudio; máxime que la autoridad, en la resolución impugnada, afirma que no está gravando dos veces un mismo ingreso, ya que uno se refiere a ingresos según el consecutivo de facturas por servicios y el otro se refiere a los ingresos según el consecutivo de cobros anticipados, los cuales son diferentes.

Al respecto, la actora para acreditar que la autoridad duplicó los ingresos gravables, al sumar indebidamente, según su dicho, el importe de las facturas y el de los recibos de cobros anticipados, ofreció en el presente juicio como prueba de su parte, la documental privada que precisa en el punto 8 del capítulo respectivo de su escrito de demanda, que denomina "análisis contable y fiscal documentado del registro de los anticipos, su facturación y/o devolución de saldos de los mismos por el ejercicio de 1996 de la empresa Servicios Generales de Administración, S. A. de C. V.", la cual obra a fojas de la 209 a la 1124 del expediente.

Dicha documental privada fue elaborada por el Contador Público Sergio Bernal García, y según su dicho, consiste en el "análisis contable y fiscal de las operaciones de anticipos recibidos de clientes, devolución de anticipos y de facturación de los servicios prestados, que la hoy actora realizó con sus diversos clientes, en el ejercicio comprendido del 1º de enero al 31 de diciembre de 1996", la cual está soportada, según el dicho del contador público que la elaboró, por las siguientes documentales:

a) Pólizas de diario.

b) Fichas de depósito correspondientes a los anticipos.

c) Estados de cuenta bancarios.

d) Copias de los cheques con los que supuestamente la empresa hoy actora realiza las devoluciones.

Al respecto, es de resaltar que dichos documentos que sirvieron como base para la elaboración de la documental privada que nos ocupa, no fueron proporcionados por el contribuyente, hoy actor, al llevarse a cabo la revisión de gabinete que dio lugar a la emisión de la resolución impugnada, por lo que la autoridad no tuvo la posibilidad de valorarlas, puesto que como se desprende del propio texto de dicha resolución, la autoridad estudió sólo la documentación que le fue proporcionada, a saber:

a) Declaración anual normal.

b) Declaración anual complementaria.

c) Libros Contables Diario y Mayor.

d) Consecutivo de facturas por servicios.

e) Consecutivo de recibos por cobros anticipados.

f) Notas de crédito.

En este orden de ideas, la pretensión de la actora es que se valore una documental privada elaborada por un tercero que no es parte en el litigio, pero respecto de la cual el hoy actor solicitó su elaboración; pretendiendo asimismo, que esta Juzgadora realice un análisis contable de la misma, siendo de resaltar que de los autos se advierte, que la demandante no aportó ninguna otra prueba en la que sustente su dicho que pudiese ser adminiculada con la documental privada que nos ocupa.

Ahora bien, para estar en posibilidad de valorar la documental privada de referencia, es necesario transcribir lo dispuesto en el artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en los términos del diverso artículo 197 del Código Fiscal de la Federación, en el cual se establece lo siguiente:

> "Artículo 203.- El documento privado forma prueba de los hechos mencionados en él, sólo en cuanto sean contrarios a los intereses de su autor, cuando la ley no disponga otra cosa. El documento proveniente de un tercero sólo prueba en favor de la parte que quiere beneficiarse con él y contra su colitigante, cuando éste no lo objeta. En caso contrario, la verdad de su contenido debe demostrarse por otras pruebas.
>
> "El escrito privado que contenga una declaración de verdad, hace fe de la existencia de la declaración; mas no de lo hechos declarados. Es aplicable al caso lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 202.
>
> "Se considera como autor del documento a aquél por cuya cuenta ha sido formado".

Del artículo transcrito se desprende que las documentales privadas hacen prueba de los hechos mencionados en ellas, sólo en cuanto sean contrarios a los intereses de

su autor, y en todo caso, se advierte que cuando una documental privada es objetada por la contraparte, la verdad de su contenido debe corroborarse mediante otras pruebas que acrediten la autenticidad de aquélla.

En la especie, la autoridad al contestar la demanda y refutar el concepto de impugnación primero hecho valer por la actora, objetó el valor probatorio de la citada documental privada, señalando que los documentos en los que se sustenta la misma, nunca fueron aportados en la revisión de gabinete de que se trata, por lo que no tuvo la oportunidad de analizarlos, siendo que solamente la autoridad resulta competente para valorar los mismos.

De tal suerte, en los términos del artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, la documental privada que nos ocupa, sólo hace prueba de los hechos mencionados en ella, en cuanto sean contrarios a los intereses de su autor, además de que dicha prueba fue objetada por la autoridad, siendo que la actora no ofreció una diversa prueba con la que demostrara la verdad del contenido de aquélla; es decir, no ofreció en juicio ningún otro medio probatorio con el cual pudiera adminicularse dicha documental privada para corroborar su autenticidad, por lo que el contenido de dicha documental privada no puede ser admitido como válido, cierto o reconocido, esto es, no reviste fuerza probatoria suficiente, dado que no puede corroborarse con otro medio probatorio.

Es aplicable, en lo conducente, el criterio sustentado por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que así expresa:

> **“DOCUMENTOS PRIVADOS, VALOR PROBATORIO DE LOS**. Conforme a la Legislación Civil de Aguascalientes, que es igual a la anterior del Distrito Federal, la inobjeción de un documento privado, sólo da a éste pleno valor probatorio, cuando el mismo proceda de la contraparte o, en otros términos, sólo prueba contra su autoridad. Los demás documentos privados, procedentes de quienes no son parte en el litigio, deben corroborarse, en su contenido, mediante otras pruebas, o demostrarse la autenticidad de los mismos,

por otros medios probatorios, por ejemplo, la prueba testimonial, pues no existe obstáculo alguno para admitir pruebas, testimonial, pericial o de inspección, para corroborar o comprobar la autenticidad y contenido de los documentos privados. En tal virtud, si cuando se demanda al fiador, se presentan como pruebas documentos privados otorgados por el fiador, si el fiador objeta esos documentos, pueden corroborarse con las pruebas antes dichas."

TOMO XLI, Pág. 884.- Palacio Elías.- 28 de mayo de 1934.- 5 votos.
Quinta Época.
Instancia: Tercera Sala.
Fuente: Semanario Judicial de la Federación.
Tomo: XLI.
Página: 884.

(El subrayado es de esta Juzgadora)

Por otra parte, como ha quedado señalado, la actora pretende que esta Juzgadora valore una documental privada que contiene elementos contables; ello se advierte del hecho de que la actora pretende que en el presente juicio, sean valorados los documentos que sustentan la prueba documental privada que nos ocupa, a saber: los recibos por cobros anticipados, las pólizas de diario, las fichas de depósito correspondientes a los anticipos, los estados de cuenta bancarios y las copias de los cheques en los que supuestamente la hoy actora realiza las devoluciones, relacionando su contenido en el aspecto contable, a fin de determinar la veracidad de lo asentado en dicha documental privada; sin embargo, este Cuerpo Colegiado, al no ser perito en materia contable, no puede establecer si de acuerdo con la mecánica contable, las cantidades asentadas y registradas en dichos documentos son ciertas y; por tanto, constituyen los únicos ingresos gravables del ejercicio, como pretende la actora.

Desde luego, este Tribunal no cuenta con elementos técnicos para llevar a cabo un análisis contable, puesto que no es perito en esta materia, siendo que en la especie, no es dable que esta Juzgadora, de oficio, ordene el desahogo de una prueba

pericial en materia contable, ya que en todo caso, le correspondía a la demandante ofrecer las pruebas que acreditaran los fundamentos de su pretensión, conforme a lo dispuesto en los artículos 81 y 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en relación con el artículo 68 del Código Fiscal de la Federación; máxime que la demandante no acompañó al presente juicio las facturas que fueron observadas por la autoridad, con base en las cuales determinó que existía omisión de ingresos, por lo que en todo caso, no contaría con todos los elementos que se requerirían para que se desahogara la prueba pericial contable.

Ahora bien, no obstante que dicha prueba documental, así como los documentos en que la misma se sustenta, que han quedado precisados en líneas precedentes y que obran a fojas 210 a 1124 del expediente, no pueden ser valorados contablemente por esta Juzgadora; sin embargo, de la lectura que se realiza de los mismos, particularmente de los recibos por cobros anticipados, se advierte que en dichos recibos no se señaló a qué factura corresponde el importe de cada anticipo, siendo que en virtud de que la actora no ofrece ni exhibe como prueba de su parte en el juicio que nos ocupa, las facturas que fueron observadas por la autoridad, entonces, menos aún es posible cotejar los referidos recibos contra las facturas, y; por tanto, establecer si las cantidades de unos y otras están relacionados entre sí.

En este orden de ideas, con la documental privada de referencia, la actora no logra desvirtuar lo afirmado por la autoridad en la resolución impugnada, en el sentido de que unos son los ingresos que observó según el consecutivo de facturas por servicios, y otros, son los ingresos que observó según el consecutivo de cobros anticipados; ingresos que al decir de la autoridad son diferentes, y que lo mismo se desprende del hecho de que en ninguno de los recibos por cobros anticipados se hace referencia a que el importe es a cuenta de alguna factura y viceversa, como tampoco en ninguna de las facturas por servicios se hace referencia a qué número de cobro anticipado corresponde la factura, además de que el importe por los anticipos cobrados de algunos meses, es mayor al importe de la factura por servicios que se expide.

En otras palabras, en los recibos por cobros anticipados que acompaña la actora al presente juicio, no se asentó que el importe de los mismos sea a cuenta de alguna factura, siendo que la actora no acompaña al juicio ninguna de las facturas que fueron observadas por la autoridad.

En consecuencia, la documental privada a que se ha hecho referencia, carece de eficacia probatoria, toda vez que esta Juzgadora no está en posibilidad de valorar si lo asentado en la misma efectivamente es cierto, y; por tanto, útil para acreditar el hecho a que se refiere la actora y que pretende demostrar con tal prueba.

De tal suerte, la actora no logra demostrar en el presente juicio que los recibos por cobros anticipados forman parte de las facturas por servicios prestados, ya que no logra demostrar con prueba idónea alguna, que exista relación entre dichos recibos y las mencionadas facturas, siendo que en la especie, como ya se expresó, esta Juzgadora no puede valorar conforme a la técnica contable si lo afirmado por la actora resulta cierto, puesto que, se insiste, no cuenta con los elementos técnicos contables para ello.

De lo anterior se desprende, que resultan infundados los agravios hechos valer por la actora, por lo cual se concluye que el contribuyente debió acumular los ingresos por concepto de prestación de servicios profesionales desde el momento en que recibió el respectivo anticipo, dado que en ese momento se tiene como obtenido el ingreso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16, fracción I, inciso c), de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente en 1996.

En este orden de ideas, la actora no acredita que en la especie se le esté gravando dos veces un mismo ingreso, ya que no logra desvirtuar lo asentado por la autoridad en el sentido de que uno se refiere a los ingresos según su consecutivo de facturas por servicios, y el otro se refiere a los ingresos según su consecutivo de cobros anticipados, los cuales son diferentes, conforme a lo afirmado por la autoridad en la resolución impugnada, siendo que la actora en el presente juicio, no desvirtúa lo mismo, a lo cual estaba obligada en los términos de los artículos 81 y 82 del

Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en relación con el diverso artículo 68 del Código Fiscal de la Federación.

QUINTO.- (...)

A juicio de la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Fiscal de la Federación, es INOPERANTE el concepto de anulación que ha quedado transcrito, ya que se advierte que el mismo implica el estudio de la constitucionalidad de los artículos 17-A, 20, segundo párrafo, 20 Bis y 21, primero y último párrafos, del Código Fiscal de la Federación, y; por tanto, dicho concepto de impugnación no puede ser analizado por esta Juzgadora, en virtud de que éste es un Tribunal de legalidad, que sólo puede estudiar la fundamentación y motivación de los actos de autoridad, sin poder pronunciarse sobre la constitucionalidad de los ordenamientos con base en los cuales se emitan dichos actos, dado que lo mismo es atribución exclusiva del Poder Judicial Federal.

En efecto, el concepto de anulación a estudio es inoperante, ya que el representante de la actora argumenta que se transgrede en perjuicio de su representada lo dispuesto en el artículo 38, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, porque se pretende cobrarle actualizaciones de las contribuciones y de los recargos, siendo que los artículos 17-A, 20, segundo párrafo, 20 Bis y 21, primero y ultimo párrafos, del Código Fiscal de la Federación, son inconstitucionales por las siguientes razones:

a) Dan injerencia al Banco de México, quien no es una autoridad fiscal, en el proceso de determinación de las obligaciones fiscales, al ser quien elabora el Índice Nacional de Precios al Consumidor.

b) La actualización no tiene por objeto el cubrir el gasto público, sólo constituye una carga tributaria a costa de la ruina del contribuyente.

c) La actualización no cumple con el principio de proporcionalidad y equidad, pues se establece un factor igual para calcular cualquier actualización, sin tomar en cuenta la capacidad económica del contribuyente; y,

d) Se transgrede el principio de que nadie está obligado a lo imposible, ya que la inflación, que dio lugar a la actualización de los tributos, es un caso fortuito o de fuerza mayor en materia fiscal, por lo que esa situación imprevisible debe liberar al contribuyente de su obligación de pago.

Por último, argumenta la actora, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido diversas tesis en las que sustenta la inconstitucionalidad de las actualizaciones, al estimar que son inconstitucionales los preceptos del Código Fiscal que las regulan, las cuales, afirma la demandante, fueron publicadas en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo V - Pleno, marzo de 1997, páginas 134 y 135, pero que dichas tesis se refieren a cuestiones diversas a las que plantea en el concepto de anulación que nos ocupa, ya que en las mismas se resolvió que el artículo 21 del Código Fiscal de la Federación "(...) NO ESTABLECE DOBLE INDEMNIZACIÓN POR FALTA OPORTUNA DEL PAGO DE LAS CONTRIBUCIONES (...)", así como que los artículos 17-A y 21 del Código Fiscal de la Federación "(...) NO VIOLAN LA GARANTIA DE IRRETROACTIVIDAD (...)", por lo cual no le deben ser aplicadas en el caso a estudio.

De lo anterior se advierte, que lo argumentado por la actora se encamina a acreditar la inconstitucionalidad de los artículos 17-A, 20, segundo párrafo, 20 Bis y 21, primero y último párrafos, del Código Fiscal de la Federación, cuestión que no puede ser estudiada por este Tribunal, por carecer de competencia para resolver sobre constitucionalidad de actos de autoridad, leyes, reglamentos o decretos.

(…)

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 236, 237, 239, fracción I, y 239-A, fracción I, inciso a), del Código Fiscal de la Federación, se resuelve:

I.- La actora no acreditó los fundamentos de su pretensión; en consecuencia,

II.- Se reconoce la validez de la resolución impugnada.

III.- NOTIFÍQUESE.- Con copia autorizada del presente fallo, devuélvanse los autos a la Primera Sala Regional Norte Centro de este Tribunal, una vez que haya quedado firme o, en su caso, se resuelva en definitiva el presente asunto, y, en su oportunidad, archívese este expediente.

Así lo resolvió la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Fiscal de la Federación, en sesión de 30 de octubre de 2000, por unanimidad de 5 votos a favor de los Magistrados: Francisco Valdés Lizárraga, Guillermo Domínguez Belloc, Silvia Eugenia Díaz Vega, Luis Carballo Balvanera y Rubén Aguirre Pangburn.- Fue ponente en el presente asunto la Magistrada Silvia Eugenia Díaz Vega, cuya ponencia se aprobó en sus términos.

Se elaboró el presente engrose el 7 de noviembre de 2000, y con fundamento en lo previsto en los artículos 22, fracción III, y 37, fracción III, de la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación en vigor, firman el Magistrado Rubén Aguirre Pangburn, Presidente de la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Fiscal de la Federación, ante el Licenciado Mario Meléndez Aguilera, Secretario Adjunto de Acuerdos, quien da fe.

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

V-P-2aS-93

CADUCIDAD DE FACULTADES DE LAS AUTORIDADES FISCALES.- SU ESTUDIO CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 237 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 237 del Código Fiscal de la Federación en vigor, deben examinarse en primer lugar los conceptos de anulación que conllevan a la declaratoria de nulidad en forma lisa y llana; por tanto, tomando en cuenta que la caducidad es uno de esos argumentos, cuando ésta sea fundada se hace innecesario el análisis y estudio de los demás conceptos, pues sería inútil calificar la legalidad o ilegalidad de la resolución impugnada, cuando ésta se emitió fuera del plazo establecido en el artículo 67 del Código Fiscal de la Federación, para que la autoridad pueda ejercer sus facultades de liquidación. (25)

Juicio No. 1228/99-04-02-7/180/01-S2-08-04.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 26 de junio de 2001, por unanimidad de 5 votos.- Magistrado Ponente: Francisco Valdés Lizárraga.- Secretario: Lic. Luis Edwin Molinar Rohana.
(Tesis aprobada en sesión de 26 de junio de 2001)

PRECEDENTE:

III-PS-II-15
Juicio No. 100(14)340/93/6812/93.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Fiscal de la Federación, en sesión de 5 de marzo de 1996, por unanimidad de 4 votos a favor.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretaria: Lic. María Concepción Martínez Godínez.

CRÉDITO FISCAL DETERMINADO
S.H.C.P.

V-P-2aS-94

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN.- RESULTAN ILEGALES LOS ACTOS DILIGENCIADOS EN EL MISMO SI LA RESOLUCIÓN LIQUIDATORIA QUE LES ANTECEDE HA SIDO DECLARADA NULA.- Cuando la resolución liquidatoria en la cual se determinan diversos créditos fiscales ha sido declarada nula, mediante sentencia que ha quedado firme, entonces es de concluirse que los actos de autoridad diligenciados a fin de cobrar tales créditos, como lo son entre otros, los requerimientos de pago y diligencias de embargo relativas, como actos conexos de aquella resolución ilegal, al ser consecuencia directa e inmediata de la misma, también devienen en ilegales, por ser violatorios del artículo 16 Constitucional, al no estar debidamente fundados y motivados, por tener su sustento en un acto de autoridad que ha dejado de existir. En consecuencia, los referidos actos diligenciados en el procedimiento administrativo de ejecución deben seguir la misma suerte que el acto del cual devienen, por lo que procede declarar su nulidad. (26)

Juicio No. 13415/99-11-08-1/596/00-S2-06-04.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 26 de junio de 2001, por unanimidad de 5 votos.- Magistrado Ponente: Alejandro Sánchez Hernández.- Secretaria: Lic. Rosana Edith De la Peña Adame.
(Tesis aprobada en sesión privada de 26 de junio de 2001)

C O N S I D E R A N D O :

(...)

TERCERO.- Esta Sección destaca la circunstancia a que se ha hecho referencia en el apartado de resultandos de este fallo, y como se corrobora de autos de la carpeta de atracción del expediente de nulidad en que se actúa, en el sentido de que en el diverso juicio de nulidad 5339/99-11-10-2/105/99-S1-04-04, al que por turno le correspondió conocer a la Primera Sección de esta Sala Superior, se controvirtió la resolución contenida en el oficio número 324-SAT-R8-L64-III-A-b-112743, en la que se determinan los créditos fiscales cuyos requerimientos de pago y diligencias de embargo se controvierten en el juicio de nulidad en que se actúa, números Z-01064283, Z-01064284 y Z-01064285, por las cantidades de $50’353,725.00, $22’229,782.00 y $29’630,749.00, respectivamente, haciendo un total requerido por la cantidad $102’214,256.00.

Ahora bien, es el caso que como también quedó detallado en el apartado de resultandos de este fallo, y como se precisa en la diversa sentencia del 3 de agosto de 2000, de esta Segunda Sección con la que se determinó suspender el presente juicio, tenemos que la Primera Sección emitió sentencia definitiva con la que resolvió el mencionado juicio de nulidad con fecha 15 de febrero de 2000, declarando la nulidad lisa y llana de la resolución determinante de los referidos créditos fiscales, la cual fue recurrida en revisión, correspondiéndole conocer de la misma al Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el R.F. 130/2000, emitiendo ejecutoria con fecha 30 de noviembre de 2000, la cual consta en autos de la carpeta de atracción del presente expediente a fojas 100 a 123, en copia certificada, y en cuyos puntos resolutivos a la letra se indica:

"PRIMERO.- ES PROCEDENTE PERO INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por el ADMINISTRADOR LOCAL JURÍDICO DE INGRESOS DEL SUR DEL DISTRITO FEDERAL.--
"SEGUNDO.- SE CONFIRMA la sentencia recurrida de quince de febrero de dos mil, dictada por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Fiscal de la Federación, en el expediente del juicio de nulidad número 5339/99-11-10-2/105/99-S1-04-04, promovido por TRANSPORTES A.M.P., S.A. DE C.V.- NOTIFÍQUESE; (...)"

En este orden de ideas, es claro que la referida resolución 324-SAT-R8-L64-III-A-b-112743, ha dejado de existir por haber sido declarada nula, lisa y llanamente, esto mediante sentencia del 15 de febrero de 2000, de la Primera Sección de esta Sala Superior, en el juicio de nulidad 5339/99-11-10-2/105/99-S1-04-04, que ha quedado firme.

Por lo tanto, si en la aludida resolución anulada se determinaron los créditos fiscales números Z-01064283, Z-01064284 y Z-01064285, por las cantidades de $50'353,725.00, $22'229,782.00 y $29'630,749.00, respectivamente, haciendo un total requerido por la cantidad $102'214,256.00, cuyos requerimientos de pago y diligencias de embargo, constituyen los actos de autoridad combatidos en el presente juicio de nulidad, según se precisa en el resultando primero de esta sentencia, entonces es contundente que los mismos, como actos conexos a aquélla resolución ilegal, por ser consecuencia directa e inmediata de la misma, también devienen en ilegales.

Lo anterior es así porque en tal virtud, los actos impugnados en nulidad, resultan violatorios del artículo 16 Constitucional, por no estar debidamente fundados y motivados, por encontrar su sustento en un acto de autoridad inexistente, es decir que ya no existen los créditos que con ellos se pretendían hacer efectivos.

Similar criterio fue sustentado por este Tribunal en su jurisprudencia II-J-43, así como en el precedente del Pleno de la Sala Superior IV-P-SS-84, y en las diversas tesis cuyos datos de localización y contenido a continuación se transcriben:

Tesis: **II-J-43**
R.T.F.F. Año II. No. 9. Noviembre - Diciembre 1979. Pág: 35.
Jurisprudencia Segunda Época.
Pleno

"MULTAS FISCALES, DEBE DECLARARSE LA NULIDAD DEL PROVEÍDO EN QUE SE IMPONEN SI PREVIAMENTE SE HA NULIFICADO LA RESOLUCIÓN EN LA QUE SE DETERMINA EL CRÉDITO CUYA OMISIÓN DIO LUGAR A LA SANCIÓN.- Cuando se demuestre en el juicio de nulidad que ha sido definitivamente anulada la resolución en la que se determina un crédito cuya omisión dio lugar a la sanción impuesta en el proveído impugnado, debe declararse la nulidad de éste, en razón de que al ser resoluciones conexas, al anularse la que sirve de fundamento a la que impone la sanción, ésta resultara violatoria del artículo 16 constitucional por indebida fundamentación y motivación.

"Revisión: 387/77/9583/76.- Resuelta en sesión del 4 de mayo de 1979, por unanimidad de 7 votos.- Ponente: Mag. Lic. Francisco Ponce Gómez.- Secretario: Lic. Leopoldo Santos Landois.

"Revisión: 1088/78/3672/78.- Resuelta en sesión del 16 de mayo de 1979, por mayoría de 6 votos a favor y uno más con los puntos resolutivos.- Ponente: Mag. Lic. Francisco Ponce Gómez.- Secretario: Lic. Pedro Flores Gabriel.

"Revisión: 407/78/13702/77.- Resuelta en sesión del 7 de junio de 1979, por mayoría de 7 votos a favor y uno más con los puntos resolutivos.- Ponente: Mag. Lic. José Antonio Quintero Becerra.- Secretario: Lic. Antonio Jáuregui Zárate."

“IV-P-SS-84

“PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN.- ES ILEGAL AL PRETENDER HACER EFECTIVA UNA SANCIÓN ECONÓMICA IMPUESTA Y CONFIRMADA POR LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO, CUANDO LA RESOLUCIÓN QUE CONSTITUYE SU ANTECEDENTE HA SIDO REVOCADA EN FORMA PARCIAL.- Si el Contralor Interno de una dependencia, al resolver el recurso de revocación interpuesto, determina que las conductas infractoras no son de gravedad extrema y, por tanto, modifica parcialmente su resolución, dejando sin efectos la destitución y la inhabilitación para imponer en su lugar la de suspensión del cargo; ello conlleva que, a su vez, la sanción económica impuesta y confirmada en el ámbito de su competencia por la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, con base en los mismos hechos y antecedentes de las sanciones inicialmente impuestas por la dependencia, carezca de motivación y fundamentación. En consecuencia, el procedimiento administrativo de ejecución que se instaura para hacer efectiva esa sanción económica, deviene ilegal.(4)

“Juicio No. 1419/98-04-01-3/99-PL-09-04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Fiscal de la Federación, en sesión de 26 de enero del 2000, por mayoría de ocho votos a favor y dos en contra.- Magistrada Ponente: Ma. Guadalupe Aguirre Soria.- Secretario: Lic. Salvador Jesús Mena Castañeda.
“(Tesis aprobada en sesión privada de 6 de octubre del 2000)”

Revista del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa No. 2, del mes de febrero de 2001, Quinta Época, Año 1, pág. 17.

Tesis: III-TASS-2159
R.T.F.F. Año IV. No. 44. Agosto 1991. Pág: 33
Aislada Tercera Época.
Pleno
Materia: SEGURO SOCIAL

"CÉDULAS DE LIQUIDACIÓN DE DIFERENCIAS DE CUOTAS OBRERO PATRONALES POR EL SEGURO DE RIESGOS DEL TRABAJO.- SON NULAS CUANDO SE BASAN EN UN DICTAMEN DECLARADO NULO.- Si durante la tramitación del recurso de revisión (vigente hasta el día 14 de enero de 1988) la parte demandante exhibe la sentencia de amparo y la ejecutoria correspondiente, con lo cual pruebe que el dictamen de reclasificación del grado de riesgo y aumento de la prima de cotización, ha quedado anulado, aun en el supuesto de que la nulidad sea para efectos, procede declarar infundado al recurso de cuenta porque al estar anulado el dictamen que a su vez sirva de base a las cédulas de diferencias de cuotas obrero patronales por el Seguro de Riesgos del Trabajo, siendo ambas resoluciones conexas, éstas también son nulas siguiendo la misma suerte que el dictamen del cual se derivan.(12)

"Revisión No. 1710/87.- Resuelta en sesión de 30 de agosto de 1991, por unanimidad de 6 votos.- Magistrado Ponente: Alfonso Nava Negrete.- Secretario: Lic. Mario Meléndez Aguilera."

Tesis: II-TASS-7295
R.T.F.F. Año VI. No. 63. Marzo 1985. Pág: 746
Aislada Segunda Época.
Pleno
Materia: SEGURO SOCIAL

"CÉDULAS DE LIQUIDACIÓN DE CUOTAS OBRERO PATRONALES.- DEBE DECLARARSE SU NULIDAD SI SE FUNDAN EN UN DICTAMEN DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE CLASIFICACIÓN DE EMPRESAS DEL SEGURO SOCIAL, QUE FUE DECLARADO NULO POR EL TRIBUNAL FISCAL.- Si las cédulas de diferencias en el pago de cuotas obrero patronales que fueron confirmadas en la resolución impugnada en el juicio, son consecuencia directa e inmediata de un dictamen de clasificación en grado de riesgo de la Comisión Técnica de Clasificación de Empresas del Instituto Mexicano del Seguro Social, el cual fue a su vez declarado nulo por este Tribunal Fiscal en un diverso juicio de nulidad, debe concluirse que aquellas liquidaciones que tuvieron su fundamento en el referido dictamen, participan de la misma suerte al ser consecuencia de un acto carente de legalidad. (90)

"Revisión No. 200/84.- Resuelta en sesión de 27 de marzo de 1985, por unanimidad de 7 votos.- Magistrado Ponente: Genaro Martínez Moreno.- Secretario: Lic. Guillermo Cruz García."

Tesis: II-TASR-XI-104
R.T.F.F. Año IV. Nos. 16 y 17. Tomo II. Enero - Mayo 1981. Pág: 627
Aislada Segunda Época.
Primera Sala Regional Centro. (Celaya)
Materia: SENTENCIAS

"RESOLUCIÓN SOBRE REPARTO ADICIONAL DE UTILIDADES.- DEBE DECLARARSE SU NULIDAD SI LA MISMA SE BASA EN UNA DIVERSA QUE HA SIDO REVOCADA CON ANTERIORIDAD.- De conformidad con lo establecido por el artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, el actor debe probar los hechos constitutivos de su acción, en consecuencia, si se demuestra que la liquidación que sirvió de base a la autoridad demandada para emitir la resolu-

ción sobre reparto adicional de utilidades fue revocada, esta última deviene violatoria del artículo 16 constitucional, dado que la misma no se encuentra debidamente fundada y motivada, ya que pretende apoyarse en otra inexistente, además de que siendo accesoria de la liquidación mediante la cual, la autoridad modificó la base gravable del contribuyente, ésta debe seguir la suerte de la principal. (26)

"Juicio No. 2885/80 y 191/80.- Resuelto el 13 de enero de 1981, por unanimidad.- Magistrado Instructor: Fernando Lugo Verdusco."

Tesis: III-TASR-XIV-177
R.T.F.F. Año VIII. No. 86. Febrero 1995. Pág: 58.
Aislada. Tercera Época.
Sala Regional Pacífico - Centro (Morelos).
Materia: PROCESAL (SENTENCIAS EN EL JUICIO)

"RESPONSABILIDADES.- SANCIONES IMPUESTAS EN CUMPLIMIENTO DE UNA RESOLUCIÓN DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA.- Cuando una dependencia emite una resolución sancionando a un servidor público, con apoyo en una declaratoria formulada por la Secretaría de la Contraloría en la que se establecen los motivos y fundamentos que determinan la comisión de la infracción prevista por el último párrafo del artículo 81 de la Ley Federal de Responsabilidades y Servidores Públicos y ordena la aplicación de la sanción prevista en el mismo dispositivo, si el trabajador impugna en juicio de nulidad ambas resoluciones, y resulta ilegal la resolución emitida por la Secretaría de la Contraloría, procede declarar su nulidad, así como la de la resolución que se hubiera dictado en acatamiento de aquélla, ya que al ser accesoria debe correr la misma suerte jurídica que el acto que le dio origen. (4l)

"Juicio No. I-10/94.- Sentencia de 20 de septiembre de 1994, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Ricardo Bofill Valdés.- Secretario: Lic. Arturo de la Cruz García."

En este orden de ideas, esta Juzgadora estima que los actos demandados en nulidad en el presente juicio, participan de la misma suerte jurídica que el acto que les dio origen, por lo que en la especie, al estar demostrado que ha sido anulada definitivamente la resolución en que se sustentan los mismos, entonces procede declarar su NULIDAD LISA Y LLANA.

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 236, 237, 238, fracción IV, 239, fracción II, y 239-A, fracción I, inciso a), del Código Fiscal de la Federación, y 20, fracción I, inciso c), de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se resuelve:

I.- El actor probó los fundamentos de su pretensión.

II.- Se declara la NULIDAD de los actos impugnados, precisados en el resultando primero de este fallo.

III.- NOTIFÍQUESE.- Con copia autorizada del presente fallo devuélvanse los autos a la Octava Sala Regional Metropolitana, una vez que haya quedado firme o, en su caso, se resuelva en definitiva el presente asunto y, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido.

Así lo resolvió la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión del día 26 de junio de 2001, por unanimidad de 5 votos de los CC. Magistrados Francisco Valdés Lizárraga, Alejandro Sánchez Hernández, Silvia Eugenia Díaz Vega, Luis Carballo Balvanera y Guillermo Domínguez Belloc.

Fue Ponente el C. Magistrado Alejandro Sánchez Hernández, cuya ponencia se aprobó en sus términos.

Se elaboró el presente engrose el 6 de julio de 2001, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 22, fracción III, y 37, fracción III, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, firma el Magistrado Guillermo Domínguez Belloc, Presidente de la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ante el Licenciado Mario Meléndez Aguilera, Secretario Adjunto de Acuerdos, quien da fe.

TRATADOS DE LIBRE COMERCIO

V-P-2aS-95

CERTIFICADO DE ORIGEN.- CUÁNDO SE REQUIERE PARA LA IMPORTACIÓN DE BIENES ORIGINARIOS.- La Regla 31 de la Resolución por la que se establecen las reglas de carácter general relativas a la aplicación de las disposiciones en materia aduanera del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre de 1995, establece en su primer párrafo que de conformidad con el artículo 503 del Tratado, la importación de bienes originarios cuyo valor no exceda del equivalente en moneda nacional a mil dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en otras monedas extranjeras, no requerirá certificado de origen, siempre que dicha importación no forme parte de una serie de importaciones que se efectúen o se planeen con el propósito de evadir los requisitos de certificación del Tratado. Por lo que si el valor total de la mercancía importada en un pedimento, no rebasa los 1000 dólares a que se refiere la citada regla, pero de autos se desprende que las mercancías de que se trata forman parte de una serie de importaciones, es evidente que sí se requiere de un certificado de origen, y, por lo tanto, no se da la excepción a que hace referencia la regla aludida. (27)

Juicio No. 1054/00-08-01-4/141/01-S2-07-01.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 9 de agosto de 2001, por mayoría de 4 votos a favor.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretaria: Lic. María Elda Hernández Bautista.
(Tesis aprobada en sesión privada de 9 de agosto de 2001)

TRATADOS DE LIBRE COMERCIO

V-P-2aS-96

CERTIFICADO DE ORIGEN EXHIBIDO EN COPIA SIMPLE.- SU VALOR PROBATORIO.- La Resolución que establece las Reglas de Carácter General Relativas a la Aplicación de las Disposiciones en Materia Aduanera del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 1993, establece los formatos que deberán ser presentados para certificar que un bien que se exporte de territorio de una parte a territorio de otra parte calificará como originario, en términos del artículo 501 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Si la actora exhibe en juicio un certificado de origen en un formato establecido por dicha Resolución en copia simple, el Tribunal puede hacer el análisis respectivo de dicho certificado, adminiculado con otros documentos, como la factura comercial y el pedimento de importación respectivo; dándole así a dicho certificado de origen valor probatorio y considerar que con tal documento se acredita el origen de las mercancías. (28)

Juicio No. 1054/00-08-01-4/141/01-S2-07-01.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 9 de agosto de 2001, por mayoría de 4 votos a favor.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretaria: Lic. María Elda Hernández Bautista.
(Tesis aprobada en sesión privada de 9 de agosto de 2001)

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

V-P-2aS-97

COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD QUE EMITIÓ EL REQUERIMIENTO CON EL QUE SE INICIÓ EL PROCEDIMIENTO Y DEL QUE DERIVÓ LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA.- NO PROCEDE SU ESTUDIO DE

OFICIO.- El penúltimo párrafo del artículo 238 del Código Fiscal de la Federación, establece que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa podrá hacer valer de oficio, por ser de orden público, la incompetencia de la autoridad para dictar la resolución impugnada y la ausencia total de fundamentación y motivación en dicha resolución. En esa virtud, el Tribunal puede pronunciarse de oficio en relación a la incompetencia del emisor de la resolución impugnada, no así de un requerimiento a través del cual la autoridad ejerce sus facultades de comprobación, por ser un acto del que derivó dicha resolución. (29)

Juicio No. 1054/00-08-01-4/141/01-S2-07-01.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 9 de agosto de 2001, por mayoría de 4 votos a favor.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretaria: Lic. María Elda Hernández Bautista.
(Tesis aprobada en sesión privada de 9 de agosto de 2001)

TRATADOS DE LIBRE COMERCIO

V-P-2aS-98

CUOTAS COMPENSATORIAS.- CASO EN EL CUAL LAS SECCIONES DE LA SALA SUPERIOR SON COMPETENTES PARA RESOLVER CUANDO SE CONTROVIERTA SU APLICACIÓN.- El artículo 20, fracción I, inciso a) de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa vigente a partir del 1º de enero de 2001, establece que compete a las Secciones de la Sala Superior de este Tribunal resolver los juicios, entre otros casos, los que traten las materias señaladas en el artículo 94 de la Ley de Comercio Exterior, a excepción de los actos de aplicación de las cuotas compensatorias. Ahora bien, este último precepto, en su fracción II, establece que el recurso administrativo de revocación podrá ser interpuesto contra las resoluciones en materia de certificación de origen. Por lo anterior, si en un juicio de nulidad se controvierte una resolución en donde se aplican

cuotas compensatorias y se hacen valer como agravios fundamentales cuestiones relativas para acreditar el origen de las mercancías, exhibiendo el certificado de origen, es evidente que no se da la excepción a que alude el artículo 20, fracción I, inciso a) de la Ley Orgánica citada, toda vez que al ser competentes las Secciones de la Sala Superior del Tribunal, respecto de la materia que prevé la fracción II, del artículo 94 de la Ley de Comercio Exterior, aun cuando en la resolución impugnada se apliquen cuotas compensatorias, son competentes las Secciones de la Sala Superior para resolver la legalidad de dicha resolución, pues se está controvirtiendo también la materia de certificación de origen. (30)

Juicio No. 1054/00-08-01-4/141/01-S2-07-01.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 9 de agosto de 2001, por mayoría de 4 votos a favor.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretaria: Lic. María Elda Hernández Bautista.
(Tesis aprobada en sesión privada de 9 de agosto de 2001)

C O N S I D E R A N D O :

PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 11, fracción XI y 20, fracción I, inciso a) de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en relación con el diverso 94, fracción II y último párrafo de la Ley de Comercio Exterior, la Sala Superior de este Tribunal, actuando en Sección es competente para resolver en definitiva el presente juicio, pues la resolución impugnada determina un crédito, que si bien aplica una cuota compensatoria, también lo es que trata de una de las materias a que se refiere el artículo 94 de la Ley de Comercio Exterior, como lo es la materia de certificación de origen.

El artículo aludido en último término establece en la parte conducente:

“ARTÍCULO 94.- El recurso administrativo de revocación podrá ser interpuesto contra las resoluciones:

"II.- En materia de certificación de origen."

En esas circunstancias, si entendemos que la materia de certificación de origen debe entenderse referida a todas aquellas controversias surgidas respecto de la determinación del origen de las mercancías, esto es, cuando exista conflicto entre la autoridad competente y el importador en relación al origen de éstas, ya sea porque no se acreditó mediante la documentación idónea, porque la que se acompañó no satisfizo los requisitos legales, o se encontró que no es auténtica, y, por tanto, no demuestra de dónde son originarias las mercancías, es evidente que se surte la competencia de las Secciones de la Sala Superior de este Tribunal.

Por lo que si en términos del artículo 20 fracción I, inciso a) de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, establece que las Secciones de la Sala Superior ya no serán competentes respecto de la resolución de los juicios en los que se apliquen cuotas compensatorias, en el caso no se da la excepción aludida, en virtud de que las Secciones de este Tribunal sí son competentes respecto de la materia citada en la fracción II, del artículo 94 de la Ley de Comercio Exterior.

En la presente controversia la actora señala que no le es aplicable la cuota compensatoria y al efecto exhibe el certificado de origen de la mercancía importada, para acreditar que tal mercancía es de un país distinto al que le indica la autoridad y por el que se determinó la cuota compensatoria que se aplica.

Lo que quiere decir que existe una relación entre aplicación de cuota compensatoria y acreditación de origen de la mercancía.

El artículo 36 de la Ley Aduanera, consigna en la parte conducente, en donde describen los documentos que se deben acompañar al pedimento de importación, concretamente en su fracción I, inciso d), lo siguiente:

"d) El documento con base en el cual se determine la **procedencia y el origen de las mercancías** para efectos de la aplicación de preferencias arancela-

rias, cuotas compensatorias, cupos, marcado de país de origen y otras medidas que al efecto se establezcan, de conformidad con las disposiciones aplicables."

"(...)"

Por su parte, el artículo 59, fracción II, de la Ley Aduanera consigna:

"ARTÍCULO 59.- Quienes importen mercancías deberán cumplir, sin perjuicio de las demás obligaciones previstas por esta ley, con lo siguiente:

"(...)

"II.- Obtener la información, documentación y otros medios de prueba necesarias para comprobar **el país de origen y de procedencia de las mercancías,** para efecto de preferencias arancelarias, marcado de origen, **aplicación de cuotas compensatorias,** cupos y otras medidas que al efecto se establezcan conforme a la Ley de Comercio Exterior y tratados internacionales de los que México sea parte, y proporcionarlas a las autoridades aduaneras cuando éstas lo requieran.

"(...)"

De dicho precepto legal se advierte la interrelación que existe entre la comprobación del país de origen y procedencia de las mercancías, para efectos, entre otros, de la aplicación de cuotas compensatorias por parte de la autoridad. De tal manera que si en un juicio, en alguno de los agravios se enderezan argumentos tendientes a comprobar el país de origen y procedencia de las mercancías, para que no se le aplique determinada cuota, es evidente que las Secciones de la Sala Superior sí son competentes para resolver dichos juicios, pues si en el artículo 20, fracción I, inciso a), de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, menciona los que traten las materias señaladas en el artículo 94 de la Ley de Comercio

Exterior, entre los que están los relativos a la materia de certificación de origen; es evidente que no por el simple hecho de que en la resolución impugnada, **se aplique una cuota compensatoria,** no deba ser resuelto por la Sección respectiva.

Por otro lado, el artículo 144 de la Ley Aduanera, previene las facultades que tiene la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, entre las que se encuentran:

> **"XV.- Determinar** las contribuciones y aprovechamientos omitidos por los contribuyentes o responsables solidarios.
>
> "(...)
>
> **"XVII.- Exigir el pago de las cuotas compensatorias** y aplicar el procedimiento administrativo de ejecución para hacer efectivas dichas cuotas, los impuestos al comercio exterior y los derechos causados.
>
> "(...)"

De lo anterior tenemos que la autoridad aduanera puede determinar en una resolución, contribuciones al comercio exterior, derechos y **aplicar cuotas compensatorias**. En este caso se podría llegar a concluir en primer término que en este tipo de resoluciones las Secciones de la Sala Superior no son competentes para resolverlas, sin embargo, si la actora en juicio endereza agravios tendientes a comprobar que respecto de la mercancía que importa no le es aplicable dicha cuota, porque no es originaria del país que considera la autoridad, entonces aquí ya se está planteando un argumento del que sí son competentes de resolver las Secciones de la Sala Superior, pues se refieren a las materias señaladas en el artículo 94 de la Ley de Comercio Exterior, concretamente en materia de certificación de origen.

Cabe señalar que en términos del último párrafo del artículo 94 de la Ley de Comercio Exterior, se plantea una relación entre materia de certificación de origen y los actos que apliquen cuotas compensatorias; al señalar dicho precepto que.

"Los recursos de revocación contra las resoluciones en **materia de certificación de origen y los actos que apliquen cuotas compensatorias** definitivas, (...)"

En tal virtud, si la fracción II, del artículo 94 de la Ley de Comercio Exterior, contempla la materia de certificación de origen, de la que sigue siendo competente para conocer las Secciones de la Sala Superior, es evidente que en el caso si se surte la competencia de esta Segunda Sección y no se da la excepción a que se refiere el artículo 20, fracción I, inciso a), de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

(...)

TERCERO.- (...)

Ahora bien, la actora controvierte el oficio 324-A-VI-1-1-2456 de 17 de marzo de 1997, emitido por la entonces Administradora Local de Auditoría Fiscal No. 36 de Acapulco, dependiente de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal, unidad administrativa de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

No obstante impugnar el oficio aludido, no lo exhibe en juicio, por lo que esta Juzgadora no tiene elementos para dilucidar el planteamiento citado, pues no se puede corroborar conforme a qué preceptos la autoridad en cita ejerció sus facultades.

En efecto, la actora no acredita sus afirmaciones, en términos de lo dispuesto por el artículo 81, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, pues no exhibe en esta instancia el requerimiento que controvierte, entonces esta Juzgadora no puede estudiar de oficio dicho planteamiento.

Es de precisarse que el penúltimo párrafo del artículo 238 del Código Fiscal de la Federación establece que este Tribunal podrá hacer valer de oficio por ser de

orden público la incompetencia de la autoridad para dictar la resolución impugnada y la ausencia total de fundamentación y motivación en dicha resolución; pero es el caso que el oficio 2456 de 17 de marzo de 1997 no constituye la resolución impugnada, sino el oficio a través del cual la autoridad requirió diversa documentación y con la que se inició el procedimiento que culminó con la resolución impugnada.

Por ello, si la actora no exhibe el requerimiento aludido, es evidente que esta Juzgadora no puede estudiar la incompetencia alegada, máxime que en la resolución impugnada sólo se hacen diversos señalamientos en relación con el citado oficio, en los términos siguientes:

> "LA ENTONCES ADMINISTRACIÓN LOCAL DE AUDITORÍA FISCAL NÚMERO 36 DE ACAPULCO, DEPENDIENTE DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA FISCAL FEDERAL, UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS, CON EL OBJETO DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO EN EL PAGO DEL IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, CUOTAS COMPENSATORIAS, IMPUESTO AL VALOR AGREGADO E IMPUESTO SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS, POR EL EJERCICIO FISCAL COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1995, LE EXPIDIÓ LA ORDEN DE REVISIÓN DE GABINETE EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR, SEGÚN OFICIO 324-A-VI-1-1—2456, (SIC) DE FECHA 17 DE MARZO DE 1997, MISMO QUE FUE RECIBIDO EL 24 DE MARZO DE 1997, POR EL C. JESÚS MAURICIO MONTEMAYOR EN SU CARÁCTER DE TERCERO QUIEN SE OSTENTÓ COMO REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRIBUYENTE RESIDENCIAL TRES VIDAS S.A. DE C.V. SIN ACREDITARLO DEBIDAMENTE, PREVIO CITATORIO QUE PARA TAL EFECTO PROCEDIÓ DE FECHA 20 DE MARZO DE 1997; CON EL CUAL SE SOLICITÓ DIVERSA DOCUMENTACIÓN RELATIVA A SUS IMPORTACIONES, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL COMPRENDIDO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1995; CONSECUENTEMENTE LA CONTRIBUYENTE REVISADA DIO

CONTESTACIÓN A DICHO REQUERIMIENTO MEDIANTE EL ESCRITO DE FECHA 28 DE ABRIL DE 1997, RECIBIDO EN OFICIALÍA DE PARTES EL 30 DEL MISMO MES Y AÑO; PROCEDIENDO A RESOLVER SU SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR, MEDIANTE LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA NÚMERO 324-SAT-R5-L36-4-4-4935 DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 1997, FINCÁNDOLE UN CRÉDITO FISCAL EN CANTIDAD DE $281,698.00 (DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DE MULTAS ADUANERAS Y CUOTA COMPENSATORIA OMITIDA."

En la hoja 3 de la resolución impugnada en su segundo párrafo se consigna:

"1.- MEDIANTE EL OFICIO 324-A-VI-1-1-2456, DE FECHA 17 DE MARZO DE 1997, EMITIDO POR LA ENTONCES ADMINISTRACIÓN LOCAL DE AUDITORÍA FISCAL NO. 36 DE ACAPULCO, NOTIFICADO EL DÍA 24 DEL MISMO MES Y AÑO, AL C. JESÚS MAURICIO MONTEMAYOR, EN SU CARÁCTER DE TERCERO, QUIEN DIJO SER REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRIBUYENTE RESIDENCIAL TRES VIDAS, S.A. DE C.V., SIN ACREDITARLO DEBIDAMENTE, PREVIO CITATORIO QUE PARA TAL EFECTO PROCEDIÓ DE FECHA 20 DE MARZO DE 1997, SE LE REQUIRIÓ PARA QUE EN UN TÉRMINO DE 15 DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE A SU NOTIFICACIÓN EXHIBIERA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN.

"1.- COPIA DE SU REGISTRO DE INSCRIPCIÓN AL PADRÓN DE IMPORTADORES Y EXPORTADORES.

"2.- ORIGINAL DE LOS PEDIMIENTOS DE IMPORTACIÓN TRAMITADOS DURANTE EL EJERCICIO SUJETO A REVISIÓN.

"3.- ORIGINAL DE LAS FACTURAS COMERCIALES QUE AMPAREN LA COMPRA DE LA MERCANCÍA IMPORTADA.

"4.- ORIGINAL DEL CONOCIMIENTO DE EMBARQUE O GUÍA DE TRÁFICO AÉREO.

"5.- DOCUMENTACIÓN ORIGINAL COMPROBATORIA DEL ORIGEN Y PROCEDENCIA DE LA MERCANCÍA.

"6.- ORIGINAL DE LA DOCUMENTACIÓN CON LA QUE COMPRUEBE EN SU CASO EL CUMPLIMIENTO DE LAS RESTRICCIONES Y REGULACIONES NO ARANCELARIAS A LA IMPORTACIÓN.

"7.- ANÁLISIS DETALLADO DEL PAGO DE LAS CUOTAS COMPENSATORIAS QUE EN SU CASO CORRESPONDAN, REFIERIENDO EL TIPO DE MERCANCÍA IMPORTADA, LA FRACCIÓN ARANCELARIA DENTRO DE LA CUAL FUE CLASIFICADA, PORCENTAJE E IMPORTE PAGADO POR CONCEPTO DE CUOTA COMPENSATORIA, SEÑALANDO TAMBIÉN EL PEDIMENTO QUE AMPARA DICHAS MERCANCÍAS.

"8.- INDICAR LAS IMPORTACIONES TEMPORALES, ANEXANDO EN SU CASO LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL QUE JUSTIFIQUE EL RETORNO A SU LUGAR DE ORIGEN.

"9.- ORIGINAL DEL DOCUMENTO DONDE CONSTE LA GARANTÍA CUANDO EL VALOR DECLARADO SEA INFERIOR AL PRECIO ESTIMADO QUE ESTABLEZCA ESTA DEPENDENCIA."

En la misma hoja de la resolución impugnada en el resultando 4, se expresa:

"4.- CON ESCRITO DE FECHA 28 DE ABRIL DE 1997, Y RECIBIDO EN ESTA ADMINISTRACIÓN EL 30 DEL MISMO MES Y AÑO, EL C. LIC. JESÚS MAURICIO MONTEMAYOR, QUIEN SE OSTENTÓ COMO REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRIBUYENTE RESIDENCIAL TRES VIDAS, S.A. DE C.V., SIN ACREDITARLO DEBIDAMENTE, MANIFESTÓ TEXTUALMENTE LO SIGUIENTE:

"(...) ANTE USTED COMPAREZCO A DAR CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO DE ACUERDO EL (SIC) OFICIO DE FECHA DE FECHA 17 DE MARZO DE 1997.

"(...)"

En la hoja 6 de la resolución en controversia se señala:

"6.- UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACION (SIC) EXHIBIDA POR LA CONTRIBUYENTE RESIDENCIAL TRES VIDAS S.A. DE C.V., MEDIANTE EL ESCRITO DE FECHA 28 DE ABRIL DE 1997, Y LA PROPORCIONADA POR LA ADMINISTRADORA DE INFORMACION (SIC) DE LA ADMINISTRACION (SIC) CENTRAL DE CONTABILIDAD Y GLOSA, CONSISTENTE EN 11 PEDIMENTOS DE IMPORTACIÓN CON SUS ANEXOS CORRESPONDIENTES, TRAMITADOS POR LA CONTRIBUYENTE **RESIDENCIAL TRES VIDAS, S.A. DE C.V.,** QUE SE DESCRIBEN EN EL RESULTANDO NÚMERO 4 DE LA PRESENTE RESOLUCION, (SIC) SE DETECTARON LAS IRREGULARIDADES QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBEN, LAS CUALES SE DIERON A CONOCER MEDIANTE EL OFICIO 324-SAT-R5-L36-4-2233, DE FECHA 14 DE AGOSTO DE 1997, QUE FUE NOTIFICADO LEGALMENTE EL 18 DEL MISMO MES Y AÑO, OTORGANDO EN EL MISMO UN PLAZO DE 15 DÍAS HÁBILES A PARTIR DEL SIGUIENTE A SU NOTIFICACIÓN PARA QUE DESVIRTUARA DICHAS IRREGULARIDADES, EL CITADO PLAZO INICIO (SIC) EL 20 DE AGOSTO DE 1997, Y FENECIÓ EL 09 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO."

De las anteriores transcripciones se desprende que efectivamente la Administración Local de Auditoría Fiscal No. 36 de Acapulco, emitió el oficio 324-A-VI-1-1-2456 de 17 de marzo de 1997, en el que se solicitó diversa documentación relativa a las importaciones de la actora, correspondientes al ejercicio fiscal comprendido del 1º de enero al 31 de diciembre de 1995.

Así también se desprende que la actora cumplimentó dicha solicitud el 28 de abril de 1997. Lo que quiere decir que tenía conocimiento del referido oficio, tan es así, que lo solventó, y, por ello, estaba en posibilidad de exhibirlo.

Sin embargo, en esta instancia como ya se señaló en párrafos precedentes, la actora controvierte ese documento, sin exhibirlo en juicio, no obstante que no lo desconoce, entonces esta Juzgadora no puede saber con base en qué preceptos la autoridad emisora de ese requerimiento fundó su competencia y facultades; y si por tal circunstancia le es aplicable el precedente de esta Segunda Sección a que hace referencia la actora, siendo infundado el argumento en estudio.

CUARTO.- (...)

Esta Segunda Sección considera los argumentos parcialmente **FUNDADOS**, por lo siguiente:

Para mejor comprensión del asunto es preciso remitirnos a la resolución impugnada. En el resumen del crédito no se observa que se determinó la cantidad de $470,512.00, de los que corresponden los siguientes conceptos: multa por no presentar documentación $1,000.00, cuota compensatoria omitida actualizada $113,066.00, recargos: $186,887.00 y multa por omitir la cuota compensatoria $169,559.00

Para llegar a dichas determinaciones, la autoridad en la resolución impugnada, consideró:

"TERCERO.- EN RELACIÓN A LA IRREGULARIDAD 11 QUE NO FUE DESVIRTUADA POR LOS MOTIVOS EXPUESTOS EN EL PUNTO ANTERIOR, TAMBIÉN SE OBSERVÓ QUE PARA LOS PEDIMENTOS QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN PROPORCIONADOS POR LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE INFORMÁTICA, CONTABILIDAD Y GLOSA, MEDIANTE OFICIO 326-SAT-IV.1.2. (A) 36822 DE FECHA 17 DE NOVIEMBRE DE 1997, MISMOS QUE FUERON TRAMITADOS POR LA CONTRIBUYENTE NO CONTIENEN EL CERTIFICADO DE ORIGEN QUE ACREDITE QUE LA MERCANCÍA IMPORTADA PROVIENE DE UN PAÍS DISTINTO AL DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA:

N0. DE PEDIMENTO	FECHA DE PAGO	FRACCIÓN ARANCELARIA	VALOR MERCANCIA	C.C. 5	CUOTA COMPENSATORIA
3116-500012 0	07/02/95	85371099	$4,781 -00	129% (D.O.18/10 /94)	$6,167.00
MERCANCÍA IMPORTADA: **CUADROS DE MANDO**					
3194-500046 00	23/02/95	61051099	1,125. 00	533% (D.O.18/ 10/94)	5,996.00
MERCANCÍA IMPORTADA: **CAMISAS PARA HOMBRE**					
		61059099	90.00	533% (D.O.18/ 10/94)	480.00

MERCANCÍA IMPORTADA: **VISERAS DE MATERIAS TEXTILES**

	62033301	495.00	533% (D.O.18/ 10/94)	2,638.00

MERCANCÍA IMPORTADA: **SACO PARA HOMBRE**

	62034101	1,283.00	533% (D.O.15/ 04/93)	6,838.00

MERCANCÍA IMPORTADA: **PANTALONES PARA HOMBRE**

	62113399	135.00	533% (D.O.18/ 10/94)	720.00

MERCANCÍA IMPORTADA: **SUDADERA PARA HOMBRE**

3194 -500462 1	61051001	1,125 .00	533% (D.O.18/ 10/94)	5,996.00

MERCANCÍA IMPORTADA: **PLAYERA PARA HOMBRE**

	62033999	495.00	533% (D.O.18/ 04/93)	2,683.00

MERCANCÍA IMPORTADA: **SACO PARA HOMBRE**

	62034101	1,283.00	533% (D.O.15/ 04/93)	6,838.00

MERCANCÍA IMPORTADA: **PANTALONES**

	TOTAL	$10,812.00		$38,356.00

"POR TAL MOTIVO, ESTA AUTORIDAD CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO (SIC) 63 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y 130 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, DE APLICACIÓN SUPLETORIA A LA LEY ADUANERA, SE LES OTORGA PLENO VALOR PROBATORIO, EN VIRTUD DE QUE DICHAS DOCUMENTALES FORMAN PARTE DE LOS EXPEDIENTES INTEGRADOS A NOMBRE DE LA CONTRIBUYENTE RESIDENCIAL TRES VIDAS, S.A. DE C.V. EN LA ADMINISTRACIÓN REFERIDA, LO QUE DEMUESTRA FEHACIENTEMENTE QUE TALES PEDIMENTOS SI (SIC) FUERON TRAMITADOS POR LA CONTRIBUYENTE REVISADA, POR LO QUE AL NO PRESENTAR LAS PRUEBAS QUE DESVIRTUEN (SIC) TAL ASEVERACIÓN, ESTA AUTORIDAD CONCLUYE QUE DICHAS IMPORTACIONES SE EFECTUARON SE (SIC) HABER TRAMITADO EL CERTIFICADO DE ORIGEN DEBIDAMENTE REQUISITADOS (SIC) COMO LO DISPONE LA RESOLUCION (SIC) QUE ESTABLECE LAS REGLAS DE CARÁCTER GENERAL RELATIVAS A LA APLICACIÓN (SIC) DE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA ADUANERA DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMERICA (SIC) DEL NORTE, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION (SIC) DEL 30 DE DICIEMBRE DE 1993, EN LA PAGINA (SIC) 109 DE LA SEGUNDA SECCION, (SIC) PARA DEMOSTRAR QUE LA MERCANCÍA IMPORTADA CUMPLIO (SIC) CON LAS REGLAS ESTABLECIDAS EN LOS TRATADOS Y/O CONVENIOS COMERCIALES DE LOS QUE MEXICO (SIC) FORMA PARTE Y EN LOS QUE SE ESTABLECEN LOS PROCEDIMIENTOS PARA DETERMINAR EL PAIS (SIC) DE ORIGEN DE MERCANCIAS (SIC) IMPORTADAS; POR LO QUE EL BIEN IMPORTADO CON DICHOS PEDIMENTOS CONSISTENTES EN: **CUADROS DE MANDO, GORRAS, VICERAS, PANTALONES, SACOS DE VESTIR, SUDADERA, Y PLAYERAS** NO PUEDE CONSIDERARSE COMO ORIGINARIA DE UN PAÍS DIFERENTE A LA REPUBLICA (SIC) POPULAR CHINA Y ESTE (SIC) EXENTA DEL PAGO DE LA CUOTA COMPENSATORIA QUE DE ACUERDO A SU FRACCIÓN ARANCE-

LARIA ESTE (SIC) SUJETA, POR LO QUE LA MERCANCÍA DE REFERENCIA ESTA (SIC) SUJETA AL PAGO DE LA CUOTA COMPENSATORIA CORRESPONDIENTE COMO LO PREVE (SIC) LA LEY ADUANERA VIGENTE AL MOMENTO DE LA IMPORTACIÓN.

"Y AL NO EXISTIR ALGUNA OTRA PRUEBA EN CONTRARIO PARA DEMOSTRAR QUE LA MERCANCIA (SIC) CITADA EN EL PARRAFO (SIC) ANTERIOR NO ES ORIGINARIA DE LA REPUBLICA (SIC) POPULAR CHINA SE LE TIENE ACEPTADA TACITAMENTE LA INFRACCION (SIC) IMPUTADA, CONSECUENTEMENTE DICHA IMPORTACIÓN SE EFECTUO (SIC) SIN HABER TRAMITADO EL CERTIFICADO DE PAIS (SIC) DE ORIGEN CORRESPONDIENTE, POR LO QUE CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO (SIC) 36 DE LA LEY ADUANERA VIGENTE EN 1995, DEBERA (SIC) PAGAR LA CUOTA COMPENSATORIA OMITIDA QUE ASCIENDE A $38,356.00 (TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.); ASÍ MISMO CON SU ACTUACIÓN INFRINGIO (SIC) LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 127 FRACCION (SIC) I DE LA LEY ADUANERA VIGENTE EN 1995, CONSECUENTEMENTE SE HACE ACREEDORA A LA SANCION (SIC) CONTENIDA EN EL ARTICULO (SIC) 129 FRACCIÓN I DE LA LEY ANTES MENCIONADA, CONSISTENTE EN UNA MULTA EQUIVALENTE A UN TANTO Y MEDIO DE LA CUOTA COMPENSATORIA OMITIDA, COMO A CONTINUACIÓN SE CITA."

De lo anterior se desprende que lo que se le imputa al actor, en relación con los pedimentos 3116-5000120, 3194-5004600 y 3194-5004621 es que no presentaron el certificado de origen que acredite que la mercancía importada proviene de un país distinto al de la República Popular China.

Cabe precisar, que según se desprende de la resolución impugnada las mercancías importadas son las siguientes: En el pedimento 3116-5000120 lo constituyen cuadros de mando, en el pedimento 3194-5004600 camisas para hombre, viseras de

materiales textiles, saco para hombre y pantalones para hombre, mientras que en el pedimento 3194-5004621, la mercancía consiste en playera para hombre, saco para hombre y pantalones; por todas esas mercancías se determinó como cuota compensatoria omitida el total de $38,356.00.

Indica la autoridad de manera fehaciente:

> "Esta autoridad concluye que dichas importaciones se efectuaron se (sic) haber tramitado el certificado de origen debidamente requisitado como lo dispone la Resolución que establece las Reglas de Carácter General relativas a la aplicación de las disposiciones en materia aduanera del Tratado de Libre Comercio de América del Norte publicado en el Diario Oficial de la Federación del 30 de diciembre de 1993, en la página 109, de la Segunda Sección, para demostrar que la mercancía importada cumplió con las reglas establecidas en los tratados y o convenios comerciales de los que México forma parte y en los que se establecen los procedimientos para determinar el país de origen de mercancías importadas;"

Ahora bien, es preciso tomar en cuenta lo dispuesto por el artículo 66 de la Ley de Comercio Exterior, mismo que fue citado por la actora en su demanda:

> **"ARTÍCULO 66.-** Los importadores de una mercancía idéntica o similar a aquélla por la que deba pagarse una cuota compensatoria provisional o definitiva no estarán obligados a pagarla si comprueban que el país de origen o procedencia es distinto del país que exporta las mercancías en condiciones de prácticas desleales de Comercio Internacional."

De tal manera que la actora lo que pretende es acreditar a través del certificado de origen que exhibe en juicio que sus mercancías no son originarias de China.

Al efecto, es pertinente señalar que la actora está en posibilidad de exhibir en el presente juicio el certificado de origen correspondiente, no obstante que no los hubiere

acompañado a los pedimentos de importación de que se trata, ni lo hubiese aportado en el procedimiento administrativo, toda vez que dentro del juicio de nulidad, dicho certificado es una prueba que se endereza a acreditar la pretensión de la actora y, por tanto, no puede precluir su derecho para presentarlo.

Es aplicable al caso concreto la tesis de jurisprudencia IV-J-2aS-9, sustentada por esta Segunda Sección de la Sala Superior de este Tribunal, misma que aparece publicada en la Revista del Tribunal Fiscal de la Federación No. 25, Cuarta Época, Año III, agosto 2000, página 7, la cual textualmente establece:

> **"CERTIFICADO DE ORIGEN.-NO ACOMPAÑARLO AL PEDIMENTO NO IMPLICA LA PRECLUSIÓN DEL DERECHO A OFRECERLO COMO PRUEBA**.- Si bien es cierto, que de conformidad con el artículo 36 de la Ley Aduanera y con el 66 de la Ley de Comercio Exterior, el importador está obligado a acompañar, al pedimento de importación, el certificado de origen, cuando las mercancías sean idénticas o similares a aquellas por las que deba pagarse una cuota compensatoria. También lo es, que la falta de presentación no puede tener como consecuencia la preclusión de la prueba. Por lo tanto, si se exhibe el certificado de origen como prueba en el recurso administrativo o en el juicio, se le debe admitir y valorar, aun cuando no se haya presentado ante la aduana, pues su presentación extemporánea no puede tener como consecuencia privar al particular de su prueba. (1)
>
> **"IV-P-2aS-25**
>
> "Juicio de Nulidad número 100(20)43/97/2658/97.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Fiscal de la Federación, en sesión de 30 de junio de 1998, por mayoría de 5 votos a favor.- Magistrado Ponente: Rubén Aguirre Pangburn.- Secretaria: Lic. Isabel Urrutia Cárdenas.

“IV-P-2aS-26

“Juicio de Nulidad número 100(21)5/98/752/97.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Fiscal de la Federación, en sesión de 25 de agosto de 1998, por mayoría de 4 votos a favor y 1 en contra.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretario: Lic. Miguel Ángel Luna Martínez.

“IV-P-2aS-61

“Juicio de Nulidad No. 100(21)1(98)/(2)l599/97-II.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Fiscal de la Federación, en sesión de 17 de septiembre de 1998, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrado Ponente: Rubén Aguirre Pangburn.- Secretaria: Lic. Susana Ruiz González.

“IV-P-2aS-103

“Juicio de Nulidad No. 100 (20)65/98/225/98.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Fiscal de la Federación, en la sesión de 28 de enero de 1999, por unanimidad de 4 votos a favor.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretaria: Lic. Ma. Luisa de Alba Alcántara.

“IV-2aS-247

“Juicio de Nulidad No. 2210/98-06-02-1/99-S2-08-01.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Fiscal de la Federación, en la sesión de 25 de enero de 2000, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrado Ponente: Francisco Valdés Lizárraga.- Secretaria: Lic. Mónica Guadalupe Osornio Salazar.

“(Tesis de jurisprudencia aprobada en sesión de 29 de febrero de 2000.”

En autos, folio 54 del expediente en estudio, consta el certificado de origen y su respectiva traducción en los folios 55, 56 y 57, en el que se establece textualmente:

"(TRADUCCIÓN DEL INGLÉS)
DEPARTAMENTO DE LA TESORERÍA
SERVICIO DE ADUANAS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA
Tratado de Libre Comercio de Norteamérica
CERTIFICADO DE ORIGEN

"Aprobado desde el 31-12-94
OMB No. 1515-020
Ver reverso del formato para la
Notificación de la Ley de
Reducción de Trámites Administrativos

"1. Nombre y Dirección del Exportador

WATER WORKS SPRINKLER SUPPLIES

PO. BOX 6020

SPRING, TX 77391

Registro Federal de Contribuyentes:

"2. Período de Cobertura:

Del **18-01-95** hasta el **18-01-96**

"3. Nombre y Dirección del Productor:

DISPONIBLE PARA LOS CLIENTES A SOLICITUD"

Registro Federal de Contribuyentes

"4. Nombre y Dirección del Importador:

RESIDENCIAL TRES VIDAS., S.A. DE C.V.

CARRETERA ESCÉNICA 28 L-U CENTRO

COMERCIAL, ACAPULCO, GRO.

Registro Federal de Contribuyentes: **RTV930302IV8**

"5. Descripción del Producto o Productos

000853871-000 **PANEL DE CONTROL**

"6. Clasificación Tarifa HS **8537.10**

"7. Criterio de Preferencia **C**

"8. Productor **Y**

"9. Costo Neto **N**

"10. País de Origen **E.U.A.**

"5 Descripción del Producto o Productos

000853871-158 **SOPORTE DELANTERO DEL PANEL DE CONTROL**

"6. Clasificación Tarifa HS **8538.10**

"7. Criterio de Preferencia **C**

"8. Productor **Y**

"9. Costo Neto **N**

"10. País de Origen **E.U.A.**

"Certifico Que: (sic)

- La información en el presente documento es fiel y correcta y asumo la responsabilidad para proporcionar dichas representaciones. Entiendo que soy responsable de cualquier declaración falsa de omisiones de materia hechas en relación con el presente documento;
- Estoy de acuerdo en guardar, y presentar a solicitud, la documentación necesaria para apoyar el presente certificado, y para informar, por escrito, a todas las personas a quienes se les otorgó el certificado, de cualquier cambio que pudiera afectar la exactitud o validez del presente certificado;
- Los productos originados en el territorio de, una o más de las partes, y que cumplan con los requerimientos de origen especificados para aquellos productos en el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, y amenos (sic) que se exente específicamente en el artículo 411 o el anexo 401, no ha habido ninguna otra producción o cualquier otra operación fuera de los territorios de las partes; y

"El presente certificado consiste de 1 página, incluyendo todos los anexos.

"11. Firma Autorizada	**[Rúbrica]**
Nombre (Escriba o Imprima)	**ROBERT SLOAN**
Compañía	**WATER WORKS SPRINKLER SUPLLIES**
Puesto	**GERENTE DE VENTAS**
Fecha (DÍA –MES-AÑO)	01-18-95
Número Telefónico (voz)	813-94-32 (Fax)"

Del análisis que se efectúa al certificado de origen que la actora anexa a su escrito de demanda, así como de su traducción, se advierte que con el mismo acredita su pretensión, por lo que es **FUNDADO** en esta parte el agravio en estudio, toda vez que en dicho certificado, se consigna como país de origen de las mercancías ahí descritas, el de Estados Unidos de América, que es un país diferente de la República Popular de China.

Ahora bien, no obstante que el certificado de origen en análisis fue exhibido por la actora en su demanda, y se le corrió el traslado correspondiente a la autoridad demandada, junto con los anexos respectivos, ésta no los objetó en cuanto a su contenido, alcance y valor probatorio, sino que sólo se circunscribe a señalar en la parte relativa de su contestación:

> "(...) mi representada determinó que al no presentar las pruebas que desvirtúen dichas irregularidades, concluyó que dichas importaciones efectuadas por la actora se hicieron sin haber tramitado el certificado de origen debidamente requisitado como lo dispone la resolución que establece las Reglas de Carácter General Relativas a la Aplicación de las Disposiciones en Materia Aduanera del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 30 de diciembre de 1999, en la página 109 de la Segunda Sección (...)"

De tal manera que si bien la autoridad en la resolución impugnada y al contestar la demanda, sólo aluden a que no se tramitó el certificado de origen debidamente

requisitado, en el caso, la actora exhibe un certificado de origen del que se desprende que las mercancías ahí descritas son originarias de Estados Unidos de América.

En efecto, la autoridad en la resolución impugnada, en la parte respectiva señala que las importaciones se efectuaron sin haber tramitado el certificado de origen debidamente requisitado como lo dispone la Resolución que establece las Reglas de Carácter General Relativas a la Aplicación de las Disposiciones en Materia Aduanera del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 1993, en la página 109, de la Segunda Sección, para demostrar que la mercancía importada cumplió con las reglas establecidas en los tratados y convenios comerciales de los que México forma parte y en los que se establecen los procedimientos para determinar el país de origen de las mercancías importadas.

Ahora bien, en dicha resolución, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 1993, se establecen los formatos que deberán ser presentados para certificar que un bien que se exporte de territorio de una Parte a territorio de otra Parte califica como originario, en términos del artículo 501 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

Sobre lo anterior es importante resaltar que en la parte conducente de la Regla 15, Sección II, de la resolución que nos ocupa, se expresa lo siguiente:

"SECCIÓN II: CERTIFICADO DE ORIGEN

"(...)

"15.- El certificado de origen a que hace referencia el artículo 501 (1) del Tratado, deberá presentarse en cualquiera de los formatos que se incluyen en el Anexo 1 de esta Resolución.

> "Para los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, dicho certificado podrá presentarse en formato impreso de libre reproducción o en dispositivos magnéticos, siempre que contengan la misma información que la establecida en el certificado de origen conforme al párrafo anterior (...)"

En el Anexo 1 al que hace referencia la regla que ha quedado transcrita, se establece lo que a continuación se menciona:

> **"**ANEXO I
>
> "El anexo I será el texto del Anexo 401 del Tratado."

Al respecto, el Anexo 401 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte se refiere a las reglas de origen específicas, sin que en el mismo se establezca formato alguno de certificado de origen.

No obstante lo anterior, en la parte final de la resolución que nos ocupa, se encuentran los formatos de certificado de origen, razón por la cual, los mismos son los que deben emplearse para acreditar el origen de mercancías importadas en los términos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, toda vez que dichos formatos son parte de la Resolución que Establece las Reglas de Carácter General Relativas a la Aplicación de las Disposiciones en Materia Aduanera del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y aun cuando en esta resolución hay un error al remitir el anexo 401 del Tratado; sin embargo, en ella sí se establecieron los formatos de certificado de origen a que se refiere el artículo 501 del Tratado en mención, razón por la cual, en el caso, su empleo resultaba obligatorio a fin de acreditar el origen de las mercancías importadas.

En esa virtud, en el formato de certificado de origen que nos ocupa, se establece que en el campo 10 debe asentarse lo siguiente:

> "CAMPO 10: Indique el nombre del país ('MX' o 'EU' tratándose de bienes agropecuarios o textiles exportados a Canadá; 'EU' o 'CA' para todos los bienes exportados a México; o 'CA' o 'MX' para todos los bienes exportados a los Estados Unidos) al que corresponde la tasa arancelaria preferencial, aplicable en los términos del Anexo 302.2 de conformidad con Las Reglas de Marcado o en la lista de desgravación arancelaria de cada parte.
>
> "Para todos los demás bienes originarios exportados a Canadá indique 'MX' o 'EU', según corresponda a los bienes originados en ese país parte del TLCAN, en términos del Anexo 302.2 y el valor de transacción de los bienes no se ha incrementado en más de un 7% por algún procesamiento ulterior en el otro país parte del TLCAN, en caso contrario, indique 'JNT' por producción conjunta (Referencia: Anexo 302.2)."

De tal manera que el certificado de origen que la actora acompaña como prueba de su parte cumple con señalar el nombre del país de origen de la mercancía, conforme a la Resolución que establece las reglas de carácter general relativas a la aplicación de las disposiciones en materia aduanera del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 1993, pues en el mismo se asienta el país de origen de las mercancías importadas, que es de Estados Unidos de América, por lo que el certificado de mérito es idóneo para acreditar que dichas mercancías importadas en el pedimento 32116-5000120 son originarias de Estados Unidos de América.

En efecto, en el folio 48 del expediente en estudio, consta el referido pedimento de importación 32116-5000120, en la parte de descripción de mercancía se consigna:

PEDIMENTO DE IMPORTACIÓN — NUEVOS PESOS

NO. 950084	070295	NO. PEDIMENTO	3116-5000120	HOJA 1 DE 1
FECHA DE PAGO	1	CLAVE PEDIMENTO A1 TC	4,50000	
ADUANA/SEC.	80-0	FACTURA MONEDA EXTRANJERA	1,000000	
FECHA ENTRADA	070295	TRANSPORTE 7 PESO	49	
EXPEDICIÓN POR TERCEROS		PAÍS VENDEDOR 08	DE ORIGEN	
NO.	RTV930302TV8	No. FED. TRÁNSITO		

PORTADOR: RESIDENCIAL TRES VIDAS, S.A. DE C.V.
DOMICILIO: CARRET. ESENICA 28 L-U CENTRO COMERCIAL
IDENTIDAD/EDO.: ACAPULCO, GRO. CÓDIGO 39000
FACTURAS / FECHAS / FORMA DE FACTURACIÓN / PROVEEDOR / DOMICILIO

(1) 149508 . . . .DE FECHA 180195 F.O.B. LAREDO
WATER WORKS SPRINFLER SUPPLIES
NO. BOX 6020 SPRING, TEXAS 77391 TAX. NO. Sellos

MARCAS, NÚMEROS, TOTAL DE BULTOS - CONOCIMIENTO, GUÍA DE VEHÍCULOS NOS.
S/M S/N 4 BULTOS PLACAS NO. PH80217
Total (4) Bultos

ME 1245.24 V.DLS. 1245.24 FLETES 0 SEGUROS 0

VALOR COMERCIAL	+	INCREMENTABLES	=	VALOR EN ADUANA	FACTOR
5604	+	562	=	6166	1.1003

ORDEN	DESCRIPCIÓN DE MERCANCÍAS / FRACCIÓN / CANTIDAD / UNIDAD / PERMISO(S) CLAVES / NÚMEROS / FIRMA	PRECIO UNIT. / CANT.TFA/UMT	COMERCIAL / EN ADUANA / DLS	TASA / VINC. / M.VAL	FP/	IMPUESTO
	CUADROS DE MANDO		4345	8.0	0	382
		2390.50	4781	0		
	85371099	2.00 – 6				
		30.00 - 1	965.52	1		
	SOPORTE P/CUADROS DE MANDO		1259	8.0	0	111
		692.50	1385	0		
	85381001	2.00 – 6				
	279.72	1	19.00 - 1			

- - - - - - - ES COPIA FIEL TOMADA DEL ORIGINAL EXISTENTE EN EL ARCHIVO DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE INFORMÁTICA, CONTABILIDAD Y GLOSA, QUE CERTIFICO PARA USOS OFICIALES.
MÉXICO, D.F. 17 NOV. 1997

EL ADMINISTRADOR DE INFORMACIÓN **CONFRONTE**

RÚBRICA **RÚBRICA**

ACUSE DE RECIBO
VRL108E8 CÓDIGO DE BARRAS

CONTRIBUCIONES:		
ADV	0	493
DTA	0	49
IVA	0	671
		0
		0
		0
		0
		0
T O T A L E S :		
EFECTIVO		1213
OTROS		0
TOTAL		1213

Asimismo, la actora exhibe en juicio la factura correspondiente a las mercancías citadas en el pedimento aludido y su traducción del inglés en los términos siguientes:

(TRADUCCIÓN DEL INGLÉS)
PRIMER CURSO PROGRAMADO A FINALES DE ENERO, DIFERENTES
CURSOS A SEGUIR. PARA INFORMACIÓN LLAME AL 817 598-0907
NUESTRAS TIENDAS ABRIRÁN EN SÁBADO, 8 A.M. A

[Aparece un logotipo]

FAVOR DE REMITIR A:
WATER WORKS
P.O. BOX 6020, SUITE 405
SPRING, TEXAS 77391
FAX (713) 376-0978

(713) 444 6016 FAX (713) 370-4740
18812 TOMATO
SPRING, TX 77370
(572)458-LAWWN FAX (512) 458-8641
6719 SHIRLEY
AUSTIN, TEXAS 78752
(713) 354-4444 FAX (713) 354-9440
1701 NORTHPARK DR. STE. 30
KINGWOOD, TX 77339
(210) 783-1181 FAX (210) 783-1686
1509 SAN TATRICIA DR.
PHARR. TEXAS 78577

(713) 789-8686 FAX (713) 240-8548
13003 S.W. FRWY., STE. 150
STAFFORD, TX 77477
710)308-7205 FAX (210) 308-7314
11406 RENDEZVOUS
SAN ANTONIO, TEXAS 78216
(409) 778-2369 FAX (409) 778-2369
1815 GOOSE NECK DR.
BRIVAN, TX 77805

170420 TIENDA NO. 6

FACTURA NO.	149508	FECHA DE FACTURA	19-01-95
HORA:	15:12:02	FECHA DE ORDEN	16-01-95

NO. DE CLIENTE			170420								
ORDEN DE TRABAJO			34637								
NO. DE P.O. DEL CLIENTE			**R.F.C. DEL CLIENTE**								
ENVIAR POR			EL CLIENTE LO RECOGE				**TÉRMINOS**				
NOMBRE DEL VENDEDOR			RONNIE ALANIZ				**NO. 6**				
PEDIDO PENDIENTE	**ORDENADO**	**ENVIADO**	**UNIDAD**	**NUMERO DE ARTÍCULO**	**DESCRIPCIÓN**	**PRECIO**	**POR**	**TOTAL**	**D**	**D**	**B/N**
2	2	2	C/U	MK224	MARCO WATHER 200, 24 STA.	US$482.76 C/U		965.52			
2	2	2	C/U	MRMP	PEDESTAL WATHER-MATIC	US$139.86 C/U		279.72			

X [Firmado]	**SUBTOTAL**	1245.24
RECIBIDO POR FECHA	**PAGAR ESTA CANTIDAD**	1245.24

Las cuentas que no se paguen en su totalidad en la fecha pagadera, están sujetas al saldo no pagado de 1.50% mensual ó 18.00% anual en

TÉRMINOS Y CONDICIONES

Al aceptar la entrega de los productos y/o al firmar una copia de la presente, se está de acuerdo con:	
1.	Que el comprador de este es moroso si no pagara antes del último día del mes, siguiente a la fecha de facturación.
2.	La morosidad en las facturas sufren intereses en la suma no pagada a la tasa de 18.00% anual.
3.	Los términos como se declaran en la factura.
4.	El 15% de cargo por mercancía devuelta.
5..	Toda discrepancia en las órdenes se deben reportar en un lapso de 24 horas.
6.	No hay devoluciones en piezas eléctricas.
7.	No hay devoluciones sin la copia original.
8.	No hay devoluciones después de 30 días.
9.	Los precios están sujetos a cambios sin previo aviso.
FAVOR DE DEVOLVER ESTE TALÓN CON EL PAGO A:	P.O. BOX 6020, SUITE 405 SPRING, TEXAS 77391
CLIENTE NO. 170420	**FECHA DE FACTURA 18-01-95**
TELÉFONO DEL CLIENTE NO. FACTURA NO. 149508 TOTAL DE FACTURA [Texto ilegible]	

De este último documento se desprende que se efectuó el pago a P.0. BOX 6020, Suite 405, Spring, Texas 77391, el que coincide con el señalado en el pedimento de importación 32116-5000120; por consecuencia de los elementos de prueba consistentes en el certificado de origen, la factura respectiva y el pedimento de importación aludido se desprende que el país de origen de la mercancía importada es distinto del país que exporta las mercancías en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional, es decir, el país de origen es diverso a la República Popular de China.

En el caso, si bien de la exhibición que hace la actora del certificado de origen es en copia simple, para determinar su valor probatorio, esta Juzgadora lo adminículo con el pedimento de importación y la factura de la mercancía importada, siendo que del análisis en conjunto de esas documentales se desprende que el país de origen de la mercancía importada es distinto del país que exporta las mercancías en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional; en consecuencia el mencio-

nado certificado tiene valor probatorio suficiente para desvirtuar la presunción legal contenida en el texto del artículo 66 de la Ley de Comercio Exterior y, consecuentemente, la aplicación de la cuota compensatoria es indebida.

En ese sentido, esta Juzgadora considera **FUNDADO** el agravio y determina ilegal la aplicación de la cuota compensatoria en cantidad de $6,167.00 en relación a la mercancía importada con el pedimento de importación 3116-5000120.

Ahora bien, atendiendo al principio jurídico de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal, también resulta ilegal la actualización, recargos y multa, derivada de dicha aplicación de cuota compensatoria.

Por otro lado, según se desprende de las hojas 18 y 19 de la resolución impugnada, se aplicaron cuotas compensatorias omitidas en relación a los pedimentos 3194-54004600 y 3194-5004621.

La aplicación de la cuota compensatoria de estas mercancías se hizo en los términos siguientes:

> "(...) POR LO QUE AL NO PRESENTAR LAS PRUEBAS QUE DESVIRTÚEN TAL ASEVERACIÓN, ESTA AUTORIDAD CONCLUYE QUE DICHAS IMPORTACIONES SE EFECTUARON SE (SIC) HABER TRAMITADO EL CERTIFICADO DE ORIGEN DEBIDAMENTE REQUISITADO COMO LO DISPONE LA RESOLUCIÓN QUE ESTABLECE LAS REGLAS DE CARÁCTER GENERAL RELATIVAS A LA APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA ADUANERA DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DEL 30 DE DICIEMBRE DE 1993, EN LA PÁGINA 109 DE LA SEGUNDA SECCIÓN, PARA DEMOSTRAR QUE LA MERCANCÍA IMPORTADA CUMPLIÓ CON LAS REGLAS ESTABLECIDAS EN LOS TRATADOS Y/O CONVENIOS COMERCIALES DE LOS QUE MÉXICO FORMA PARTE Y EN LOS QUE SE ESTABLECEN

LOS PROCEDIMIENTOS PARA DETERMINAR EL PAÍS DE ORIGEN DE MERCANCÍAS IMPORTADAS; POR LO QUE EL BIEN IMPORTADO CON DICHOS PEDIMENTOS CONSISTENTES EN: CUADROS DE MANDO, GORRAS, PANTALONES, SACOS DE VESTIR, SUDADERA Y PLAYERAS- NO PUEDE CONSIDERARSE COMO ORIGINARIA DE UN PAÍS DIFERENTE A LA REPÚBLICA POPULAR CHINA Y ESTÉ EXENTA DEL PAGO DE LA CUOTA COMPENSATORIA QUE DE ACUERDO A SU FRACCIÓN ARANCELARIA ESTÉ SUJETA, POR LO QUE LA MERCANCÍA DE REFERENCIA ESTÁ SUJETA AL PAGO DE LA CUOTA COMPENSATORIA CORRESPONDIENTE COMO LO PREVÉ LA LEY ADUANERA VIGENTE AL MOMENTO DE LA IMPORTACIÓN.

"Y AL NO EXISTIR ALGUNA OTRA PRUEBA EN CONTRARIO PARA DEMOSTRAR QUE LA MERCANCÍA CITADA EN EL PÁRRAFO ANTERIOR NO ES ORIGINARIA DE LA REPÚBLICA POPULAR DE CHINA SE LE TIENE POR ACEPTADA TÁCITAMENTE LA INFRACCIÓN IMPUTADA, CONSECUENTEMENTE DICHA IMPORTACIÓN SE EFECTUÓ SIN HABER TRAMITADO EL CERTIFICADO DE PAÍS DE ORIGEN CORRESPONDIENTE, POR LO QUE CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 36 DE LA LEY ADUANERA VIGENTE EN 1995, DEBERÁ PAGAR LA CUOTA COMPENSATORIA OMITIDA QUE ASCIENDE A $38,356.00 (TRENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUNTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.), ASÍ MISMO CON SU ACTUACIÓN INFRINGIÓ LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 127 FRACCIÓN I DE LA LEY ADUANERA VIGENTE EN 1995, CONSECUENTEMENTE SE HACE ACREEDORA A LA SANCIÓN CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 129 FRACCIÓN I DE LA LEY ANTES MENCIONADA, CONSISTENTE EN UNA MULTA EQUIVALENTE A UN TANTO Y MEDIO DE LA CUOTA COMPENSATORIA OMITIDA, COMO A CONTINUACIÓN SE CITA."

Respecto de estos pedimentos la actora señala que la mercancía amparada con las mismas tiene un valor de 700 dólares americanos, por lo que atento a lo dispuesto a la Regla 31 de la Resolución por la que se Establecen las Reglas de Carácter General Relativas a la Aplicación de las Disposiciones en Materia Aduanera del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, no procede la aplicación de cuotas compensatoria.

En relación con tal argumento la autoridad en su contestación de demanda consigna, en la parte conducente, que es erróneo lo alegado por la actora al señalar que las mercancías importadas tienen un valor de 700 dólares, toda vez que ella nunca demostró el precio real de la mercancía importada.

En autos, folio 49 del expediente en estudio, consta el pedimento de importación No. 3194-5004600, en donde se desprende que la mercancía importada es la siguiente: gorra de materias textiles, viseras de materiales textiles, pantalones para hombre excepto de punto, saco p/hombre 55% poliéster, 45% lana, sudadera para hombre excepto de punto, camisas para hombre.

En el folio 51 del expediente en que se actúa, consta el pedimento 3194-5004621, en el que se describen como mercancías importadas las siguientes: viseras, pantalones 100% lana p/hombre excepto de punto, gorra, saco p/hombre 55% poliéster, playeras p/hombre y sudadera deportiva p/hombre.

La actora ofrece como prueba además la factura correspondiente al pedimento 3194-5004600 en inglés y su respectiva traducción (folios 64 a 67 del expediente en estudio). También exhibe la factura relativa al pedimento 3194-5004621 y su respectiva traducción.

Si bien la actora no acredita haber exhibido dichos documentos en el procedimiento oficioso, es evidente que ello no impide las exhiba en el juicio de nulidad, pues con ello pretende acreditar que el valor total de la mercancía es de 700 dólares americanos y que por lo mismo no le son aplicables las cuotas compensatorias que se señalan en la resolución impugnada.

Ahora bien, la actora pretende acogerse a lo dispuesto en la Regla 31 de la Resolución por la que se Establecen las Reglas de Carácter General Relativas a la Aplicación de las Disposiciones en Materia Aduanera del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre de 1995, que señala textualmente:

> **"31.-** De conformidad con lo dispuesto en el artículo 503 del Tratado, la importación de bienes originarios cuyo valor no exceda del equivalente en moneda nacional a mil dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en otras monedas extranjeras, **no requerirá certificado de origen,** siempre que dicha importación no forme parte de una serie de importaciones que se efectúen o se planeen con el propósito de evadir los requisitos de certificación del Tratado.
>
> "Tampoco se requerirá del certificado de origen para la importación de muestras comerciales de valor insignificante, de conformidad con la definición contenida en el artículo 318 del Tratado.
>
> "Tratándose de la importación de bienes originarios con fines comerciales, cuyo valor no exceda del importe a que se refiere el primer párrafo de esta regla, deberá contarse con una declaración bajo protesta de decir verdad que certifique que el bien califica como originario, firmada por el exportador o productor del bien o por el propio importador o sus representantes legales. Dicha declaración deberá asentarse en la factura que ampare el bien o anexarse a la misma, y estar inscrita a mano, a máquina o impresa.
>
> "Tratándose de bienes que ostenten marcas, etiquetas o leyendas que los distingan como originarios de países no Parte del Tratado, se presumirá que no son originarios y no podrán importarse de conformidad con lo dispuesto en la presente Regla."

De la regla aludida se desprende, entre otros, que la importación de bienes originarios cuyo valor no exceda del equivalente en moneda nacional a mil dólares de Estados Unidos de América y su equivalente en otras monedas extranjeras, **no requerirá certificado de origen,** siempre y cuando dicha importación no forme parte de una serie de importaciones que se efectúen o se planeen, con el propósito de evadir requisitos de certificación del Tratado.

La actora afirma que por sus importaciones no excedió del valor de 700 dólares americanos y al efecto exhibe las facturas respectivas, las que contienen los siguientes datos: Respecto de la factura traducida al español que corresponde al pedimento 3194-5004600, se consigna:

(TRADUCCIÓN DEL INGLÉS)

FACTURA COMERCIAL
FACTURA DEL CLIENTE NO.:

NO. DE GUÍA AÉREA: 40099307972
FACTURA: 1 DE 1 PÁGINA

EXPORTADOR: **CUENTA NO.: 142795388** **EXPORTADOR:**
TIM CROSBY
PGA TOUR
SAWBRABB 112 BLVD
PONTE VEDRA
FL US **32082**
TEL. NO.: 9042853700
IMPORTADOR (SI ES DIFERENTE AL CONSIGNATARIO)

CONSIGNATARIO: **CUENTA NO.:**
00000000

TOMMY BORTON SR PLAYER
C/O ARLIE TOLIFSON SUPERINTENDENTE
1995 CHRYSLER CUP BOLD PARA PGA TOU
TRES VIDAS ACAPULCO
CARRETERA A BARRA VIEJA
MX
TEL. NO.: 0115274621001
ULT MEJOR: MÉXICO
EXPORTACIÓN: E.U.A.

FECHA DE EXPORTACIÓN: 14 DE FEBRERO DE 1995
FECHA DE ENVÍO: 13 DE FEBRERO DE 1975
NO. DE REFERENCIA DE ENVÍO:

LÍNEA: 001 **SUBLÍNEA: 000** **MARCAS Y NOS.:**

PIEZAS	PESO (L)	CANTIDAD	UNIDAD MÉDIC	VALOR (USD)	VALOR LÍNEA (USD)
0	0.0	1.0		5.00	5.00

HS NO.: 6105.90.01 **PAÍS DE FABRICACIÓN: E.U.A.**

DESCRIPCIÓN:
GORRA

. . . . . .

LÍNEA: 002 **SUBLÍNEA: 000** **MARCAS Y NOS.:**

PIEZAS	PESO (L)	CANTIDAD	UNIDAD MÉDIC	VALOR (USD)	VALOR LÍNEA (USD)
0	0.0	3.0		10.00	20.00

HS NO.: 6105.90.99 **PAÍS DE FABRICACIÓN: E.U.A.**

DESCRIPCIÓN:
VISERAS

. . . . . .

LÍNEA: 003 **SUBLÍNEA: 000** **MARCAS Y NOS.:**

PIEZAS	PESO (L)	CANTIDAD	UNIDAD MÉDIC	VALOR (USD)	VALOR LÍNEA (USD)
0	0.0	3.0		95.00	285.00

HS NO.: 6203.41.01 **PAÍS DE FABRICACIÓN: E.U.A.**

DESCRIPCIÓN:
PANTALÓN PARA HOMBRE

. . . . . .

LÍNEA: 004 **SUBLÍNEA: 000** **MARCAS Y NOS.:**

PIEZAS	PESO (L)	CANTIDAD	UNIDAD MÉDIC	VALOR (USD)	VALOR LÍNEA (USD)
0	0.0	1.0		110.00	110.00

HS NO.: 6203.33.01 **PAÍS DE FABRICACIÓN: E.U.A.**

DESCRIPCIÓN:
SACO PARA HOMBRE

. . . . . .

LÍNEA: 005 **SUBLÍNEA: 000** **MARCAS Y NOS.:**

PIEZAS	PESO (L)	CANTIDAD	UNIDAD MÉDIC	VALOR (USD)	VALOR LÍNEA (USD)
0	0.0	1.0		30.00	30.00

HS NO.: 6211.39.99 **PAÍS DE FABRICACIÓN: G.B.**

DESCRIPCIÓN:
SUDADERA PARA HOMBRE

. . . . . .

LÍNEA: 006 **SUBLÍNEA: 000** **MARCAS Y NOS.:**

PIEZAS	PESO (L)	CANTIDAD	UNIDAD MÉDIC	VALOR (USD)	VALOR LÍNEA (USD)
0	0.0	5.0		50.00	250.00

HS NO.: 6211.39.99 **PAÍS DE FABRICACIÓN: E.U.A.**

DESCRIPCIÓN:
CAMISAS PARA HOMBRE

PROPÓSITO DE ENVÍO:
LIBRE A BORDO **SUBTOTAL (USD): 700.**

TOTALES: PIEZAS: 1 PESO (L): 25.0 VALOR (UDS): 700.

ESTA MERCANCÍA FUE FABRICADA EN E.U.A. Y ESCOCIA

DECLARO QUE TODA LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTA FACTURA ES

FIEL Y CORRECTA.

[Rúbrica]
TIM CROSBY **14 DE FEBRERO DE 1995**
FIRMA DEL EXPORTADOR **NOMBRE**

En la factura traducida al español relativa al pedimento 3194-5004621, se consigna:

(TRADUCCIÓN DEL INGLÉS)
FACTURA COMERCIAL
FACTURA DEL CLIENTE NO.:
NO. DE GUÍA AÉREA: 40099307983
FACTURA: 1 DE 1 PÁGINA
EXPORTADOR: **CUENTA NO.: 142795388** **EXPORTADOR:**
TIM CROSBY
PGA TOUR
SAWBRABB 112 BLVD
PONTE VEDRA
FL US **32082**
TEL. NO.: 9042853700
IMPORTADOR (SI ES DIFERENTE AL CONSIGNATARIO)
CONSIGNATARIO: **CUENTA NO.: 00000000**
TOMMY BORTON SR PLAYER
C/O ARLIE TOLIFSON SUPERINTENDENTE
1995 CHRYSLER CUP BOLD PARA PGA TOU
TRES VIDAS ACAPULCO
CARRETERA A BARRA VIEJA
MX
TEL. NO.: 0115274621001
ULT MEJOR: MÉXICO
EXPORTACIÓN: E.U.A.
FECHA DE EXPORTACIÓN: 14 DE FEBRERO DE 1995
FECHA DE ENVÍO: 13 DE FEBRERO DE 1975
NO. DE REFERENCIA DE ENVÍO:

LÍNEA: 001 **SUBLÍNEA: 000** **MARCAS Y NOS.:**

PIEZAS	PESO (L)	CANTIDAD	UNIDAD MÉDIC	VALOR (USD)	VALOR LÍNEA (USD)
0	0.0	2.0		10.00	20.00

HS NO.: 6505.90.99

PAÍS DE FABRICACIÓN:
E.U.A.

DESCRIPCIÓN:
VISERA

. . . . . .

LÍNEA: 002 **SUBLÍNEA: 000** **MARCAS Y NOS.:**

PIEZAS	PESO (L)	CANTIDAD	UNIDAD MEDIC	VALOR (USD)	VALOR LÍNEA (USD)
0	0.0	3.0		95.00	285.00

HS NO.: 6203.41.01

PAÍS DE FABRICACIÓN:
E.U.A.

DESCRIPCIÓN:
PANTALÓN PARA HOMBRE

. . . . . .

LÍNEA: 003 **SUBLÍNEA: 000** **MARCAS Y NOS.:**

PIEZAS	PESO (L)	CANTIDAD	UNIDAD MÉDIC	VALOR (USD)	VALOR LÍNEA (USD)
0	0.0	1.0		5.00	5.00

HS NO.: 6505.90.01

PAÍS DE FABRICACIÓN:
E.U.A.

DESCRIPCIÓN:
GORRA

. . . . . .

LÍNEA: 004 **SUBLÍNEA: 000** **MARCAS Y NOS.:**

PIEZAS	PESO (L)	CANTIDAD	UNIDAD MÉDIC	VALOR (USD)	VALOR LÍNEA (USD)
0	0.0	1.0		110.00	110.00

HS NO.: 6203.39.99

PAÍS DE FABRICACIÓN:
E.U.A.

DESCRIPCIÓN:
SACO PARA HOMBRE

. . . . . .

LÍNEA: 005 **SUBLÍNEA: 000** **MARCAS Y NOS.:**

PIEZAS	PESO (L)	CANTIDAD	UNIDAD MÉDIC	VALOR (USD)	VALOR LÍNEA (USD)
0	0.0	5.0		50.00	250.00

HS NO.: 6105.10.01

PAÍS DE FABRICACIÓN:
G.B.

DESCRIPCIÓN:
PLAYERA PARA HOMBRE

. . . . . .

LÍNEA: 006 **SUBLÍNEA: 000** **MARCAS Y NOS.:**

PIEZAS	PESO (L)	CANTIDAD	UNIDAD MÉDIC	VALOR (USD)	VALOR LÍNEA (USD)
0	0.0	1.0		30.00	30.00

HS NO.: 6211.39.99

PAÍS DE FABRICACIÓN:
G.B.

DESCRIPCIÓN:
SUDADERA DEPORTIVA PARA HOMBRE

PROPÓSITO DE ENVÍO:
LIBRE A BORDO **SUBTOTAL (USD): 700.**

TOTALES: PIEZAS: 1 PESO (L): 10.0 **VALOR (UDS): 700.**

ESTA MERCANCÍA FUE FABRICADA EN E.U.A. Y ESCOCIA

DECLARO QUE TODA LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTA FACTURA ES
FIEL Y CORRECTA.

[Rúbrica]
TIM CROSBY **14 DE FEBRERO DE 1995**
FIRMA DEL EXPORTADOR **NOMBRE**

Ahora bien, esta Juzgadora valora las facturas antes citadas, en términos de lo dispuesto por el artículo 234 del Código Fiscal de la Federación y considera que en el caso si bien son copias simples, es evidente que la autoridad no las controvirtió en cuanto a su contenido y valor probatorio, no obstante que se le corrió el traslado respectivo junto con la demanda interpuesta por la actora, sin embargo, no las objeta en su contestación.

En esa virtud, del análisis que se hace de dichas facturas se desprende que efectivamente en cada una de ellas el valor total de la mercancía importada es de 700 dólares americanos, lo que quiere decir que se ubica en la primera parte del primer párrafo de la regla 31 citada, esto es, como el valor de las mercancías es de 700 dólares por cada pedimento, es evidente que no excede de los mil dólares ahí previstos, por lo que, señala la citada regla, no se requerirá certificado de origen; pero siempre que dicha importación no forme parte de una serie de importaciones que se efectúen o se planeen con el propósito de evadir los requisitos de certificación del Tratado.

Efectivamente la aludida regla prevé la situación de que no se requerirá del certificado de origen en el caso ya citado, pero siempre que dicha importación no forme parte de una serie de importaciones, cuestión que no se da respecto de los pedimentos en mención.

Basta hacer un análisis comparativo de las mercancías importadas en los pedimentos de que se tratan y sus respectivas facturas, para concluir que forman parte de una serie de importaciones:

PEDIMENTO 3194-5004600	PEDIMENTO 3194-5004621
Gorra materias textiles Viseras de materias textiles Pantalones para hombre excepto de punto 100% lana Saco p/hombre 55% poliéster 45% lana excepto punto. Sudadera Sudadera para hombre excepto de punto 50% poliéster (escocia) Camisas para hombre 100% algodón 50% algodón, 50% poliéster de punto.	Viseras. Pantalones 100% lana p/hombre excepto de punto. Gorra. Saco p/hombre 55% poliester 45% lana excepto de punto. Playeras p/hombre 100% algodón y 60% algodón 40% poliester de punto Sudadera deportiva p/hombre.

FACTURA CORRESPONDIENTE AL PEDIMENTO 3194-5004600	FACTURA CORRESPONDIENTE AL PEDIMENTO 3194-5004621
Gorra Viseras Pantalón para hombre Saco para hombre Sudadera para hombre Camisas para hombre Sudadera deportiva para hombre.	Visera Pantalón para hombre Gorra Saco para hombre Playeras para hombre Sudadera deportiva para hombre

Conforme a las anteriores comparaciones es evidente que no se dan los supuestos a que se refiere la regla 31 aludida, pues es evidente que las importaciones de que se tratan forman parte de una serie de importaciones, atendiendo a la mercancía que ahí se describe, aun cuando cada pedimento no rebasa los 1000 dólares de los Estados Unidos de América.

En consecuencia, es **INFUNDADO** el agravio planteado en ese sentido, asistiéndole la razón a la autoridad en la resolución impugnada, al señalar que respecto de tales importaciones se efectuaron sin haber tramitado el certificado de origen debidamente requisitado; entonces la actora no acreditó que la mercancía de que se trata no es originaria de la República Popular de China.

Por consecuencia, es legal la aplicación de cuotas compensatorias que se identifican en la hoja 18 de la resolución impugnada, en cantidades de $ 5,996.00, $480.00, $2,638.00, $6,838.00, $720.00, $5,996.00, $2,683.00 y $6,838.00, excepto la aplicada en suma de $6,167.00 que se refiere a otro pedimento de importación, y de la que esta Juzgadora, en la parte conducente de esta sentencia consideró ilegal.

(...)

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 236, 237, 238, fracción IV y 239, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, se resuelve:

I.- Es parcialmente fundada la pretensión de la parte actora, en consecuencia;

II.- Se declara la nulidad de la resolución impugnada, conforme a lo razonado en la parte conducente del considerando cuarto de esta sentencia y para el efecto señalado en el mismo.

III.- Se declara la nulidad de la multa impuesta en suma de $169,559.00 por ser fija.

IV.- Se reconoce la validez de la multa impuesta en suma de $1,000.00 (UN MIL PESOS 00/100 M.N.) en los términos expuestos en el considerando cuarto de este fallo.

V.- NOTIFÍQUESE.- Con copia autorizada de esta resolución, devuélvase el expediente a la Sala Regional del Pacífico una vez que haya quedado firme o, en su

caso, se resuelva en definitiva el presente asunto, y en su oportunidad, archívese este expediente.

Así lo resolvió la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 9 de agosto de 2001, por mayoría de 4 votos a favor de los CC. Magistrados Alejandro Sánchez Hernández, Silvia Eugenia Díaz Vega, Luis Carballo Balvanera y Guillermo Domínguez Belloc y 1 en contra del C. Magistrado Francisco Valdés Lizárraga.

Fue Ponente en el presente asunto la C. Magistrada Licenciada Silvia Eugenia Díaz Vega, cuya ponencia fue aprobada.

Se elaboró el presente engrose el 14 de agosto de 2001, y con fundamento en lo previsto por los artículos 22, fracción III y 37, fracción III, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, firma el C. Magistrado Guillermo Domínguez Belloc, Presidente de la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ante el Lic. Mario Meléndez Aguilera, Secretario Adjunto de Acuerdos, quien da fe.

SEGUNDA PARTE

CRITERIOS AISLADOS

SALA SUPERIOR

SEGUNDA SECCIÓN

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

CADUCIDAD DE LAS FACULTADES DE LAS AUTORIDADES FISCALES.- ARTÍCULO 67 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.- La extinción de las facultades de las autoridades fiscales para determinar las contribuciones omitidas y sus accesorios, así como para imponer sanciones, establecida en el artículo 67 del Código Fiscal de la Federación, es una institución de carácter adjetivo (procedimental), en tanto que se refiere al plazo de que disponen para el ejercicio de sus facultades de revisión y de determinación de obligaciones fiscales, así como para imponer las sanciones que procedan por infracciones a las leyes tributarias, en tanto que no se comprenden conceptos de carácter sustantivo, como lo son: el sujeto, el objeto, la base, la tasa o tarifa de las contribuciones, pues sólo regula el tiempo que le concede la ley a la autoridad tributaria para iniciar un procedimiento y aplicar las sanciones que se deriven de las infracciones que sean imputables a los sujetos pasivos de la relación tributaria. No sólo son procedimentales las normas jurídicas que se refieren a los actos integrantes de un procedimiento, sino aquellas otras que atribuyen facultades a la autoridad para iniciarlo, así como las que afectan la continuidad y atañen a la eficacia del mismo, tal es el caso de los presupuestos procesales o procedimentales, como: la competencia, la legitimación y la personalidad; o bien, la caducidad. Consecuentemente, se apega a este criterio doctrinario el texto del artículo 67 del Código Fiscal de la Federación, en tanto dispone que el plazo de la caducidad no está sujeto a interrupción y sólo se suspenderá cuando se ejerzan las facultades de comprobación de las autoridades fiscales a que se refieren las fracciones III y IV del artículo 42 del Código Tributario Federal, y cuando se interponga un recurso administrativo o algún juicio. (1)

Juicio No. 352/98-04-01-2/99-S2-09-04.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 12 de junio de 2001, por mayoría de 3 votos a favor y 2 en contra.- Magistrado Ponente: Luis Carballo Balvanera.- Secretaria: Lic. Luz María Anaya Domínguez.
(Tesis aprobada en sesión de 12 de junio de 2001)

PRECEDENTES:

IV-P-2aS-45
Juicio No. 100(14)23/98/4238/97.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Fiscal de la Federación, en sesión de 8 de septiembre de 1998, por mayoría de 4 votos a favor y 1 más con los resolutivos.- Magistrado Ponente: Dr. Gonzalo Armienta Calderón.- Secretario: Lic. José Antonio Rodríguez Martínez.

V-P-2aS-79
Juicio No. 12921-a/98-11-11-2/99-S2-09-04.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 8 de mayo de 2001, por unanimidad de 5 votos a favor.-Magistrado Ponente: Luis Carballo Balvanera.- Secretaria: Lic. Luz María Anaya Domínguez

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

COSA JUZGADA.- Existe cosa juzgada, sólo cuando hay un pronunciamiento expreso por este Tribunal; de tal manera, que si en un primer juicio el actor no argumentó que la orden de visita domiciliaria fuera genérica y obtuvo la nulidad para determinados efectos, que no involucró el estudio de ese vicio, no se puede decir que existe cosa juzgada respecto de tal argumento; en consecuencia, válidamente se puede plantear en el segundo juicio, que la orden de visita resulta genérica. (2)

Juicio No. 352/98-04-01-2/99-S2-09-04.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 12 de junio de 2001, por mayoría de 3 votos a favor y 2 en contra.- Magistrado Ponente: Luis Carballo Balvanera.- Secretaria: Lic. Luz María Anaya Domínguez.
(Tesis aprobada en sesión privada de 12 de junio de 2001)

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

NULIDAD PARA EFECTOS POR VICIOS EN EL PROCEDIMIENTO.- EN EL NUEVO JUICIO SE PUEDEN HACER VALER TODOS LOS CONCEPTOS DE IMPUGNACIÓN QUE SE ESTIMEN PROCEDENTES.- En el juicio contencioso administrativo se deben distinguir dos situaciones diversas, por un lado, cuando a través de una sentencia emitida por este Tribunal, se estudia el fondo del asunto y se ordena a la autoridad emitir otra resolución siguiendo determinados lineamientos, se está en presencia de una facultad reglada, misma que la autoridad deberá cumplir de manera exacta y sin excederse; por su parte, el particular no podrá, al ser notificado de esa resolución en cumplimiento, promover un juicio contencioso en el que pretenda argumentar vicios de procedimiento o cuestiones que pretendan demostrar la ilegalidad de la resolución, en la parte que ya se pronunció este Tribunal en el primer juicio. Caso distinto es, cuando a través de una sentencia emitida por este Tribunal, se declara la nulidad de la resolución impugnada, porque existió un vicio en el procedimiento, y se deja a la autoridad en libertad de reponer el procedimiento si lo estima pertinente, ya que en ese supuesto, se trata del ejercicio de una facultad discrecional de la autoridad y, por lo tanto, si el particular decide concurrir a juicio en contra de la nueva resolución, podrá hacer valer todos los conceptos de impugnación que estime procedentes, tanto de forma como de fondo, con la única limitación que este Tribunal no se haya pronunciado al respecto, pues de ser así, es claro que habrá cosa juzgada respecto de las cuestiones ya analizadas. (3)

Juicio No. 352/98-04-01-2/99-S2-09-04.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 12 de junio de 2001, por mayoría de 3 votos a favor y 2 en contra.- Magistrado Ponente: Luis Carballo Balvanera.- Secretaria: Lic. Luz María Anaya Domínguez.
(Tesis aprobada en sesión privada de 12 de junio de 2001)

C O N S I D E R A N D O :

(...)

QUINTO.- (...)

En efecto, al dictar el fallo correspondiente, la Sala Superior de este Tribunal se limitó a declarar la nulidad de la resolución impugnada, para el efecto de que se declarara nulo el procedimiento de visita, a partir de que se cometió la violación de la indebida circunstanciación de la identificación de los visitadores y, por ende, quedó en libertad la autoridad de reponer el procedimiento, ejerciendo sus facultades discrecionales y, en su momento, de ser procedente, emitir la resolución que en derecho procediera, tal y como aconteció en el caso.

En ese orden de ideas, es claro que se deben distinguir dos situaciones diversas, por un lado, cuando a través de una sentencia emitida por este Tribunal se estudia el fondo del asunto y se ordena a la autoridad emitir otra resolución siguiendo determinados lineamientos, se está en presencia de una facultad reglada, misma que la autoridad deberá cumplir de manera exacta y sin excederse; por su parte, el particular no podrá, al ser notificado de esa resolución en cumplimiento, promover un juicio contencioso en el que pretenda argumentar vicios de procedimiento o cuestiones que argumenten la ilegalidad de la resolución en la parte que ya se pronunció este Tribunal en el primer juicio. Caso distinto es, cuando a través de una sentencia emitida por este Tribunal, se declara la nulidad de la resolución impugnada porque existió

un vicio en el procedimiento y se deja a la autoridad en libertad de reponer el procedimiento si lo estima pertinente, ya que en ese supuesto se trata del ejercicio de una facultad discrecional de la autoridad y, por lo tanto, si el particular decide concurrir a juicio en contra de la nueva resolución, podrá hacer valer todos los conceptos de impugnación que estime procedente, tanto de forma como de fondo, con la única limitación que este Tribunal no se haya pronunciado al respecto, pues de ser así, es claro que habrá cosa juzgada respecto de las cuestiones ya analizadas.

2.- En el juicio contencioso administrativo existe cosa juzgada sólo cuando hay un pronunciamiento expreso por este Tribunal, de tal manera, que si en un primer juicio el actor no argumentó que la orden de visita domiciliaria fuera genérica y obtuvo la nulidad para determinados efectos, que no involucró el estudio del fondo del asunto, no se puede decir que existe cosa juzgada respecto de tal argumento, toda vez que la Sala Superior de este Tribunal, al emitir la sentencia definitiva de fecha 27 de junio de 1995, no se pronunció al respecto, pues, incluso, no fue planteado ese argumento por el actor en el juicio 100(14)457/94/312/94.

Para corroborar lo anterior, basta con remitirse a la copia certificada de la sentencia antes mencionada, exhibida por el actor y que obra a fojas 193 a 240 del expediente principal, de la que se desprende que no existió ningún pronunciamiento con relación a que la orden de visita fuera genérica, por lo tanto, no se puede afirmar que, en la especie, hay cosa juzgada, ya que no hay un pronunciamiento por este Tribunal.

3.- De otra parte, tampoco puede afirmarse que existe consentimiento del actor con la orden de visita. Al respecto, tenemos que la Primera Sección de esta Sala Superior, al resolver un asunto de iguales características, emitió el siguiente precedente, mismo que resulta plenamente aplicable al presente juicio.

> **“ACTO CONSENTIDO.- SU NATURALEZA Y ALCANCES JURÍDICOS EN EL JUICIO DE NULIDAD.-** De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 202, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, el juicio de

nulidad seguido ante el Tribunal Fiscal de la Federación resulta improcedente en contra de actos respecto de los cuales hubiese consentimiento, entendiéndose por ello únicamente cuando no se promovió algún medio de defensa en su contra en los términos de las leyes respectivas o juicio ante el Tribunal Fiscal, en los plazos que señala el mencionado Código. Ahora bien, si se emite una liquidación a virtud de la reposición de un procedimiento fiscalizador por haberse declarado anteriormente la nulidad de una resolución que derivó de éste por la indebida identificación de los visitadores, debe concluirse que dicha resolución es nueva, autónoma e independiente de la anteriormente anulada, y por lo tanto el contribuyente afectado por la misma, puede combatir su validez sin limitación alguna respecto de todos los motivos y fundamentos que la sostienen, precisamente porque esa nueva actuación debe estar revestida de legalidad de manera integral, y produce efectos legales propios en el ámbito administrativo, del todo independientes del acto anterior que quedó por completo anulado. En conclusión, si el demandante advierte una violación en la orden de visita puede válidamente hacerla valer en juicio de nulidad al impugnar la nueva resolución liquidatoria que deriva de ella, no obstante no haber planteado ese argumento en el primer juicio, dado que esa circunstancia no se traduce en acto consentido, ya que este es el momento procesal oportuno para ejercer su derecho, habida cuenta que los efectos directos y precisos de la sentencia de nulidad dictada con anterioridad y que juzgó la indebida identificación de los visitadores, concluyeron cuando la demandada dejó insubsistente el procedimiento y no cuando emitió el acto nuevo. (5)

"Juicio de Nulidad No. 100(14)10/95(2)1598/94-II.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Fiscal de la Federación en sesión de 8 de octubre de 1996, por mayoría de 4 votos a favor de la ponencia.- Magistrada Ponente: Ma. del Consuelo Villalobos Ortíz.- Secretario: Lic. Roberto Bravo Pérez.
"(Tesis aprobada en sesión de 8 de octubre de 1996)"

4.- Por último, contrariamente a lo sostenido por la autoridad en su contestación, en la especie no se puede tener por consentida la orden de visita, pues si bien es cierto que el actor no promovió juicio de amparo en su contra, también lo es que sí promovió el presente juicio contencioso administrativo dentro del término legal en contra de la nueva liquidación, sustentada en un procedimiento de fiscalización que tiene su inicio, precisamente en la orden de visita cuestionada, tal impugnación es oportuna y en modo alguno resulta aplicable el artículo 202, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, que sólo se refiere a actos definitivos, características de la cual carece la mencionada orden, de tal manera que en este juicio válidamente pueden hacerse valer las omisiones o la ilegalidad de la mencionada orden, como vicios que trascienden a la liquidación final y definitiva que ha sido controvertida precisamente en este juicio.

En efecto, de acuerdo al artículo 202, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, un acto definitivo es consentido únicamente cuando no se promovió juicio ante este Tribunal en los plazos señalados en el propio Código, lo cual no ocurrió en la especie, ya que se está ventilando el presente juicio en contra de la resolución que liquidó un crédito a cargo del actor y que deriva precisamente de la orden de visita que el actor argumenta, es ilegal.

En ese orden de ideas, se debe concluir que al ser un acto nuevo la resolución impugnada, se restablecen también con su vigencia las defensas del particular afectado con dicha resolución, lo que hace procedente el alegato que nos ocupa referente a vicios propios de la orden de visita que culminó con la resolución impugnada en el juicio.

(...)

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos, 38, 236, 237, 238, fracción II, 239, fracción III, y 239-A, fracción I, inciso a), del Código Fiscal de la Federación, en relación con el 20, fracción I, inciso c), de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se resuelve:

I.- En cumplimiento a la ejecutoria dictada en el recurso de revisión R.F. 584/ 2000 se deja insubsistente la sentencia de 28 de octubre de 1999, dictada por esta Segunda Sección, en la parte materia de la revisión.

II.- La actora probó sus pretensiones, en consecuencia;

III.- Se declara la nulidad de las resoluciones impugnadas, en los términos señalados en los considerandos quinto y sexto de este fallo.

IV.- Mediante atento oficio que al efecto se gire, remítase copia de esta sentencia al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, para que obre en su expediente y como prueba del cumplimiento a su ejecutoria.

V.- NOTIFÍQUESE con copia autorizada de la presente resolución; una vez que quede firme, devuélvanse los autos a la **SALA REGIONAL DE OCCIDENTE** y, en su oportunidad, archívese este expediente como concluido.

Así lo resolvió la Segunda Sección de la H. Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 12 de junio de 2001, por mayoría de tres votos a favor de los CC. Magistrados Francisco Valdés Lizárraga, Alejandro Sánchez Hernández y Luis Carballo Balvanera, y dos en contra de los Magistrados Silvia Eugenia Díaz Vega y Guillermo Domínguez Belloc, quienes se reservaron su derecho para formular voto particular.

Fue ponente en el presente asunto el Magistrado Luis Carballo Balvanera, cuya ponencia fue aprobada en sus términos.

Se formuló el presente engrose el día 27 de junio de 2001, y con fundamento en lo previsto por los artículos 22, fracción III, y 37, fracción III, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, firma el Magistrado Guillermo Domínguez Belloc, Presidente de la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ante el Licenciado Mario Meléndez Aguilera, Secretario Adjunto de Acuerdos, quien da fe.

SALAS REGIONALES

OCTAVA SALA REGIONAL METROPOLITANA

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

INCIDENTE DE SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN. QUEDA SIN MATERIA.- Concedido el amparo y protección de la justicia federal, en contra de una sentencia interlocutoria, que resuelve el incidente de suspensión de la ejecución, para su cumplimiento debe tomarse en consideración la sentencia que resolvió el fondo del juicio principal, cuando ésta se encuentra firme. En caso de que se haya declarado la nulidad de los créditos impugnados, mismos cuya impugnación dio lugar al planteamiento del incidente de suspensión, resulta ocioso ordenar a la autoridad ejecutora en acatamiento a una ejecutoria, que resuelva sobre la garantía que ofreció la enjuiciante, toda vez que el procedimiento administrativo de ejecución, cuya suspensión fue solicitada ha quedado sin materia, en tanto que al haberse declarado la nulidad del oficio determinante, los créditos fiscales que pudieran dar origen al requerimiento de pago ya no existen, y por ende, el procedimiento administrativo de ejecución para obtener su pago carece de sustento, ya que es obvio que la autoridad se ve impedida de ejecutar el cobro de los créditos fiscales que fueron declarados nulos de pleno derecho. (1)

Juicio No.- 11178/99-11-08-3.- Sentencia de la Octava Sala Regional Metropolitana, de 19 de marzo del 2001, aprobada por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Rosa María del Pilar Fajardo Ambía.- Secretario: Lic. Enrique Asención Bruno.

C O N S I D E R A N D O :

(...)

SEGUNDO.- (...)

Ilegalidad que se confirma por el hecho de que el propio Administrador Local de Recaudación del Norte del Distrito Federal, al rendir su informe en el incidente, reconoció que cometió un error de apreciación al momento de negar la admisión de la garantía ofrecida por la enjuiciante, puesto contrario a lo que afirmó en el oficio 322-SAT-R8-L62-II-6-5-3630, del 26 de enero de 2000, la empresa que fungiría como garante obtuvo utilidad fiscal en el ejercicio de 1998, como consta a folios 271 y 272 de autos, de modo que lo procedente es declarar fundado el incidente de suspensión de la ejecución que se estudia.

No obstante lo anterior, esta Juzgadora se abstiene de ordenar al Administrador Local de Recaudación del Norte del Distrito Federal, resuelva sobre la garantía que ofreció la promovente a través del escrito que presentó el 5 de agosto de 1999, toda vez que el procedimiento administrativo de ejecución, cuya suspensión fue solicitada ha quedado sin materia.

Lo anterior es así, teniendo en cuenta que el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, por ejecutoria de 05 de enero de 2001, dictada en el recurso de revisión fiscal R.F.- 297/2000, resolvió infundado el recurso de revisión y confirmó la sentencia dictada por esta Sala el 21 de febrero de 2000, **en la que se declaró la nulidad** de la resolución contenida, en el oficio número 324-SAT-R8-L62-16472, mediante la cual se le impusieron las multas en cantidad total de $878,030.50, por lo que si los créditos fiscales que pudieran dar origen al requerimiento de pago ya no existen, es evidente que el procedimiento de ejecución para obtener su pago carece de sustento.

En resumen, si la sentencia definitiva de 21 de febrero de 2000, en la que esta Sala resolvió el fondo del asunto y declaró la nulidad de la resolución que impuso las multas, se encuentra firme por virtud de la ejecutoria dictada por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el 5 de enero de 2001, y en la que se resolvió infundado el recurso de revisión y confirmó la sentencia en comento; por los efectos de la sentencia confirmada y ejecutoriada, es obvio que la autoridad se ve impedida de ejecutar el cobro de los créditos fiscales que fueron declarados nulos de pleno derecho, pues ante la inexistencia de los créditos hace improcedente su cobro.

Por lo expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 227 y 228 del Código Fiscal de la Federación, se resuelve:

I.- Se declara fundado el incidente de suspensión de la ejecución promovido por la actora, sin decretar por consecuencia la suspensión del procedimiento respectivo, por las razones anotadas al finalizar el considerando segundo del presente fallo.

II.- En vía de informe con atento oficio que al efecto se gire, remítase copia certificada de la presente sentencia del Juzgado Cuarto de Distrito en el Distrito Federal, en testimonio del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en el juicio de amparo indirecto P-605/2000, así como copia certificada de la ejecutoria dictada por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el 5 de enero de 2001, en el recurso de revisión fiscal R.F.-297/2000.

III.- NOTIFÍQUESE

Así lo resolvieron y firman por unanimidad de votos los Magistrados que integran la Octava Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Lic. Rosa María del Pilar Fajardo Ambía, como Instructora del juicio, la Lic. Victoria Lazo Castillo y Lic. Rafael Ibarra Gil, como Presidente ante el Lic. Enrique Asención Bruno, Secretario de Acuerdos, quien actúa y da fe.

LEY DEL IMPUESTO AL ACTIVO

IMPUESTO AL ACTIVO ACREDITADO. MODIFICACIÓN DE ELECCIÓN EN LA DETERMINACIÓN DEL. AFECTA DEVOLUCIÓN DE SALDO A FAVOR DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.- El artículo 2º de la Ley del Impuesto al Activo, prevé la regla general para la determinación del impuesto correspondiente, al establecer que los contribuyentes lo determinarán por ejercicios fiscales aplicando al valor de su activo en el ejercicio, la tasa del 1.8%, precisando enseguida el procedimiento que debe seguirse para calcular el valor del activo, el cual en el caso de que el contribuyente quisiera cambiarlo, conforme a lo previsto en el antepenúltimo párrafo del referido precepto legal, deberá cumplir con las reglas que al efecto establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, esto es, el precepto legal en comento establece la primera opción a la que a elección del contribuyente puede acogerse para determinar y cubrir el impuesto al activo. Por su parte el artículo 5º-A, establece que los contribuyentes podrán determinar el impuesto del ejercicio, considerando el que resulte de actualizar el que les hubiera correspondido en el cuarto ejercicio inmediato anterior de haber estado obligados al pago del impuesto en dicho ejercicio, estableciendo el mecanismo a seguir, con la condición establecida en su último párrafo, de que una vez ejercida la opción que establece este artículo, el contribuyente deberá pagar el impuesto con base en la misma por los ejercicios subsecuentes, incluso cuando se deba pagar este impuesto en el periodo de liquidación; lo que quiere decir que el contribuyente ya no podrá aplicar en los ejercicios subsecuentes el procedimiento establecido por el artículo 2º de la Ley del Impuesto al Activo. De lo anterior, tomando en consideración que contra el impuesto al activo causado en un ejercicio es factible acreditar el impuesto sobre la renta enterado por ese mismo periodo y que en ese sentido existiendo un saldo a favor por concepto de impuesto sobre la renta ese se verá incrementado si el impuesto al activo contra el que se puede acreditar es menor, es por ello que le asiste la razón a la autoridad demandada, al negar la devolución por la cantidad solicitada, porque como lo sostiene en su resolución, la enjuiciante cambió la vía para determinar las contribuciones en un mismo ejercicio, ya que al haber elegido como primera opción al presentar su

declaración anual normal la prevista por el artículo 2º de la Ley del Impuesto al Activo, en la declaración complementaria modificó el régimen que había escogido con antelación, situación que el artículo 6º del Código Fiscal de la Federación prohibe, al establecer que una vez que el contribuyente ha elegido un procedimiento para determinar su impuesto al activo a cargo de entre las diferentes opciones que la Ley prevé, no podrá variar ésta durante el mismo ejercicio fiscal, y si la accionante ya había optado por la regla general prevista en dicho ordenamiento, resulta por lo tanto, del todo improcedente que en su declaración complementaria del ejercicio modificara de procedimiento en el mismo ejercicio. (2)

Juicio No. 1257/00-11-08-3.- Sentencia de la Octava Sala Regional Metropolitana, de 2 de agosto del 2000, aprobada por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Rosa María del Pilar Fajardo Ambía.- Secretario: Lic. Enrique Asención Bruno.

C O N S I D E R A N D O :

(...)

TERCERO.- (...)

Del análisis efectuado a los preceptos legales transcritos, este Órgano jurisdiccional concluye que la demandada acertadamente se sustenta en declaraciones del impuesto al activo para negar la devolución del saldo a favor en el impuesto sobre la renta solicitado, pues contra aquél la ley permite acreditar el impuesto sobre la renta pagado. En otras palabras, pagado el impuesto sobre la renta, el impuesto al activo no tendrá que cubrirse y por el contrario, las cantidades que por este último se hubieran cubierto, de haberse también pagado el impuesto sobre la renta, hará procedente su devolución, y si como en el caso acontece, existe un saldo a favor en el impuesto sobre la renta, entre menor sea el impuesto al activo contra el que aquél se pueda acreditar, el saldo a favor se incrementa, y de ahí se comprende que la dismi-

nución al impuesto al activo que se pretendió en la especie, obviamente que incrementa el saldo a favor existente en impuesto sobre la renta.

Por otra parte, contrariamente a lo afirmado por la demandante, del contenido de los artículos analizados se aprecia que prevén dos maneras distintas para que los contribuyentes a su elección, determinen y paguen el impuesto al activo a su cargo.

Lo anterior es así, toda vez que el artículo 2º, prevé la regla general para la determinación del impuesto correspondiente, al prever que los contribuyentes lo determinarán por ejercicios fiscales aplicando al valor de su activo en el ejercicio, la tasa del 1.8%, precisando enseguida el procedimiento que debe seguirse para calcular el valor del activo, el cual en el caso de que el contribuyente quisiera cambiarlo, conforme a lo previsto en el último párrafo deberá cumplir con las reglas que al efecto establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, esto es, el precepto legal en comento establece la primera opción a la que a elección del contribuyente puede acogerse para determinar y cubrir el impuesto al activo.

Por su parte el artículo 5º-A, establece que los contribuyentes podrán determinar el impuesto del ejercicio, considerando el que resulte de actualizar el que les hubiera correspondido en el cuarto ejercicio inmediato anterior de haber estado obligados al pago del impuesto en dicho ejercicio, estableciendo el mecanismo a seguir, con la condición establecida en su último párrafo, de que una vez ejercida la opción que establece este artículo, el contribuyente deberá pagar el impuesto con base en la misma por los ejercicios subsecuentes, incluso cuando se deba pagar este impuesto en el periodo de liquidación; lo que quiere decir que el contribuyente ya no podrá aplicar en los ejercicios subsecuentes el procedimiento establecido por el artículo 2º de la Ley del Impuesto al Activo.

De la declaración anual normal del ejercicio fiscal de 1998 presentada en 26 de febrero de 1999, ante la Institución Bancaria Bital, documento que corre agregado en autos a fojas 26 a 32 se observa, y así lo reconoce expresamente la parte actora, que determinó el impuesto al activo de conformidad con el artículo 2º de la Ley del

Impuesto al Activo, obteniéndose un saldo a cargo en cantidad de $1’205,653.00 por concepto de impuesto al activo, en contra de la cual acreditó el impuesto sobre la renta, para tener un saldo a favor por este último impuesto en cantidad total de $17’543,176.00.

Por otra parte, en la declaración complementaria del mismo ejercicio de 1998, presentada ante la Institución Bancaria Bancomer, S.A. el 27 de abril de 1999, se mira que al aplicar el artículo 5º-A de la citada Ley, el saldo a cargo por concepto del impuesto al activo es de “0”, y es precisamente con base en ello que la demandante modifica el saldo a favor del impuesto sobre la renta, que había determinado en cantidad de $17’543,176.00, para obtener un nuevo saldo a favor de $18’787,649.00, cambiando con ello la primera opción a la que se sujetó la declaración normal, que la autoridad consideró improcedente de conformidad con lo dispuesto por el artículo 6º del Código Fiscal de la Federación y motiva su negativa a acceder la devolución solicitada.

De lo anterior, se tiene, tomando en consideración que contra el impuesto al activo causado en un ejercicio es factible acreditar el impuesto sobre la renta enterado por ese mismo periodo y que en ese sentido existiendo un saldo a favor por concepto de impuesto sobre la renta ese se verá incrementando si el impuesto al activo contra el que se puede acreditar es menor, que le asiste la razón a la autoridad demandada, al negar la devolución por la cantidad solicitada de $18´787,649.00, porque como lo sostiene en su resolución, la enjuiciante cambió la vía para determinar las contribuciones en un mismo ejercicio, ya que al haber elegido como primera opción al presentar su declaración anual normal la prevista por el artículo 2º de la Ley del Impuesto al Activo, en la declaración complementaria modificó el régimen que había escogido con antelación, situación que el artículo 6º del Código Fiscal de la Federación prohibe, al establecer:

> “Artículo 6.- Las contribuciones se causan conforme se realizan las situaciones jurídicas o de hecho, previstas en las leyes fiscales vigentes durante el lapso en que ocurran.
>
> “(...)

"**Cuando las disposiciones fiscales establezcan opciones a los contribuyentes para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales o para determinar las contribuciones a su cargo, la elegida por el contribuyente no podrá variarla respecto al mismo ejercicio.**"

Del análisis a dicho precepto se observa que una vez que el contribuyente ha elegido un procedimiento para determinar su impuesto al activo a cargo de entre las diferentes opciones que la Ley prevé, no podrá variar ésta durante el mismo ejercicio fiscal, y si la accionante ya había optado por la regla general prevista en dicho ordenamiento, por lo tanto, resulta del todo improcedente que en su declaración complementaria del ejercicio modificara de procedimiento en el mismo ejercicio, en los términos del artículo 6º del citado Código.

En este orden de ideas, es incuestionable la improcedencia de la interpretación que hace la parte actora, el sostener que el artículo 5º-A, de la Ley del Impuesto al Activo, es la única opción que ésta otorga para determinar ese impuesto porque en él se establece un procedimiento adicional al normal o general y que el artículo 2º de dicha Ley no constituye otra opción, porque es precisamente el procedimiento general o normal, pues sí tiene una alternativa, y dada su existencia optó por uno de esos procedimientos para determinar su impuesto, evidentemente que agotó una de las opciones que la ley le permite, por lo que de conformidad con el artículo 6º, del Código Fiscal de la Federación y del propio artículo 5º-A de la Ley del Impuesto al Activo, una vez acogida una opción, no podrá, modificarse ésta en un mismo ejercicio.

Por lo expuesto, este Cuerpo Colegiado arriba a la conclusión, de que la actuación de la autoridad demandada se encuentra ajustada a derecho, ya que como se ha acreditado los hechos se apreciaron correctamente, se aplicaron e interpretaron en la forma debida los preceptos en que se funda y si como la propia actora lo señala conforme al artículo 32 del Código Fiscal de la Federación, las declaraciones complementarias sólo modifican los datos de la declaración originalmente presentada, obviamente que ello no significa que con base en dichas declaraciones pueda esco-

ger una opción diferente a la originalmente señalada, puesto que dicha situación se encuentra debidamente regulada por el artículo 6º del mismo Código, de donde deviene la inconsistencia en las declaraciones presentadas por el contribuyente por el ejercicio fiscal de 1998, en que se funda la demandada, para negar la devolución solicitada, razones suficientes para que como se dijo desde un principio se reconozca la legalidad de la resolución materia del presente juicio.

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 236, 237 y 239, fracción I del Código Fiscal de la Federación, se resuelve:

I.- Ha resultado procedente la vía intentada por **ALSTOM T & D, S.A. DE C.V.**

II.- La parte actora no acreditó los extremos de su acción, por lo tanto.

III.- SE RECONOCE LA VALIDEZ de la resolución impugnada, misma que quedó precisada en el resultando 1º de este fallo.

IV.- NOTIFÍQUESE.

Así lo resolvieron y firman por unanimidad de votos los Magistrados que integran la Octava Sala Regional Metropolitana del Tribunal Fiscal de la Federación, Lic. Rosa María del Pilar Fajardo Ambía como Presidenta e Instructora, Lic. Rafael Ibarra Gil y Lic. Celina Macias Raygoza, ante el C. Secretario de Acuerdos: Lic. Enrique Asención Bruno, que da fe.

PRIMERA SALA REGIONAL DEL NOROESTE I

LEY ADUANERA

AGENTE O APODERADO ADUANAL.- ES RESPONSABLE DIRECTO DE PRESENTAR LA FACTURA COMERCIAL EN EL DESPACHO ADUANERO.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 36, párrafo primero, y fracción I, inciso a), 40 y 41 de la Ley Aduanera, el trámite de importación se hace a través de un agente aduanal o apoderado aduanal quien deberá presentar ante la Aduana un pedimento, acompañado de la factura comercial. Dicho agente aduanal es responsable del cumplimiento de las obligaciones previstas, tanto en la Ley Aduanera, como en las demás disposiciones legales, en términos del artículo 54 de la citada Ley Aduanera. Es decir, la intención es obligar a los importadores y exportadores a realizar sus trámites por conducto de agentes y/o apoderados aduanales y, a su vez, constriñe a estos últimos a ser peritos en la materia y a conocer todos los elementos que deben aportarse para el despacho de las mercancías. Por consecuencia, al ser el agente aduanal, responsable directo del cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley Aduanera, en la realización de los trámites relativos al despacho aduanero, puede válidamente ser sancionado por actos u omisiones, pues éstos son imputables directamente a su persona. Por tanto, es correcto sancionar al agente aduanal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 185, fracción I, de la Ley Aduanera, cuando haya omitido presentar la factura comercial de la mercancía sometida al despacho aduanero, pues dicha conducta se encuentra tipificada como infracción en el artículo 184, fracción I, de la propia Ley Aduanera en cita. (3)

Juicio No. 1190/00-01-02-4.- Resuelto por la Sala Regional del Noroeste del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 25 de enero de 2001, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Santiago González Pérez.- Secretaria: Lic. Eréndira Negrete Flores.

C O N S I D E R A N D O :

(...)

CUARTO.- (...)

A juicio de esta Sala, el concepto de anulación en análisis es infundado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 237, párrafo primero, del Código Fiscal de la Federación, así como en los artículos 36, fracción I, inciso a), 40, 41, 53, fracción II, y 54, párrafo primero, de la Ley Aduanera.

El artículo 237, primer párrafo, del Código Fiscal de la Federación establece la obligación a cargo de este Tribunal, de dictar sus sentencias ajustándolas a derecho, resolviendo sobre la pretensión del actor que se deduzca de su demanda.

Por su parte, el artículo 36, párrafo primero, de la Ley Aduanera, dispone que quienes importen o exporten mercancías están obligados a presentar ante la Aduana, **por conducto de un agente y/o apoderado aduanal,** un pedimento en la forma oficial aprobada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La fracción I, inciso a), del numeral en cita, señala que **el pedimento de importación que deba presentar el agente aduanal deberá acompañarse de la factura comercial.**

Por su parte, el artículo 40 de la propia Ley, **contempla como sujetos pasivos de la misma a los agentes aduanales, que en calidad de consignatarios o mandatarios de los importadores y/o exportadores lleven a cabo los trámites relacionados con el despacho de las mercancías.**

En adición a lo anterior, tenemos lo preceptuado por el artículo 41 del ordenamiento legal en cita, donde se prevé expresamente, entre otras situaciones, que los agentes y apoderados aduanales serán representantes legales de los importadores y exportadores, en las actuaciones que deriven del despacho aduanero de las mercan-

cías, siempre que se celebren dentro del recinto fiscal, así como cuando se trate del acta o del escrito a que se refieren los artículos 150 y 152 de esa Ley.

Ahora bien, respecto a la responsabilidad solidaria en el cumplimiento de las obligaciones tributarias impuestas por la legislación aduanera, el artículo 53 del cuerpo legal invocado, es en el siguiente sentido:

> **"Artículo 53.- Son responsables solidarios del pago de los impuestos al comercio exterior y de las demás contribuciones, así como de las cuotas compensatorias que se causen con motivo de la introducción de mercancías al territorio nacional o de su extracción del mismo,** sin perjuicio de lo establecido por el Código Fiscal de la Federación:
>
> "(...)
>
> **"II.- Los agentes aduanales,** por los que se originen con motivo de las importaciones o exportaciones en cuyo despacho aduanero intervengan personalmente o por conducto de sus empleados autorizados.
>
> **"La responsabilidad solidaria comprenderá los accesorios, con excepción de las multas."**
>
> (El subrayado es nuestro)

La calidad y condición de esta relación tributaria, se encuentra más claramente detallada en el artículo 54 de la misma Ley, el cual, a efecto de lograr una mayor claridad en la resolución del punto que nos ocupa, a continuación se transcribe:

> **"Artículo 54.- El agente aduanal será responsable de la veracidad y exactitud de los datos e información suministrados, de la determinación del régimen aduanero de las mercancías y de su correcta clasificación arancelaria, así como del cumplimiento de las demás obligaciones que**

en materia de regulaciones y restricciones no arancelarias rijan para dichas mercancías, de conformidad con lo previsto por esta Ley y por las demás leyes y disposiciones aplicables.”

El párrafo segundo del precepto transcrito, contempla como supuestos de excepción de la responsabilidad solidaria los que se transcriben en líneas siguientes:

“El agente aduanal no será responsable en los siguientes casos:

“I.- Por el pago de las diferencias de contribuciones, cuotas compensatorias, multas y recargos que se determinen, así como por el incumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias, si éstos provienen de la inexactitud o falsedad de los datos y documentos que el contribuyente le hubiera proporcionado al citado agente aduanal, siempre que este último no hubiera podido conocer dicha inexactitud o falsedad al examinar las mercancías, por no ser apreciable a la vista y por requerir para su identificación de análisis químico, o de análisis de laboratorio tratándose de las mercancías que mediante reglas establezca la Secretaría.

“II.- De las contribuciones y, en su caso, cuotas compensatorias omitidas por la diferencia entre el valor declarado y el valor en aduana determinado por la autoridad, cuando se dé alguno de los siguientes supuestos:

“a) Cuando el valor declarado en el pedimento sea inferior al valor de transacción de mercancías idénticas o similares determinado conforme a los artículos 72 y 73 de esta Ley, en menos de 40%.

“b) Cuando las mercancías se encuentren sujetas a precios estimados por la Secretaría, siempre que el valor declarado sea igual o mayor al precio estimado o se haya otorgado la garantía a que se refiere el artículo 86-A, fracción I, de esta Ley.

"III.- De las contribuciones omitidas que se deriven de la aplicación de un arancel preferencial cuando de conformidad con algún tratado o acuerdo internacional del que México sea parte, se requiera de un certificado de origen para gozar de trato arancelario preferencial, siempre que conserve copia del certificado de origen que ampare las mercancías y se asegure que el certificado se encuentra en el formato oficial aprobado para tales efectos, ha sido llenado en su totalidad conforme a su instructivo, se encuentra vigente a la fecha de la importación y el criterio para trato arancelario preferencial asentado en el mismo corresponde a la regla de origen aplicable a las mercancías de que se trate.

"IV.- De las cuotas compensatorias omitidas cuando se importen mercancías idénticas o similares a aquellas que se encuentren sujetas a dichas cuotas, siempre que se conserve copia del certificado de país de origen válido, expedido de conformidad con las disposiciones aplicables y cumpla con lo que establezca el Reglamento.

"Las excluyentes de responsabilidad señaladas en este artículo, no serán aplicables cuando el agente aduanal utilice un Registro Federal de Contribuyentes de un importador que no le hubiera encargado el despacho de las mercancías."

Finalmente, de acuerdo al contexto de todos estos dispositivos, la intención de la legislación aduanera es la de obligar a los importadores a realizar sus trámites por conducto de agentes y apoderados aduanales, y a su vez constriñe a estos últimos a ser **peritos en la materia** y a conocer todos los elementos que deben aportarse para el despacho de las mercancías. Por consecuencia, **el hoy demandante es responsable directo de la veracidad con que se conduzca en la realización de los trámites relativos al despacho aduanero.**

Ciertamente, el argumento en estudio es improsperante, cuenta habida de que el artículo 54 de la Ley de la materia es claro al prever en su párrafo primero, que **el agente aduanal es responsable directo de la veracidad y exactitud de los datos**

e información suministrados, de la determinación del régimen aduanero de las mercancías y de su correcta clasificación arancelaria así como del cumplimiento de las demás obligaciones que en materia de regulaciones y restricciones no arancelarias rijan para dichas mercancías, exceptuándolo de dicha responsabilidad únicamente cuando tales datos provengan de la inexactitud o falsedad de los proporcionados por el contribuyente, siempre y cuando el agente aduanal no hubiere podido conocer de dicha inexactitud o falsedad al examinar las mercancías, por no ser apreciables a simple vista, requiriendo de un análisis químico.

Vinculando esa disposición con el numeral 26 del Código Tributario Federal que establece quiénes **son responsables solidarios en el pago de contribuciones y sus accesorios,** puntualizando que **en materia de sanciones** los responsables solidarios pueden válidamente ser sancionados por **actos u omisiones propios,** como lo fue en la especie, esto es, la demandada dejó precisado que inicialmente el pago de las contribuciones en materia de comercio exterior corre a cargo de los importadores (en este caso), y que además existe responsabilidad solidaria en el entero de esas contribuciones por parte de los Agentes Aduanales, tal y como ha quedado en manifiesto con el análisis de los dispositivos legales examinados en este punto.

En consecuencia, esta Sala considera que el anterior concepto de impugnación resulta infundado, por los siguientes motivos:

Consta en autos que el agente aduanal promovente del presente juicio de nulidad, tramitó el pedimento de importación número 3386-9002835, habiéndose sometido al sistema de selección aleatoria, donde obtuvo como resultado desaduanamiento libre. Sin embargo, tal y como se precisó en el considerando que antecede, la autoridad aduanera procedió a la revisión documental detectándose como irregularidad la omisión de presentar los documentos anexos al pedimento. Asimismo, se acreditó que el agente aduanal no cumplió el requerimiento que se le realizara fuera de procedimiento.

Ahora bien, estas conductas son obligación directa del agente aduanal, de conformidad con los artículos 36, fracción I, inciso a), 40, 41, 53, fracción II, y 54, párrafo primero, de la Ley Aduanera. Y, su incumplimiento se encuentra debidamente delimitado en ley, y se consideran infracciones, en términos de las fracciones I y II del artículo 184 de la Ley Aduanera, cuyo contenido es el siguiente:

> **"Artículo 184.- Cometen las infracciones relacionadas con las obligaciones de presentar documentación** y declaraciones, **quienes:**
>
> **"I. Omitan presentar a las autoridades aduaneras,** o lo hagan en forma extemporánea, **los documentos que amparen las mercancías que importen** o exporten, que transporten o que almacenen, los pedimentos, **facturas,** copias de las constancias de exportación, declaraciones, manifiestos o guías de carga, avisos, relaciones de mercancías, equipaje y pasajeros, autorizaciones, así como el documento en que conste la garantía a que se refiere el artículo 36, fracción I, inciso e), de esta Ley en los casos en que la ley imponga tales obligaciones.
>
> **"II. Omitan presentar los documentos** o informes **requeridos por las autoridades aduaneras dentro del plazo señalado en el requerimiento** o por esta Ley."
>
> (El subrayado es nuestro)

En esa virtud, resulta legal el proceder de la autoridad al indicar en la resolución liquidatoria, que **el Agente Aduanal Ramón Héctor Carrillo López (actor del juicio) incurrió en los supuestos de infracción previstos por el artículo 184, fracciones I y II, de la Ley Aduanera** y, por ende, procedía la imposición de una multa contemplada por el artículo 185, fracción I, de la Ley Aduanera; pues esta es una consecuencia legal de la responsabilidad directa que tiene reconocida por su calidad de agente aduanal.

Por tanto, y dado que el demandante no comprobó los hechos constitutivos de su pretensión, se considera que la resolución controvertida se encuentra ajustada a derecho, por así proceder conforme a las disposiciones fiscales aplicadas, puesto que la autoridad fundó y motivó correctamente su actuación, y la argumentación de la demandante carece de toda lógica jurídica para desvirtuar la legalidad de la resolución a debate, ya que el contribuyente, efectivamente, cometió la infracción detallada por la autoridad aduanera y no le perjudica la actuación de la autoridad, toda vez que los hechos cometidos por el hoy demandante, se adecuan a la hipótesis prevista para la aplicación de la multa determinada.

En mérito de lo antes expuesto y fundado, y con apoyo en los artículos 236, 237 y 239, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, esta Sala

R E S U E L V E :

I.- El actor no probó su pretensión; en consecuencia

II.- Se reconoce la validez de la resolución impugnada.

III.- NOTIFÍQUESE POR CORREO CERTIFICADO CON ACUSE DE RECIBO A LA PARTE ACTORA Y POR OFICIO A LAS AUTORIDADES DEMANDADAS.

Así lo resolvieron y firman, por unanimidad de votos, los **CC. Magistrados Santiago González Pérez, Martín Donís Vázquez y Lucelia M. Vilanueva Olvera,** quienes integran esta Segunda Sala Regional del Noroeste del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ante la C. Secretaria de Acuerdos Licenciada **Eréndira Negrete Flores,** quien da fe.

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

REVISIÓN DE ESCRITORIO O GABINETE.- CUÁNDO DEBE CONSIDERARSE INICIADA ÉSTA, RESPECTO DE CONTRIBUYENTES QUE PRESENTAN SUS ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS.- El artículo 16 de nuestra Carta Magna prevé como potestad de las autoridades administrativas la práctica de ciertos actos de molestia, con la finalidad de que puedan llevar a cabo sus facultades de comprobación. En base a ello pueden exigir la exhibición de los papeles indispensables para comprobar que se han acatado las disposiciones fiscales. Así, el artículo 42, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, enuncia esta facultad fiscalizadora de la siguiente manera: "Artículo 42.- Las autoridades fiscales a fin de comprobar que los contribuyentes, los responsables solidarios o los terceros con ellos relacionados han cumplido con las disposiciones fiscales y, en su caso, determinar las contribuciones omitidas o los créditos fiscales, así como para comprobar la comisión de delitos fiscales y para proporcionar información a otras autoridades fiscales, estarán facultadas para: (...) II. Requerir a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, para que exhiban en su domicilio, establecimientos o en las oficinas de las propias autoridades, a efecto de llevar a cabo su revisión, la contabilidad, así como que proporcionen los datos, otros documentos o informes que se les requieran." Ahora bien, al ejercer esta facultad de comprobación, las autoridades deben tener muy en cuenta que, en nuestro derecho impositivo existen contribuyentes obligados a cumplir sus deberes tributarios dictaminando sus estados financieros, al tenor del artículo 32-A del Código Fiscal de la Federación; así, al exigirse la exhibición de los papeles indispensables para comprobar que un determinado sujeto ha acatado las disposiciones fiscales, podríamos hablar también de la facultad de comprobación prevista por la fracción IV del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, la cual consiste en: "IV. Revisar los dictámenes formulados por contadores públicos sobre los estados financieros de los contribuyentes y sobre las operaciones de enajenación de acciones que realicen, así como la declaratoria por solicitudes de devolución de saldos a favor del impuesto al valor agregado y cualquier otro dictamen que tenga repercusión para

efectos fiscales formulado por contador público y su relación con el cumplimiento de disposiciones fiscales." Sin lugar a dudas, el par de fracciones transcritas se refiere a la atribución de las autoridades hacendarias de exigir la exhibición de documentos para comprobar el cumplimiento a las disposiciones fiscales; esto es, a efecto de verificar que un determinado contribuyente ha acatado las disposiciones fiscales a que se encuentra sujeto, y de tratarse de aquéllos obligados a dictaminar sus estados financieros, las autoridades fiscales válidamente pudieran revisar los dictámenes formulados por el contador público correspondiente, requiriéndole a éste los documentos respectivos, o bien, están en aptitud de requerir directamente al contribuyente dictaminado o a los terceros con él relacionados, los documentos necesarios. En estos últimos dos supuestos, a fin de determinar en qué momento deben considerarse iniciadas las facultades de comprobación, es indispensable observar lo preceptuado por los artículos 55 y 56 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación. El primero de los numerales citados, señala que cuando las autoridades fiscales revisen el dictamen, éstas podrán requerir indistintamente al contador público que lo haya formulado, al contribuyente o a terceros relacionados con los contribuyentes o responsables solidarios, para que exhiban la información y documentación que consideren necesaria para verificar si son ciertos los datos consignados en el dictamen y demás documentos. Por su parte, el segundo de los artículos invocados es claro al indicar que se inicia el ejercicio de las facultades de comprobación en relación con los contribuyentes que hayan presentado estados financieros dictaminados, únicamente cuando la autoridad fiscal competente lleve a cabo alguno de los actos señalados en las fracciones II y III del artículo 55 del propio Reglamento; por tanto, las facultades de comprobación en relación con los contribuyentes que hayan presentado estados financieros dictaminados, sólo pueden considerarse iniciadas cuando las autoridades fiscales requieran al propio contribuyente o a terceros relacionados con éste, información y documentos necesarios para verificar los datos consignados en el dictamen, no así cuando la solicitud de documentos se realice al contador que elaboró el dictamen revisado. (4)

Juicio No. 822/99-01-02-1.- Resuelto por la Sala Regional del Noroeste I del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sentencia del 31 de enero del 2001, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Santiago González Pérez.- Secretario: Lic. Jesús Octavio Soto Ortiz.

C O N S I D E R A N D O :

(...)

CUARTO.- (...)

En el concepto de impugnación a estudiar en este punto, la demandante expone que es ilegal el procedimiento de revisión seguido en su perjuicio, por considerar que la demandada violó la garantía consagrada en el artículo 16 Constitucional, así como los artículos 38, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, en relación con los diversos 55, fracción III, y 56 de su Cuerpo Reglamentario, manifestando que el oficio mediante el cual se iniciaron las facultades de comprobación no precisa cuáles son los datos consignados en el dictamen que pretende verificar con la información y documentos solicitados al tercero, sino que únicamente se indica que dicha información se solicita con motivo de la revisión que se está practicando al dictamen fiscal de la hoy actora; cuestión que, en opinión de la actora, incumple con el requisito previsto por el artículo 38, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, puesto que para no considerar que la revisión fiscal se efectuó en forma genérica, era necesario precisar de manera clara y por su nombre los impuestos de cuyo cumplimiento las autoridades fiscales pretendían cerciorarse.

La representación legal de las autoridades demandadas al referirse en su oficio de contestación al concepto de anulación en estudio, sostiene que tanto el oficio por el que se dio inicio a la revisión de gabinete, destinado al tercero relacionado con la hoy actora, así como el oficio mediante el cual se le comunicó a esta última, el inicio

de las facultades de comprobación por la solicitud de datos a un tercero, guardan estrecha relación con el diverso oficio de número 324-SAT-R1-L1-3-16636 de fecha 20 de julio de 1998, mediante el cual se solicitó al C.P. Gonzalo Hoyos Gómez, los informes, datos y documentos relativos al dictamen fiscal presentado en dispositivo magnético que formuló respecto de los estados financieros de la hoy actora, por el ejercicio fiscal de 1995, en donde se precisó que el objeto de la revisión consistía en verificar el pago de los impuestos sobre la renta, al activo, al valor agregado, especial sobre producción y servicios, aportaciones al INFONAVIT, crédito al salario, etc.; con lo cual asegura haber cumplido cabalmente con los requisitos de fundamentación y motivación.

A juicio de este Cuerpo Colegiado el concepto de anulación en estudio resulta fundado y suficiente para declarar la nulidad de la resolución impugnada, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 38, fracción III, 237 y 238, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, al provenir de un acto de autoridad viciado de origen, que carece de una debida fundamentación y motivación.

El artículo 237, párrafo primero, del citado Código, obliga a esta Sala a dictar sus sentencias ajustándolas a derecho, para resolver efectivamente sobre la pretensión del actor que se deduzca de su demanda, en relación con la resolución impugnada. El segundo párrafo del numeral en comento marca el orden a seguir para el examen y resolución de los conceptos de impugnación, señalando que deben analizarse en primer término aquellos agravios que pudiesen llevar a una declaratoria de nulidad del acto combatido.

Por su parte, el artículo 238 del Cuerpo Legal invocado enlista un catálogo de causales por las cuales puede declararse la ilegalidad de un acto administrativo. Así, la fracción II del precepto legal en cita, es categórica al establecer que **debe declararse la ilegalidad de un acto administrativo ante la omisión de los requisitos formales exigidos por las leyes,** que afecten las defensas del particular y trasciendan al sentido de la resolución impugnada, inclusive la ausencia de fundamentación o motivación, en su caso.

Conviene aquí **distinguir entre las formalidades exigidas para los actos anteriores o precedentes al acto impugnado** y las del acto mismo. En primer lugar, los vicios de procedimiento conciernen a las formalidades precedentes al acto, pero que tienen una incidencia directa sobre su legalidad; y, en segundo lugar, los vicios formales pueden ser de actos anteriores o propios de la resolución definitiva.

En este orden de ideas, el artículo 238 contiene la misma distinción para los llamados vicios de forma. Sus fracciones II y III señalan literalmente lo siguiente:

> "**II**.- Omisión de los requisitos formales exigidos por las leyes, que afecten las defensas del particular y trasciendan al sentido de la resolución impugnada, inclusive la ausencia de fundamentación o motivación, en su caso.
>
> "**III**.- Vicios del procedimiento que afecten las defensas del particular y trasciendan al sentido de la resolución impugnada."

Así, **los actos que pueden llevar a la nulidad de una resolución impugnad** (por la omisión de requisitos formales) **tienen que ser anteriores a la misma, y debe existir una relación estrecha entre ambos, de tal suerte que el vicio de uno, lleve a considerar viciado el otro,** por virtud de haberse dictado en consecuencia del anterior o, bien, por estar íntimamente ligado al mismo, **toda vez que éstos son actos que preceden y preparan el acto administrativo definitivo, el cual puede ser impugnado.** Por tanto, se trata de actos vinculados entre sí, donde **por ese concatenamiento de actos viciados surge la trascendencia de un determinado vicio hasta afectar la resolución determinante de obligaciones tributarias.**

Sin embargo, sólo se considera que trasciende en el sentido de una resolución definitiva, cuando de no haberse producido el vicio, pudo haberse emitido en sentido diferente. La posible consecuencia futura de alteración a la resolución que se juzga, es lo que lleva a controlar la legalidad de los actos que la preceden y preparan, es decir, del procedimiento administrativo; **ya que por sí mismos, no tendría sentido**

controlarlos, pues sólo adquieren trascendencia jurídica al viciar una resolución administrativa definitiva.

Para el caso concreto, el acto impugnado lo constituye la resolución contenida en el oficio número 324-SAT-R1-L1-3-**17834** de fecha 26 de julio de 1999, emitida por el administrador Local de Auditoría Fiscal de Mexicali, Baja California, para determinar un crédito fiscal por la cantidad de $7,219,484.72, por concepto de impuesto sobre la renta e impuesto al valor agregado omitidos, actualizaciones, recargos y multas; asimismo, determina un reparto adicional de utilidades en cantidad de $4,187,851.08, por el ejercicio fiscal comprendido del 1o. de enero al 31 de diciembre de 1995.

Ahora bien, dicha **resolución administrativa tiene su origen en un procedimiento administrativo relativo a la facultad de comprobación comúnmente conocida como revisión de gabinete (escritorio), iniciado al amparo del oficio de solicitud de informes, datos y documentos, dirigido a la empresa "MEZQUITE MADERAS PROCESADAS, S.A. DE C.V.", identificado con el número 324-SAT-R1-L1-3-08717 fechado el 16 de abril de 1999,** mismo que corre agregado en original, a folios 261 y 262 de este expediente.

Efectivamente, **el oficio por el cual se iniciaron las facultades de comprobación en relación con la contribuyente revisada, hoy actora, es el que se ha citado en el párrafo que antecede.** Haciendo esta precisión, por la razón sustancial de que al contestar la demanda, **la representación legal de las demandadas equivocadamente** considera que la facultad de comprobación ejercida en contra de la hoy actora se inició a través del oficio número 324-SAT-R1-L1-3-16636 de fecha 20 de julio de 1998, mediante el cual se solicitó al C.P. Gonzalo Hoyos Gómez, los informes, datos y documentos relativos al dictamen fiscal presentado en dispositivo magnético que formuló respecto de los estados financieros de la persona moral demandante.

La distinción y separación que esta Sala ha realizado en cuanto a los oficios aludidos en los párrafos que preceden, tiene sustento legal en lo dispuesto por los artículos 55, fracción III, y 56 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación. En estos numerales se indican ciertas reglas que definen el procedimiento de revisión de dictamen de estados financieros, de la siguiente manera:

> **"Artículo 55.-** **Cuando las autoridades fiscales revisen el dictamen** y demás información a que se refieren los artículos 52 del Código y 50, 51, 51-A y 51-13 de este Reglamento, **podrán requerir indistintamente:**
>
> **"I.- Al contador público que haya formulado el dictamen,** (...).
>
> **"II.- Al contribuyente,** (...)
>
> **"III.-** **A terceros relacionados con los contribuyentes** o responsables solidarios, **la información y documentación que consideren necesaria para verificar si son ciertos los datos consignados en el dictamen y demás documentos".**
>
> **"Artículo 56.-** Se considerará que **SE INICIA EL EJERCICIO DE LAS FACULTADES DE COMPROBACIÓN en relación con los contribuyentes** que hayan presentado estados financieros dictaminados, **cuando la autoridad fiscal competente lleve a cabo alguno de los actos señalados en las fracciones** II y **III del artículo anterior."**
>
> (Lo enfatizado con mayúsculas, el remarcado y subrayado es nuestro)

Interpretando lo dispuesto por los numerales supratranscritos, **es válido considerar iniciadas las facultades de comprobación en relación con los contribuyentes que hayan presentado estados financieros dictaminados, cuando las autoridades fiscales requieran al propio contribuyente o a terceros relaciona-**

dos con el administrado auditado, información y documentos necesarios para verificar los datos consignados en el dictamen.

Ciertamente, conforme a la literalidad del artículo 56 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, en la parte que menciona: "**cuando la autoridad fiscal competente lleve a cabo alguno de los actos señalados en las fracciones II y III del artículo anterior"**; se elimina toda posibilidad de considerar iniciadas las facultades de comprobación en relación con aquellos contribuyentes que cumplen sus obligaciones tributarias presentando sus estados financieros dictaminados, cuando las autoridades opten por obrar conforme a la fracción I del artículo 55 del propio Reglamento.

Dicho de otra manera, **cuando las autoridades fiscales, en ejercicio de sus facultades de comprobación, revisen el dictamen de estados financieros y opten por requerir cualquier tipo de información al contador público que haya formulado el dictamen, NO DEBEN CONSIDERARSE INICIADAS LAS FACULTADES DE COMPROBACIÓN EN RELACIÓN CON EL CONTRIBUYENTE,** en términos de lo dispuesto por el artículo 56 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación.

Una vez apuntados los razonamientos anteriores, nos encontramos en posibilidad de calificar de inoperantes los argumentos de defensa de la autoridad demandada, por considerar que la facultad de comprobación ejercida en contra de la hoy actora se inició a través del oficio de número 324-SAT-R1-L1-3-16636 de fecha 20 de julio de 1998, por el que solicitó al C.P. Gonzalo Hoyos Gómez, los informes, datos y documentos relativos al dictamen fiscal presentado en dispositivo magnético que él mismo formuló.

En esa tesitura, esta Sala reitera, independientemente de que se hubiese requerido o no al contador público que elaboró el dictamen de estados financieros, conforme a los preceptos normativos que se han analizado con antelación, la facultad de comprobación en su modalidad de revisión de gabinete, en relación con la deman-

dante L-N SAFETY GLASS, S.A. DE C.V., debe considerarse **iniciada con el oficio número 324-SAT-R1-L1-3-08717 fechado el 16 de abril de 1999, pues mediante éste, la autoridad fiscal que se encontraba revisando el dictamen presentado por el C.P. Gonzalo Hoyos Gómez, solicitó al tercero "MEZQUITE MADERAS PROCESADAS, S.A. DE C.V.", informes, datos y documentos para verificar la certeza de los datos consignados en el dictamen.**

Ahora bien, a continuación expondremos las razones que llevan a este Cuerpo Colegiado a determinar fundado el concepto de anulación que nos ocupa, ante la presencia de los vicios formales aducidos por la demandada, por violación a lo dispuesto en el artículo 38, fracción III, del Código Fiscal de la Federación.

En relación al acto administrativo, origen del procedimiento administrativo en el que se sustenta la resolución impugnada por este medio de defensa, es oportuno recordar que el artículo 16 de nuestra Carta Magna prevé como **potestad de las autoridades administrativas, la práctica de actos de molestia** de este tipo, con la finalidad de que puedan llevar a cabo sus facultades de comprobación, como es **EXIGIR LA EXHIBICIÓN DE LOS PAPELES indispensables para comprobar que se han acatado las disposiciones fiscales, sujetándose en estos casos, a las leyes respectivas y a las formalidades prescritas para los cateos.** Sin lugar a dudas, el requerimiento de informes, datos y documentos realizado a través del oficio **08717,** pertenece a estos actos de molestia.

A la vez, **el precepto Constitucional invocado establece como formalidades para los cateos, la existencia de una orden escrita debidamente FUNDADA Y MOTIVADA, en la que se exprese** el o los lugares que han de inspeccionarse, la persona o personas que hayan de aprehenderse y **LO QUE SE BUSCA, a lo que únicamente debe limitarse la diligencia.** De igual forma se impone la obligación a cargo de las autoridades que ejecuten estos actos, de levantar, al concluir su actuación, un acta circunstanciada, en presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado o, en su ausencia o negativa, por la autoridad que practique la diligencia; **circunstancia que obliga a las autoridades administrativas a observar todas y cada una de tales exigencias.**

Por su parte, el artículo 38, del Código Fiscal de la Federación, retomando esta garantía constitucional, impone una serie **de formalidades que deben cumplir los actos administrativos.** Entre tales requisitos de forma, **la fracción III de este numeral, obliga a que todo acto de autoridad se funde y motive debidamente, expresando además el objeto o propósito que se persiga.**

En este sentido, resulta claro que para determinar la legalidad y eficacia del oficio de solicitud de informes, datos y documentos mencionado en párrafos anteriores, éste necesariamente debió cumplir, entre otras, con las formalidades previstas por el artículo 38, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, que se transcribe a continuación:

> **"Artículo 38.- Los actos administrativos que se deban notificar deberán tener POR LO MENOS los siguientes requisitos:**
>
> "(...)
>
> **"III.- Estar fundado y motivado y expresar la resolución, objeto o propósito de que se trate."**

(El subrayado y remarcado es nuestro)

De acuerdo con la teleología del artículo 16 constitucional y conforme a las exigencias mínimas contenidas por el artículo 38, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, es lógico pensar que **debido a la naturaleza de la facultad de comprobación practicada en el caso particular como lo es la revisión de gabinete, el oficio por el cual se realice la solicitud de informes, datos y documentos** debe estar fundado y motivado debidamente, además **de señalar con precisión el objeto o propósito que con él se persiga,** pues de lo contrario se estaría ante una de las causas de nulidad de los actos administrativos, por adolecer de vicios formales.

En opinión de los Magistrados de esta Sala, el concepto de ilegalidad que nos ocupa es fundado, en virtud de que el oficio 324-SAT-R1-L1-3-08717 del 16 de abril de 1999, emitido por la Administradora Local de Auditoría Fiscal de Mexicali, Baja California, adolece del requisito formal previsto por el artículo 38, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, como se puede comprobar con la simple lectura que se realice a la documental de referencia, que en su parte relativa señala lo siguiente:

"(...)
"Núm.- 324-SAT-R1-L1-3-**08717**
"Exp.- LNS-750215-844

"Asunto.- Se solicitan los informes, datos y documentos que se indican.

"Mexicali, B.C. a **16 ABR 1999**

"MEZQUITE MADERAS PROCESADAS, S.A. DE C.V.
CALZ. LUIS ECHEVERRÍA NO. 916
COL. REPÚBLICA MEXICANA
MEXICALI, B.C.

"En relación con la revisión que se está practicando al dictamen fiscal que presentó en dispositivo magnético el contribuyente L-N SAFETY GLASS, S.A. DE C.V., con domicilio en Galaxia No. 99 Parque Industrial Mexicali, Mexicali B.C., por el ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 1995, esta Administración Local de Auditoría Fiscal Número 1 de Mexicali, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 7o. fracción VII y XIII; y Tercero Transitorio de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, 2o. último párrafo, 41, primer y segundo párrafos; Apartado "B", fracciones VI, VIII, XIII y XXIV, y último párrafo, Apartado "F" del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 30 de junio de 1997, reformado por

Decreto publicado en el propio Diario Oficial de la Federación del 10 de junio de 1998, y artículo Quinto Transitorio del citado Reglamento; artículo Primero, fracción I, inciso 1 del Acuerdo por el que se señala el nombre, sede y circunscripción territorial de las unidades administrativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que se mencionan, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 18 de diciembre de 1996; artículos 42, fracciones II y IV, 48, fracciones I, II y III, del Código Fiscal de la Federación, y **55, fracción III de su Reglamento, le solicita que,** ante esta Administración Local de Auditoría Fiscal Número 1 de Mexicali, Baja California, **exhiba la información que se detalla a continuación, en relación con las operaciones que en su carácter de tercero ha(n) llevado a cabo con el (la) contribuyente de referencia, en el período citado.**

"La información y documentación solicitada, deberá enviarse a esta Administración Local de Auditoría Fiscal, mediante escrito firmado por el Representante Legal, **en original y dos copias fotostáticas de los datos e informes por las operaciones de compraventa de bienes o mercancías, servicios, arrendamientos y en general todas aquéllas que en su carácter de tercero ha llevado a cabo con el contribuyente "L-N SAFETY GLASS, S.A. DE C.V."**

"Asimismo, esta Administración Local de Auditoría Fiscal Número 1 de Mexicali, dependiente de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal, unidad administrativa del Servicio de Administración Tributaria, mismo que inició sus funciones a partir del 1o. de julio de 1997, como órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la entrada en vigor a partir de esa fecha, de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria; le comunica que es la Autoridad competente para emitir el presente oficio.

"Para tal efecto, se le concede un plazo de quince días contados a partir del siguiente a aquél en que se le notificó este oficio, con fundamento en el artículo 53, inciso c), del Código Fiscal de la Federación."

(rúbrica del funcionario y sello de la dependencia)

(El subrayado y remarcado es nuestro)

De lo anterior se llega a la conclusión de que efectivamente el acto de molestia, origen del procedimiento de fiscalización que culminó con la resolución determinante de créditos aquí impugnada, fue emitido de manera ilegal, ya que no satisface en lo más mínimo la garantía de legalidad que prevé el artículo 16 Constitucional, así como lo contemplado en el artículo 38, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, en virtud de que en el oficio de cuenta **NO SE SEÑALARON los impuestos federales y demás obligaciones tributarias,** que serían objeto o propósito de comprobación, tal y como se corrobora del contenido del original del acto administrativo en comento, que corre agregado a los autos de este juicio del folio 261 al 262, documento al que se le otorga valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por el artículo 234, fracción I, del Código Fiscal de la Federación.

Con este proceder, la autoridad incumple con los requisitos previstos en el artículo 16 Constitucional, en relación con el 38, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, pues **debió especificar el o los impuestos que serían materia de verificación.** Es decir, es ilegal que en el oficio de solicitud de informes y documentos, la demandada se abstenga de mencionar los impuestos que serían objeto de la revisión y por otra parte, requiera genéricamente la exhibición de **todos aquellos datos e informes por las operaciones de compraventa de bienes o mercancías, servicios y arrendamientos que en su carácter de tercero, la persona moral "MEZQUITE MADERAS PROCESADAS, S.A. DE C.V., había llevado a cabo con el contribuyente "L-N SAFETY GLASS, S.A. DE C.V. por el ejercicio fiscal de 1995.**

Al respecto, resulta aplicable la **Jurisprudencia por contradicción de tesis 68/2000**, que quedó subsistente al definir la contradicción de tesis 22/2000, entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo del Vigésimo Primer Circuito, así como Primero del Octavo Circuito y los Tribunales Colegiados Segundo y Tercero del Sexto Circuito (actualmente Segundo y Tercero en Materia Civil), consultable en la página 449, de la Revista No. 29 del Tribunal Fiscal de la Federación, mes de diciembre del 2000, Año III, Cuarta Época, cuyo texto es en el siguiente sentido:

> **"REVISIÓN DE ESCRITORIO O GABINETE. LA ORDEN RELATIVA, QUE SE RIGE POR EL ARTÍCULO 16, PÁRRAFO PRIMERO, CONSTITUCIONAL, DEBE SEÑALAR NO SÓLO LA DOCUMENTACIÓN QUE REQUIERE, SINO TAMBIÉN LA CATEGORÍA DEL SUJETO (CONTRIBUYENTE, SOLIDARIO O TERCERO), LA CAUSA DEL REQUERIMIENTO Y, EN SU CASO, LOS TRIBUTOS A VERIFICAR.-** Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha establecido que **la orden de revisión de escritorio o de gabinete** tiene su fundamento en el párrafo primero del artículo 16 constitucional; de ahí que la emisión de una orden de tal naturaleza debe cumplir con lo previsto en dicho precepto en la Ley Suprema, que en materia tributaria pormenoriza el artículo 38, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, esto es, que **debe acatar el principio de fundamentación y motivación,** conceptos que la anterior integración de la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en la tesis de jurisprudencia 260, visible en la página 175, del Tomo VI del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, de rubro "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.", definió en cuanto al primero, como la expresión del precepto legal o reglamentario aplicable al caso, y por el segundo, el señalamiento preciso de las circunstancias especiales, razones particulares o causas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo existir adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables. **Por tanto, si conforme al artículo 42, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, la facultad de revisión de escritorio puede referirse a tres tipos de sujetos, que son el causante**

directo, el responsable solidario y el tercero relacionado con aquéllos, y su ejercicio puede derivar de distintos motivos, a saber: I. Verificar el cumplimiento de disposiciones fiscales; II. Determinar tributos omitidos; III. Determinar créditos fiscales; IV. Comprobar la comisión de delitos fiscales; y V. Proporcionar información a autoridades hacendarias diversas; ha de concluirse que **la orden de revisión que al respecto se emita debe estar contenida en un mandamiento escrito de autoridad competente, debidamente fundado y motivado, lo cual implica que no sólo expresa la documentación que requiere, sino también la categoría que atribuye al gobernado a quien se dirige, cuál es la facultad que ejerce**, **la denominación de las contribuciones y el periodo a revisar, con el objeto de dar plena seguridad y certeza al causante y evitar el ejercicio indebido o excesivo de la atribución de revisión,** en perjuicio de los particulares.
(2a./J.68/2000)
S.J.F. IX Época. T. XII. 2a. Sala, agosto 2000, p.261."

(El subrayado y remarcado es nuestro)

Del criterio inserto, se aprecian con una mayor claridad los requisitos a satisfacer por las autoridades fiscales para tener por debidamente cubierto el requisito legal de fundamentación y motivación, tratándose de actos de molestia como el que nos ocupa (revisión de gabinete). Desglosando el criterio jurisprudencial transcrito, tenemos como requisitos para considerar suficientemente fundados y motivados, esta categoría de actos administrativos, los siguientes:

1o. Señalar la documentación, datos o informes que se requieren, haciendo posible su identificación.

2o. Indicar la categoría del particular a quien va dirigido; es decir, especificar cuál es su posición o ***status*** que guarda como administrado (sujeto pasivo) dentro de la relación tributaria de que se trate, a saber: causante directo, responsable solidario o tercero.

3o. Precisar la facultad que se está ejerciendo.

4o. **Mencionar la o las contribuciones** y demás obligaciones tributarias (formales) **a revisar.**

5o. El o los ejercicios fiscales que serán sujetos de verificación.

Las formalidades aquí enumeradas, tienen justificación en el control de legalidad que impera sobre los actos administrativos, toda vez que la determinación de obligaciones fiscales exige un procedimiento preparatorio del acto administrativo definitivo; el objeto de dicho procedimiento es verificar si los sujetos pasivos y terceros vinculados a la relación jurídico-fiscal principal, han cumplido con las obligaciones que imponen las normas tributarias correspondientes. Esta práctica de fiscalización o inspección del cumplimiento de los deberes tributarios, puede hacerse conforme a las diversas formas de manifestación o ejercicio de las facultades de comprobación atribuidas a las autoridades fiscales; respecto de las cuales, dentro de las de mayor importancia tenemos las revisiones de gabinete, que tienen como propósito la comprobación del cumplimiento en el pago oportuno de contribuciones específicas, así como la comprobación integral del cumplimiento de obligaciones tributarias, indistintamente.

En este sentido, la solicitud de documentos que para efectos de efectuar estas revisiones emita la autoridad, a fin de satisfacer la garantía de legalidad del artículo 16 constitucional, acogida por el diverso 38, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, debe estar debidamente fundada y motivada, **para lo cual se hace imprescindible expresar su objeto o propósito de una manera precisa, enunciando en forma detallada las contribuciones que serán motivo de revisión,** ya que de no ser así, su objeto resulta vago e impreciso, violando todo principio de lógica y seguridad jurídica; en razón de que impide al contribuyente conocer puntualmente las obligaciones a su cargo que serán fiscalizadas y alrededor de las cuales deberán efectuarse las actuaciones de la autoridad correspondiente.

Cabe agregar, que el objeto de los actos administrativos de esta índole, no sólo debe concebirse como el propósito, intención o fin, que marca la pauta a ejercer la facultad comprobatoria que tienen las autoridades fiscales, sino también debe entenderse como la cosa, elemento, tema o materia de que se trata; pues esto es lo que produce certidumbre al gobernado en lo que le es revisado. Por lo tanto, el objeto de este tipo de actos de autoridad no debe ser enunciado en forma general, sino determinado, para así dar seguridad al particular.

Por lo tanto, analizando el acto por el cual se dio inicio a las facultades de comprobación de la demandada, a la luz de los razonamientos antes expuestos, es dable concluir que el oficio 324-SAT-R1-L1-3-08717 del 16 de abril de 1999, **contiene vicios formales al omitir especificar cuál o cuáles serían las contribuciones a las que se sujetaría la revisión, deficiencia que lo torna genérico en cuanto a su objeto, puesto que no delimita el campo para ejercer las facultades de comprobación, situación que puede dar pauta a abusos de autoridad.**

Consecuentemente, asiste la razón a la hoy actora, al haberse acreditado plenamente que el acto controvertido carece de la debida y sufiente fundamentación y motivación; por ende, en el caso concreto, evidentemente se incumplió con la garantía de legalidad y seguridad jurídica prevista por el artículo 16 Constitucional, actualizándose con ello la causal de nulidad contemplada en la fracción II del artículo 238 del Código Fiscal de la Federación. En consecuencia, procede declarar la nulidad de la resolución impugnada, al sustentarse ésta en un acto viciado de ilegalidad desde su origen.

Ciertamente, el crédito fiscal determinado a la hoy actora surge como consecuencia de los hechos e irregularidades que se advirtieron por la autoridad hacendaria dentro del procedimiento de fiscalización desarrollado al amparo del multireferido oficio; así, si **la autoridad emisora del acto combatido por esta vía apoya su determinación en los resultados obtenidos de un procedimiento iniciado con apego a un acto administrativo que contiene vicios formales al no señalar con precisión el objeto del mismo, es lógico concluir que la resolución emitida, como producto de ese acto de autoridad, debe declararse igualmente nula.**

En este orden de ideas y ante la omisión formal detectada, esta Juzgadora advierte que, en la especie, no se dieron los elementos suficientes a la hoy actora para defender sus derechos o para impugnar el razonamiento aducido por la autoridad demandada, desde el momento mismo en que decidió iniciar con sus facultades de comprobación, afectando indiscutiblemente las defensas del particular y ocasionando que dicho vicio trascendiera al sentido del acto combatido en el juicio que nos ocupa.

Por último, también se invoca la tesis de Jurisprudencia sustentada por el Poder Judicial de la Federación, en el siguiente sentido:

> **"ACTOS VICIADOS, FRUTOS DE.** Si un acto o diligencia de la autoridad está viciado y resulta inconstitucional, todos los actos derivados de él o que se apoyen en él o que en alguna forma estén condicionados por él, resultan también inconstitucionales por su origen, y los tribunales no deben darle valor legal; ya que, de hacerlo, por una parte alentarían prácticas viciosas, cuyos frutos serían aprovechables por quienes las realizan y, por otra parte, los Tribunales se harían en alguna forma partícipes de tal conducta irregular al otorgar a tales actos valor legal."
>
> Publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Tomo CXXI-CXXVI, página 280.

En consecuencia, el concepto de anulación en estudio es fundado y suficiente para declarar la nulidad de la resolución impugnada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 238, fracción II, y 239, fracción III, del Código Fiscal de la Federación; sin embargo, debemos precisar que si bien las sentencias que declaren la nulidad de una resolución que no cumple con algún requisito formal debe ser para determinados efectos, tal consecuencia no se presenta en el supuesto de que el oficio de solicitud de documentos (orden de revisión de gabinete) emitida en ejercicio de facultades discrecionales, no satisfaga con plenitud un requisito formal en su emisión, como lo es la precisión de su objeto, ya que en la sentencia de nulidad corres-

pondiente no podría señalarse efecto legal alguno, no obstante que haya sido declarada con fundamento en la fracción II del artículo 238 del Código Fiscal, atendiendo a que, en el supuesto de señalarse determinados efectos, se coartaría a la autoridad que emitió dicho acto de molestia, en el ejercicio de sus facultades de comprobación, su albedrío de elección y se suprimiría el poder discrecional de que goza para ordenar la práctica de este tipo de actos de fiscalización. Por lo expuesto, en la especie, resulta suficiente declarar la nulidad del acto combatido, sin necesidad de precisar efecto legal alguno.

En mérito de lo antes expuesto y fundado y con apoyo en los artículos 237, 238, fracción II, y 239, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, esta Sala

R E S U E L V E :

I.- Ha resultado infundada la causal de sobreseimiento propuesta por las demandadas, por lo que no es de sobreseerse ni se sobresee en el presente juicio;

II.- La parte actora del juicio probó sus pretensiones; en consecuencia,

III.-Se declara la nulidad de la resolución impugnada, misma que ha quedado debidamente descrita en el resultando 1o. de este fallo, por los motivos y fundamentos expuestos a lo largo de esta sentencia.

IV.- NOTIFÍQUESE POR CORREO CERTIFICADO CON ACUSE DE RECIBO A LA PARTE ACTORA Y POR OFICIO A LAS AUTORIDADES DEMANDADAS.

Así lo resolvieron y firman, por unanimidad de votos, los CC. Magistrados que integran la Sala Regional del Noroeste I del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ante el C. Secretario de Acuerdos, Licenciado **Jesús Octavio Soto Ortiz,** quien da fe.

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

PRUEBA DE INSPECCIÓN.- RESULTA LEGAL SU DESECHAMIENTO POR CONSIDERARSE NO IDÓNEA PARA DISTINGUIR MERCANCÍAS SUJETAS A TRÁMITES DE DESPACHO ADUANERO.- Si bien, es cierto que de conformidad con el artículo 230, párrafo primero, del Código Fiscal de la Federación, en el juicio de nulidad son admisibles toda clase de pruebas, salvo las expresamente exceptuadas por esa norma; no menos cierto es que la prueba de reconocimiento o inspección judicial, es un medio de convicción que se desahoga a través de la percepción directa de un funcionario del órgano jurisdiccional, sobre los lugares, personas u objetos relacionados con la controversia, pues en su desahogo, dicho funcionario judicial debe describir el objeto a inspeccionar, haciendo constar cuál es, precisando características, cualidades, señales o vestigios y demás aspectos reales o cuestiones materiales, siempre que éstos sean susceptibles de ser apreciados con los sentidos, a fin de llegar al conocimiento de la verdad, creando una imagen en el juzgador, del objeto de prueba, lo más cercana a la realidad. Bajo esta premisa, atendiendo a las características particulares de la prueba de mérito, es fácil determinar que resulta una prueba no idónea en aquellos casos en los que la controversia verse respecto de la nomenclatura, descripción o identificación de mercancías sujetas a operaciones de comercio exterior, en virtud de que la apreciación por parte del funcionario judicial designado para su desahogo, al carecer de los conocimientos específicos de la materia, pudiera traer aparejadas variaciones en la correcta y adecuada clasificación arancelaria de los bienes y, por ende, efectos jurídicos diferentes. Efectivamente, la distinción real que pudiese existir entre las características o cualidades especiales de productos o mercancías sometidas al despacho aduanero, no puede obtenerse a simple vista por un funcionario judicial, ya que el hecho de que ciertos artículos cuenten con nombres similares, no implica que por conducto de una prueba de inspección ocular sea posible realizar una correcta identificación de las mismas, respetando las exigencias y regulaciones de comercio exterior conforme a las características propias de cada una de ellas, toda vez que según la mercancía de que se trate y sus especificaciones técnicas y, en su caso, componentes químicos, corres-

ponderá una fracción arancelaria diferente, de donde se advierte la improcedencia en cuanto a la admisión de esta prueba, por carecer esta juzgadora, de los conocimientos técnicos en materia aduanera necesarios para realizar una descripción de mercancías correcta y adecuada, sin influir en la clasificación arancelaria respectiva. (5)

Juicio No. 1347/00-01-02-1.- Resuelto por la Sala Regional del Noroeste I del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 1º de febrero de 2001, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Santiago González Pérez.- Secretario: Lic. Jesús Octavio Soto Ortiz.

C O N S I D E R A N D O :

(...)

SEGUNDO.- (...)

A juicio de esta Sala, el único concepto de ilegalidad planteado en el recurso de reclamación, es infundado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 230, primero y último párrafos, del Código Fiscal de la Federación, en relación con los diversos 80 y 161 del Código Federal de Procedimientos Civiles, Ordenamiento de aplicación supletoria al presente juicio, en términos del artículo 197 del propio Código Fiscal invocado.

En el presente caso, al presentar su escrito inicial de demanda, la actora ofreció, entre otras, un medio de convicción que enumeró como 4, dentro del capítulo especial de la demanda, en los siguientes términos:

> "4.- **INSPECCIÓN OCULAR:** Consistente en la **inspección ocular,** lo anterior para probar lo manifestado en el agravio primero de la presente demanda de nulidad, en el sentido que la ahora responsable denomino (sic) diferentemente

la mercancía consistente CONDUCTOR ELÉCTRICO CON TERMINAL y no como le llamo (sic) la responsable, cable eléctrico aislado con terminales, la cual se deberá efectuar y desarrollar en la Administración de la Aduana de Mexicali, pues en dicha Aduana se encuentra al (sic) mercancía embargada, luego entonces, se solicita que se fije día y hora en que se efectuara (sic) la inspección ocular, la cual se relaciona con el agravio primero de la presente demanda de nulidad".

Ahora bien, mediante auto del 11 de septiembre del 2000, el Magistrado Instructor desechó la citada prueba, por estimarla inconducente, impertinente y no idónea; para lograr una mayor claridad en esta interlocutoria, se transcribe la parte conducente del auto mencionado:

"(...) Se tienen por ofrecidas y exhibidas las pruebas señaladas en el capítulo respectivo de la demanda, **con excepción de la señalada en el punto número 4 del capítulo de pruebas consistente en: 4.-** La prueba de inspección ocular; dada su **inconducencia al pretender acreditar por medio de la prueba de inspección,** hechos que son materia de una prueba pericial en materia aduanera, concretamente respecto de la nomenclatura o denominación y clasificación arancelaria de mercancías, objeto de una operación al comercio exterior. En efecto, si bien el artículo 230 del Código Fiscal de la Federación, establece que en los juicios que se tramiten ante este Tribunal, son admisibles toda clase de pruebas, excepto la de confesión de las autoridades mediante la absolución de posiciones y la de petición de informes, salvo que los informes se limiten a hechos que consten en documentos que obren en poder de las autoridades, este precepto debe interpretarse tomando en cuenta el principio general de derecho que faculta al juzgador para tener por admitidos solamente aquellos medios de convicción que sean procedentes, idóneos y conducentes para con el objeto que se propusieron, es decir, sobre hechos susceptibles de ser demostrados conforme a la naturaleza de esa probanza; por ello, de las constancias que obran en autos, se advierte que la prueba de inspección ocular de referencia fue ofrecida a fin de demostrar que cierta mercancía se denomi-

nó de diferentes maneras, con lo que se hace evidente que tales circunstancias son propias de una prueba pericial en materia aduanera, no así de la prueba de inspección ocular referida en el punto 4 antes citado, debido a que esta Juzgadora no tiene el conocimiento técnico requerido para determinar la correcta denominación de mercancías; por tanto, procede desechar dicha prueba por no ser idónea para acreditar las cuestiones debatidas (...)"

De las descripciones anteriores, puede observarse que la prueba antes referida se desechó por considerar que no reunía los requisitos de pertinencia, idoneidad y conducencia, con relación a los hechos que la parte actora pretende acreditar con la misma.

Al respecto, cabe puntualizar que del propio ofrecimiento de pruebas realizado por la parte actora, se desprende la legalidad de la determinación efectuada por el Magistrado Instructor del presente juicio, al desechar el medio de convicción señalado en el **punto 4,** del apartado probatorio contenido en la demanda. Efectivamente, basta con atender a la literalidad del punto antes mencionado, para advertir con claridad la pretensión de la aquí recurrente, respecto del desahogo de la prueba de **inspección ocular,** ya que en él manifestó textualmente: **(...) la ahora responsable denomino** (sic) **diferentemente la mercancía** consistente CONDUCTOR ELÉCTRICO CON TERMINAL y no como le llamo (sic) la responsable, cable eléctrico aislado con terminales, (...)".

Por su parte, el Magistrado Instructor del juicio, dentro del acuerdo controvertido, desechó la prueba de inspección ocular por considerarla inconducente al no guardar un vínculo o relación lógica jurídica entre el medio de prueba ofrecido y el hecho que con él se quería probar, toda vez que **la actora del juicio pretende acreditar a través de este medio probatorio, hechos que corresponden propiamente a una prueba pericial en materia aduanera, por versar respecto de la nomenclatura o denominación de mercancías objeto de una operación al comercio exterior, cuya alteración (nombre) traería aparejadas variaciones en su clasificación arancelaria y, por ende, efectos jurídicos diferentes;** por citar

algunos, la exigencia de algunos requisitos no arancelarios, la aplicación de aranceles en mayor o menor proporción, o bien, la exención en la observancia de algunas obligaciones de comercio exterior, etc.

Como prueba indefectible de lo anterior, tenemos el contenido del propio pedimento de importación número 3396-9002252 de fecha 26 de febrero de 1999, cuyas irregularidades dentro del despacho aduanero dieron motivo al presente litigio. Este documento constituye el soporte toral de la actora en cuanto al agravio primero propuesto en el libelo de anulación. La prueba de inspección ocular desechada mediante el acuerdo reclamado se encontraba íntimamente relacionada con los argumentos expuestos en el referido concepto de impugnación. En el único agravio expuesto dentro del recurso de reclamación, la recurrente argumenta que con la probanza referida pretendía demostrar que no se trata de cable eléctrico aislado con terminales, sino conductor eléctrico con terminales y, en su opinión, para efectuar tal distinción, no se requiere de prueba pericial en materia aduanal, aseverando que a simple vista es fácil distinguir la diferencia entre ambas mercancías.

Sin embargo, del mismo pedimento de importación mencionado en el párrafo que precede, se desprende que la parte actora del juicio, en su calidad de Agente Aduanal, mandatario del importador de la mercancía descrita en dicho documento, realizó su llenado en base a las obligaciones que le impone la Ley Aduanera, **atendiendo para ello, a la especialidad técnica que le permite ejercer la patente de Agente Aduanal.** Ahora bien, se hace referencia a estas cualidades técnicas o específicas, en razón de que por disposición legal, **este intermediario aduanero es el responsable directo de la veracidad y exactitud de los datos e información suministrados en el llenado de los pedimentos de importación, entre otros, de la descripción de la mercancía y su correcta clasificación arancelaria.**

En estrecha vinculación con el razonamiento expuesto en el párrafo que antecede y con la finalidad de justificar detalladamente la improcedencia de la prueba de inspección ocular por haberse ofrecido respecto de hechos que deben probarse mediante una pericial en materia aduanera, se hace necesario traer al cuerpo de esta

sentencia los datos consignados dentro del pedimento de mérito, cuya copia fotostática simple corre agregada del folio 34 al 47 de las constancias que integran este expediente, en lo referente a la descripción y fracción arancelaria de las mercancías declaradas con números de orden 141 al 150.

Dentro de los números de orden 141, 142, 143 y 144, como descripción de mercancías se plasmó **"CONDUCTOR ELÉCTRICO CON TERMINAL",** asignándole como fracción arancelaria **85444199.**

Por otra parte, para la mercancía declarada bajo el número de orden 145, se describió como **"CONDUCTOR ELÉCTRICO",** al que se le asignó la fracción arancelaria de número **85445904.** Por cuanto se refiere a la declarada en los números de orden 146 al 149, fue descrita como **"CABLE ELÉCTRICO AISLADO",** con la misma fracción arancelaria que el producto anterior.

Finalmente, respecto a la mercancía declarada con el número de orden 150 se describió como **"CABLE ELÉCTRICO AISLADO",** con la siguiente fracción arancelaria: **85445999.**

Luego entonces, podemos establecer como primera conclusión, que en el pedimento de importación analizado, la Agente Aduanal hoy recurrente, declaró tres denominaciones o nomenclaturas para algunas de las mercancías que pretendía importar, a saber: **1º** Conductor Eléctrico, **2º** Conductor Eléctrico con Terminal y **3º** Cable Eléctrico Aislado. A estas mercancías, e**n base a su pericia en materia aduanera,** las clasificó en las siguientes fracciones arancelarias: 85444199, 85445904 y 85445999.

De ahí, esta Sala obtiene como una segunda conclusión que el supuesto error en la nomenclatura o denominación que la recurrente atribuye a la autoridad aduanera en cuanto a la descripción de la mercancía, **no atañe a una cuestión de semántica,** pues la distinción real que pudiese existir entre las características o cualidades especiales de los productos o mercancías de mérito no puede obtenerse a simple vista, ya

que el hecho de contar con nombres similares (no idénticos), no implica que por conducto de una prueba de inspección ocular sea posible realizar una correcta identificación de las mismas, respetando las exigencias del despacho aduanero conforme a las características propias de cada una de ellas; en virtud de haberse demostrado que según la mercancía de que se trate y sus especificaciones técnicas (cable o conductor, aislado o no), corresponderá una fracción arancelaria diferente, de donde resulta improcedente la admisión de esta prueba al carecer esta **juzgadora, de los conocimientos técnicos en materia aduanera necesarios para realizar una descripción de mercancías correcta y adecuada (sin variar) a la clasificación arancelaria respectiva.**

Aquí, resulta oportuno invocar lo dispuesto por el artículo 161 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al procedimiento contencioso administrativo, de conformidad con lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 197 del Código Fiscal de la Federación. El texto del numeral invocado es el siguiente:

> **"Artículo 161.- La inspección judicial puede practicarse**, a petición de parte o por disposición del tribunal, con oportuna citación, cuando pueda servir para aclarar o fijar hechos relativos a la contienda que no requieran conocimientos técnicos especiales."
>
> (El subrayado y remarcado es nuestro)

Una vez asentado lo anterior y analizados los argumentos expuestos por la accionante, esta Sala, arriba a la conclusión de que el presente agravio resulta infundado y, por tanto, insuficiente para revocar el auto reclamado. Primeramente, es conveniente citar al doctrinario Hernando Devis Echandía, quien en la página 15 del Tomo I de su obra intitulada "Teoría General de la Prueba Judicial", define como **pruebas judiciales:** "*el conjunto de reglas que regulan la admisión, producción, asunción y valoración de los diversos medios que pueden emplearse para llevar al juez a la convicción sobre los hechos que interesan al proceso.*"

En estrecha relación con lo anterior, es apropiado señalar que en ese mismo tratado doctrinario, su autor hace referencia al Maestro Carnelutti para definir el concepto de prueba judicial desde el punto de vista objetivo, citando lo siguiente: ***"prueba judicial es todo medio que sirve para conocer cualquier cosa o hecho, con lo cual se incluyen los "hechos", los "objetos" y también actividades como la inspección judicial, el dictamen de peritos, la declaración de tercero, la confesión, esto es, la totalidad de los medios que pueden servir de conducto al conocimiento por el juez, de la cuestión debatida o planteada sin litigio, en cada proceso."***

En este orden de ideas, es pertinente precisar lo que la doctrina ha establecido **como objeto de prueba: es algo material, susceptible de ser observado, verificado, percibido y examinado en su exterioridad.** Para el caso de que nos ocupa, es decir, tratándose de una prueba de inspección judicial se hace inseparable el aspecto material del objeto de prueba del medio de prueba mismo, debido al efecto que se produce en la mente de la persona que la lleva a cabo, pues sólo ella detectará las características distintivas de aquello que debe ser observado, percibido y/o examinado, y sus apreciaciones son las que de algún modo pueden llegar a influir en la decisión final del juez.

Abundando respecto a la **prueba de inspección ocular o reconocimiento judicial, podemos definirla como una diligencia procesal, practicada por un funcionario judicial, con el objeto de obtener argumentos de prueba para la formación de su convicción, mediante el examen y la observación con sus propios sentidos, respecto de la cosa que motiva la controversia (litigio), pudiendo versar sobre hechos ocurridos durante la diligencia o antes (siempre y cuando subsistan), o bien, de rastros o huellas de hechos pasados, y en ocasiones puede tratarse de una reconstrucción de los mismos.** El examen y percepciones en que consiste este medio probatorio, se realiza principalmente con el sentido de la vista, pero en ocasiones también se utilizan el oído, el olfato, el tacto e incluso el gusto.

Así, **a través de la prueba de inspección, el juez ve, palpa, oye y en ocasiones hasta huele y degusta, el hecho o la cosa motivo de la contienda litigiosa, circunstancia que califica la idoneidad de este tipo de prueba, ya que permite al juzgador adquirir la certeza sobre la realidad que investiga** (si lo percibido es el hecho o cosa por probar) o sobre circunstancias que a su vez pueden conducirlo a esa realidad (cuando lo percibido son hechos indiciarios).

Obviamente, en estos medios de convicción, la cosa a probar se llega a conocer naturalmente ***per se*** y no por demostración. En efecto, mediante una observación directa e inmediata (inspección ocular), **el juez simplemente verifica, advierte u observa la cosa objeto de prueba; sin embargo, él no la debe probar,** ya que su simple verificación (en este medio de prueba) es suficiente para acreditarla, es decir, la cosa o hecho observado presenta la evidencia de sí mismo y por sí mismo, por lo que la inspección del juez sólo se limita a reconocerla.

Luego entonces, la certeza o convicción que este medio de prueba produce al juzgador, deriva directamente del objeto inspeccionado, de ahí la necesidad imperante de que quien efectúe la revisión de la mercancía, sea un experto en materia aduanera, pues se ha razonado a lo largo del presente fallo que en el caso concreto no se trata de una simple denominación o nomenclatura, sino de la identificación y descripción de mercancías de procedencia extranjera sujetas a un régimen aduanero específico, con lo que pone en evidencia la inconducencia de la prueba de inspección ocular que pudiera efectuar esta Juzgadora, pues al ser considerada únicamente como conocedora del derecho y no de otras ciencias o técnicas, **se hace indispensable la intervención de un tercero (perito) con estudios especializados en materia aduanera, a efecto de no incurrir en una falsa apreciación del objeto de prueba que se traduzca en una clasificación arancelaria inadecuada de la mercancía antes citada.**

Ciertamente, la prueba de inspección ocular carece de eficacia cuando resulta inconducente para proporcionar certeza de la cosa, materia de percepción, pues se requiere una identificación completa y detallada de la misma, con la que se permita brindar una idea infalible al juzgador, de lo observado.

Por lo tanto, este Cuerpo Colegiado considera correcto el desechamiento del medio de prueba en estudio, por ser inconducente, impertinente y no idóneo, para sustentar los hechos que con él se pretendía demostrar en la especie, toda vez que en caso de desahogarse, existe la posibilidad de introducir un grave error de convicción en el presente juicio, derivado de la percepción incierta del funcionario que la ejecutara, no obstante la falta de los conocimientos técnicos exigidos para realizar la correcta identificación, separación, individualización y distinción de los bienes a inspeccionar.

En consecuencia, esta Sala reitera los requisitos que deben cumplirse para poder tener por admitida una prueba en el juicio contencioso, atendiendo a los principios de pertinencia, idoneidad y conducencia de la prueba. Es decir, con el fin de aclarar lo aseverado sobre el vínculo existente entre la carga de la prueba con los principios de pertinencia, idoneidad y conducencia, esta Sala hace suyos los conceptos abordados por el maestro Hernando Devis Echandía en su Teoría General de la Prueba Judicial. Concretamente, el autor citado considera a la conducencia de la prueba como el vínculo o relación lógica jurídica entre el medio de prueba y el hecho por probar. A su vez, la idoneidad es el medio a través del cual se obtiene un valor de convicción sobre el caso concreto. Por su parte, la pertinencia está vinculada a la norma jurídica que tasa la prueba; en tanto que la idoneidad, es la aplicación de la prueba tasada a los hechos perseguidos.

Ahora bien, el artículo 80 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en materia fiscal, establece lo siguiente:

> **“Artículo 80.-** Los tribunales podrán decretar, en todo tiempo, cualquiera que fuere la naturaleza del negocio, la práctica, repetición o ampliación de cualquier diligencia probatoria, **siempre que se estime necesaria y sea conducente para el conocimiento de la verdad sobre los puntos controvertidos (...).**
>
> (El subrayado y remarcado es nuestro).

Por su parte, el artículo 230, primer párrafo, del Código Fiscal de la Federación, establece que:

> **"Artículo 230.-** En los juicios que se tramiten ante el Tribunal Fiscal de la Federación, serán admisibles toda clase de pruebas, (...)
>
> **"El Magistrado instructor podrá** acordar la exhibición de cualquier documento que tenga relación con los hechos controvertidos o para **ordenar la práctica de cualquier diligencia."**
>
> (El subrayado y remarcado es nuestro)

Como puede observarse, de la transcripción de estos preceptos se permite a este Tribunal decretar, en todo tiempo, sea cual fuere la naturaleza del negocio, la práctica, repetición o ampliación de cualquier diligencia probatoria, aplicando el principio de conducencia para el conocimiento de la verdad sobre los puntos controvertidos, **siempre y cuando ésta se estime necesaria y conducente para el conocimiento de la verdad sobre los hechos controvertidos.** Luego entonces, obvio es que en una forma analógica de integración de la norma, se aplicará el principio de pertinencia que se encuentra vinculado al de conducencia e idoneidad de la prueba por lo que, es claro arribar a la conclusión de que el acuerdo recurrido satisfizo lo establecido en el artículo 230 del Código Fiscal de la Federación.

En efecto, dentro de nuestro sistema jurídico todo órgano jurisdiccional, para la valoración de los medios de prueba ofrecidos en los asuntos sometidos a su conocimiento, está sujeto no sólo a la observancia del derecho positivo, sino también de los principios generales de la prueba que conforman y dan coherencia a dichos medios probatorios. La función de estos principios no se agota en la tarea de integración de los vacíos legales, sino que conlleva, sobre todo, a la labor de interpretación de la ley y debida valoración de las pruebas; de ahí que este Órgano Jurisdiccional está facultado y, a la vez, obligado a dictar sus determinaciones basado en esos principios.

Apoya lo anterior, la tesis emitida por el Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 163 del tomo 181-186, sexta parte del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, que a la letra dice:

> **"PRUEBAS EN EL AMPARO. DEBEN DESECHARSE TODAS AQUELLAS QUE SEAN INCONDUCENTES.-** El artículo 150 de la Ley de Amparo establece que en el juicio de garantías son admisibles toda clase de pruebas, excepto la de posiciones y las que fueren contra la moral o contra el derecho; sin embargo, este precepto **debe interpretarse tomando en cuenta el principio general de derecho que faculta al juez para desechar las pruebas que estime inconducentes o no idóneas;** por ello, si se pretende acreditar por medio de una inspección judicial un hecho que es materia de prueba documental, debe desecharse a aquéllas, pues de no hacerlo así, equivaldría a dar a los artículos 151 y 152 de la Ley en comento, una interpretación indebida y convertir al juez de Distrito en un colaborador del oferente de la prueba.
>
> "Queja 10/84. Soledad García Cortés de Sánchez. 9 de marzo de 1984. Unanimidad de votos. Ponente: Mario Gómez Mercado."
>
> (El subrayado es nuestro)

Explicado lo anterior, la prueba de inspección ocular que ofreció la actora no es conducente, ya que **no posee la aptitud legal** respecto del hecho que el actor pretende demostrar con su desahogo. Es decir, este medio probatorio se caracteriza en que es una prueba de simple apreciación sensorial, por medio de la cual el **juzgador simplemente verifica, advierte u observa la cosa objeto de prueba,** sin que esta facultad se lleve a la equivocada creencia de que a simple vista se pueda **realizar una descripción de mercancías sujetas a despacho aduanero, sin alterar la clasificación arancelaria que corresponda, conforme a las reglas de comercio exterior.** Sobre el particular, es aplicable la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia Administrativa del 18 de octubre de 1989, en el siguiente sentido:

“PRUEBAS IDÓNEAS. SU CONCEPTO.- De conformidad con lo establecido por el texto del artículo 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles, “sólo los hechos estarán sujetos a prueba”; de lo anterior se colige que las partes en litigio deberán acreditar ante el juez la veracidad de sus afirmaciones a través de la demostración del hecho ausente, así, los elementos útiles para lograr dicha convicción en el juzgador lo serán las pruebas. Por otro lado, indica el cuerpo del artículo 87 del Ordenamiento procesal ya invocado, que todo “tribunal debe recibir las pruebas que le presenten las partes, siempre que estén reconocidas por la ley”. Por su parte, el texto del artículo 150 de la Ley de Amparo explica que en el juicio de amparo es admisible toda clase de pruebas, excepto la de posiciones y las que fueren contra la moral y las contrarias a derecho, entendiendo por esto último que no serán admitidas aquellas probanzas que no se ofrezcan en la forma y términos que al efecto establece la ley. Ahora bien, es **incontrovertible el hecho que, de acuerdo con la naturaleza propia de cada prueba, las hay unas más idóneas que otras para demostrar el hecho ausente por acreditar. Dicha calidad de idoneidad se identifica con la suficiencia para obtener un resultado previamente determinado o determinable, esto es, una prueba será más idónea que otra mientras más suficiente sea para demostrar ante los ojos del juzgador el hecho ausente que se pretende acreditar.** La naturaleza de cada prueba no sólo permite distinguir entre sí a las diversas clases de probanzas útiles para crear convicción en el juzgador sino, además, ofrece a las partes que integran la relación jurídico procesal (juez, actor y demandado) la oportunidad de escoger y decidir, entre los diversos métodos que cada una de ellas importa, cuál es más idónea que las restantes para demostrar el hecho concreto por conocer. **Así, dependiendo de la naturaleza de ese hecho concreto, se desprenderá la idoneidad de la prueba que resulte más apta para lograr el extremo que se pretenda acreditar.**

“Recurso de Queja 263/89. Unanimidad de votos.”

(El subrayado es nuestro)

De esta manera, cabe establecer la regla de que no será admisible la prueba de inspección ocular cuando no obedezca a razones de imprescindible necesidad y congruencia con los hechos o cosas a demostrar a través de la misma, ni mucho menos cuando se ha substituido caprichosamente por otro medio probatorio, es decir, la prueba de peritación. Por tanto, no es jurídicamente razonable admitir la citada probanza ni acordarle valor, lo que conllevaría sencillamente a la falta de dicho principio de conducencia e idoneidad que toda prueba debe tener, a fin de determinar la convicción sobre los hechos materia del juicio.

En consecuencia, con fundamento en los artículos 230 del Código Fiscal de la Federación y 80 del Código Federal de Procedimientos Civiles, el recurso de reclamación en estudio es infundado, por lo que se confirma el desechamiento de la prueba señalada en el punto número 4 del escrito inicial de demanda.

En mérito de lo antes expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 242 y 243 del Código Fiscal de la Federación en vigor, esta Sala

R E S U E L V E :

I.- Ha resultado procedente, pero infundado el recurso de reclamación; en consecuencia:

II.- Se confirma en todas y cada una de sus partes el acuerdo del Magistrado Instructor, dictado dentro del presente juicio el 11 de septiembre de 2000.

III.- NOTIFÍQUESE POR CORREO CERTIFICADO CON ACUSE DE RECIBO A LA ACTORA Y POR OFICIO A LAS AUTORIDADES.

Así lo resolvieron y firman, por unanimidad de votos, los CC. Magistrados que integran la Sala Regional del Noroeste I del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y

Administrativa, Licenciados Martín Donís Vázquez, Lucelia M. Villanueva Olvera y Santiago González Pérez, ante el Secretario de Acuerdos, Licenciado Jesús Octavio Soto Ortíz, quien da fe.

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

FACULTADES DE COMPROBACIÓN EN RELACIÓN CON LOS CONTRIBUYENTES QUE HAYAN PRESENTADO ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS.- CONCLUYEN CON LA NOTIFICACIÓN DEL OFICIO DE OBSERVACIONES Y NO CON LA EMISIÓN DEL OFICIO LIQUIDATORIO.- El artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación, aplicable al ejercicio de las facultades de comprobación en relación con los contribuyentes que hayan presentado estados financieros dictaminados, contiene un término perentorio de acción para la autoridad fiscalizadora, ya que establece un plazo fatal de seis meses para concluir su facultad de revisión dentro de la esfera jurídica del gobernado, prorrogable por periodos iguales hasta por dos ocasiones. De conformidad con lo establecido por el artículo 56 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, en relación con las fracciones II y III del artículo 55 del mismo Ordenamiento, dicho término de seis meses comienza a correr a partir de la fecha en que se requiere formalmente al contribuyente o a terceros relacionados con éste, información y documentación precisada en los propios artículos ya referidos. A su vez, el párrafo *in fine* del propio artículo 46-A antes invocado, establece que cuando las autoridades no notifiquen el oficio de observaciones o, en su caso, el de la conclusión de la revisión dentro de los plazos mencionados, ésta se entenderá concluida en esa fecha. De la concatenación y recta interpretación de los artículos invocados, es inconcuso que el oficio mediante el cual se dan a conocer las observaciones determinadas como resultado de la revisión, es el acto que concluye con la actuación de la autoridad, no la emisión de la resolución administrativa, que es el acto final del procedimiento fiscalizador de la autoridad exactora. (6)

Juicio No. 425/00-01-02-7.- Resuelto por la Sala Regional del Noroeste I del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 6 de febrero de 2001, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Santiago González Pérez.- Secretaria: Lic. Ingrid Marcela Fernández Valencia.

C O N S I D E R A N D O :

(...)

CUARTO.- (...)

(...) la demandante considera que el ejercicio de las facultades de comprobación concluye con la emisión del oficio liquidatorio derivado de la revisión practicada; afirma que la autoridad actuó fuera del plazo legal, ya que del 24 de septiembre de 1998, fecha de notificación de la solicitud de informes, datos y documentación, al 03 de mayo de 1999, fecha en que se notificó el oficio liquidatorio, transcurrió en exceso el término de 6 meses a que se refiere el artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación.

Al respecto, no le asiste razón a la actora al aducir tal argumento, ya que, según veremos a continuación, el ejercicio de las facultades de comprobación, en caso de revisiones, necesariamente concluye con el oficio de observaciones y no con el oficio liquidatorio.

En efecto, el artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación contiene un término perentorio de acción para la autoridad. Concretamente, para el caso que nos ocupa, la fiscalizadora contaba con un plazo fatal de seis meses para concluir su facultad de revisión dentro de la esfera jurídica del gobernado. Hay que mencionar que este período cuenta de momento a momento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12, cuarto párrafo, del propio Código Fiscal de la Federación. Dicho término de seis meses comienza a correr a partir de la fecha en que es formalmente notificado el inicio de las facultades de comprobación, en la especie, la notificación de la solicitud de informes, datos y documentación.

En el presente caso, la notificación de la solicitud de informes, datos y documentación identificada con el número de oficio **324-SAT-R1-L2-3.1-35474,** expe-

diente DPEI 41-010/98 de fecha 23 de septiembre de 1998, se realizó el **24 de septiembre de 1998.** Este documento aparece agregado a folios 84 al 87 de este expediente. Partiendo de esa fecha, **el término de seis meses vencería el 24 de marzo de 1999.** Sin embargo, el oficio mediante el cual se dan a conocer las observaciones determinadas como resultado de la revisión, identificado con el número 324-SAT-R1-L2-3.1-36334, de fecha 05 de noviembre de 1998, cuya copia se encuentra agregada a folios 92 al 99 de nuestro expediente, **fue notificado el 06 de noviembre de 1998,** según lo afirma la autoridad en la parte final de la hoja 7 de su escrito de contestación, (lo cual no fue cuestionado ni desvirtuado por la actora), con lo que se acredita que la autoridad concluyó su actuación dentro del plazo de 6 meses a que se refiere el tantas veces citado artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación.

Partiendo de la premisa anterior, el artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación es claro al prever que **el término concedido a la autoridad para el ejercicio de sus FACULTADES DE COMPROBACIÓN corre a partir del inicio de dichas facultades y vence con la conclusión de la revisión de la contabilidad del particular.**

Esta disposición legal, en su primer párrafo, es del tenor siguiente:

"Artículo 46-A.- Las autoridades fiscales deberán concluir la visita que se desarrolle en el domicilio fiscal de los contribuyentes **o la revisión de la contabilidad** de los mismos que se efectúe en las oficinas de las propias autoridades, **dentro de un plazo máximo de seis meses contados a partir de que se le notifique a los contribuyentes el inicio de las facultades de comprobación (...)"**

"(...)

Párrafo *in fine*

"Cuando las autoridades **no levanten el acta final de visita** o **no notifiquen el oficio de observaciones** o, en su caso, el de conclusión de la revisión dentro de los plazos mencionados, ésta se entenderá **concluida en esa fecha,** quedando sin efectos la orden y las actuaciones que de ella se derivaron durante dicha visita o revisión."

(El subrayado es nuestro)

A su vez, el artículo 56 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, a la letra establece:

"Artículo 56.- Se considerará que se inicia el ejercicio de las facultades de comprobación en relación con los contribuyentes que hayan presentado estados financieros dictaminados, cuando la autoridad fiscal competente lleve a cabo alguno de los actos señalados en las fracciones I y II del artículo anterior."

La fracción II a que se refiere tal artículo, dice:

"Artículo 55.- Cuando las autoridades fiscales revisen el dictamen y demás información a que se refieren los artículos 52 del Código y 50, 51, 51-A y 51-B de este Reglamento, podrán requerir indistintamente:

"I.- (...)

"II.- Al contribuyente, la información y documentos a que se refieren los incisos c y d de la fracción anterior; dicho requerimiento se hará por escrito, con copia al contador público".

Concatenando todas estas fracciones y vinculándolas al artículo 46-A, encontramos la obligación a cargo de la autoridad, de notificar el oficio de observaciones **dentro del plazo de los seis meses** a que alude el numeral invocado en último término. Luego entonces, si el inicio de las facultades de comprobación tuvo lugar el

día 24 de septiembre de 1998 (notificación de solicitud de documentos) y la conclusión de la misma se llevó a cabo con la notificación del oficio mediante el cual se dan a conocer las observaciones determinadas como resultado de la revisión el 06 de noviembre de 1998, es evidente **que entre ambas fechas aún restaban más de cuatro meses para que se cumpliera el término de seis meses,** por lo que no existe transgresión por parte de la demandada, al contenido del artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación, que otorgaba a la autoridad un plazo máximo de seis meses para la duración de las facultades de comprobación practicadas. Lo anterior es así, puesto que el **oficio mediante el cual se dan a conocer las observaciones determinadas como resultado de la revisión, es el acto que "concluye" con la actuación de la autoridad** y no el oficio liquidatorio a que se refiere la tesis aislada citada por la demandante, tanto en su escrito inicial de demanda, como en el de la ampliación y cuyo rubro es "Facultades de comprobación.- Su ejercicio debe terminar con la emisión de una resolución definitiva", aprobada en mayo de 1998 y que la parte actora invoca como "Tesis Jurisprudencial".

Al respecto, aplica la tesis de reciente elaboración que se transcribe a continuación:

> **"VISITA DOMICILIARIA. CONCLUYE CON LA EMISIÓN DEL ACTA FINAL.- La visita domiciliaria** como acto de autoridad dirigido a la revisión de la contabilidad del contribuyente, **culmina con el levantamiento del acta final y no con la emisión de la resolución administrativa, que es el acto final del procedimiento fiscalizador de la autoridad exactora.** Por tanto, si el acta final se emitió dentro del periodo de nueve meses posteriores al inicio de la visita domiciliaria, es inconcuso que no se viola el artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación, vigente de mil novecientos noventa y cinco a mil novecientos noventa y siete." Novena Época. Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XI, **febrero de 2000.** Tesis: II.2o.A.4 A. página: 1136.
>
> (El subrayado es nuestro)

De todo lo antes expuesto, queda manifiesto que las limitaciones establecidas por el artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación, relativas a la temporalidad de la visita, prohíben que la autoridad prolongue por tiempo indefinido el acto de molestia, limitante que, en la especie, fue debidamente observada por la demandada, toda vez que las facultades de revisión se practicaron en un término menor al contemplado por el precepto legal invocado.

(...)

En mérito de lo antes expuesto y fundado, y con apoyo en los artículos 236, 237, 238, fracción II, y 239, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, esta Sala

R E S U E L V E :

I.- La actora probó su pretensión; en consecuencia,

II.- Se declara la nulidad de la resolución impugnada, por los motivos y para los efectos que se precisaron en los considerandos quinto y sexto de esta sentencia.

III.- NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA ACTORA Y POR OFICIO A LAS AUTORIDADES DEMANDADAS.

Así lo resolvieron y firman, por unanimidad de votos, los CC. Magistrados que integran la Sala Regional del Noroeste I del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ante la C. Secretaria de Acuerdos quien da fe, Lic. Ingrid M. Fernández Valencia.

RESOLUCIONES A RECURSOS ADMINISTRATIVOS COMPETENCIA DEL TFJFA. REVOCACIÓN (CFF)

RECURSO DE REVOCACIÓN.- CUANDO SE RECURRE UNA RESOLUCIÓN PROVISIONAL, JUNTO CON SU NOTIFICACIÓN, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 129 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO PROCEDE DESECHAR EL RECURSO BAJO EL ARGUMENTO DE QUE AL SER ILEGAL LA NOTIFICACIÓN, LA RESOLUCIÓN PROVISIONAL AÚN NO ADQUIERE LA DEFINITIVIDAD QUE LE PERMITE SER IMPUGNADA.- Las resoluciones emitidas en términos del artículo 121-B de la Ley Aduanera vigente en 1994, tienen el carácter de provisionales hasta en tanto no transcurra el término de cuatro meses, contados a partir del día siguiente a aquel en que surtió efectos la notificación de la resolución provisional. Por otra parte, cuando se acude al recurso de revocación, de conformidad con el artículo 129 del Código Fiscal de la Federación, y se alegue el desconocimiento de un acto administrativo, se deberán seguir las siguientes reglas: 1) la autoridad debe dar a conocer el acto, junto con la notificación que del mismo se hubiere practicado; 2) el particular tendrá un plazo de 45 días para ampliar el recurso administrativo, impugnando el acto y su notificación; 3) para resolver, la autoridad estudiará los agravios expresados contra la notificación, previamente al examen de la impugnación que, en su caso, se haya hecho del acto administrativo. A su vez, del estudio que realice la autoridad, se determinará si la notificación fue legal o ilegal. La fracción IV del artículo 129 del Código Fiscal de la Federación, establece que cuando se resuelva que la notificación fue ilegal, se tendrá al recurrente como sabedor del acto administrativo, desde la fecha en que se le dio a conocer. Hecho lo cual, la autoridad se encuentra obligada a entrar al estudio de la impugnación que se hubiese formulado en contra del acto administrativo. En consecuencia, aun tratándose de la impugnación de la notificación de la resolución provisional a que se refiere el artículo 121-B de la Ley Aduanera vigente en 1994, por disposición expresa, la autoridad administrativa se encuentra obligada a estudiar los agravios planteados en su contra, pues considerar lo contrario sería entrampar a los particulares y dejarles en estado de indefensión frente a los actos de autoridad.

Más aún, cuando la resolución al recurso de revocación se emite y notifica, una vez transcurridos, tanto los 4 meses para que la resolución provisional fuera definitiva, como los 45 días previstos para su impugnación. (7)

Juicio N° 1317/00-01-02-4.- Resuelto por la Sala Regional del Noroeste I del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 19 de febrero de 2001, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Santiago González Pérez.- Secretaria: Lic. Eréndira Negrete Flores.

C O N S I D E R A N D O :

(...)

TERCERO.- (...)

A juicio de esta Sala, el único concepto de impugnación planteado en la demanda es fundado y suficiente para declarar la nulidad de la resolución impugnada, con los efectos que más adelante se precisarán, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 237, párrafo primero, en relación con los diversos 129, fracción IV, y 132, todos estos dispositivos del Código Fiscal de la Federación.

El artículo 237, primer párrafo, del Código Fiscal de la Federación establece la obligación a cargo de este Tribunal de dictar sus sentencias ajustándolas a derecho, resolviendo sobre la pretensión del actor que se deduzca de su demanda.

Según se advierte de constancias de autos, el aquí demandante acudió a la Administración Local Jurídica de Ingresos de Mexicali, **interponiendo recurso de revocación en contra del requerimiento de pago y embargo de fecha 25 de junio de 1999,** emitido por la Administración Local de Recaudación de Mexicali, a través de la cual requiere de pago el crédito fiscal Z-58396.

En dicho recurso, el C. Vicente Octavio Miramón Limón expresó un único concepto de agravio, en el cual medularmente manifestó que nunca le ha sido notificado el crédito Z-58396, mismo que la Administración Local de Recaudación le requirió de cobro, por lo cual no es válida la substanciación del procedimiento administrativo de ejecución.

En fecha **21 de septiembre de 1999,** siguiendo el procedimiento previsto en el artículo 129 del Código Fiscal de la Federación, la Administración Local de Recaudación de Mexicali notificó al particular el oficio 322-SAT-R1-L1-III-4947 fechado el 23 de agosto de 1999, por medio del cual le da a conocer la resolución con número de expediente 567/94 de fecha 1° de julio de 1994 relativa al crédito fiscal Z-58396, así como la constancia de notificación diligenciada en fecha 29 de noviembre de 1995 y el citatorio de fecha 28 de noviembre de 1995.

Mediante escrito fechado el **22 de noviembre de 1999,** presentado en la Administración Local Jurídica de Ingresos de Mexicali el día de su fecha, compareció el C. Vicente Octavio Miramón Limón con la finalidad de ampliar su recurso de revocación. En dicho escrito de ampliación, el recurrente hizo valer un agravio en contra de la **notificación** del oficio de fecha 1° de julio de 1994, y expresó cuatro conceptos de agravio en contra de la liquidación de fecha 1° de julio de 1994.

Al emitir su resolución en fecha **15 de mayo de 2000,** la autoridad consideró que el agravio expuesto en contra de la diligencia de notificación de fecha 29 de noviembre de 1995, era fundado, por lo que se le tuvo como conocedor del oficio de fecha 1° de julio de 1994, en fecha **21 de septiembre de 1999.** Por ello, dejó sin efectos la notificación impugnada de fecha 29 de noviembre de 1995, para el efecto de que se le tenga al C. Vicente Octavio Miramón Limón como conocedor del acto, en fecha 21 de septiembre de 1999. Asimismo, como consecuencia de lo anterior, se dejaron sin efectos los actos dictados dentro del procedimiento administrativo de ejecución.

Por otra parte, respecto de los cuatro agravios expuestos en contra del oficio liquidatorio sin número, de fecha 1° de julio de 1994, resolvió que el recurso de revocación intentado en contra de dicho oficio era improcedente, en virtud de que en términos de lo dispuesto por el artículo 121-B de la Ley Aduanera vigente en la fecha en que ocurrieron los hechos, sólo se trata de una resolución provisional que a la fecha de su impugnación (esto es, al 22 de noviembre de 1999 fecha de la presentación de la ampliación de la demanda) no ha adquirido el carácter de definitiva, puesto que al allá recurrente se le tuvo como sabedor del acto en fecha 21 de septiembre de 1999. Por ello, la aquí demandada consideró que no se actualizaron ninguna de las hipótesis previstas en el artículo 117 del Código Fiscal de la Federación, lo cual tiene como consecuencia considerar improcedente su impugnación.

Así las cosas, con la finalidad de resolver la contienda planteada en el presente asunto, esta juzgadora se remite a las reglas establecidas en el Código Fiscal de la Federación para efectos de la **procedencia y tramitación del recurso de revocación** de que se trata, específicamente, se transcribe a continuación el artículo 129 del Código Fiscal de la Federación:

> **"Artículo 129.-** **Cuando se alegue que un acto administrativo no fue notificado** o que lo fue ilegalmente, siempre que se trate de los recurribles conforme al artículo 117, **se estará a las reglas siguientes:**
>
> **"I.** Si el particular afirma conocer el acto administrativo, la impugnación contra la notificación se hará valer mediante la interposición del recurso administrativo que proceda contra dicho acto, en el que manifestará la fecha en que lo conoció.
>
> "En caso de que también impugne el acto administrativo, los agravios se expresarán en el citado recurso, conjuntamente con los que se formulen contra la notificación.

"II. Si el particular niega conocer el acto, manifestará tal desconocimiento interponiendo el recurso administrativo ante la autoridad fiscal competente para notificar dicho acto. **La** citada **autoridad le dará a conocer el acto junto con la notificación que del mismo se hubiere practicado**, para lo cual el particular señalará en el escrito del propio recurso, el domicilio en que se le debe dar a conocer y el nombre de la persona facultada al efecto. Si no se hace alguno de los señalamientos mencionados, la autoridad citada dará a conocer el acto y la notificación por estrados.

"El particular tendrá un plazo de cuarenta y cinco días a partir del siguiente al en que la autoridad se los haya dado a conocer, para ampliar el recurso administrativo, impugnando el acto y su notificación o sólo la notificación.

"III. La autoridad competente para resolver el recurso administrativo **estudiará los agravios expresados contra la notificación**, previamente al examen de la impugnación que, en su caso, se haya hecho del acto administrativo.

"IV. Si se resuelve que no hubo **(la) notificación** o que **fue ilegal, tendrá al recurrente como sabedor del acto administrativo desde la fecha** en que manifestó conocerlo o **en que se le dio a conocer en los términos de la fracción II**, quedando sin efectos todo lo actuado en base a aquélla, **Y PROCEDERÁ AL ESTUDIO DE LA IMPUGNACIÓN QUE**, en su caso, **HUBIESE FORMULADO EN CONTRA DE DICHO ACTO**.

"Si resuelve que la notificación fue legalmente practicada y, como consecuencia de ello, la impugnación contra el acto se interpuso extemporáneamente, desechará dicho recurso.

"En el caso de actos regulados por otras leyes federales, la impugnación de la notificación efectuada por autoridades fiscales se hará mediante el recurso administrativo que, en su caso, establezcan dichas leyes y de acuerdo con lo previsto por este artículo."

Como se puede apreciar del contenido del artículo 129 del Código Fiscal de la Federación, **existen formalidades del procedimiento que la autoridad administrativa está obligada a seguir cuando se alega desconocimiento de un acto administrativo y/o se impugna su notificación**, como sucedió en el caso de conocimiento.

Por su parte, el artículo 132 del Código Fiscal de la Federación establece que la resolución del recurso se fundará en derecho y examinará todos y cada uno de los agravios hechos valer por el recurrente, con la finalidad de resolver sobre la cuestión efectivamente planteada.

Ahora bien, al contraponer la resolución recaída al recurso de revocación con los artículos 129 y 132 del Código Fiscal de la Federación, queda evidenciado que la Administración Local Jurídica de Ingresos de Mexicali, violó en perjuicio del demandante la garantía de legalidad. En efecto, la demandada infringió lo dispuesto por los artículos 129, fracción IV, y 132 del Código Tributario Federal, al resolver sobre la improcedencia de los agravios expuestos contra el oficio liquidatorio, siendo que el primero de los numerales la obliga a entrar al estudio de la impugnación que se haga en contra del acto de que se trate, y el segundo de ellos, a fundar y motivar las resoluciones que recaigan a los recursos.

En este orden de ideas, es correcto que en términos del artículo 121-B de la Ley Aduanera vigente en el año de 1994 (fecha de emisión del crédito fiscal), la determinación tiene el carácter de provisional hasta en tanto no transcurra el término de cuatro meses, contados a partir del día siguiente a aquél en que surtió efectos la notificación de la resolución provisional. Es decir, la resolución provisional adquiere el carácter de definitiva, una vez transcurridos cuatro meses del surtimiento de efectos de su notificación.

Sin embargo, hay que recordar que en el presente caso la impugnación, vía recurso, se encaminó en contra de los actos relativos al procedimiento administrativo de ejecución instaurado para hacer efectivo el crédito fiscal 58396 cuyo monto fue

determinado precisamente en la resolución de fecha 1° de julio de 1994, y fue a partir de que se declaró que el particular no conocía dicho oficio determinante, por lo que se habilitó su impugnación en términos del artículo 129 del Código Fiscal de la Federación, a través del escrito de ampliación del recurso. Es por ello, que **la Administración Local Jurídica de Ingresos de Mexicali se encontraba obligada, por disposición expresa, a estudiar los agravios planteados en su contra, pues considerar lo contrario sería entrampar a los particulares y dejarles en estado de indefensión frente a los actos de autoridad.**

En efecto, de considerar el criterio que sustentan, tanto la autoridad resolutora del recurso, como la que en su defensa acudió a juicio, el particular no tendría a su alcance ningún medio de impugnación contra el oficio determinante de créditos fiscales. Es decir, de acuerdo a las constancias de autos, la fecha en que la autoridad resolutora consideró que el particular era conocedor del oficio liquidatorio fue el **21 de septiembre de 1999,** por lo que en caso de seguir el criterio de que debían transcurrir cuatro meses para considerar que dicha resolución era definitiva, se cumplieron el **21 de enero de 2000**, y el término fatal para su impugnación hubiese fenecido el 27 de marzo de 2000; sin embargo, **la resolución al recurso en la que comunica su desechamiento fue emitida el 15 de mayo de 2000** y **notificada hasta el 5 de junio de 2000; lo cual implica que a la fecha en que se notificó el desechamiento del recurso de revocación, el particular ya no hubiese tenido a su alcance ningún medio de defensa.**

Aunado a lo anterior, cabe señalar que no le asiste la razón a la autoridad demandada, en cuanto a su afirmación relativa a que no se actualiza ninguna de las hipótesis de procedencia del recurso de revocación contra el oficio liquidatorio, pues **es precisamente el artículo 129 del Código Fiscal de la Federación el que habilita su impugnación, así como la obligación a cargo de la autoridad de entrar al estudio de los agravios encausados en su contra.**

Por todo lo antes expuesto y fundado, y al haber quedado acreditado en autos que se cometió una transgresión a las disposiciones legales establecidas en contra del

particular demandante que afectaron sus defensas y trascendieron en el sentido de la resolución impugnada, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 238, fracción II, y 239, fracción III y último párrafo, del Código Fiscal de la Federación, **es de declararse la nulidad de la resolución impugnada para el efecto de que la Administración Local Jurídica de Ingresos de Mexicali entre al estudio de los cuatro agravios planteados en la ampliación al recurso, encausados en contra de la liquidación y valore las pruebas que le fueron ofrecidas en el recurso, en los términos previstos en el Título V, Capítulo I, Sección III del Código Fiscal de la Federación.**

En mérito de lo antes expuesto y fundado y con apoyo en los artículos 236, 237, 238, fracción II, y 239, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, esta Sala

R E S U E L V E :

I.- El actor probó su pretensión; en consecuencia,

II.- Se declara la nulidad de la resolución impugnada, por los motivos y para los efectos precisados en el considerando tercero de esta sentencia.

III.- NOTIFÍQUESE POR CORREO CERTIFICADO CON ACUSE DE RECIBO A LA PARTE ACTORA Y POR OFICIO A LAS AUTORIDADES DEMANDADAS.

Así lo resolvieron y firman, por unanimidad de votos, los CC. Magistrados que integran esta Sala Regional del Noroeste I del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ante la C. Secretaria de Acuerdos, Lic. Eréndira Negrete Flores, quien da fe.

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

ESCRITURA PÚBLICA QUE CONTIENE FE DE HECHOS, MEDIANTE LA CUAL UN NOTARIO PÚBLICO HACE CONSTAR QUE UN VEHÍCULO SE ENCUENTRA EN LA FRANJA FRONTERIZA.- ES UN MEDIO PROBATORIO EFICAZ.- Prueba eficaz es la admisible, conducente y legalmente practicada, que por resultado sirve para darle al juzgador la convicción que necesita. La conducencia exige dos requisitos: primero, que el medio respectivo esté, en general, autorizado y no prohibido expresa o tácitamente por la ley, y en segundo lugar, que el medio presentado, válido en general como instrumento de prueba, no esté prohibido en particular por la ley, por el hecho que con él se pretende probar. La conducencia se refiere entonces a la aptitud legal de la prueba respecto del medio mismo o en relación con el medio por probar. Puede pensarse que existe inconducencia cuando la ley exija para la demostración de un hecho un medio distinto, pero como esa sola exigencia no significa que esté prohibido llevar otros, la admisión de un medio de prueba diverso puede servir para aclarar o complementar el medio legal. Prueba pertinente es aquella que se aduce con el fin de llevar al juzgador al convencimiento sobre hechos relacionados con la litis y que, por lo tanto, pueden influir en su decisión. En cuanto a la utilidad de la prueba, este requisito significa que la prueba debe prestar algún servicio, ser necesaria o, por lo menos, conveniente para ayudar a obtener la convicción del juzgador respecto de los hechos principales o accesorios sobre los cuales se basa la pretensión contenciosa. Los artículos 130 y 230 del Código Fiscal de la Federación, relativos al trámite, desahogo y valoración de las pruebas, como principio general indican que en el recurso de revocación y en los juicios que se tramiten ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, serán admisibles toda clase de pruebas, sin establecer ninguna prohibición general ni particular de admitir como prueba la escritura pública que contiene fe de hechos, mediante la cual un Notario Público hace constar que un vehículo determinado se encuentra en la franja fronteriza, por lo cual, con soporte en los artículos 79 y 93 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que establecen que para conocer la verdad, puede el juzgador valerse de cualquier documento, sin más limitaciones que las

de que las pruebas estén reconocidas por la ley y tengan relación inmediata con los hechos controvertidos, reconociendo expresamente como prueba los documentos públicos, se afirma que la escritura pública en comento reúne los requisitos de conducencia, pertinencia y utilidad para ser admitida como prueba. (8)

Juicio No. 1147/00-01-02-7.- Resuelto por la Sala Regional del Noroeste I del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 27 de febrero de 2001, por mayoría de votos.- Magistrado Instructor: Santiago González Pérez.- Secretaria: Lic. Ingrid Marcela Fernández Valencia.

C O N S I D E R A N D O :

(...)

TERCERO.- (...)

A juicio de esta Sala, los conceptos de anulación en estudio son fundados y suficientes para declarar la nulidad de la resolución impugnada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 237, párrafo primero, del Código Fiscal de la Federación, en relación con el diverso 238, fracción IV, del propio Código Fiscal invocado.

El artículo 237, párrafo primero, del Código Fiscal de la Federación, obliga a esta Sala a dictar sus sentencias ajustándolas a derecho, debiendo examinar todos y cada uno de los puntos controvertidos del acto de autoridad.

Por su parte, el artículo 238 del Código Fiscal de la Federación contiene un catálogo de causales por las que puede declararse la nulidad de la resolución impugnada. Específicamente, en su fracción IV, contempla dos causales de ilegalidad, íntimamente ligadas entre sí: el control de la legalidad del objeto y el de los motivos del acto. Dicho en otra forma, un acto administrativo puede estar indebidamente

fundado, si se dictó en contravención de la ley o no se aplicaron las disposiciones debidas; también puede estar indebidamente motivado, si los hechos no se realizaron, fueron distintos o se apreciaron en forma equivocada.

Antes de proceder a dar resolución a la controversia estudiada en el presente considerando, es conveniente precisar que los puntos de litis son:

a).- Que la Administración Local Jurídica de Ingresos de Mexicali considere que el medio idóneo para comprobar el retorno de un vehículo internado temporalmente al país sea la presentación del mismo ante la Aduana en la que se efectuó el trámite o ante los bancos autorizados, a fin de que expidan la constancia respectiva; y

b).- Que la Administración Local Jurídica de Ingresos de Mexicali no le otorgue valor probatorio a la fe de hechos realizada por el Notario Público número 14 de Mexicali, B.C., mediante la cual, según el actor, demuestra que el vehículo materia de la litis se encuentra en la zona fronteriza.

Ambos conceptos están relacionados con el hecho de que la autoridad le niega valor probatorio a la escritura pública ofrecida como probanza por no considerarla el medio idóneo. Al respecto, esta juzgadora estima necesario realizar algunas consideraciones sobre la prueba.

Entendemos como prueba los diversos medios que pueden emplearse para llevar al juzgador a la convicción sobre los hechos que interesan al proceso. El Diccionario Jurídico Mexicano publicado por la Universidad Nacional Autónoma de México define la prueba como la obtención del cercioramiento del juzgador acerca de los hechos discutidos y discutibles, cuyo esclarecimiento resulte necesario para la resolución del conflicto sometido a proceso. En este sentido, **la prueba es la verificación o confirmación de las afirmaciones de hecho expresadas por las partes.**

Prueba eficaz es la admisible, conducente y legalmente practicada, que por su resultado sirve para darle al juzgador la convicción que necesita. Sin embargo, la eficacia de la prueba se aprecia en definitiva cuando se hace su valoración.

Para efectos del proceso que nos ocupa, a la luz de los conceptos abordados por el maestro Hernando Devis Echandia, en su Teoría General de la Prueba Judicial, examinaremos la conducencia, pertinencia y utilidad de un medio probatorio, mismas que deben ser calificadas previamente a la aceptación de éste y con independencia de que, como dijimos antes, al momento de valorarlo, el juzgador deba revisarlo de nuevo para medir la credibilidad y eficacia y, en consecuencia, otorgarle mérito o valor probatorio. **Distinguimos entonces como dos momentos procesales diferentes la aceptación de la prueba y la valoración de la misma.**

Un medio probatorio es **conducente** cuando es **eficaz para demostrar el hecho a que se refiere,** y exige dos requisitos: primero, que **el medio respectivo esté, en general, autorizado y no prohibido expresa o tácitamente por la ley,** y en segundo lugar, que el medio presentado, válido en general como instrumento de prueba, **no esté prohibido en particular por la ley,** por el hecho que con él se pretende probar, es decir, que no exista expresa prohibición legal para el caso concreto. **La conducencia se refiere entonces a la aptitud legal de la prueba respecto del medio mismo o en relación con el medio por probar.**

Puede pensarse que existe inconducencia cuando la ley exija para la demostración de un hecho, un medio distinto, pero como **esa sola exigencia no significa que esté prohibido llevar otros, la admisión de un medio de prueba diverso puede servir para aclarar o complementar el medio legal.**

La **pertinencia** o relevancia de la prueba contempla la relación que **el hecho por probar puede tener con el litigio** o materia del proceso. Prueba pertinente es aquella que **se aduce con el fin de llevar al juzgador al convencimiento sobre hechos relacionados con la litis y que, por lo tanto, pueden influir en su decisión.** Por tanto, se entiende por pertinencia o relevancia de la prueba la relación entre

el hecho objeto de ésta y los fundamentos de hecho de la cuestión por decidir, que permite a aquél influir en la decisión del juzgador.

Lessona, en su "Teoría General de la Prueba en Derecho Civil" dice que el juez debe admitir los medios legales de prueba, cuando tengan objeto idóneo, entendiendo por **idoneidad la conjunción de pertinencia y eficacia de la prueba misma.**

Hay hechos cuya **pertinencia aparece en forma clara y mediata** porque constituyen un requisito para la existencia del acto que trata de probarse. Podemos afirmar que **es irreparable el perjuicio que puede causarse por la inadmisibilidad de una prueba pertinente.** Por tanto, **en caso de duda, debe recibirse la prueba ofrecida sin perjuicio de apreciar su procedencia en la resolución definitiva.** El tratadista Antonio Rocha, en su obra titulada "De la Prueba en Derecho", considera que sólo cuando la inconducencia sea muy burda y notoria, debe ser rechazada por tal, la prueba.

En cuanto a la **utilidad** de la prueba, este requisito significa que la prueba debe prestar algún servicio, ser necesaria o **por lo menos conveniente para ayudar a obtener la convicción del juzgador respecto de los hechos principales** o accesorios sobre los cuales se basa la pretensión contenciosa.

El artículo 130 del Código Fiscal de la Federación, a la letra establece:

> **"Artículo 130.-** En el recurso de revocación se admitirá toda clase de pruebas, **excepto** la testimonial y la de confesión de las autoridades mediante absolución de posiciones. No se considerará comprendida en esta prohibición la petición de informes a las autoridades fiscales, respecto de hechos que consten en sus expedientes o de documentos agregados a ellos.
>
> "(...)
>
> Párrafo *in fine*

"Para el trámite, desahogo y valoración de las pruebas ofrecidas y admitidas, será aplicable lo dispuesto en el Título VI, Capítulo VII, de este Código".

(El subrayado es nuestro)

Por su parte, el artículo 230, perteneciente al Título VI, Capítulo VII antes citado, establece que:

"Artículo 230.- En los juicios que se tramiten ante el Tribunal Fiscal de la Federación, serán admisibles toda clase de pruebas, **excepto** la de confesión de las autoridades mediante absolución de posiciones y **la petición de informes,** salvo que los informes se limiten a hechos que consten en documentos que obren en poder de las autoridades.(...)"

(El subrayado es nuestro)

Como puede observarse, no existe prohibición general ni particular de admitir como prueba la fe de hechos notarial, materia de nuestro asunto.

Además, los artículos 79 y 93 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en este procedimiento, establecen lo siguiente:

"**Artículo 79.- Para conocer la verdad, puede el juzgador valerse de** cualquier persona, sea parte o tercero, y de **cualquier cosa o documento,** ya sea que pertenezca a las partes o a un tercero, **sin más limitaciones** que las de que las pruebas **estén reconocidas por la ley** y **tengan relación inmediata con los hechos controvertidos."**

"**Artículo 91.-** La ley reconoce como medios de prueba:

"**I.-** (...)

"**II.- Los documentos públicos**".

(El subrayado es nuestro).

En efecto, dentro de nuestro sistema jurídico, para la valoración de los medios de prueba ofrecidos en los asuntos sometidos a su conocimiento, todo órgano jurisdiccional está sujeto a la observancia del derecho positivo y de los principios generales de la prueba que conforman y dan coherencia a dichos medios probatorios. La función de estos principios no se agota en la tarea de integración de los vacíos legales, sino que conlleva, sobre todo, a la labor de interpretación de la ley y debida valoración de las pruebas; de ahí que este Órgano Jurisdiccional está facultado y, a la vez, obligado a dictar sus determinaciones basado en esos principios.

En el caso a estudio, la autoridad, con base en lo dispuesto por el artículo 130, párrafo tercero, del Código Fiscal de la Federación, dice que no es posible otorgarle valor probatorio a la escritura pública ofrecida como prueba, por no ser dicha documental el testimonio idóneo para acreditar el retorno del vehículo a la zona fronteriza.

Aunado a los conceptos antes citados sobre la idoneidad de una prueba, es menester precisar que la escritura pública es considerada un instrumento otorgado ante un Notario, de manera que éste lo autoriza con su firma, interviene en su elaboración y luego lo incorpora al respectivo protocolo. Es una subespecie de los documentos públicos y una especie de instrumentos públicos.

Mediante la escritura pública que contiene una "Fe de Hechos", como es el caso concreto, se deja constancia de hechos o actos jurídicos anteriores, avalados por la fe pública del funcionario que interviene en ella e ingresada al especial protocolo puesto bajo el cuidado del mismo. En el Estado de Baja California, la Ley del Notariado define el ejercicio del Notariado como una **función de orden público a cargo del Ejecutivo del Estado** y encomendada **por delegación a profesionales del derecho,** en virtud de la **patente** que **para tal efecto les otorga el propio Ejecutivo.**

Por tanto, según la legislación aplicable en nuestro Estado, el Notario es una persona investida de fe pública para hacer constar los contratos, actos y hechos jurídicos a los que los interesados deban o quieran dar **autenticidad** conforme a las leyes, y está autorizado para intervenir en la formación de ellos, **revistiéndolos de solemnidad y forma legales.**

En cuanto a la escritura pública materia de nuestro asunto, que en copia obra a folios 16 al 21 de autos y cuyo texto, en obvio de repetición, se tiene por íntegramente reproducido en este apartado, esta Juzgadora considera que **reúne los requisitos de conducencia, pertinencia y utilidad para ser admitidos como prueba,** ya que el acta levantada con motivo de la fe de hechos de que se trata, es clara y permite conocer con seguridad cuáles fueron los hechos observados por el Notario, y sus características, y no existen en el expediente en estudio otras pruebas que desvirtúen las conclusiones del acta, por lo que se presume que puede tener eficacia probatoria.

Habiendo sido debidamente fundamentados y razonados los motivos por los que esta Juzgadora considera procedente admitir la prueba de referencia, se procede a su valoración, para lo cual se transcribe, en lo conducente, parte de la escritura pública número 2,400, volumen 30, de fecha 06 de abril de 2000, pasada ante la fe del licenciado Arturo López Corella, titular de la Notaría Pública número 14 de la Ciudad de Mexicali, Baja California, que dice lo siguiente:

> "(...) compareció el señor ISAÍAS ENRIQUE GÓMEZ CRUZ, por su propio derecho, y dijo: Que solicita que Yo, el Notario, dé fe de los hechos que a continuación se describen: Manifiesta el solicitante que para desahogar un trámite de orden fiscal, requiere demostrar que un vehículo que era de su propiedad, se encuentra en la zona fronteriza y particularmente aquí en Mexicali, Baja California. Que el vehículo que era de su propiedad es una camioneta Van, marca Dodge, Sportsman, modelo 1973 (mil novecientos setenta y tres), color café.- Sigue manifestando el solicitante que en once de agosto de mil novecientos noventa y nueve vendió dicho vehículo como chatarra por encontrarse en mal estado, a procesadora Mac, Sociedad Anónima de Capital Variable,

(...).- Seguidamente, en compañía del solicitante, me constituí siendo las nueve horas con quince minutos, en los patios de Procesadora Mac, Sociedad Anónima de Capital Variable (...) **Doy fe** de que **en dicho patio se encuentra** un vehículo TIPO **VAN, MARCA DODGE SPORTSMAN, MODELO 1973 (mil novecientos setenta y tres) COLOR CAFÉ, EN MAL ESTADO, SIN LLANTAS, SIN MOTOR.-** En el parabrisas delantero de dicho vehículo, en la parte superior derecha, se encuentra fijada una etiqueta en mal estado, con código de barras impreso y el número 734332 (siete-tres-cuatro-tres-tres-dos). En el parabrisas trasero se encuentran fijadas varias calcomanías, una de las cuales corresponde al año "98" (noventa y ocho), que consigna el número de placas de circulación fronteriza del Estado de Baja California **949NTV4** (nueve-cuatro-nueve-NTV-cuatro), serie B12AE3X083680 (B-uno-dos-AE-tres-X-cero-ocho-tres-seis-ocho-cero) (...)"

En el documento marcado como apéndice "A", el cual conforme a las disposiciones aplicables forma parte integrante de la escritura, dice lo siguiente:

"(...) RECIBÍ DEL SR. ISAÍAS ENRIQUE GÓMEZ CRUZ (...) PROPIETARIO DE UN VEHÍCULO PARA RECICLARLO, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA DODGE MODELO 73, COLOR CAFÉ, SERIE CARROCERÍA B12AE3X086380. MISMO QUE CEDE EN SU TOTALIDAD Y EN LAS CONDICIONES QUE SE ENCUENTRA, A LA EMPRESA PROCESADORA MAC, S.A. DE C.V. PARA SU RECICLAMIENTO, DECLARÁNDOSE QUE ES CHATARRA DE SU PROPIEDAD LEGALMENTE ADQUIRIDA (...) MEXICALI, B.C. A 11 DE AGOSTO DE 1999."

Del análisis y valoración de la prueba en comento, resulta inconcuso para este Órgano Colegiado que el vehículo a que se refiere la resolución impugnada, efectivamente se encontraba en la franja fronteriza antes del 21 de enero de 2000, fecha del oficio liquidatorio. Lo anterior se desprende de la fecha consignada en el apéndice "A" antes referido, según la cual Procesadora Mac, S.A. DE C.V. , con fecha 11 de

agosto de 1999, hace saber al Jefe de Grupo contra Robo de Vehículos que adquirió como chatarra el vehículo materia de la litis.

Por todo lo antes razonado, **procede declarar la nulidad para efectos de que la autoridad revoque el crédito fincado al actor, toda vez que ha quedado demostrado que el vehículo en comento sí retornó a la zona fronteriza.** Respecto al argumento expresado por la representación común de las demandadas en su escrito de contestación, en el sentido de que el Notario hace constar que encontró el vehículo referido sin motor, se dejan a salvo las facultades discrecionales de la autoridad para proceder al respecto, sin que se le obligue a hacerlo.

Por lo antes expuesto y fundado, y con apoyo en los artículos 235, 236, 237, 238, fracción IV, y 239, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, esta Sala

R E S U E L V E :

I.-La actora probó su pretensión; en consecuencia,

II.- Se declara la nulidad de la resolución impugnada, por los motivos y para los efectos precisados en el considerando tercero de esta sentencia.

III.- NOTIFÍQUESE.

Así lo resolvieron y firman, por mayoría de votos, los C.C. Magistrados que integran la Sala Regional del Noroeste I del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, habiendo formulado voto particular la Magistrada Lucelia M. Villanueva Olvera, ante la C. Secretaria de Acuerdos quien da fe, Licenciada Ingrid M. Fernández Valencia.

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANANERA

ORDEN DE VERIFICACIÓN EN TRÁNSITO.- NO REQUIERE DE LA PRECISIÓN DE LOS IMPUESTOS A COMPROBAR.- De la interpretación sistemática de los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 38, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, deviene que todo acto administrativo que se deba notificar, debe expresar el objeto o propósito de que se trate, requisitos que entratándose de órdenes de verificación de vehículos de procedencia extranjera **en tránsito**, se satisfacen plenamente con: 1.- Mandamiento escrito de autoridad competente en el que se indique el objeto de la orden que lo es la comprobación de la legal estancia, importación o tenencia de vehículos de procedencia extranjera, en circulación; 2.- El lugar y fecha en que se expide la orden y, 3.- los datos que permitan la identificación de la persona a quien se dirige; ello, a efecto de que el particular esté en posibilidad de conocer el carácter de la autoridad que emitió tal orden, si ésta actuó dentro de la circunscripción territorial que le compete, y el conocer los motivos y fundamentos legales que originaron el acto, sin que sea menester que en ese tipo de órdenes de verificación se puntualice el o los gravámenes que serán objeto de revisión, atendiendo a la naturaleza del caso en particular, lo que impide conocer qué tipo de impuestos van a ser sujetos de verificación por virtud de no estarse frente a un contribuyente previamente identificado y registrado ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. (9)

Juicio No. 926/98.- Resuelto por la Sala Regional del Noroeste I del Tribunal Fiscal de la Federación, el 30 de abril de 1999, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Lucelia M. Villanueva Olvera.- Secretaria: Lic. Clemencia González González.

C O N S I D E R A N D O :

(...)

TERCERO.- (...)

Para esta Sala, resulta infundado el primer punto de anulación hecho valer por el accionante en su escrito inicial de demanda, respecto a la violación que delata, a lo dispuesto en los artículos 16 Constitucional y 38, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, derivada de la emisión de la orden de verificación número CVM-470002-97 de fecha 15 de octubre de 1997. En efecto, examinada que es la orden en mención, la cual corre agregada en autos a fojas 45 y 46, a la cual se le otorga valor probatorio pleno en términos del artículo 234, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, como documento público que es, se conoce que fue dictada con el objeto de **"Verificar la legal importación, introducción, tenencia y estancia de mercancías de procedencia extranjera en tránsito."** Precisado el objeto, esta juzgadora acude al Diccionario Larousse para esclarecer el término verificar. Así, se dice que es: "(...) 1. **Probar** que es verdadero algo de lo que se dudaba. 2. **Comprobar** la **exactitud** o **la verdad** de algo que ya se sabía o un resultado que ya se había obtenido (...)". De lo anterior, deviene que la autoridad, en uso de sus facultades de comprobación, procedió legalmente a **verificar**, esto es, a probar que es verdadero que la mercancía de procedencia extranjera en circulación en nuestro país, se encontrara debidamente legalizada, y ello en acatamiento a lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley Aduanera, el cual establece:

"**ARTÍCULO 146.- La tenencia, transporte o manejo de mercancías de procedencia extranjera,** a excepción de las de uso personal, **deberá amparse en todo tiempo,** con cualquiera de los siguientes documentos:

"**I.- Documentación aduanera que acredite su legal importación (...)**.

"**II.- Nota de venta** expedida por autoridad fiscal federal o la documentación que acredite la entrega de las mercancías por parte de la Secretaría.

"**III.- Factura** expedida por empresario establecido e inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes, la cual deberá reunir los requisitos que señale el Código Fiscal de la Federación.

"Las empresas porteadoras legalmente autorizadas, cuando transporten las mercancías de procedencia extranjera fuera de la franja o región fronteriza, podrán comprobar la legal tenencia de las mismas con la carta de porte y los documentos que establezca mediante Reglas la Secretaría."

Por lo que la autoridad, al emitir la orden de verificación de mercancías de procedencia extranjera en tránsito, sí señaló correctamente **el objeto** de la misma, como lo fue **VERIFICAR** la legalidad de las mercancías de procedencia extranjera en tránsito en nuestro país, y ello a través de la revisión física y documental, como lo fue en el presente caso. Ahora bien, si derivado de esa inspección se detectó que el actor no comprobó, en ese momento, el cumplimiento de las disposiciones fiscales en materia de comercio exterior en sus aspectos de **importación, introducción, tenencia y estancia** de la mercancía que transportaba, es obvio que tal incumplimiento la llevó a embargar precautoriamente la mercancía en cita, con apoyo en el artículo 153, primer párrafo, de la Ley Aduanera, otorgándole un término de diez días hábiles para la comprobación, con documentación idónea, de la legalidad de los bienes embargados, situación que no acreditó haber dado cumplimiento en ese período. Hasta este punto se puede observar que la actuación de la autoridad coincide plenamente con el **objeto** descrito en la orden de verificación de mercancías de procedencia extranjera en tránsito; por consiguiente, si proveniente de esa atribución de verificación conoció que el demandante no acreditó la **legal importación, introducción, estancia y tenencia** de las mercancías incautadas cuya procedencia es extranjera, válidamente procedió a la determinación de los impuestos y cuota compensatoria por los cuales no se efectuó el entero correspondiente, pues éste es eminente el resultado de la **VERIFICACIÓN** de mercancía de procedencia extran-

jera en tránsito, esto es, en el **objeto** de la orden está implícito **EL EFECTO**, sin que en este tipo de órdenes sea menester se precisen puntualmente los impuestos, cuotas o derechos a verificar, por no estarse frente a una orden de visita domiciliaria, sino de una verificación para comprobar la legal importación, introducción, tenencia y estancia de mercancías de origen extranjero en tránsito en nuestro país, acontecimiento que, en la especie, no constituye transgresión en la esfera jurídica de la parte actora ni contraviene los artículos 16 Constitucional y 38, fracción III, del Código Fiscal de la Federación. Por otra parte, no existe disposición legal que obligue a la autoridad a precisar en la orden en comento, la "mercancía" que será objeto de la revisión, esto es, identificándola por sus características, como lo es la pretensión de la actora, pues basta que la autoridad indique el tipo de mercancía que lo es, la de procedencia extranjera en tránsito, para que se considere satisfecho el objeto de la orden. Cabe agregar que las tesis jurisprudenciales invocadas en la demanda, no son aplicables al caso por tratarse de una orden de comprobación fiscal, distinta a una visita domiciliaria en la cual se protege fundamentalmente la introducción de la autoridad a un domicilio, lo que no es el caso, por lo que esta Sala concluye que respecto a este punto de impugnación, no asiste la razón al actor.

(...)

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 236, 237, 238, fracción II y 239, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, esta Sala;

R E S U E L V E :

I.- La parte actora probó parcialmente su acción en este juicio, en consecuencia;

II.- Se declara la nulidad de la resolución cuyas características quedaron debidamente precisadas en el resultando 1o. de este fallo, **para los efectos asentados en los considerandos quinto y sexto que anteceden.**

III.- NOTIFÍQUESE.

Así lo resolvieron y firman los Magistrados que integran la Segunda Sala Regional del Noroeste del Tribunal Fiscal de la Federación, ante la presencia de la C. Secretaria de Acuerdos, Lic. Clemencia González González, quien actúa y da fe.

SEGUNDA SALA REGIONAL DEL NORTE CENTRO II

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

CASO DE EXCEPCIÓN DE LA CONSECUENCIA DE LA NO COMPARECENCIA DE LA PARTE ACTORA, EN EL SUPUESTO PREVISTO EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 209 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1° DE ENERO DE 2001.- Cuando el Magistrado Instructor advierte que en su oficio de contestación de demanda, la autoridad manifiesta que el libelo inicial se presentó en forma extemporánea, atendiendo a que la fecha de notificación del acto citado como impugnado, no corresponde a la señalada por la parte actora, y se exhiben las constancias de la diligencia respectiva, concederá a la accionante el término de cinco días para que las desvirtúe; y el hecho de que ésta no desahogue la vista aludida, tiene como consecuencia genérica la presunción de legalidad de la propia diligencia, de conformidad con lo que dispone el artículo 209, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación. Sin embargo, aun cuando no se desahogue la vista referida, si en su escrito inicial de demanda la parte actora controvirtió la legalidad de la notificación del acto que señala como combatido, tales manifestaciones deben ser analizadas y resueltas en sus términos, pudiendo tener como consecuencia la confirmación de la legalidad referida o, bien, su ilegalidad, traduciéndose ello en una excepción a la consecuencia genérica que el propio numeral establece. (10)

Juicio No. 3007/00-02-03-3.- Resuelto por la Segunda Sala Regional del Norte Centro II del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 22 de marzo de 2001, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Nora Elizabeth Urby Genel.- Secretaria: Lic. Isabel Patricia Herrero Rodríguez.

C O N S I D E R A N D O :

(...)

SEGUNDO.- (...)

A juicio de esta Sala, del análisis a las constancias de autos, y lo manifestado por la autoridad en su oficio de contestación, así como a lo expuesto por la parte actora en su escrito de demanda, considera infundada la causal de improcedencia que se hace valer, ya que la resolución impugnada contenida en el oficio con No. de control 151520077853A, no puede tenerse como consentida, pues se observa que no se presentó fuera del plazo de 45 días que señala el artículo 207, primer párrafo, del Código Fiscal de la Federación.

Se afirma lo anterior, en virtud de que la parte actora, desde su escrito inicial de demanda, manifestó bajo protesta de decir verdad, que tuvo conocimiento de la existencia del crédito No. Z-189083, el día 29 de noviembre del 2000, dejándole en su domicilio el formulario múltiple de pago MP 5288578, de fecha 21 de noviembre del 2000, alegando que la autoridad emisora del documento determinante del crédito en cuestión, le debió notificar dicha resolución en forma personal, ya que se trataba de un acto administrativo que podía ser recurrido, y que esa notificación debió realizarse en términos de lo dispuesto por los artículos 134 y 137 del Código Fiscal de la Federación; por lo tanto, al no haberse realizado en forma personal, la misma no puede considerarse legal.

El artículo 207 del Código Fiscal de la Federación, dispone que la demanda se presentará por escrito directamente ante la Sala Regional competente, dentro de los 45 días siguientes a aquel en que haya surtido efectos la notificación de la resolución impugnada; y, por su parte, el artículo 134 del mismo Código dispone, en lo que interesa, que los actos administrativos que puedan ser recurridos, se harán personalmente o por correo certificado con acuse de recibo, entonces tenemos que la notifi-

cación del acto impugnado por tratarse de los que pueden ser recurridos, en términos del citado artículo, se debió notificar en cualquiera de las dos formas previstas, esto es, personalmente o por correo certificado con acuse de recibo.

En este orden de ideas, tenemos que la autoridad no demuestra que la resolución determinante del crédito impugnado en este juicio, le haya sido notificada legalmente a la parte actora, esto es, personalmente o, bien, por correo certificado con acuse de recibo, ya que se concreta a manifestar que se presentó la demanda de nulidad correspondiente, fuera del plazo de 45 días, porque la misma se notificó el 31 de agosto del año 2000, y el sello del reloj franqueador de esta Sala indica que se presentó el 04 de diciembre del 2000, observándose que anexa a su contestación, copia de la resolución determinante del crédito controvertido, así como de un acuse de recibo que exhibe, este último en copia certificada por el Administrador Local Jurídico de Ingresos de Torreón, pero con ello no se colman los requisitos previstos en el citado artículo 134, ya que con dicho "acuse de recibo", no justifica que la notificación se hubiere realizado por correo certificado con acuse de recibo, pues en ninguna de sus partes consta que la misma haya sido realizada por correo certificado y menos aún por el Servicio Postal Mexicano; de ahí que si la notificación que nos ocupa, no se realizó por este medio, entonces para considerarse legal la misma, la autoridad debió demostrar que la realizó en forma personal, sin embargo, en ningún momento la demandada refiere que la misma se haya realizado en forma personal, ni tampoco lo acredita, por lo tanto dicha notificación es ilegal.

En razón de lo anterior, en términos de lo dispuesto por el artículo 209 Bis, penúltimo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, debe tenerse al actor como sabedor de la resolución impugnada, en la fecha que se le notifica el acuerdo correspondiente a la contestación de la demanda, ya que es cuando la autoridad la exhibe, esto es, **el 28 de febrero del 2001**, según constancia de notificación que obra en autos a fojas 030, y si la presentación de la demanda en este juicio se realizó en forma personal el **04 de diciembre del 2000,** la misma no resulta extemporánea, toda vez que de conformidad con lo dispuesto por el citado artículo 207 del Código Fiscal de la Federación, otorga un plazo de 45 días siguientes a aquel en que haya surtido

efectos la notificación de la resolución impugnada, para demandar su nulidad, y si, como se dijo, debe tenerse como fecha de notificación el día **28 de febrero del 2001, es evidente que no transcurrió dicho plazo,** de lo que resulta claro que su presentación no es extemporánea, de ahí lo infundado del argumento de la autoridad; en consecuencia, no se actualiza la hipótesis prevista en la fracción IV del artículo 202 del Código Fiscal de la Federación y, por lo tanto, resulta infundada la causal de improcedencia y sobreseimiento que se hace valer.

No es óbice para la anterior consideración, el que la parte actora no haya manifestado nada respecto a la vista que se le mandó dar en acuerdo de fecha 13 de febrero del 2001, acorde a lo dispuesto en la fracción IV del artículo 209 del Código Fiscal de la Federación, pues la misma formuló sus conceptos de impugnación en contra de dicha notificación desde su escrito de demanda, los cuales resultan fundados, al no demostrar la autoridad que la misma se hubiere practicado en forma legal.

Sin embargo, cabe precisar que en el presente caso, no obstante lo dispuesto por el invocado artículo 209, no puede presumirse legal la diligencia de notificación en estudio, por el solo hecho de que la parte actora, durante el plazo de cinco días que le fue concedido para ello, no hubiere controvertido su legalidad, como así lo dispone el precepto aludido, pues se observa que el mismo no contempla la posibilidad de que esa impugnación se hubiere realizado desde el escrito inicial de demanda, como así ocurrió, lo cual resulta procedente en términos de lo dispuesto por el diverso artículo 209 bis del Código Fiscal de la Federación.

Por lo anterior y con fundamento en los artículos 236, 202, fracción IV, en relación con el 203, fracción II, aplicados a contrario sensu, del vigente Código Fiscal de la Federación, esta Sala resuelve:

I.- NO ES DE SOBRESEERSE Y NO SE SOBRESEE el presente juicio **No. 3007/00-02-03-3.**

II.- En consecuencia, deberá continuarse el presente juicio por sus demás trámites legales.

III.- NOTIFÍQUESE.- Así lo resolvieron y firman, los C.C. Magistrados que integran la H. Segunda Sala Regional del Norte Centro II del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, **Nora Elizabeth Urby Genel, M.D.F.**, Instructora en el presente juicio, Licenciados **Héctor Carrillo Máynez, y José Mauricio Fernández y Cuevas,** Presidente de la Sala, ante la C. Secretaria Licenciada **Isabel Patricia Herrero Rodríguez,** quien autoriza con su firma.- **DOY FE.-**

PRIMERA SALA REGIONAL DEL NORESTE

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

GASTOS.- OBLIGACIÓN DE DEMOSTRAR SU DEDUCIBILIDAD.- Si en la demanda de nulidad se deduce que la parte actora impugna el indebido rechazo de gastos de materiales para construcción y arrendamiento de maquinaria, por considerar que los mismos sí eran estrictamente indispensables para la actividad que realiza, y no demuestra con las documentales idóneas cuál es su giro o actividad fiscal, es evidente que la actora no justifica los hechos constitutivos de su acción, a lo que está obligada en términos del artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles en vigor, de aplicación supletoria a la materia fiscal, por tanto, el concepto de violación de referencia debe desestimarse por ser notoriamente infundado. (11)

Juicio No. 1250/00-01-03-01-6.- Resuelto por la Primera Sala Regional del Noreste del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 2 de marzo de 2001, por unanimidad de votos- Magistrada Ponente: Adriana Cabezut Uribe.- Secretaria: Lic. Martha Patricia Saldívar Fernández.

C O N S I D E R A N D O :

(...)

TERCERO.- La litis en el presente asunto se constriñe en determinar si la resolución impugnada se encuentra debidamente ajustada a derecho.

Por lo que se refiere a los conceptos de violación, primero y segundo, plasmados en los incisos a) y b) del considerando segundo anterior, la autoridad demandada, al dar contestación a la demanda, sostuvo la legalidad de la resolución impugna-

da, por estimar que su actuación se encontraba ajustada a derecho, así como que era falso que se hubiese comprobado ante la autoridad que los comprobantes fiscales consistentes en las facturas No. 30086, por $30,500.00; No. 0292, por $101,850.00 y No. 223, por $33,450.00, hayan sido gastos erogados para fines exclusivos de su actividad y que no hubiesen sido analizados por la autoridad, pues basta una simple lectura a la resolución, la cual, a su vez, tiene sustento en el acta final de visita, para percatarse que sí fueron analizadas y que, por lo tanto, se consideraron gastos no indispensables para la operación de la hoy impugnante.

A efecto de estar en condiciones de resolver conforme a derecho la litis planteada en el presente asunto, se estima conveniente hacer notar que la autoridad procedió a rechazarle los gastos de operación, de construcción y arrendamiento de maquinaria, en cantidad de $165,800.00, por estimar que en el ejercicio fiscal para 1997, la contribuyente en ningún momento efectúo operaciones de construcción, por lo que no son deducibles las compras de materiales de construcción y la renta de trascabos. Solamente había obtenido ingresos por concepto de arrendamiento de maquinaria y pretende hacer deducible de sus ingresos, gastos de compras de lámina y materiales para construcción y arrendamiento de maquinaria, por los cuales no había obtenido ingresos, estableciéndose, incluso, a foja No. 08 de la resolución impugnada, que es la propia contribuyente quien tenía en sus registros auxiliares los conceptos de materiales para construcción y que en los registros auxiliares de la contribuyente revisada, existían cuentas como reparación de maquinaria (5100-0046) que no fueron afectadas por esos conceptos, así como que, en tales registros tampoco existían datos de maquinaria, ni de edificios o de bodegas que formaran parte de su activo fijo.

Observándose, además, (a foja No. 8 de la resolución impugnada) que mediante el escrito de contestación a la última acta parcial de auditoría, de fecha 01 de diciembre de 1999, la contribuyente visitada había alegado que tales erogaciones se habían realizado a través de las facturas 30086, 0292 y 223, expedidas por diversos proveedores, las cuales amparaban la venta de materiales utilizados para la reparación de escudos metálicos (cimbras), aditamento que se usa junto con las excavaciones, y para la reparación de techos y paredes de su bodega en donde se guardaban los equipos, así como en la señalización de áreas de trabajo del equipo y en la sombra de

áreas de reparación, por lo que respecta a las dos primeras facturas y, en lo que concierne a la tercera, se expidió por la renta de maquinaria (trascabos), que a su vez fueron rentados a la Junta de Aguas, porque se le requirió más equipo del que la ahora promovente disponía.

Siguiendo ese esquema de ideas, se tiene que no le asiste la razón a la parte actora, en atención a lo siguiente.

Respecto a los argumentos expuestos por la promovente, referente a los gastos de construcción, en cuanto a que indebidamente se le rechazaron por estimar que éstos no eran estrictamente indispensables para la actividad que realizaba; es de indicarse que, ni durante la secuela del presente juicio, ni en la instancia administrativa, justificó que efectivamente las erogaciones rechazadas por ese concepto, fueran gastos estrictamente indispensables para la actividad que realiza, dado que, en el ejercicio fiscal revisado, no tuvo ingresos por construcción.

Si bien, se advierte que la actora en el escrito de 1° de diciembre de 1999, por el cual pretendió desvirtuar los hechos observados en la última acta parcial, señaló que estos gastos fueron realizados en la reparación de escudos metálicos (cimbras); en la reparación de los techos y paredes de sus bodegas, la señalización de sus áreas de trabajo, así como en la sombra de áreas de reparación. También lo es que, la autoridad, en la liquidación controvertida, manifiesta que de la revisión de sus registros no se advierten datos de maquinaria, ni de edificios o de bodegas que formen parte de su activo fijo; sin que esa circunstancia hubiese sido desvirtuada por la actora.

Ahora bien, por lo que se refiere a la cantidad rechazada por la autoridad, referente a la deducción de gastos por arrendamiento de equipos, la actora tampoco justifica que dentro de su actividad fiscal se encuentre el arrendamiento de equipos, con el objeto de acreditar que los gastos erogados por ese concepto eran deducibles como estrictamente indispensables, en el ejercicio fiscal de 1997; debiendo observarse que del análisis a la documentación que obra en el expediente en que se actúa, específicamente del acta final de auditoría de fecha 16 de diciembre de 1999, a folio

No. 38083030099006 (a la que se le otorga valor probatorio pleno, en términos del artículo 234, fracción I, del Código Fiscal de la Federación) claramente se advierte que de acuerdo a su solicitud de inscripción en el registro federal de contribuyentes y de las declaraciones exhibidas en la visita, se desprende que su giro o actividad es la edificación y, al ser así, es claro que la cantidad rechazada por concepto de arrendamiento de maquinaria, no era estrictamente indispensable para su actividad, tomando en consideración que no se demostró que la actora hubiese tenido ingresos (en el ejercicio revisado) por construcción.

Bajo ese esquema de ideas, se llega a la convicción de que la autoridad, ajustada a derecho, procedió a rechazarle las mencionadas erogaciones, por no haber justificado que eran estrictamente indispensables para la actividad que realiza.

(...)

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 236, 237 y 239, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, es de resolverse y se resuelve:

PRIMERO.- La parte actora no acreditó los extremos de su acción, en consecuencia:

SEGUNDO.- Se reconoce la **VALIDEZ** de la resolución impugnada señalada en el resultando primero de este fallo.

NOTIFÍQUESE.-

Así lo resolvieron y firman por unanimidad de votos los C.C. Magistrados que integran la Primera Sala Regional del Noreste del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Licenciados **Adriana Cabezul Uribe** como Presidenta e Instructora; **Raúl Lerma Jasso y Jorge A. Castañeda González**, ante la C. Secretaria, Lic. **Martha Patricia Saldívar Fernández**, quien da fe.

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

SUJETO OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIA Y USO DE VEHÍCULOS, TRATÁNDOSE DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO.- Conforme al artículo 15 del Código Fiscal de la Federación, el arrendamiento financiero es el contrato por virtud del cual una persona se obliga a otorgar a otra el uso o goce temporal de bienes tangibles a plazo forzoso, obligándose esta última a liquidar, en pagos parciales, como contraprestación, una cantidad en dinero determinada o determinable que cubra el valor de adquisición de los bienes, cargas financieras y los demás accesorios, y adoptar al vencimiento del contrato, alguna de las opciones terminales que establece el artículo 25 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito. Lo anterior implica el otorgamiento del uso o goce temporal de un bien tangible, reservándose, quien otorga ese uso o goce temporal, la propiedad de dicho bien, hasta en tanto no se determine cuál de las opciones terminales a que se refiere el artículo 25 citado, se actualice. Por su parte, el artículo 1° de la Ley del Impuesto sobre Tenencia y Uso de Vehículos, previene que están obligados al pago del impuesto de trato, las personas físicas y morales tenedoras o usuarias de los vehículos, presumiéndose que el propietario es el tenedor o usuario de aquéllos. Bajo esa óptica, si bien en el contrato de arrendamiento financiero, la propiedad del bien es de la arrendadora, no puede perderse de vista que, finalmente, el uso y tenencia de aquél, lo tiene el arrendatario, por lo que en esos términos, es éste el obligado a pagar el impuesto de referencia, máxime que la presunción prevista en el artículo 1° de la Ley de la materia, admite prueba en contrario, desvirtuándose con el contrato de referencia que el propietario sea el tenedor o usuario del bien, ya que ese carácter lo tiene el arrendatario. (12)

Juicio No. 3382/00.- Resuelto por la Primera Sala Regional del Noreste del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 30 de marzo de 2001, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Adriana Cabezut Uribe.- Secretaria: Lic. Mabel Vázquez Granados.

C O N S I D E R A N D O :

(...)

TERCERO.- (...)

Para esta Sala el agravio que se analiza es fundado y suficiente para decretar la nulidad de la resolución impugnada, por lo siguiente:

Primeramente, como ambas partes lo reconocen y según se desprende de la documental que obra a fojas 2, 28, 29, 20 y 31, del expediente que se resuelve, el vehículo por el cual se determinó el crédito fiscal recurrido es materia de un contrato de arrendamiento financiero celebrado, por una parte, por el C. PABLO J. CHAPA VILLARREAL, en representación de ARRENDADORA AFIRME, S.A. DE C.V., a quien en lo sucesivo se le denominará "Arrendador" y, por la otra, el C. JUAN PABLO ALANÍS GARZA, a quien se le denominará arrendatario.

Ahora bien, los artículos 14, fracción IV, y 15 del Código Fiscal de la Federación, precisan lo que debe entenderse por "arrendamiento financiero", estipulándose en ellos, lo siguiente:

"Artículo 14.- Se entiende por enajenación de bienes:

"(...)

"IV.- La que se realiza mediante el arrendamiento financiero.

"(...)

"Cuando de conformidad con este artículo se entiende que hay enajenación de bienes, el adquiriente se considerará propietario de los bienes para efectos fiscales."

"Artículo 15.- Para efectos fiscales, el arrendamiento financiero es el contrato por el cual una persona se obliga a otorgar a otra el uso o goce temporal de bienes tangibles a plazo forzoso, obligándose esta última a liquidar, en pagos parciales como contraprestación, una cantidad en dinero determinada o determinable que cubra el valor de adquisición de los bienes, las cargas financieras y los demás accesorios y a adoptar al vencimiento del contrato alguna de las opciones terminales que establece la Ley de la materia.

"En las operaciones de arrendamiento financiero, el contrato respectivo deberá celebrarse por escrito y consignar expresamente el valor del bien, objeto de la operación, y la tasa de interés pactada o la mecánica para determinarla."

Ahora bien, de la lectura al contrato de arrendamiento financiero que obra a fojas 27 a la 31, del expediente que se resuelve y al que se le otorga valor probatorio pleno, se desprende que en la cláusula décima segunda, las partes convinieron que, el bien arrendado es propiedad exclusiva de la arrendadora, (Arrendadora Afirme, S.A. de C.V.) hasta que ésta transmita la propiedad en los términos establecidos en el propio contrato.

Lo que es válido conforme al criterio visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del mes de enero de 1997, página 430, que dice:

"ARRENDAMIENTO FINANCIERO. LA ARRENDADORA DEBE SER PROPIETARIA DE LOS BIENES PARA PODER CONCEDER EL USO Y GOCE DE ELLOS A LA ARRENDATARIA.- De conformidad con las características esenciales del contrato de arrendamiento financiero reguladas por los artículos 24 y 25 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, la adquisición de bienes objeto del arrendamiento financiero, por parte de la arrendadora financiera, debe ser previa a la concertación de aquel contrato, para que esté en aptitud de conceder el uso y goce de los bienes a la arrendataria financiera, conservando

aquélla la titularidad de los bienes durante todo el plazo de duración del contrato, y hasta en tanto el arrendatario no haya optado por adquirir en propiedad los mismos, como opción terminal de la convención arrendaticia.

"OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

"Amparo directo 415/96. Industrias Queretanas, S.A. de C.V. 10 de octubre de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: María del Carmen Sánchez Hidalgo. Secretaria: María Concepción Alonso Flores."

Estipulándose en la cláusula décima cuarta que es obligación de la arrendataria (Juan Pablo Alanís Garza), obtener las licencias, permisos, registros y demás constancias y documentos que se requieran, de acuerdo con las leyes y reglamentos aplicables derivados de la propiedad, tenencia y uso del bien arrendado, señalándose que será por cuenta de dicha parte, el pago de cualquier tipo de contribuciones, derechos y erogaciones en general, que por tales conceptos deban ser pagados a las autoridades correspondientes.

Por su parte, en la cláusula vigésima sexta, del contrato que nos ocupa, las partes convinieron que la arrendataria tenía, además de las obligaciones que se consignan en ese contrato, del pago puntual de todas las obligaciones laborales, fiscales y de cualesquier naturaleza que le correspondan:

Ahora bien, de la lectura al acto recurrido que obra a foja 24 del expediente que se resuelve y que se valora en términos del artículo 234, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, se advierte que la determinación del crédito fiscal obedeció a lo siguiente:

"VISTO EL EXPEDIENTE QUE SE LLEVA EN ESTA SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO, DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN, RESPECTO DEL VEHÍCULO QUE SE ENCUENTRA REGISTRADO A SU NOMBRE, CUYAS CARACTERÍSTICAS SON: PLA-

CAS DE CIRCULACIÓN NO. RLP-8981, MARCA FORD MOTOR COMPANY, MODELO 1990, NÚMERO DE MOTOR 19680, NÚMERO DE SERIE AL54GD19680, SE DESPRENDE QUE A LA FECHA NO HA DADO CUMPLIMIENTO CON LA OBLIGACIÓN FISCAL DEL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIA Y USO DE VEHÍCULOS Y DERECHOS DE CONTROL VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO, POR LO QUE CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS (...)"

Obra en autos el Anexo número 1, del contrato de arrendamiento financiero número AF-03-93-399-001, celebrado entre Arrendadora Afirme, S.A. de C.V. y el Ing. Juan Pablo Alanís Garza, como arrendatario, señalándose como descripción del bien arrendado, el siguiente:

"CANTIDAD	MARCA	TIPO	MODELO	No. MOTOR	No. DE SERIE
1	FORD	TAURUS	1990	19680	AL54GD-19680"

De la transcripción anterior se colige que las características del vehículo por el cual se determinó el crédito fiscal, son las mismas de aquél sobre el que se celebró el contrato de arrendamiento financiero.

Por lo anteriormente señalado, es incuestionable que, si bien es cierto que en el contrato de arrendamiento financiero se precisó que la propietaria del bien arrendado lo era la parte actora, no menos cierto es que, en el propio contrato se estableció que el entero de las contribuciones, derechos y erogaciones en general que derivaran de la propiedad, tenencia y uso del bien, corrían a cargo del arrendatario, por lo que, en todo caso y al existir voluntad expresa del arrendatario de pagar esos conceptos, debe estarse a lo estipulado en tal contrato.

Lo anterior está implícitamente reconocido en el criterio sostenido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo I, Segunda Parte-1, enero a junio de 1988, página 205, que dice:

“CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO. CONSENTIMIENTO TÁCITO.- La empresa arrendadora cumplió voluntariamente con el contrato de arrendamiento financiero, ya que tácitamente y con hechos expresó su consentimiento para realizar en favor de su contraria lo estipulado en el contrato, de ello se sigue que se actuó de acuerdo con los artículos 1803, 1868, 1869 y 1870 del Código Civil del Distrito Federal, dado que el consentimiento para cumplir, se manifestó no sólo de manera tácita sino expresa al cubrir parte de las obligaciones que implícitamente adquirió al momento de celebrar el mismo, sin que tenga relevancia que en el precitado contrato no se mencionara con exactitud a la empresa proveedora porque la hermenéutica jurídica indica que para la interpretación de los contratos debe estarse a la ejecución voluntaria de los mismos.

“TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO.

“Amparo directo 128/88. Burroghs, S.A. de C.V. 13 de abril de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: María de los Ángeles E. Chavira Martínez. Secretaria: Martha Muro Arellano”.

Amén de que, el propio artículo 14, fracción IV, último párrafo, del Código Fiscal de la Federación, establece que el arrendamiento financiero es una enajenación de bienes y que por ese motivo, el adquiriente (arrendatario) se considerará propietario de los bienes para efectos fiscales.

Bajo esa perspectiva, es claro que aun y cuando en el control vehicular aparezca como propietaria la parte actora y que en el contrato de arrendamiento financiero, aquélla se haya señalado como única propietaria del bien arrendado, no puede perderse de vista que dicha propiedad es en función al servicio que presta la actora, empero, finalmente, el obligado fiscalmente para enterar el pago de contribuciones y derechos que deriven de la propiedad, tenencia y uso del bien arrendado son por cuenta del arrendatario y no de la arrendadora.

Ahora bien, el artículo 1° de la Ley del Impuesto sobre Tenencia y Uso de Vehículos, precisa lo siguiente:

> "Artículo 1o. Están obligadas al pago del impuesto establecido en esta Ley, las personas físicas y las morales **tenedoras o usuarias** de los vehículos a que se refiere la misma.
>
> **"Para los efectos de esta Ley, se presume que el propietario es tenedor o usuario del vehículo."**

De la transcripción anterior, se advierte que la presunción de tenencia y uso de vehículo, recae sobre el propietario del mismo.

Presunción que se corrobora, en la especie, con lo establecido en la cláusula décima segunda del contrato de arrendamiento financiero, en el sentido de que la propietaria del bien arrendado es la arrendadora.

No obstante ello, no puede perderse de vista que en tal contrato, fue voluntad de las partes el que el arrendatario (adquiriente para efectos fiscales, acorde al artículo 14, último párrafo, del Código Fiscal de la Federación), está obligado al entero de las contribuciones, erogaciones y derechos que deriven del uso y tenencia del bien arrendado, amén de que la propia legislación fiscal en el artículo 14 citado, establece que cuando se considere enajenación en términos de ese numeral, (arrendamiento financiero), el adquiriente se considerará propietario de los bienes para efectos fiscales, es decir, no establece una presunción, sino que previene expresamente la calidad que fiscalmente tendrá dicha persona.

En tales condiciones, es incuestionable que, en la especie, el obligado al pago del impuesto sobre tenencia y uso de vehículos, por los ejercicios de 1994 a 1999, eran por cuenta del arrendatario, (adquiriente-propietario para efectos fiscales) y no la arrendadora.

Con base en lo anteriormente expuesto, procede decretar la nulidad de la resolución impugnada, al actualizarse la causal de nulidad prevista en el artículo 238, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, sin que sea necesario el estudio del resto de los agravios, pues ello en nada modifica el sentido del presente fallo.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 236, 237, 238, fracción IV, y 239, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, se resuelve:

PRIMERO: La parte actora probó su acción, en consecuencia:

SEGUNDO: Se declara la NULIDAD de la resolución impugnada.

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE AL ACTOR Y POR OFICIO A LAS AUTORIDADES DEMANDADAS.

Así lo resolvieron y firman por unanimidad de votos los C.C. Magistrados que integran la Primera Sala Regional del Noreste del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Licenciados **Adriana Cabezut Uribe** como Presidenta e Instructora, **Raúl Lerma Jasso y Jorge A. Castañeda González**, ante la C. Secretaria quien da fe.

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

NEGATIVA FICTA.- EFECTOS DE LA.- CUANDO LA AUTORIDAD OMITE DAR LOS FUNDAMENTOS Y MOTIVOS EN QUE SE APOYA AQUÉLLA.- Tratándose de la configuración de la negativa ficta, por haber transcurrido el plazo que refiere el artículo 37 del Código Fiscal de la Federación, la autoridad demandada, al contestar la demanda conforme al artículo 215 del Código Fiscal de la Federación, está obligada a expresar los hechos y el derecho en que se apoya la misma. Dicha obligación tiene como fin evitar que la autoridad, con ese silencio, continúe afectando la esfera jurídica del contribuyente, pues al no resolver la petición respectiva, violenta flagrantemente la garantía de seguridad jurídica prevista por el artículo 14 constitucional. En ese sentido, en aquellos casos en que la autoridad no produzca la contestación de demanda, expresando los fundamentos y motivos de la negativa ficta, resulta válido decretar la nulidad de la resolución negativa ficta para el efecto de que la demandada resuelva lo planteado por el actor en la petición respectiva, pues la omisión en que incurre aquélla, por un lado, imposibilita, sin lugar a dudas, el derecho del actor de ampliar su demanda y, por otro, se avalaría que la autoridad continúe en su incumplimiento a las normas antes citadas. (13)

Juicio No. 3651/00-03-01-9.- Resuelto por la Primera Sala Regional del Noreste del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 30 de marzo de 2001, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Adriana Cabezut Uribe.- Secretaria: Lic. Mabel Vázquez Granados.

C O N S I D E R A N D O :

(...)

TERCERO.- (...)

En virtud de lo anterior, esta juzgadora estima que, en el caso, se configura la negativa ficta planteada por el demandante, pues en términos del artículo 37 del Código Fiscal de la Federación, las instancias o peticiones que se formulen ante las autoridades demandadas deberán ser resueltas en un plazo de tres meses, transcurrido el cual, sin que se notifique la resolución, el interesado podrá considerar que la autoridad resolvió negativamente su promoción, supuesto jurídico que, en el caso, se cristaliza, pues la demandada, en ningún momento dio los fundamentos y motivos de la negativa ficta, ni mucho menos justificó haber dado respuesta a la solicitud planteada por la actora, y que la misma hubiese sido notificada legalmente con anterioridad a la presentación de la demanda, configurándose por ello, la negativa ficta mencionada.

Ahora bien, cuando se entabla demanda de nulidad contra una negativa ficta, este Tribunal está obligado a decidir la controversia, tomando en consideración las argumentaciones aducidas en la instancia a la que no se dio respuesta, los fundamentos que esgrima la autoridad en la contestación a la demanda (los cuales habrán de referirse al fondo del problema) y, en su caso, lo que se alegue en la ampliación de ésta, pues con base en todos y cada uno de esos documentos se integra la litis que debe ser resuelta en el juicio de nulidad; sin embargo, en el presente caso se tiene que el demandante no produjo su ampliación a la demanda, ante la omisión de la demandada de dar los fundamentos y motivos de la resolución negativa ficta impugnada, lo que impide al actor controvertir los fundamentos y motivos de la resolución expresa y lo que, evidentemente, implica una ausencia total de fundamentación y motivación del acto impugnado.

En este orden de ideas, procede decretar la nulidad de la resolución negativa ficta, para el efecto de que la autoridad resuelva favorablemente la petición planteada por el actor en el recurso de revisión presentado ante ella el 16 de marzo de 2000, en virtud de la ausencia total de fundamentación y motivación, y deje sin efectos la multa impuesta en cantidad de $7,580.00

Es aplicable a lo anterior, el criterio sostenido por este Tribunal Fiscal de la Federación, visible en su revista número 94, Tercera Época, Año VIII, página 41, que dice:

"NEGATIVA FICTA, PROCEDE DECLARAR SU NULIDAD SI LA AUTORIDAD DEMANDADA, AL FORMULAR SU CONTESTACIÓN, NO DA LOS FUNDAMENTOS Y MOTIVOS DE LA MISMA.- Si al formular su contestación a la demanda el representante de las autoridades demandadas omite dar los fundamentos y motivos de la negativa ficta impugnada, es de considerarse que con tal omisión se viola en perjuicio del demandante el artículo 215 del Código Fiscal de la Federación y, por lo mismo, procede declarar la nulidad de la resolución a debate, máxime si de los argumentos expuestos, tanto en la instancia no resuelta, como en la demanda inicial y ampliación a la misma, se acredita la procedencia legal de la consulta planteada.(11)

"Juicio No. 812/93.- Sentencia de 16 de mayo de 1995, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Raúl Lerma Jasso.- Secretario: Lic. Juan Guillén Morán".

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 236, 237, 238, fracción II y 239, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, es de resolverse y se resuelve:

PRIMERO.- La parte actora acreditó los extremos de su acción, en consecuencia:

SEGUNDO.- Se declara la NULIDAD del acto impugnado, para los efectos indicados en el considerando tercero anterior.

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE ACTORA Y POR OFICIO A LAS AUTORIDADES DEMANDADAS.

Así lo resolvieron y firman por unanimidad de votos, los C.C. Magistrados que integran la Primera Sala Regional del Noreste del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Licenciados Adriana Cabezut Uribe como Presidenta e Instructora, Raúl Lerma Jasso, y Jorge A. Castañeda González, ante la C. Secretaria, Lic. Mabel Vázquez Granados, quien da fe.

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN

PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA DE REMATE. NO REQUIERE CONTENER LA FIRMA DEL FUNCIONARIO QUE LA EMITE.- Conforme al artículo 38, del Código Fiscal de la Federación, los actos administrativos que se deban notificar deberán contener, entre otros requisitos, la firma del funcionario competente. Por su parte, el artículo 176, del citado Código, precisa que, una vez que quede firme el avalúo de bienes, el remate será convocado al día siguiente en que se surta aquel supuesto, a efecto de que tenga verificativo dentro de los treinta días siguientes, publicándose la convocatoria respectiva, cuando menos diez días antes del remate, misma que se fijará en el sitio visible y usual de la oficina ejecutora y en los lugares públicos que se juzgue conveniente. Así mismo, se prevé que en el caso de que el valor de bienes exceda a una cantidad equivalente a cinco veces el salario mínimo general de la zona económica correspondiente al Distrito Federal, elevado al año, la convocatoria se publicará en uno de los periódicos de mayor circulación de la entidad federativa en la que resida la autoridad exactora, dos veces con intervalo de siete días, efectuándose la última publicación cuando menos diez días antes del remate. De lo anterior se concluye, que la publicación de la convocatoria de remate, no es un acto administrativo que deba contener la firma de quien la emite, cuenta habida que, su finalidad es dar a conocer a los acreedores o, en su caso, al público en general, la venta del bien inmueble que se remata, aunado a que, el artículo 176, del Código Fiscal de la Federación, no previene como requisito que dicha publicación contenga la firma de su emisor. (14)

Juicio No.- 3753/00-03-01-9.- Sentencia de la Primera Sala Regional del Noreste, de 4 de abril del 2001, aprobada por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Adriana Cabezut Uribe.- Secretaria: Lic. Mabel Vázquez Granados.

C O N S I D E R A N D O :

(...)

CUARTO.- (...)

Para esta juzgadora el agravio que se analiza es inoperante e infundado, por lo siguiente.

Es inoperante, en razón de que la actora no ataca los fundamentos y motivos que la demandada expuso en el acto controvertido al desechar el recurso de revocación, ni desvirtúa lo señalado por la autoridad en cuanto a la fecha de publicación de la convocatoria de remate y la fecha en que se interpuso el recurso, debiendo considerarse, en consecuencia, consentido lo expuesto por la autoridad en ese sentido.

Es aplicable en la especie, lo sostenido por la Sala Superior de este Tribunal, según tesis visible en la página 563 del tomo Jurisprudencia del Tribunal Fiscal de la Federación 1937-1993, cuyo texto señala:

"**AGRAVIOS INOPERANTES.- TIENEN ESTA NATURALEZA LOS EXPRESADOS POR LA ACTORA SI NO SE REFIEREN A LOS RAZONAMIENTOS FUNDAMENTALES DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA.-** Los conceptos de anulación hechos valer por la actora, en su escrito de demanda resultan inoperantes si no están orientados a controvertir los razonamientos esenciales que dan la motivación y fundamentación de la resolución impugnada, teniendo como consecuencia el reconocimiento de la validez de la resolución.

"Juicio de Competencia Atrayente: 21/89.- Resuelto en sesión de 23 de noviembre de 1989 por mayoría de 4 votos y 2 en contra.- Magistrado Ponente: Alfonso Cortina Gutiérrez.- Secretario: Lic. Alberto G. Salgado Borrego.

"PRECEDENTE:
"Revisión No. 441/85.- Resuelta en sesión de 7 de enero de 1987 por mayoría de 6 votos y 3 en contra.- Magistrado Ponente: José Antonio Quintero Becerra.- Secretario: Lic. Flavio Galván Rivera."

Por otra parte, la demandada confirma la convocatoria de remate número 20/2000, del 16 de mayo de 2000, emitida por la Administración Local de Recaudación de Ciudad Victoria, Tamaulipas, relativa al crédito fiscal número Q-67538, bajo los argumentos siguientes:

"A juicio de esta autoridad, resulta improcedente el concepto de impugnación, para desvirtuar la legalidad de la convocatoria de remate en primera almoneda emitida por la Administración Local de Recaudación de Cd. Victoria, en el sentido de que el promovente aduce violaciones al artículo 38, del Código Fiscal de la Federación por no encontrarse dicho acto de autoridad fundado ni motivado.

"Se afirma lo anterior, toda vez que del análisis efectuado a la convocatoria de remate en primera almoneda número 20/2000 emitida por la Administración Local de Recaudación de Cd. Victoria, se advierte que por su naturaleza no constituye un acto de los que deban ser notificados por la autoridad fiscal, dado que su objeto es el de publicitar el remate de los bienes inmuebles que le fueron embargados a la hoy recurrente en la vía administrativa, a efecto de garantizar el crédito fiscal número Q-67538, en estricto cumplimiento al procedimiento administrativo de ejecución seguido en su contra de conformidad con lo estipulado en el artículo 176, del Código Fiscal de la Federación."

Para esta Sala, es acertado lo señalado por la demandada, pues, efectivamente, la convocatoria de remate que se publica en el periódico, por su naturaleza, no es un acto administrativo que deba cumplir con los requisitos que previene el artículo 38, del Código Fiscal de la Federación. Circunstancia que, incluso es aceptada tácitamente por el propio enjuiciante en el cuarto párrafo de la hoja 5, de su demanda de nulidad.

En todo caso, el artículo 176 del Código Fiscal de la Federación vigente en el año 2000, señalaba lo siguiente:

> "Artículo 176.- El remate deberá ser convocado al día siguiente de haber quedado firme el avalúo, para que tenga verificativo dentro de los treinta días siguientes. La publicación de la convocatoria se hará cuando menos diez días antes del remate.
>
> "La convocatoria se fijará en el sitio visible y usual de la oficina ejecutora y en los lugares públicos que se juzgue conveniente.
>
> "En el caso de que el valor de los bienes exceda de una cantidad equivalente a cinco veces el salario mínimo general de la zona económica correspondiente al Distrito Federal, elevado al año, la convocatoria se publicará en uno de los periódicos de mayor circulación de la entidad federativa en la que resida la autoridad ejecutora, dos veces con intervalo de siete días. La última publicación se hará cuando menos diez días antes de la fecha del remate."

Del análisis al artículo 176, antes transcrito, se advierte que se prevén el momento en que debe convocarse a remate, el lugar en donde se fija su convocatoria y su publicación, pero no obliga, en ninguna parte, que aquélla deba contener, como requisito para su validez, la firma autógrafa del funcionario que la emite, por lo que, en esa medida y aún más por lógica razón, es imposible jurídicamente, obligar a la autoridad que la emite, que la firme autógrafamente cuenta habida que su publicación se realiza por medio del periódico, por lo tanto, si la demandada, al confirmar la convocatoria de remate, cita como fundamento de su actuación el mencionado artículo y motiva su actuación en lo antes dicho, es incuestionable que el acto debatido cumple con los requisitos de la debida motivación y fundamentación.

Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia J/43, sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del mes de marzo de 1996, página 769, que dice:

"**FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.-** La debida fundamentación y motivación legal, deben entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo segundo las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento.

"Amparo directo 194/88. Bufete Industrial Construcciones, S. A. de C. V. 28 de junio de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez.

"Revisión fiscal 103/88. Instituto Mexicano del Seguro Social. 18 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Alejandro Esponda Rincón.

"Amparo en revisión 333/88. Adilia Romero. 26 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Enrique Crispín Campos Ramírez.

"Amparo en revisión 597/95. Emilio Maurer Bretón. 15 de noviembre de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Clementina Ramírez Moguel Goyzueta. Secretario: Gonzalo Carrera Molina.

"Amparo directo 7/96. Pedro Vicente López Miro. 21 de febrero de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: María Eugenia Estela Martínez Cardiel. Secretario: Enrique Baigts Muñoz."

Aunado a lo anterior, se resalta que la actora no cumple con la carga probatoria que le impone el artículo 81, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la materia fiscal, pues exhibe como prueba de su intención copia fotostática simple de la convocatoria de remate, documental que resulta insuficiente para acreditar el dicho de la enjuiciante en el sentido de que la firma es facsimilar.

Bajo ese orden de ideas y toda vez que el accionante con sus argumentos no logró desvirtuar la presunción de legalidad de que gozan las resoluciones fiscales acorde al artículo 68, del Código Fiscal de la Federación, procede reconocer la validez del acto impugnado.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 236, 237 y 239, fracción I del Código Fiscal de la Federación, se resuelve:

PRIMERO: La parte actora no probó su acción, en consecuencia:

SEGUNDO: Se reconoce la **VALIDEZ** de la resolución impugnada.

NOTIFÍQUESE POR CORREO CERTIFICADO CON ACUSE DE RECIBO AL ACTOR Y POR OFICIO A LAS AUTORIDADES DEMANDADAS.

Así lo resolvieron y firman por unanimidad de votos los C.C. Magistrados que integran la Primera Sala Regional del Noreste del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Licenciados Adriana Cabezut Uribe como Presidenta e Instructora, Raúl Lerma Jasso y Jorge A. Castañeda González, ante la C. Secretaria, Lic. Mabel Vázquez Granados, quien da fe.

TERCERA SALA REGIONAL HIDALGO MÉXICO

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

EL RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO EN CONTRA DE LOS ACTOS Y RESOLUCIONES DE LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR, ES DE CARÁCTER OPTATIVO.- Realizando una interpretación armónica de los artículos 1°, 2°, 83, Primero y Segundo Transitorios del 2000, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, vigente a partir del 31 de mayo de 2000, se puede concluir que el recurso de revisión previsto en el artículo 135 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, ya no es obligatorio en su interposición, tal y como se establecía en dicho precepto. Lo anterior es así, en virtud de que, en términos del artículo 1° de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, esta Ley será aplicable a los actos, procedimientos y resoluciones dictadas, tanto por la Administración Pública centralizada, como descentralizada, por lo que, al ser la Procuraduría Federal del Consumidor un organismo descentralizado, de conformidad con el artículo 20 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, también le son aplicables dichas reglas, por ser esta Ley de aplicación supletoria a las diversas leyes administrativas, de cuya naturaleza participa la Ley Federal de Protección al Consumidor, acorde a lo preceptuado por el artículo 2°, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Es fundamental para lo anterior, precisar que el Artículo Segundo Transitorio del 2000, establece que se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo establecido en el decreto publicado el 30 de mayo del 2000, en el Diario Oficial de la Federación, por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; y que señala expresamente que los recursos administrativos en trámite ante organismos descentralizados a la entrada en vigor de dicho decreto, se resolverán conforme a la ley de la materia; en este tenor, si se impugna alguna resolución emitida por la Procuraduría Federal del Consumidor en fecha posterior al 30 de mayo del 2000, es inconcuso que la interposición del recurso

de revisión previsto en la Ley Federal de Protección al Consumidor es de naturaleza optativa, puesto que así lo previene el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, mismo que dispone que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas, en la especie, la Procuraduría Federal del Consumidor, que ponga fin a un procedimiento, a una instancia o resuelvan un expediente, pueden interponer el recurso de revisión o intentar la vía jurisdiccional correspondiente, ya que al redactarse en el texto de dicho precepto la conjunción disyuntiva "o", da entonces la posibilidad a la parte afectada por dichas resoluciones y actos, para que a su elección, promuevan el recurso de revisión previsto en dicha Ley, o en su caso, la vía jurisdiccional que corresponda, superándose el criterio relativo a la obligatoriedad de la interposición del ejercicio del recurso de revisión, puesto que la Ley Federal de Procedimiento Administrativo no lo contempla de esta manera. (15)

Juicio No. 4503/00-06-03-6.- Resuelto por la Tercera Sala Regional Hidalgo México del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 2 de mayo del 2001, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Manuel Lucero Espinosa.- Secretario: Lic. Heriberto Eduardo Gómez Espinosa.

C O N S I D E R A N D O :

(...)

TERCERO.- (...)

Al respecto, este Cuerpo Colegiado estima infundada las causales de improcedencia y, por ello, es ineficaz decretar el sobreseimiento en el presente juicio, en atención a las siguientes consideraciones de hecho y de derecho:

En primer término los razonamientos argumentados por la autoridad demandada son del todo infundados, en virtud de que la definitividad del recurso de revisión contemplado en la Ley Federal de Protección al Consumidor, ha sido derogada; lo

anterior es así, en términos de lo dispuesto por los artículos 1, 2, 83 y artículos Primero y Segundo Transitorios del 2000, que respectivamente, establecen:

> "Artículo 1.- Las disposiciones de esta Ley son de orden e interés públicos, y se aplicarán a los actos, procedimientos y resoluciones de la Administración Pública Federal Centralizada, sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados internacionales de los que México sea parte.
>
> "El presente Ordenamiento también se aplicará a los organismos descentralizados de la Administración Pública Federal Paraestatal respecto a sus actos de autoridad, los servicios que el Estado preste de manera exclusiva, y a los contratos que los particulares sólo puedan celebrar con el mismo. (...)"
>
> (El subrayado es nuestro)
>
> "Artículo 2.- Esta Ley, salvo por lo que toca al Título Tercero A, se aplicará supletoriamente a las diversas leyes administrativas. El Código Federal de Procedimientos Civiles se aplicará a su vez, supletoriamente a esta Ley, en lo conducente. (...)"
>
> "Artículo 83.- Los interesados afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, podrán interponer el recurso de revisión o, cuando proceda, intentar la vía jurisdiccional que corresponda.
>
> "En los casos de actos de autoridad de los organismos descentralizados federales, de los servicios que el Estado presta de manera exclusiva a través de dichos organismos y de los contratos que los particulares sólo pueden celebrar con aquellos, que no se refieran a las materias excluidas de la aplicación de esta Ley, el recurso de revisión previsto en el párrafo anterior, también podrá interponerse en contra de actos y resoluciones que pongan fin al procedimiento administrativo, o a una instancia o resuelvan un expediente."

"ARTÍCULOS TRANSITORIOS 2000
Publicados en el D.O.F. del 30 de mayo de 2000
"ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

"ARTÍCULO SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo establecido en este Decreto. Los recursos administrativos en trámite ante organismos descentralizados a la entrada en vigor del mismo, se resolverán conforme a la ley de la materia"

De los preceptos anteriormente transcritos, se desprende que es infundado el argumento vertido por el contestante, en el sentido de que era forzoso interponer previo al juicio contencioso administrativo, el recurso de revisión en contra del oficio ahora combatido, ante la Procuraduría Federal del Consumidor, para que, entonces, fuera procedente el presente juicio; lo anterior es así, ya que, como dispone el artículo 1° de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, dicha Ley será aplicable a los actos, procedimientos y resoluciones dictadas, tanto por la Administración Pública Centralizada como Descentralizada, por lo que, al ser la Procuraduría Federal del Consumidor un organismo de la Administración Pública Descentralizada, de conformidad con el artículo 20 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, también le son aplicables dichas reglas, máxime cuando dicha Ley es de aplicación supletoria a las diversas leyes administrativas, tal y como lo establece el referido artículo 2° de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; como lo es la Ley Federal de Protección al Consumidor, siendo de suma importancia lo dispuesto por el artículo segundo transitorio del 2000, por el que se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo establecido en el decreto que reforma diversas disposiciones de dicha norma; y que señala que los recursos administrativos en trámite ante organismos descentralizados a la entrada en vigor de dicho decreto, se resolverán conforme a la ley de la materia, por lo que si la resolución ahora combatida fue emitida en fecha 7 de agosto del 2000, en ese momento ya no era obligatorio agotar el recurso de revisión previsto en la Ley Federal de Protección al Consumidor, en

virtud de que el Decreto que reforma la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, publicado el 30 de mayo de 2000 en el Diario Oficial de la Federación, entró en vigor a partir del día siguiente al de su publicación en el mencionado periódico oficial; luego entonces, para la fecha de emisión de la resolución impugnada, el recurso de revisión previsto en la Ley Federal de Protección al Consumidor no era obligatorio en su interposición, razón por la cual se admitió a trámite la demanda de nulidad presentada por la parte actora, atento a que no manifiesta con claridad ni precisión porqué era imperativa la obligación de la interposición del referido medio de impugnación, ni establece concretamente porqué no procedía la vía jurisdiccional correspondiente, dado lo superado del criterio que esgrime la autoridad demanda, por las reglas contenidas en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, en los términos ya precisados.

A mayor abundamiento, cabe hacer la precisión de que, al haber sido derogadas todas las disposiciones que se opusieran a dichas reformas, entonces el precepto legal que se aplica al presente asunto lo es el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, que establece que los interesados afectados por los actos o resoluciones de las autoridades administrativas, en el caso concreto la Procuraduría Federal del Consumidor, que pongan fin a un procedimiento o a una instancia o resuelvan un expediente, pueden interponer el recurso de revisión o, intentar la vía jurisdiccional correspondiente, que en la presente materia sería el juicio contencioso administrativo, por lo que al redactarse en el texto de dicho precepto la conjunción disyuntiva “o”, da entonces la posibilidad a la parte afectada por dichas resoluciones y actos, para que, a su elección, promuevan el recurso de revisión previsto en dicha Ley o, en su caso, los medios de defensa correspondientes, no haciendo obligatorio el ejercicio del recurso de revisión, puesto que la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, no establece la obligatoriedad en la interposición del recurso de revisión, deviniendo infundadas las causales de improcedencia y sobreseimiento planteadas por la demandada.

(...)

En mérito de lo expuesto y con fundamento en los artículos 236, 237, 238, fracción I, y 239, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, se resuelve:

I.- Ha resultado infundada la causal de improcedencia y sobreseimiento planteada por la autoridad demandada;

II.- No se sobresee el presente juicio;

III.- La parte actora probó su pretensión, en consecuencia;

IV.- Se declara la nulidad de la resolución impugnada, precisada en el resultando primero de este fallo.

V.- NOTIFÍQUESE POR CORREO CERTIFICADO CON ACUSE DE RECIBO A LA PARTE ACTORA Y POR OFICIO A LAS AUTORIDADES DEMANDADAS.

Así lo resolvieron y firman los CC. Magistrados integrantes de la Tercera Sala Regional Hidalgo México, del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, **Ana Bertha Thierry Aguilera, Rosa María Corripio Moreno y Manuel Lucero Espinosa**, en su carácter de Presidente e Instructor, ante el C. Secretario de Acuerdos, que da fe.

PRIMERA SALA REGIONAL DE ORIENTE

FIANZAS

PRESCRIPCIÓN.- SE INTERRUMPE A FAVOR DE LA AFIANZADORA, ÚNICAMENTE CUANDO SE LE REQUIERE DIRECTAMENTE DE PAGO, Y NO CUANDO TAL REQUERIMIENTO SE REALICE SOLAMENTE A LA FIADA.- El artículo 146 del Código Fiscal de la Federación dispone que la figura jurídica de la prescripción se establece una vez que ha transcurrido el término de cinco años, contados a partir de que sea exigible el crédito fiscal y que ese término será susceptible de ser interrumpido por cada gestión de cobro que realice la autoridad fiscal al deudor de dicho crédito; dicho precepto es claro en señalar que la gestión de cobro es al deudor. No obstante, tratándose de fianzas, se debe entender que el fiado es el deudor original del crédito que se pretende hacer exigible, y que la afianzadora será deudora de tal crédito, cuando se hubiere negado a pagar y solamente en ese momento se constituye dicha afianzadora como deudora. En este sentido, es necesario que el cómputo del término de la prescripción, se realice a las afianzadoras desde el momento en que se hace exigible el crédito fiscal, pues es en ese momento que puede exigirse se haga efectiva la fianza, pero los requerimientos de pago realizados a la fiada interrumpen el término de prescripción únicamente para esa fiada, pero no para la afianzadora, pues es necesario que se le realicen a tal afianzadora los requerimientos de pago, para que interrumpan la prescripción a su favor. (16)

Juicio No. 290/00-07-01-1.- Sentencia de la Primera Sala Regional del Golfo Centro, de 24 de octubre del 2000, aprobada por mayoría de votos.- Magistrado Ponente: Gilberto Luna Hernández.- Secretaria: Lic. María Aurora Ayala Rodríguez.

C O N S I D E R A N D O :

(...)

SEGUNDO.- (...)

A criterio de los Magistrados que integran esta Sala el concepto de impugnación es **fundado**, toda vez que si bien es cierto el artículo 146 del Código Fiscal de la Federación establece que la figura jurídica de la prescripción se establece una vez que ha transcurrido el término de cinco años, contado a partir de que sea exigible el crédito fiscal, y que ese término será susceptible de ser interrumpido por cada gestión de cobro que realice la autoridad fiscal al deudor de dicho crédito, dicho precepto es claro en señalar que la gestión de cobro es al deudor. No obstante, tratándose de fianzas, se debe entender que el fiado es el deudor original del crédito que se pretende hacer exigible, y que la afianzadora será deudora de tal crédito, cuando se hubiere negado a pagar, y solamente en ese momento se constituye dicha afianzadora como deudora.

En este sentido es necesario que el cómputo del término de la prescripción se realice a las afianzadoras desde el momento en que se hace exigible el crédito fiscal, pues es en ese momento que puede exigirse se haga efectiva la fianza, pero los requerimientos de pago realizados a la fiada interrumpen el término de prescripción únicamente para esa fiada, pero no para la afianzadora, pues es necesario que se le realice a tal afianzadora los requerimientos de pago para que interrumpan la prescripción en su favor.

En la especie, se expidió la fianza número 232012 de fecha 14 de mayo de 1992, de parte de AFIANZADORA SOFIMEX, S. A. DE C. V., a favor de GRUPO MORATTI, S. A. DE C. V., hasta por la suma de $46,105.57, y tal como bien lo menciona la parte actora del acta de incumplimiento de fecha 9 de septiembre de 1999, a foja 22, se puede ver que las parcialidades 16/24, 17/24, 18/24, con fechas de

pago programadas el 9 de agosto, 8 de septiembre y 8 de octubre de 1993 no fueron presentadas, por tanto y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66, fracción II del Código Fiscal de la Federación, efectivamente quedó revocado el convenio para pagar en parcialidades a partir de la tercera parcialidad no pagada, esto es, el 8 de octubre de 1993, pero de las constancias en autos no se infiere que exista requerimiento de pago a la Afianzadora, sino sólo al GRUPO MORATTI, S. A. DE C. V. por lo que no quedó interrumpido el término de la prescripción a la Afianzadora y en ese sentido si el requerimiento de pago se le realizó hasta el 22 de noviembre de 1999, es innegable que han transcurrido en exceso el término de cinco años, para que se configure la prescripción el favor de la multicitada afianzadora, por lo que es **fundado** el concepto de impugnación.

Sin que sea óbice a lo anterior, lo manifestado por la autoridad demandada en el sentido de que fue suficiente que se le diera a conocer a la afianzadora que se había requerido de pago a la empresa fiada, y que por eso también se había interrumpido la prescripción, toda vez que el requerimiento de pago debe realizarse a la afianzadora directamente y no sólo darle a conocer que hubo un requerimiento a su fiada, pues eso no tiene relación directa con el requerimiento que se le haga a la Afianzadora para ser efectiva la fianza, de ahí que no puedan ser consideradas las manifestaciones de la autoridad demandada.

Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la Tesis Aislada número 1.9o.C.30 C, sustentada por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Marzo de 1996, Novena Época, página 941, que a la letra dice:

> "**FIANZA. REQUERIMIENTO A LA COMPAÑÍA AFIANZADORA PREVIAMENTE A LA RECLAMACIÓN QUE CORRESPONDA.** La interpretación de los artículos 93, 93 Bis y 94 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, permite concluir que, el beneficiario de una fianza, para realizar reclamaciones contra una institución que la otorgó, por responsabilidades derivadas de un contrato de esa naturaleza, previamente a optar por presentarlas

ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, o hacer valer sus derechos ante los Tribunales competentes, debe requerir, por escrito, a la institución aludida, el pago de la fianza, porque el trámite ante la citada comisión o por la vía judicial no procedería, si la afianzadora no se hubiere negado a pagar la fianza, y no podría negarse a tal pago, si no se hubiere requerido para que lo hiciera. En caso de no realizarse el pago y estar inconforme con la resolución de la institución de fianzas, podrá entonces presentarse la reclamación respectiva ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, o hacer valer sus derechos ante los tribunales competentes, conforme al procedimiento establecido en los dos últimos artículos invocados."

Por lo expuesto y con apoyo en los artículos 236, 237, 238, fracción IV y 239, fracción II del Código Fiscal de la Federación vigente, se resuelve:

I.- LA PARTE ACTORA PROBÓ SU PRETENSIÓN Y, EN CONSECUENCIA,

II.- SE DECLARA LA NULIDAD LISA Y LLANA DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA CUYAS CARACTERÍSTICAS SE PRECISARON EN EL RESULTANDO PRIMERO DEL PRESENTE FALLO.

NOTIFÍQUESE.- Así lo resolvieron por unanimidad los CC. Magistrados que integran la Primera Sala Regional del Golfo Centro del Tribunal Fiscal de la Federación, Licenciados, Gilberto Luna Hernández Presidente e Instructor, Dora Luz Campos Castañeda y Francisco Xavier Melo Melo, ante la C. Secretaria Licenciada María Aurora Ayala Rodríguez, quien da fe.

SEGUNDA SALA REGIONAL DE ORIENTE

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

MULTAS.- SON ILEGALES LAS IMPUESTAS POR INCUMPLIMIENTO DE PROPORCIONAR DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN SI LA AUTORIDAD NO DEMUESTRA HABER CONCLUIDO LA VISITA DOMICILIARIA O LA REVISIÓN DE GABINETE DENTRO DEL TÉRMINO DE SEIS MESES.- De conformidad con lo ordenado por el artículo 46-A, del Código Fiscal de la Federación, las autoridades fiscales deberán concluir la visita que se desarrolle en el domicilio fiscal de los contribuyentes o la revisión de la contabilidad de los mismos en las oficinas de las propias autoridades dentro de un plazo máximo de seis meses, computados a partir de que se notifique a los contribuyentes el inicio de las facultades de comprobación; por lo que si la autoridad requiere al particular que proporcione determinada documentación e información y éste no la proporciona, la sanción que se imponga por tal omisión deviene en ilegal si la autoridad no acredita la formulación del acta final o la notificación del oficio de observaciones respectivamente; toda vez que en términos del último párrafo del numeral en cita, si se omiten tales requisitos quedarán sin efectos la orden de visita y las actuaciones que se derivaron durante la visita o la revisión; por lo que si la multa tiene como causa generadora el incumplimiento de la exhibición de determinada documentación e información, por disposición expresa del precitado artículo 46-A, del Código Fiscal de la Federación, la sanción también queda sin efectos, por ser una actuación derivada de la omisión del gobernado dentro del procedimiento de revisión. Además, que el incumplimiento del particular para proporcionar la información o documentación no impide a la autoridad fiscal liquidar algún crédito fiscal a su cargo, ya que si ejercita las facultades de comprobación a que se refiere el artículo 42, del Código Fiscal de la Federación, tratándose de revisiones de escritorio si el contribuyente no exhibe la documentación e información requerida de conformidad con lo ordenado por el artículo 55, del Código Fiscal de la Federación, se puede determinar presuntivamente su utilidad fiscal. (17)

Juicio No. 197/00-07-02-2 y 341/00-07-02-3 acumulados.- Sentencia de la Segunda Sala Regional del Golfo Centro, de 30 de enero del 2001, aprobada por mayoría de votos.- Magistrado Instructor: José Gustavo Ruiz Campos.- Secretario: Lic. Norberto López Pérez.

C O N S I D E R A N D O :

(...)

TERCERO.- (...)

Destacado lo anterior, los Magistrados que integran este Órgano Jurisdiccional determinan, que es fundado el concepto de impugnación propuesto por la demandante en atención a que el artículo 46-A, del Código Fiscal de la Federación, en la parte que nos interesa ordena:

> "**Artículo 46-A.-** Las autoridades fiscales deberán concluir la visita que se desarrolle en el domicilio fiscal de los contribuyentes o la revisión de la contabilidad de los mismos que se efectúe en las oficinas de las propias autoridades, dentro de un plazo máximo de seis meses contados a partir de que se le notifique a los contribuyentes el inicio de las facultades de comprobación. Lo antes dispuesto no es aplicable a aquellos contribuyentes respecto de los cuales la autoridad fiscal o aduanera solicite información a autoridades fiscales o aduaneras de otro país o esté ejerciendo sus facultades para verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los artículos 58, fracción XIV, 64-A y 65 de la Ley del Impuesto sobre la Renta o cuando la autoridad aduanera esté llevando a cabo la verificación de origen a exportadores o productores de otros países de conformidad con los tratados internacionales celebrados por México, por el o los ejercicios sujetos a revisión; a los integrantes del sistema financiero, así como a los que en esos mismos ejercicios consoliden

para efectos fiscales, de conformidad con el Título II, Capítulo IV de la citada Ley, por lo que en el caso de visita o revisión a los mismos, las autoridades fiscales podrán continuar con el ejercicio de sus facultades de comprobación sin sujetarse a la limitación antes señalada (...) Cuando las autoridades no levanten el acta final de visita o no notifiquen el oficio de observaciones, o en su caso, el de conclusión de la revisión dentro de los plazos mencionados, ésta se entenderá concluida en esa fecha, quedando sin efectos la orden y las actuaciones que de ella se derivaron durante dicha visita o revisión."

De la interpretación del precepto legal transcrito, se desprende que es incorrecta la actuación de la autoridad sancionadora, en virtud de que la multa impugnada en el juicio de nulidad es dependiente del inicio de facultades de revisión de contabilidad, es decir, proviene del oficio número S.F.99-IX-4046, de fecha 10 de septiembre de 1999, emitido por la Secretaría de Finanzas del Estado de Tlaxcala, por el cual se requiere a la enjuiciante diversa documentación para comprobar su contabilidad, en consecuencia le resulta aplicable lo dispuesto por el artículo 46-A, del Código Fiscal de la Federación, ya transcrito.

Ahora bien, si en la especie, ha transcurrido el plazo de seis meses que establece el artículo 46-A, del Código Fiscal de la Federación y no se ha notificado a la accionante el oficio de observaciones o el de conclusión de la revisión, se actualiza el supuesto establecido en el último párrafo del mencionado artículo que señala "(...) Cuando las autoridades no levanten el acta final de visita o no notifiquen el oficio de observaciones, o en su caso, el de conclusión de la revisión dentro de los plazos mencionados, ésta se entenderá concluida en esa fecha, quedando sin efectos la orden y las actuaciones que de ella se derivaron durante dicha visita o revisión".

En efecto, es ilegal la multa que controvierte la enjuiciante, en virtud de que la multa impugnada, en el juicio, proviene directamente del inicio de facultades de revisión de contabilidad practicada al amparo del oficio S.F.99-IX-4046, asimismo, dicho oficio y las actuaciones que de él emanaron quedaron sin efecto, por no notificarse el oficio de observaciones o de conclusión de la revisión dentro del plazo de seis

meses que establece el artículo 46-A, del Código Fiscal de la Federación, en consecuencia la multa controvertida en el expediente 197/00-07-02-2, queda sin sustento y al ser una resolución que proviene del referido oficio de requerimiento de documentación, debe quedarse sin efectos también, por mandato expreso del precepto legal multicitado, por establecer el mismo una facultad reglada que constriñe a la autoridad a realizar lo que prescribe, debido a lo cual es improcedente dicha multa.

No es óbice para llegar a la conclusión anterior, el hecho que las autoridades demandadas en su oficio contestatorio manifiesten; que es infundado el agravio de su contraparte, por lo que no se viola en su perjuicio el artículo 46-A, del Código Fiscal de la Federación, ya que la sanción tiene como causa generadora el hecho que haya incumplido el requerimiento de solicitud de declaraciones que se le formuló a través del oficio con número de folio 4046, de 10 de septiembre de 1999; en virtud de que la obligación establecida en el artículo 46-A, del Código Fiscal de la Federación, de concluir la revisión de contabilidad que se realice a los contribuyentes, dentro de un plazo máximo de seis meses contados a partir de que se les notifique el inicio de las facultades de comprobación, no es una facultad discrecional sino reglada, pues las facultades discrecionales son aquéllas que dejan al arbitrio de la autoridad la forma de actuar y proceder, mientras que dicha norma contiene una regla del procedimiento que brinda protección y seguridad jurídica al contribuyente, en virtud que establece un plazo determinado de duración de las facultades de comprobación, por lo tanto, es reglada dicha "facultad" es decir, el deber de la autoridad de respetar dentro del desarrollo de las facultades de fiscalización, todos los requisitos establecidos en el procedimiento de que se trate, en la especie el plazo de conclusión de la revisión en la contabilidad, so pena de que en caso de no acatar dicha regla, se deja sin efectos el requerimiento de información o de documentación que se realizó y las actuaciones que de éste se derivaron.

A mayor abundamiento, la autoridad debió como facultad reglada, emitir el oficio de observaciones o de conclusión de la revisión de los documentos, dentro del término que establece el artículo 46-A, del Código Fiscal de la Federación, pues en el supuesto de que el contribuyente no presentara la documentación e información

solicitada, al ejercitarse las facultades establecidas en la fracción II, del artículo 42, del ordenamiento fiscal precitado dentro de sus facultades discrecionales la autoridad puede determinar presuntivamente la utilidad del contribuyente, en términos de lo dispuesto por el artículo 55, del Código Tributario, independientemente de las sanciones a que haya lugar.

Lo anterior es así, porque el artículo 55, del Código Fiscal de la Federación, textualmente señala:

> "**Artículo 55.-** Las autoridades fiscales podrán determinar presuntivamente la utilidad fiscal de los contribuyentes, el resultado fiscal en el régimen simplificado o el remanente distribuible de las personas que tributan conforme al Título III de la Ley del Impuesto sobre la Renta, sus ingresos, entradas y el valor de los actos, actividades o activos, por los que deban pagar contribuciones, cuando: I.- Se opongan u obstaculicen la iniciación o desarrollo de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales; u omitan presentar la declaración del ejercicio de cualquier contribución hasta el momento en el que se inicie el ejercicio de dichas facultades y siempre que haya transcurrido más de un mes desde el día en que venció el plazo para la presentación de la declaración que se trate. Lo dispuesto en esta fracción no es aplicable a aportaciones de seguridad social. II.- No presenten los libros y registros de contabilidad, la documentación comprobatoria de más del 3% de alguno de los conceptos de las declaraciones, o no proporcionen los informes relativos al cumplimiento de las disposiciones fiscales. III.- Se dé alguna de las siguientes irregularidades: a) Omisión del registro de operaciones, ingresos o compras, así como alteración del costo, por más de 3% sobre los declarados en el ejercicio. b) Registro de compras, gastos o servicios no realizados o no recibidos. c) Omisión o alteración en el registro de existencias que deban figurar en los inventarios, o registren dichas existencias, a precios distintos de los de costo, siempre que en ambos casos, el importe exceda del 3% del costo de los inventarios. IV.- No cumplan con las obligaciones sobre valuación de inventarios o no lleven el procedimiento de control de los mismos, que establezcan las disposiciones

fiscales. V.- No se tengan en operación los equipos y sistemas electrónicos de registro fiscal que hubiera autorizado la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los destruyan, alteren o impidan el propósito para el que fueron instalados. VI.- Se adviertan otras irregularidades en su contabilidad que imposibiliten el conocimiento de sus operaciones. La determinación presuntiva a que se refiere este artículo, procederá independientemente de las sanciones a que haya lugar."

De lo anterior se advierte, que la autoridad fiscalizadora, al encontrarse imposibilitada físicamente de realizar la revisión de la documentación contable e informe solicitados por ella, en ejercicio de sus facultades de comprobación, por razones imputables al contribuyente auditado, como sanción a éste, se puede determinar presuntivamente la utilidad fiscal, en virtud de que dicho contribuyente se puede encontrar en alguno de los supuestos de procedencia establecidos en el artículo transcrito, por lo tanto, no se puede considerar que la autoridad hacendaria se encuentre imposibilitada de cumplir con la obligación establecida en el artículo 46-A, del Código Fiscal de la Federación, aunque la demandante haya incumplido el requerimiento.

Precisado lo anterior, no es dable considerar que el oficio de observaciones o de conclusión de la revisión de gabinete, a que se refieren las fracciones IV y V del artículo 48 del Código Fiscal de la Federación, sólo pueda emitirse sobre la base de los documentos, e informes aportados por el contribuyente, sino también, con sustento en la determinación presuntiva, en el caso de que se surta dentro del desarrollo de las facultades de comprobación una causal de procedencia de la mencionada determinación presuntiva de utilidad, establecida en el numeral 55, del Código Tributario.

En el mismo sentido, la autoridad no puede señalar como obstáculo para cumplir con la obligación establecida en el artículo 46-A, del Código Fiscal de la Federación, el hecho de que los contribuyentes auditados no proporcionen la documentación o informes legalmente solicitados, ya que tal y como ha quedado asentado, la

legislación fiscal otorga los medios y procedimientos alternativos suficientes para que la autoridad fiscalizadora pueda llevar a cabo sus facultades de comprobación, máxime que a discrecionalidad la misma autoridad revisora, puede ampliar el plazo de seis meses por un lapso igual, previa notificación al revisado, para concluir la visita o notificar el oficio de observaciones o de conclusión de la revisión, en su caso, de conformidad con el precepto legal citado en este párrafo.

En el caso concreto, la autoridad hacendaria inició las facultades de comprobación establecidas en el artículo 42, fracción II del Código Fiscal de la Federación, que a la letra dice:

> "**Artículo 42.-** Las autoridades fiscales a fin de comprobar que los contribuyentes, los responsables solidarios o los terceros con ellos relacionados han cumplido con las disposiciones fiscales y, en su caso, determinar las contribuciones omitidas o los créditos fiscales, así como para comprobar la comisión de delitos fiscales y para proporcionar información a otras autoridades fiscales, estarán facultadas para: (...) II.- Requerir a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, para que exhiban en su domicilio, establecimientos o en las oficinas de las propias autoridades, a efecto de llevar a cabo su revisión, la contabilidad, así como que proporcionen los datos, otros documentos o informes que se les requieran (...)"

En la especie, la autoridad administrativa inició sus facultades de fiscalización al notificar el oficio número S.F.99-IX-4046, de fecha 10 de septiembre de 1999, emitido por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tlaxcala, procedimiento de comprobación que se sigue en términos de lo dispuesto entre otros preceptos en el artículo 48, fracciones IV y V, en relación al 46-A, ambos del Código Fiscal de la Federación, que en lo conducente indica:

> "**Artículo 48.-** Cuando las autoridades fiscales soliciten de los contribuyentes, responsables solidarios o terceros, informes, datos o documentos o pidan la presentación de la contabilidad o parte de ella, para el ejercicio de sus facul-

tades de comprobación, fuera de una visita domiciliaria, se estará a lo siguiente: I.- La solicitud se notificará en el domicilio manifestado ante el Registro Federal de Contribuyentes por la persona a quien va dirigida y en su defecto, tratándose de personas físicas, también podrá notificarse en su casa habitación o lugar donde éstas se encuentren. Si al presentarse el notificador en el lugar donde deba de practicarse la diligencia, no estuviere la persona a quien va dirigida la solicitud o su representante legal, se dejará citatorio con la persona que se encuentre en dicho lugar, para que el contribuyente, responsable solidario, tercero o representante legal lo esperen a hora determinada del día siguiente para recibir la solicitud; si no lo hicieren, la solicitud se notificará con quien se encuentre en el domicilio señalado en la misma (...) IV.- Como consecuencia de la revisión de los informes, datos, documentos o contabilidad requeridos a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros, las autoridades fiscales formularán oficio de observaciones, en el cual harán constar en forma circunstanciada los hechos u omisiones que se hubiesen conocido y entrañen incumplimiento de las disposiciones fiscales del contribuyente o responsable solidario. V.- Cuando no hubiera observaciones, la autoridad fiscalizadora comunicará al contribuyente o responsable solidario, mediante oficio, la conclusión de la revisión de gabinete de los documentos presentados (...)"

De lo anterior se advierte, que la facultad de comprobación se concluye con la notificación del oficio de observaciones o en su caso, con el oficio de conclusión de la revisión de gabinete, dentro del término de seis meses contados a partir de que se les notifique el inicio de las facultades de comprobación, en atención a lo dispuesto en el multicitado artículo 46-A, del Código Fiscal de la Federación, por lo que si en la especie no se respetó el plazo indicado ya que las facultades de comprobación se iniciaron el 21 de septiembre de 1999 y el 24 de enero del año 2000, fecha de presentación de la demanda, no se había concluido la revisión de gabinete, se actualiza la sanción establecida en el precepto legal mencionado.

En virtud de lo expuesto, lo procedente es declarar la nulidad del oficio S.F.99-X-4935, de 21 de octubre de 1999, impugnado en el oficio número 197/00-07-02-2,

en atención a las consideraciones de hecho y de derecho vertidas en esta parte considerativa.

(...)

Por lo expuesto y con fundamento en lo ordenado por los artículos 202 y 203, a contrario sensu, 236, 237, 238, fracción IV y 239, fracción II del Código Fiscal de la Federación es de resolverse y se resuelve:

I.- Resultaron infundadas las causales de improcedencia del juicio propuestas por las autoridades demandadas, en los expedientes 197/00-07-02-2 y 341/00-07-02-3, por lo que;

II.- No es de sobreseer, ni se sobreseen los juicios 197/00-07-02-2 y 341/00-07-02-3.

III.- Fueron procedentes los juicios de nulidad interpuestos por **SKY LAB 2000, S.A. DE C.V.** en contra de las resoluciones administrativas materia de los mismos.

IV.- La parte actora probó su acción, en los juicios con números de expedientes 197/00-07-02-2 y 341/00-07-02-3, en consecuencia;

V.- Se declara la nulidad, de los actos de autoridad precisados en los resultandos primero y cuarto de esta sentencia.

VI.- NOTIFÍQUESE.

Así lo resolvieron y firman los CC. Magistrados que integran la Segunda Sala Regional del Golfo Centro del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Licenciados José Gustavo Ruiz Campos en su carácter de Presidente e Instructor en el juicio, Trinidad Cuellar Carrera y Javier Ramírez Jacintos, ante el C. Secretario de Acuerdos, Licenciado Norberto López Pérez, quien actúa y da fe.

INFONAVIT

INFONAVIT.- DETERMINACIÓN PRESUNTIVA PARA EL PAGO DE LAS CUOTAS AL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, SE DEBE EJERCER ALGUNA FACULTAD DE COMPROBACIÓN.- De la interpretación armónica de los artículos 30, fracciones I y IV, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, así como de los artículos 56 y 57 del Código Fiscal de la Federación, se observa que tratándose de aportaciones no enteradas al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, las autoridades de dicho Instituto podrán determinar presuntivamente las aportaciones ejerciendo alguna de las facultades de comprobación previstas por la Ley como son: las visitas domiciliarias, el requerimiento de información o documentación a los patrones y conforme al procedimiento que se determine por la Ley de la materia sin embargo, dicho procedimiento no se encuentra previsto en referida Ley, sino en los artículos 56 y 57, párrafos segundo y último del Código Fiscal de la Federación, toda vez que para efectuar la determinación presuntiva de las aportaciones omitidas, es preciso que la autoridad se allegue de datos necesarios para determinar la relación laboral con las personas a su servicio, así como el salario, elementos que le servirán a la autoridad para efectuar el cálculo de las aportaciones no enteradas conforme al último párrafo del artículo 57 del Código Tributario, por lo que cualquier determinación presuntiva que no se sustente en procedimiento alguno resulta ilegal.(18)

Juicio No. 2193/00-07-02-5.- Sentencia de la Segunda Sala Regional de Oriente, de 7 de febrero del 2001, aprobada por mayoría de votos.- Magistrado Ponente: José Gustavo Ruíz Campos.- Secretario: Lic. Sergio Gutiérrez Bello.

C O N S I D E R A N D O :

(...)

TERCERO.- (...)

Los Magistrados que integran este Órgano Jurisdiccional determinan, que es fundado el concepto de impugnación propuesto por la parte actora para declarar la nulidad de la resolución administrativa impugnada, toda vez que las autoridades demandadas determinaron presuntivamente las aportaciones, sin que se ejerciera alguna facultad de comprobación.

En efecto, de la resolución impugnada contenida en el oficio número de folio F-AB/00/21/02/000221 de fecha 25 de mayo del 2000, que obra a fojas 19 de autos, se puede constatar que las autoridades demandadas no ejercitaron facultad de comprobación alguna, sino sólo indicaron los fundamentos en el que se contienen diversas facultades, siendo éstos los artículos 42, fracción II del Código Fiscal de la Federación y 30, fracciones I y V de la Ley del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores.

En el artículo 42, fracción II del Código Fiscal de la Federación se encuentra contemplada la facultad de comprobación de la autoridad a través de requerimiento de documentación a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros relacionados con ellos, para que exhiban en su domicilio o en las oficinas de las propias autoridades, la contabilidad, así como datos e informes para proceder a su revisión, sin que como se indicó conste en la resolución que se haya requerido dato alguno a la hoy actora.

Por lo que respecta al artículo 30, fracciones I y V de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, disposiciones que fueron señaladas por la autoridad emisora en la resolución impugnada, se contempla la facul-

tad de liquidación, así como las facultades con las que cuenta el referido Instituto para determinar el importe de las aportaciones patronales incumplidas, y para cumplir dicho fin podrá ordenar y practicar con el personal que al efecto designe, visitas domiciliarias, auditorías e inspecciones a los patrones, así como requerir a los patrones información, para determinar en forma presuntiva y conforme al procedimiento que determine el Instituto, disposiciones las cuales en su texto señalan lo siguiente:

> "Artículo 30. Las obligaciones de efectuar las aportaciones y enterar los descuentos a que se refiere el artículo anterior, así como su cobro tienen el carácter de fiscales.
>
> "El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en su carácter de organismo fiscal autónomo, está facultado, en términos del Código Fiscal de la Federación, para:
>
> "I.- Determinar, en caso de incumplimiento, el importe de las aportaciones patronales y de los descuentos omitidos, así como para calcular sus recargos, señalar las bases para su liquidación, fijarlos en cantidad líquida y requerir su pago. Para este fin podrá ordenar y practicar, con el personal que al efecto designe, visitas domiciliarias, auditorías e inspecciones a los patrones, requiriéndoles la exhibición de libros y documentos que acrediten el cumplimiento de las obligaciones que en materia habitacional les impone esta Ley.
>
> "(...)
>
> "V. Requerir a los patrones que omitan el cumplimiento de las obligaciones que esta Ley establece, la información necesaria para determinar la existencia o no de la relación laboral con las personas a su servicio, así como la que permita establecer en forma presuntiva y conforme al procedimiento que al efecto el Instituto señale, el monto de las aportaciones omitidas."

De la anterior transcripción, se desprende que las autoridades del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores cuenta con facultades de liquidación y de cobro, y que para efecto de la liquidación deben ejercer las facultades de comprobación, ya sea mediante la práctica de visita domiciliaria, auditorías e inspecciones al domicilio de los patrones, y así mismo deberá requerir la exhibición de libros y documentos, no siendo caso de excepción la determinación presuntiva, ya que en forma expresa el artículo 30, fracción V, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, vigente a partir del 14 de enero de 1986, establece que se deberá requerir la documentación necesaria que le permita determinar en forma presuntiva el monto de las aportaciones omitidas.

Así mismo, cabe señalar que en el artículo 57, último párrafo del Código Fiscal de la Federación, se encuentra previsto la forma en la que se determinarán las aportaciones no enteradas al Instituto, al señalarse en el mismo lo siguiente:

"Artículo 57.

"(...)

"Para efectos de la determinación presuntiva a que se refiere este artículo, las autoridades fiscales podrán utilizar indistintamente cualquiera de los procedimientos previstos en las fracciones I a V inclusive del artículo 56 de este Código.

"Tratándose de las aportaciones no enteradas al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, previstas en el artículo 136 de la Ley Federal del Trabajo, se considerará que las omitidas son las que resulten de aplicar la tasa del 5% a la cantidad equivalente a cuatro veces el salario mínimo general diario de la zona económica del patrón, elevado al período que se revisa, por cada trabajador a su servicio."

De la anterior transcripción, se puede observar que se contempla el procedimiento aplicable para determinar las aportaciones al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores sin que en dicho precepto se establezca que no serán aplicables las disposiciones y el procedimiento que se prevé en el artículo 57 del Código Fiscal de la Federación, debido a que la autoridad no precisa en qué disposición de la Ley en cuestión se encuentra regulado el procedimiento de determinación presuntiva, como lo prevé el artículo 30, fracción V de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, así mismo porque las disposiciones previstas en el Código Fiscal de la Federación se aplican en forma supletoria.

Una vez señalado lo anterior, es preciso señalar que en el artículo 56 del Código Fiscal de la Federación se encuentran previstos los distintos procedimientos con base en los cuales las autoridades efectuarán sus cálculos, los cuales implican el ejercicio de una facultad de comprobación.

No pasa inadvertido para esta Sala lo señalado por las autoridades demandadas en el sentido de que no tienen aplicación en su integridad los artículos 56 y 57 del Código Fiscal de la Federación, consideración que no tiene sustento legal alguno, debido a que el procedimiento de determinación presuntiva no se encuentra regulado en la Ley específica de la materia, otra razón que corrobora que se debió ejercer una facultad de comprobación para realizar la determinación presuntiva la constituye el que los distintos procedimientos previstos en el artículo 56 del Código Tributario Federal, se refieren a normas de procedimiento que se aplican a falta de disposición expresa, y para llevar a cabo alguno de los procedimientos, es necesario ejercitar alguna facultad de comprobación.

De los preceptos señalados en los párrafos que anteceden, en los cuales la autoridad fundamentó sus actos, se desprende que la determinación presuntiva por concepto de aportaciones adeudadas al Instituto demandado sólo puede tener su origen en datos obtenidos con motivo del ejercicio de sus facultades de comprobación, esto es con motivo de una visita domiciliaria o bien requiriendo la contabilidad, o la información a un tercero, u otra información obtenida en el ejercicio de sus facultades de comprobación.

Aunado a lo antes señalado, se advierte además el que para efectuar una determinación presuntiva de las aportaciones al referido Instituto, lo constituye el que la determinación no constituye una facultad discrecional.

En el presente caso, del análisis a la resolución impugnada no se encuentra consignado que la autoridad haya llevado a cabo alguna de las facultades de comprobación que las disposiciones mencionadas la faculten, por lo que al no haber constancia de que se hubiere llevado a cabo alguna de ellas, la resolución deviene en ilegal, por haberse emitido en contravención a las disposiciones legales aplicadas, como lo fueron los artículos 30, fracciones I y V de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, así como los artículos 56 y 57, párrafos segundo y último, ambos preceptos del Código Fiscal de la Federación, pues emitió sus resoluciones determinantes de adeudos sin que previamente hubiere notificado a la empresa actora el ejercicio de sus facultades de comprobación.

En este orden de ideas, se concluye que en el caso se surte la causal de ilegalidad prevista por la fracción IV del artículo 238 del Código Fiscal de la Federación, por lo que procede en el caso declarar la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada en términos de la fracción II del artículo 239 del ordenamiento legal antes invocado.

Es aplicable por analogía la tesis: V.1o.38 A, correspondiente a la Octava Época, Instancia: Primer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo X, Agosto de 1992, Página: 639, la cual en su texto señala lo siguiente:

> "**UTILIDAD FISCAL. EL PROCEDIMIENTO PARA DETERMINARLA PRESUNTIVAMENTE, NO CONSTITUYE UNA FACULTAD DISCRECIONAL DE LA AUTORIDAD.** De acuerdo con el artículo 58 del Código Fiscal de la Federación, cuando en el desarrollo de una visita domiciliaria la autoridad advierta que el visitado se encuentra en alguno de los supuestos de determinación presuntiva previstos en el artículo 55 de ese ordenamien-

to legal y tenga elementos suficientes para apreciar la situación del visitado, le hará saber a éste, mediante acta parcial, que existe la posibilidad de que se le aplique la determinación presuntiva y que cuenta con quince días a partir de esa notificación, para corregir su situación fiscal en las distintas contribuciones que se causen en el periodo del ejercicio sujeto a revisión, dicho plazo podrá prorrogarse por una sola vez por quince días más. En el caso de que el visitado presente la forma de corrección de su situación fiscal, deberá proporcionar copia a los visitadores, los cuales, de constatar que no existen otras irregularidades deberán concluir la visita, y en el supuesto de que el visitado sólo corrija su situación parcialmente o no la corrija o bien, corrigiéndola aún subsistan irregularidades que aclarar, la visita deberá continuarse hasta agotarse la investigación respectiva, asentando en el acta final estas circunstancias. Ésta es la interpretación correcta del artículo 58 del Código Fiscal de la Federación, atendiendo a la voluntad del legislador, el cual quiso otorgar al contribuyente visitado la oportunidad de corregir su situación fiscal antes de que concluyera la visita de auditoría, evitándole mayores problemas, por lo que al utilizarse el término 'podrá' se refiere a hecho de 'tener expedita la facultad de hacer una cosa, tener facilidad, tiempo o lugar de hacer una cosa', conforme a la voz 'poder' consultable en la página mil cuarenta y dos del Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, y no debe de entenderse como que otorga facultad discrecional o potestativa a la autoridad fiscal de conceder o no la oportunidad al visitado de corregir su situación fiscal, sino como un deber de ésta el acatar lo preceptuado en el numeral en comento."

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 236, 237, 238, fracción IV y 239, fracción II del Código Fiscal de la Federación, se resuelve:

I.- La parte actora probó su acción.

II.- Se declara la nulidad de la resolución contenida en el folio F-AB/00/21/02/000221 de fecha 25 de mayo del 2000, emitida por el Jefe del Área de Fiscalización del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, de la Delegación Regional Puebla.

III.- Notifíquese.

Así lo resolvieron y firman los CC. Magistrados que integran la Segunda Sala Regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, José Gustavo Ruíz Campos, como Presidente e Instructor, Javier Ramírez Jacintos y Trinidad Cuellar Carrera, ante el C. Secretario: Licenciado Sergio Gutiérrez Bello, quien actúa y da fe.

SALA REGIONAL PENINSULAR

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

COMPENSACIÓN INDEBIDA.- NO BASTA QUE LAS ADMINISTRACIONES LOCALES DE RECAUDACIÓN, FUNDEN SU COMPETENCIA PARA DETERMINARLA, SINO QUE, ADEMÁS, ES NECESARIO QUE CITEN EL ARTÍCULO DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN EN EL QUE SE PREVÉ LA FACULTAD DE FISCALIZACIÓN QUE EJERCEN.- De una interpretación armónica a los artículos 38, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, y 16 de la Constitución, se desprende que los actos de autoridad deben estar debidamente fundados y motivados, lo cual se cumple cuando se precisan en el acto de autoridad el precepto o preceptos que le otorgan competencia o facultades para emitir determinado acto. En estas condiciones, no basta que las Administraciones Locales de Recaudación al emitir la resolución en la que determinen diferencias a cargo de los contribuyentes por compensaciones indebidas, funden su competencia para hacerlo, en términos del artículo 41, apartado A, fracción XV, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, en vigor durante el período revisado, sino que, además, es necesario que citen el dispositivo que prevé la facultad de fiscalización que ejercen conforme al artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, pues de no ser así, el contribuyente quedaría imposibilitado para conocer con certeza el procedimiento de comprobación de que es objeto, a fin de que pueda preparar su defensa y, en su caso, definir qué pruebas podrá aportar en su favor en el momento oportuno, incluso para constatar la existencia de la facultad de comprobación a que fue sometido. Lo cual es así, pues el artículo del Reglamento Interior antes precisado, no es autónomo, sino que constituye el instrumento delegatorio de facultades a través del cual se distribuyen, entre las dependencias del Servicio de Administración Tributaria, las atribuciones que el Código Fiscal de la Federación confiere a éstas en su artículo 42, el cual necesariamente debe estar concatenado con el citado Ordenamiento Legal. (19)

Juicio No. 1446/98.- Resuelto por la Sala Regional Peninsular del Tribunal Fiscal de la Federación, el 13 de enero de 2000, por mayoría de dos votos y uno en contra.- Magistrado Instructor: Faustino Gerardo Hidalgo Ezquerra.- Secretario: Lic. Juan Carlos Cámara Maldonado.

C O N S I D E R A N D O :

(...)

TERCERO.- (...)

El argumento que precede, esta Sala Juzgadora lo considera fundado, en atención a las siguientes consideraciones:

En efecto, de acuerdo con el artículo 16 constitucional, en relación con el 38, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado, entendiéndose por lo primero, que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse con precisión las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables; y en materia administrativa, específicamente, para poder considerar un acto autoritario como correctamente fundado, es necesario que en él se citen el precepto o preceptos que otorgan competencia o facultades a las autoridades para emitir el acto en agravio del gobernado.

Esto es, no basta que una autoridad tenga atribuciones para dictar alguna determinación, para que ésta sea considerada legal o imperiosamente obedecible, sino que conforme a los numerales en comento, es imprescindible que se citen los preceptos legales en que se funde y motive la causa legal del procedimiento que se ejerce, a fin de no dejar en estado de indefensión al gobernado.

En relación a lo anterior, el Código Fiscal de la Federación en su artículo 42, fracciones de la I a la VIII, establece las facultades de fiscalización que las autoridades fiscales podrán ejercer a fin de comprobar que los contribuyentes, los responsables solidarios o los terceros con ellos relacionados, han cumplido con las disposiciones fiscales y, en su caso, determinar las contribuciones omitidas o los créditos fiscales.

Esto es, que dentro del régimen de facultades expresas que prevalecen en nuestro país, las autoridades fiscales sólo pueden hacer lo que la ley les permite y partiendo de ese supuesto, deben de fundar sus actos de autoridad en la propia ley.

Por eso, cuando una autoridad fiscal ejerce alguna de las facultades de fiscalización previstas en el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, no sólo se encuentra constreñida a tener que acreditar ante el particular, que cuenta con la competencia material y territorial para ello, sino también debe acreditar que cuenta con la facultad expresa de fiscalización, para lo cual debe precisar el numeral en que ésta se contempla, pues de no ser así, el contribuyente queda imposibilitado para conocer con certeza el procedimiento de fiscalización de que es objeto, a fin de que pueda preparar su defensa y, en su caso, definir qué pruebas puede aportar en su favor en el momento oportuno.

Lo que, en la especie, no cumple la autoridad demandada, pues se desprende de la resolución impugnada contenida en el oficio 322-SAT-R7-L48-III-A-02-11997, de 31 de julio de 1998, que ésta se encuentra emitida en los siguientes términos:

> “DERIVADO DEL ANÁLISIS A LOS DATOS Y DOCUMENTOS QUE OBRAN EN LOS ARCHIVOS DE ESTA SECRETARÍA, SE OBSERVÓ QUE CON FECHA 31 DE MARZO DE 1998 PRESENTÓ DECLARACIÓN ANUAL NORMAL POR EJERCICIO 1997 DETERMINANDO UN SALDO A FAVOR DE $601,959.00 POR CONCEPTO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

"ASÍ MISMO, CON FECHA 21 DE JULIO DE 1998 SE RECEPCIÓN (SIC) EN EL MÓDULO DE RECEPCIÓN DE DEVOLUCIONES Y COMPENSACIONES DE ESTA ADMINISTRACIÓN, EL AVISO DE COMPENSACIÓN CON NÚMERO DE TRÁMITE 7298001662 EN CANTIDAD DE $305,636.00 IMPORTE APLICADO INCORRECTAMENTE CONTRA EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN CANTIDAD DE $203,910.00 A SU CARGO, POR EL PERÍODO DE JUNIO DE 1998.

"ESTA ADMINISTRACIÓN, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 41, PRIMERO Y SEGUNDO PÁRRAFO, APARTADO A, FRACCIÓN XV ÚLTIMO PÁRRAFO DE DICHO APARTADO, APARTADO F, NÚMERO 48, QUINTO TRANSITORIO DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 30 DE JUNIO DE 1997 Y REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL MISMO ÓRGANO INFORMATIVO EL 10 DE JUNIO DE 1998, EN VIGOR AL DÍA SIGUIENTE AL DE SU PUBLICACIÓN, EN RELACIÓN CON EL PRIMERO, SEGUNDO Y CUARTO TRANSITORIOS, TODOS DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 30 DE JUNIO DE 1997, EN VIGOR A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL DE SU PUBLICACIÓN; ARTÍCULOS PRIMERO, TERCERO Y CUARTO TRANSITORIOS DE LA LEY DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, DIFUNDIDA A TRAVÉS DEL MISMO ÓRGANO INFORMATIVO EL 15 DE DICIEMBRE DE 1995, EN VIGENCIA A PARTIR DEL 1o. DE JULIO DE 1997; Y ARTÍCULO PRIMERO, FRACCIÓN VII, PUNTO 1, DEL ACUERDO POR EL QUE SE SEÑALA EL NOMBRE, SEDE Y CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, PUBLICADO EN EL CITADO ÓRGANO OFICIAL EL 18 DE DICIEMBRE DE 1996, EN VIGOR AL DÍA SIGUIENTE AL DE SU PUBLICACIÓN; Y CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCU-

LOS 17-A, 21, 23, 65 Y 76, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN EN VIGOR, ESTA ADMINISTRACIÓN DETERMINÓ LA SIGUIENTE LIQUIDACIÓN: (...)"

De donde resulta, que la autoridad fiscal al emitir la resolución del caso, es omisa al precisar la facultad de fiscalización que ejerce, ya que no precisa la fracción del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación en que se establece expresamente dicha facultad, y que en materia de compensación, se reduce al contenido de su fracción I.

Lo que se traduce en una violación a los numerales antes invocados, pues, como antes se señaló, las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite, por eso, si en el caso sujeto a debate, la Administración Local de Recaudación de Campeche, con base al ejercicio de una facultad de fiscalización, pretendió verificar la procedencia de la compensación efectuada por el actor, es el caso que no sólo estaba obligada a citar los preceptos conforme a los cuales cuenta con la competencia material para llevar a cabo ese procedimiento, de conformidad con el artículo 41, apartado A, fracción XV, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, sino que debió precisar la facultad de fiscalización que estaba ejerciendo, precisando la fracción del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, conforme a la cual actuaba, a fin de que el particular estuviere en posibilidad de constatar la existencia de la facultad expresa a que fue sometido.

Sin que sea óbice para llegar a la conclusión anterior, el hecho de que la Representante de las autoridades demandadas, al contestar la demanda de nulidad que nos ocupa, señale que la autoridad no estaba obligada a fundar su proceder en alguna de las facultades que prevé el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, porque la facultad que ejerce la autoridad, es la prevista en el artículo 41, apartado A, fracción XV, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, pues ese numeral sólo establece la competencia material de la autoridad fiscal en materia de compensaciones indebidas, pero no es autónomo, sino que constituye el instrumento delegatorio de facultades, a través del cual se distribuye entre las dependencias del

Servicio de Administración Tributaria las atribuciones que el Código Fiscal de la Federación confiere a éstas (artículo 42, fracciones de la I a la VIII), el cual necesariamente debe estar concatenado con el citado Ordenamiento Legal, por lo que no resulta suficiente que la autoridad demandada, para fundar la causa legal del procedimiento, hubiere señalado el artículo 41, apartado A, fracción XV, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria.

En estas condiciones, con fundamento en los artículos 238, fracción II y 239, fracción III, y último párrafo, del Código Fiscal de la Federación, es procedente la nulidad de la resolución impugnada en el presente juicio de nulidad, en virtud de que la autoridad demandada no precisa qué facultad discrecional de fiscalización ejerció, de las previstas en el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, para el efecto de que, si lo estima conveniente, emita una nueva resolución en la que funde y motive la facultad de fiscalización que ejerza.

(...)

En mérito de lo expuesto y fundado y, además, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 236, 237, 238, fracción II, 239, fracción III y último párrafo, y demás relativos del Código Fiscal de la Federación, se resuelve:

I.- La parte actora probó su acción, en consecuencia:

II.- Se declara la nulidad de la resolución impugnada, misma que quedó debidamente precisada en el resultando 1o. del presente fallo, por los motivos y fundamentos, y para los efectos indicados en el tercer considerando.

III.- Notifíquese.

Así lo resolvieron y firman los CC. Magistrados que integran esta Sala Regional Peninsular del Tribunal Fiscal de la Federación, siendo Magistrado Instructor en el presente juicio, el Licenciado **Faustino Gerardo Hidalgo Ezquerra,** ante la fe del Secretario de Acuerdos, Licenciado **Juan Carlos Cámara Maldonado.**

VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL C. MAGISTRADO MANUEL CARAPIA ORTÍZ, EN EL JUICIO 1446/98

El C. Magistrado Manuel Carapia Ortíz, con todo respeto difiere del criterio mayoritario, toda vez que no comparte la parte relativa del considerando tercero en donde se determina la ilegalidad de la resolución impugnada, en virtud de haberse omitido citar la fracción I del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, dado que estima que basta que el Administrador Local de Recaudación de Campeche haya citado el artículo 41, apartado A, fracción XV, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, en relación con el 23 del Código Fiscal de la Federación, para determinar la improcedencia de la compensación efectuada por la contribuyente, razón por la cual considera que debió declararse infundado el segundo motivo de impugnación hecho valer en la demanda.

Razones por las cuales difiero del criterio mayoritario.

MAG. MANUEL CARAPIA ORTÍZ

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

ORDEN DE VISITA DE VERIFICACIÓN DE EXPEDICIÓN DE COMPROBANTES FISCALES.- ES GENÉRICA SI EN ELLA NO SE PRECISAN LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA EL CONTRIBUYENTE, CONFORME AL RÉGIMEN FISCAL EN QUE TRIBUTE.- El artículo 16 Constitucional establece que la autoridad administrativa podrá practicar visitas domiciliarias únicamente para cerciorarse de que se han cumplido los reglamentos sanitarios y de policía; y exigir la exhibición de los libros y papeles indispensables para comprobar que se han acatado las disposiciones fiscales, sujetándose en esos casos a las leyes respectivas y a las formalidades prescritas para los cateos y, respecto de estos últimos, se establece como requisito de la orden de cateo que se exprese el lugar que ha de inspeccionarse, la persona o personas que hayan de aprehenderse y los objetos que se buscan, requisitos que acogen los artículos 38, fracción III, en relación con el 43, ambos del Código Fiscal de la Federación, en los cuales se establece, entre otros requisitos que debe contener la orden de visita, el de señalar el objeto o propósito de que se trate; sin embargo, este requisito no se cumple si en la orden de visita de verificación de expedición de comprobantes fiscales, o que los expedidos reúnan los requisitos fiscales, así como la presentación de solicitudes de avisos al Registro Federal de Contribuyentes, por la enajenación y/o prestación de servicios que realiza el contribuyente con el público en general, se omite precisar las actividades que realiza el contribuyente, así como las disposiciones que le son aplicables respecto a los comprobantes que expide, ya que según el régimen fiscal a que esté obligado el contribuyente, varían los requisitos de los comprobantes fiscales que debe expedir, puesto que no son los mismos para contribuyentes sujetos al régimen general, que para aquellos que se encuentran sujetos al régimen simplificado; de ahí, que si se omite precisar cuáles son las disposiciones a las que se encuentra obligado el contribuyente, conforme a su aviso de alta en el Registro Federal de Contribuyentes, debe concluirse que la orden resulta genérica y violatoria de las disposiciones legales mencionadas. (20)

Juicio No. 119/00-10-01-1.- Resuelto por la Sala Regional Peninsular del Tribunal Fiscal de la Federación, en sesión de 11 de mayo de 2000, por mayoría de 2 votos y 1 en contra.- Magistrado Instructor: Manuel Carapia Ortiz.- Secretaria: Lic. Ma. de Lourdes Ruiz Burgos

C O N S I D E R A N D O :

(...)

TERCERO.- Por razón de método, se procede a analizar el segundo concepto de impugnación en el que, en síntesis, aduce la actora que la resolución controvertida proviene de frutos de actos viciados, al revestir la orden de visita el carácter de genérica, vulnerando con ello en su perjuicio los artículos 38, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, y 14, segundo párrafo y 16, primer apartado, Constitucionales, ya que del análisis del acto primigenio, origen del controvertido, consistente en la orden de visita domiciliaria, se podrá apreciar que la misma reviste el carácter de genérica, al establecer lo que sigue: "(...) la documentación relacionada con la obligación de expedir los comprobantes fiscales, o que los expedidos reúnan los requisitos fiscales, así como la presentación de solicitudes y avisos al Registro Federal de Contribuyentes"; de donde se aprecia que el objetivo que tiene la autoridad demandada que emite la orden de visita para comprobar los siguientes fines: a).- Verificar que se cumpla con la obligación de expedir comprobantes fiscales; b).- Verificar que los expedidos reúnan los requisitos fiscales; y c).- Realizar la verificación de la presentación de solicitudes de avisos al Registro Federal de Contribuyentes; que en esa tesitura, agrega que de conformidad con lo establecido en el primer párrafo del artículo 16 Constitucional, y por la fracción III del artículo 38 del Código Fiscal de la Federación, tratándose de las órdenes de visita que tengan por objeto verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, por un principio lógico y de seguridad jurídica, deben estar fundadas y motivadas y expresar el objeto o propósito de que se trate; requisitos para cuya completa satisfacción es necesario que se precisen en

dichas órdenes, expresando por su nombre los impuestos de cuyo cumplimiento las autoridades fiscales pretenden verificar, pues ello permitirá que la persona visitada conozca cabalmente las obligaciones a su cargo que se van a revisar, y que los visitadores se ajusten estrictamente a los renglones establecidos en la orden, pues sólo mediante tal señalamiento, por tratarse de un acto de molestia para el gobernado, se cumple con el requerimiento del artículo 16 Constitucional, consistente en que las visitas deben sujetarse a las formalidades previstas para los cateos, como es el señalar los objetos que se buscan, lo que, entratándose de órdenes de visita, se satisface al precisar por su nombre los impuestos de cuyo cumplimiento se trate, pues adoptar el criterio contrario impediría, además, al gobernado, cumplir con las obligaciones previstas en el artículo 45 del Código Fiscal de la Federación, por tal razón considera que se vulnera en su perjuicio los numerales citados, solicitando la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada, en virtud de que la orden de visita reviste el carácter de genérica, precisando, a mayor abundamiento, que la orden de visita domiciliaria resulta ilegal, si la revisión se limita a señalar una obligación fiscal en particular, ya que esta manifestación bastará para que el particular conozca los motivos del acto de molestia y no quede en estado de indefensión, y siendo que, como ocurrió en el presente caso, la autoridad fiscalizadora omite darle a conocer sobre cuál de los tres objetivos anteriormente señalados versaría la práctica de la orden de visita domiciliaria, por lo que carece del requisito que exige el numeral 16 Constitucional, que establece que se debe señalar concretamente el objetivo que se busca y, en el caso, la autoridad fiscalizadora la deja en completo estado de indefensión, toda vez que no tuvo el pleno conocimiento de que el objeto que se buscara fuera precisamente el que se practicó.

Al respecto, el representante de las autoridades demandadas señala que el argumento de la actora es del todo inoperante, ya que tratándose de órdenes de verificación de expedición de comprobantes fiscales, no está sujeta a las reglas convencionales previstas para las órdenes de visita domiciliaria en las cuales se determina la omisión de entero de contribuciones u otros hechos infractores, en los cuales sí resulta procedente la exigencia a que alude la actora, para salvaguardar la garantía de seguridad jurídica del gobernado prevista en el artículo 16 Constitucional, ya que

precisamente el objeto de una orden de verificación de comprobantes es exclusivamente verificar que los contribuyentes cumplan con la obligación de expedir los comprobantes fiscales por las actividades que realizan, y que los expedidos reúnan los requisitos que la ley prevé, facultad que se encuentra prevista en el artículo 49 del Código Fiscal de la Federación, por lo que considera que debe desestimarse lo que al respecto aduce la demandante.

A juicio de esta Sala, el concepto de impugnación que expone la actora resulta fundado y suficiente para declarar la nulidad de la resolución controvertida.

En efecto, en los términos del artículo 16 Constitucional se establece que la autoridad administrativa podrá practicar visitas domiciliarias, únicamente para cerciorarse de que se han cumplido los reglamentos sanitarios y de policía; y exigir la exhibición de los libros y papeles indispensables para comprobar que se han acatado las disposiciones fiscales, sujetándose en esos casos a las leyes respectivas y a las formalidades prescritas para los cateos y, respecto de estos últimos, se establece como requisito de la orden de cateo, que se exprese el lugar que ha de inspeccionarse, la persona o personas que hayan de aprehenderse y los objetos que se buscan, requisitos que acogen los artículos 38, fracción III, en relación con el 43, ambos del Código Fiscal de la Federación, en los cuales se establece, entre otros requisitos que debe contener la orden de visita, el de señalar el objeto o propósito de que se trate, sin embargo, este requisito no se cumple porque la autoridad, en la orden de visita contenida en el oficio número 324-SAT-R7-L45-D-014242 de 17 de septiembre de 1999, que en original obra a fojas 12 y 13 del expediente en que se actúa, y que es valorada por esta Sala en los términos del artículo 234, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, aparece que la autoridad, respecto del objeto de la revisión, señaló lo siguiente:

> “Esta Administración Local de Auditoria Fiscal Número 45 de Villahermosa del Servicio de Administración Tributaria, en el ejercicio de sus facultades de comprobación, le ordena la presente visita domiciliaria, con el objeto de verificar el correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales, en materia de la

expedición de comprobantes fiscales y la presentación de solicitudes y avisos al Registro Federal de Contribuyentes, por la enajenación y/o prestación de servicios; que realiza con el público en general.

"De acuerdo a lo anterior, esta Administración, con fundamento en los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7o., fracciones VII y XIII; y Tercero Transitorio, de la Ley del Servicio de Administración Tributaria; 2o., último párrafo; 41, primer y segundo párrafos; Apartado "B", fracción IV; y último párrafo; y Apartado "F", número 45, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 30 de junio de 1997, reformado por Decreto publicado en el propio Diario Oficial de la Federación del 10 de junio de 1998, y artículo Quinto Transitorio del citado Decreto; y Artículo Primero, fracción VII, inciso 7), del Acuerdo por el que se señala el nombre, sede y circunscripción territorial de las Unidades Administrativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicado en el Diario Oficial del 18 de diciembre de 1996; 13, segundo párrafo, así como en el artículo 33, último párrafo, del Código Fiscal de la Federación; y a efecto de ejercer la facultad de comprobación prevista en el artículo 42, fracción V, en relación con el artículo 49, del propio Código Fiscal de la Federación, se expide la presente orden de visita domiciliaria, y se habilitan las horas inhábiles comprendidas entre las 18:00 a las 24:00, para que el personal designado en la presente orden, realice la visita en cuestión; toda vez que ese contribuyente realiza las actividades por las que se deben pagar contribuciones en esas horas inhábiles.-- Para tal efecto, se autoriza a los CC (...), visitadores adscritos a esta Administración, quienes podrán actuar en el desarrollo de la diligencia en forma conjunta o separadamente, con el fin de que verifiquen por el período comprendido a partir de la fecha de entrega de esta orden hasta 30 días hacia atrás, la documentación relacionada con la obligación de expedir comprobantes fiscales, o que los expedidos reúnan los requisitos fiscales, así como la presentación de solicitudes de avisos al Registro Federal de Contribuyentes (...)"

De la transcripción preinserta, se desprende claramente que el objeto de la diligencia que se hace consistir en verificar la expedición de comprobantes fiscales o que los expedidos reúnan los requisitos fiscales, así como la presentación de solicitudes de avisos al Registro Federal de Contribuyentes, por la enajenación y/o prestación de servicios que realiza la contribuyente actora con el público en general; señalamiento que resulta ilegal al ser genérico porque omite precisar las actividades que realiza el contribuyente, así como las disposiciones que le son aplicables respecto a los comprobantes que expide, porque según el régimen fiscal a que esté obligada la contribuyente, varían los requisitos de los comprobantes fiscales que debe expedir, pues no son los mismos para los contribuyentes sujetos al régimen general, que para aquellos que se encuentran sujetos al régimen simplificado; de ahí, que si la autoridad omite precisar cuáles son las disposiciones a las que se encuentra obligada la contribuyente conforme a su alta en el Registro Federal de Contribuyentes, debe concluirse que la orden resulta genérica y violatoria de las disposiciones legales mencionadas.

Por lo que en ese orden de ideas, es inconcuso que, en la especie, no se dio cumplimiento a lo previsto en el artículo 38, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, en relación con el 16 Constitucional, ya que la orden de visita en relación a la verificación del correcto cumplimiento de las disposiciones fiscales, en cuanto a la obligación del contribuyente de expedir comprobantes fiscales por las actividades que realiza, no precisó cuáles disposiciones legales eran a las cuales se encontraba obligada, ni tampoco cuáles le eran aplicables conforme al régimen fiscal al que se encontraba registrado, y conforme a las actividades que realiza; consecuentemente, debe concluirse que, en el caso, se da la causal de nulidad prevista por la fracción III del artículo 238 del Código Fiscal de la Federación, toda vez que la resolución impugnada contiene vicios de procedimiento que afectan las defensas del particular y trascienden al sentido de la misma, lo que hace que la sanción impuesta resulte ilegal, por lo que procede se declare la nulidad de la resolución impugnada, de conformidad con el artículo 239, fracción III y último párrafo, del Ordenamiento Legal citado, para el efecto de que, actuando dentro del límite de sus facultades discrecionales, si así lo estima conveniente y sobre todo si se encuentra en posibilidad de hacerlo, reponga el procedimiento a partir del momento en que se cometió el vicio ya precisado.

Resulta aplicable la jurisprudencia 57/99, sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto a la letra dice:

> **"VISITA DOMICILIARIA. LA ORDEN EMITIDA PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN RELACIÓN CON LA EXPEDICIÓN DE COMPROBANTES FISCALES, DEBE PRECISAR EL PERIODO SUJETO A REVISIÓN**.- El análisis relacionado de los artículos 29, 29-A, 43 y 49 del Código Fiscal de la Federación, permite advertir que aun cuando la visita domiciliaria para comprobar el cumplimiento del contribuyente a las obligaciones en materia de expedición de comprobantes fiscales, tiene sus particularidades y debe sujetarse a reglas específicas en su realización, en realidad no constituye más que una modalidad en el ejercicio de las facultades de comprobación que, como potestad del Estado, se otorga a las autoridades fiscales en el Ordenamiento mencionado; en estas condiciones, la orden relativa para la práctica de esta clase de visitas, también debe sujetarse a los requisitos que prevé el numeral 38 del citado Código, así como a los que el Constituyente estableció en el artículo 16 de la Ley Suprema, de cuyo contenido se desprende que la inviolabilidad del domicilio constituye un derecho subjetivo del gobernado, elevado a garantía individual y sólo se autoriza mediante el cumplimiento de determinadas formalidades y requisitos, entre ellos, que la orden de visita domiciliaria, a similitud de los cateos, como acto de molestia debe constar en mandamiento escrito de autoridad competente, en el que se exprese el nombre del sujeto pasivo visitado, el domicilio en el que debe llevarse a cabo la visita, los fundamentos y motivos de la orden respectiva, su objeto, que es a lo que debe limitarse la diligencia respectiva, y que al concluirla se levante acta debidamente circunstanciada en presencia de dos testigos propuestos por el sujeto visitado, o en su ausencia o negativa, por la autoridad que practique dicha diligencia, como en reiteradas ocasiones lo ha considerado la Segunda Sala de este Alto Tribunal. Así, al exigir el artículo 16 de la Constitución Federal que el objeto, como elemento fundamental de la orden de visita, se encuentre expresamente determinado, implica también la obligación a cargo de la autoridad que la emite, de

precisar su alcance temporal, ya sea que se trate de verificar el cumplimiento de obligaciones fiscales que se rigen por períodos determinados, o en relación con la expedición de comprobantes fiscales debidamente requisitados, toda vez que tal señalamiento permite que el visitado conozca de manera cierta el período en el cual se practicará esa verificación y, además, constriñe a los visitadores a sujetarse a ese espacio temporal que fue previamente determinado por la autoridad ordenadora, dado que acorde con lo que prevé el mismo Código Tributario Federal, la actividad fiscalizadora bien puede recaer en hechos actuales o pasados y, por tanto, se violaría el principio de seguridad jurídica consagrado en el artículo 16 Constitucional, si se dejara al arbitrio de los visitadores determinar el período sobre el cual debe recaer la verificación del cumplimiento de las obligaciones que en materia de expedición de comprobantes fiscales se establecen a cargo de los contribuyentes, con el consecuente estado de inseguridad jurídica del visitado. Debe agregarse que esta determinación no limita la actuación de la autoridad, pues no le impide señalar, con apego a la ley, como período a verificar en una orden de visita, fechas actuales o anteriores".

(...)

En mérito a lo expuesto y fundado y, además, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 236, 237, 238, fracción III, 239, fracción III y último párrafo, y demás relativos del Código Fiscal de la Federación, se resuelve:

I.- La parte actora probó su pretensión, en consecuencia;

II.- Se declara la nulidad de la resolución impugnada, misma que quedó precisada en el Resultando 1o., por los motivos, fundamentos y para los efectos señalados en el último considerando del presente fallo.

III.- Notifíquese.

Así lo resolvieron y firman los CC. Magistrados que integran esta Sala Regional Peninsular del Tribunal Fiscal de la Federación, siendo Magistrado Instructor en el presente juicio, el Licenciado Manuel Carapia Ortiz, ante la fe de la Secretaria de Acuerdos, Licenciada María de Lourdes Ruiz Burgos.

I. M. S. S.

RECURSO DE INCONFORMIDAD.- EL CONSEJO CONSULTIVO DELEGACIONAL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, TIENE OBLIGACIÓN DE PROVEER RESPECTO AL ESCRITO QUE SE PRESENTA CON MOTIVO DE UNA PREVENCIÓN EFECTUADA A UNA PERSONA MORAL, AUN CUANDO EL MISMO SEA PRESENTADO POR UN REPRESENTANTE LEGAL DIVERSO AL QUE INICIALMENTE LO INTERPUSO.- Cuando con motivo de la interposición de un recurso de inconformidad, el Consejo Consultivo Delegacional del Instituto Mexicano del Seguro Social estime que el escrito que lo contiene no cumple con lo dispuesto por los artículos 4o. fracciones I, II, III, IV y V, y 5o. del Reglamento del Recurso de Inconformidad, y a fin de que dicho recurso pueda substanciarse, requiera a una persona moral para que, entre otros requisitos, exhiba el documento con el cual se acredite la personalidad de su representante legal, y la prevención es cumplida por un representante distinto al que inicialmente interpuso el recurso de inconformidad, considerándose por ese hecho que no se atendió al requerimiento formulado y, como consecuencia, se determina desechar ese medio de defensa, tal proceder es ilegal, toda vez que no debe perderse de vista que las personas morales, como ficciones jurídicas que son, sólo pueden apersonarse a través de sus representantes, los cuales pueden ser no sólo uno, sino varios; por consiguiente, no resulta indebido el que la prevención efectuada a una persona moral, sea atendida por un representante diverso al que presentó el escrito de interposición del recurso de inconformidad, ya que lo relevante del caso es determinar si éste puede actuar o no como representante legal de la persona moral requerida. (21)

Juicio No. 420/00-10-01-3.- Resuelto por la Sala Regional Peninsular del Tribunal Fiscal de la Federación, el 28 de agosto del 2000, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Faustino Gerardo Hidalgo Ezquerra.- Secretaria: Lic. Ligia Elena Aguayo Martín.

C O N S I D E R A N D O :

(...)

TERCERO.- (...)

A juicio de esta Sala Juzgadora, resulta fundado lo argumentado por la parte actora, por las siguientes consideraciones:

A fojas 9 y 10 de los autos del expediente en que se actúa, obra agregada la resolución impugnada, documento que se valora en términos del artículo 234, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, y de la cual se aprecia, en lo conducente, lo siguiente:

"(...)

"Con fundamento en los artículos 274, fracción IV, de la Ley del Seguro Social, y 2o. del Reglamento del Recurso de Inconformidad previsto por el artículo 294 de la Ley del Seguro Social vigente, este H. Consejo Consultivo Delegacional es competente para tramitar el presente recurso de inconformidad dentro del ámbito de competencia territorial de la Delegación Estatal en Yucatán, delimitada en el artículo 159 del Reglamento de Organización Interna del Instituto Mexicano del Seguro Social, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 11 de noviembre de 1998. Apareciendo de autos que mediante acuerdo 854 de fecha 14 de octubre de 1999, se requirió al C JORGE SALAZAR CORONADO, a efecto de que ajustara su escrito de interposición del recurso de inconformidad de fecha 27 de agosto de 1999, a lo que disponen los artículos 4o., fracciones I, II, III, IV y VI, y 5o., fracción II, del Reglamento del Recurso de Inconformidad, solicitándole, entre otros, que exhibiera el original o copia certificada legible del documento con el que acreditara su personalidad de representante legal de la empresa EDITORIAL NUES-

TRA AMÉRICA, S.A., y en virtud de que el citado promovente JORGE SALAZAR CORONADO, no dio cumplimiento a lo requerido en el acuerdo mencionado, ya que este acuerdo se notificó el 18 de noviembre de 1999, venciendo el plazo de cinco días hábiles el 26 de noviembre de 1999, con fundamento en los artículos 2o. y 4o., último párrafo, del citado Reglamento del Recurso de Inconformidad, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el mencionado acuerdo y, en consecuencia, SE DESECHA de plano el recurso de inconformidad intentado. Se hace constar que obra en autos un escrito fechado el 26 de noviembre de 1999, recibido el mismo día en esta Delegación, suscrito por el C. RAÚL RICARDO ANCONA ARAUJO, quien pretendió dar cumplimiento al acuerdo 854 de fecha 14 de octubre de 1999, persona a la que no se le hizo ningún requerimiento, al no ser el promovente del escrito del recurso de inconformidad de fecha 27 de agosto de 1999, por lo anterior , archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido. NOTIFÍQUESE PERSONALEMENTE al C. JORGE SALAZAR CORONADO, en el domicilio ubicado en la calle 60 número 578 por 73 del centro de esta Ciudad de Mérida, Yucatán, y al C. RAÚL RICARDO ANCONA ARAUJO, en relación a su escrito de fecha 26 de noviembre de 1999 y recibido en la misma fecha en esta Delegación, en el domicilio ubicado en la Av. Francisco I. Madero número 69, Despacho 203, colonia Centro, C.P. 06000 en la Ciudad de México, Distrito Federal."

Como se desprende de la resolución impugnada, la autoridad demandada sustenta el desechamiento del recurso, en el hecho de que el escrito a través del cual se pretendió dar cumplimiento al requerimiento contenido en el acuerdo 854 de fecha 14 de octubre de 1999, se encuentra firmado por el C. Raúl Ricardo Ancona Araujo, persona a quien no se le hizo ningún requerimiento al no ser el promovente del escrito del recurso de inconformidad, por lo que considera que no se cumplimentó el citado requerimiento por parte del C. Jorge Salazar Coronado, pues a éste se le notificó el 18 de noviembre de 1999, y el plazo de cinco días venció el 26 de noviembre de 1999.

Por su parte, del escrito de fecha 26 de noviembre de 1999, el cual obra agregado a folios 20 a 24 de los autos del expediente en que se actúa, se observa que si bien es cierto que éste fue suscrito por el C. Raúl Ricardo Ancona Araujo, más cierto es que éste manifestó que comparecía a dar cumplimiento al requerimiento de fecha 14 de octubre de 1999, y para ello exhibía el instrumento notarial número 66, de fecha 7 de marzo de 1996, documento con el cual acreditaba su personalidad para actuar en representación de la persona moral EDITORIAL NUESTRA AMÉRICA, S.A., por lo que conforme a ello, la autoridad demandada debió analizar, en términos del artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, el documento exhibido, y en base a ello determinar si se cumplía o no el requerimiento, que en términos generales no era otro que acreditar que la persona moral recurrente, hoy actora, podía actuar a través de sus representantes legales, lo cual la demandada no hizo.

En consecuencia de todo lo anterior, es evidente que tal y como lo sostiene la parte actora, la autoridad demandada actuó de manera ilegal, al dejar de apreciar que con fecha 26 de noviembre de 1999, la persona moral EDITORIAL NUESTRA AMÉRICA, S.A., a través de quien se ostentó ser su representante legal, compareció a dar cumplimiento al requerimiento contenido en el acuerdo de fecha 14 de octubre de 1999, exhibiendo los documentos requeridos, así como el testimonio número 66 de fecha 7 de marzo de 1996, pasado ante la fe del Notario Público número 91 del Estado de Yucatán, con el cual dicha persona pretendía acreditar la representación de EDITORIAL NUESTRA AMÉRICA, S.A., y esa falta de apreciación la llevó a concluir que no se había dado cumplimiento al requerimiento formulado y a desechar en forma indebida el recurso intentado; pues si bien es cierto que quien compareció a interponer el recurso de inconformidad lo fue el C. Jorge Salazar Coronado, también lo es, que las personas morales, como ficciones jurídicas que son, sólo pueden apersonarse a través de sus representantes; por consiguiente, aun cuando no fue el citado Jorge Salazar Coronado, quien compareció mediante escrito de fecha 26 de noviembre de 1999, a dar cumplimiento al requerimiento aludido, no por ello puede estimarse que no se cumplió el mismo, dado que dicha persona no compareció por su propio y personal derecho, sino en representación de la persona moral actora; máxime que, tanto el citatorio, como la notificación del requerimiento en cuestión, de

fechas 17 y 18 de noviembre de 1999, que obran en autos a folios 16 y 17, se aprecia que se encuentran dirigidos al Representante Legal de la ahora enjuiciante; por lo que en esas consideraciones, lo procedente es declarar la nulidad de la resolución impugnada, con fundamento en el artículo 238, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, en relación con el 239, fracción III y último párrafo, para el efecto de que la demandada tenga por presentado el escrito de fecha 26 de noviembre de 1999, analice si el documento consistente en la escritura pública número 66 de fecha 7 de marzo de 1996, es suficiente para acreditar la personalidad del C. Raúl Ricardo Ancona Araujo, como representante legal de EDITORIAL NUESTRA AMÉRICA, S.A., y se acuerde lo conducente.

(...)

En mérito de lo expuesto y fundado y, además, con apoyo en lo ordenado en los artículos 235, 236, 237, 238, fracción II, y 239, fracción III y último párrafo, y demás relativos del Código Fiscal de la Federación, se resuelve:

I.- La parte actora en el presente juicio probó su pretensión, en consecuencia,

II.- Se declara la nulidad de la resolución impugnada, precisada en el resultando primero, por los motivos, fundamentos y para los efectos indicados en el último considerando del presente fallo.

III.- Notifíquese.

Así lo resolvieron y firman los CC. Magistrados que integran la Sala Regional Peninsular del Tribunal Fiscal de la Federación, siendo Magistrado Instructor en el presente juicio, el Licenciado **Faustino Gerardo Hidalgo Ezquerra**, ante la fe de la Secretaria de Acuerdos, Licenciada **Ligia Elena Aguayo Martín.**

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

FACULTADES DE COMPROBACIÓN.- SI LA AUTORIDAD FISCALIZADORA EJERCE SUS FACULTADES DE COMPROBACIÓN RESPECTO A UN DETERMINADO EJERCICIO, NO PUEDE DETERMINAR OMISIÓN DE IMPUESTOS RESPECTO AL MISMO, SUSTENTÁNDOSE EN LA REVISIÓN DE LAS DECLARACIONES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR, SI RESPECTO A ESTE EJERCICIO NO HA EJERCIDO SUS FACULTADES.- En términos de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 60 del Código Fiscal de la Federación, en relación con el artículo 32 de ese propio Ordenamiento, tenemos que es el propio contribuyente, quien en principio se autodetermina los impuestos a su cargo, lo cual realiza a través de las declaraciones que presenta, las cuales tienen el carácter de definitivas y deben tenerse como válidas y procedentes, hasta en tanto que no exista un acto de autoridad a través del cual determine que lo ahí declarado por el contribuyente, es incorrecto, y ello solamente puede conocerlo y determinarlo la autoridad, con motivo del ejercicio de alguna de las facultades de comprobación que le conceda la ley, por lo que, en estos términos, lo determinado por el contribuyente en su declaración complementaria por dictamen respecto al ejercicio de 1993, debe tenerse por válido y legal, hasta en tanto no exista un acto de autoridad que determine lo contrario, por lo que si la autoridad ejerce sus facultades de comprobación respecto al ejercicio de 1994, no puede determinar, apoyándose en las declaraciones del ejercicio inmediato anterior, la omisión del pago del impuesto al activo en el ejercicio de 1994, en base a que en el ejercicio fiscal de 1993 efectuó la depreciación de sus activos fijos, contraviniendo el artículo 51 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en razón de que dicho ejercicio no ha sido motivo de revisión por parte de la autoridad y, en su caso, si la autoridad demandada, con motivo de sus facultades iniciadas respecto al ejercicio fiscal de 1994, hubiese conocido alguna irregularidad que tuviese su antecedente u origen en el ejercicio inmediato anterior, esto es, el ejercicio de 1993, debió, en su caso, ejercer sus facultades respecto a dicho ejercicio, a fin de respetar la garantía de legalidad y seguridad jurídica del visitado. (22)

Juicio No. 1539/98.- Resuelto por la Sala Regional Peninsular del Tribunal Fiscal de la Federación, el 29 de agosto del 2000, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Faustino Gerardo Hidalgo Ezquerra.- Secretaria: Lic. Martha Beatriz Dorantes Cardeña.

C O N S I D E R A N D O :

(...)

TERCERO.- (...)

Los argumentos que anteceden resultan, a juicio de esta Sala Juzgadora, fundados y suficientes para declarar la nulidad de la resolución impugnada, por las siguientes consideraciones:

Del primer párrafo de la resolución impugnada, la cual obra a fojas 147 al 160 de autos, se observa, en lo conducente, lo siguiente:

> "SE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE SE INICIARON FACULTADES DE COMPROBACIÓN MEDIANTE OFICIO NÚMERO 324-A-VII-4-II-13-13311 de fecha 09 de abril de 1997, dirigido a la contribuyente: COMERCIALIZADORA MAYORISTA DE ABARROTES, S.A. DE C.V., MEDIANTE EL CUAL SE LE REQUIRIÓ LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE LAS OPERACIONES QUE EN SU CARÁCTER DE TERCERO LLEVÓ A CABO CON EL CONTRIBUYENTE HARINAS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., POR EL PERÍODO COMPRENDIDO **DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1994**"

De la parte de la resolución anteriormente inserta, tenemos que la autoridad demandada, a través del oficio número 324-A-VII-4-II-4-II-13-13311 de fecha 09 de

abril de 1997, ejerció sus facultades de comprobación, respecto del período comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 1994, por lo que, en cumplimiento a la garantía de legalidad y seguridad jurídica del visitado, la actuación de la autoridad se debió ceñir a la revisión de la documentación relativa a dicho período.

Ahora bien, a fojas 6, 7 y 8 de la resolución impugnada, 152, 153 y 154 de autos, se observa, en lo conducente, lo siguiente:

> "Que las disposiciones contenidas en el artículo 6° del Código Fiscal de la Federación establecen que una vez elegida por el contribuyente una opción para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales o para determinar contribuciones a su cargo, la elegida por el contribuyente no podrá variarla respecto del mismo ejercicio, por lo que la contribuyente al haber optado por efectuar la deducción en línea recta, según las disposiciones contenidas en los artículos 41, 42, 43, 44 y 45 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, no tenía derecho a la deducción prevista en el artículo 23, fracción I, del Reglamento de la Ley del Impuesto al Activo, en virtud de que por disposición expresa del artículo 23, fracción I, del citado Reglamento, para poder deducir los pagos provisionales del impuesto, así como del impuesto del ejercicio, el requisito es que el contribuyente, en el ejercicio, deduzca la inversión de bienes en los términos del artículo 51 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
>
> "Ahora bien, partiendo del hecho de **haber optado el contribuyente por depreciar sus activos aplicando las tasas previstas en los artículos 41, 42, 44 y 45 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, según consta expresamente en la declaración normal presentada el 29 de marzo de 1994, y en la declaración complementaria por dictamen presentada el día 17 de octubre de 1994, por <u>el ejercicio fiscal de 1993,</u>** no habiendo ejercido a su favor el derecho de deducir sus activos mediante la disposición del artículo 51 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, resulta improcedente cambiar la opción elegida en primer término, aun cuando se tenga derecho a la presentación de hasta dos declaraciones complementarias, de conformidad con lo dispuesto

en el artículo 32 del Código Fiscal de la Federación, en razón de que el citado artículo 32 no se contrapone a lo establecido en el artículo 6° del Código Fiscal de la Federación, por lo que se refiere al cambio de opción; de igual manera la Ley del Impuesto sobre la Renta no obliga a los contribuyentes a apegarse a las disposiciones contenidas en los artículos 41, 42, 43, 44 y 45, en virtud de que el artículo 51 de la citada Ley establece que los contribuyentes podrán optar por efectuar la deducción inmediata de la inversión de bienes nuevos de activo fijo, en lugar de las previstas en los artículos 41 y 47 de la Ley, deduciendo en el ejercicio en que se efectúe la inversión de los mismos, en el que se inicie su utilización o en el ejercicio siguiente, la cantidad que resulte de aplicar, al monto original de la inversión, únicamente los por cientos que se establecen en ese artículo, por lo anteriormente expuesto esta autoridad deja de manifiesto que la contribuyente Harinas del Sureste, S.A. de C. V., en primera instancia pudo haber optado por efectuar la deducción inmediata de la inversión de bienes nuevos de activo fijo, mediante la aplicación del multicitado artículo 51 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

"De lo anterior, se desprende que **en los términos del artículo 23, fracción I, del Reglamento de la Ley del Impuesto al Activo, no se adquirió el derecho de deducir los pagos provisionales del impuesto, así como el impuesto al activo del ejercicio a su cargo durante el año de 1993, y en consecuencia tampoco el remanente aplicado en el ejercicio de 1994, en cantidad de $ 618,408.00**

"I.- IMPUESTO AL ACTIVO.

"EJERCICIO REVISADO.- DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1994.

"A.- DE LA REVISIÓN PRACTICADA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS E INFORMACIÓN ADICIONAL PROPORCIONADA POR EL CONTADOR PÚBLICO REGISTRADO RODOLFO AL-

BERTO MARTÍNEZ GAMBOA, SE CONOCIÓ QUE LA CONTRIBUYENTE, **HACIENDO USO DE UN ACREDITAMIENTO INDEBIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 1993, OMITIÓ EL PAGO DEL IMPUESTO AL ACTIVO, EL ACREDITAMIENTO INDEBIDO ES POR LA CANTIDAD DE $ 618,408.00** Y RESULTA DE LA SIGUIENTE COMPARACIÓN:

"CIFRAS

"CONCEPTO	DECLARADA	DETERMINADA	DIFERENCIA
"IMPUESTO AL ACTIVO DEL EJERCICIO.	$874,743.00	$1,493,151.00	$618,408.00

"(...)

"EL IMPUESTO AL ACTIVO DEL EJERCICIO DECLARADO EN CANTIDAD DE $ 874, 743.00 SE CONOCIÓ DEL RENGLÓN 245 DEL RECUADRO DEL IMPUESTO AL ACTIVO DE SU DECLARACIÓN ANUAL COMPLEMENTARIA POR DICTAMEN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 1994 CON FECHA DE PRESENTACIÓN 14 DE NOVIEMBRE DE 1995.

"LA DIFERENCIA DEL IMPUESTO AL ACTIVO EN CANTIDAD DE $618,408.00 RESULTA DE LA COMPARACIÓN EFECTUADA ENTRE EL IMPUESTO DEL EJERCICIO DECLARADO Y EL DETERMINADO. **DICHA DIFERENCIA CORRESPONDE A LA APLICACIÓN INDEBIDA DEL REMANENTE DE LA OPCIÓN DE REDUCIR PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO, ASÍ COMO EL IMPUESTO DEL EJERCICIO, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 23, FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DEL IMPUESTO AL ACTIVO VIGENTE EN EL**

EJERCICIO DE 1993, POR EL CONTRIBUYENTE "HARINAS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., POR HABER DEDUCIDO ÉSTE, EN EL EJERCICIO DE 1993, INVERSIÓN DE BIENES EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA; LA APLICACIÓN DE DICHO REMANENTE SE CONSIDERA INDEBIDA POR LO SIGUIENTE:

"DE LOS ARCHIVOS QUE OBRAN EN PODER DE ESTA AUTORIDAD SE CONOCIÓ QUE CON FECHA 17 DE OCTUBRE DE 1994, ANTE BANAMEX SE PRESENTÓ 'DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA POR DICTAMEN' EN LA CUAL LA CONTRIBUYENTE REVISADA, EN LA PÁGINA 5, RENGLÓN 32, 'DEDUCCIÓN DE INVERSIONES ACTUALIZADA' MANIFIESTA LA CANTIDAD DE $ 1,494,416.00; ASÍ MISMO SE CONOCIÓ QUE CON FECHA 17 DE FEBRERO DE 1995, ANTE BANAMEX PRESENTA 'DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA' EN LA QUE MODIFICA LOS DATOS SEÑALADOS EN SU 'DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA POR DICTAMEN', MODIFICANDO CON SELLO LO MANIFESTADO COMO 'DEDUCCIÓN DE INVERSIONES ACTUALIZADA' EN CANTIDAD DE $1,002,908.00 Y ADICIONANDO A LAS DEDUCCIONES FISCALES 'DEDUCCIÓN DE INVERSIONES INMEDIATA' POR UN IMPORTE DE $5,709,668.00; EN BASE A LO ANTERIORMENTE EXPUESTO EL ACREDITAMIENTO REALIZADO EN CANTIDAD DE $ 618,408.00 SE CONSIDERA IMPROCEDENTE, DEBIDO A QUE LOS ACTIVOS FIJOS A LOS QUE SE LES APLICÓ DEDUCCIÓN INMEDIATA, YA HABÍAN SIDO DEPRECIADOS POR EL MÉTODO DE LÍNEA RECTA, SEGÚN SE CONSTATÓ EN LA DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA POR DICTAMEN DEL EJERCICIO 1993 PRESENTADA EL 17 DE OCTUBRE DE 1994, CIRCUNSTANCIA QUE SE CONTRAPONE A LO DISPUESTO POR EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 6° DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE LITERALMENTE SEÑALA: 'CUANDO LAS DISPOSICIONES FISCALES ESTABLEZCAN OPCIONES A LOS CONTRIBUYENTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE

SUS OBLIGACIONES FISCALES O PARA DETERMINAR LAS CONTRIBUCIONES A SU CARGO, LA ELEGIDA POR EL CONTRIBUYENTE NO PODRÁ VARIARLA RESPECTO AL MISMO EJERCICIO'.

"SE HACE CONSTAR QUE LE FUERON ENTREGADAS A LA CONTRIBUYENTE HARINAS DEL SURESTE, S.A. DE C. V., COPIAS CERTIFICADAS DE LAS DECLARACIONES ANUALES COMPLEMENTARIAS POR DICTAMEN DEL EJERCICIO 1993, LAS CUALES FUERON FOLIADAS PROGRESIVAMENTE DE LA NÚMERO 01 A LA 14 INCLUSIVE, MISMAS QUE FUERON FOTOCOPIADAS, SELLADAS Y CERTIFICADAS OFICIALMENTE POR EL C. ADMINISTRADOR LOCAL DE AUDITORÍA FISCAL DE MÉRIDA, C.P. LUIS ARMANDO BASTARRACHEA SOSA, EL DÍA 12 DE NOVIEMBRE DE 1997, SIENDO FIRMADAS TODAS Y CADA UNA POR EL PERSONAL REVISOR, LAS CUALES FORMARON PARTE INTEGRANTE DEL OFICIO DE OBSERVACIONES NÚMERO 324-SAT-R7-L49-III-A-10134 DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE, DE 1997 QUIEN LAS RECIBIÓ Y FIRMÓ DE CONFORMIDAD.

"LAS DECLARACIONES A LAS QUE SE HACE REFERENCIA FUERON SOLICITADAS MEDIANTE OFICIO NÚMERO 324-A-VII-4-II-13314 DE FECHA 9 DE ABRIL DE 1997, AL CONTADOR PÚBLICO REGISTRADO RODOLFO ALBERTO MARTÍNEZ GAMBOA, EN EL PUNTO N° 2 DEL OFICIO DE REFERENCIA CONFORME A LO SIGUIENTE:

"2.- PROPORCIONE USTED COPIA DONDE CONSTE EL SELLO ORIGINAL DEL BANCO Y COPIA FOTOSTÁTICA LEGIBLE DE LAS DECLARACIONES DE LOS PAGOS PROVISIONALES, NORMAL Y COMPLEMENTARIAS, ASÍ COMO LA ANUAL, NORMAL Y COMPLEMENTARIAS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, IMPUESTO AL ACTIVO, 1% SOBRE REMUNERACIONES, 10% SOBRE HONORARIOS Y 10% SOBRE ARRENDAMIENTO,

CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 1994, ASÍ COMO COPIA FOTOSTÁTICA LEGIBLE DE LA DECLARACIÓN ANUAL INFORMATIVA DE CLIENTES Y PROVEEDORES (HISR 144, 145, Y 146) DEL EJERCICIO 1994.

"LO ANTERIOR FUE PROPORCIONADO POR EL CONTADOR PÚBLICO REGISTRADO, RODOLFO ALBERTO MARTÍNEZ GAMBOA, MEDIANTE ESCRITO DE FECHA 2 DE MAYO DE 1997, RECIBIDO POR ESTA ADMINISTRACIÓN, EL 2 DE MAYO DE 1997, MISMA INFORMACIÓN QUE SE TRANSCRIBE A CONTINUACIÓN:

"3.- ORIGINAL Y COPIA FOTOSTÁTICA DE LAS DECLARACIONES DE LOS PAGOS PROVISIONALES NORMALES Y COMPLEMENTARIAS, POR EL EJERCICIO DE 1994, ASÍ COMO LAS DECLARACIONES ANUALES NORMALES Y COMPLEMENTARIAS, POR LOS EJERCICIOS FISCALES DE 1992, 1993, Y 1994.

"4.- COPIA FOTOSTÁTICA DE LA DECLARACIÓN ANUAL INFORMATIVA DE CLIENTES Y PROVEEDORES DEL EJERCICIO 1994 (FORMA HISR 144, 145, Y 146)'

"EL ANÁLISIS E INTEGRACIÓN TANTO DEL IMPUESTO AL ACTIVO DECLARADO PRESENTADO EN DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA POR DICTAMEN DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 1995, COMO DEL DETERMINADO SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

"(...)"

Del contenido de la resolución anteriormente transcrita, se observa que la autoridad demandada determina la omisión de la cantidad de $618.408.00, por concepto de impuesto al activo, en razón de que el hoy actor en el ejercicio fiscal de 1993, hizo uso de un acreditamiento indebido, ya que en la declaración complementaria por

dictamen del referido ejercicio de 1993, presentada con fecha 14 de octubre de 1994, ante Banamex, declaró "deducciones por inversión actualizadas" en cantidad $1,494,416.00; y con fecha 17 de febrero de 1995 presentó una declaración complementaria en la cual modificó los datos señalados en la declaración complementaria por dictamen, modificando "las deducciones por inversión actualizadas" en cantidad de $ 1,002,908.00 y adicionando a las deducciones fiscales "deducciones de inversiones inmediatas" por un importe en cantidad de $5,709,668.00, lo cual no procede en razón de que los activos fijos a los cuales se les aplicó la deducción inmediata, ya habían sido depreciados por el método en línea recta, según se constató en la declaración complementaria por dictamen del ejercicio fiscal de 1993, esto es, la demandada sostiene que la diferencia determinada por concepto de impuesto al activo en el ejercicio de 1994, corresponde a la aplicación del remanente de la deducción de los activos fijos efectuada en forma incorrecta por la hoy actora en el ejercicio de 1993, ya que en éste, en principio, había efectuado la deducción de sus activos fijos conforme al artículo 41 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y al presentar su declaración complementaria de dicho ejercicio, con fecha 17 de febrero de 1995, optó por la deducción inmediata a que se refiere el artículo 51 de esa misma Ley.

El artículo 8° de la Ley del Impuesto al Activo, establece:

> "ARTÍCULO 8°.- Las personas morales contribuyentes del impuesto al activo, deberán de presentar ante las oficinas autorizadas, conjuntamente con la declaración del impuesto sobre la renta, declaración determinando el impuesto del ejercicio dentro de los tres meses siguientes a la fecha en que éste termine."

Por su parte, el artículo 6° tercer párrafo del Código Fiscal de la Federación establece, en lo conducente, lo siguiente:

> "ARTÍCULO 6°.- Las contribuciones se causan conforme se realizan las situaciones jurídicas o de hecho previstas en las leyes fiscales, vigentes en el lapso en que ocurran.
>
> "(...)

"(...) corresponde a los contribuyentes la determinación de las contribuciones a su cargo, salvo disposición expresa en contrario".

"Artículo 32.- Las declaraciones que presenten los contribuyentes serán definitivas y sólo se podrán modificar por el propio contribuyente hasta en tres ocasiones, siempre que no se haya iniciado el ejercicio de las facultades de comprobación (...).

"(...)

"Lo dispuesto en este precepto no limita las facultades de comprobación de las autoridades fiscales.

"La modificación de las declaraciones a que se refiere este artículo, se efectuará mediante la presentación de declaración complementaria que modifique los datos de la original."

De los preceptos anteriormente transcritos, tenemos que es el propio contribuyente, quien en principio se autodetermina los impuestos a su cargo, lo cual realizan a través de las declaraciones que presentan, las cuales serán válidas y procedentes, hasta en tanto que no exista un acto de autoridad a través del cual determine que lo ahí declarado por el causante es incorrecto, lo cual solamente puede conocerlo y determinarlo la autoridad con motivo del ejercicio de alguna de las facultades de comprobación que le conceda la ley, por lo que en estos términos, como bien señala la empresa enjuiciante, lo determinado por ella en su declaración complementaria por dictamen, presentada con fecha 17 de febrero de 1995, respecto al ejercicio fiscal de 1993, debe tenerse por válido y legal, ya que no existe un acto de autoridad que determine lo contrario, esto es, no se acredita que la autoridad, con motivo del ejercicio de alguna de las facultades que le concede la ley, hubiese procedido a la revisión del ejercicio fiscal de 1993, y como resultado del mismo hubiese conocido que la empresa hoy actora, en 1993, en forma indebida, efectuó la deducción de sus activos fijos, por lo que en estos términos la autoridad no puede apoyarse, para determinar la

omisión del pago del impuesto al activo en el ejercicio de 1994, en base a que en el ejercicio fiscal de 1993 efectuó la depreciación de sus activos fijos, contraviniendo el artículo 51 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en razón de que dicho ejercicio no ha sido motivo de revisión por parte de la autoridad y, en su caso, si la autoridad demandada, con motivo de sus facultades iniciadas al amparo del oficio número 324-A-VII-4-II-13311 de fecha 09 de abril de 1997, respecto al ejercicio fiscal de 1994, hubiese conocido alguna irregularidad que tuviese su antecedente u origen en el ejercicio inmediato anterior, esto es, el ejercicio de 1993, debió, en su caso, ejercer sus facultades respecto a dicho ejercicio, a fin de respetar la garantía de legalidad y seguridad jurídica del visitado.

Por lo que en estos términos, como bien señala la actora, la autoridad fiscalizadora transgredió en su perjuicio lo dispuesto en los artículos 6°, 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y 8° de la Ley del Impuesto al Activo, ya que si la autoridad no ejerció sus facultades de comprobación respecto al ejercicio fiscal de 1993, no pueden sin sustento alguno declarar improcedente las deducciones de inversión inmediata aplicadas en la declaración complementaria respecto a dicho ejercicio de 1993, presentada con fecha 17 de febrero de 1995, pues no acredita que a través del ejercicio de alguna de las facultades de comprobación que le confiere la ley, hubiese conocido que la hoy actora, en el ejercicio de 1993, efectuó en forma indebida la depreciación de sus activos, enterando en forma indebida el impuesto al activo que le correspondía pagar, y como consecuencia de ello, el remanente de dicha deducción aplicado en 1994, resulta improcedente, por lo que en estas consideraciones es evidente que la resolución contenida en el oficio número 324-SAT-R7-L49-III-A-12790 de fecha 19 de diciembre de 1997, resulta ilegal, pues se emitió en contravención de las disposiciones aplicables, actualizándose, en consecuencia, la causal de nulidad prevista en la fracción IV del artículo 238 del Código Fiscal de la Federación, y en estos términos procede se declare la nulidad de la resolución impugnada, así como de la contenida en el oficio número 324-SAT-R7-L49-III-A-12790 de fecha 19 de diciembre de 1997.

En mérito de lo expuesto y fundado y, además, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 236, 237, último párrafo, 238, fracción IV, 239, fracción II, y demás relativos del Código Fiscal de la Federación, se resuelve:

I.- La parte actora probó su acción, en consecuencia:

II.- Se declara la nulidad de la resolución impugnada, así como la que fue motivo del recurso, mismas que quedaron precisadas en el resultando 1°, por los motivos y fundamentos contenidos en el considerando último del presente fallo.

III.- Notifíquese.

Así lo resolvieron y firman los CC. Magistrados que integran la Sala Regional Peninsular del Tribunal Fiscal de la Federación, siendo Magistrado Instructor en el presente juicio, el Licenciado Faustino Gerardo Hidalgo Ezquerra, ante la C. Secretaria de Acuerdos, Lic. Martha Beatríz Dorantes Cardeña que da fe.

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

SOBRESEIMIENTO.- NO PROCEDE AL NO HABERSE AGOTADO EL RECURSO DE REVOCACIÓN PREVISTO POR EL ARTÍCULO 135 DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR, AL NO TENER EL CARÁCTER DE OBLIGATORIO CONFORME A LAS REFORMAS DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.- Si bien es cierto que el artículo 135 de la Ley Federal de Protección al Consumidor establece que en contra de las resoluciones de la Procuraduría, dictadas con fundamento en las disposiciones de la referida Ley y demás derivadas de ella, se podrá interponer por escrito recurso de revisión, dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha en que surta efecto la notificación de la resolución recurrida; siendo que la expresión "podrá" ha sido interpretada como facultad volitiva intrínseca, no externa o material, no la opción para escoger uno u otro, recurso o juicio, sino la necesidad de hacer -interponer el recurso- si no se quiere perder ese derecho; es decir, que conforme al mencionado dispositivo legal, sí es obligatorio y no optativo agotar el recurso ordinario de revisión antes de iniciar el juicio contencioso administrativo ante la Sala que corresponda del Tribunal Fiscal de la Federación. Asimismo, si bien es cierto que del artículo 20 de la Ley Federal de Protección al Consumidor se desprende que la Procuraduría Federal del Consumidor es un organismo descentralizado de servicio social, con personalidad jurídica y patrimonio propio; empero, no por ello no le resultan aplicables las disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, toda vez que conforme a las reformas que ha sufrido la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, en vigor a partir de los días 3 y 19 de mayo del 2000, las disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo resultan aplicables, tanto a los organismos centralizados, como a los descentralizados, quedando en mérito a tales reformas, derogada la disposición contenida en el mencionado artículo 135; y por esta misma razón, la interposición de los recursos administrativos es opcional y no obligatorio, por lo que la causal de improcedencia que al respecto se haga valer, deviene notoriamente infundada. (23)

Juicio No. 1130/00-10-01-4.- Resuelto por la Sala Regional Peninsular del Tribunal Fiscal de la Federación, el 6 de octubre de 2000, por unanimidad de votos.- Magistrado Ponente: Lic. Manuel Carapia Ortiz.- Secretaria: Lic. Irma M. G. Serralta Ramírez.

C O N S I D E R A N D O :

(...)

TERCERO.- (...)

Esta Sala Juzgadora desestima por infundadas las causales de improcedencia a que se contraen las demandadas, atento a las consideraciones siguientes.

En el caso concreto, la resolución impugnada la constituye la dictada dentro del expediente 326/2000, por el Jefe del Departamento de Servicios al Consumidor, Delegación Estatal en Yucatán, de la Procuraduría Federal del Consumidor, con fecha 28 de mayo de 2000, en cumplimiento a lo ordenado en la resolución del recurso de revisión emitida el 18 de abril de 2000, por el Delegado Federal en la Entidad, de la Procuraduría Federal del Consumidor, a través de la cual se impuso a la hoy actora una multa en cantidad de $2,690.00, por haber violado los artículos 7o. y 42 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Ahora, si bien es cierto que el artículo 135 de la Ley Federal de Protección al Consumidor establece que en contra de las resoluciones de la Procuraduría, dictadas con fundamento en las disposiciones de la referida ley y demás derivadas de ella, se podrá interponer por escrito recurso de revisión, dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha en que surta efecto la notificación de la resolución recurrida; siendo que la expresión “podrá” ha sido interpretada como facultad volitiva intrínseca, no externa o material, no la opción para escoger uno u otro, recurso o juicio, sino la necesidad de hacer -interponer el recurso- si no se quiere perder ese derecho; es decir, que conforme al mencionado dispositivo legal, sí es obligatorio y no optativo

agotar el recurso ordinario de revisión antes de iniciar el juicio contencioso administrativo ante la Sala que corresponda del Tribunal Fiscal de la Federación.

Asimismo, si bien es cierto que del artículo 20 de la Ley Federal de Protección al Consumidor se desprende que la Procuraduría Federal del Consumidor es un organismo descentralizado de servicio social con personalidad jurídica y patrimonio propio; empero, no por ello no le resultan aplicables las disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; ello es así, toda vez que las demandadas pierden de vista que conforme a las reformas que ha sufrido la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, en vigor a partir de los días 3 y 19 de mayo del 2000, las disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo resultan aplicables tanto a los organismos centralizados, como a los descentralizados, quedando en mérito a tales reformas, derogada la disposición contenida en el mencionado artículo 135; y por esta misma razón, la interposición de los recursos administrativos, como lo es el pretendido por las ahora enjuiciadas, es opcional y no obligatorio, como indebidamente lo pretenden dichas enjuiciadas.

En efecto, mediante decreto por el que se reforma la Ley Federal de Procedimiento Administrativo que entró en vigor a partir del 19 de mayo de 2000, fue reformado el artículo 1o. de la referida Ley, adicionándose un segundo párrafo, recorriéndose en su orden actual los párrafos segundo y tercero, para quedar en los términos siguientes:

> "ARTÍCULO 1o.- Las disposiciones de esta ley son de orden e interés públicos, y se aplicarán a los actos, procedimientos y resoluciones de la Administración Pública Federal centralizada, sin perjuicio de lo dispuesto en los Tratados Internacionales de los que México sea parte.
>
> **"El presente Ordenamiento también se aplicará a los organismos descentralizados de la administración pública** federal paraestatal respecto a sus actos de autoridad, a los servicios que el Estado preste de manera exclusiva, y a los contratos que los particulares sólo puedan celebrar con el mismo.

"El presente Ordenamiento no será aplicable a las materias de carácter fiscal, responsabilidades de los servidores públicos, justicia agraria y laboral, ni al Ministerio Público en ejercicio de sus funciones constitucionales. En relación con las materias de competencia económica, prácticas desleales de comercio internacional y financiera, únicamente les será aplicable el título tercero A.

"Para los efectos de esta Ley sólo queda excluida la materia fiscal tratándose de las contribuciones y los accesorios que deriven de aquéllas." (El subrayado y realce es nuestro).

Asimismo, mediante diverso decreto por el que se reformó la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, el cual entró en vigor a partir del 3 de mayo de 2000, fueron reformados los artículos 83 y Segundo Transitorio de la mencionada Ley, los cuales quedaron en los términos siguientes:

"Artículo 83.- Los interesados afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, **podrán interponer el recurso de revisión o, cuando proceda, intentar la vía jurisdiccional que corresponda.** (El subrayado y realce es nuestro).

"En los casos de actos de autoridad de los organismos descentralizados federales, de los servicios que el Estado presta de manera exclusiva a través de dichos organismos y de los contratos que los particulares sólo pueden celebrar con aquéllos, que no se refieran a las materias excluidas de la aplicación de esta Ley, el recurso de revisión previsto en el párrafo anterior podrá interponerse en contra de actos y resoluciones que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente."

"SEGUNDO.- **Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo establecido con este Decreto.** Los recursos administrativos en trámite ante organismos descentralizados a la entrada en vigor del mismo, se resolverán conforme a la ley de la materia." (El subrayado y realce es nuestro).

En el anterior orden de ideas, es incuestionable que no le asiste razón a las demandadas al pretender que el recurso de revisión que prevé el artículo 135 de la Ley Federal de Protección al Consumidor es obligatorio y no opcional, pues deja de apreciar que la disposición contenida en el numeral en cita, dejó de tener vigencia acorde a lo establecido en el Artículo Segundo Transitorio de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo en vigor a partir del 3 de mayo de 2000; asimismo, pretende soslayar que esta Ley, conforme a su reforma en vigor a partir del 19 de mayo de 2000, es aplicable no sólo a la Administración Pública Federal centralizada, sino también a los organismos descentralizados, como lo es la Procuraduría Federal del Consumidor. En esta virtud, la causal de improcedencia de trato deviene infundada.

Asimismo, deviene infundada la diversa causal de improcedencia formulada, en el sentido de que debe sobreseerse el presente juicio, al no cumplir la actora con el requisito de citar su domicilio fiscal.

Se dice lo anterior, toda vez que si bien es cierto que conforme a lo dispuesto por el artículo 208, fracción I y penúltimo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, la demanda deberá indicar "El nombre y domicilio fiscal y, en su caso, domicilio para recibir notificaciones del demandante", y de que cuando se omitan los datos previstos en las fracciones I, II y VI, el magistrado instructor desechará por improcedente la demanda interpuesta; sin embargo, las demandadas pierden de vista que el propio numeral, en su último párrafo, prevé que: **"Se presume que el domicilio señalado en la demanda es el fiscal**, salvo que la autoridad demuestre lo contrario. El domicilio fiscal servirá para recibir notificaciones cuando no se señale uno convencional diferente." (El subrayado y realce es nuestro).

Luego entonces, si bien la hoy actora en su escrito de demanda no precisó cuál es su domicilio fiscal, en el apartado denominado "NOMBRE Y DOMICILIO DEL DEMANDANTE", indica lo siguiente: "CARREFOUR DE MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, misma que tiene su domicilio para oír y recibir notificaciones el predio marcado con el número ciento treinta de la calle veinte

por nueve de la colonia García Ginerés de esta ciudad de Mérida.", siendo que la autoridad demandada en modo alguno ha demostrado que el referido domicilio no corresponde al domicilio fiscal de la hoy actora; en esta medida, es incuestionable que la accionante dio cumplimiento a lo previsto en la fracción I del artículo 208 del Código Fiscal de la Federación, dado que el domicilio antes señalado se presume que es el domicilio fiscal de la hoy actora, razón por la cual no ha lugar a sobreseer el presente juicio contencioso administrativo.

(...)

Por lo expuesto y fundado y, además, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 202, 203, fracción, 235, 236, 237, 238, fracción IV, 239, fracción III y último párrafo, y demás relativos del Código Fiscal de la Federación, se resuelve:

I.- Por los motivos y fundamentos precisados en el considerando tercero de este fallo, han resultado infundadas las causales de improcedencia hechas valer por las autoridades demandadas, en consecuencia;

II.- No es de sobreseerse, ni se sobresee el presente juicio contencioso administrativo.

III.- La parte actora probó su acción; en consecuencia,

IV.- Se declara la nulidad de la resolución impugnada, misma que quedó precisada en el resultando 1o. de este fallo; por los motivos, fundamentos y para el efecto precisado en su considerando último.

V.- Notifíquese.

Así lo resolvieron y firman los CC. Magistrados que integran esta Sala Regional Peninsular del Tribunal Fiscal de la Federación, siendo Magistrado Instructor en el presente juicio, el C. Licenciado Manuel Carapia Ortíz, ante la fe de la C. Secretaria de Acuerdos, Lic. Irma M. G. Serralta Ramírez.

TERCERA PARTE

ACUERDOS GENERALES

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA
PLENO DE LA SALA SUPERIOR
ACUERDO G/44/2001

SE SUSPENDE LA JURISPRUDENCIA JS-I-7 EMITIDA POR ESTE TRIBUNAL

Con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 15 , 16, fracción IV, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y 262, primer párrafo del Código Fiscal de la Federación, y toda vez que la Jurisprudencia JS-I-7 emitida por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, publicada en la página 7 de la Revista N° 126, correspondiente al mes de junio de 1998 de este órgano jurisdiccional, es contraria a la 2a./J. 19/2001 que emitió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 97/2000-SS bajo el rubro "RENTA, IMPUESTO SOBRE LA. PARA OBTENER LA PROPORCIÓN APLICABLE PARA CALCULAR EL MONTO DEL SUBSIDIO ACREDITABLE CONTRA ESE TRIBUTO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 80-A DE LA LEY RELATIVA, DEBEN INCLUIRSE LAS CUOTAS PATRONALES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y AL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES DENTRO DE LAS EROGACIONES RELACIONADAS CON LOS SERVICIOS PERSONALES SUBORDINADOS" se acordó suspender la que emitió la Primera Sección de este cuerpo colegiado cuyo texto es del siguiente tenor:

> **IMPUESTO SOBRE LA RENTA. LAS CUOTAS PAGADAS AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y AL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA LA VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES NO DEBEN SER TOMADAS EN CONSIDERACIÓN PARA DETERMINAR LA PROPORCIÓN DEL SUBSIDIO ACREDITABLE.-** El otorgamiento del subsidio acreditable tiene por objeto, primero, beneficiar de manera decreciente a los trabajadores en la medida en

que se obtengan niveles de ingresos más altos y, segundo, simultáneamente otorgar mayor porcentaje al subsidio entre más alto sea el ingreso gravado, lo cual se consigue a través de la reducción de ese porcentaje en la proporción en que aumenten las prestaciones exentas en el ingreso percibido, por lo que las cuotas pagadas al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores no deben ser tomadas en consideración para determinar la proporción del subsidio acreditable, en términos del artículo 80-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, pues ello implicaría reducir del mencionado subsidio, no obstante que dichas aportaciones de manera alguna implican un nivel de ingreso más alto para los trabajadores, ni pueden reputarse como erogaciones por concepto de previsión social, al no traducirse, de manera directa, en una prestación de beneficio de los trabajadores, de sus familiares, dependientes o beneficiarios, tendientes a su superación física, social, económica, cultural e integral que le signifique un ingreso superior, sino que dichas aportaciones se cubren en cumplimiento de una obligación tributaria a cargo del patrón, cuyo beneficio para el trabajador es el mismo sin importar el nivel de sus ingresos.

Así lo acordó el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión del día tres de octubre de dos mil uno, ordenándose su publicación en la Revista de este órgano jurisdiccional.- Firman la Magistrada Ma. Guadalupe Aguirre Soria, Presidenta del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y la Lic. Graciela Buenrostro Peña, Secretaria General de Acuerdos, quien da fe.

CUARTA PARTE

JURISPRUDENCIA Y TESIS
DEL PODER JUDICIAL FEDERAL

JURISPRUDENCIA

PRIMERA SALA

CONTRABANDO. SE ACTUALIZA ESE DELITO, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 102 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, TRATÁNDOSE DE VEHÍCULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA AUN CUANDO SE LOCALICEN DENTRO DEL LÍMITE TERRITORIAL QUE SEÑALA EL DIVERSO ARTÍCULO 103 DEL MISMO CUERPO DE LEYES.- Es inexacto que el artículo 103 del Código Fiscal de la Federación, en su fracción II, al establecer que se presumirá la comisión del delito de contrabando en aquellos casos en que se encuentren vehículos extranjeros fuera de una zona de veinte kilómetros en cualquier dirección, contados en línea recta a partir de los límites extremos de la zona urbana de las poblaciones fronterizas, sin la documentación correspondiente, pugne con lo dispuesto en el diverso artículo 102 del propio código que prevé que dicha figura delictiva se actualiza con la sola introducción de mercancías o vehículos de procedencia extranjera al país o su extracción de él, en su caso, omitiendo el pago total o parcial de las contribuciones o cuotas compensatorias que deban cubrirse y sin contar con el permiso de la autoridad competente, toda vez que tales dispositivos se complementan, en virtud de que lo regulado en el primer precepto, supone una situación posterior a la introducción de mercancías, por lo que no puede interpretarse que fuera de la hipótesis donde se presume la comisión del delito de contrabando, no se actualice; además, tal precepto conduce a estimar que con anterioridad al hallazgo de una determinada mercancía o vehículo de procedencia extranjera, se llevó a cabo su introducción al país sin la documentación correspondiente, cuando no se demuestre lo contrario, por lo que es inexacto afirmar que cuando sean localizados éstos dentro del límite territorial que señala el artículo 103 citado, no pueda configurarse el delito de contrabando que regula el mencionado artículo 102 que, en cuanto a territorialidad, presupone como requisito que la introducción de mercancías se haga al país, siendo incorrecto estimar que el territorio nacional inicia precisamente des-

pués de los límites de las garitas de inspección, pues de ser así, se generaría la imposibilidad de actualizar dicho ilícito dentro de la franja fronteriza. (1a./J. 29/2001)

S.J.F. IX Época. T. XIV. 1a. Sala, julio 2001, p. 89

FACTURAS. NO REQUIEREN ESTAR FIRMADAS PARA TENER EFICACIA PROBATORIA EN EL JUICIO DE AMPARO, POR NO EXIGIRLO LEY O DISPOSICIÓN APLICABLE ALGUNA.- De la interpretación sistemática de lo dispuesto en los artículos 133, 136, 137, 203, 204 y 206, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de lo previsto en su artículo 2o., se advierte que los documentos privados pueden estar o no suscritos, según la clase de documento de que se trate. Ahora bien, entre los documentos privados que no se acostumbra suscribir se encuentran las facturas, que son documentos propios del tráfico de mercancías o de prestación de servicios y que sirven como medios de control de las obligaciones fiscales. Esto es así, porque al no existir en el Código de Comercio disposición alguna que regule la forma y contenido de las facturas, debe estarse a lo señalado en las demás disposiciones legales y administrativas aplicables a ese tipo de documentos, como son la Ley Federal de Protección al Consumidor, el Código Fiscal de la Federación y la Ley Aduanera, así como a las reglas que en relación con las facturas publican anualmente las autoridades fiscales federales en la resolución miscelánea fiscal o en la resolución miscelánea de comercio exterior, ordenamientos que no establecen como condición para la validez de las facturas la firma de quien las expide o de su representante legal; sin que esto implique que se desconozca la persona que las extendió, ya que atento los múltiples requisitos fiscales que deben contener, permiten identificar al vendedor, al comprador y a la mercancía o servicio objeto de la operación comercial. En estas circunstancias, se concluye que las facturas son documentos privados que para tener eficacia probatoria en el juicio de amparo, no requieren de firma alguna, al no ser un requisito previsto en las leyes y demás disposiciones aplicables. (1a./J. 32/2001)

S.J.F. IX Época. T. XIV. 1a. Sala, julio 2001, p. 162

SEGUNDA SALA

REVISIÓN FISCAL. ES IMPROCEDENTE EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DICTADAS POR EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, EN LAS QUE SE HAYA SOLICITADO SU ACLARACIÓN Y ÉSTA NO HAYA SIDO RESUELTA.- Si bien la aclaración de sentencia prevista en el artículo 239-C del Código Fiscal de la Federación, no constituye un recurso en el estricto sentido de la palabra, sí puede considerarse como un medio de defensa en los términos establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues tiene como objeto modificar las resoluciones dictadas por las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (antes Tribunal Fiscal de la Federación), corrigiendo las partes que se estimen contradictorias, ambiguas u oscuras; de ahí que las sentencias que emita el aludido tribunal en las que se haya solicitado por alguna de las partes su aclaración no revisten el carácter de definitivas, porque de proceder dicha aclaración aquéllas se verían modificadas y la resolución que al respecto se dictara formaría parte integrante de ellas. En congruencia con lo anterior, y tomando en consideración que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 248 del citado código, a través del recurso de revisión fiscal podrán impugnarse las sentencias definitivas, resulta inconcuso que dicho recurso es improcedente en contra de aquellas sentencias en las que la solicitud de aclaración se encuentre pendiente de resolver, pues éstas no están debidamente integradas y son susceptibles de ser modificadas en alguno de sus puntos. (2a./J. 29/2001)

S.J.F. IX Época. T. XIV. 2a. Sala, julio 2001, p. 502

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO

CONCEPTOS DE NULIDAD DEL ACTO O ACTOS IMPUGNADOS, ESTUDIO DE LOS. EXCEPCIÓN A LO DISPUESTO EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 237 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERA-

CIÓN.- En el numeral citado se encuentra contenido el principio de exhaustividad de las sentencias en materia tributaria, el cual impone a las Salas del Tribunal Fiscal de la Federación la obligación de examinar todos y cada uno de los puntos controvertidos del acto impugnado, iniciando por aquellos que puedan llevar a declarar la nulidad lisa y llana, y después por los que se refieran a la omisión de requisitos formales o vicios del procedimiento en su caso. Ahora bien, cuando la Sala Fiscal declara la nulidad del acto impugnado consistente en una resolución determinante de un crédito fiscal por diversos conceptos, como pueden ser la omisión en el pago de distintos impuestos, su actualización, recargos y multas, para los efectos previstos en la última parte de la fracción III del artículo 239 del Código Fiscal de la Federación, esto es, para que se anule la resolución impugnada así como el procedimiento de fiscalización que le dio origen, a partir de que se cometió la violación formal analizada en la sentencia, sin perjuicio de que si así lo estima conveniente y se encuentre en posibilidad de hacerlo, la autoridad exactora continúe con el procedimiento de fiscalización, se da la excepción a la norma citada y es innecesario el examen de los conceptos de nulidad de fondo que pudieran dar origen a la declaratoria de nulidad lisa y llana de la resolución impugnada, sólo por cuanto hace a una parte de la misma, como pudiera ser, por ejemplo, la multa de fondo impuesta, toda vez que en ese supuesto, la autoridad demandada puede ejercer nuevamente sus facultades fiscalizadoras por cuanto hace a los restantes conceptos por los que se determinó el crédito fiscal, pues a diferencia de lo que sucede cuando se declara la nulidad para efectos del acto o actos impugnados, en donde la Sala Fiscal actúa como tribunal de plena jurisdicción indicando a la autoridad hacendaria la forma en que debe actuar nuevamente respetando las garantías del gobernado, en este caso, no es posible determinar si la multa de fondo se va a volver a aplicar a la contribuyente por tratarse de facultades discrecionales y haber actuado la Sala Fiscal como un tribunal de mera anulación, dejando al arbitrio de las autoridades demandadas decidir si ejercen o no sus facultades discrecionales, continuando con el procedimiento de fiscalización, en donde el contribuyente estaría en aptitud de ejercer plenamente su derecho de defensa impidiendo que se vuelva a aplicar la citada multa de fondo y los demás conceptos determinantes del crédito fiscal; por lo tanto, al desconocerse si va a existir una nueva resolución liquidatoria en perjuicio del contribuyente, en este caso se hace innecesario el estudio

de los conceptos de anulación de fondo relacionados sólo en parte del acto impugnado, el cual quedó invalidado en los términos de la nulidad declarada por la Sala Fiscal. (VI.1o.A. J/19)

S.J.F. IX Época. T. XIV. 1er. T. C. del 6o. C., julio 2001, p. 962

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. PUEDE COMPENSARSE O ACREDITARSE CONTRA EL IMPUESTO A CARGO DEL CONTRIBUYENTE, SIN ESPERAR LA DECLARACIÓN FINAL DEL EJERCICIO.- La figura jurídica de la compensación es una forma de extinción de las obligaciones que, en materia fiscal, tiene lugar cuando fisco y contribuyente son acreedores y deudores recíprocos. De ahí que si el artículo 6o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en una primera hipótesis establece que cuando en la declaración de pago provisional resulte saldo a favor, el contribuyente podrá acreditarlo contra el impuesto a su cargo que le corresponde a los meses siguientes, ese supuesto evidentemente permite al contribuyente, causante del impuesto al valor agregado y obligado a pagarlo por medio de declaraciones, a compensarlo en los subsecuentes pagos provisionales del ejercicio, sin esperar a su declaración final del ejercicio. Lo anterior, aun cuando el referido artículo 6o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado no precisa si la compensación o acreditamiento del saldo a favor se puede realizar en la declaración final del ejercicio o en las provisionales, pues en tal caso sí aplica en forma supletoria el artículo 23 del Código Fiscal de la Federación, precepto que fue interpretado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia por contradicción de tesis 38/2000, de rubro: "COMPENSACIÓN. PUEDE REALIZARSE POR CONTRIBUYENTES QUE DICTAMINEN SUS ESTADOS FINANCIEROS CUANDO SE HAGAN PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA O DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AGREGADO.", en la que, en lo relativo, se consideró: "... Ahora bien, el párrafo segundo del artículo 23 del Código Fiscal de la Federación, establece: '... tratándose de con-

tribuyentes que dictaminen sus estados financieros en los términos de este código, aquéllos podrán compensar cualquier impuesto federal a su favor contra el impuesto sobre la renta del ejercicio a su cargo y el impuesto al valor agregado del ejercicio a su cargo ...'. Lo dispuesto en dicho apartado significa que la compensación puede realizarse durante el ejercicio al hacer los pagos provisionales, en virtud de que no existe razón para limitar el derecho a la compensación hasta la declaración final del cierre del ejercicio ...". (VIII.3o. J/6)

S.J.F. IX Época. T. XIV. 3er. T. C. del 8o. C., julio 2001, p. 988

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL NOVENO CIRCUITO

RECURSOS ORDINARIOS, CASOS EN LOS QUE DEBEN AGOTARSE, ANTES DE ACUDIR A LA VÍA CONSTITUCIONAL.- El juicio de amparo puede promoverse sin necesidad de agotar recurso ordinario alguno, cuando se reclaman violaciones directas a la Constitución General de la República; sin embargo, tal excepción a la causal de improcedencia prevista en la fracción XV del artículo 73 de la ley de la materia, presupone que en la demanda de garantías exclusivamente se hagan valer violaciones directas a la Carta Magna y no cuestiones de legalidad, pues entonces la parte quejosa debe agotar el recurso ordinario procedente antes de acudir a la vía constitucional. (IX.1o. J/9)

S.J.F. IX Época. T. XIV. 1er. T. C. del 9o. C., julio 2001, p. 1031

TESIS

PLENO

PAGO INDEBIDO DE CONTRIBUCIONES. LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIA QUE RIGEN LAS RELACIONES JURÍDICAS QUE SURGEN POR TAL MOTIVO, EXIGEN QUE EL LEGISLADOR ESTABLEZCA LOS MECANISMOS PARA QUE EL FISCO EFECTÚE LA DEVOLUCIÓN RESPECTIVA.- Si se toma en consideración que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido reiteradamente el criterio de que la eficacia tutelar de los principios de proporcionalidad y equidad tributaria consagrados en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no debe entenderse constreñida únicamente a la obligación sustantiva de pago de las contribuciones, pues rige, en lo conducente, para todas aquellas relaciones de índole adjetiva o sustantiva que nazcan como consecuencia o con motivo de la potestad tributaria, en la medida en que ésta es el soporte fundamental de las relaciones jurídicas que pueden establecerse entre el fisco y los particulares, resulta inconcuso que entre las relaciones jurídicas regidas por el citado precepto constitucional se encuentra aquella que surge cuando el particular tiene derecho a obtener la devolución, por parte del fisco, de las sumas de dinero entregadas por aquél, en virtud de un acto de autodeterminación o de una resolución administrativa, cuando tales enteros hayan sido anulados por ilicitud en términos de una resolución firme recaída a un medio ordinario de defensa intentado por el contribuyente, o simplemente no hayan procedido. Sin embargo, en este tipo de relación generada por el pago indebido de sumas de dinero al fisco, tales principios adquieren un matiz distinto al que usualmente se les atribuye cuando se analiza la validez de las contribuciones, pues la proporcionalidad no sólo se manifiesta de manera positiva obligando al particular a contribuir en la medida de su capacidad, sino también de manera negativa, es decir, prohibiendo a la autoridad hacendaria recaudar cantidades superiores a las debidas y obligándola a reintegrar al particular las sumas obtenidas injustificadamente, y la equidad actúa, no solamente exigiendo que los particulares

que se encuentran en una misma posición frente al hecho imponible entreguen cantidad igual de dinero, sino obligando al Estado a reparar la desigualdad que nace cuando una persona entrega una cantidad superior a la debida, reintegrándole el quebranto patrimonial sufrido injustificadamente. Esto es, tratándose de cantidades enteradas indebidamente al fisco, los aludidos principios exigen que el legislador establezca los mecanismos para devolver íntegramente al contribuyente las sumas indebidamente percibidas. (P. XI/2001)

S.J.F. IX Época. T. XIV. Pleno, julio 2001, p. 9

SEGUNDA SALA

CLAUSURA POR OMISIÓN EN EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE SE DEJE AL ARBITRIO DE LA AUTORIDAD FISCAL LA IMPOSICIÓN DE DICHA SANCIÓN, SIN QUE EN EL ARTÍCULO 49, FRACCIÓN VI, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE EN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE, SE PREVEA A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE VISITADO LA OPORTUNIDAD DE DEFENSA PREVIA, TRANSGREDE LA GARANTÍA DE AUDIENCIA.- El artículo 84, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación establece que: "... Las autoridades fiscales podrán, además, clausurar preventivamente el establecimiento del contribuyente por un plazo de tres a quince días. ...", como sanción por la infracción prevista en el artículo 83, fracción VII, del propio ordenamiento, consistente en la omisión de los contribuyentes de expedir o entregar comprobantes de las actividades fiscales o expedirlos sin los requisitos correspondientes. Dicha sanción constituye un acto privativo, ya que produce como efecto la disminución o menoscabo del derecho de posesión que aquél ejerce sobre el local, establecimiento o lugar clausurado, así como de su derecho a la libertad de trabajo, industria o comercio que desarrolla dentro de ese sitio. Ahora bien, el hecho de que quede al arbitrio de la autoridad fiscal la imposición de la sanción de clausura mencionada, sin que el artículo 49, fracción VI, del ordenamiento legal invocado, prevea

la posibilidad de que el visitado controvierta y desvirtúe las irregularidades plasmadas en el acta de visita que sirve de sustento para la imposición de la indicada sanción, transgrede la garantía de audiencia consagrada en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues no otorga al contribuyente la oportunidad de probar y alegar lo que a su derecho convenga antes del ejercicio de tal facultad, cuyo objetivo primordial es el de evitar la reincidencia del contribuyente y no sólo restringir provisionalmente el proceder sancionado. (2a. CIV/2001)

S.J.F. IX Época. T. XIV. 2a.Sala, julio 2001, p. 505

CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE RESOLVERSE, AUN ANTE LA IMPOSIBILIDAD DE TENER A LA VISTA LA EJECUTORIA DE LA QUE DERIVÓ ALGUNO DE LOS CRITERIOS QUE SE ESTIMAN DIVERGENTES, SI EL TEXTO DE LA TESIS PUBLICADA EN EL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN ES SUFICIENTEMENTE CLARO Y EL PUNTO DE DERECHO QUE EN ÉL SE ABORDA PUEDE PRESENTARSE EN SITUACIONES FUTURAS Y REITERADAS.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación, por un principio de seguridad jurídica, debe resolver las denuncias de contradicción de tesis formuladas por parte legítima aun en aquellos casos en que no se tenga a la vista la ejecutoria de la que derivó alguno de los criterios que se estiman divergentes, por alguna razón justificada como sería el extravío del expediente, siempre y cuando la redacción de la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación sea lo suficientemente clara como para desprender de ella la opinión jurídica que el tribunal sostuvo sobre un punto de derecho y, además, éste sea de tal manera general que pueda presentarse en situaciones futuras y reiteradas. Ello es así, porque el vocablo “tesis” a que aluden los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, debe entenderse en sentido amplio, es decir, como la opinión que formulan de un tema jurídico determinado los órganos jurisdiccionales que resuelven los asuntos sometidos a su consideración, por lo que cuando el texto de la tesis cuente con los elementos jurídicos necesarios para fijar con nitidez cuál fue la postura adoptada por

aquéllos, la imposibilidad material de recabar la ejecutoria de la que derivó constituye un elemento secundario en la contradicción, que no impide que el más Alto Tribunal del país realice el análisis de la denuncia respectiva. (2a. CXI/2001)

S.J.F. IX Época. T. XIV. 2a.Sala, julio 2001, p. 506

RENTA. EL ARTÍCULO 17, FRACCIÓN XI, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE EN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE, QUE PREVÉ EL PROCEDIMIENTO PARA LA DETERMINACIÓN DEL INGRESO ACUMULABLE, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA.- El mencionado artículo que establece que las personas morales considerarán como ingreso acumulable, en el ejercicio, la proporción de los ingresos acumulables del ejercicio de las sociedades, entidades o fideicomisos ubicados o residentes en jurisdicciones de baja imposición fiscal, en la proporción de su participación directa promedio por día en el ejercicio correspondiente en dicha sociedad, entidad o fideicomiso, si tienen derecho a la distribución de utilidades, aunque no se hayan distribuido dividendos, ingresos que se determinarán cada año de conformidad con las disposiciones del título de personas morales de la Ley del Impuesto sobre la Renta, añadiéndose que si los contribuyentes tienen a disposición de las autoridades fiscales la contabilidad de la sociedad, entidad o fideicomiso, podrán disminuir las deducciones de éstas de la totalidad de sus ingresos acumulables y, en su caso, determinarán el resultado fiscal disminuyendo de las utilidades fiscales las pérdidas en que haya incurrido la sociedad, entidad o fideicomiso en los cinco ejercicios anteriores, no transgrede el principio de legalidad tributaria consagrado en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior es así, porque en el citado artículo 17, fracción XI, no existe indefinición, por una parte, en cuanto a qué tipo de inversiones en jurisdicciones de baja imposición fiscal darán lugar a la determinación del ingreso acumulable en la parte proporcional del contribuyente, pues en el propio artículo claramente se dispone que a ello estarán obligados si son accionistas, beneficiarios efectivos o tienen derecho a la distribución de utilidades de la sociedad, entidad o fideicomiso relativo, debiendo

relacionarse, además, este precepto con el último párrafo del artículo 5o. de la mencionada ley, en el que se exceptúan del concepto de inversiones en jurisdicciones de baja imposición fiscal las que se realicen a través de personas morales cuyas acciones se encuentran colocadas entre el gran público inversionista en mercados reconocidos, así como las que se realizan de manera indirecta por medio de sociedades, entidades o fideicomisos, si el contribuyente tiene una participación que no le permite influir en la administración o control, de manera tal que desconozca la realización de inversiones en jurisdicciones de baja imposición fiscal; y, por otra, en cuanto a la legislación aplicable conforme a la cual deberán determinarse los ingresos acumulables de la sociedad, entidad o fideicomiso, así como las deducciones y pérdidas que, en su caso, proceda disminuir, pues el precepto referido establece que tales ingresos se determinarán de conformidad con las disposiciones del título relativo a personas morales de la Ley del Impuesto sobre la Renta y que la pérdida fiscal se determinará de acuerdo con el artículo 55 de ese ordenamiento que dispone, en su primer párrafo, que "La pérdida fiscal será la diferencia entre los ingresos acumulables del ejercicio y las deducciones autorizadas por esta ley, cuando el monto de estas últimas sea mayor que los ingresos."; y, finalmente, en relación a lo que debe entenderse por tener a disposición de la autoridad fiscal la contabilidad de la sociedad, entidad o fideicomiso, pues a este requisito se sujeta la procedencia de disminuir de los ingresos acumulables de tal sociedad, entidad o fideicomiso, sus deducciones y, en su caso, sus pérdidas, por lo que lógicamente se refiere a la contabilidad que permita acreditar tales deducciones y pérdidas para que la autoridad fiscal esté en posibilidad de verificar el debido cumplimiento del contribuyente a su obligación fiscal en lo que respecta a su ingreso acumulable derivado de la inversión que realizó en dicha sociedad, entidad o fideicomiso, ubicada o residente en jurisdicción de baja imposición fiscal. (2a. CVII/2001)

S.J.F. IX Época. T. XIV. 2a.Sala, julio 2001, p. 513

RENTA. EL PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR EL INGRESO ACUMULABLE PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17, FRACCIÓN XI, DE

LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE EN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE, RESPETA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA.- Al consignar el artículo 17, fracción XI, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente en el año de mil novecientos noventa y siete, que las personas morales considerarán como ingreso acumulable en el ejercicio de que se trate la proporción de los ingresos acumulables del ejercicio de las sociedades, entidades o fideicomisos ubicados o residentes en jurisdicciones de baja imposición fiscal, en la proporción de su participación directa promedio por día en el ejercicio al que correspondan, si son accionistas, beneficiarios efectivos o tienen derecho a la distribución de utilidades de los mismos, aun en el caso de que no se hayan distribuido dividendos, pudiendo disminuir, en caso de que tengan la contabilidad de la sociedad, entidad o fideicomiso a disposición de las autoridades fiscales, tanto las deducciones de la sociedad, entidad o fideicomiso como las pérdidas fiscales en que haya incurrido en los cinco ejercicios anteriores, respeta el principio de equidad tributaria consagrado en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello es así, porque el hecho de que se establezca para los contribuyentes que inviertan en entidades ubicadas en jurisdicciones de baja imposición fiscal un procedimiento de determinación del ingreso acumulable distinto del que se prevé para aquellos que hayan realizado inversiones en el extranjero, pero en jurisdicciones que no sean consideradas de baja imposición, no implica que se les dé un tratamiento inequitativo, pues ambos tipos de contribuyentes son sujetos diversos que deben recibir un tratamiento diferente en cuanto a la determinación de su ingreso acumulable por la inversión relativa, de acuerdo con el principio de igualdad que exige dar trato igual a los iguales y desigual a los desiguales, ya que si bien coinciden en el hecho de la realización de inversiones en el extranjero, el que lo hagan en una jurisdicción de baja imposición fiscal es, precisamente, lo que los coloca en una situación desigual, pues en un país con cargas impositivas equivalentes a las de México, los dividendos o utilidades distribuidos a los accionistas serán también equivalentes a los que correspondería distribuirles conforme a la legislación mexicana, a diferencia de las jurisdicciones de baja imposición fiscal en las que las utilidades o dividendos de los inversionistas de una sociedad, entidad o fideicomiso no son determinados conforme a una legislación equivalente a la de la República mexicana, y si se toma en cuenta

que el causante del impuesto sobre la renta debe tributar conforme a la legislación mexicana, es lógico concluir que debe adecuarse la base gravable del citado impuesto a su ingreso acumulable de acuerdo con las disposiciones de la ley que regula dicho impuesto para que tribute en los términos de la misma y no de una legislación diversa y, por tal motivo, el referido artículo 17, fracción XI, otorga a los contribuyentes relativos la posibilidad de no acumular los dividendos o utilidades que efectivamente perciban de las sociedades, entidades o fideicomisos o de acreditar el impuesto pagado por los ingresos acumulables o el resultado fiscal de la sociedad contra el que les corresponda por acumular los dividendos o utilidades.
(2a. CVIII/2001)

S.J.F. IX Época. T. XIV. 2a.Sala, julio 2001, p. 514

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO

VISITA DOMICILIARIA. DEBE INICIARSE A LA HORA INDICADA EN EL CITATORIO QUE SE DEJA AL VISITADO PARA QUE ESPERE A LOS VISITADORES, CUANDO NO LO ENCUENTRAN A LA PRIMERA BÚSQUEDA.- En términos del artículo 44 del Código Fiscal de la Federación, si al presentarse los visitadores al lugar en donde deba practicarse la visita no estuviere el visitado o su representante, dejarán citatorio con la persona que se encuentre en el lugar para que el visitado o su representante los esperen a hora determinada del día siguiente para recibir la orden de visita y si no lo hicieren la visita se iniciará con quien se encuentre en el lugar visitado. Por otra parte, conforme al artículo 137 del propio ordenamiento legal cuando la notificación se efectúe personalmente y el notificador no encuentre a quien deba notificar, le dejará citatorio en el domicilio para que espere a una hora fija del día hábil siguiente. Ahora bien, en el caso el visitador no encontró al representante legal de la persona moral visitada, por lo que le dejó citatorio para que lo esperara a determinada hora del día hábil siguiente. Sin embargo, el día señalado para la espera, el visitador se presentó media hora después de la indicada en el

citatorio solicitando la presencia del representante legal y al no encontrarlo entendió la diligencia con otra persona. Así las cosas, si el representante legal no se encontraba al momento en que se presentó el visitador, fue por causas atribuibles única y exclusivamente a la autoridad fiscalizadora por no respetar su personal la hora fijada para llevar a cabo la diligencia y, por tanto, ésta no debió llevarse a cabo con persona diversa; de manera que al no considerarlo así la Sala Fiscal responsable violó en perjuicio de la quejosa los invocados numerales, lo que hace procedente conceder el amparo solicitado. (I.4o.A.322 A)

S.J.F. IX Época. T. XIV. 4o. T. C. del 1er. C., julio 2001, p. 1155

SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO

RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 83 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. TIENE APLICACIÓN EN LOS PROCEDIMIENTOS REGULADOS EN LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.- Son dos las razones que conducen a establecer lo anterior. La primera derivada de lo previsto en el artículo 1o. de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, en relación con lo dispuesto en el artículo 6o. de la Ley de la Propiedad Industrial, en el sentido de que las disposiciones de la ley federal referida también se aplicarán a los organismos descentralizados de la administración pública federal paraestatal respecto a sus actos de autoridad, a los servicios que el Estado preste de manera exclusiva y a los contratos que los particulares sólo podrán celebrar con el mismo, con excepción de las materias especificadas; y que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial es un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio. La otra, inferida de lo plasmado en la jurisprudencia número 2a./J. 116/99, publicada en la página 447 del Tomo X del *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, relativo al mes de octubre de 1999, de rubro: "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. PUEDEN ESTABLECERSE EN ORDENAMIENTO LEGAL DIVERSO DEL QUE SIRVE DE FUN-

DAMENTO A LA EMISIÓN DEL ACTO RECLAMADO (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO).", en la que se advierte que basta con que en alguna ley formal y material se prevenga de manera directa e inmediata la procedencia de algún recurso o medio de defensa que posibilite la modificación, revocación o nulificación del acto reclamado, para que opere la causal de improcedencia por incumplimiento al principio de definitividad que rige en el juicio de amparo. Los propios motivos hacen que resulte intrascendente la falta de regulación del recurso de que se trata en la Ley de la Propiedad Industrial, así como la circunstancia de que en ella se establezca que en ausencia de disposición en ese ordenamiento, se aplicará de manera supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles. (I.7o.A.131 A)

S.J.F. IX Época. T. XIV. 7o. T. C. del 1er. C., julio 2001, p. 1140

OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO

PRESCRIPCIÓN, FIANZAS EXPEDIDAS PARA GARANTIZAR UN CRÉDITO FISCAL DERIVADO DE UN PAGO EN PARCIALIDADES, CASOS DE INTERRUPCIÓN PARA EL CÓMPUTO DE LA.- Tratándose de fianzas expedidas para garantizar un crédito fiscal derivado de un pago en parcialidades, el cómputo de la prescripción comienza a correr a partir del momento en que el pago es legalmente exigible. Ahora bien, el término de la prescripción se interrumpe con cada gestión de cobro o reconocimiento del adeudo por parte del deudor, ello de conformidad con lo dispuesto por el artículo 146 del Código Fiscal de la Federación. Asimismo, si existe una declaratoria de nulidad respecto a un requerimiento de pago formulado a una institución afianzadora, dicha resolución jurisdiccional puede llegar a interrumpir el plazo de la prescripción, sólo en el caso de que la declaratoria respectiva haya sido para efectos por vicios formales, es decir, que se permita a la autoridad requirente volver a emitir un nuevo acto de cobro, pues se le deja en plenitud de facultades. Por el contrario, si a un requerimiento de pago precedió una declarativa

de nulidad lisa y llana de diverso intento de cobro, relacionado con una misma póliza de fianza, tal circunstancia no interrumpe el plazo de la prescripción referido en el artículo 146 del código tributario federal, ya que la nulidad lisa y llana decretada por el Tribunal Fiscal de la Federación implica la nada jurídica respecto del acto autoritario de molestia; por consiguiente, si un acto de autoridad no nació a la vida jurídica, ello no puede considerarse como una causa de interrupción de la prescripción en materia de fianzas. (I.8o.A.21 A)

S.J.F. IX Época. T. XIV. 8o. T. C. del 1er. C., julio 2001, p. 1133

REVISIÓN FISCAL. RESULTA IMPROCEDENTE EL RECURSO, SI ÉSTE SE PROMUEVE EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 248 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y NO SE RAZONA QUE EL ASUNTO SE CIRCUNSCRIBE A ALGUNA DE LAS HIPÓTESIS EN ELLA ENUMERADAS.- Si la autoridad recurrente, al interponer el recurso de revisión, invoca para la procedencia del mismo el artículo 248, fracción V, del Código Fiscal de la Federación, en el que las hipótesis son: a) que sea una resolución en materia de aportaciones de seguridad social; b) que el asunto verse sobre la determinación de sujetos obligados; c) de conceptos que integren la base de cotización o sobre el grado de riesgo de las empresas para los efectos del seguro de riesgos de trabajo, y dicha autoridad no razona que el asunto materia de estudio encuadre en alguna de ellas, esa omisión de la recurrente sobre el particular hace que se declare improcedente el recurso de revisión. (I.8o.A.18 A)

S.J.F. IX Época. T. XIV. 8o. T. C. del 1er. C., julio 2001, p. 1144

DÉCIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO

RECLAMACIÓN. LA FALTA DE COPIAS DE TRASLADO NO DA LUGAR A SU DESECHAMIENTO, SINO DEBE DE PREVENIRSE AL

PROMOVENTE PARA QUE LAS PRESENTE CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 209 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.- De la lectura de los artículos 242 al 244, correspondientes al título VI, del Código Fiscal de la Federación, capítulo X, denominado "De los recursos", sección primera, no se advierte la existencia de alguna sanción, en caso de que el promovente de un recurso de reclamación no adjunte las copias necesarias para correr traslado a la contraparte; luego, no debe desecharse el citado medio de defensa, sino que debe de requerirse para que exhiba las copias faltantes, con fundamento en el artículo 209, penúltimo párrafo, del código en cita, aplicado por identidad de razón, en virtud de que dicho precepto prevé el requerimiento o la prevención para regularizar la omisión de una de las partes en el juicio fiscal, ya que de desecharse el citado recurso por la omisión en comento, dicho criterio no sólo se apartaría de la naturaleza del juicio contencioso administrativo, que responde a la conveniencia y necesidad de otorgar al gobernado medios de defensa en contra de actos emitidos dentro del proceso en los que el afectado pueda hacer valer sus planteamientos y demostrar la ilegalidad del acto sin mayores formalidades, sino que además porque al desestimar la prevención para regularizar el recurso, se establece una consecuencia desproporcionada a la omisión en que pudo incurrir el demandante rompiendo el equilibrio entre la partes, dejando indefenso al gobernado al impedirle combatir un acto, así como el obtener una resolución que dirima las cuestiones debatidas. (I.10o.A.20 A)

S.J.F. IX Época. T. XIV. 10o. T. C. del 1er. C., julio 2001, p. 1139

DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO

AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, SI NO SE AGOTA EL RECURSO DE REVISIÓN REGULADO EN EL ARTÍCULO 83 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, A PARTIR DE LA VIGENCIA DE LA REFORMA A ESTE ARTÍCULO DE

MAYO DE DOS MIL.- La Ley Federal de Procedimiento Administrativo, así como la reforma a su artículo 83 publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta de mayo de dos mil, realizó una sustitución legislativa del régimen de recursos de los organismos descentralizados, sustitución que se corrobora con la finalidad de la ley que se desprende de su exposición de motivos e interpretación sistemática, así como de las cláusulas derogatorias contenidas en los transitorios de la ley y de sus reformas, razón por la cual a partir de la entrada en vigor de la citada reforma, los particulares tendrán que agotar el recurso de revisión respecto de los actos de autoridad de los organismos descentralizados, entre los que se encuentra el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, previo a la promoción del juicio de amparo. (I.13o.A.25 A)

S.J.F. IX Época. T. XIV. 13er. T. C. del 1er. C., julio 2001, p. 1066

INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, ACTOS DE AUTORIDAD DEL. DESPUÉS DE AGOTAR EL RECURSO DE REVISIÓN REGULADO EN EL ARTÍCULO 83 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, LOS PARTICULARES PUEDEN OPTAR POR ACUDIR DIRECTAMENTE AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, TODA VEZ QUE EL HECHO DE QUE CONTRA LA SUSPENSIÓN REGULADA EN EL ARTÍCULO 208-BIS DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN NO PROCEDA NINGÚN RECURSO, OPERA UNA DE LAS EXCEPCIONES DE LA FRACCIÓN XV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO.- La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado en la jurisprudencia 2a./J. 82/2000, que la suspensión regulada en el artículo 87, respecto del recurso de revisión, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo no exige mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo, razón por la cual, previo a la interposición del amparo, los particulares deben agotar el recurso; sin embargo, este tribunal advierte que, posteriormente al agotamiento del recurso, los particulares pueden optar por acudir al juicio de amparo indirecto, toda vez que conforme al artículo 208-bis del Código Fiscal de la Federación, las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa pueden conce-

der la suspensión provisional de los actos que ante él se impugnen. Sin embargo, la fracción III, segundo párrafo, de dicho precepto establece que en contra del auto que decrete o niegue la suspensión provisional no procederá recurso alguno. Lo anterior constituye claramente una desventaja respecto de la figura de la suspensión del acto reclamado que consagra la Ley de Amparo, toda vez que ésta prevé el recurso de queja contra las resoluciones que pronuncien los Jueces de Distrito en que concedan o nieguen la suspensión provisional, en términos de los artículos 95, fracción XI y 99, último párrafo, de la ley de la materia. Tal desventaja debe ser entendida como "un requisito mayor", pues con ella se violenta igualmente el espíritu de la excepción contenida en el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, la cual busca asegurar la procedencia del juicio de garantías cuando la suspensión prevista en el recurso ordinario, contenga condiciones menos favorables que las que rigen la suspensión del acto reclamado. Así, ante la imposibilidad de recurrir el auto en que se niegue la suspensión provisional, y dada la consecuencia que conlleva dicha circunstancia, consistente en el riesgo de que se ejecute el acto impugnado, no puede vedarse a los particulares la facultad de acudir al juicio de amparo, después de agotar el recurso de revisión, en el cual cuentan con una oportunidad más de obtener la suspensión del acto que les causa perjuicio, sin necesidad de agotar el juicio de nulidad. (I.13o.A.18 A)

S.J.F. IX Época. T. XIV. 13er. T. C. del 1er. C., julio 2001, p. 1120

INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, LAS AUTORIDADES DEL, SÍ ESTÁN LEGITIMADAS PARA INTERPONER RECURSO DE REVISIÓN CUANDO EL ACTO RECLAMADO SEA LA RESOLUCIÓN RECAÍDA A UN PROCEDIMIENTO QUE PONE FIN A UNA CONTROVERSIA ENTRE PARTES.- Las autoridades del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial sí están legitimadas para interponer recurso de revisión en contra de las sentencias de amparo indirecto en las que se afecten las resoluciones que emiten, pues tales autoridades son depositarias del interés directo que tiene el Estado, en términos de los artículos 25 y 28 constitucionales, en que se observen y

acaten las normas que regulan la propiedad industrial en nuestro país. Ello, independientemente de que su función sea materialmente jurisdiccional, ya que dichas resoluciones más que resolver un mero conflicto entre partes, tienen la finalidad de salvaguardar el orden público. En efecto, como parte de la administración pública federal, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial tiene encomendadas diversas funciones que lleva a cabo a través de la emisión de actos administrativos, entendiendo por éstos la declaración unilateral de la voluntad de la autoridad administrativa, que crea situaciones jurídicas individuales a través de las cuales busca satisfacer las necesidades de la colectividad. En este sentido, las resoluciones del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que emanan de procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio difieren esencial -y no sólo formalmente- de las resoluciones judiciales que ponen fin a una controversia, ya que el juzgador tiene como fin la imparcialidad y la pronta solución de un conflicto entre partes, mientras que la administración pública federal siempre está motivada por un interés propio consistente en velar por el interés general, lo cual asegura su imparcialidad; de ahí que si el interés de alguna de las partes es el mismo que el de la autoridad, esto no constituye una violación al principio de imparcialidad, sino una mera coincidencia de intereses. (I.13o.A.22 A)

S.J.F. IX Época. T. XIV. 13er. T. C. del 1er. C., julio 2001, p. 1121

PROPIEDAD INDUSTRIAL. EL ARTÍCULO 187 DE LA LEY RELATIVA QUE ESTABLECE LA APLICACIÓN SUPLETORIA DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES EN ESTA MATERIA, HA SIDO DEROGADO TÁCITAMENTE Y LA APLICACIÓN SUPLETORIA DE ESTA NORMA SE HA TRASLADADO A UN PLANO SECUNDARIO, SEGÚN LO REGULADO EN EL ARTÍCULO 2o. DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.- La Ley de la Propiedad Industrial establecía en su artículo 187 la supletoriedad del Código Federal de Procedimientos Civiles a los procedimientos de declaración administrativa seguidos ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial; sin embargo, esta norma ha sido derogada tácitamente por la reforma de abril de dos mil al artículo 1o. de la Ley Federal de

Procedimiento Administrativo, en tanto que esta reforma ha tenido por intención que esta ley sea supletoria a todas las leyes administrativas de la administración pública federal, incluyendo a los actos de autoridad de los organismos descentralizados, como lo son los que realiza el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. (I.13o.A.24 A)

S.J.F. IX Época. T. XIV. 13er. T. C. del 1er. C., julio 2001, p. 1135

REVISIÓN ADMINISTRATIVA. LA REFORMA DE MAYO DE DOS MIL AL ARTÍCULO 83 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, NO ALTERA EL SENTIDO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 139/99 DE LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.- La jurisprudencia 2a./J. 139/99, bajo el rubro "REVISIÓN EN SEDE ADMINISTRATIVA. EL ARTÍCULO 83 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ESTABLECE LA OPCIÓN DE IMPUGNAR LOS ACTOS QUE SE RIGEN POR TAL ORDENAMIENTO A TRAVÉS DE ESE RECURSO O MEDIANTE EL JUICIO SEGUIDO ANTE EL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN.", de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que los gobernados tienen la posibilidad de agotar el recurso de revisión de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, o bien, acudir directamente al juicio de nulidad ante el Tribunal Fiscal de la Federación, ahora Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; ahora bien, de la interpretación literal y del dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados respectiva a la reforma al artículo 83, publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta de mayo de dos mil, se concluye que no alteró la esencia de la interpretación, a la expresión "vías judiciales correspondientes", que utilizó el legislador en el texto original, llegando a la conclusión de que por dicha vía no se podía entender el juicio de amparo, en atención al principio de definitividad y que, realizando una interpretación de la ley que nos ocupa, así como de la Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación, se llegó a la conclusión de que la expresión "vías judiciales correspondientes" debía entenderse referida al Tribunal Fiscal de la

Federación, ahora Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; por su parte, el nuevo artículo utiliza la expresión "o, cuando proceda, intentar la vía jurisdiccional que corresponda", lo que no modifica la interpretación realizada en la tesis, pues en atención al principio de definitividad, la "vía jurisdiccional que corresponda" no puede entenderse jamás como el juicio de amparo. (I.13o.A.19 A)

S.J.F. IX Época. T. XIV. 13er. T. C. del 1er. C., julio 2001, p. 1141

REVISIÓN ADMINISTRATIVA, REGULADA EN EL ARTÍCULO 83 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. NO ACTUALIZA NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DE EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD EXPUESTOS EN LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 115/99 DE LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.- El recurso de revisión previsto en el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo que procede respecto de los actos de la administración pública federal y de autoridad de los organismos descentralizados federales que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente no actualiza ninguna de las hipótesis de excepción al principio de definitividad expuestos en la tesis 2a./J. 115/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque está regulado en una ley formal emanada del Congreso de la Unión, sin que obste a lo anterior que el recurso de revisión no se encuentre establecido en las leyes especiales procedimentales, puesto que la Segunda Sala ha determinado que el recurso puede ser establecido en otra ley, según se desprende del contenido de la jurisprudencia 2a./J. 116/99, bajo el rubro: "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. PUEDEN ESTABLECERSE EN ORDENAMIENTO LEGAL DIVERSO DEL QUE SIRVE DE FUNDAMENTO A LA EMISIÓN DEL ACTO RECLAMADO (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO)."; a través del recurso se puede lograr la nulificación, revocación o modificación del acto administrativo que se ataca, según se desprende del contenido del artículo 91 de la multicitada ley procedimental; además, la suspensión

regulada en la multicitada ley procedimental federal administrativa tampoco exige mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo, según lo ha interpretado la Segunda Sala en la jurisprudencia 2a./J. 82/2000, bajo el rubro: "AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS ADMINISTRATIVOS REGIDOS POR LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. RESULTA IMPROCEDENTE SI NO SE AGOTA PREVIAMENTE EL RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 83 DE DICHA LEY, AL NO EXIGIR ÉSTA MAYORES REQUISITOS QUE LA LEY DE AMPARO PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN.". (I.13o.A.23 A)

S.J.F. IX Época. T. XIV. 13er. T. C. del 1er. C., julio 2001, p. 1142

REVISIÓN FISCAL. EL TÉRMINO PARA SU INTERPOSICIÓN NO SE INTERRUMPE EN LOS DÍAS INHÁBILES PARA LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO, PORQUE DEBE PRESENTARSE POR CONDUCTO DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA.- La suspensión de las labores en los Tribunales Colegiados de Circuito resulta irrelevante para el cómputo del plazo para la interposición del recurso de revisión regulado por el Código Fiscal de la Federación, en virtud de que éste debe interponerse por conducto de la Sala del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que dictó la sentencia; por lo tanto, en el cómputo para determinar la temporalidad del recurso sólo deben descontarse los días inhábiles y aquellos en los que por alguna razón se hubieran suspendido labores en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. (I.13o.A.10 A)

S.J.F. IX Época. T. XIV. 13er. T. C. del 1er. C., julio 2001, p. 1143

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO

COMPROBANTES FISCALES. DEBEN EXPEDIRSE AL MOMENTO MISMO DE OBTENER UN INGRESO DERIVADO DEL PAGO POR ADQUISICIÓN DE BIENES O USO DE SERVICIOS.- En el artículo 29 del Código Fiscal de la Federación, así como en el diverso 58, fracción II, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se establece la obligación a cargo de los contribuyentes de expedir comprobantes fiscales por las actividades que realizan, y aun cuando dichos numerales no precisan literalmente que la expedición se haga al momento mismo de realizar una operación, ello se desprende de una recta interpretación de las citadas normas legales, toda vez que la obligación del contribuyente de expedir comprobantes fiscales nace jurídicamente al momento en que obtiene un ingreso derivado del pago que por adquisición de bienes o uso de servicios realiza un cliente, obligación que también es exigible desde ese momento, pues así lo precisa el primero de los preceptos legales citados, al establecer en su primer párrafo que: "... Las personas que adquieran bienes o usen servicios deberán solicitar el comprobante respectivo.", sin que la ley conceda al contribuyente algún término perentorio para cumplir con esta obligación, lo que permite concluir que los comprobantes fiscales no pueden expedirse con posterioridad al momento en que se efectúan las operaciones respectivas. (VI.1o.A.100 A)

S.J.F. IX Época. T. XIV. 1er. T. C. del 6o. C., julio 2001, p. 1110

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO

CRÉDITO FISCAL. SI SE REVOCA LA AUTORIZACIÓN DE PAGO EN PARCIALIDADES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 66 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, LA AUTORIDAD DEBE FUNDAR Y MOTIVAR DICHA RESOLUCIÓN.- Del contenido del artículo 66 del código tributa-

rio federal, se desprende que la solicitud de pago a plazos, ya sea diferido o en parcialidades, formulada por el contribuyente, podrá ser autorizada por la autoridad recaudadora, hecho lo anterior, tal autoridad deberá, fenecido el término de treinta días a que se refiere el artículo citado, exigir que el contribuyente garantice el interés fiscal; en el caso de que no lo hiciere, requerir el pago del crédito determinado en la solicitud de autorización, debiendo en primer término, revocar la autorización otorgada al particular, y exponer los motivos y fundamentos que la justifiquen, es decir, debe emitir previamente una resolución por escrito en la cual señale los preceptos legales aplicables al caso concreto, así como las razones de su emisión, ya que de lo contrario se dejaría al gobernado en estado de indefensión, al desconocer las causas que originaron la misma, toda vez que la solicitud de pago en parcialidades o la diligencia de requerimiento de pago, no suple en ningún momento la autorización a que se hace referencia en el dispositivo legal en comento. (VI.2o.A.2 A)

S.J.F. IX Época. T. XIV. 2o. T. C. del 6o. C., julio 2001, p. 1114

MULTAS. EL ARTÍCULO 76, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE A PARTIR DEL VEINTE DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS, NO ES VIOLATORIO DEL DIVERSO 22 DE LA CARTA MAGNA.- El concepto de excesividad de las multas que define la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 9/95, sirve de pauta para afirmar que el actual artículo 76, fracción II, vigente a partir del veinte de julio de mil novecientos noventa y dos, concatenado con el diverso 75, ambos del Código Fiscal de la Federación, no es violatorio del artículo 22 constitucional, en virtud de que en aquéllos se establece la imposición de multas entre un límite inferior y un límite superior, así como de manera correlativa, la determinación del ejercicio de la facultad de la autoridad exactora. En efecto, en el mencionado artículo 75 que se encuentra comprendido en el título IV del Código Fiscal de la Federación, denominado “De las infracciones y delitos fiscales”, se fijan las bases generales para que la autoridad fiscal gradúe el quántum de la multa dentro de los extremos previstos por el aludido artículo 76, fracción II, entre otras, la naturaleza de

la infracción, la reincidencia del infractor y la extensión del daño causado al fisco, por lo que resulta inexacto que sobre el particular, el legislador haya dejado a las autoridades fiscales una facultad arbitraria. (VI.2o.A.1 A)

S.J.F. IX Época. T. XIV. 2o. T. C. del 6o. C., julio 2001, p. 1125

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO

AMPARO INDIRECTO. RESULTA PROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN DE UN TRIBUNAL ADMINISTRATIVO QUE RESUELVE UN CONFLICTO COMPETENCIAL CUANDO ENTRAÑA EL TRASLADO DE UN LUGAR A OTRO CON LA EROGACIÓN DE GASTOS, PORQUE CON ELLO SE AFECTAN DERECHOS SUSTANTIVOS.- Si bien es cierto que, en términos generales, una resolución de incompetencia es susceptible de afectar solamente derechos adjetivos o intraprocesales, y que debe ser reclamada en amparo directo, según lo ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversas ejecutorias, no menos lo es que esa regla general tiene como excepciones aquellos casos en que se afectan de manera directa e inmediata derechos sustantivos, como ocurre, por ejemplo, cuando mediante esa resolución se vincula al justiciable a trasladarse de una ciudad a otra, habiendo éste puesto en entredicho la legalidad de esa propia resolución, pues, sin haberse determinado lo conducente, se le obliga a realizar un gasto o erogación en detrimento de su patrimonio, que no podrá recuperar ni aun en el caso de que obtenga resolución favorable, por no regular la ley del acto las figuras de gastos y costas. (VII.1o.A.T.49 A)

S.J.F. IX Época. T. XIV. 1er. T. C. del 7o. C., julio 2001, p. 1105

QUINTA PARTE

- **Ceremonia Inaugural del Segundo Congreso Internacional de Justicia Fiscal y Administrativa**

- **Conferencia Interactiva México-Francia entre el Consejo de Estado francés y el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa**

Ceremonia Inaugural del Segundo Congreso Internacional de Justicia Fiscal y Administrativa

Con motivo del sesenta y cinco aniversario de la promulgación de la Ley de Justicia Fiscal, se celebró el Segundo Congreso Internacional de Justicia Fiscal y Administrativa. La Ceremonia Inaugural se llevó a cabo en el Salón Adolfo López Mateos de la Residencia Oficial de los Pinos, el 23 de agosto de 2001, en la Ciudad de México, Distrito Federal, la cual estuvo a cargo del Licenciado Vicente Fox Quesada, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, quien canceló la estampilla postal, e hizo la declaratoria de inauguración. Asimismo, se escucharon los mensajes de la Presidenta del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Magistrada María Guadalupe Aguirre Soria, del Presidente de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal, Licenciado Augusto Fernández Sagardi, y del Vicepresidente del Consejo de Estado francés, señor Renaud Denoix de Saint Marc.

La Magistrada María Guadalupe Aguirre Soria, le obsequió al Lic. Vicente Fox Quezada la moneda conmemorativa que se acuñó para esa fecha y la obra intitulada "Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. A los LXV años de la Ley de Justicia Fiscal".

Palabras de la Mag. María Guadalupe Aguirre Soria, Presidenta del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa

Señor Presidente de la República,
Licenciado Vicente Fox Quesada.
Monsieur Renaud Denoix de Saint-Marc,
Vicepresidente del Consejo de Estado francés.
Distinguido Presidium.
Señoras y señores:

México es un país, comprometido históricamente por sus luchas libertarias, a desarrollarse en un estado de derecho, entendiéndose éste, como el ejercicio del poder público sometido irrestrictamente al imperio de la ley.

Es en la función administrativa, donde tal compromiso se convierte en necesidad social, ya que la dinámica de la acción gubernamental, puede generar inconformidad en los individuos, cuando consideran que la actuación de la autoridad es irregular y afecta sus derechos.

Para mantener el sano equilibrio entre gobernantes y gobernados, cumpliendo con los principios de legalidad, justicia y seguridad jurídica de nuestra ley fundamental, es necesario un medio ordinario de defensa, especializado, autónomo e independiente, que resuelva en forma imparcial, completa y oportuna, tales diferencias entre los particulares y las autoridades administrativas.

El hoy Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, es la Institución que eligió nuestro país para atender tan delicada función, al desarrollar y prestigiar la jurisdicción contencioso-administrativa.

Resulta así de gran trascendencia y significación, que los actos conmemorativos del 65 aniversario de la expedición de la Ley de Justicia Fiscal, que en 1936 diera vida a este Tribunal, se inicien en la residencia oficial del Poder Ejecutivo, con la inauguración del Segundo Congreso Internacional de Justicia Fiscal y Administrativa por Usted Señor Presidente, que da así, testimonio de su reiterada decisión de gobernar con transparencia y apego a la legalidad. Reciba Señor, nuestro profundo agradecimiento por tan gentil anfitrionía.

El Proyecto de la Ley que diera origen al Tribunal, fue elaborado por tres distinguidos juristas, Antonio Carrillo Flores, Manuel Sánchez Cuén y Alfonso Cortina Gutiérrez, que inspirados en el modelo de justicia administrativa, exitosamente ejercida por el Consejo de Estado francés, confiaron en la madurez de nuestro sistema legal para instalarla, adaptándola a nuestro rico bagaje jurídico, señoreado por el juicio de amparo; a ellos, nuestro más cálido reconocimiento.

La legitimidad es requisito de la titularidad del poder público, la legalidad lo es de su ejercicio. La primera, se garantiza con la instauración plena de la democracia, la segunda con su sometimiento al control jurisdiccional.

En este inicio de siglo, México se enorgullece de la legitimidad de su gobierno surgido por el responsable ejercicio de la democracia y de la garantía de legalidad, que sustentada en su Constitución, se hace verdad por el acatamiento que el Ejecutivo ha asumido, como prioridad de su gobierno.

La justicia administrativa, surgida de la lucha libertaria del pueblo francés contra el absolutismo, se fundó en la división de poderes que por serlo, no acepta someter los actos de la autoridad administrativa a otro poder, creando para ese propósito, el Consejo de Estado, medio especializado que, con autonomía jurídica e independencia del propio Ejecutivo, ejerce jurisdicción sobre sus actos.

La vía adoptada por Francia abrió, para el mundo moderno, el desarrollo del Derecho Administrativo, y la eficacia de su funcionamiento, fue de trascendental

impacto en la estructura jurisdiccional de Europa y América. México la instauró en 1936.

El Tribunal inició sus actividades especializado en materia fiscal, ciertamente la más sensible entre gobernantes y gobernados, que continúa siendo la de mayor interés en sus tareas, sin embargo, la eficacia de su actuación, propició se le fuera confiando la jurisdicción en materias administrativas, primero las relacionadas con lo fiscal y después en una gama mayor, sobre otros actos de autoridad, entre los que destacan el otorgamiento de pensiones, la interpretación de los contratos de obra pública, la aplicación de tratados y convenios en materia de comercio exterior, los relativos a responsabilidades administrativas de los servidores públicos y recientemente la de vía judicial sobre las resoluciones y actos a que se refiere la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; lo que llevó su competencia a prácticamente el 90% de los actos de las autoridades administrativas, como de años atrás, venía siendo un planteamiento de la Academia y el Foro.

La Institución, satisface la exigencia constitucional de un Tribunal de lo Contencioso Administrativo, dotado de plena autonomía para dictar sus fallos, que dirime controversias entre la administración pública federal y los particulares, con normas específicas para su organización, funcionamiento y procedimiento.

Su actuación, asegura a los particulares, que no habrá desviación de la legalidad que no pueda ser corregida, pero también alerta a las estructuras de gobierno, sobre las deficiencias en su desempeño y de la necesidad de depurar sus procedimientos, de ajustar sus criterios de interpretación, o modificar sus fundamentos.

La confianza que ha generado tanto en los justiciables como en la autoridad, se advierte en el volumen creciente de asuntos que se someten a su conocimiento. En el ejercicio de 1999 a 2000 se recibieron 56,323 demandas, y se resolvieron 57,706 juicios.

Es verdad que la justicia no tiene precio, es un bien social intangible, sin embargo, el impacto que en la vida económica de nuestro país tiene la acción del Tribunal, queda de manifiesto en la cuantía de más de ochenta mil millones de pesos de los asuntos ventilados en el citado ejercicio.

Este Órgano Colegiado cumple el compromiso de un Tribunal independiente para resolver las controversias en materia de comercio exterior, requerido en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y a la especialidad fiscal en algún tribunal nacional, exigido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos conocida como Pacto de San José.

A lo largo de los años, se han acendrado sus fortalezas esenciales, el ser un medio ordinario de justicia delegada; la especialidad de su competencia, el profesionalismo y madurez que exige de sus magistrados, su organización descentralizada y nacional que lo hace accesible a toda la población de manera expedita y confiable, coincidiendo en ello con una prioridad del Plan Nacional de Desarrollo para este sexenio; la instrucción de los juicios por sus hoy 99 Magistrados, permite acelerar el procedimiento, y su colegiación en 33 Salas, dan a los actos de juzgamiento, profundidad de análisis, supervisión y responsabilidad compartida; la seguridad de sus criterios jurídicos, se aprecia en la ratificación de sus sentencias por el Poder Judicial en vía de amparo o revisión.

Por su exitosa actuación y amplio reconocimiento social a su desempeño eficiente, e imparcial, ha sido modelo e inspiración de los Tribunales Estatales Administrativos en 20 Entidades de nuestro país y para más de uno en América Latina.

Su autonomía funcional e independencia de juicio que es permanentemente respetada, excluyen la posibilidad de influencia burocrática a lo que coadyuva disponer de su propio presupuesto cuyo responsable ejercicio es supervisado por la Entidad Superior de Fiscalización de la Federación.

Para cumplir con sus tareas utiliza sistemas informáticos que le permiten cada vez más, afrontar las funciones de supervisión y evaluación con mayor seguridad y expeditez, pese a su crecimiento.

La oportunidad de sus resoluciones queda de manifiesto en el que prácticamente no tiene otro rezago que el surgido al rebasar la demanda de sus servicios a la capacidad instalada, lo cual se atiende con la celeridad que permiten sus recursos en relación con los cuales, justo es reconocer, ha habido comprensión tanto del Poder Ejecutivo como del Legislativo.

La actuación de este Tribunal, que media entre las obligaciones del Estado y los derechos de los particulares, plasma sin lugar a dudas, la voluntad de auto limitar los excesos del poder por parte de sus gobernantes y contribuye, a dar seguridad jurídica y confianza, en el desempeño del Gobierno Federal, certidumbre que es un factor de importancia tanto hacia dentro como hacia fuera, sobre todo, en las particulares circunstancias de transformaciones políticas y sociales que la actual administración impulsa, para dar a nuestro país, mejores perspectivas de desarrollo e integración económica, como gestor de una tarea social y material de grandes dimensiones en las que su finalidad de bienestar y eficacia, no se sobreponen a la legalidad.

Estamos celebrando la madurez de un Tribunal que sustentado en la Constitución ha merecido un exitoso desarrollo, una aceptación sin tacha y una confiabilidad de la que no disfruta ningún otro organismo semejante en nuestro país.

No hay Señor Presidente, reclamo social para un cambio en la naturaleza o el rumbo que el Tribunal ha dado a la jurisdicción administrativa y menos aún sobre su honesto funcionamiento y la eficacia jurídica de su participación para consolidar nuestro estado de derecho; en tanto que, en el análisis, realizado con la valiosa intervención de su asesor en Justicia y Seguridad, se considera la pertinencia de fortalecer a la Institución en su independencia, plena jurisdicción e imperio, mayor libertad presupuestal y mejora de las normas que rigen su procedimiento.

Por todos estos antecedentes, hemos organizado el Segundo Congreso Internacional de Justicia Fiscal y Administrativa sobre el tema de la legalidad, para intercambiar experiencias en el desenvolvimiento actual de este principio toral del estado moderno, en tribunales de Francia, Canadá y América Latina con responsabilidades semejantes a las nuestras; cuya inauguración nos hará Usted el honor de declarar.

Señor Presidente, permítame asegurarle, que como desde hace 65 años, el control de la legalidad del Poder Ejecutivo, está confiado a mexicanas y mexicanos comprometidos con la justicia administrativa, para lograr hoy hombro a hombro con Usted, un país en donde la administración pública sea expresión de los más altos valores éticos y jurídicos.

Palabras del Lic. Augusto Fernández Sagardi, Presidente de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal

Ciudadano Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos,
Licenciado Vicente Fox Quesada.
Ciudadana Presidenta del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa,
Magistrada Ma. Guadalupe Aguirre Soria.
Señor Vicepresidente del Consejo de Estado francés,
Señor Renaud Denoix de Saint-Marc.
Respetables Magistradas y Magistrados.
Señoras y señores:

En nombre de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal y del mío propio agradezco la atención de los señores integrantes del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y en particular a su Presidenta Magistrada Ma. Guadalupe Aguirre Soria, por la invitación a participar en esta celebración a fin de dar la visión que el foro, abogados postulantes y académicos, tenemos acerca del Tribunal.

Como abogados que desarrollamos nuestra actividad profesional patrocinando la defensa de los contribuyentes o como aquellos colegas que la realizan representando el interés de la Federación en controversias materia de la competencia del Tribunal, enfocamos nuestra apreciación sobre el servicio de justicia prestado. Somos usuarios de dicho servicio que se presta desde hace 65 años, y a no dudar, estamos satisfechos. Litigar en este Tribunal es entrar en un proceso transparente que va a culminar con una sentencia dictada imparcialmente sin más ánimo que impartir justicia.

El Tribunal es el prestador estatal de los servicios mediante un cuerpo de magistrados los cuales, por regla general, se distinguen por su dedicación, entrega, capacidad y especialización, quienes durante el tiempo señalado han contribuido a la percepción generalizada que tiene la sociedad sobre la honestidad y eficiencia del Tribunal. No se conocen casos de corruptelas manchadoras de su prestigio. Por propia naturaleza la obra humana no está exenta de errores, pero cuando la institución creada sabe corregirlos y estar a la altura del tiempo y las circunstancias, va solidificando en una obra madura difícil de descomponerse. Es el caso del Tribunal en comento. Es una institución republicana sólida y madura; es una de las manifestaciones de la justicia administrativa que han dado buenos resultados.

Constitucionalmente es uno de esos organismos creados por el pueblo mexicano que no pueden ser fácilmente encuadrados en alguno de los tres poderes, a pesar de haber sido creado bajo la égida del Poder Ejecutivo, el cuál quedó, por sucesivas reformas constitucionales, como una creación legislativa con autonomía absoluta para dictar fallos en su propio nombre y no en representación del Ejecutivo, sin ubicación constitucional precisa dentro de alguno de los tres poderes; está en una situación similar a la de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, al Banco de México o el Instituto Federal Electoral.

Desde el punto de vista del Foro, esta imprecisa ubicación constitucional ha tenido trascendencia para impartir justicia sin interferencia política. Sus fallos se han destacado por su imparcialidad y, así como han confirmado la validez de muchos actos de autoridad, también le han ordenado la devolución de millones de pesos indebidamente percibidos por la Federación, han cancelado la determinación de créditos fiscales, han dejado sin efectos actos de autoridades viciados de ilegalidad, y todo ello en un tranquilo fluir de sus procedimientos sin ocasionar conflictos entre poderes ni con la sociedad. ¿Podrá alguien decir que existe intervención del Ejecutivo para influenciar en sus determinaciones? Históricamente ha habido un respeto escrupuloso a la autonomía del Tribunal por parte del titular de ese Poder, a lo que se atribuye el éxito de esta institución republicana; el caso contrario hubiera llevado a su desaparición, o cuando menos a su inutilización por descon-

fianza de la comunidad jurídica, la que habría preferido actuar en las esferas administrativas solicitando o implorando la revocación de actos ilegales de autoridades, con lo que esto lleva implícito en beneficio del autoritarismo y con peligro de la democracia, o acudiendo a los juicios de amparo en peligro mismo de esta institución, máximo producto del genio jurídico mexicano, desviando, por su abrumador número, la atención de los jueces de distrito de su función básica protectora de las garantías individuales hacia problemas de legalidad en materias que no son de su especialidad.

Para significar la confianza de los justiciables en el Tribunal en comento y darle una connotación económica, vale decir que también ha sido un termómetro de la inconformidad fiscal ciudadana; en el año 2000 se encontraban en litigio por concepto de contribuciones, actualización y accesorios, más de 36,000 millones de dólares estadounidenses, 59% del monto estimado de ingresos de la Federación por contribuciones para aquel año, significando que el contribuyente nacional no ha estado de acuerdo con la legalidad de la actuación de la administración tributaria anterior.

Por otra parte, sin perjuicio de la importancia que tiene su nueva competencia en la materia administrativa federal, hoy cuestionada por la Iniciativa de Ley del Ejecutivo donde propone su eliminación, desde nuestro punto de vista, la principal función del Tribunal, dada su competencia y origen, es la de ser el juez natural de la relación jurídica tributaria, o sea, la del vínculo jurídico que une al acreedor, fisco federal con el deudor, contribuyente, para decidir si en efecto aquél tiene la posibilidad legal de constreñir del pago de la deuda tributaria a éste. Esta enunciación tiene un alto grado de implicaciones jurídicas, por un lado el interés público representado por el fisco federal buscando legítimamente recaudar las contribuciones que hagan posible la solución de tantos problemas nacionales y, del otro, un particular obligado a contribuir a tales gastos dentro del marco fijado por las leyes. Este sometimiento de la tributación a la ley marca la diferencia entre los gravámenes impuestos a los pueblos vencidos por un país vencedor; este sometimiento a la ley es un claro exponente del estado de derecho en que vivimos y en el que aspiramos

a seguir viviendo; es una parcela del actuar público donde sí priva dicho estado; el sometimiento a la ley por las partes contendientes es el que explica la existencia de Tribunales como el que hoy nos acoge.

Este Tribunal como juez natural de la relación jurídico-tributaria, tiene varias actividades, la primera, la de ser el controlador de la legalidad en la actividad de la administración tributaria; en efecto, el acreedor es ante todo una autoridad, la que para el ejercicio de sus funciones sólo puede hacer lo que la ley le permite y en la forma en que ésta lo reglamenta. En este primer aspecto, no estamos en presencia de cualquier acreedor, sino de uno que representa los intereses colectivos. La incidencia del fisco recaudador en la esfera jurídica del particular es profunda y grave. La Constitución lo autoriza pero sujetándose a la ley y es aquí en donde un fisco, incluso en el uso legítimo de sus facultades puede llegar a apabullar a un contribuyente. Psicológicamente es abrumador saber que se tiene una auditoría, pero es tranquilizador saber que se tienen medios de defensa en contra de alguna arbitrariedad. El fisco tiene carácter de acreedor pero también de autoridad, simbiosis que hace sea un acreedor severo y poderoso. Pero frente a la ley adquiere su justa dimensión, es sólo un acreedor que debe ajustarse a la ley la cual le marca los límites de su poder. Quien declara su ajuste a ella es el Tribunal, actividad que políticamente suaviza las relaciones estado-particular y jurídicamente pone a las partes en su lugar frente a la ley. Si sus procedimientos de investigación, de determinación o recaudación han sido realizados fuera de ella el Tribunal declarará ilegal su actividad. Es así, un controlador de la actividad autoritaria.

Si tales actos son acordes a la ley entonces entrará a dilucidar si el vínculo jurídico que liga al contribuyente con la autoridad es tal como dice el acreedor. Entonces juzgará los actos del fisco en su carácter de acreedor, el cuál, por sumisión al estado de derecho, estará en el mismo nivel procesal del deudor. Juzgará si la ley ha concedido al acreedor el derecho a percibir el ingreso que reclama, decidiendo ya sobre la existencia de tal vínculo y sus grados o bien la inexistencia del mismo. Esta es la función de juez natural de la relación tributaria, haciéndolo en

consecuencia un garante de la seguridad jurídica de las partes litigantes, fisco y contribuyente. Es su segunda gran actividad.

En los 65 años de existencia del Tribunal se han dictado miles de fallos testigos de lo antes dicho y a los que debe su prestigio. Para medir la efectividad del Tribunal no podemos quedarnos en la manifestación en abstracto de su utilidad para impartir justicia, hay que hacerlo en función de la eficacia de sus fallos. Ha sido su histórica prueba de fuego. Sus fallos han propiciado la modificación de leyes fiscales; han acotado y fijado límites a figuras tributarias como la supletoriedad, la prescripción, la caducidad, la obligación tributaria, el crédito fiscal, entre muchas otras; han venido desarrollando teorías de interpretación de los tratados internacionales; han desarrollado una doctrina en materia de infracciones tributarias que permite a los estudiosos del derecho analizar hasta qué punto los principios de derecho penal le son aplicables. Han sido, además, aportaciones útiles para la doctrina tributaria haciendo del Tribunal, junto con las universidades, el recinto donde se encuentran las principales fuentes del conocimiento jurídico de la materia.

Destaca su actuación como juzgador severo de las facultades ejercidas por las autoridades al determinar con base presunta las contribuciones; facultades legítimamente otorgadas para combatir las maniobras evasivas o fraudulentas de los contribuyentes, pero como la práctica enseña, utilizadas en forma indiscriminada, aun contra la comisión de meros errores o desórdenes administrativos, impactando severamente en la esfera jurídica del particular, por lo que en sus fallos ha sido estricto vigilante del cumplimiento de cada una de las reglas que la ley contiene para poder ejercer válidamente tales enormes facultades. Esta enorme facultad otorgada a la autoridad acreedora, si no fuera por la existencia del Tribunal, en un desborde autoritario podría lastimar gravemente los derechos del ciudadano.

Es en estos puntos donde se aprecia en forma inigualable la principal virtud de los integrantes del Tribunal. Su especialidad en la materia tributaria. Ésta también les permitirá enfrentar los nuevos retos jurídicos que anticipan la modernidad y la globalización económica a causa de los cuales nuestro sistema jurídico sufre

y absorbe las influencias de sistemas extranjeros ajenos a nuestras concepciones clásicas provocadoras de antinomias entre economía y derecho, entre eficientismo y justicia.

Retos como los que vemos en los tratados de libre comercio, por ejemplo, cuando dan pauta al nacimiento de regulaciones, no emitidas por los cuerpos legislativos, para verificar el origen de las mercancías y sostener con ellas la aplicación extraterritorial de leyes de procedimiento mexicano en territorio extranjero durante el proceso de la auditoría.

En materia de comercio exterior, como ejemplo de reto encontramos las aplicaciones erga omnes de las sentencias dictadas respecto de cuotas compensatorias a quienes no participaron en el proceso de su determinación.

Retos en los tratados para evitar la doble tributación, como la serie de beneficios otorgados a residentes extranjeros, no concedidos a los nacionales, como el ejemplo de la retención menor en el pago de dividendos.

Así también en los precios de transferencia, donde la estimación efectuada por las autoridades siguiendo las normas legales, pasa por sobre el precio pactado contractualmente cuando existen partes relacionadas.

Retos jurídicos en el combate a las inversiones en paraísos fiscales, donde, por ejemplo, existen normas que trascienden la personalidad jurídica de las sociedades nacionales para obligarlas a acumular ingresos obtenidos por terceros, con personalidad jurídica diferente a la de los socios, mediante la calificación de “entes” o “entidades”.

En los juicios en materias de comercio exterior o de precios de transferencia, retos a enfrentar en la valoración de las pruebas dada la confidencialidad de información que contradice los derechos de defensa contra el que se utiliza.

Estos temas van a traer controversias legales interesantísimas que los Magistrados del Tribunal van a resolver. Ayudarán a crear la doctrina del moderno derecho financiero.

Por otra parte, ha sido de aplaudir por parte del foro la decisión del legislador de ampliar el procedimiento contencioso, del objetivo al subjetivo, porque con ello se abre un panorama procesal importantísimo en defensa de los derechos de los contribuyentes representando un nuevo reto al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. El reconocer derechos subjetivos a los particulares frente a la autoridad cierra el ciclo acreedor-deudor porque éste puede oponer nuevas defensas a la acción de cobro del fisco, como en cualquier relación de derecho. Me explico. Si el fisco tiene derecho al cobro de una contribución, su pretensión es legítima y el acto de autoridad es totalmente legal. Pero si a la vez el contribuyente tiene derechos de crédito a cargo del fisco, como sería un saldo a favor, o incluso derechos que ejercer como amortización de pérdidas de ejercicios anteriores que disminuyen la base gravable, el Tribunal debe entrar a este estudio reconociendo el derecho subjetivo del actor convirtiéndose en un Tribunal con una jurisdicción ampliada.

Lo antes dicho prueba nuestra afirmación de estar frente a un Tribunal moderno que ha sabido ajustarse a los tiempos y circunstancias cambiantes para prestar adecuadamente el servicio de impartición de justicia. Es importante mencionar lo anterior, porque en estos tiempos de favorables cambios políticos en nuestro país, el Tribunal podrá conservar más fácilmente su posición históricamente apolítica y rigurosamente legal.

Esta institución republicana fue creada en 1936 y según la Exposición de Motivos de la Ley que le dio vida lo fue para prestigiar en México una institución como la de la justicia administrativa mediante la defensa y garantía del interés público y de los derechos e intereses legítimos de los particulares. Hoy, 65 años después, la comunidad jurídica mexicana puede afirmar que el fin para el cual fue creado ha sido ampliamente cumplido; afirmamos estar en presencia de un joven de

65 años que aún tiene mucho por dar; nació como una promesa hoy cumplida, y por los retos futuros a enfrentar, es una promesa renovada que seguramente se cumplirá otra vez.

ENHORABUENA Y ÉXITOS EN SU CONGRESO.

Palabras del Sr. Renaud Denoix de Saint-Marc, Vicepresidente del Consejo de Estado de Francia

Señor Presidente de los Estados Unidos Mexicanos

Me siento muy honrado al tomar la palabra ante Usted en esta ceremonia que inaugura el Segundo Congreso Internacional de Justicia Fiscal y Administrativa, organizado en ocasión del sesenta y cinco aniversario de la Ley de Justicia Fiscal.

De una manera más general, mis colegas y yo nos sentimos emocionados por la recepción que nos ha sido reservada en México y por la hospitalidad calurosa que nos prodiga el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Una primera razón del calor de este recibimiento y del honor que me concierne puede encontrarse en la antigüedad y la riqueza de las relaciones establecidas entre México y mi país en el campo del derecho y de la administración pública. Entre las universidades francesas y las universidades mexicanas se ha escrito una larga historia de relaciones estrechas y fructíferas. Me complace, sin embargo, evocar particularmente, en mi calidad de Vicepresidente del Consejo de Estado y de Presidente del Consejo de Administración del Instituto Internacional de Administración Pública, las iniciativas que han sido tomadas por estas instituciones. Como Usted sabe, nuestro Instituto Internacional de Administración Pública y el Instituto Nacional de Administración Pública de México han establecido entre ellos relaciones casi fraternales y la institución francesa ha contribuido a la formación de numerosos cuadros de la administración mexicana. La sección mexicana de antiguos alumnos del IIAP es una de las más numerosas y activas.

Tratándose de las relaciones del Consejo de Estado con los altos magistrados y responsables administrativos de su país, me complazco en evocar la participación de mis colegas en diversos coloquios, seminarios y congresos organizados

en México en el curso de los últimos años, el recibimiento en el Consejo de Estado de cuatro miembros de la Suprema Corte de México, la participación de una importante delegación mexicana en las manifestaciones organizadas para celebrar el bicentenario del Consejo de Estado, y, por supuesto, el convenio de colaboración entre el INAP y el Tribunal Fiscal de la Federación, por una parte, y el Consejo de Estado, por la otra, firmado aquí mismo en septiembre de 1999. Este convenio constituye, a partir de ahora, el marco de intercambios de experiencias, de información y de documentación, de los seminarios organizados conjuntamente sobre temas de interés común y de programas de formación de magistrados.

Es entonces sin duda, en parte, a causa de estos antiguos lazos, confiables y fructíferos que se me ha dado la palabra esta mañana.

Pero existe, posiblemente, en esta designación una segunda razón que se debe al lugar que ocupa la jurisdicción administrativa y, principalmente, el Consejo de Estado en las instituciones de mi país.

Francia está acostumbrada a la existencia de dos órdenes de jurisdicción. Esta dualidad tiene sus fundamentos constitucionales; pero también ha adquirido una legitimación histórica irrefutable y benéfica de la confianza tanto de los ciudadanos como de las colectividades públicas. La jurisdicción administrativa francesa extiende sus raíces profundamente en nuestra historia, pues conforme y a medida que se constituyó el Estado francés, en el curso de los siglos quince, dieciséis y diecisiete, ha desenvuelto una concepción particular de su papel y de su lugar. Haciéndose cargo de los intereses de la sociedad, el Estado dispone, a este título, de prerrogativas de poder público desconocidas de los particulares. Y para equilibrar sus relaciones desiguales entre el Estado y las personas privadas, para conciliar el interés general y los derechos individuales, un juez particular se impone poco a poco, esencialmente bajo la forma del Consejo de Estado, cuyo papel jurisdiccional, reafirmado en la Constitución del Año VIII de la Revolución francesa, hace más de doscientos años, nunca ha sido, desde entonces, replanteado. El progreso de la sociedad y el desarrollo de los derechos y las libertades individuales y colectivas

han suscitado, desde entonces, la creación de tribunales administrativos regionales en 1953, posteriormente la creación de cortes administrativas de apelación, en 1987, sometidas al control de casación del Consejo de Estado.

Los jueces de primera instancia y de apelación son, al igual que los magistrados, protegidos tanto en su carrera como en el ejercicio de sus funciones por garantías equivalentes a las de los magistrados del orden judicial, beneficiándose de la misma independencia respecto del poder político. En cuanto al Consejo de Estado, es en la antigüedad de sus tradiciones, no sin un legítimo orgullo, que encuentra el fundamento de la independencia y de la imparcialidad de sus miembros.

Nuestro país está vinculado a su orden de jurisdicciones administrativas. Pero si, habida cuenta, la jurisdicción administrativa francesa puede ser vista como el modelo más acabado, no constituye una excepción. Cerca de una centena de Estados alrededor del mundo comparten con Francia el modo de repartición de los asuntos contenciosos, comenzando por once de nuestros catorce socios de la Unión Europea. En todos los continentes -comenzando por Latinoamérica- encontramos jurisdicciones administrativas y sabemos que el futuro nos reserva la satisfacción de presenciar el nacimiento de nuevas jurisdicciones de esta naturaleza, en particular en los Estados de Europa Central y Oriental, pero también en Latinoamérica, en razón de la iniciativa tomada, en Argentina, por la provincia de Buenos Aires, y del interés que han mostrado por esta institución Panamá, Venezuela y Chile.

Es por ello, Señor Presidente, que el Consejo de Estado se siente particularmente feliz de dedicar, hoy, al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, un caluroso mensaje de felicitación en ocasión de su sexagésimo quinto aniversario, así como votos fervientes de larga vida y prosperidad al servicio del Estado de Derecho.

Palabras del Lic. Vicente Fox Quesada, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos

Muy buenos días jóvenes. Bienvenidas, bienvenidos a esta su casa, Los Pinos. Es un honor para nosotros tenerlos aquí. Espero que tengan muchísimo éxito en este Congreso tan importante.

Bienvenidos y bienvenidas quienes vienen de otros países y que asisten también a este Congreso. Esperamos que tengan una muy grata estancia aquí, en nuestro país.

He escuchado, con gran atención, las palabras que aquí se han dicho. Coincido plenamente en la importancia que tiene para un gobierno democrático, el funcionamiento efectivo de sus instancias de justicia. Gracias a éstas, se garantiza el principio de legalidad, que es fundamental para el Estado de Derecho.

Ojalá que las reflexiones que hoy ustedes inician en Guanajuato y que congregan a especialistas de Canadá, Colombia, Costa Rica, Francia, México, también tengan eco en la formación de una cultura fiscal, que valore el impacto que tiene para el desarrollo y el pago justo y oportuno de impuestos.

Sólo con una adecuada recaudación de ingresos y con un manejo transparente y honesto del erario público, los gobiernos podemos cumplir con la esperanza, con las demandas de millones -en nuestro caso, millones- de marginados que también están demandando justicia, que también quieren ser incluidos en el proceso de desarrollo económico y, sobre todo, de desarrollo humano; que están demandando justicia para contar con salud, con escuela, con vivienda y con mejores oportunidades.

El cambio por el que votó México, es también para compensar la desigualdad y erradicar la injusticia.

Hoy -para gobernar- tenemos que encontrar el punto más eficaz de asociación entre iniciativa individual y acción gubernamental. Al final, somos socios en la tarea del desarrollo sustentable.

Por eso es tan importante el papel que juegan los órganos de justicia fiscal y administrativa. Ellos median entre el Estado y los derechos de los particulares en un tema tan sensible, esencial y estratégico para la vida de las naciones, como es el pago de impuestos.

Ciertamente la potestad tributaria que tiene el Estado para resolver necesidades, pero también es el instrumento que le permite, con un manejo honesto y responsable, distribuir la riqueza y sobre todo, impulsar el progreso de una nación.

Un gobierno mal pertrechado y siempre carente de lo necesario, puede resultar sumamente costoso para el destino y el futuro de nuestros hijos.

Necesitamos cuidar de la seguridad, atacar la pobreza, impulsar el crecimiento, alentar la iniciativa de emprendedores y emprendedoras. Todo eso, amigas y amigos, representan importantes, ineludibles responsabilidades del Estado, pero también son responsabilidades de la sociedad.

No aceptamos que exista oposición entre Estado eficaz y sociedad civil participativa. Ahora los espacios de la sociedad se extienden cada vez más, mientras que los del Estado se perfeccionan y se hacen más eficientes para servirla.

Si queremos cumplir nuestras metas de crecimiento y atender las necesidades de la población, tanto la acción del Gobierno como de los particulares deben ir de la mano y además, contar con los medios para alcanzarlas.

Por eso el gran objetivo de este Gobierno es hacer de la justicia, el eje de las relaciones entre los miembros de la sociedad. La única manera de lograrlo es consolidando un Estado y una sociedad participativa, igualmente eficaces, igualmente responsables.

Nosotros concebimos la acción fiscal como un solo proceso que incluye, tanto el pago de impuestos por parte de los causantes, como la aplicación de estos recursos. El dinero es de todos, y manejado con honestidad, transparencia y eficiencia, debe regresar a todos.

Por ello estamos transformando al Gobierno en una palanca eficiente, para que cada persona tenga las mismas oportunidades. Nuestra lucha es de todos los días, para que desde antes de nacer los mexicanos y mexicanas sientan y vivan un ambiente de seguridad integral, una atención médica oportuna, con escuelas y maestros que impulsen la inteligencia, capacidades y las habilidades de chiquillos y chiquillas, ese ambiente de seguridad, debe acompañar siempre, a lo largo de su vida, a cada mexicana y a cada mexicano, para que pueda vivir cada etapa con certeza.

La pobreza debilita el alma de la Nación y mata el impulso de las personas, es igual con la injusticia y la falta de equidad.

Si la abatimos estaremos dando un paso, un gran paso hacia adelante para hacer de México el país que queremos.

Para construir una sociedad justa, necesitamos del pilar de la legalidad. Pero también hay otros soportes que son determinantes, como el crecimiento del empleo, la educación y la lucha por una mejor calidad de vida.

Por esta razón, estamos impulsando una política con rostro humano, que atienda de manera prioritaria a los marginados, a los pobres, a los indígenas y a los grupos vulnerables.

Amigas y amigos fiscalistas;
Amigas y amigos de este Tribunal:

¡Qué bueno que ustedes son testigos de los avances que México ha experimentado en el ámbito de la justicia fiscal y administrativa!

Creo que es muy importante conocer la experiencia, como ya nos la han relatado de otros países, como es el caso de Francia, que tienen una cultura fiscal y de justicia muy avanzada, cuya carga fiscal es de más del 20 por ciento del Producto Interno Bruto y que en muchos casos y en diversos países alcanza niveles del 40 por ciento de ese Producto Interno Bruto.

A diferencia de otros países, como es el caso de México, donde apenas superamos el 10 por ciento del Producto Interno Bruto como ingreso fiscal, uno de los más bajos y débiles a nivel mundial.

Los felicito mucho por este esfuerzo que habrán de realizar, por los conocimientos e ideas que habrán de aportar y que servirán para la formación de una cultura fiscal que combine costos y procedimientos con la justicia, como valor central de todas sus reflexiones y de todas sus acciones.

Bienvenidos nuevamente a México y mucho éxito en este Congreso. Y si me permiten y se ponen de pie, vamos a proceder a hacer la declaratoria inaugural.

Distinguidos acompañantes:

Me es muy grato dirigirme a todas y a todos ustedes hoy, jueves 23 de agosto del año 2001, para declarar formalmente inaugurado el Segundo Congreso Internacional de Justicia Fiscal y Administrativa, deseando que alcancen los objetivos que se han trazado, mucho éxito.

Conferencia Interactiva México-Francia

Primer encuentro interactivo a distancia entre el Consejo de Estado francés y el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, celebrado el 5 de septiembre de 2001, con el apoyo del Instituto Nacional de Administración Pública (México) y el Instituto Internacional de Administración Pública (Francia), en el marco de los festejos del 65 aniversario de la expedición de la Ley de Justicia Fiscal; donde se trataron los temas 1.- "La función jurisdiccional -Sentencias del juez administrativo y su cumplimiento" y 2.- "El funcionamiento interno del Tribunal -El Sistema de la Carrera Jurisdiccional-"; con la participación de las siguientes personalidades:

Desde México:

Mag. Ma. Guadalupe Aguirre Soria
Presidenta del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa

Mag. Luis Carballo Balvanera
Magistrado de Sala Superior del Tribunal Federal
de Justicia Fiscal y Administrativa

Mag. Luis Malpica de Lamadrid
Magistrado de Sala Superior del Tribunal Federal
de Justicia Fiscal y Administrativa

Lic. Nestor Fernández Verti
Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional de Administración Pública

Desde Francia:

Sra. Marie-France Christophe Tchakaloff
Directora de Investigación y Publicaciones del Instituto
Internacional de Administración Pública

Sr. Michel Coat
Presidente del Tribunal Administrativo de Rennes

Sr. Jean Marie Guittet
Primer Consejero del Tribunal Administrativo de Rennes

Presentación de la Conferencia Interactiva del Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional de Administración Pública Lic. Nestor Fernández Verti

En el marco del Programa de la Administración Pública en México y en Francia, Encuentros Interactivos a Distancia, que han convenido llevar a cabo el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) de México y el Instituto Internacional de Administración Pública, (IIAP) en París, Francia, en esta ocasión se llevará a cabo la cuarta videoconferencia con el tema "Contencioso Administrativo en México y Francia", con la participación del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa de México y el Consejo de Estado de Francia, representado por el Tribunal Administrativo de Rennes.

Nos acompañan en el presidium la Magistrada María Guadalupe Aguirre Soria Presidenta, del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y los Magistrados Luis Carvallo Balvanera y Luis Malpica de la Madrid, ambos Magistrados de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa de México. Así mismo me es muy grato destacar la presencia en una sala adjunta que tenemos a este estudio, la presencia del Señor Philippe Renier, quien asiste en representación de la Embajada de Francia en nuestro país. Nos complace también informarles a ustedes que esta videoconferencia, a través de transmisión vía satélite, está siendo presenciada en las 33 Salas Regionales del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que funcionan en nuestro país y las 17 regiones que comprenden a toda la República Mexicana, también es recibida por 25 Institutos Estatales de Administración Pública que constituyen la red integrada de Institutos de Administración Pública de nuestro país.

A continuación me es muy grato ceder la palabra a la Magistrada María Guadalupe Aguirre Soria Presidenta del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa de México. La Magistrada Aguirre ha tenido los siguientes cargos en el Poder Legislativo: ha sido Diputada por la XLVII Legislatura del Congreso Federal,

en el año 1967-1970; ha sido integrante de la Primera Comisión Dictaminadora del Colegio Electoral; Presidenta de la Comisión de Bienes y Recursos Nacionales; miembro de la Primera Comisión de Puntos Constitucionales; Prosecretaria de la Cámara; Secretaria de la Comisión Permanente y Vicepresidente de la Cámara. En la actividad jurisdiccional de 1971 a la fecha, la Magistrada ha sido Presidenta de la Junta Especial 7 de Conciliación y Arbitraje en la Junta Local del Distrito Federal; ha sido también Magistrada fundadora del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal e integrante de su Tercera Sala; en el Tribunal Fiscal de la Federación inició en 1979 como Magistrada Supernumeraria por 3 años, en 1982 fue nombrada Magistrada Regional y en 1991 de la Sala Superior, designada nuevamente en 1997, integrante de la Segunda Sección, la cual presidió en el año 1998, electa Presidenta del Tribunal por el período 2000-2001. La Magistrada ha participado en diversos eventos de carácter internacional y ha realizado una nutrida actividad política y académica, con ustedes la Magistrada María Guadalupe Aguirre Soria.

Palabras de la Magistrada María Guadalupe Aguirre Soria, Presidenta del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa

Es sumamente grato para el Tribunal que presido y para mí, expresar a todos ustedes franceses y mexicanos, participantes y audiencia, el más cálido saludo, desde las extraordinarias instalaciones del Instituto Nacional de Administración Pública, con motivo de esta primera conferencia interactiva entre nosotros y el Consejo de Estado.

El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, inscribe este evento, como uno de los más importantes actos conmemorativos de su 65 aniversario. Trece lustros ha, fue creada nuestra Institución para desarrollar y prestigiar en México la Justicia Administrativa inspirada en esa especial forma de jurisdicción, nacida en Francia.

La relación con el Consejo de Estado francés, se enraíza así, en la historia de nuestro origen, y se mantiene por el contacto directo de ambas Instituciones, que como reflejo de su identificación concretaron, con la invaluable participación del I.N.A.P., un acuerdo de colaboración, materializado ya en un Seminario sobre la estructura y funcionamiento de ambos organismos; en la brillante participación de su Vicepresidente, Monsieur Renaud Denoix de Saint Marc en el Segundo Congreso Internacional de Justicia Fiscal y Administrativa efectuado pocos días atrás, en la histórica ciudad de Guanajuato y hoy, con esta conferencia, que utilizando medios electrónicos, enlaza virtualmente al personal profesional del Consejo de Estado francés con el de nuestro Tribunal en toda la república, evento al que invitamos a los Tribunales Administrativos Estatales, con el auxilio de los centros foráneos del Instituto Nacional de Administración Pública y de nuestras Salas Regionales.

Esta época de medios cibernéticos, ha permitido el acercamiento material y directo, para cumplir con nuestros propósitos de intercambio, ahora sobre la forma-

ción y desarrollo de nuestros recursos humanos y sobre la alta función que dentro del contencioso administrativo corresponde a sus jueces, más adelante podremos hacerlo sobre el análisis de variados temas jurídicos, lo que seguramente enriquecerá nuestro conocimiento y coadyuvarán a un mejor desenvolvimiento de lo contencioso administrativo en nuestro país.

Así, México abrevará de la fuente universal de la justicia administrativa generada en el Consejo de Estado francés, y Francia, conocerá más sobre la expresión de la jurisdicción administrativa, en un joven sistema jurídico, que la adaptó según sus realidades políticas y económicas en su decidida determinación de consolidar su estado de derecho.

La información puntual es indudablemente, en este mundo global, el mejor instrumento del desarrollo integral de los individuos y de sus instituciones, confío en que esta novedosa forma de intercambio intensifique nuestro mutuo conocimiento y colaboración y reditúe a nuestra justicia administrativa valiosos resultados.

Palabras de la señora Marie-France Christophe Tchakaloff, Directora de Investigación y Publicaciones del Instituto Internacional de Investigación Pública

Muy Buenos días México,

Saludo a todos los expositores de nuestra cuarta conferencia IIAP, INAP y en particular al presidente José Natividad González Parás, y a todas las personas del INAP.

El tema de hoy el contencioso administrativo, tiene en Francia la mayor importancia, a lo menos por dos razones, primero, la importancia del Derecho Administrativo explica el desarrollo del contencioso administrativo, segundo, esta rama del derecho es esencialmente jurisprudencial.

Durante la Revolución de 1789, la desconfianza hacía los organismos encargados de administrar justicia en la monarquía anterior, condujo a separar las funciones judiciales de las funciones administrativas, separación elevada a categoría constitucional y que originó la dualidad jurisdiccional muy importante en Francia.

Hay en Francia dos ordenes jurisdiccionales: la justicia ordinaria encabezada por la Corte de Casación y la justicia administrativa, encabezada por el Consejo de Estado (Conseil d'État). El Consejo de Estado, ha perdido la cualidad de Juez de Derecho Administrativo común, en primera y última instancia en 1954. Este papel de Juez de Derecho Común pasó a los Tribunales administrativos creados ya. Frente al flujo creciente del contencioso, el Consejo de Estado fue descargado, a su demanda, hay que decirlo, de su competencia de apelación, función dada a las nuevas jurisdicciones creadas, las Cortes Administrativas de Apelación, es decir, que el Consejo de Estado se transforma en Juez, de la casi totalidad de los fallos pronunciados por los Tribunales Administrativos.

Para hablar solamente ahora de la competencia general, no hablaré de la competencia específica, esta competencia general para los contenciosos los más variados, empieza por los Tribunales Administrativos, siguen las Cortes Administrativas de Apelación y finalmente en la cabeza hay el Consejo de Estado, mejor dicho, el Juez de Casación, también es el unificador de Jurisprudencia. Pero en fin hay que decir que en Francia, mejor dicho, en todos los países de la Comunidad Europea, tenemos que destacar y subrayar, que hoy día, el contencioso del Derecho Administrativo Francés y de los otros países, entonces, incorpora más y más el Derecho Europeo.

Ahora permítanme presentar a las personalidades Francesas que estan aquí, primero el presidente Michel Coat, que ha sido Presidente del Tribunal Administrativo de Rennes, provincia de Bretaña, durante 13 años, fue alumno de la Escuela Nacional de Administración, que se llama como lo saben el ENA, tiene una experiencia internacional amplia, ha hecho misiones en Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay y Brasil, como en África, fue experto de las Naciones Unidas y sobre todo fue Juez Internacional en el Tribunal Superior Electoral en Mozambique. Luego hablará el señor Jean Marie Guittet, que es primer Consejero al Tribunal Administrativo de Rennes, también en Bretaña, y su especialidad radica especialmente en la resolución de los contenciosos vinculados con los contratos públicos, especialmente compras y obras públicas, concesiones y delegaciones de servicios públicos; y en fin para concluir, si tenemos tiempo, hablará el señor Jean François Thiollier, el nuevo Director de las Relaciones Exteriores. Gracias.

Presentación de la conferencia del Magistrado Luis Carballo Balvanera por el Lic. Nestor Fernández Verti

Muchas gracias a nuestra amiga Marie-France Chirstophe Tchakaloff. Queremos ahora solicitarle su intervención al Magistrado Luis Carballo Balvanera, de quién daré alguna síntesis de sus antecedentes curriculares: el Magistrado Carballo, es Magistrado de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en nuestro país, cargo en el que fue designado, primero en 1981 y en una segunda ocasión a partir de febrero de 1996, ha sido electo Presidente de la Segunda Sección en 1997, y Presidente del propio Tribunal por el bienio de 1998-1999. En la Administración Pública, el Magistrado Carballo desempeñó diversos cargos entre los que destaco: Tercer Subprocurador Fiscal de la Federación en materia de Legislación y Consulta, Subdirector General Jurídico y de Fiscalización del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores. Es profesor definitivo por oposición de la materia de Derecho Fiscal en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde también imparte la cátedra a nivel de licenciatura y de posgrado; es Presidente del Colegio Nacional de Profesores e Investigadores de Derecho Fiscal y Finanzas Públicas durante los períodos de 91 a 94, y por el bienio 2000-2002, ha escrito diversos ensayos y estudios en las materias fiscal, financiera, administrativa y electoral, varios de los cuales aparecen incluidos en libros, revistas y publicaciones especializadas. Tenemos entonces la intervención ahora del Magistrado Luis Carballo Balvanera.

Mag. Luis Carballo Balvanera

La Sentencia y su Cumplimiento

1.- Agradecimientos

Muy buenos días a todos los televidentes de nuestro país y en particular a los miembros de las Salas Regionales Foráneas del Tribunal.

Muy buenas tardes a nuestros apreciados interlocutores y a la video audiencia de la siempre admirada República Francesa.

Es muy grato dirigirnos a todos ustedes con motivo de este memorable encuentro.

Mis primeras palabras son de agradecimiento a la señora Presidenta de nuestro Tribunal y a mis compañeros Magistrados de la Sala Superior por la oportunidad que me brindan de participar en este primer intercambio, en esta primera conferencia interactiva por vía satelital que nos hermana.

Aprovecho asimismo la ocasión para subrayar que con este encuentro singular e inédito, se renuevan y vigorizan las siempre respetuosas relaciones entre nuestro Tribunal y el Consejo de Estado, bajo los auspicios del Instituto Nacional de Administración Pública y el Instituto Internacional de Administración Pública, conmemorando así, el 65 aniversario del Tribunal mexicano y soportado, además, en el acuerdo que ambas instituciones jurisdiccionales celebramos, en el mes de septiembre de 1999.

2.- La Sentencia

Entrando al primer tema señalado en este Programa, conviene decir que la sentencia, como acto culminante del proceso, sintetiza la naturaleza y características de las pretensiones deducidas por las partes, definiendo al propio tiempo el grado de control que el Tribunal ejerce sobre los actos administrativos impugnados.

Reconocida por nuestra Constitución como una de las garantías individuales más preciadas, la de legalidad de toda decisión o acto de autoridad, proyecta su protección, singularmente sobre de todos aquellos que provienen de la Administración Pública.

Así dispone el artículo 16 Constitucional, que nadie puede ser molestado en sus papeles, propiedades, posesiones o derechos sino por mandamiento escrito, dictado por autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.

La fórmula constitucional antes descrita, no tiene el mínimo desperdicio y en cada concepto empleado esparce sus diferentes ámbitos de protección que, por lo demás, son plenamente coincidentes a los moldes clásicos experimentados en otros ámbitos y con mayor profundidad por la doctrina jurisprudencial del contencioso administrativo francés.

De otra parte, es oportuno recordar, que nuestro país se encuentra constituido políticamente como una república federal, por lo que el control que nuestro Tribunal ejerce se concentra ante la Administración Pública Federal.

Los órdenes estatal y municipal son competencia, en su caso, de tribunales de lo contencioso administrativo locales, si bien, sometidos todos al primado de la garantía de legalidad antes mencionada.

El tercer elemento normativo que debemos mencionar es la presencia del juicio de amparo como instrumento de control constitucional de todos los actos del poder público que alcanza, consecuentemente, a los que provienen de la jurisdicción administrativa, sea ésta federal o local. En otros términos: la sentencia que emite nuestro Tribunal queda sujeta al examen de su constitucionalidad, si fue indebidamente interpretada o aplicada la ley, a juicio del particular administrado que pudiere resultar afectado por aquélla.

En atención al principio de igualdad procesal, la autoridad administrativa puede impugnar la propia sentencia que le sea adversa, interponiendo un recurso denominado de revisión que debe resolver el mismo órgano del Poder Judicial de la Federación competente para resolver el amparo intentado por el particular.

Precisados estos elementos, nos encontramos en aptitud de contestar la pregunta relativa a cuáles son los actos administrativos sujetos a control de legalidad del Tribunal, a través de sus sentencias.

No contamos con una regla general de procedencia del juicio contencioso administrativo federal. Nuestro Tribunal ha evolucionado paulatinamente. Hace 65 años surgió con competencia limitada a los asuntos fiscales; debió a ello su nombre original.

A raíz de la expedición de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo en 1995 y con la consecuente adecuación a nuestra competencia, el Tribunal la ha ampliado a todos los asuntos regidos por dicha Ley, de donde se ha derivado la necesidad de modificar su denominación, enfatizando en ella sus raíces con la expresión Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Es por ello que la competencia del Tribunal comprende en la actualidad:

1º.- Todos los asuntos fiscales, incluidos aquellos en los que se deba aplicar un tratado o convenio contributivo;

2º.- Los asuntos fiscales de la seguridad social, es decir, por la liquidación y cobro de cuotas obrero-patronales y aportaciones a la vivienda obrera.

3º.- El régimen de pensiones de los trabajadores al servicio del Estado, incluidos los militares.

4º.- Las multas administrativas federales.

5º.- El régimen disciplinario y de responsabilidades de los servidores públicos federales.

6º.- La interpretación y cumplimiento de los contratos de obra pública celebrados por la administración centralizada.

7º.- Los requerimientos de pago de fianzas.

8º.- Los asuntos de comercio exterior.

9º.- Los demás asuntos administrativos regidos por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

10º.- Los recursos administrativos resueltos en las materias anteriores.

Los elementos de control de la legalidad que ejerce el Tribunal a través de sus sentencias, derivan de la garantía de legalidad prevista por el artículo 16 Constitucional antes mencionado y que, como hemos dicho, son plenamente coincidentes con los que rigen en el contencioso francés del que somos seguidores desde la Ley de Justicia Fiscal de 27 de agosto de 1936 que instituyó al propio Tribunal hace 65 años.

En efecto, el artículo 56 de dicha Ley estableció los cuatro supuestos clásicos en que se manifiestan las causas de anulación de los actos administrativos. Los dos primeros referidos a los elementos de control externo de dichos actos, como son la incompetencia y los vicios formales de la resolución o del procedimiento del que emanó. Los dos segundos relativos al control interno de la resolución impugnada, sea por su contenido, motivación o fin.

El texto del actual artículo 238 del Código Fiscal de la Federación ha perfeccionado la fórmula original, pues de las cuatro causales originarias de ilegalidad, ha identificado una más con características propias, además de que:

1º.- Distinguió con precisión la omisión de requisitos formales del acto impugnado, dentro de los que incluyó la ausencia absoluta de fundamentación y motivación, frente de los vicios del procedimiento, condicionando en ambos casos, a que se afecten las defensas del particular y se trascienda al sentido de la resolución impugnada.

2º.- Perfeccionó el control interno de la resolución impugnada respecto del contenido y de la fundamentación y motivación, al describir con mayor precisión la secuencia lógica del análisis de los hechos comprobados, su ausencia o defectuosa apreciación, o bien su incorrecta adecuación en la hipótesis abstracta invocada por la autoridad y de la cual, ésta, hizo derivar determinadas consecuencias jurídicas.

3º.- Finalmente, amplió la cobertura del control sobre el fin de las facultades legalmente conferidas a la administración, desde la imposición de sanciones hasta el concepto genérico de facultades discrecionales.

De otra parte, la eficacia del control ejercido por el Tribunal, a través de su sentencia, es apreciado desde los ángulos del contenido y alcance de sus efectos y de los instrumentos y sobre su cumplimiento.

3.- Efectos de la Sentencia

Respecto del contenido y alcance de la sentencia del Tribunal, conviene también recordar que conforme al artículo 17 de nuestra Constitución, todos los tribunales de nuestro país deben impartir justicia de manera pronta, expedita, imparcial, gratuita y completa; además de disponer que las leyes establecerán los medios necesarios para que se garantice su independencia y la plena ejecución de sus resoluciones.

El tiempo nos impide un examen puntual de todas las anteriores garantías, estimando suficiente destacar, para nuestros fines que, de entre ellas, sobresale la obligación impuesta al Tribunal, de impartir justicia completa, lo que implica examinar en la sentencia todos los puntos cuestionados y en particular, las pretensiones deducidas por las partes.

El alcance normativo de las sentencias lo establece el artículo 239 del Código en vigor, ordenando que éstas podrán:

1º.- Reconocer la validez de la resolución impugnada.

2º.- Declarar la nulidad de la misma.

3º.- Declarar la nulidad para determinados efectos, debiendo precisar con claridad la forma y términos en que la autoridad debe cumplirla, salvo que se trate de facultades discrecionales; y

4º.- Declarar la existencia de un derecho subjetivo y condenar al cumplimiento de una obligación, así como declarar la nulidad de la resolución impugnada.

Además de estas hipótesis, el artículo 70 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos establece otra fórmula diversa de efectos de la

sentencia, al decir que cuando ésta sea anulatoria, tendrá el efecto de que la dependencia en la que el servidor público preste o haya prestado sus servicios, lo restituya en el goce de los derechos de que hubiese sido privado por la ejecución de las sanciones anuladas.

De lo anterior se deducen con toda claridad, dos sistemas de anulación de resoluciones que dan sentido y carácter al juicio contencioso administrativo federal, que a mi parecer, sigue muy cercano al contencioso francés que lo inspiró originalmente: a) El primero, de simple anulación y b) El segundo, de plena jurisdicción.

En el primero, soy de la opinión de que subdivide el campo en la sentencia anulatoria lisa y llana y la distingue de la que anula para efectos por vicios formales, incluyendo aquí la que anula un acto administrativo por haberse ejercido una facultad discrecional distante de sus fines, dejándola a salvo.

En el segundo, me parece advertir tres diferentes posibilidades:

La sentencia de nulidad para efectos en cuanto al fondo; pronunciamiento debido a que la ilegalidad del acto no se limita a su anulación sino que la pretensión del actor sólo se satisface obligando a la autoridad a realizar una conducta determinada.

Esta fórmula es la más general de este sistema y opera en los casos en que la resolución combatida proviene de un procedimiento administrativo seguido a instancia del particular.

En este supuesto se encuentran los siguientes ejemplos:

1º.- La devolución de lo pagado indebidamente o de la cantidad que proceda tratándose de contribuciones.

2º.- La negativa a reconocerle a un trabajador al servicio del Estado, incluidos los militares, una pensión o haber de retiro.

3º.- La indebida rescisión de un contrato de obra pública y la consecuente vigencia de éste con todos sus efectos.

4º.- La indemnización con cargo al Erario y a favor de un tercero, que es el afectado por la ilegal actuación de un servidor público cuya sanción ha quedado firme.

5º.- La ilegal resolución de un recurso administrativo que conlleva la anulación del acto recurrido.

6º.- La anulación de una negativa ficta o de la negativa expresa a reconocer que operó la positiva ficta.

La segunda modalidad que se ha apuntado, por cierto es la más reciente, pues su vigencia data del 1° de enero del año en curso, me parece que por los términos empleados, supone la declaratoria de existencia de un derecho subjetivo, es decir, en la que se satisface la pretensión del actor de que se le otorgue tal derecho atentas las pruebas aportadas en el juicio. A ello conduce la expresión "*declarar la existencia de un derecho subjetivo*", empleada por el texto.

La tercer fórmula es asimismo singular, pues significa el establecimiento legal de un efecto restitutorio de la sentencia.

Las sentencias del Tribunal son emitidas en forma colegiada, actuando a través de Salas Regionales, compuestas por tres Magistrados, distribuidas en 17 diversas circunscripciones territoriales; o bien en las dos Secciones de la Sala Superior integradas por cinco Magistrados, al resolver los asuntos de competencia especial, particularmente los de las materias de comercio exterior y de aplicación de convenciones fiscales internacionales; o cuando el Pleno de la propia Sala Supe-

rior, formado por once Magistrados, decide los juicios atraídos a su conocimiento para fijar tesis o, en su caso, jurisprudencia.

Entratándose de Secciones y de Sala Superior, los pronunciamientos se producen en sesión pública.

El Tribunal no puede resolver más allá de las pretensiones formuladas en la demanda, sin embargo está facultado para corregir errores en la cita de los preceptos aplicables y para resolver la cuestión efectivamente planteada, debiendo ser congruente en su sentencia con todos los puntos a debate y en el examen razonado de la controversia.

Desde el punto de vista cuantitativo debemos decir que durante el año de 2000 el Tribunal recibió 64,739 nuevas demandas y que en el mismo lapso se resolvieron 58,774 juicios; cifras que son indicativas de la eficacia de los servicios que presta el propio Tribunal.

4.- El Cumplimiento de la Sentencia

La eficacia del proceso contencioso también se mide a través de los instrumentos legales que aseguren el cumplimiento de lo sentenciado.

El instrumento con el que cuenta el sistema es la queja que puede interponer el particular, por una sola vez, ante el mismo órgano que emitió la sentencia incumplida.

Procede la queja por incumplimiento de sentencia firme, en estos casos:

1º.- Por repetición del acto anulado, caso en el que, de comprobarlo, el Tribunal, deja sin efectos el acto repetido y multa al funcionario responsable con un monto que va de 30 a 90 días de su salario habitual.

2º.- Por excesivo o defectuoso cumplimiento, que de comprobarse se sanciona con la anulación del acto que provocó la queja y emplazando a la autoridad, por veinte días, a que dé debido cumplimiento al fallo, señalando la forma y términos en que deberá cumplir; y

3º.- Por omisión total de lo sentenciado, supuesto que requiere además que haya vencido el plazo de cuatro meses para cumplir con el efecto señalado en la sentencia, en los casos de plena jurisdicción a que me he referido. En esta hipótesis, demostrado el incumplimiento, la sanción consiste en emplazar al responsable por 20 días para dar cumplimiento al fallo y multarlo con un monto igual al caso 1º.

Durante el año de 2000 se interpusieron 998 quejas, lo que es indicativo de un importante grado de incumplimiento, pero también de la importancia y eficacia de la queja.

Confío en haberme limitado al tiempo asignado dándoles las gracias por su atención.

Sr. Michel Coat

La función jurisdiccional. Sentencias del juez administrativo y su cumplimiento

Es con un gran interés que escuche la exposición hecha por el Doctor Carballo Balvanera. El interés que tiene una reunión, digamos una comunicación de este tipo radica, yo creo mucho, en el hecho de que podemos, con rapidez, tener una visión comparada de nuestras organizaciones jurisdiccionales y de nuestro derecho administrativo, y eso es muy interesante y permite una ganancia de tiempo, yo creo, extraordinaria en el entendimiento de nuestros sistemas respectivos.

Me parece, resultado de esta exposición del Doctor Carballo, que pertenecemos, México y Francia, a la hermandad, eso me parece obvio, la hermandad de los países que tienen un derecho administrativo sólido, primero y en segundo lugar de los países que tienen también una organización jurisdiccional de alto nivel, especializada en la resolución de los conflictos inevitables que plantea la acción pública y a veces política en un país democrático.

Nuestras organizaciones, a pesar de tener algunas diferencias justificadas plenamente por las diferentes estructuras administrativas y de estructuras políticas, México es un gran país federal, Francia es un país unitario que hace poco tiempo ha comenzado a incorporar un grado elevado de descentralización dentro de sus estructuras administrativas, pero es para nosotros un hecho todavía nuevo que la práctica de la descentralización territorial, como le llamamos, y esta descentralización ha generado para la justicia administrativa un crecimiento extraordinario de sus funciones; los problemas contenciosos generados por la descentralización administrativa y su práctica cotidiana han hecho que importantes reformas, -a las cuales aludió la Doctora Tchakaloff hace un rato-, importantes reformas en nuestra organización jurisdiccional han sido necesarias a partir de finales de los años ochenta

para permitir a dicha jurisdicción seguir obrando en la resolución de los conflictos generados por la acción pública.

Tenemos, como lo destacó la Doctora Tchakaloff, dos órdenes jurisdiccionales bien separados: la justicia ordinaria y la justicia administrativa. La justicia administrativa, para simplificar un poquito las cosas, yo diría que la acción del ciudadano ante la justicia administrativa francesa actualmente se puede resumir a tres o cuatro máximo vías de acción. La vía real de acción del ciudadano ante la justicia administrativa es la práctica del recurso por exceso de poder, es la vía procedimental por la cual el ciudadano va a poder impugnar ante el juez administrativo cualquier acto de la potencia pública y obtener en el fallo, en caso de que efectivamente el expediente fuera bien nutrido de elementos que establezcan una ilegalidad del acto administrativo, el ciudadano podrá obtener ante justicia administrativa de manera relativamente simple, en muchos casos hay exoneración de la obligación de ser asistido por un abogado, por ejemplo, y los gastos son mínimos, el ciudadano podrá obtener del juez administrativo, cualquiera que sea, tribunal administrativo, corte de apelación o Consejo de Estado, que constate la ilegalidad del hecho de que no hay sustento legal a tal o cual decisión, cualquiera que sea la autoridad en causa, va desde los decretos del Presidente de la República, de los actos del gobierno, de los actos de las autoridades locales, representantes del gobierno o descentralizadas, cualquier actividad pública, cualquier acto generado por una actividad pública puede ser directamente, entonces, anulada ante el juez administrativo.

Se plantean problemas de competencias territoriales, los tribunales administrativos y las cortes administrativas de apelación tienen un ámbito de competencia territorial; para un tribunal administrativo generalmente es la región administrativa que corresponde al campo de competencia geográfica del tribunal. Una corte administrativa de apelación tendrá 2, 3, 4 circunscripciones de tribunales administrativos dentro de su ámbito de competencia y al final el Consejo de Estado tiene la competencia nacional para, primero zanjar en última instancia las diferencias jurisprudenciales que pueden existir entre varias cortes de apelación; y también el

Consejo de Estado tiene una competencia residual en última instancia para conocer de la legalidad de los actos creados por la actividad gubernamental, es decir, un ciudadano que quiere contestar la legalidad de un decreto gubernamental tendrá que acudir directamente al Consejo de Estado y no a un tribunal administrativo, ya que se trata de un acto de alcance nacional. Pero un tribunal administrativo puede constatar la ilegalidad de un decreto o la inconformidad de una ley con el derecho europeo y, sin anular esta ley, constatar que no tendrá aplicación en el caso particular que se le está sometiendo, lo que le permite entonces intervenir también en los contenciosos directamente vinculados con la conformidad de las leyes a los compromisos internacionales de Francia o la inconformidad de un decreto del gobierno a tal o cual disposición, norma de nivel superior.

Siendo esto dicho, cuando se plantea ante las jurisdicciones administrativas francesas el problema del cumplimiento de las sentencias por parte del demandante y del demandado, es decir, en otras palabras, cómo se logra que un simple ciudadano que se enfrenta a un rechazo de ejecución de la administración, cómo él puede hacer para que el juez lo ayude en la persecución de la ejecución.

El problema ha sido durante mucho tiempo un problema delicado, muy delicado ya que existía hasta hace poco tiempo, hasta 1995, un principio absoluto de no injerencia del juez administrativo en la administración activa. Lo que hacia que el juez administrativo se rechazaba a dar órdenes, a hacer mandamientos a la administración. Esta situación perduró hasta que una ley, la Ley del 8 de febrero de 1995, vino a modificar este estado; y la necesidad de esta ley fue impuesta por el auge que encontró el contencioso-administrativo, después de iniciarse la descentralización administrativa, es decir, el hecho de que muchas competencias nuevas hayan sido entregadas a los municipios, a los departamentos y a las regiones hizo que esto generó un inmenso contencioso y frente a este problema, los problemas de ejecución se plateaban con más agudeza. La opinión pública no toleraba que fuera posible para una administración de no ejecutar una sentencia del juez de distrito. Así que esta ley puso en práctica jurídica procedimientos nuevos que van a obligar, que tienden a obligar, a la administración a respetar la sentencia definitiva del juez. El

juez dispone de tres armas esencialmente para eso; primero adquiere el derecho de dirigir órdenes, de hacer mandamientos directos a la administración, en el caso que le fuera demandado, que eso fuera requerido dentro de la demanda de la persona; y en segundo lugar tiene la posibilidad de establecer mediante un procedimiento, que ustedes en México tienen también, mediante un tipo de multas obligar, es decir el juez puede determinar una multa por día de retraso hecho por día corrido después del momento en que normalmente la ejecución debía haber sido hecha. Así que se considera sistemáticamente que tres meses después de haber sido notificada una sentencia a una persona, la administración pública debe haber ejecutado, de no haber ejecutado se expone al pago de la multa que el juez determinará, impuesta, calculada por día de demora.

Entonces vemos que son armas que fueron definitivamente disuasivas, además el ciudadano tendrá de todos modos, caso que la demora en la ejecución de una sentencia administrativa fuera injustificada tiene siempre la posibilidad de demandar luego en plena jurisdicción esta vez, de hacer una demanda en reparación del perjuicio que le ha causado la demora, la demora registrada entonces en ejecutar esta sentencia definitiva.

Muchas gracias por su atención.

Presentación de la conferencia del Magistrado Luis Malpica de Lamadrid, por el Lic. Nestor Fernández Verti

Escucharemos ahora, la intervención del Magistrado Luis Malpica de Lamadrid, con el tema: el Sistema de la Carrera Jurisdiccional. Quiero leer a ustedes un muy sucinto currículum de parte del Magistrado Luis Malpica de Lamadrid: el Magistrado ha sido Magistrado Presidente de la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, como ustedes saben, antes llamado Tribunal Fiscal de la Federación hasta el 31 de Diciembre del 2000; actualmente el Magistrado Malpica, es Magistrado de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. En relación con los estudios y actividades académicas del Magistrado Malpica, destacamos las siguientes: Doctor en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, 1995; Doctor en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de París, Francia, 1965; Licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, en 1963, con cuya tesis obtuvo mención honorífica; el Doctor Malpica, es autor de 7 libros y 23 artículos, sobre aspectos jurídicos, económicos, banca, comercio exterior, Tratado de Libre Comercio, entre otros; ha dictado más de 100 conferencias sobre materias jurídicas, económicas y jurisdiccionales; ha sido distinguido también, con varios reconocimientos profesionales y académicos. Doctor Malpica le solicitamos a usted su intervención, con el tema: el Sistema de la Carrera Jurisdiccional.

Mag. Luis Malpica de Lamadrid

El Funcionamiento Interno del Tribunal
El Sistema de la Carrera Jurisdiccional

Estimados amigos franceses,
Estimados amigos mexicanos:

Hoy es un día especialmente importante en la vida del ahora Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Es la primera ocasión que nuestra Institución realiza una videoconferencia directa con nuestros colegas del Consejo de Estado francés, bajo la hospitalidad del Instituto Nacional de Administración Pública y el alto patrocinio del Instituto Internacional de Administración Pública de Francia.

La influencia del pensamiento jurídico administrativo francés, en distinguidos juristas mexicanos, como Don Antonio Carrillo Flores, Don Manuel Sánchez Cuén, Don Alfonso Cortina, Don Gabino Fraga, dieron origen en 1936, al Tribunal Fiscal de la Federación y al Instituto Nacional de Administración Pública, el 7 de febrero de 1955, éste con el objetivo principal de promover el desarrollo y la difusión de la administración pública y de las ciencias administrativas en México. De ahí su estrecha vinculación con el Tribunal.

Lo anterior, permítanme esta disgresión, pero que está relacionada con la formación de los abogados y de los jueces, es continuación de la influencia del positivismo francés en la enseñanza de derecho mexicano durante el último cuarto del siglo XIX y la primera década del siglo XX. Después esta influencia correspondió al intuicionismo francés.

En efecto, Augusto Comte, colaborador y amigo de Saint Simon, consagró su pensamiento en su Curso de Filosofía Positiva y su doctrina fue enunciada a través de la llamada ley de los tres estados (teología, metafísica y positiva). Esta filosofía

fue introducida en nuestro país, por el ilustre poblano Gabino Barreda quien, en 1851, se trasladó a París; asistió a las conferencias que Augusto Comte pronunciaba en el Palais Royal, ahora sede del Consejo de Estado francés. Al regresar a México, en 1853, Gabino Barreda trajo consigo, los seis tomos del Curso de Filosofía Positiva y el pensamiento comtiano. Por cierto que Gabino Barreda se tituló como médico en París. Creó la Escuela Nacional Preparatoria e implantó el sistema positivista en el plan de estudios. Esta misma corriente filosófica se adaptó en la Escuela Nacional de Jurisprudencia.

Siguiendo la tradición reseñada, en uso de las facultades extraordinarias que el Congreso concedió al Ejecutivo Federal el 12 de octubre de 1901, se expidió, el 22 de enero de 1902, el plan de estudios de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, que contenía entre sus disciplinas, por primera ocasión, la materia de Derecho Administrativo y Legislación Fiscal.

Pocos años después, se elaboró el plan de estudios definitivo de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, contenido en el Decreto de Don Porfirio Díaz de 19 de enero de 1907, debido al genio de Don Justo Sierra, que tiene una relevancia especial. Ya que con diez ajustes que sufrió, hasta 1991, aprobados por el H. Consejo Universitario, fue la base durante 84 años, para la carrera de licenciado en derecho en nuestro país. En ese plan se introdujo el estudio de la Sociología; se estableció que la carrera de licenciado en derecho fuera de cinco años. En el quinto año, se implantó la enseñanza del Derecho Administrativo; y se creó, entre las especialidades, la de estudios superiores de Derecho Administrativo.

La influencia positivista francesa en la enseñanza y formación de los abogados, y dentro de éstos en los juzgadores, disminuyó ante la influencia del pensamiento francés intuicionista de Henri Bergson, Premio Nobel de Literatura en 1920, a través del mexicano Antonio Caso. Se defendió la escuela humanista, dirigida más a educar, que a incluir materias “útiles” para formar especialistas, apéndices de profesiones liberales. La filosofía de Antonio Caso se sintetiza en su obra “La Existencia como Existencia y como Caridad”. Publicada en 1916. Difundió el pen-

samiento de Oswald Spengler, la fenomenología de Husserl, el neotomismo de Maritain, el existencialismo y el historicismo de Dilthey.

Cada año conmemoramos, la promulgación el 27 de agosto de 1936 (D.O. de 31 de agosto de 1936) de la Ley de Justicia Fiscal, que entró en vigor el 1º de enero de 1937, con sus 58 artículos y 6 transitorios, que dio origen al Tribunal Fiscal de la Federación y con ello también a la Revista de esta Institución. Así, hace 65 años surgió el primer tribunal de lo contencioso administrativo del México postrevolucionario. Debemos resaltar que en ocasión del 65º aniversario del Tribunal, el Vicepresidente del Consejo de Estado francés, Sr. Renaud Denoix de Saint Marc, expuso ante el Presidente de México la experiencia del Consejo de Estado francés.

El Tribunal, en su origen estuvo formado por 15 Magistrados designados en el mes de agosto de 1936. Estos 15 Magistrados fundadores integraron el Pleno y las cinco Salas de tres Magistrados cada una. Un Secretario General de Acuerdos; dos Primeros Secretarios para cada una de las cinco Salas, los Secretarios Auxiliares necesarios para el despacho de los asuntos y cuatro Actuarios.

Los requisitos de edad y experiencia para ser nombrado Magistrado, han variado con el tiempo. En su inicio, la Ley de Justicia Fiscal señalaba 25 años de edad y experiencia previa de cinco años de práctica en la materia fiscal y título de abogado expedido con anterioridad. Actualmente son 35 años de edad, título expedido con 10 años antes del nombramiento y experiencia de siete años en la materia fiscal.

Para los Secretarios y Actuarios, los requisitos que debían cumplir eran ser mexicano y tener título de abogado. En la actualidad, para ser Secretario de Acuerdos y Actuario se requiere ser mexicanos, mayores de 25 años, licenciados en derecho con dos años de práctica fiscal, con título debidamente registrado y de reconocida buena conducta.

A través de su historia el Tribunal ha tenido tres Leyes Orgánicas que han regido su actividad. A partir de la reforma a su tercera Ley Orgánica (D.O. de 15 de diciembre de 1995), publicada en el D.O. el 31 de diciembre del año 2000, vigente a partir del 1º de enero de 2001, se cambió el nombre a este Órgano Jurisdiccional por el de Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Actualmente, el Tribunal está estructurado en una Sala Superior que trabaja en Pleno y dos Secciones de cinco Magistrados cada una y 33 Salas Regionales. La Sala Superior se encuentra integrada por 11 Magistrados, de entre los cuales elegimos, cada dos años, a nuestro Presidente, que no integra Sala. Del total de los Magistrados de la Sala Superior, 18% desempeñó funciones de Secretario de Acuerdos de Magistrado de Sala Regional; 64% desempeñó funciones de Magistrado de Sala Regional y 18% ingresó directamente como Magistrado a la Sala Superior. (lámina 1)

Cada una de las 33 Salas Regionales del Tribunal, está compuesta por tres Magistrados, que hacen un total de 99 Magistrados regionales y metropolitanos; estas Salas están distribuidas en 17 regiones del territorio nacional que abarcan a los 31 estados de la Federación y al Distrito Federal. (lámina 2)

De los 99 Magistrados de Salas Regionales, 70% están dentro de su primer periodo de nombramiento; 3% están en su segundo periodo y 27% son inamovibles. (lámina 3)

Asimismo, de los 99 Magistrados de Salas Regionales, 5% ingresó como Actuario a Secretario de Acuerdos; 67% ingresó como Secretario de Acuerdos y 28% ingresó directamente como Magistrado de Sala Regional. (lámina 4)

El Tribunal cuenta además con un Secretario General de Acuerdos, dos Secretarios Adjuntos de Acuerdos de las dos Secciones de la Sala Superior; 36 Secretarios de la Sala Superior; 302 Secretarios de las Salas Regionales; 75 Actuarios y 1064 colaboradores más, que sirven de apoyo a la impartición de la justicia administrativa, para hacer un total de 1590 personas que formamos este Órgano Jurisdiccional. (láminas 5 y 6)

En 1936, cuando se creó el Tribunal, la capacitación del personal profesional no era sistemática, e incluso estaba un poco desarticulada; sin embargo, desde su inicio el Tribunal se distinguió por su excelencia, objetividad, imparcialidad, eficiencia, profesionalismo, honorabilidad, y transparencia; valores que ha conservado en sus 65 años de vida y que le han proporcionado un gran prestigio en el ámbito de la impartición de la justicia fiscal y administrativa.

En la Ley de Justicia Fiscal de 1936, se señalaba que los Magistrados del Tribunal serían nombrados por el Presidente de la República, a propuesta de la Secretaría de Hacienda, y con la ratificación del Senado. Esta situación se debió a que, en el año de 1937, los abogados que más conocían la materia fiscal provenían de esta Secretaría.

Sin embargo, en la segunda Ley Orgánica del Tribunal (D.O. de 2 de febrero de 1978), se suprimió la intervención de la Secretaría de Hacienda en el nombramiento de los Magistrados, quedando únicamente en manos del Presidente de la República con aprobación del Senado; y, a partir del 5 de enero de 1988, se estableció la inamovilidad para los Magistrados regionales y metropolitanos cuando fueran nombrados por un segundo periodo. Sin embargo, a partir de la tercera Ley Orgánica, se modificó la condición de inamovilidad, para concederla con el tercer periodo sexenal.

El primer intento para instituir el servicio civil de carrera en la Administración Pública Federal de México, y la consiguiente capacitación de ese personal, fue planteado en el Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988, por el Ejecutivo Federal. Se señaló entre los objetivos la estabilidad y seguridad de los empleos de los trabajadores de base, fomentando la capacitación y la vocación de servicio del personal, para crear las condiciones de una carrera administrativa. Esta fue la primera ocasión en la que se propuso una carrera administrativa dentro de la Administración Pública Federal.

Como complemento a lo anterior, el 19 de junio de 1984, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Reglamento Interior de la Comisión Intersecretarial del Servicio Civil. La Comisión mencionada, es un instrumento de coordinación y asesoría del Ejecutivo Federal en las actividades tendientes a crear el servicio civil de carrera en la Administración Pública Federal.

Otro antecedente del servicio civil de carrera se encuentra en el Estatuto del Servicio Profesional Agrario, publicado en el D.O. de 14 de septiembre de 1994, que tiene por objeto establecer las normas para la organización, operación y desarrollo del servicio profesional agrario, así como las relativas a los miembros de la Procuraduría Agraria que integran el personal de carrera, y las concernientes a la aplicación de sanciones.

En el Plan Nacional de Desarrollo 1994-2000, el Ejecutivo Federal señaló como uno de los objetivos de la Administración Pública Federal, contar con un servicio profesional de carrera que garantizara la adecuada selección, desarrollo profesional y retiro digno para los servidores públicos, y que contribuyera a que los relevos de la titularidad de las dependencias y entidades se otorgara conforme a la experiencia y conocimientos de los aspirantes.

Las ideas del Plan Nacional de Desarrollo 1994-2000, se vieron reflejadas dentro del ámbito judicial, con la reforma al artículo 100 Constitucional (D.O. de 31 de diciembre de 1994), y la instauración de una carrera judicial en el Poder Judicial de la Federación, prevista tanto en ese dispositivo constitucional como en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (D.O. de 26 de mayo de 1995). Toda la filosofía de la carrera judicial y jurisdiccional se resume en la obra reciente "Cartas a un Juez que inicia su Carrera Judicial", publicada en mayo de 2001 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, con 106 aportaciones de juristas connotados, entre Ministros, Consejeros, Magistrados, Senadores, académicos y postulantes.

Acorde con tales desarrollos, dentro del Tribunal, también existía la preocupación de regular la creación, desarrollo y permanencia en el sistema de la carrera jurisdiccional.

Como primer paso para sistematizar tal objetivo, en el año de 1994 se realizaron esfuerzos para la creación del Instituto de Especialización del Tribunal, sin que fructificaran; no obstante ello, a partir de 1995, se logró impartir sistemáticamente el curso de capacitación y actualización de Secretarios y Actuarios del Tribunal Fiscal de la Federación, en materia procesal fiscal; con la colaboración de diversos Magistrados de Salas Regionales y Sala Superior, y con la participación de distinguidos funcionarios de las dependencias y entidades relacionadas con el tema.

Este curso dio resultados positivos, de tal manera que en los años de 1995 a 1997, no tan sólo se impartió a los Secretarios de Acuerdos y Actuarios de este Tribunal, sino que también se contó con la asistencia de abogados postulantes.

Con el Acuerdo número G/15/98, de 18 de marzo de 1998, del pleno de la Sala Superior de este Tribunal, se creó formalmente el Instituto de Estudios sobre Justicia Administrativa. En los puntos segundo, séptimo y tercero de ese Acuerdo se determinó que tendría, entre otras responsabilidades, las siguientes:

> "II. Preparar, impartir y evaluar los cursos de formación y superación de funcionarios jurisdiccionales del Tribunal Fiscal de la Federación, a fin de mejorar su eficacia en el desempeño de su puesto, así como sistematizar su permanente actualización, especialización y perfeccionamiento."
>
> "VII. Obtener becas en instituciones educativas para el personal profesional del Tribunal y someter, para aprobación superior, la propuesta del Magistrado correspondiente, de los candidatos a ocuparlas, así como la autorización de prácticas ante órganos jurisdiccionales semejantes."

Asimismo, en el punto tercero del Acuerdo en comento, se estableció:

"**TERCERO.** Las personas que obtengan las más altas calificaciones en los cursos que imparta el Instituto o las instituciones educativas que aquél autorice, y en las prácticas ante el Tribunal u órganos jurisdiccionales semejantes, tendrán preferencia, en igualdad de circunstancias, para el ingreso al Tribunal o para la promoción de puestos inmediatos."

El 31 de diciembre de 2000 se publicó, en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto que reforma diversas disposiciones fiscales, en donde se modificó la fracción X, del artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal, sentando las bases legales para sistematizar, por primera vez, la carrera jurisdiccional dentro del mismo.

La exposición de motivos de ese Decreto, en la parte que nos interesa, señaló:

"El robustecimiento de la carrera jurisdiccional, sugiere la conveniencia de dotar a la Sala Superior del Tribunal de que se trata, de las facultades necesarias para fijar las bases que le habrán de normar, bajo los principios de eficiencia, capacidad y experiencia, así como para señalar su obligatoriedad (...)"

En el Tribunal tenemos, como hemos visto, diversos grados de funcionarios jurisdiccionales: Actuario, Secretario de Acuerdos de Sala Regional, Secretario de Acuerdos de Sala Superior, Secretario Adjunto de Acuerdos de las Secciones de la Sala Superior, Secretario General de Acuerdos, Magistrado de Sala Regional y Magistrado de Sala Superior. (lámina 7)

La carrera jurisdiccional en el Tribunal se ha regido en la práctica y debe continuar haciéndolo por los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia que consagra el artículo 100 Constitucional. Además de los principios que rigen en especial al propio Tribunal: de legalidad, eficien-

cia, capacidad, igualdad de oportunidades, calidad, competencia por mérito y experiencia.

Por ello, para consolidar de manera institucional, moderna y congruente la carrera de los funcionarios jurisdiccionales del Tribunal, la misma debe partir de las siguientes bases: 1. Mística de servicio sustentada en la responsabilidad; 2. Ética profesional; 3. Lealtad a las instituciones, y 4. Absoluto apego a la ley.

Para sistematizar los propósitos y objetivos mencionados, se ha propalado un convenio entre la Presidenta del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y el Presidente del Instituto Nacional de Administración Pública, quien cuenta con los mejores técnicos, para elaborar un estudio, que será el primero en su especie, sobre el servicio jurisdiccional de carrera. Este acuerdo debe considerar, entre otras cosas:

1) Integración profesional;
2) Ingreso y selección de personal;
3) Capacitación (formación básica, formación profesional y formación especializada);
4) Evaluación;
5) Ascensos y adscripción;
6) Estructura óptima de las Salas Regionales;
7) Derechos y obligaciones;
8) Emolumentos y otras prestaciones;
9) Estímulos; y
10) Fondo de jubilación o retiro.

Muchas gracias.

LÁMINA 1

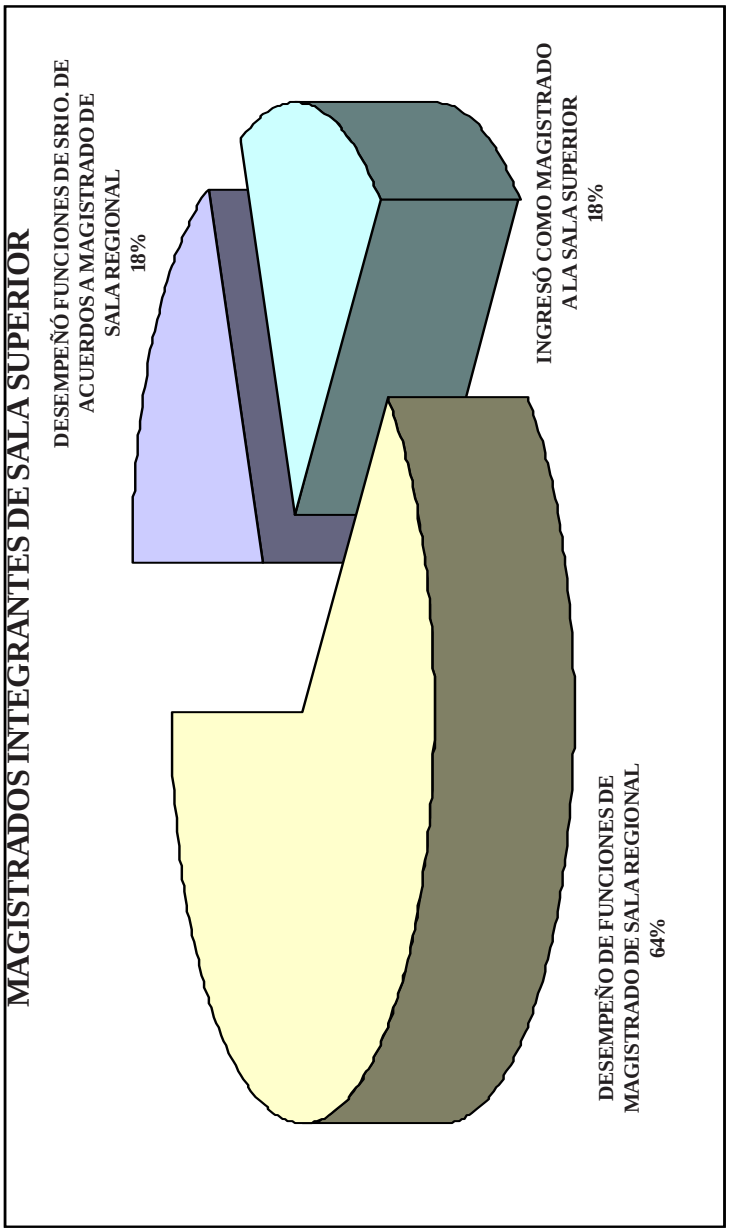

MAGISTRADOS INTEGRANTES DE SALA SUPERIOR
DESEMPEÑÓ FUNCIONES DE SRIO. DE ACUERDOS A MAGISTRADO DE SALA REGIONAL 18%
INGRESÓ COMO MAGISTRADO A LA SALA SUPERIOR 18%
DESEMPEÑO DE FUNCIONES DE MAGISTRADO DE SALA REGIONAL 64%

LÁMINA 2

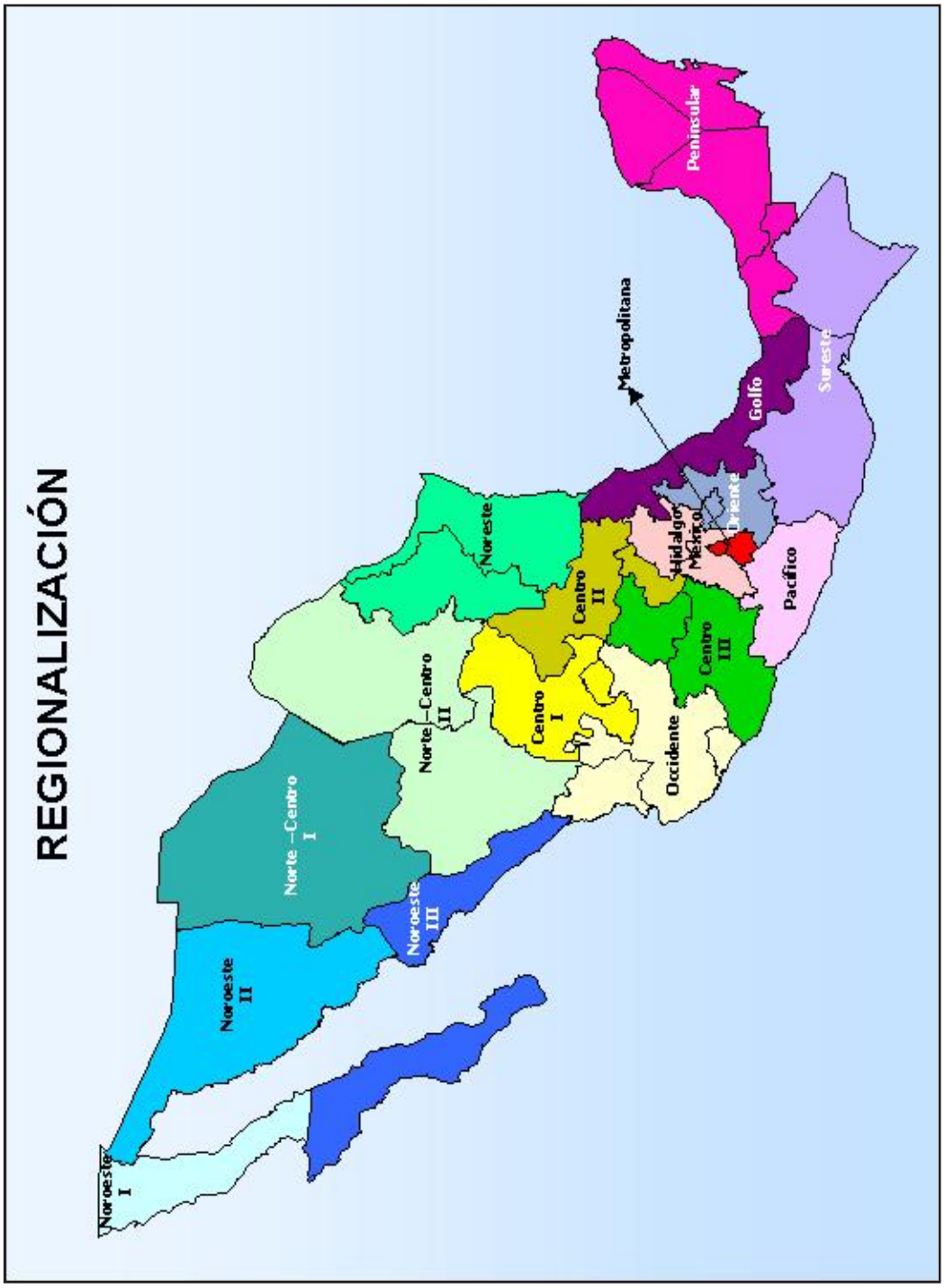

REGIONALIZACIÓN
Peninsular
Metropolitana
Golfo
Sureste
Noreste
Hidalgo
México
Oriente
Pacífico
Centro
II
Centro
III
Centro
I
Norte
Centro
II
Occidente
Norte
Centro
I
Noroeste
III
Noroeste
II
Noroeste
I

LÁMINA 3

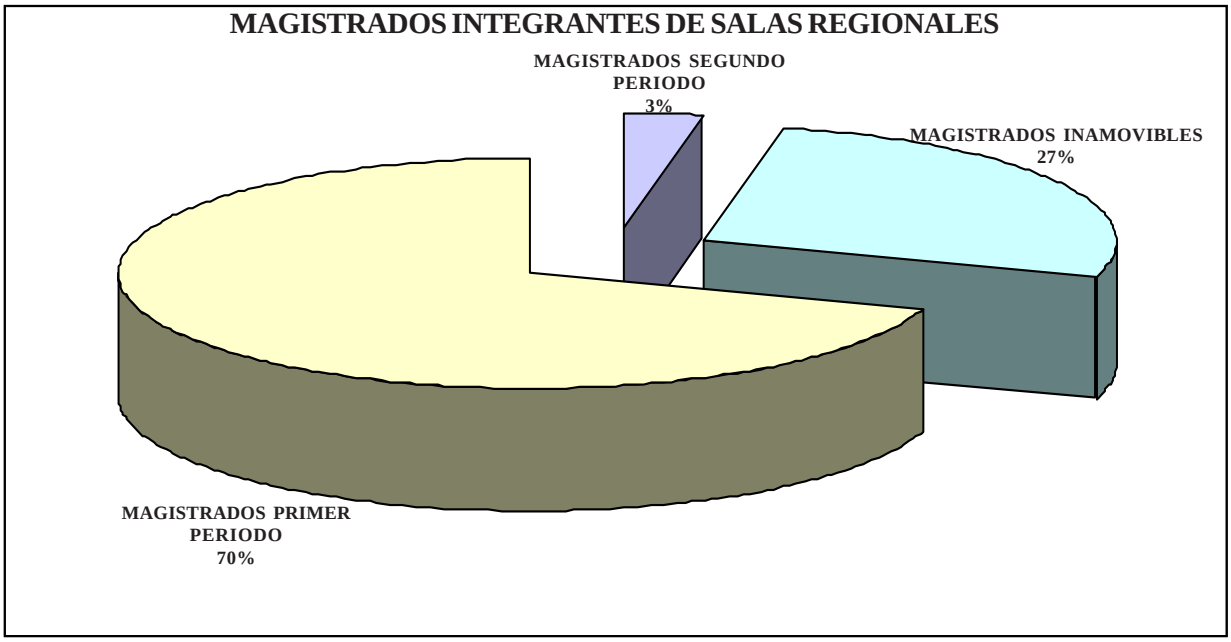


LÁMINA 4

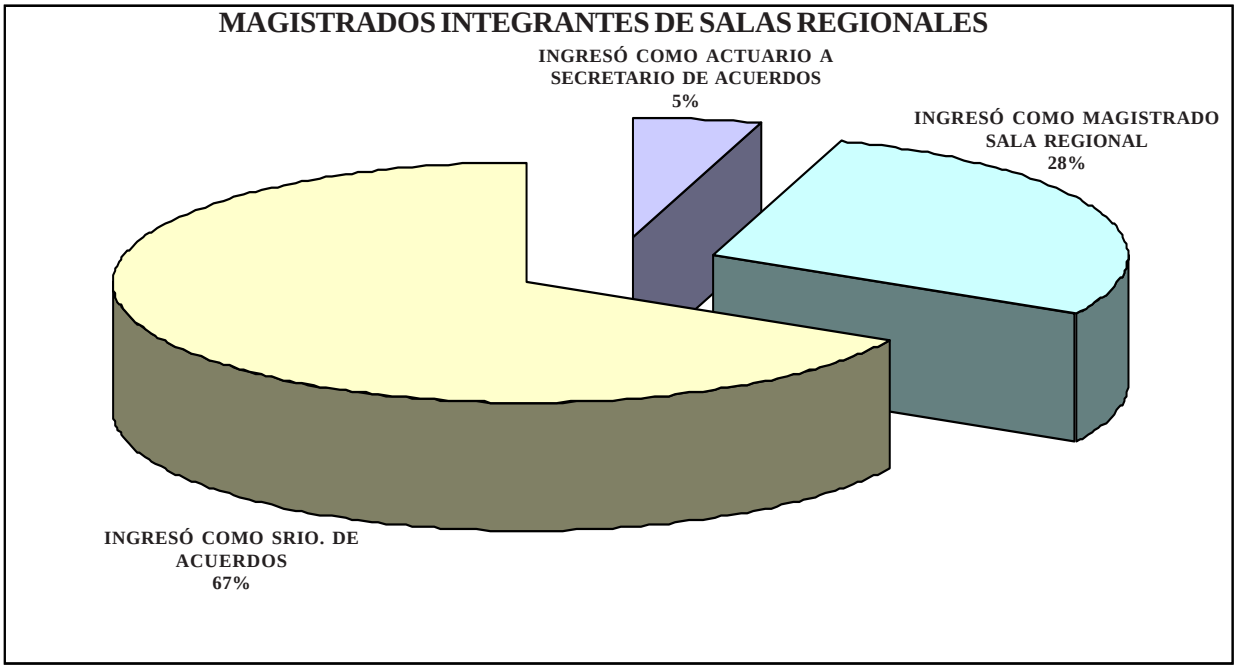


LÁMINA 5

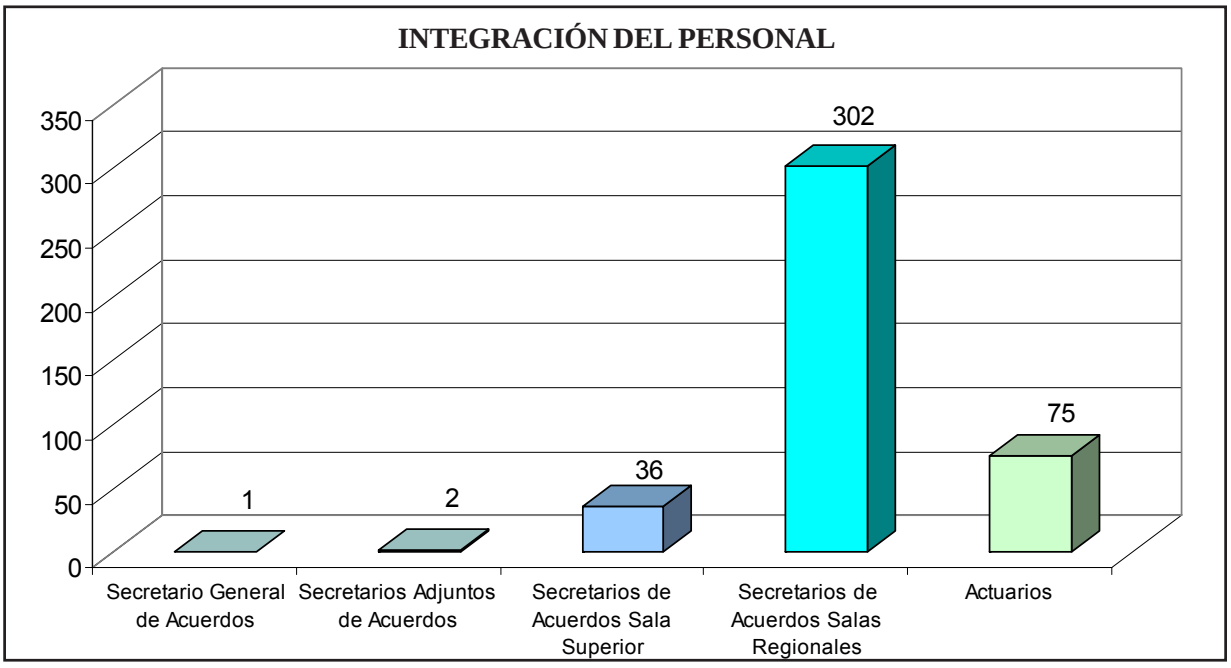


LÁMINA 6

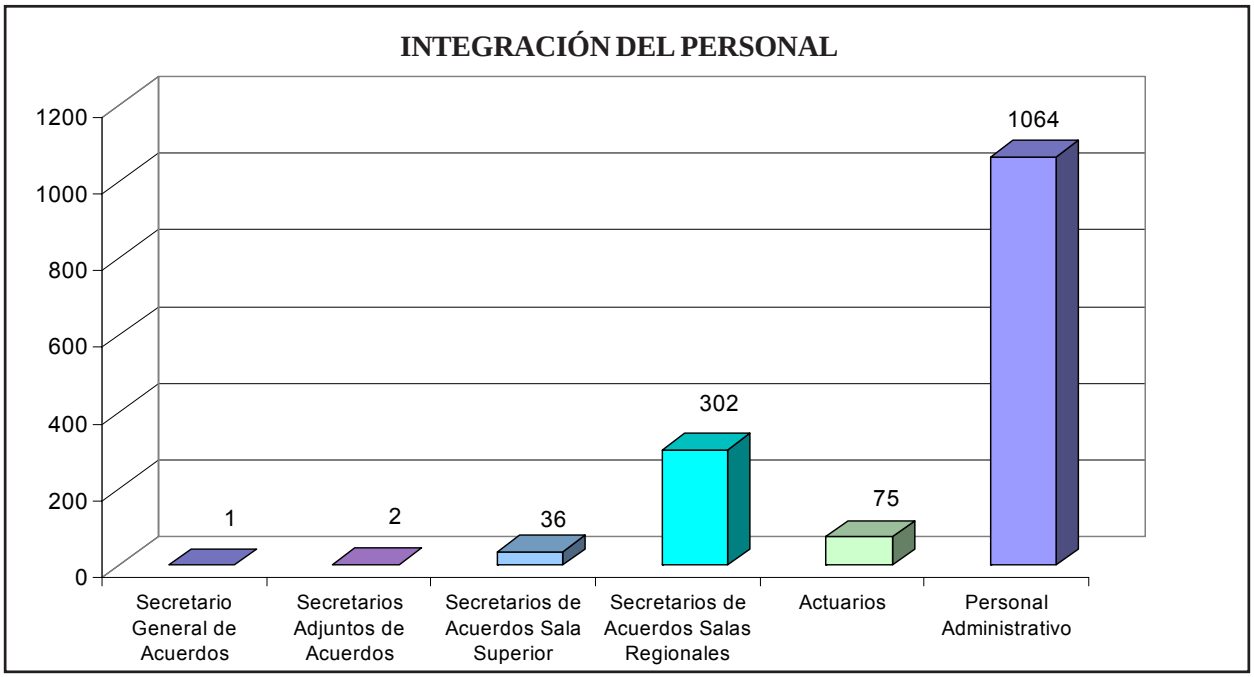
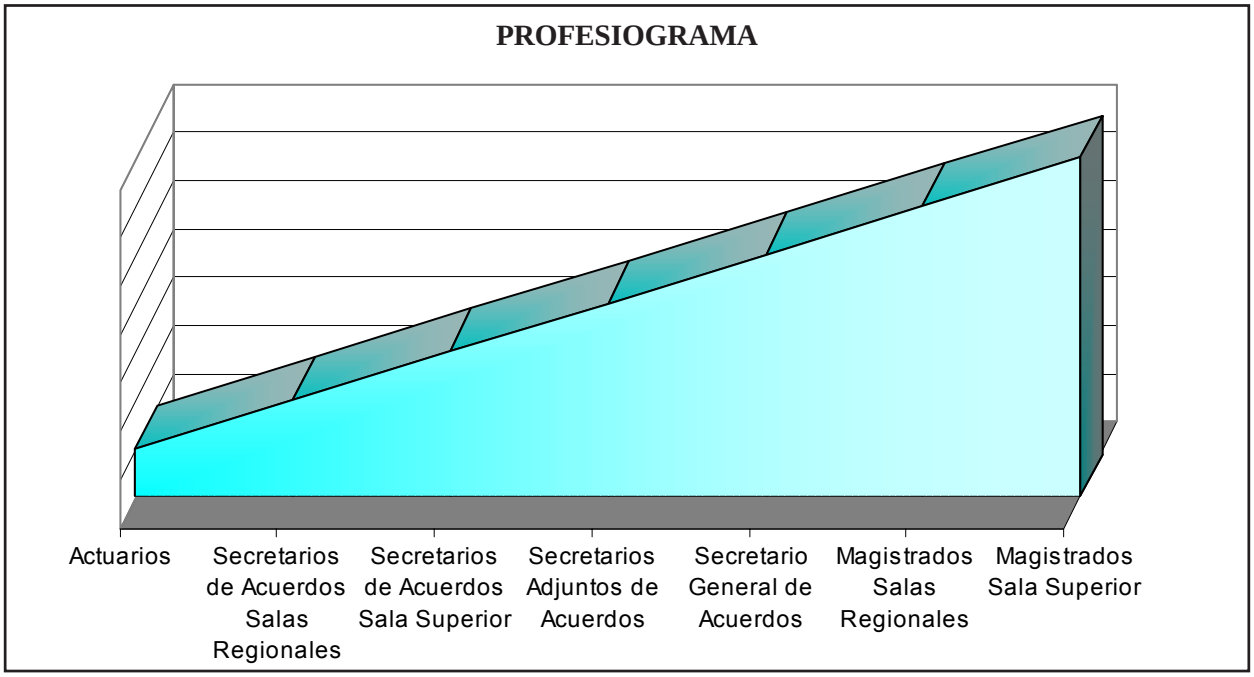


LÁMINA 7


PROFESIOGRAMA
Actuarios
Secretarios de Acuerdos Salas Regionales
Secretarios de Acuerdos Sala Superior
Secretarios Adjuntos de Acuerdos
Secretario General de Acuerdos
Magistrados Salas Regionales
Magistrados Sala Superior

Sr. Jean Marie Guittet,

El funcionamiento interno del Tribunal. El sistema de carrera jurisdiccional

Muchas gracias. Hablaré del tema en dos partes, el funcionamiento interno del Tribunal y también después la carrera jurisdiccional.

El funcionamiento interno del tribunal, debemos decir que, se reparte como otras jurisdicciones en Salas, en el Tribunal Administrativo de Rennes, son 5 Salas y voy a describir rápidamente las materias que son tratadas por cada Sala para dar un ejemplo de los contenciosos que se tratan. La Primera Sala es especializada en urbanismo, dominio público, expropiación por causa de utilidad pública. La Segunda Sala, especialmente en el contencioso de la fiscalidad. La Tercera Sala, a la cual pertenezco, trata del contencioso de las licitaciones públicas, los daños de obras públicas, la responsabilidad hospitalaria, el contencioso de la agricultura. La Cuarta y la Quinta Sala tratan de los problemas del contencioso de la función pública. Esto da una idea de los contenciosos que se tratan en un tribunal de primera instancia, como lo es el Tribunal Administrativo de Rennes.

La composición del Tribunal. Cada una de las Salas del Tribunal se compone de un presidente, este presidente no tiene poder jerárquico, es el responsable del funcionamiento de la Sala, con un papel de animación del trabajo de dicha Sala, también desempeña un papel de revisor de control, acorde con el ponente que ha redactado el proyecto de juicio y que es quien mejor conoce el sumario.

Con el presidente hay en cada Sala tres magistrados, dos son asesores que tratan los sumarios, son los ponentes de los sumarios, y hay otro magistrado, el cuarto magistrado que se denomina el Comisario del Gobierno. El Comisario del Gobierno, contrariamente a su denominación, bastante arcaica, no representa al gobierno, ya que la justicia administrativa como la judicial es independiente del

Poder Ejecutivo en la aplicación de la regla constitucional de separación de los poderes. El comisario del gobierno es en realidad un magistrado totalmente independiente, no se debe confundir con un representante del Ministerio Público que podría recibir órdenes de un superior jerárquico, ya que en las jurisdicciones administrativas no existe fiscalía, no existe Ministerio Público; su papel consiste en presentar en audiencia pública lo que llamamos conclusiones, presenta el problema que plantea el recurso contencioso, expone su manera de ver y la solución que le parece más adecuada con el derecho y la jurisprudencia.

Cada una de las Salas se compone así, de cuatro magistrados, pero únicamente tres participan en la decisión final, en la deliberación; la deliberación en número impar, es una regla dictada por el Código de Justicia Administrativa. Además una decisión reciente del 7 de junio del 2001 de la Corte Europea de Derechos Humanos ha decidido que el comisario del gobierno no puede votar, pero se puede expresar en la deliberación; es una decisión muy reciente de la Corte Europea de Justicia para hacer aplicación del artículo 6 de la Convención Europea de los Derechos Humanos que dicta que el juicio será equitativo para todos. El comisario del gobierno expone su decisión pero no puede votar después en la deliberación.

Otro aspecto relevante del funcionamiento del Tribunal es el aspecto de colegialidad o juez único.

Normalmente prevalecía el principio de colegialidad, es una regla de base, con formación de juicio compuesta de tres magistrados y más excepcionalmente de cinco magistrados en formaciones plenarias cuando el tema es muy importante en derecho y también presenta un interés mediático para el gran público; pero normalmente es la colegialidad con tres magistrados, pero se desarrolla de manera importante después de hace algunos años el juez único. El presidente de una Sala del Tribunal puede tomar medidas cautelares, como ordenar un peritaje, o acordar una provisión que no liga al juez del fondo.

También hay una disposición en nuestro sistema, que viene de la Ley de 30 de junio del 2000, una Ley muy reciente que es la que se aplica actualmente en los primeros meses, es una Ley que prevé que en la demanda, un recurrente puede pedir que haya una suspensión de la ejecución de la decisión cuando el juez estima que hay un problema de urgencia y también que hay un problema de legalidad muy importante en la decisión. Es una nueva reforma que entra en vigor y que presenta mucho interés para el recurrente, que no espera cuando hay urgencia dos o tres años para recibir una respuesta a su pregunta judicial.

Debemos también señalar un tipo especial de tramitación urgente que fue introducido en nuestro derecho por leyes del 92-93 en transposición de directivas europeas, que prevé la posibilidad de un procedimiento urgente y de suspender un procedimiento de licitación pública antes de la conclusión del contrato cuando en la demanda de un recurrente se plantea el problema que hay un vicio muy importante en el procedimiento de organización de la puesta en competencia en materia de licitaciones públicas.

También el juez único puede, pero en otra materia, en el registro del fondo de los problemas puede tratar el fondo de ciertos problemas, que fueron eliminados por el Código de Justicia Administrativa, considerando que se trata de problemas menos importantes por el monto de la demanda, por ejemplo en materia de pleno contencioso, por ejemplo una demanda que no supera el monto de 550,000 francos y por ciertos aspectos que no presentan una importancia tal que fuera necesaria el recurso a la formación colegial. Hemos dicho pues que se desarrolla el sistema del juez único.

También hablaremos ahora del sistema de la carrera jurisdiccional y vamos a destacar en primer lugar la especificidad del juez administrativo que no comparte la misma carrera en Francia que el juez civil o penal ya que el sistema francés apuesta sobre la necesidad para el juez administrativo de conocer desde el interior el funcionamiento de la administración, entonces los magistrados de los tribunales administrativos provienen de la Escuela Nacional de Administración como los

altos funcionarios, es una aplicación del principio que quiere que los magistrados conozcan el funcionamiento de la administración. Hay otros tipos de reclutamiento como la contratación por el destacamiento de altos funcionarios, concursos especiales. La nominación de los miembros del cuerpo se hace por decreto del Presidente de la República. Debemos añadir que un rasgo relevante del estatuto especial dentro del estatuto de la función pública del Estado, un rasgo relevante del estatuto es que se garantiza la independencia del cuerpo con el sistema de la inamovilidad de los magistrados. Es también menester señalar que el Consejo Superior de Tribunales Administrativos, es un organismo de forma paritaria que dicta dictámenes, que hace proposiciones sobre la carrera de los magistrados administrativos. En escalafón hay tres grados en el cuerpo: Consejo, después primer Consejo después de cuatro, cinco o seis años y por fin el grado de presidente que permite en la primera fase presidir una Sala y después presidir, si es posible, un Tribunal Administrativo. El ascenso de un grado a otro se hace por vía de inscripción en una lista de ascenso establecida sobre la proposición del Consejo Superior de Administración.

Y para acabar hay que señalar la participación de los magistrados administrativos en las comisiones administrativas. Los magistrados administrativos deben presidir comisiones para-administrativas o administrativas para garantizar la eficacia, la independencia y la imparcialidad de estas comisiones, pero que es también una manera de acercar al magistrado del funcionamiento de la administración, ya que como lo hemos dicho el sistema francés prevé una posibilidad de ida y vuelta entre los tribunales administrativos y la administración del país.

Gracias por su escucha.

Sesión de preguntas y respuestas

Pregunta de Monsieur Michel Coat para el Magistrado Luis Carballo Balvanera

Quisiera conocer la velocidad del fallo ante el juez administrativo en México.

Respuesta del Magistrado Luis Carballo Carballo Balvanera:

En relación con ese aspecto, la ley mexicana establece plazos para la formulación del proyecto y para la emisión de la resolución. Se tiene como base primero que el juicio contencioso administrativo federal haya concluido, y concluye con lo que la ley denomina el cierre de instrucción. Una vez cerrada la instrucción corre el plazo para la formulación del proyecto, y como hemos dicho, siendo resoluciones colegiadas, también un plazo adicional para que el órgano ya integrado dicte su resolución. En el momento actual la disposición que rige sobre el particular es el artículo 236 que nos dice: "Para este efecto el instructor formulará el proyecto respectivo dentro de los 45 días siguientes al cierre de la instrucción, para dictar resolución no será necesario" en algunos de los casos no es necesario que se cierre la instrucción. Finalmente el plazo para que se tome la decisión es de 15 días adicionales, plazo que corre para el órgano colegiado.

Preguntas de la Sala Regional Peninsular y de la Sala Regional de Occidente para Monsieur Michel Coat

Podría ejemplificar los casos más relevantes del juicio de plena jurisdicción que resuelve el Consejo de Estado en las materias fiscal y administrativa.

En caso de anulación por vicios formales de la resolución impugnada o del procedimiento que deriva de ésta ¿se reenvía a la autoridad administrativa por un

plazo determinado? En caso de respuesta afirmativa, ¿cuál es la consecuencia del cumplimiento extemporáneo?

Respuesta de Monsieur Michel Coat:

Primera pregunta, entonces, los casos más relevantes de plena jurisdicción, si está bien entendido, en el campo fiscal y administrativo. Bueno el Derecho Fiscal, en primer lugar el Derecho Fiscal es un derecho efectivamente que entra dentro de la categoría de los casos de plena jurisdicción. El procedimiento ante el juez administrativo de primera instancia es igual en segunda instancia o en casación. En primera instancia tiene el particularismo el contencioso fiscal de que no se va a poder directamente impugnar ante el juez un caso de discrepancia en cuanto a la aplicación de la ley fiscal. Primero el ciudadano o la persona moral que impugna digamos una imposición que le ha sido impuesta tiene que acudir a la administración, es un preliminar obligatorio y la falta de cumplimiento de este preliminar mancharía definitivamente de irreservabilidad (cómo decimos) la demanda. Entonces impugnación necesaria ante la administración. En caso de que la respuesta administrativa fuera negativa impugnación posible ante el juez. 90 y pico por ciento, 95, 96 por ciento de los casos de discrepancia con la administración se resuelven así, directamente mediante un diálogo directo entre el ciudadano, el contribuyente y la administración pública. Y ojalá exista este diálogo, si no existiera yo creo que la Justicia Administrativa sería literalmente ahogada por los recursos relacionados con la fiscalidad. En el caso de la actuación administrativa, los casos más relevantes de plena jurisdicción, son el primero: el contencioso de la reparación. El ciudadano perjudicado por una acción administrativa, cualquiera que sea, puede pedir que se repare, que la administración repare el perjuicio causado, justificando obviamente la naturaleza y el valor de los perjuicios que le han sido causados.

Tenemos también el contencioso electoral, que es un contencioso ambivalente que tiene ciertos parecidos con el recurso por exceso de poder y con los contenciosos de plena jurisdicción. En el caso del contencioso de las elecciones políticas, el juez puede constatar la regularidad en la manera como se ha hecho el voto por parte

de la ciudadanía y pedir que el voto se repita, por ejemplo. Puede también, él mismo, en ciertos casos intervenir directamente para rectificar ciertos resultados cuando aparezca que errores materiales han afectado, por ejemplo, el descuento de los boletines. En este sentido es un contencioso que se separa del contencioso del recurso por exceso de poder, ya que en este caso, en el de exceso de poder, el juez admite la demanda y en este caso anula la resolución administrativa o rechaza la demanda, tiene una elección limitativa a dos soluciones. Cuando en el contencioso de la plena jurisdicción él puede intervenir más directamente y hacer una obra más, digamos, de construcción administrativa.

En cuanto a los vicios formales: cuando un vicio formal, incompetencia o vicio en la forma misma de la decisión administrativa ha hecho que el juez tenga que anular su decisión, en este caso, a demanda siempre del recurrente, el juez puede determinar cómo la administración tiene que hacer para restablecer la legalidad perturbada por su actuación viciosa. En aquel caso el juez puede, al constatar un vicio formal, imponer a la administración que repita la instrucción del asunto, del expediente, y tomar otra decisión. En ciertos casos; pero el juez no está limitado dependerá en cada caso de la especificidad, de la naturaleza del caso que se plantea; pero en ciertos casos el juez mismo puede restablecer la legalidad al ordenar, al mandar directamente a la administración que ejecute tal o cual tipo de decisión, sin darle plazo para repetir la instrucción. Todo depende del caso.

Preguntas para el Señor Jean Marie Guittet

En materia de capacitación que imparte el Consejo de Estado Francés para seleccionar a sus magistrados y personal profesional, ¿cuál es el tipo de capacitación que se realiza? Ésta es una primera pregunta y la segunda sería ¿cuál es el procedimiento de selección de magistrados y personal profesional dependiente del Consejo de Estado Francés?

Respuesta del Señor Jean Marie Guittet

La forma normal de reclutamiento de magistrados administrativos en Francia es el reclutamiento por la Escuela Nacional de Administración, ya que como hemos dicho hay una proximidad, en Francia tradicionalmente, entre la administración y las jurisdicciones administrativas que conocen bien el funcionamiento de la administración, pero no es suficiente. Para presentarse a la Escuela Nacional de Administración es necesario tener al menos después del bachillerato un período de estudios de cuatro años mínimo en Derecho, Ciencias Económicas, entre otras materias, pero en realidad los que se presentan al concurso de la ENA tienen algunos estudios de Derecho y también escuelas de comercio y otros diplomas. También se recluta a los magistrados administrativos, ya que no es suficiente el reclutamiento por la Escuela Nacional de Administración, se recluta por un concurso especial al cual pueden presentarse alumnos de diplomado de las facultades de derecho, que tienen como mínimo 28 años. Normalmente es necesario tener bachillerato y después tener cuatro años de Derecho. También se puede reclutar dentro de la Universidad, profesores, maestros de conferencias sobre una lista de aptitud. Se pueden contratar también por lo que se llama tour exterieur en Francia, no se si hay una conversión en castellano, es otra forma de reclutar personas de muy alto nivel que conocen bien el derecho público.

La selección se hace, cuando la Escuela Nacional de Administración recluta, hay un sistema de pruebas escritas y también orales y después a la salida de la Escuela Nacional de Administración se puede escoger el oficio de magistrado administrativo. Hay un concurso especial, ya que la Escuela Nacional de Administración no puede proveer todos los puestos. Hay un concurso especial con un jurado y listas de aptitudes, no se exactamente en lo que concierne a los profesores de la universidad.

Pregunta del Magistrado Luis Malpica de Lamadrid

Madame Tchakaloff, una de las funciones importantes del Consejo de Estado Francés es la función consultiva. El presidente Michel Coat hablaba de la Comisión Europea de Derechos Humanos. En 1995 hubo un asunto, el Procola, donde puso en duda la función consultiva de Luxemburgo; no le afecta por el prestigio que tiene el Consejo de Estado Francés, pero ante un sistema europeo que está primando sobre el sistema nacional de cada país, administrativo de cada país. Qué comentarios podrían ustedes hacer respecto de este asunto y de la fuerza vinculatoria de la Comisión de Derechos Humanos sobre el aspecto consultivo. Porque se decía, si el Consejo de Estado opina al gobierno qué leyes administrativas pueden pasar o no pasar y él mismo a su vez es juez de esas leyes administrativas, parecería ser que hay un conflicto de intereses. Muchas gracias.

Respuesta de la Señora Marie-France Christophe Tchakaloff

Si, seguramente señor usted tiene razón, hay tal vez un conflicto; a ver cómo el Consejo de Estado se permite obtener satisfacción.

Intervención del Señor Michel Coat

Doctor Malpica toca un tema que es efectivamente interesante, importantísimo en el debate nacional nuestro. La doctrina, la Facultad de Derecho ha escrito, escribe, sigue escribiendo mucho, sobre este problema, este tema que no es necesariamente un problema.

Son razones históricas que explican en buena parte el hecho de que el Consejo de Estado que originalmente era esencialmente el consejo jurídico de la monarquía, y luego a disposición de la revolución, del impero y del segundo imperio, desarrollaba un papel muy importante de consejo, de consejero, pero este papel lo desempeñó, la historia nos lo muestra, aislando progresivamente, paulatinamente y definitivamente a partir de 1872, ha seguido desempeñando un papel más y más

jurídico y si ahora el Consejo de Estado en nuestros días sigue siendo un consejero primordial del gobierno es un consejero limitado al examen jurídico de los proyectos no solamente de decretos, sino de leyes prácticamente, actualmente todas las leyes han sido consultadas al Consejo de Estado antes de ser aprobadas efectivamente. Pero las opiniones del Consejo de Estado son opiniones jurídicas. El Consejo de Estado va a destacar, por ejemplo, va a subrayar, va a elevar a la atención del gobierno el hecho de tal o cual disposición que él está preparando y que le transmitió, cuyo proyecto ya está transmitido, entra en choque con tal o cual disposición del derecho europeo, y entonces el riesgo es grande de que un juez administrativo venga a anular luego esta ley, venga a declarar esta ley inconforme en relación con el derecho internacional o este decreto, inconforme con tal o cual ley, con tal o cual disposición internacional y eso evita al gobierno cometer errores que pueden luego tener repercusiones políticas importantes incluso para él. Entonces es un Consejero muy apreciado del poder, pero es un Consejero neutro políticamente. Es esto yo creo lo más importante. Todas las opiniones se expresan seguramente a título privado en el Consejo de Estado, pero una vez que están trabajando colegialmente no hay más opiniones políticas, no hay más, hay solamente opiniones jurídicas emitidas. Yo creo que es importante destacar la costumbre, la historia y la cultura han impuesto paulatinamente, progresivamente una división mental y profesional en el actuar cotidiano de los jueces administrativos y yo creo que al nivel también de los tribunales administrativos. El Sr. Guittet, mi colega, Jean Marie Guittet, ha expuesto hace un momento que los miembros de los tribunales administrativos son permanentemente solicitados para presidir comisiones, comisiones que van a entregar opiniones a la administración, ya sea administraciones locales o administraciones de Estado, por ejemplo, los prefectos toman ciertas decisiones después, obligatoriamente, de haber consultado al tribunal administrativo o de haber consultado una comisión presidida por un magistrado administrativo, y eso está hecho para evitar que la autoridad pública tome decisiones que no sean conforme al derecho. Esto participa de la solidez y del buen funcionamiento del derecho mismo, del derecho público nuestro.

Pregunta de la Magistrada Silvia Eugenia Díaz Vega al Señor Michel Coat

¿Cuáles son los principios que rigen la suspensión del acto administrativo que es impugnado ante el Tribunal? Gracias.

Respuesta del Señor Michel Coat

Gracias, la pregunta es muy interesante efectivamente. Yo creo que estamos actualmente asistiendo en Francia a una mini-revolución. Hubo mini-revoluciones en cuanto al papel primero de la justicia administrativa dentro de nuestra sociedad y otra mini-revolución en el actuar del mismo juez administrativo.

Hasta hace poco tiempo, hasta hace unos diez años la justicia administrativa en general, a nivel del Consejo de Estado, a nivel de los tribunales administrativos, tenía una pésima reputación de ser una justicia demorada, y a veces se escribía, se decía, se comentaba que cuando, digamos, llegaba la sentencia, cuando la sentencia del juez era entregada, ya la situación imperante en el momento cuando se hizo la impugnación había cambiado de tal modo que la sentencia no tenía ningún interés, sino sólo interés para los juristas. Había perdido su interés para el recurrente. Entonces la imagen misma de la justicia administrativa sufría de este elemento.

Desde hace algunos años, ahora la situación ha cambiado drásticamente, el juez administrativo de primera y segunda instancia es un juez que tiene que vivir ahora con un reloj, con un cronómetro en la mano. En muchas ocasiones las leyes le imponen plazos pero muy cortos para trabajar en litigio; por ejemplo, tomo un ejemplo: en materia de derechos humanos, un ciudadano cualquiera que estima, que piensa que ha sido víctima de una restricción en el uso de sus libertades personales, que la administración le ha impedido el uso de una libertad pública fundamental. En este caso él puede acudir ante el juez y el juez tendrá en 48 horas que dar su sentencia. Por supuesto que esta rapidez requerida, podríamos hablar también de los contratos administrativos, Jean Marie Guittet había aludido hace un

rato al hecho de que el juez administrativo puede ser solicitado de dar su sentencia en 48 horas en caso de falta de transparencia en los procedimientos, en los preliminares de un contrato administrativo y un contrato importantísimo de obras públicas, por ejemplo, puede ser detenido en sus procedimientos preliminares de firma cuando el juez constate que no ha sido total la transparencia de la licitación. Bien, en estos casos, esta rapidez no se concebía con el imperativo de la, digamos, de la colegialidad, menos y menos se concebía que es compatible esta rapidez con el aspecto de la colegiabilidad. Así que el juez administrativo, además de ser un juez rápido, paulatinamente viene a ser cada vez más y más veces un juez solo.

Estas acciones suspensivas de emergencia son dadas por un juez solamente, uno de los cuatro magistrados. En un tribunal administrativo hay 24 horas por día, un juez de permanencia que debe acudir a los casos de gran emergencia. A pesar de que sus decisiones sean transcendentales, muy importantes, son entregadas por él solo. Sus responsabiliades profesionales aumentan de manera muy significativa en este aspecto. Pero es un juez que no toma decisiones definitivas, es un juez que toma decisiones suspensivas, mediante lo que en América Latina se llama de manera común una acción cautelar, podríamos llamar así, la acción cautelar tiene que evitar que se cometiera, que se agravara considerablemente una acción administrativa en cuanto a los daños, a los perjuicios que puede causar a la ciudadanía, entonces yo creo es un fenómeno muy actual de hoy día el hecho de que el juez administrativo, que siempre sigue siendo un juez que actúa esencialmente en colegialidad, pero más y más paulatinamente pasa a ser un juez solo que actúa en la urgencia. Eso para responder, yo creo, a una necesidad social, y una necesidad también internacional, la rapidez y los intercambios en el campo económico, financiero y social también, hace que la sociedad no pueda sufrir demoras en la respuesta que tiene que ser dada a ciertos problemas relacionados con la actuación administrativa.

Pregunta de la Magistrada Ma. del Consuelo Villalobos Ortíz para el Señor Michel Coat

Monsieur Coat usted ha mencionado que uno de los mecanismos para hacer cumplir la sentencia, cuando se solicita la intervención del juez administrativo para este propósito, es presionar a la autoridad por multas que aumentan por cada día de retraso una vez transcurridos tres meses de haber sido notificada la sentencia. La pregunta es: ¿Qué ocurre si aún con esta medida no se produce el cumplimiento? ¿Hasta qué límite de tiempo se llega con este procedimiento? Y en el caso extremo de que la autoridad, no obstante la medida, no cumpliese ¿qué ocurre después para lograr la ejecución del fallo? Muchas gracias.

Respuesta del Señor Michel Coat

Bueno primero tenemos que destacar que los casos de incumplimiento son casos socialmente y jurídicamente graves, es cierto. Llaman la atención de los medios, se consideran como inadmisibles en una sociedad democrática, pero ocurren, ocurren pero son mínimos. En la jurisdicción que yo presidía hasta el mes de junio, Rennes, se tramitaba cada año entre 4,500 y 5,000 expedientes al año. Yo tenía que tramitar, porque la ley nuestra es así, es el presidente de cada tribunal administrativo, de cada corte de apelación que tiene la responsabilidad de actuar cuando una demanda tendiente a lograr una ejecución por parte de la administración está elevada, es el mismo juez que ha iniciado la decisión quien tiene la responsabilidad luego de hacer ejecutar su decisión.

Hasta el año de 1995 era el Consejo de Estado únicamente que acudía en este caso, pero el Consejo de Estado no aguantaba más ya que los casos de inejecución pasaron al poco tiempo de ser unos 100, unos 150 hasta más de 1,500 en 1993 o 1994, entonces no aguantaba más y la solución fue de descentralizar la ejecución. Confiar al juez que ha tomado la decisión, la responsabilidad de hacer ejecutar su decisión. De 4,500 a 5,000 expedientes tratados al año, más o menos 40 casos se planteaban, el procedimiento es el siguiente, esquemáticamente resumido: el presi-

dente del tribunal aprecia, una vez que ha sido elevada la demanda de ejecución por parte del recurrente, aprecia cómo se puede tratar. Si él considera que una acomodación es posible, es posible que la administración ejecute mediante una, digamos, vigorosa intervención la hace él mismo. Hace una carta o llama por teléfono, no importa, o puede proponer reunir al representante de la administración que resiste y al recurrente, trata de reunirlos en su despacho, escuchar cuáles son los problemas que se plantean y eventualmente otorgar un plazo razonable para que la administración ejecute. Su papel es el de recordar a la administración, de llamar la atención de la administración sobre las consecuencias que puede generar su, digamos, negligencia y al no lograr resultados este procedimiento, yo diría que de cinco casos, cuatro se resuelven así, por la intervención misma del presidente. El quinto tendrá que ser resuelto de manera más oficial y jurídica. En caso de resistencia absoluta de la administración el presidente impugna ante su propio tribunal la decisión administrativa de no ejecutar, la impugna él mismo, y confía a una Sala de su jurisdicción, y le otorga un plazo para juzgar, y entonces, este rechazo va a dar lugar a un segundo contencioso. El primer contencioso ha logrado, ya sea, una anulación de decisión o una condonación pecuniaria, por ejemplo, a reparar un perjuicio. El segundo contencioso, va a tener que resolver el problema de la ejecución. La jurisdicción en este caso, va a condenar a la administración a lo que llamamos en francés, una astreint, una astreint es una constricción, un mandamiento de pago que el juez dirige contra una administración y hace depender el volumen de la multa, del plazo que la Administración ocupe para ejecutar, es decir, él va a fijar, por ejemplo, una multa de 1000 francos al día después de una fecha, que él mismo va a determinar, y al no ejecutar esta decisión, el recurrente volverá ante el juez para que él haga la liquidación de la multa periódicamente, pero esta multa es tan importante que no hay caso, yo no creo que haya caso, que una administración haya podido resistir mucho tiempo a una astreint, ya que la responsabilidad misma del funcionario, que resiste es obvia y que el va a tener, en su propia carrera, rápidamente, problemas graves en caso de que no cumpliera, ya que su Ministerio va a tener que pagar sumas importantísimas después de algún tiempo. Así que puede haber algunos obstáculos a nivel descentralizado, ciertas autoridades autónomas políticamente,

como por ejemplo, un intendente, o como un Presiente de un Consejo General, o de un Consejo Regional, pueden, por razones puramente políticas, resistir, pero van a tener que pagar carísimo eso, y lo van a pagar ante los electores, ya que estas multas importantes van a necesitar la emisión de impuestos, ya que localmente, los presupuestos de las colectividades descentralizadas son alimentadas en buena parte por los impuestos locales, y la misma fama de la persona, yo creo que el papel de los medios es muy importante, hay que destacarlo, la prensa inevitablemente va a dar cuenta a los electores de la misma autoridad de lo que pasa, y ellos van a pedir cuentas de un momento a otro, es decir, las consecuencias políticas de la resistencia a la ejecución de una sentencia administrativa no deben ser ignoradas, son muy importantes, y ellas en buena parte justifican que, prácticamente en todos sus casos, la autoridad pública condenada termina ejecutando la sentencia de que se trata. Yo no se si he sido suficientemente claro, pero como Presidente de un Tribunal Administrativo importante, de cinco Salas, lo he podido constatar durante trece años de mi Presidencia.

Intervención de Marie France Christophe Tchakaloff

Muchas gracias, únicamente decir que este fenómeno de astreint existe también en el Derecho Europeo, en todas las administraciones de los quince países, quince Estados Europeos, por la Comisión Europea, y la multa es muy importante día por día.

Agradecimientos

Palabras de la Magistrada María Guadalupe Aguirre Soria.

Muchas gracias, señor Presidente Coat, Consejero Guittet y Madame Christophe Tchakaloff, ha sido verdaderamente una experiencia muy enriquecedora este intercambio. A nombre de los compañeros integrantes de Salas Regionales y Sala Superior, así como de nuestros invitados de los Tribunales estatales, quisiera agradecerles profundamente por la riqueza de los conocimientos que nos han transmitido, de las experiencias tan importantes, tan interesantes que nos abren muchísimas interrogantes que espero podamos dilucidar en una próxima reunión, muchas gracias por todas sus atenciones.

Palabras del Lic. Néstor Fernández Verti

Yo quisiera agradecer en nombre del Consejo directivo del Instituto Nacional de Administración Pública que hayamos tenido la oportunidad de dar continuidad a estas muy interesantes y muy enriquecedoras, como lo señaló la Magistrada Presidenta, Conferencias Interactivas a Distancia. El intercambio de experiencias, el foro que se habilita cada vez para poder transmitir los conocimientos, propuestas e ideas es altamente benéfico para nuestro país, y en especial para el Instituto Nacional de Administración Pública de México. Queremos agradecer a todas las Salas, a las 33 Salas Regionales que nos han recibido, a los Institutos estatales de Administración Pública, a quienes estuvieron aquí en la sala adjunta, y asimismo a ustedes porque con este excelente español hemos dado una gran fluidez a esta conferencia interactiva, y al mismo tiempo ha permitido transmitir con una gran comprensión las ideas y las experiencias que ustedes nos han señalado. Muchas gracias también al señor representante de la embajada de Francia en México, el señor Phillipe Grenier por haber estado aquí acompañándonos durante esta más de hora y media, y decirte Marie-France que te agradecemos mucho por esta intervención tan lúcida, siempre tan dispuesta a colaborar con nosotros y estrechar más los

lazos entre el Instituto Internacional de Administración Pública de París, el INAP de México, y en particular entre nuestros países. Muchas gracias y esperemos darle continuidad a estas experiencias tan ricas para México y para Francia, y pues muy buenas tardes en Francia, quizás ya son noches allá, y aquí con este esplendoroso sol de México les decimos no adiós sino hasta luego, muchas gracias a todos ustedes.

Palabras de la Señora Marie-France Christophe Tchakaloff

Bueno también muchas gracias a todos ustedes, al INAP sobre todo, nuestro compañero muchas veces, y a todos los Magistrados y también a las Salas, las personas que querían participar, y también tengo que darles un saludo del Director de las Relaciones Exteriores Jean François Thiollier, que no tuvo tiempo para hablar pero me lo dice, entonces un adiós muy cariñoso de cada uno.

SEXTA PARTE

ÍNDICES

ÍNDICE ALFABÉTICO DE PRECEDENTES DE SALA SUPERIOR

ACTUALIZACIÓN de las contribuciones.- Su naturaleza jurídica. (19) V-P-2aS-87 101

ADMINISTRADOR Local de Auditoría Fiscal de Torreón, Coahuila, del Servicio de Administración Tributaria.- Es competente para actualizar las contribuciones que determina. (20) V-P-2aS-88 102

ADMINISTRADOR Local de Auditoría Fiscal de Torreón, Coahuila, del Servicio de Administración Tributaria.- Es competente para efectuar "revisiones de gabinete", así como para determinar impuestos y accesorios de carácter federal. (21) V-P-2aS-89 102

ARTÍCULO 46-A del Código Fiscal de la Federación.- Supuesto en el que no se viola en perjuicio del contribuyente visitado. (17) V-P-1aS-55 96

CADUCIDAD de facultades de las autoridades fiscales.- Su estudio conforme a lo dispuesto por el artículo 237 del Código Fiscal de la Federación. (25) V-P-2aS-93 146

CERTIFICADO de origen exhibido en copia simple.- Su valor probatorio. (28) V-P-2aS-96 158

CERTIFICADO de origen.- Cuándo se requiere para la importación de bienes originarios. (27) V-P-2aS-95 157

CERTIFICADO de origen.- No acompañarlo al pedimento no implica la preclusión del derecho de rendir la prueba. (16) V-P-1aS-54 90

CERTIFICADO de origen.- Valoración del mismo. (10) V-P-1aS-48 55

CÓDIGO Fiscal de la Federación, el artículo 64 vigente hasta el 31 de diciembre de 1994, no supone la existencia de derechos adquiridos. (18) V-P-1aS-56 ... 96

COMPETENCIA de la autoridad que emitió el requerimiento con el que se inició el procedimiento y del que derivó la resolución impugnada.- No procede su estudio de oficio. (29) V-P-2aS-97 158

COMPETENCIA por razón de territorio.- La sede de la autoridad se determina por el lugar de expedición de la resolución impugnada. (4) V-P-SS-120 35

COMPETENCIA territorial en la orden de embargo.- La falta de cita de la fracción del precepto legal que la otorga, da lugar a una nulidad para efectos. (11) V-P-1aS-49 62

CUOTAS compensatorias.- Caso en el cual las Secciones de la Sala Superior son competentes para resolver cuando se controvierta su aplicación. (30) V-P-2aS-98 159

DOCUMENTOS privados elaborados por un tercero.- Su valor probatorio. (22) V-P-2aS-90 103

DOMICILIO fiscal señalado en la demanda.- No se desvirtúa este señalamiento con el aviso de inscripción del patrón ante el IMSS. (3) V-P-SS-119 33

FACTURAS expedidas por un tercero ajeno al juicio.-Improcedencia de su valoración contable. (23) V-P-2aS-91 104

IMPUGNACIÓN del acto recurrido en juicio de nulidad a través de la resolución recaída al recurso.- No es dable legalmente invocar su extemporaneidad como causal de improcedencia del juicio respectivo. (12) V-P-1aS-50 71

INCOMPETENCIA territorial.- Trámite del incidente promovido por la autoridad demandada. (9) V-P-SS-131 54

INGRESOS por concepto de prestación de servicios profesionales.- Se deben acumular desde el momento en que se recibe el respectivo anticipo.
(24) V-P-2aS-92 105

JUICIO con características especiales.- Violaciones en su tramitación.
(5) V-P-SS-124 42

PRESCRIPCIÓN prevista en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.- Ordenamiento aplicable para computar el plazo correspondiente. (7) V-P-SS-129 51

PRESCRIPCIÓN prevista en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.- Plazo para que se configure. (8) V-P-SS-130 52

PROCEDIMIENTO administrativo de ejecución.- Resultan ilegales los actos diligenciados en el mismo si la resolución liquidatoria que les antecede ha sido declarada nula. (26) V-P-2aS-94 147

REVOCACIÓN de la resolución anticipada.- No es necesario interponer juicio de nulidad en los términos del artículo 36 del Código Fiscal de la Federación. (13) V-P-1aS-51 72

TÉCNICOS aduanales.- Carecen de facultades para emitir dictámenes de clasificación arancelaria y valoración de mercancías de importación y exportación.- Ley Aduanera y Reglamentos vigentes en 1995.
(2) V-P-SS-118 22

TRATADO de Libre Comercio de América del Norte.- Alcance de la definición de “material”. (14) V-P-1aS-52 73

TRATADO de Libre Comercio de América del Norte.- Alcance de su artículo 506 (11). (15) V-P-1aS-53 74

VIOLACIÓN sustancial del procedimiento.- Cuando no se emplaza a juicio al titular de la Secretaría de la que depende el órgano desconcentrado que emitió la resolución impugnada. (6) V-P-SS-125 43

VISTAS aduanales.- Son auxiliares de las autoridades aduaneras, con facultades para realizar el reconocimiento de mercancías en aduanas. (1) V-P-SS-117 7

ÍNDICE ALFABÉTICO DE CRITERIOS AISLADOS DE SALA SUPERIOR

CADUCIDAD de las facultades de las autoridades fiscales.- Artículo 67 del Código Fiscal de la Federación. (1) 201

COSA juzgada. (2) 202

NULIDAD para efectos por vicios en el procedimiento.- En el nuevo juicio se pueden hacer valer todos los conceptos de impugnación que se estimen procedentes. (3) 203

ÍNDICE ALFABÉTICO DE CRITERIOS AISLADOS DE SALA REGIONAL

AGENTE o apoderado aduanal.- Es responsable directo de presentar la factura comercial en el despacho aduanero. (3) 218

CASO de excepción de la consecuencia de la no comparecencia de la parte actora, en el supuesto previsto en la fracción IV del artículo 209 del Código Fiscal de la Federación vigente a partir del 1° de enero de 2001. (10) 289

COMPENSACIÓN indebida.- No basta que las administraciones locales de recaudación, funden su competencia para determinarla, sino que, además, es necesario que citen el artículo del Código Fiscal de la Federación en el que se prevé la facultad de fiscalización que ejercen. (19) 342

EL recurso de revisión interpuesto en contra de los actos y resoluciones de la Procuraduría Federal del Consumidor, es de carácter optativo. (15) 315

ESCRITURA pública que contiene fe de hechos, mediante la cual un notario público hace constar que un vehículo se encuentra en la franja fronteriza.- Es un medio probatorio eficaz. (8) 274

FACULTADES de comprobación en relación con los contribuyentes que hayan presentado estados financieros dictaminados.- Concluyen con la notificación del oficio de observaciones y no con la emisión del oficio liquidatorio. (6) 260

FACULTADES de comprobación.- Si la autoridad fiscalizadora ejerce sus facultades de comprobación respecto a un determinado ejercicio, no puede determinar omisión de impuestos respecto al mismo, sustentándose en la revisión de las declaraciones del ejercicio inmediato anterior, si respecto a este ejercicio no ha ejercido sus facultades. (22) 363

GASTOS.- Obligación de demostrar su deducibilidad. (11) 294

IMPUESTO al activo acreditado. Modificación de elección en la determinación del. Afecta devolución de saldo a favor del impuesto sobre la renta. (2). 212

INCIDENTE de suspensión de la ejecución. Queda sin materia. (1) 209

INFONAVIT.- Determinación presuntiva para el pago de las cuotas al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, se debe ejercer alguna facultad de comprobación. (18) 334

MULTAS.- Son ilegales las impuestas por incumplimiento de proporcionar documentación e información si la autoridad no demuestra haber concluido la visita domiciliaria o la revisión de gabinete dentro del término de seis meses. (17) 325

NEGATIVA ficta.- Efectos de la.- Cuando la autoridad omite dar los fundamentos y motivos en que se apoya aquélla. (13) 306

ORDEN de verificación en tránsito.- No requiere de la precisión de los impuestos a comprobar. (9) 284

ORDEN de visita de verificación de expedición de comprobantes fiscales.- Es genérica si en ella no se precisan las actividades que realiza el contribuyente, conforme al régimen fiscal en que tribute. (20) 349

PRESCRIPCIÓN.- Se interrumpe a favor de la afianzadora, únicamente cuando se le requiere directamente de pago, y no cuando tal requerimiento se realice solamente a la fiada. (16) 321

PRUEBA de inspección.- Resulta legal su desechamiento por considerarse no idónea para distinguir mercancías sujetas a trámites de despacho aduanero. (5) 245

PUBLICACIÓN de la convocatoria de remate. No requiere contener la firma del funcionario que la emite. (14) 309

RECURSO de inconformidad.- El Consejo Consultivo Delegacional del Instituto Mexicano del Seguro Social, tiene obligación de proveer respecto al escrito que se presenta con motivo de una prevención efectuada a una persona moral, aun cuando el mismo sea presentado por un representante legal diverso al que inicialmente lo interpuso. (21) 358

RECURSO de revocación.- Cuando se recurre una resolución provisional, junto con su notificación, en términos de lo dispuesto por el artículo 129 del Código Fiscal de la Federación, no procede desechar el recurso bajo el argumento de que al ser ilegal la notificación, la resolución provisional aún no adquiere la definitividad que le permite ser impugnada. (7) 266

REVISIÓN de escritorio o gabinete.- Cuándo debe considerarse iniciada ésta, respecto de contribuyentes que presentan sus estados financieros dictaminados. (4) 226

SOBRESEIMIENTO.- No procede al no haberse agotado el recurso de revocación previsto por el artículo 135 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, al no tener el carácter de obligatorio conforme a las reformas de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. (23) 375

SUJETO obligado al pago del impuesto sobre tenencia y uso de vehículos, tratándose del contrato de arrendamiento financiero. (12) 298

ÍNDICE ALFABÉTICO DE ACUERDOS GENERALES

SE suspende la jurisprudencia JS-I-7 emitida por este Tribunal G/44/2001 383

Fe de Erratas de las Revistas No. 10/1999 y de la 2/2001 509

ÍNDICE ALFABÉTICO DE JURISPRUDENCIAS DEL PODER JUDICIAL FEDERAL

CONCEPTOS de nulidad del acto o actos impugnados, estudio de los. Excepción a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 237 del Código Fiscal de la Federación. (VI.1o.A. J/19) 389

CONTRABANDO. Se actualiza ese delito, previsto en el artículo 102 del Código Fiscal de la Federación, tratándose de vehículos de procedencia extranjera aun cuando se localicen dentro del límite territorial que señala el diverso artículo 103 del mismo cuerpo de leyes. (1a./J. 29/2001) 387

FACTURAS. No requieren estar firmadas para tener eficacia probatoria en el juicio de amparo, por no exigirlo ley o disposición aplicable alguna. (1a./J. 32/2001) 388

IMPUESTO al valor agregado. Puede compensarse o acreditarse contra el impuesto a cargo del contribuyente, sin esperar la declaración final del ejercicio. (VIII.3o. J/6) 391

RECURSOS ordinarios, casos en los que deben agotarse, antes de acudir a la vía constitucional. (IX.1o. J/9) 392

REVISIÓN fiscal. Es improcedente en contra de las sentencias dictadas por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en las que se haya solicitado su aclaración y ésta no haya sido resuelta. (2a./J. 29/2001) 389

ÍNDICE ALFABÉTICO DE TESIS DEL PODER JUDICIAL FEDERAL

AMPARO indirecto. Es improcedente contra actos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, si no se agota el recurso de revisión regulado en el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, a partir de la vigencia de la reforma a este artículo de mayo de dos mil. (I.13o.A.25 A) 403

AMPARO indirecto. Resulta procedente contra la resolución de un Tribunal Administrativo que resuelve un conflicto competencial cuando entraña el traslado de un lugar a otro con la erogación de gastos, porque con ello se afectan derechos sustantivos. (VII.1o.A.T.49 A) 412

CLAUSURA por omisión en el cumplimiento de obligaciones fiscales. La circunstancia de que se deje al arbitrio de la autoridad fiscal la imposición de dicha sanción, sin que en el artículo 49, fracción VI, del Código Fiscal de la Federación, vigente en mil novecientos noventa y nueve, se prevea a favor del contribuyente visitado la oportunidad de defensa previa, transgrede la garantía de audiencia. (2a. CIV/2001) 394

COMPROBANTES fiscales. Deben expedirse al momento mismo de obtener un ingreso derivado del pago por adquisición de bienes o uso de servicios. (VI.1o.A.100 A) 410

CONTRADICCIÓN de tesis. Debe resolverse, aun ante la imposibilidad de tener a la vista la ejecutoria de la que derivó alguno de los criterios que se estiman divergentes, si el texto de la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación es suficientemente claro y el punto de derecho que en él se aborda puede presentarse en situaciones futuras y reiteradas. (2a. CXI/2001)..... 395

CRÉDITO fiscal. Si se revoca la autorización de pago en parcialidades a que se refiere el artículo 66 del Código Fiscal de la Federación, la autoridad debe fundar y motivar dicha resolución. (VI.2o.A.2 A) 410

INSTITUTO Mexicano de la Propiedad Industrial, actos de autoridad del. Después de agotar el recurso de revisión regulado en el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, los particulares pueden optar por acudir directamente al juicio de amparo indirecto, toda vez que el hecho de que contra la suspensión regulada en el artículo 208-Bis del Código Fiscal de la Federación no proceda ningún recurso, opera una de las excepciones de la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo. (I.13o.A.18 A) 404

INSTITUTO Mexicano de la Propiedad Industrial, las autoridades del, sí están legitimadas para interponer recurso de revisión cuando el acto reclamado sea la resolución recaída a un procedimiento que pone fin a una controversia entre partes. (I.13o.A.22 A) 405

MULTAS. El artículo 76, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, vigente a partir del veinte de julio de mil novecientos noventa y dos, no es violatorio del diverso 22 de la Carta Magna. (VI.2o.A.1 A) 411

PAGO indebido de contribuciones. Los principios de proporcionalidad y equidad tributaria que rigen las relaciones jurídicas que surgen por tal motivo, exigen que el legislador establezca los mecanismos para que el fisco efectúe la devolución respectiva. (P. XI/2001) 393

PRESCRIPCIÓN, fianzas expedidas para garantizar un crédito fiscal derivado de un pago en parcialidades, casos de interrupción para el cómputo de la. (I.8o.A.21 A) 401

PROPIEDAD Industrial. El artículo 187 de la Ley relativa que establece la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles en esta

materia, ha sido derogado tácitamente y la aplicación supletoria de esta norma se ha trasladado a un plano secundario, según lo regulado en el artículo 2o. de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. (I.13o.A.24 A) 406

RECLAMACIÓN. La falta de copias de traslado no da lugar a su desechamiento, sino debe de prevenirse al promovente para que las presente con fundamento en el artículo 209 del Código Fiscal de la Federación. (I.10o.A.20 A) 402

RECURSO de revisión previsto en el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Tiene aplicación en los procedimientos regulados en la Ley de la Propiedad Industrial. (I.7o.A.131 A) 400

RENTA. El artículo 17, fracción XI, de la Ley del impuesto relativo, vigente en mil novecientos noventa y siete, que prevé el procedimiento para la determinación del ingreso acumulable, no transgrede el principio de legalidad tributaria. (2a. CVII/2001) 396

RENTA. El procedimiento para determinar el ingreso acumulable previsto en el artículo 17, fracción XI, de la Ley del impuesto relativo, vigente en mil novecientos noventa y siete, respeta el principio de equidad tributaria. (2a. CVIII/2001) 397

REVISIÓN administrativa, regulada en el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. No actualiza ninguno de los supuestos de excepción al principio de definitividad expuestos en la Jurisprudencia 2a./J. 115/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. (I.13o.A.23 A) 408

REVISIÓN administrativa. La reforma de mayo de dos mil al artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, no altera el sentido de la

Jurisprudencia 2a./J. 139/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. (I.13o.A.19 A) 407

REVISIÓN fiscal. El término para su interposición no se interrumpe en los días inhábiles para los Tribunales Colegiados de Circuito, porque debe presentarse por conducto del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. (I.13o.A.10 A) 409

REVISIÓN fiscal. Resulta improcedente el recurso, si éste se promueve en términos de la fracción V del artículo 248 del Código Fiscal de la Federación y no se razona que el asunto se circunscribe a alguna de las hipótesis en ella enumeradas. (I.8o.A.18 A) 402

VISITA domiciliaria. Debe iniciarse a la hora indicada en el citatorio que se deja al visitado para que espere a los visitadores, cuando no lo encuentran a la primera búsqueda. (I.4o.A.322 A) 399

FE DE ERRATAS

REVISTA No. 10, CUARTA ÉPOCA, DE MAYO DE 1999

En la página 136, tercer párrafo, primer renglón,

Dice: "**QUEJA PROCEDENTE.- CASO EN QUE DEBE ORDE-**

Debe decir: "**QUEJA IMPROCEDENTE.- CASO EN QUE DEBE ORDE-**

REVISTA No. 2 DE FEBRERO DE 2001

En la página 98 renglón 17,

Dice: me al artículo 5% del Código Fiscal de la Federación, por la Ley de la materia, esto

Debe decir: me al artículo 5º. del Código Fiscal de la Federación, por la Ley de la materia, esto

DIRECTORIO DE LA REVISTA

PRESIDENTA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA:
Mag. María del Consuelo Villalobos Ortíz

DIRECTORA DE LA REVISTA:
Lic. Cristina Angélica Solís de Alba

Compilación, clasificación, ordenación y revisión de tesis, elaboración de índices, corrección tipográfica y vigilancia de la edición:

Lic. Francisco Javier Romero Velázquez
Lic. Eloísa Cisneros Hernández
C. Ana Lidia Santoyo Avila
C. Juan Carlos Ramírez Villena

PUBLICACIÓN OFICIAL DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

Certificado de Licitud de Título No. 3672
Certificado de Licitud de Contenido No. 3104
Número de Reserva al Título en Derechos de Autor: 04-2001-012517410700-102
Distribuidor principal: Fideicomiso para Promover la Investigación del Derecho Fiscal y Administrativo,Varsovia 9, 4° piso, Colonia Juárez C.P. 06600, México , D.F.
Impresión:Talleres Gráficos de México. Secretaría de Gobernación, Av. Canal del Norte No. 80, Col. Felipe Pescador, C.P. 06280, México D.F

.

Varsovia 9, cuarto piso, Colonia Juárez C.P. 06600, México, D.F.